MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA

PERSPECTIVAS, TENDENCIAS Y CASOS

PAUL ALMEIDA
ALLEN CORDERO ULATE
[EDITORES]

Colección **Democracias en movimiento**

CLACSO

MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA

Movimientos sociales en America Latina : perspectivas, tendencias y casos / Paul Almeida ... [et al.] ; editado por Paul Almeida ; Allen Cordero Ulate. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2017.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online
Traducción de: Eugenia Cervio.
ISBN 978-987-722-244-9

1. Movimiento Social. 2. Conflictos Sociales. 3. Ciencias Sociales. I. Almeida, Paul II. Almeida, Paul, ed. III. Cordero Ulate, Allen, ed. IV. Cervio, Eugenia, trad.
CDD 303.6

Otros descriptores asignados por CLACSO:
Feminismo / Movimientos piqueteros / Pueblos indígenas / Levantamientos obreros / Movimientos estudiantiles / Ocupaciones de tierras / Ambientalismo / Exclusión / Proceso de paz / Luchas populares

Colección Democracias en Movimiento

MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA

PERSPECTIVAS, TENDENCIAS Y CASOS

PAUL ALMEIDA
ALLEN CORDERO ULATE
(Editores)

Paul Almeida | Alexis Álvarez | María José Álvarez Rivadulla | Moisés Arce | Giovanni Beluche V. | Germán Bidegain Ponte | Ian Breckenridge-Jackson | Rafael Cartagena Cruz | Christopher Chase-Dunn | Allen Cordero Ulate | David Dumoulin Kervran | Susan Eva Eckstein | Sujatha Fernandes | Jean Foyer | Maria da Glória Gohn | Lynn Horton | María Inclán | Hank Johnston | Robert Mackin | Salvador Martí i Puig | Maria de Jesus Mora | Alessandro Morosin | David Ortiz | Sebastián Pereyra | Germán Pérez | Natasha Radojcic | Ellen Reese | Rodolfo Rodriguez | Federico M. Rossi | Federico Schuster | Elizabeth Schwarz | Eduardo Silva | Eugenio Sosa | Ligia Tavera Fenollosa | Marcela Velasco | Christopher Vito | Marisa von Bülow | Timothy Wickham-Crowley | Simona Violetta Yagenova | Alejandro Zermeño

CLACSO

CLACSO 50 AÑOS

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Colección Democracias en Movimiento

Directores de la Colección: Pablo Gentili y Nicolás Arata

CLACSO - Secretaría Ejecutiva

Pablo Gentili - Secretario Ejecutivo
Nicolás Arata - Director de Formación y Producción Editorial

Núcleo de producción editorial y biblioteca virtual:

Lucas Sablich - Coordinador Editorial

Núcleo de diseño y producción web:

Marcelo Giardino - Coordinador de Arte
Sebastián Higa - Coordinador de Programación Informática
Jimena Zazas - Asistente de Arte
Rosario Conde - Asistente de Programación Informática

Traducción - Eugenia Cervio

Creemos que el conocimiento es un bien público y común. Por eso, los libros de CLACSO están disponibles en acceso abierto y gratuito. Si usted quiere comprar ejemplares de nuestras publicaciones en versión impresa, puede hacerlo en nuestra Librería Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Biblioteca Virtual de CLACSO www.biblioteca.clacso.edu.ar

Librería Latinoamericana de Ciencias Sociales www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana

CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE.

Primera edición en inglés
Handbook of social Movements across Latin American (New York: Springer, 2015).

ISBN 978-94-017-9913-3
© New York: Springer

Primera edición en español
Movimientos sociales en America Latina. Perspectivas, tendencias y casos (Buenos Aires: CLACSO, junio de 2017)

ISBN 978-987-722-244-9
© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN: MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA

Paul Almeida y Allen Cordero Ulate
1. Movimientos sociales en América Latina | 13

PARTE I: AVANCES CONCEPTUALES Y TEÓRICOS

Christopher Chase-Dunn, Alessandro Morosin y Alexis Álvarez
2. Movimientos sociales y regímenes progresistas en América Latina: revoluciones mundiales y desarrollo semiperiférico | 29

Timothy Wickham-Crowley y Susan Eva Eckstein
3. Los movimientos sociales latinoamericanos y la ratificación del poder de las teorías estructurales | 47

David Ortiz
4. Represión estatal y movilización en América Latina | 81

Ligia Tavera Fenollosa y Hank Johnston
5. Artefactos de protesta en el campo del movimiento social mexicano: reflexiones en torno al "hijastro" del análisis cultural | 113

PARTE II: TEMAS CRÍTICOS DE LA MOVILIZACIÓN POPULAR CONTEMPORÁNEA

Lynn Horton
6. Movimientos de mujeres en América Latina | 143

Ian Breckenridge-Jackson, Natasha Radojcic,
Ellen Reese, Elizabeth Schwarz y Christopher Vito
7. Los movimientos sociales latinoamericanos y el proceso del Foro Social Mundial | 159

Robert Mackin
8. Teología de la Liberación y movimientos sociales | 181

Federico M. Rossi
9. Más allá del clientelismo: el movimiento piquetero y el Estado en Argentina | 211

PARTE III: LUCHAS INDÍGENAS EN EL CONTINENTE

Eduardo Silva
10. Desarrollos, políticas y movimientos de los pueblos indígenas en Ecuador y Bolivia | 235

María Inclán
11. Oportunidades como puertas corredizas: Los zapatistas y su ciclo de protestas | 259

Giovanni Beluche V.
12. Panamá: levantamientos obreros, indígenas y populares en Bocas del Toro | 293

PARTE IV: MOVIMIENTOS URBANOS EN SUDAMÉRICA

Marisa von Bülow y Germán Bidegain Ponte
13. Se necesitan dos para bailar tango: estudiantes, partidos políticos y protesta en Chile, 2005-2013 | 313

Sujatha Fernandes
14. Movimientos sociales urbanos en Venezuela | 341

María José Álvarez Rivadulla
15. Ocupaciones de tierras y política en Montevideo a fin de siglo | 359

PARTE V: CONFLICTOS AMBIENTALES

Jean Foyer y David Dumoulin Kervran
16. ¿Ambientalismo de las ONG *versus* ambientalismo de los pobres? | 391

Rafael Cartagena Cruz
17. Conflictos ambientales y movimientos sociales en El Salvador de posguerra | 413

Allen Cordero Ulate
18. Bosque, agua y lucha: movimientos ambientalistas en Costa Rica | 445

PARTE VI: ESTUDIOS DE CASO POR PAÍSES

Moisés Arce
19. Protesta y movimientos sociales en Perú | 477

Marcela Velasco
20. Movimientos sociales contenciosos en Colombia, 1958-2014 | 503

Salvador Martí i Puig
21. Movimientos sociales en Nicaragua (1979-2014): un caso excepcional | 521

Eugenio Sosa
22. El movimiento contra el golpe de Estado en Honduras | 539

Simona Violetta Yagenova
23. Movimientos sociales guatemaltecos: del proceso de paz a un nuevo ciclo de lucha popular, 1996-2013 | 563

Sebastián Pereyra, Germán Pérez y Federico Schuster
24. Tendencias de la protesta social en Argentina, 1989-2007 | 577

Maria da Glória Gohn
25. Los movimientos sociales brasileños de la última década | 619

Maria de Jesus Mora, Alejandro Zermeño, Rodolfo Rodriguez y Paul Almeida
26. Exclusión y movimientos sociales en los Estados Unidos | 639

ÍNDICE ONOMÁSTICO | 669

INTRODUCCIÓN: MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA

1

Paul Almeida* y Allen Cordero Ulate**

MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA

En América Latina, en los últimos 25 años, se ha presenciado un renovado auge de la movilización popular. El fin de los gobiernos militares, y de los conflictos violentos de la década del 80, dio paso a nuevas luchas y a un clima relativamente más democrático. Desde el norte de México al sur de Argentina, los movimientos sociales en los años 90 y, especialmente en los 2000, han alcanzado nuevos picos de participación popular. Estas afirmaciones son confirmadas por las multitudinarias marchas en las calles de Costa Rica contra el acuerdo del Tratado de Libre Comercio de América Central (TLC-CAFTA) en 2007, las Marchas Blancas en El Salvador contra la privatización de los servicios de salud y las Marchas Negras en Panamá contra la reforma del sistema de pensiones, junto a las masivas movilizaciones indígenas en Bolivia, Ecuador y Perú. Asimismo, países del Cono Sur como Argentina, Paraguay y Uruguay experimentaron una amplia movilización contra las políticas de liberalización económica a principios del 2000. Nuevos actores y organizaciones sociales emergieron en la escena política, como los movimientos sociales con identidades

* Director de la Escuela de Sociología, University of California, Merced, EEUU.
** Director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.

ambientales, feministas, de gays/lesbianas y de consumidores (Álvarez et al., 1998). Incluso los movimientos sociales "tradicionales", como los sindicatos, continuaron desempeñando un papel importante dentro del campo de los movimientos sociales en las campañas contra la austeridad, el ajuste, las privatizaciones y el libre comercio (Almeida, 2007). Los sectores rurales también persistieron al impulsar luchas por las condiciones de trabajo o la explotación pasada (Enríquez, 2010; Cordero, 2009). Las comunidades indígenas siguen siendo protagonistas clave en Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú. Las movilizaciones masivas están directamente vinculadas, además, al apogeo de varios de los gobiernos de izquierdas en la región al convertir la política de la calle en resultados electorales exitosos (Roberts, 2014; Stahler-Sholk et al., 2014).

LAS AMENAZAS DE LA GLOBALIZACIÓN

Los procesos de globalización económica impulsados por las medidas neoliberales crearon nuevas amenazas contra las que se movilizan grandes contingentes (Almeida, 2014). Las dos principales amenazas relacionadas a la globalización son las ambientales y las económicas. Las amenazas hacia el medioambiente son expuestas por las movilizaciones en respuesta a la disminución de las condiciones ecológicas (Arce, 2014; Johnson y Frickel, 2011). Los capítulos 17 y 18 en este volumen muestran las amenazas ambientales que motivan la movilización masiva contra la minería y la deforestación en Costa Rica y El Salvador, respectivamente. Las amenazas económicas se refieren a la pérdida de seguridad social y los subsidios logrados durante el período de desarrollo impulsado por el Estado (Simmons, 2014). Entre los años 50 y 70, incluso los regímenes militares en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá dispusieron controles de precios básicos e implementaron sistemas de seguridad social. Desde los 80, esta red de seguridad social ha sido vapuleada por la crisis de la deuda (Walton y Seddon, 1994). A fines de los 90 y principios de los 2000, esas amenazas alcanzaron un umbral en el que se encendió la chispa que provocó grandes campañas de resistencia a través de América Latina (Almeida 2016). Tal vez, el campanazo inicial fue el levantamiento de Chiapas de 1994, que ocurrió simbólicamente el día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio Norteamericano (TLCAN-NAFTA). La rebelión de Chiapas resultó ser un híbrido entre pasado y futuro (ver cap. 11 en este volumen). Los rebeldes de Chiapas comenzaron su lucha como un clásico movimiento guerrillero latinoamericano, como un ejército harapiento y mal armado enfrentando al Goliat de las milicias mexicanas y los terratenientes locales.

Pronto, sin embargo, la lucha cambió hacia una estrategia de no violencia amplia y a una fuerte crítica al neoliberalismo mezclada con derechos indígenas. Esta clase de reclamos llegaron a ser frecuentes en toda América Latina en las décadas ulteriores.

Las otras campañas posteriores en la región, en gran medida, mantuvieron la vía no violenta ante el apremio de las políticas económicas neoliberales. En cada país de la región las principales luchas se dirigieron contra las privatizaciones y estuvieron estrechamente relacionadas con las medidas de austeridad. Cuando los sandinistas perdieron el poder al principio de los 90, sus seguidores y simpatizantes de base lanzaron varias campañas contra los ajustes, los despidos masivos y las privatizaciones (ver cap. 21 en este volumen). Una de las campañas más grandes en Nicaragua en los 90 fue contra los recortes presupuestarios a la educación superior, resultantes de las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y los decretos de reducción de deuda del Banco Mundial. En Honduras, docentes de la escuela pública, estudiantes universitarios y trabajadores del sector público impulsaron varias campañas contra la privatización y la austeridad económica, y unificaron estos esfuerzos en la organización multisectorial Bloque Popular. Estas organizaciones pasarían a constituir la resistencia al golpe de Estado de 2009: el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) (ver cap. 22 en este volumen). Costa Rica libró varias campañas antineoliberales desde 1995, que casi siempre culminaron con marchas en la vía pública de 100 mil a 200 mil personas, las marchas más grandes en la historia de Costa Rica. El Salvador también celebró sus mayores movilizaciones, a partir de 1980, cuando el gobierno intentó privatizar el Instituto de Servicio Social salvadoreño. En Panamá, entre 1995 y 2014, también se produjeron las mayores campañas contra las leyes de flexibilidad laboral, la privatización de las telecomunicaciones, la reestructuración del sistema de seguridad social y de pensiones y contra la minería (ver cap. 12 en este volumen). Finalmente, el capítulo 26 analiza estas amenazas de exclusión social en las comunidades marginadas en los Estados Unidos, incluyendo los inmigrantes latinos. Dicho capítulo, incluye una tipología de las formas de exclusión imperantes que empujan las movilizaciones populares más extensas. Todas estas luchas están unificadas por la articulación de las políticas económicas neoliberales que, de implementarse, empeorarán aún más a estos sectores. (Goldstone y Tilly, 2001). Además, con la derechización en la región, desde los EEUU hasta Argentina y Brasil, es muy probable observar más acciones colectivas impulsadas por las amenazas a los derechos económicos y sociales.

LAS OPORTUNIDADES DE LA GLOBALIZACIÓN

El aspecto económico de la globalización puede crear nuevas amenazas que induzcan a la movilización, pero las dinámicas políticas y organizacionales de la globalización también generan nuevas oportunidades y espacios para las movilizaciones (Tarrow 2011; Tarrow 2012; Meyer, 2004). En muchos países, los manifestantes se preocupan menos que en el pasado por la violencia estatal. Mientras que el miedo y la intimidación aún son parte del repertorio de tácticas del Estado, son menores comparadas con las formas extremas de violencia estatal empleadas en las décadas del 70 y 80 (ver cap. 4 en este volumen; Viterna, 2013). Una auténtica ola democrática cubrió al mundo en vías de desarrollo en los años 80, y también incluyó a varios Estados de América Latina (Markoff, 1996). El surgimiento de la democracia en la región, desde los 80, alienta a que más grupos busquen reparación por los ultrajes sufridos (Arce y Bellinger, 2007).

Esta transición democrática ha cambiado las estrategias de los movimientos sociales en América Latina. Las campañas de la oposición ya no buscan eliminar los regímenes autoritarios (con la excepción de la resistencia contra el golpe de Estado en Honduras); más bien se centran en políticas estatales específicas. Las luchas en gran parte son no violentas, a veces matizadas con formas de manifestaciones disruptivas como cortes de rutas (Silva, 2009). Muchas de las tácticas empleadas también demostraron ser novedosas y creativas, como el uso del corazón en la campaña NO al TLC en Costa Rica (Raventós, 2013). En resumen, el nuevo terreno democrático ha cambiado las estrategias de los movimientos sociales debido a que las instituciones del Estado están relativamente más abiertas a las demandas populares, y el gobierno debe tolerar ciertos niveles de disidencia para conservar la legitimidad política y mantener la competitividad en futuras contiendas electorales.

Una oportunidad adicional generada por la globalización es la transnacionalización de los movimientos sociales (McCarthy, 1997; Smith, 2008). Los movimientos están empezando a coordinar actividades a través de las fronteras por medio de las ONG y las conferencias internacionales (Von Bülow, 2011). Las organizaciones laborales internacionales, como el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, ofrecen talleres a decenas de asociaciones de trabajadores del sector público sobre las posibles consecuencias negativas de las privatizaciones en América Latina. Varias asociaciones de solidaridad laboral de Estados Unidos han ayudado a los trabajadores de las maquiladoras en toda la región en las campañas por derechos sindicales y contratos colectivos (Armbruster-Sandoval, 2005). Por ejemplo, SAPRI y Jubilee 2000 son muy activas en América Latina

proporcionando capacitación e información sobre las políticas de ajuste estructural y exigiendo mayor transparencia. En El Salvador, las ONG internacionales ayudan a patrocinar la Campaña Democracia Azul contra la privatización del agua. Tal vez, la fuerza transnacional con mayor influencia es la que involucra a las organizaciones ambientales. Estos grupos internacionales han jugado un papel importante en varias campañas desde los 80, y cada vez con más frecuencia: en las luchas contra las represas hidroeléctricas, la minería a cielo abierto, la deforestación y la conservación de las especies (ver caps. 17 y 18 en este volumen). Al mismo tiempo, las ONG no deben ser clasificadas como un grupo homogéneo de patrocinio a la movilización masiva (Spronk y Terhorst, 2012). A menudo, las ONG sirven para desmovilizar a las comunidades al actuar como agentes de los intereses de las élites nacionales e internacionales.

Más allá de la creciente influencia de la colaboración transnacional, encontramos mayor comunicación entre países a través de asociaciones latinoamericanas universitarias, de trabajadores y de una variedad de organizaciones de la sociedad civil. Un foro importante es el Foro Mesoamericano, celebrado anualmente, donde las ONG y los movimientos sociales de toda América Central se congregan durante una semana e intercambian experiencias de luchas pasadas, al tiempo que trazan estrategias para luchas futuras. El Foro se ha reunido siete veces, al menos una vez en cada país de la región. Después del Foro de julio de 2002 celebrado en Managua, los activistas planearon y coordinaron una amplia jornada de protesta por Centroamérica –realizada de Chiapas a Panamá– contra el libre comercio y el Plan Puebla Panamá (PPP). Protestas simultáneas y cortes de ruta se llevaron a cabo el Día de la Raza, el 12 de octubre de 2002, en todo el istmo. Esto señala la mayor acción coordinada en la región y demuestra el aumento de las posibilidades de la acción colectiva transnacional con el avance de la globalización. Un órgano de coordinación aún más grande en América Latina es el Foro Social Mundial (FSM), celebrado por primera vez en Brasil en 2001 (ver cap. 7). A partir de ese momento, el FSM ha celebrado varios foros multinacionales a través de América Latina, incluyendo Argentina, Ecuador, Guatemala y Venezuela, y vinculando activistas, ONG y sindicatos de todo el hemisferio. Sin embargo, desde la segunda década del siglo XXI, la mayoría de las movilizaciones antineoliberales mantienen un enfoque nacional.

MOVIMIENTOS EN OPOSICIÓN A LAS FORMAS NEOLIBERALES DE LA GLOBALIZACIÓN

Actualmente, varios grupos participan en las campañas contra la globalización en la región. Estos grupos se pueden dividir en tres cate-

gorías: 1) movimientos de trabajadores, de estudiantes y del sector informal; 2) nuevos movimientos sociales; y 3) grupos rurales e indígenas. Estas tres categorías forman la base de la resistencia a la globalización a través de la región. En esta sección, podemos vincular los reclamos y la capacidad de movilización de cada uno de estos sectores sociales a los procesos más amplios de la globalización.

TRABAJADORES, ESTUDIANTES Y SECTOR INFORMAL

El trabajo está amenazado por la crisis económica, las privatizaciones y la flexibilidad laboral. Los sindicatos del sector público han sido los más influyentes debido a la *maquilarización* de la región, a excepción de CONUSI en Panamá y las confederaciones laborales relativamente fuertes en México, Argentina, Brasil y Uruguay (Anner, 2011). Los trabajadores aparecen en las protestas más que cualquier otro grupo social en América Central (Mora, 2004), así como también en los estudios latinoamericanos más amplios (Almeida, 2007).

En general, los estudiantes y la comunidad universitaria han sido el centro de las mayores luchas en América Latina durante los últimos 20 años (Vommaro 2014; Guzman-Concha 2016). Las universidades públicas, en particular, han jugado un papel fundamental. En El Salvador, la federación estudiantil (AGEUS) y las organizaciones más radicales como el Frente Roque Dalton, el Bloque Popular Juvenil (BPJ) y UERS-30 participaron en las luchas contra el ajuste y la austeridad. El sistema universitario panameño participó en las luchas contra la reforma del sistema de pensiones, la privatización del agua y las leyes de flexibilidad laboral. Las federaciones de estudiantes guatemaltecos fueron actores clave contra la firma del TLC-CAFTA entre febrero y marzo de 2005. En Costa Rica, la comunidad universitaria (estudiantes y trabajadores) fue parte de la lucha contra las privatizaciones de las telecomunicaciones y la electricidad en el año 2000, así como también impulsó la formación de un frente universitario contra el TLC entre 2004 y 2007 (Almeida 2016). El movimiento social más grande en Chile, desde la restauración de la democracia en 1989, ha sido la organización masiva de estudiantes secundarios y universitarios en repudio a la privatización de la educación pública (ver cap. 13 en este volumen).

El sector informal, a pesar de su ardua lucha cuesta arriba, también ha participado en varias campañas contra las consecuencias sociales y económicas de la globalización. En El Salvador, los vendedores callejeros de DVD piratas formaron una organización coordinadora nacional para luchar contra la implementación del TLC y las redadas policiales a sus puestos o kioscos. Otros trabajadores del sector informal, en adhesión a las denuncias relacionadas con

la globalización del turismo sexual, también han exigido una mayor protección del Estado. En Uruguay, el movimiento de ocupación urbano ha contribuido al éxito electoral del partido de izquierda Frente Amplio en los 90 y los 2000 (ver cap. 15 en este volumen).

NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Movimientos sociales más novedosos y menos tradicionales han surgido en la escena política en toda América Latina. Estos incluyen grupos feministas, organizaciones civiles de raigambre ecológica, colectividades de gays y lesbianas, y grupos de defensa del consumidor. El componente clave que define a estos movimientos sociales es que no pueden reducirse únicamente a divisiones de clase social. Representan otros conflictos sociales sobre estilos de vida, identidad y de solidaridad con otras causas (Laraña et al., 1994). Muchos de estos nuevos movimientos han desempeñado un papel importante, solos o en coalición, contra el proceso de globalización neoliberal.

En El Salvador, el grupo ambientalista Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) ha utilizado sus recursos limitados para participar en varias campañas antineoliberales, incluyendo aquellas contra la privatización del servicio de salud, el TLC, la minería y la exploración de energía geotérmica. En Costa Rica, la Federación Ecologista Nacional (FECON) junto a docenas de grupos ambientalistas locales y nacionales dan batalla a la privatización de la energía y el TLC, sumadas a muchas otras batallas locales contra a una variedad de amenazas ambientales perpetradas por empresas transnacionales de minería, energía y turismo. En algunos casos, los grupos ambientales han formado amplias alianzas con la sociedad civil y lograron sostener las campañas durante un largo período de tiempo (ver cap. 18 en este volumen).

El movimiento de mujeres y los grupos feministas también han participado en la organización de tareas en la sociedad civil contra la globalización (ver cap. 6 en este volumen). Mujeres contra el TLC celebró varios eventos importantes en 2006 y 2007 contra el TLC en Costa Rica. En El Salvador, organizaciones de mujeres como LAS DIGNAS y MAM estuvieron a la vanguardia en la lucha contra la privatización de los servicios de salud. Las líderes de importantes ONG como CRIPDES y la Alianza Ciudadana contra la Privatización también han desempeñado papeles clave de liderazgo en las campañas antineoliberales (Almeida y Delgado, 2008).

GRUPOS RURALES / INDÍGENAS

Los grupos indígenas y rurales también se unieron en oposición a la última ronda de integración de América Latina a la economía mun-

dial capitalista (Robinson, 2008). En Guatemala, asociaciones campesinas mayas integraron la oposición al TLC entre 2004 y 2006 (ver cap. 23 en este volumen). También participaron en importantes campañas contra la imposición del FMI de aumentar el impuesto a las ventas en 2001 y 2004, así como contra los aumentos de precios de la electricidad en la década de 2010. En Panamá, los pueblos Kuna y Ngobe han librado varias batallas contra las empresas transnacionales de turismo para proteger sus tierras nativas (Maney, 2001; Horton, 2007), y también impulsaron grandes campañas contra la minería y megaproyectos como la construcción de represas. A lo largo de América Central, los trabajadores de plantaciones de banano han lanzado campañas contra las corporaciones químicas transnacionales que dispersaron Nemagón y envenenaron a miles de trabajadores (Cordero, 2009). Las asociaciones rurales de campesinos en Honduras también han luchado contra el TLC y contra otras medidas de privatización.

ORGANIZACIÓN DEL LIBRO

Los capítulos siguientes buscan caracterizar muchos de los grandes movimientos, grupos y temas de la movilización de América Latina durante las últimas dos décadas. Provienen de la comunidad de expertos de las ciencias sociales latinoamericanas, muchos de los cuales nacieron o residen actualmente en la región. El libro ofrece una plataforma de recursos a una nueva generación de académicos para analizar la complejidad y las consecuencias de esta oleada sin precedentes de movilización social en todo el hemisferio.

Basándonos en la discusión anterior, organizamos el *Manual* con la siguiente estructura: (I) Avances conceptuales y teóricos; (II) Temas críticos de la movilización popular contemporánea; (III) Luchas indígenas en el continente; (IV) Movimientos urbanos en Sudamérica; (V) Conflictos ambientales; y (VII) Estudios de caso por países. Nuestros capítulos conceptuales organizan los parámetros generales de las escuelas de pensamiento que tienen competencia sobre las principales condiciones causales que generan la participación en los movimientos sociales y la emergencia de los movimientos en América Latina. Estos enfoques teóricos incluyen el capítulo de nivel macro de Chase-Dunn et al., que abogan por una perspectiva del sistema mundial con el fin de contextualizar la resistencia colectiva a nivel nacional en América Latina. Otro enfoque estructural es presentado por Wickham-Crowley y Eckstein, que dan prioridad a las condiciones políticas y económicas para comprender la forma de contención popular en las Américas que están muy arraigadas en la clase obrera y comunidades excluidas. Un aporte teórico más específico, sobre los

modos de las diversas formas de represión estatal para graduar o disgregar la actividad del movimiento social en diversos países y contextos históricos, se encuentra en el capítulo 4. Un contrapunto original a la perspectiva estructural se presenta en el capítulo 5, con un enfoque detallado sobre cómo las interpretaciones culturales son fundamentales para fomentar y sostener las campañas de acción colectiva en México contemporáneo. Las prácticas culturales y políticas de los movimientos sociales son fundamentales en la comprensión de cómo las identidades colectivas se desarrollan y convierten en episodios de contención popular (Escobar, 2008). Un enfoque meramente estructural no puede dar cuenta de los procesos cognitivos de la formación de las demandas y la interpretación de los eventos que se despliegan en los ambientes culturales particulares.

La Parte II se estructura en torno a los temas críticos de la movilización popular contemporánea. Esta sección incorpora ensayos e investigaciones originales sobre los principales problemas que atraviesan la región en relación a los movimientos sociales, incluyendo: movimientos de mujeres, el FSM, la teología de la liberación y el clientelismo. En la contribución de Horton se examinan las principales fuerzas de movilización de las mujeres y las organizaciones feministas en las Américas. Como se señaló anteriormente, y en varios capítulos de este volumen, las asociaciones de mujeres en las luchas de género y en coaliciones con movimientos multisectoriales más amplios han actuado en roles centrales en casi todas las principales campañas del movimiento social durante los últimos 30 años. En el capítulo sobre el FSM se destaca su evolución en los últimos 12 años de existencia, desde Porto Alegre, Brasil, a las distintas cumbres regionales de FSM en otras partes de América Latina. Se puede sostener que, en la actualidad, el FSM es el movimiento social transnacional más estructurado en el mundo y sus orígenes residen en los movimientos sociales sudamericanos (Smith et al., 2014). La revisión exhaustiva de Mackin sobre el auge y la caída de la teología de la liberación ofrece a los lectores un cruce actualizado de la literatura sobre un movimiento religioso que cubrió gran parte del continente hacia fines de los 60. El autor nos guía a través de varias regiones y nos explica cómo los cambios en la doctrina social de la Iglesia Católica se convirtieron en un recurso valioso para los movimientos de justicia social de un país a otro. De especial importancia es cómo la teología de la liberación, una vez implantada, tuvo diferentes resultados en contextos locales con diversos tipos de régimen. En algunos casos, la teología de la liberación apoyó a los movimientos no violentos de derechos humanos (como en Chile y Argentina), en otros contextos nacionales la nueva doctrina social para los pobres alcanzó niveles revolucionarios de

movilización, como en varios países de América Central en los años 80. Finalmente el capítulo 9, sobre el clientelismo dentro del movimiento de trabajadores desocupados en Argentina, nos recuerda la complejidad de las relaciones patrón-cliente en términos de movilización en estas organizaciones sociales. Ofrece otra visión frente a los estudios sobre movimientos sociales producidos en el "Norte", que a menudo suponen una relación demasiado horizontal o autónoma entre los movimientos sociales y sus aliados y benefactores.

En la Parte III, pasamos a las movilizaciones indígenas en América Latina. Las poblaciones indígenas (o pueblos originarios) han impulsado algunas de las campañas de protesta más grandes en las Américas durante los últimos 20 años, principalmente en los países andinos (Ecuador, Perú y Bolivia), el sur de México, Guatemala y Panamá. El capítulo 10 destaca el papel de la movilización indígena en Bolivia y Ecuador en las últimas dos décadas. Eduardo Silva aborda las tensiones escasamente estudiadas de estos movimientos a partir de que los gobiernos llamados progresistas llegaran al poder en la primera década del año 2000, con el establecimiento de nuevas constituciones y la capacidad para impulsar cambios a través de canales institucionales. El capítulo de Inclán se centra en el movimiento indígena zapatista de Chiapas, México. En un análisis cuantitativo más sistemático del movimiento, ella muestra la variación en la movilización a través de las localidades de Chiapas durante un período de 10 años y cómo el contexto político local de oportunidades y amenazas condicionaron las movilizaciones, mayormente no violentas pero a menudo perturbadoras. En el caso de Panamá, donde la movilización indígena radical tuvo su auge en la década de 2010, Beluche analiza la huelga de trabajadores y la sublevación no violenta de los indígenas Ngöbe y Buglé durante el año 2010, en las plantaciones y empacadoras bananeras en la provincia de Bocas del Toro. Nos ofrece una situación única de solidaridad en todo el país con los pueblos indígenas de un distrito relativamente alejado.

La Parte IV presenta a los lectores la movilización urbana y del sector informal en América Latina. Como el proceso de urbanización continúa a un ritmo acelerado en el mundo en vías de desarrollo en el siglo XXI, indefectiblemente, el foco de la mayoría de las luchas se ha movido a las ciudades. Esta propuesta cobra aquí especial relevancia, puesto que América Latina es una de las regiones más urbanizadas del mundo. El primer capítulo de esta sección se centra en la investigación original sobre el movimiento estudiantil para la renacionalización de la educación pública en Chile. Como las matrículas de la escuela secundaria y de la universidad continúan expandiéndose en las ciudades del Sur Global (Schofer y Meyer, 2005), el sector de la

educación se convierte en uno de los pocos segmentos de la sociedad civil capaz de movilizar a un gran número de personas en campañas de acción colectiva (Almeida, 2014). Ciertamente, este fue el caso de Chile, como sostienen Von Bülow y Bidegain Ponte: de todas las movilizaciones sociales, el movimiento estudiantil en Chile fue el más grande en los últimos 20 años. El capítulo 14 captura las rutinas diarias de los activistas de la comunidad urbana durante los años de la Revolución Bolivariana bajo la presidencia de Hugo Chávez, y traza comparaciones cruciales con la movilización urbana en la etapa anterior a este periodo. Álvarez Rivadulla presenta una original investigación cuantitativa sobre el movimiento de ocupación urbano de tierras y viviendas en Uruguay, prestando especial atención a la relación de los partidos políticos con el movimiento.

Las luchas ambientales en América Latina se presentan en la Parte V. El capítulo sobre ambientalismo mexicano ofrece un relato conciso de los 30 años de historia de la transformación de los conflictos, desde la conservación a los nuevos tipos de luchas sociales sobre nuevos proyectos de desarrollo. El ensayo de Cordero sobre Costa Rica combina los modos dominantes de pensamiento ambiental que guían la acción hace más de dos siglos con luchas más contemporáneas por el agua, los bosques y la minería. Recurriendo a otro caso de Centroamérica, Cartagena Cruz crea una lista exhaustiva de los principales conflictos ambientales en la época posterior a la guerra civil en El Salvador. Demuestra convincentemente que la mayoría de los conflictos sociales se experimentan a nivel comunitario, a menudo por problemas de contaminación y polución. Estos capítulos combinados revelan una creciente evidencia de que las batallas contra los proyectos de desarrollo económico y la extracción de recursos probablemente continúen actuando como puntos focales para las movilizaciones más importantes de los movimientos sociales en el siglo XXI.

En la Parte VI, la colección presenta estudios de caso más globales sobre la actividad del movimiento social en países individuales. Para los casos de Nicaragua, Honduras y Brasil contamos con historias de los movimientos sociales, en general, durante las dos últimas décadas en cada país, donde se destacan los sectores sociales clave y los reclamos que generaron las movilizaciones. En los capítulos sobre Argentina, Colombia, Guatemala y Perú, los autores presentan abordajes cuantitativos originales de los eventos de protesta y otras actividades relacionadas con los movimientos sociales. Estos capítulos proporcionan datos empíricos sistemáticos sobre las tendencias fundamentales de la actividad de protesta durante varios años, demostrando fluctuaciones en la movilización relacionadas con las condiciones políticas y económicas cambiantes.

Respecto al capítulo 26, donde se analiza la oleada de protestas de gran cantidad de grupos excluidos en Estados Unidos, principalmente minorías étnicas, en el período reciente, 2016 hasta febrero del 2017, se busca conectar el Sur con el Norte, en este marco general de luchas defensivas —pero no por esto con falta de contundencia— en contra de la ofensiva neoliberal y derechista predominante. El capítulo 26 se enfoca en una tipología de exclusiones: la legal, la económica, la medioambiental, y la cultural. Puede esperarse entonces, por esta vía de la resistencia, una nueva reactivación de los movimientos sociales, tanto en el Sur como en el Norte.

Al estructurar este libro incluyendo las teorías, los temas de actualidad, los movimientos específicos y los estudios de caso en profundidad, hemos logrado obtener un enfoque integral de los movimientos sociales latinoamericanos desde una amplia variedad de lentes. El objetivo de este estilo de organización es que esta colección pueda servir, en última instancia, como un recurso sobre los movimientos populares para estudiantes y académicos de las ciencias sociales.

BIBLIOGRAFÍA

Almeida, P. D. 2007 'Defensive mobilization: Popular movements against economic adjustment policies in Latin América' en *Latin American Perspectives*, *34*(3): 123-39.

Almeida, P. D. 2014 *Mobilizing democracy: Globalization and citizen protest* (Baltimore: Johns Hopkins University Press).

Almeida, P. D. 2016. *Neoliberalismo y Movimientos Populares en Centroamérica*. (San Salvador: UCA Editores).

Alvarez, S. E., Evelina, D. y Arturo, E. (eds.) 1998 *Cultures of politics/politics of cultures: Re-visioning Latin American social movements* (Boulder: Westview Press).

Anner, M. 2011 *Solidarity transformed: Labor responses to globalization and crises in Latin America* (Ithaca: Cornell University Press).

Arce, M. 2014 *Resource extraction and protest in Peru* (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press).

Arce, M. y Bellinger, Jr. P.nT. 2007 'Low-intensity democracy revisited: The effects of economic liberalization on political activity in Latin América' en *World Politics 60*, 97-121.

Armbruster-Sandoval, R. 2005 *Globalization and cross-border labor solidarity in the Americas* (Nueva York: Routledge).

Cordero, A. 2009 "Nuevas desigualdades; nuevas resistencias: El caso de los ex-trabajadores bananeros costarricenses afectados por los agroquímicos" en *Revista Centroamericana de Ciencias Sociales*, *6*(2): 75-100.

Enríquez, L. 2010 *Reactions to the market: Small farmers in the economic reshaping of Nicaragua, Cuba, Russia, and China* (University Park: Pennsylvania State University Press).

Escobar, A. 2008 *Territories of difference: Place, movements, life, redes* (Durham: Duke University Press).

Goldstone, J. y Tilly, C. 2001 'Threat (and opportunity): Popular action and state response in the dynamic of contentious action' en Aminzade, R. et al. (ed.) *Silence and voice in the study of contentious politics* (Cambridge: Cambridge University Press) pp. 179-94.

Guzman-Concha, Cesar. 2017. "Introduction: Student Movements and Political Change in Contemporary Latin America." *Bulletin of Latin American Research*, 36(2): 141–143

Horton, L. 2007 *Grassroots struggles for sustainability in Central America* (Boulder: University of Colorado Press).

Johnson, E. W. y Frickel, S. 2011 'Ecological threat and the founding of U.S. national environmental movement organizations, 1962-1998' en *Social Problems*, *58*(3): 305-329.

Johnston, H.; Laraña, E., y Gusfield, J. 1994 'Identities, grievances, and new social movements' en Laraña, E.; Johnston, H. y Gusfield, J. (eds.) *New social movements: From ideology to identity* (Philadelphia: Temple University Press) pp. 3-35.

Maney, G. M. 2001 'Rival transnational networks and indigenous rights: The san blas kuna in Panama and the Yanomami in Brazil' en *Research in Social Movements, Conflicts and Change*, *23*, 103-144.

Markoff, J. 1996 *Waves of democracy: Social movements and political change* (Thousand Oaks: Pine Forge Press).

McCarthy, J. D. 1997 'The globalization of social movement theory' en Smith, J.; Chatfield, C. y Pagnucco, R. (eds.) *Transnational social movements and global politics: Solidarity beyond the state* (Syracuse: Syracuse University Press) pp. 243-59.

Meyer, D. 2004 'Protest and political opportunities' en *Annual Review of Sociology*, *30*, 125-145.

Mora, S. 2004 "Acciones colectivas en Costa Rica 2000-2003" en *Décimo Informe sobre el Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible* (San José: Estado de la Nación) pp. 1-30.

Raventós, C. 2013 'My heart says no: Political experiences of the struggle against CAFTA-DR in Costa Rica' en Burrell, J. y Moodie, E. (eds.) *Central America in the new millennium: Living transition and reimagining democracy* (Nueva York: Berghahn) pp. 80-95.

Roberts, K. 2014 *Changing course: Party systems in Latin America's neoliberal era* (Cambridge: Cambridge University Press).

Robinson, W. 2008 *Latin America and global capitalism: A critical globalization perspective* (Baltimore: Johns Hopkins University Press).

Schofer, E., y Meyer, J. W. M. 2005 'The world-wide expansion of higher education in the twentieth century' en *American Sociological Review*, *70*(6): 898-920.

Silva, E. 2009 *Challenges to neoliberalism in Latin America* (Cambridge: Cambridge University Press).

Simmons, E. 2014 'Grievances do matter in mobilization' en *Theory and Society*, *43*, 513-546.

Smith, J. 2008 *Social movements for global democracy* (Baltimore: Johns Hopkins University Press).

Smith, J. et al. 2014 *Global democracy and the world social forums* (Boulder: Paradigm Publishers) Segunda edición.

Spronk, S. y Terhorst, P. 2012 'Social movement struggles for public services' en McDonald, D. y Ruiters, G. (eds.) *Alternatives to privatization in the global south* (Nueva York: Routledge) pp. 133-156.

Stahler-Sholk, R.; Harry V. y Marc, B. 2014 'Introduction: New directions in Latin American social movements' en Stahler-Sholk, R.; Vanden, H. y Becker, M. (eds.) *Rethinking Latin American social movements: Radical action from below* (Lanham: Rowman & Littlefield).

Tarrow, S. 2011 *El nuevo activismo transnacional*. Barcelona: Editorial Hacer

Tarrow, S. 2012 *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza. (3r Edicion).

Viterna, J. 2013 *Women in war: The micro-processes of mobilization in el salvador* (Oxford: Oxford University Press).

Vommaro, P. 2014 "La disputa por lo público en América Latina Las juventudes en las protestas y en la construcción de lo común." *Nueva Sociedad* No 251, mayo-junio: 56-69.

Von Bülow, M. 2011 *Building transnational networks: Civil society and the politics of trade in the Americas* (Cambridge University Press).

Walton, J. y Shefner, J. 1994 'Latin America: Popular protest and the state' en Walton, J. y Seddon, D. (eds.) *Free markets and food riots: The politics of global adjustment* (Oxford: Blackwell) pp. 97-134.

CÓMO CITAR ESTA PUBLICACIÓN:
Almeida, Paul and Cordero Allen. 2017. "Movimientos sociales en América Latina." Pp. 15-28 en Paul Almeida y Allen Cordero Ulate, Eds., *Movimientos Sociales en América Latina: Perspectivas, Tendencias y Casos*. Buenos Aires: CLACSO.

PARTE I:
AVANCES CONCEPTUALES Y TEÓRICOS

2

Christopher Chase-Dunn;
Alessandro Morosin y Alexis Álvarez*

MOVIMIENTOS SOCIALES Y REGÍMENES PROGRESISTAS EN AMÉRICA LATINA: REVOLUCIONES MUNDIALES Y DESARROLLO SEMIPERIFÉRICO

El proceso de la "marea rosa" en América Latina ha presenciado el surgimiento de regímenes populistas e izquierdistas en la mayoría de los países latinoamericanos desde fines de los 90. Este artículo sitúa los movimientos sociales contrahegemónicos y los regímenes progresistas dentro de la evolución a largo plazo de la gobernanza global y el capitalismo global. En un esfuerzo por investigar por qué es que, en la historia reciente, varias administraciones en América Latina (en relación a otras regiones del mundo) desafían el modelo de desarrollo neoliberal, examinamos la estratificación de los países latinoamericanos con respecto al sistema-mundo general, como un factor estructural potencial que puede haber contribuido a la marea rosa.

Si bien cada país latinoamericano tiene su propia y única historia, las características comunes a toda la región más importantes son las rebeliones indígenas, las revueltas de los esclavos, las luchas anticoloniales por la independencia, luchas y guerras concomitantes entre autoritarismo y democracia, la mercantilización de los recursos naturales, intereses comerciales competitivos, intervención extranjera (a menudo a instancias de las corporaciones con sede en el Norte

* University of California, Riverside, EEUU.

Global) y oleadas populares de izquierdas. En otras palabras, América Latina ha sido un campo de batalla del conflicto de clases –mundial e interno– desde 1492 (Galeano, 1987).

Los primeros Programas de Ajuste Estructural impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la década del 80 (Walton y Seddon, 1994; Francis, 2005) fueron instancias draconianas de "terapia de choque" que instaron a los neoliberales nacionales a atacar el "Estado de bienestar", los sindicatos y los partidos de los trabajadores. En muchos países, estos ataques significaron la reducción y racionalización de las industrias urbanas, pues muchos trabajadores del sector formal perdieron sus trabajos y fueron forzados tanto a sobrevivir en la economía el sector informal como a la emigración. Esto aceleró la formación de la misma clase obrera globalizada descrita por Robinson (2008).

El capital parecía haber ganado la guerra política e ideológica en América Latina a principios de los 90, pero en los albores del siglo XXI un ex comandante militar ganó los votos de los pobres en Venezuela mientras que un equipo que incluía socialdemócratas resultó elegido en Chile, un miembro del Partido de los Trabajadores (PT) llegó al poder en Brasil, un presidente valeroso en Argentina finalmente se puso de pie contra las demandas del FMI y Wall Street.

Portes y sus coautores (Portes, 2008; Portes y Smith, 2008; Portes y Roberts, 2006) explican este giro a la izquierda con el siguiente escenario: las políticas neoliberales inflaron el sector informal, forzando a millones a vivir en cantegriles y favelas y a condiciones de trabajo precarias. Los líderes políticos movilizaron a menudo esta parte de la sociedad en partidos y movimientos populistas. En algunos casos, estos movimientos finalmente tuvieron éxito en la elección de dirigentes al poder nacional (Almeida, 2010). Por lo tanto, se puede argumentar que las Políticas de Ajuste Estructural neoliberales provocaron contra-movimientos nacionales y transnacionales que resultaron en las victorias presidenciales expresadas en el fenómeno conocido como la marea rosa.

Mientras que los elementos de este análisis, definitivamente, parecen describir la historia reciente de muchos movimientos sociales de América Latina y el giro electoral a la izquierda, agregamos la perspectiva sistema-mundo para considerar la marea rosa de América Latina.

LA JERARQUÍA CENTRO/PERIFERIA CONTEMPORÁNEA

En resumen, el mundo aún está estratificado jerárquicamente en tres tipos de países: los países *centrales* son aquellos cuyas economías están muy diversificadas y cuyos gobiernos son mayormente estables.

Los países *periféricos* siguen dependiendo de la exportación de uno o de unos pocos *commodities* y de la producción intensiva con bajos salarios. Los países *semiperiféricos* tienden a ser más diversificados y políticamente más poderosos que las economías periféricas, pero siguen estando dominados por los países centrales y por las corporaciones con sede en los países centrales.

El trabajo cuantitativo de Jeffrey Kentor sobre la posición de las sociedades nacionales en el sistema-mundo (2008) sigue siendo la mejor medida continua de la jerarquía de centro/periferia, porque incluye el PNB per cápita, la capacidad militar y la dominación/dependencia económica. Nosotros tricotomizamos el indicador combinado de Kentor de la posición del sistema-mundo en centro, periferia y semiperiferia para los propósitos de nuestra investigación. La categoría centro es casi equivalente a la clasificación de "altos ingresos" del Banco Mundial, y es lo que la mayoría de las personas entiende por el término "Norte Global". El "Sur Global" se divide en dos categorías: semiperiferia y periferia. La semiperiferia incluye a países grandes (por ejemplo, Indonesia, México, Brasil, India y China) y a países más pequeños con niveles medios de PNB per cápita (por ejemplo, Taiwán, Corea del Sur, Sudáfrica, etcétera).

Chase-Dunn y Hall (1997; Hall y Chase-Dunn, 2006) han modificado los conceptos desarrollados por los pensadores del moderno sistema mundial al construir una perspectiva teórica para comparar el sistema moderno con sistemas-mundo regionales previos. Tal vez, la idea más importante que surge de esta perspectiva teórica es que la semiperiferia tiende a ser una región dinámica. Es decir que los cambios en las transformaciones del sistema-mundo están propiciados, principalmente, por las acciones de los individuos y organizaciones dentro de las sociedades que son semiperiféricas en relación al centro y la periferia de ese mismo sistema jerárquico. Esto se conoce como *la hipótesis del desarrollo semiperiférico*. Tanto la escala espacial y demográfica de la organización política como la escala espacial de las redes comerciales se ampliaron fundamentalmente por los regímenes semiperiféricos, llevando eventualmente al sistema global en que vivimos ahora. El moderno sistema mundial nació cuando una región (Europa) –primero periférica y luego semiperiférica– desarrolló un núcleo de Estados capitalistas que eventualmente fueron capaces de dominar a todas las otras regiones del mundo. Este sistema centrado en Europa se expandió en una serie de olas de colonización y descolonización, donde este última constituye la incorporación de las ex colonias al sistema-mundo (ver Gráfica 2.1).

Las recurrentes olas de colonización que se observan en la Gráfica 2.1 indican que la expansión europea y la periferialización de

las Américas, Asia y África fue un proceso un tanto cíclico que se llevó a cabo, con el tiempo, por las diferentes potencias europeas. Las oleadas de descolonización, o el desmantelamiento de los imperios coloniales formales, comenzaron en 1776 con la independencia de las 13 colonias británicas que se convirtieron en los EE.UU., seguida por la gran ola de la independencia de América Latina a principios del siglo XIX, y por Asia y África en el siglo XX.

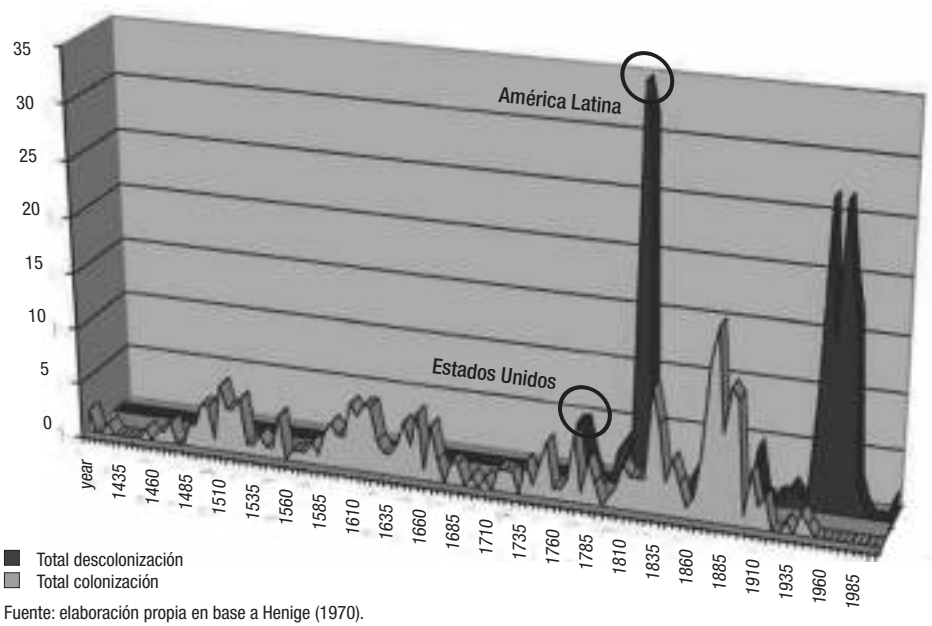
LAS REVOLUCIONES MUNDIALES Y LA EVOLUCIÓN DE LA GOBERNANZA GLOBAL

La gobernanza global puede ser concebida como un proceso evolutivo de cambio sociocultural en el que las instituciones y estructuras de la hegemonía provocan respuestas contrahegemónicas en los países y en el Sur Global (el *non-core* del sistema-mundo). Estas respuestas de los pueblos y los países subordinados, que van desde los pedidos moderados de inclusión a los programas de oposición más radicalizada, plantean una nueva necesidad de Estados, clases e instituciones más poderosos, que auquellos que tradicionalmente han ejercido un poder político y financiero desproporcionado. Respuestas populares a la creciente inestabilidad, inseguridad y desigualdad social han provocado que las elites afinaran sus esfuerzos para reproducir un sistema que mantiene sus intereses.

Varios movimientos de resistencia y rebeliones han afectado la evolución de la gobernanza global, porque a menudo coinciden en el tiempo formando lo que se ha denominado como *"revoluciones mundiales"* (Wallerstein, 2004). Estas olas periódicas de opresión y resistencia han sido llamadas el "movimiento doble" (Polanyi, 1944), mientras que otros lo han denominado una "espiral de capitalismo y socialismo" (Boswell y Chase-Dunn, 2000). Estudiar la secuencia de las revoluciones mundiales pasadas (por ejemplo, 1789, 1848, 1917, 1968 y 1989) nos permite ver las similitudes y diferencias entre las constelaciones de movimientos y los contextos históricos mundiales distintos.

Las olas de protesta social han interactuado con, y a veces socavado, el sistema mundial capitalista desde la Reforma protestante (Martin, 2007). La revolución francesa de 1789 estuvo vinculada a las revueltas haitiana y norteamericana (Linebaugh y Rediker, 2000). Los movimientos anticoloniales exitosos en muchas de las colonias británicas de América del Norte ayudaron a inspirar la revolución francesa, así como también profundizaron la crisis fiscal de la monarquía francesa. La revolución haitiana encabezada por Toussaint L'Ouverture estableció la primera república en América Latina e inspiró a los movimientos por la soberanía nacional en las colonias de

Gráfica 2.1
Oleadas de colonización y descolonización desde 1400 –cantidad de colonias europeas establecidas y cantidad de descolonizaciones.



Fuente: elaboración propia en base a Henige (1970).

España y Portugal. La rebelión de 1848 en Europa fue sincrónica a la rebelión de Taiping en China y estuvo vinculada a esta por la difusión de ideas milenarias, así como también estuvo vinculada con el surgimiento de las nuevas sectas cristianas en los Estados Unidos.

La primera revolución socialista del mundo tomó el poder en Rusia en 1917, en la misma década que la revuelta nacionalista China de Sun Yat-sen, la Revolución mexicana contra Porfirio Díaz, la revuelta árabe de 1916 y la huelga general en Seattle dirigida por *Industrial Workers of the World* (los Obreros Industriales del Mundo) (Martin, 2007). Las revueltas de estudiantes y las nacionalidades oprimidas en América Latina, Estados Unidos y Europa en 1968 coincidieron con el flujo de la Revolución Cultural en China y, también, con las guerras de liberación nacional en el sudeste asiático y África. La revolución mundial de 1989 se concentró principalmente en la Unión Soviética y Europa Oriental, pero la sociedad civil global emergente aprendió importantes lecciones sobre el valor de los derechos civiles (Kaldor, 2002).

Sostenemos que la resistencia transnacional a la globalización neoliberal desde mediados de los 90, como la marea rosa latinoame-

ricana, la Primavera Árabe, Occupy, los movimientos contra la austeridad y el ajuste en Europa y las principales rebeliones recientes en los países semiperiféricos, como en Turquía y Brasil, representan las primeras etapas de otra coyuntura de fuerzas contrahegemónicas globalmente vinculadas: la revolución mundial contemporánea de 20xx (Chase-Dunn y Niemeyer, 2009). Las protestas contra el FMI en Sudamérica en los años 80, el levantamiento zapatista en Chiapas, México, en 1994 y las grandes manifestaciones por el "movimiento de justicia global" en las afueras de las reuniones internacionales de los Estados y empresas más poderosos (Almeida y Lichbach, 2003) pueden ser considerados como precursores de la revolución mundial de 20xx. Esta revolución, todavía incipiente, puede ser interpretada como un amplio contra-movimiento en respuesta a la última ola de la globalización capitalista. Ha surgido como resistencia y crítica al capitalismo global en su fase neoliberal (Lindholm y Zuquete, 2010; Reese et al., 2008).

En América Latina, las formas de democracia promovidas desde el final de la Guerra Fría por las elites neoliberales nacionales y globales son consideradas como instituciones políticas que pretenden contener movilizaciones populares. Robinson (1996) argumenta convincentemente que la "poliarquía" y la promoción de la democracia son las formas políticas más congruentes con una economía mundial totalmente globalizada, en la que el capital tiene rienda suelta para operar ahí donde las ganancias son mayores. Gills et al. (1993) proponen que la "democracia de baja intensidad" facilita la imposición de las políticas económicas neoliberales, entre ellas la liberalización, la comercialización y la privatización de los recursos. Estos constituyen los tres pilares del Consenso de Washington: un paquete de políticas angloamericanas y un modo de gobierno –del cual los regímenes latinoamericanos de la marea rosa han tratando de distanciarse y han desafiado.

Debido a sus diferencias y a sus historias nacionales particulares, se puede decir que los regímenes progresistas se han extendido por casi toda Sudamérica y una parte considerable de Centroamérica (Almeida, 2014). ¿Por qué, hasta ahora, los regímenes de la marea rosa y los movimientos sociales latinoamericanos aliados han tenido un rol tan importante en esta revolución de 20xx? Dentro de América Latina ¿los regímenes populistas de izquierda y los poderosos movimientos sociales transnacionales que desafían la globalización capitalista neoliberal son más preponderantes en la semiperiferia que en los países periféricos?

Sugerimos que los países latinoamericanos tienen más opciones para implementar estrategias de desarrollo independiente que

la abrumadora mayoría de los países dependientes de África y Asia del Sur, por ejemplo. Esto podría ser explicado por el clima político innovador en América Latina, que favorece el aumento de gobiernos socialdemócratas y reformistas en las grandes sociedades semiperiféricas como Brasil, Argentina y Chile, después del desencanto popular generalizado con el neoliberalismo liderado por EEUU. El Foro Social Mundial se fundó en el año 2001, en Porto Alegre, Brasil, como un punto focal para los movimientos anti-sistémicos globales (ver el capítulo de Reese et al. en este volumen). El Presidente de Venezuela Hugo Chávez, cuya reciente muerte de cáncer y sus implicaciones para el futuro de la izquierda latinoamericana están más allá del alcance de este artículo, personificó a la marea rosa como una marca distintiva del populismo de izquierda al usar la riqueza petrolera de la Venezuela semiperiférica para trazar un curso de oposición al neoliberalismo. Tal como las revoluciones mundiales anteriores, la revolución de los 20xx parece estar emergiendo de la semiperiferia del sistema-mundo. Aquellas sociedades de la semiperiferia, en las que la oposición al capitalismo neoliberal es más fuerte, están tratando de suplantar la lógica actual del sistema-mundo por un nuevo modelo político y económico.

Pero muchos de los países latinoamericanos que después de años de regímenes conservadores han elegido recientemente regímenes progresistas (sean estos más reformistas, como en El Salvador y Nicaragua, o más radicales, como en Ecuador y Bolivia) también son periféricos, en lugar de ser semiperiféricos. Atribuimos esto a un efecto regional que no parece estar operando ni en África ni en Asia, donde la elección de los regímenes progresistas en los Estados más grandes como Brasil y Venezuela ha dado a los movimientos anti-sistémicos de los Estados más débiles y pequeños mayor espacio para disputar el liderazgo de sus elites nacionales, ganar instituciones y proyectar una postura de izquierdas en la escena internacional. Como ya exploramos algunas de las semejanzas y diferencias entre los regímenes de la marea rosa empleando la hipótesis del desarrollo semiperiférico, podemos distinguir analíticamente los regímenes progresistas en dos categorías: *reformistas* y *anti-sistémicos*.

REGÍMENES CONSERVADORES, REFORMISTAS Y ANTISISTÉMICOS EN AMÉRICA LATINA

Desarrollamos y aplicamos un método para la codificación de los regímenes en América Latina basado en si se relacionan, y cómo, con lo que en términos generales se denomina la marea rosa.[1] Uti-

1 Las explicaciones de por qué hemos codificado determinados regímenes de la

lizamos esta codificación para examinar la relación entre la forma del régimen y la posición en el sistema-mundo (periferia *vs* semiperiferia). Las relaciones entre la familia de movimientos progresistas y los gobiernos de la marea rosa en América Latina son cooperativas y competitivas. Etiquetamos como "progresistas" los regímenes que, hasta cierto punto, se oponen a las políticas neoliberales que han sido promulgadas y aplicadas por las Instituciones Financieras Internacionales desde los años 80. Los regímenes progresistas pueden ser divididos en dos tipos. Partiendo de una distinción hecha por Smith y Wiest (2012), la mayoría son *reformistas* y algunos son *anti-sistémicos*. Los regímenes reformistas hacen algún intento de redistribución de riqueza interna, pero mantienen una postura macroeconómica conservadora y políticas de libre comercio (por ejemplo, Chile). Estados como Argentina y Brasil se han opuesto poco en el marco de las relaciones internacionales y han sido bastante moderados en la toma de decisiones para reducir la desigualdad interna, por lo tanto consideramos a sus regímenes actuales reformistas en lugar de anti-sistémicos.

Siguiendo a Wallerstein (1990) "ser anti-sistémicos es argumentar que ni la libertad ni la igualdad son posibles bajo el sistema existente, y que estas únicamente son posibles en un mundo transformado".

Esto captura parte de la variación entre los regímenes que se identifican a sí mismos con (o que han sido etiquetados por diversas fuerzas como) la marea rosa. Los derroteros políticos de los regímenes anti-sistémicos en Venezuela, Bolivia y Ecuador, en gran parte, han sido teñidos por sus experiencias negativas con el Consenso de Washington desde los años 80.

El resto de los Estados latinoamericanos pueden ser vistos como conducidos por regímenes no progresistas (o neoliberales). Aunque algunos de estos Estados neoliberales hablan de la desigualdad como un problema (Colombia, recientemente) y pueden tener algunos programas para desplazarla (México, en casi toda su historia pos revolucionaria), las medidas de bienestar social no como una prioridad de la política de Estado tan alta como lo son el mantenimiento de la inversión extranjera y la protección de las elites nacionales / transnacionales. Los regímenes neoliberales tienden a seguir puntillosamente los designios diplomáticos, políticos y de seguridad de los EE.UU.

El hecho de que los gobiernos de la marea rosa en Latinoamérica hoy fueron legalmente elegidos (Foran, 2005), a diferencia de las fuerzas de izquierda de la Guerra Fría que a menudo orquestaban luchas

---

manera en que lo hicimos está disponible en <www.irows.ucr.edu/cd/appendices/pinktide/pinktideapp.htm>.

armadas para obtener poder político (con la excepción de Allende en Chile), ofrece un importante contraste con el pasado reciente de América Latina. Los regímenes actuales con raíces a la izquierda de la Guerra Fría (Cuba, Nicaragua y El Salvador) o bien se han reconstituido en partidos políticos como en El Salvador y Nicaragua, o bien mantienen su forma original como en Cuba.

Intentamos reconocer las debilidades al utilizar los regímenes como unidades de análisis. En primer lugar, los regímenes con frecuencia incluyen facciones con diferentes tintes ideológicos. Además, los movimientos sociales que se oponen al régimen existente, ya sea desde la izquierda o desde la derecha, con frecuencia ejercen un contrapoder regional importante. Pero si el movimiento no ha elegido a sus dirigentes para ocupar el poder (o no lo busca, como el anti-sistémico EZLN de México) nuestro sistema de clasificación no necesariamente capturará estas características subnacionales de diferentes países. Por ejemplo, los movimientos sociales dinámicos y los centros regionales de oposición, aún en los regímenes neoliberales como los semiperiféricos México y Colombia, han representado desafíos significativos para el paradigma neoliberal de gobierno. Las irregularidades electorales en México fueron documentadas y registradas en las elecciones de 2006 y 2012 por grupos de medios de comunicación independientes. Si no se hubiesen visto tales irregularidades en las tres últimas elecciones mexicanas, México podría haber tenido un régimen reformista desde 1988, y podría tenerlo aún hoy. De manera similar, Honduras aún hoy podría estar gobernada por un régimen reformista, si el Gobierno de Manuel Zelaya hubiera sobrevivido el golpe de 2009 (ver el capítulo 22 de Sosa en este volumen).

Mientras que el intento de medir el cambio social en el nivel de los regímenes progresistas no permite un análisis detallado de su situación política interna, la naturaleza del régimen vigente sigue siendo una medida necesaria de la fuerza de la revolución de 20xx en América Latina. La capacidad de llevar un nuevo gobierno al poder, aunque no debe confundirse con una transformación revolucionaria de la sociedad en sí y para sí (Foran, 2005), refleja la fuerza subyacente de los movimientos contrahegemónicos. Independientemente de si el régimen es progresista, anti-sistémico o neoliberal, la cantidad de tiempo que ha permanecido en manos de los progresistas señala cuánta legitimidad han obtenido las políticas progresistas desde el fin de la Guerra Fría, y también podría indicar cuánto distanciamiento político, económico y organizacional del Consenso de Washington pueden tolerar las elites gobernantes de estos países.

Las ideologías de los regímenes de la marea rosa han sido socialista, populista e indigenista, con diversas mixturas en diferentes

países. El Presidente de Bolivia, Evo Morales, propugna una combinación de socialismo, indigenismo y ecologismo. El régimen de izquierda diseñado por Fidel Castro sigue en el poder a pesar del embargo y aislamiento continuos impuestos por los Estados Unidos, y actualmente se encuentra en medio de debates sociales acerca de quiénes deben establecer los términos del futuro de Cuba: si las empresas privadas, la gestión de los trabajadores o un Estado centralizado.

Hay una diversidad considerable entre las respuestas de los regímenes anti-sistémicos a las presiones simultáneas de una oposición de extrema derecha y de actores políticos indígenas a la izquierda de estos gobiernos (Fontana, 2013; Becker, 2013). Las similitudes entre los regímenes anti-sistémicos de Venezuela, Bolivia y Ecuador incluyen elecciones populares ganadas por márgenes amplios (a diferencia de la victoria electoral estrecha de Salvador Allende en Chile, en 1970), el compromiso por una transformación social mucho más vasta y una mayor reticencia a negociar acuerdos con adversarios nacionales y extranjeros.

El liderazgo de Chávez del proyecto marea rosa se hizo más fácil por las inmensas reservas petroleras de Venezuela. Esto originó el intento de integración política y económica de un bloque de países latinoamericanos como una alternativa al Área de Libre Comercio de las Américas respaldada por EE.UU. La Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) fue fundada por Cuba y Venezuela en 2004. El Gobierno de Chávez se comprometió a retirarse totalmente del FMI, y en 2009 fundó el Banco del Sur con Argentina. Muchos regímenes progresistas se han sumado al Banco del Sur, que busca reemplazar al FMI y al Banco Mundial en proyectos de desarrollo en las Américas y el Sur Global. Que el Banco del Sur se convierta en una "institución para la financiación de los llamados 'campeones nacionales' —grandes empresas que operan como multinacionales, con gran autonomía operativa pero prácticamente sin responsabilidad nacional alguna" , o que "priorice las mayores necesidades de la población de América Latina –como tierra, empleo, vivienda y soberanía nacional" será un marcador crucial del estilo de la "integración latinoamericana", implementada por la marea rosa (Soares de Arruda, 2007).

Para mostrar las gradaciones entre regímenes progresistas, también podemos destacar el ejemplo de Nicaragua, un país centroamericano periférico. Podríamos clasificar al país como un régimen reformista desde 2007 a hoy, a pesar de ser miembro del ALBA. Mientras la Revolución Sandinista estuvo en el poder, durante la Guerra Fría (1979-1990), sus políticas internas y sus posturas internacionales podrían leerse como anti-sistémicas. Su actual Presidente, el ex sandinista Daniel Ortega, ahora está tratando de hacer crecer la economía

en un sistema de "mercado libre" para luego redistribuir la riqueza (ver el capítulo de Martí i Puig, en este volumen). Su aplazamiento de las promesas progresistas ha ocasionado que muchos izquierdistas nicaragüenses se aparten de él formando, frecuentemente, iniciativas regionales propias "por debajo" del nivel federal (ver, por ejemplo: Teague, 2012). A pesar de los lazos con Venezuela, que han contribuido al crecimiento económico, el actual régimen nicaragüense ofrece hoy por hoy mucho menos apoyo a las empresas gestionadas por sus trabajadores que Bolivia y Venezuela. Este ejemplo ayuda a ilustrar los tipos de regímenes que clasificamos como reformistas (es decir, los gobiernos más moderados cuya ruptura con el neoliberalismo es menos consistente) o anti-sistémicos (aquellos gobiernos que se muestran una diferenciación económica, diplomática e ideológica más sustantiva del Consenso de Washington).

Clasificamos cuatro de los ocho países miembros del ALBA como impulsores de regímenes anti-sistémicos. Estos son: Cuba, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Los tres últimos fueron los únicos países en devenir anti-sistémicos después de la época de la Guerra Fría, empezando con Venezuela. Mientras que estos regímenes todavía tienen diferentes grados de dependencia estructural con la economía mundial capitalista y otras desigualdades internas profundamente arraigadas (Higginbottom, 2013) han representado los desafíos ideológicos, diplomáticos y económicos más sustanciales, hasta ahora, al modelo de desarrollo neoliberal en América Latina. Es de destacar que los países del ALBA en la región andina (Bolivia y Ecuador) han sido capaces de retener más cantidad de la plusvalía total producida en sus países que la apropiada por inversores extranjeros, en comparación a los regímenes andinos más conservadores como Colombia y Perú (Higginbottom, 2013).

En lugar de impulsar el control nacional sobre los recursos y avanzar en un amplio discurso izquierdista, los regímenes reformistas como el de Brasil han sido mucho más cautelosos y pragmáticos en los modelos de desarrollo que promueven. La transición brasileña del régimen autoritario en los 80 politizó y movilizó a la sociedad civil, contribuyendo a las elecciones de presidentes reformistas de izquierda. Uno de estos presidentes fue Fernando Henrique Cardoso, sociólogo y uno de los fundadores de la teoría de la dependencia (Cardoso y Faletto, 1979).

Porto Alegre ha sido un bastión del Partido de los Trabajadores (PT) brasileño. Fue en esta ciudad donde nació el Foro Social Mundial (FSM) en 2001, bajo la gran influencia del PT. El FSM sigue siendo una fuerza importante de la nueva izquierda global que reúne a movimientos activistas de todo el mundo en reuniones internacionales,

en las que se implementan y debaten experiencias y alternativas al capitalismo neoliberal (ver capítulo de Reese et al. en este volumen). La retórica progresista del PT bajo la presidencia de Lula y Rousseff generó grandes expectativas que, con las protestas masivas y generalizadas contra la desigualdad y la corrupción a principios del verano de 2013, han estallado en disturbios (Carlsen, 2013).

Estas erupciones sociales recientes en Brasil pueden verse a la luz de la integración de Brasil con las instituciones capitalistas globales, y el papel particular que el PT ha desempeñado en la gestión del crecimiento del país, el comercio y las políticas sociales. La gran economía brasileña le ha permitido al PT colocar a Brasil en un rol de "gran potencia" en el G20, una organización multilateral formada por los 20 Estados más poderosos del mundo. Estos desarrollos podrían considerarse en relación con el rol catalizador ofrecido por su estatus semiperiférico, su gran tamaño y los movimientos sociales dinámicos. Las aspiraciones del PT como fuerza gobernante no han sido ni desafiar a las instituciones financieras internacionales ni revocar las desigualdades nacionales profundamente arraigadas. Pero ha apostado por un conjunto de posiciones en política internacional que desafían muchas de las posiciones adoptadas por los Estados Unidos.

CONTRASTAR NUESTRAS HIPÓTESIS

¿Los países semiperiféricos tienen más probabilidades que los países periféricos de efectuar la transición a regímenes progresistas?

El Cuadro 2.1 nos permite observar si hay –o no– una relación entre la forma del régimen y la posición en el sistema-mundo. Todos los países latinoamericanos con poblaciones de más de 1 millón son periféricos (16) o semiperiféricos (6).

El Cuadro 2.1 muestra todos los regímenes que fueron conservadores durante el período; los que fueron reformistas pero nunca anti-sistémicos; y los que fueron anti-sistémicos, al menos parte del tiempo. Estos se dividen en las zonas del sistema mundial (periferia y semiperiferia). El Cuadro 2.1 muestra que ningún país semiperiférico fue conservador durante todo el periodo, mientras que 5 (31% de los 16 países periféricos) continuó siendo conservador. Esto parece respaldar la hipótesis del desarrollo semiperiférico. Pero los resultados son más complicados. El Cuadro 2.1 también muestra que los países semiperiféricos tienden más a ser reformistas que los países periféricos (83 % *vs* 38 %), y que los países periféricos tendieron a ser anti-sistémicos, al menos parte del tiempo, entre 1959 y 2012 (31% *vs* 17%). Por lo tanto, los países periféricos fueron más propensos en seguir siendo conservadores, pero también en haber devenido

Cuadro 2.1
Posición de los regímenes progresistas de América Latina en el sistema-mundo, 1959-2014 (porcentajes de la columna Total).

	Semiperiférico	Periférico	Total
Conservador siempre	0	5 (17%)	5
Reformista, nunca anti sistémico	5 (17%)	6 (17%)	11
Anti sistémico, al menos una vez	1 (17%)	5 (17%)	6
Total	**6**	**16**	**22**

Fuente: elaboración propia.

anti-sistémicos. Esto no es una demostración clara del principio de desarrollo semiperiférico.

Entonces, nos planteamos si los países semiperiféricos podrían haber liderado el camino hacia la marea rosa en América Latina. Para comprobar esa idea construimos un Cuadro que muestra cuándo ocurrieron las transiciones de los regímenes.[2] Utilizamos estos datos para realizar la Gráfica 2.1, que muestra los tiempos de las transiciones a regímenes reformistas o anti-sistémicos de los países periféricos y semiperiféricos, ponderados por la cantidad de países en América Latina (6 son semiperiféricos y 16 son periféricos).

La Gráfica 2.2 muestra que los países semiperiféricos tuvieron más probabilidades de transición hacia la marea rosa antes que los países periféricos, con una ola de transiciones en los años 70 y otra gran ola que comenzó a fines de los 90. Este resultado avala la noción de desarrollo semiperiférico.

RESULTADOS Y DEBATE

Los resultados son complejos por el hecho de que los países periféricos son más conservadores y más radicales que los países semiperiféricos, como muestra el Cuadro 2.1. Pero la Gráfica 2.2 demuestra que los países semiperiféricos abrieron el camino hacia la marea rosa en América Latina. Los países semiperiféricos más innovadores (por ejemplo, Venezuela a fines de los 1990, seguido por Brasil en los primeros años de los 2000) comenzaron a experimentar con formas progresistas de gobierno, y las periferias (por ejemplo, Bolivia, Ecuador

2 Para consultar el Cuadro, ver 'Appendix' en <www.irows.ucr.edu/cd/appendices/pinktide/pinktideapp.htm>.

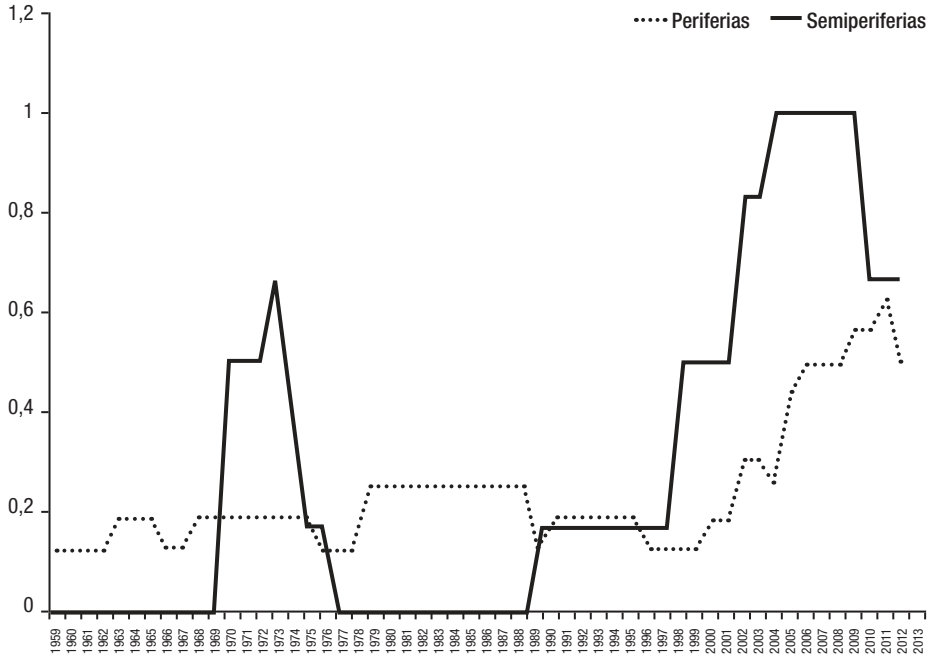
y Nicaragua) se aferraron a estas estrategias exitosas de sus predecesores semiperiféricos. Parecería que hubo un efecto regional en el que los regímenes progresistas en los países grandes (por ejemplo, Brasil, Venezuela, Argentina) propiciaron mayores libertades para que en los países pequeños se pudieran elegir regímenes más radicales en los últimos años.

Partiendo de una idea simmeliana (ver Coser, 1956: cap. 2) de que una amenaza común facilita la cohesión entre los actores (en este caso, los sistemas políticos latinoamericanos), otra razón de por qué el fenómeno de marea rosa y los regímenes progresista se han concentrado en América Latina podría ser que el autor principal de las políticas neoliberales ha sido Estados Unidos, y América Latina ha sido durante mucho tiempo el "patio trasero" neocolonial para esa nación. Los líderes de los movimientos antineoliberales latinoamericanos utilizan el marco ideológico de los Estados Unidos como el "Coloso del Norte," que tal vez ha hecho que sea más fácil unificar históricamente a los movimientos anti-sistémicos. Tanto África como Asia tienen relaciones más complejas con las antiguas potencias coloniales.

Debido a la diversidad política, geográfica y cultural de la región, América Latina sigue siendo un epicentro particularmente grande de actividad anti-sistémica en la escena mundial actual. Muchas de estas movilizaciones son espontáneas, y muchas otras no han logrado (o no pretendían tener) poder político formal. Incluso los regímenes y los movimientos anti-sistémicos están limitados por las contradicciones ecológicas y sociales del modelo económico dominante, con el que aún no han roto completamente. Dado que las fuerzas gobernantes de la marea rosa han intentado mantener el poder en el contexto de una variedad de luchas por "izquierda" (en gran parte sobre cuestiones ambientales e indígenas) y otras por "derecha" posicionándose con la esperanza de un retorno al neoliberalismo, las fuerzas sociales y políticas se han vuelto altamente volátiles en muchos países. Como señalan Domínguez et al. (2011), sigue habiendo una formidable Vieja Derecha–así como también una Nueva Derecha– en América Latina, que los investigadores de los movimientos sociales no pueden darse el lujo de pasar por alto.

El clima global ha ocasionado, además, las rupturas más inesperadas en sus relaciones de poder tradicionales en los últimos años. Debido a que varios países del Medio Oriente estallaron en protestas contra los regímenes neoliberales corruptos durante la Primavera Árabe de 2011, y en el marco del Foro Social Mundial que se ha celebrado en 2013 y, nuevamente, en 2015 en el semiperiférico Túnez (el país que desencadenó la Primavera Árabe), la ciencia social pública

Gráfica 2.2
Cantidad de transiciones a regímenes reformistas o anti-sistémicos por año, ponderadas por la cantidad de países de las dos zonas del sistema-mundo



Fuente: elaboración propia en base a datos disponibles.

global puede ayudar a que las amplias mayorías entiendan los desafíos y oportunidades que enfrentan las formas emergentes de solidaridad transnacional en el siglo XXI.

La marea rosa latinoamericana puede ser solo una etapa de la revolución mundial a largo plazo, que viene a hacer frente con mayor coherencia al capitalismo global, en más regiones del mundo en el siglo XXI. A escala mundial, muchos de los movimientos de protesta nacionales que han estado en la vanguardia (Egipto, Túnez, Turquía, Brasil y Bulgaria) y mantuvieron una radicalización nacional (Grecia, el país de la Eurozona donde las protestas contra el ajuste han resultado ser las más duraderas y contundentes) son de sociedades semiperiféricas. A medida que progresemos en lo que parece ser una nueva etapa de la revuelta global, será importante continuar estudiando el papel de los movimientos sociales latinoamericanos, y a la semiperiferia del mundo en general.

BIBLIOGRAFÍA

Almeida, P. D. 2010 'Social movement partyism: Collective action and political parties' en Van Dyke, N. y McCammon, H. (eds.) *Strategic alliances: New studies of social movement coalitions* (Minneapolis: University of Minnesota Press) pp. 170-196.

Almeida, P. D. 2014 *Mobilizing democracy: Globalization and citizen protest* (Baltimore: Johns Hopkins University Press).

Almeida, P. D. y Lichbach, M. I. 2003 'To the Internet, from the Internet: Comparative media coverage of transnational protest' en *Mobilization*, *8*(3): 249-272.

Becker, M. 2013 'The stormy relations between Rafael Correa and social movements in Ecuador' en *Latin American Perspectives*, *40*: 43-62.

Boswell, T. y Chase-Dunn, C. 2000 *The Spiral of Capitalism and Socialism* (Boulder: Lynne Reinner).

Cardoso, F.H. y Faletto, E. 1979 *Dependency and development in Latin America* (Berkeley: University of California Press).

Carlsen, L. 2013 'Pandering to the Privileged: The prairie fire that swept Brazil' en *Counterpunch*. En <http://www.counterpunch.org/2013/06/25/the-prairie-fire-that-swept-brazil/>.

Chase-Dunn, C. y Hall, T D. 1997 *Rise and demise: Comparing world-systems* (Boulder: Westview Press).

Chase-Dunn, C. y Niemeyer, R. E. 2009 'The world revolution of 20xx' en Albert, M. et al. (eds.) *Transnational political spaces* (Nueva York: Campus Verlag).

Coser, L. 1956 *The functions of social conflict* (Nueva York: The Free Press).

De Sousa Santos, B. 2006 *The Rise of the global Left* (Londres: Zed Press.)

Domínguez, F.; Geraldine, L. y Stephen, L. (eds.) 2011 *Rightwing politics in the new Latin América* (Londres: Zed Books).

Fontana, L. B. 2013 'On the perils and potentialities of revolution: Conflict and collective action in contemporary Bolivia' en *Latin American Perspectives*, *190*(40): 26-42.

Foran, J. 2005 *Taking power: On the origins of third world revolution* (Cambridge: Cambridge University Press).

Francis, L. A. 2005 'The impact of structural adjustment loans on civil conflict' MA Tesis de Maestría en Ciencia Política, Louisiana State University. En <http://etd.lsu.edu/docs/available/etd-07022010-174317/>.

Galeano, E. 1987 *Las venas abiertas de América Latina* (Montevideo: Universidad de la República).

Gills, B.; Rocamora, J. y Wilson, R. (eds.) 1993 *Low intensity democracy: Political power in the new world order* (Londres: Pluto).

Hall, T. D. y Chase-Dunn, C. 2006 'Global social change in the long run' en Chase-Dunn, C. y Salvatore, J. B. (eds.) *Global Social Change* (Baltimore: Johns Hopkins University Press) pp. 33-58.

Henige, D. P. 1970 *Colonial governors from the fifteenth century to the present* (Madison: University of Wisconsin Press).

Higginbottom, A. 2013 'The political economy of foreign investment in Latin America: Dependency revisited' en *Latin American Perspectives*, *40*: 184-206.

Kaldor, M. 2002 *Global civil society: An answer to war* (Cambridge: Polity Press).

Kentor, J. 2008 'The divergence of economic and coercive power in the world economy 1960 to 2000: A measure of nation-state position' en *IROWS*, Working Paper # 46. En <http://irows.ucr.edu/papers/irows46/irows46.htm>.

Lindblom, C. y Zuquete, J. P. 2010 *The Struggle for the world: Liberation movements for the* 21st *century* (Palo Alto: Stanford University Press).

Linebaugh, P. y Rediker, M. 2000 *The many-headed hydra: Sailors, slaves, commoners and the hidden history of the revolutionary Atlantic* (Boston: Beacon).

Martin, W. G. (ed.) 2007 *Making waves: worldwide social movements, 1750-2005* (Boulder: Paradigm Publishers).

Panizza, F. (ed.) 2000 'Old and New Populism in Latin América' en del *Bulletin of Latin American Research* (Amsterdam: Society for Latin American Studies, SLAS), número monográfico 19-2.

Polanyi, K. 1944 *The great transformation* (Nueva York: Farrar & Rinehart).

Portes, A. y Roberts, B. R. 2006 'Coping with the free market city: Collective action in six Latin American cites at the end of the twentieth century' en *Latin American Research Review*, *41:* 57-83.

Portes, A. y Lori, D. S. 2008 'Institutions and development in Latin America: A comparative analysis' en *Studies in Comparative International Development*, *43*: 101-128, Summer.

Reese, E. et al. 2008 'Research note: Surveys of World Social Forum participants show influence of place and base in the global

public sphere' en *Mobilization: An International Journal*, *13*(4): 431-445. [Versión revisada en: Smith, Jackie et al. (eds.) *A Handbook of the World Social Forums*, Paradigm Publishers, 2011].

Robinson, W. I. 1996 *Promoting polyarchy* (Cambridge: Cambridge University Press).

Robinson, W. I. 2008 *Latin America and global capitalism* (Baltimore: Johns Hopkins University Press).

Smith, J. y Wiest, D. 2012 *Social movements in the world-system* (Nueva York: Russell / Sage).

Soares de Arruda, P. 2007 'Banco Sur should be a bank to finance a socialist economy' en *z communications*. En <http://www.zcommunications.org/bancosur-shouldbe-a-bank-to-finance-a-socialist-economy-by-pliniosoares-de-arruda>.

Teague, M. 2012 'In Brazil, a river dam collides with the past' en *Los Angeles Times*.

Wallerstein, I. 1990 'Antisystemic Movements: History and Dilemmas' en Amin, S. et al. (eds.) *Transforming the revolution: Social movements and the world-system* (Nueva York: Cambridge University Press).

Wallerstein, I. 2004 *World-systems analysis* (Durham: Duke University Press).

Walton, J. y Seddon, D. 1994 *Free markets and food riots: The politics of global adjustment* (Cambridge: Blackwell).

CÓMO CITAR ESTA PUBLICACIÓN:
Chase-Dunn, Christopher, Alessandro Morosin and Alexis Álvarez. 2017. "Movimientos sociales y regímenes progresistas en América Latina: revoluciones mundiales y desarrollo semiperiférico." Pp. 31-48 en Paul Almeida y Allen Cordero Ulate, Eds., *Movimientos Sociales en América Latina: Perspectivas, Tendencias y Casos*. Buenos Aires: CLACSO.

3

Timothy Wickham-Crowley* y Susan Eva Eckstein**

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES LATINOAMERICANOS Y LA RATIFICACIÓN DEL PODER DE LAS TEORÍAS ESTRUCTURALES

En la publicación *The Making of Social Movements in Latin America*, de principios de los 90, los editores Arturo Escobar y Sonia Álvarez (1992) afirmaron que los enfoques de los eventos latinoamericanos basados en los viejos movimientos sociales eran poco adecuados para explicar las formas y fundamentos de los movimientos contemporáneos en la región. En cambio, argumentaron que los análisis basados en los Nuevos Movimientos Sociales (NMS) brindaban un marco de referencia más fructífero. En nuestra opinión, América Latina no ha experimentado un cambio tan profundo en el universo de sus movimientos sociales como para que se deban abandonar los enfoques teóricos previos. Las perspectivas basadas en los NMS son más apropiadas para evaluar la formación de la identidad colectiva y la batalla cultural, más allá del Estado como objetivo. Sostenemos que el marco teórico de los NMS proporciona herramientas analíticas diferentes que las brindadas por los grandes enfoques estructurales e historicistas, específicamente, los esfuerzos analíticos abundantes arraigados en la sociología política y la economía política. Estos enfoques estruc-

* Georgetown University, Washington DC, EEUU.

** Boston University, Boston, EEUU.

turales pueden ser útiles para los investigadores que deseen entender el surgimiento, la evolución y los logros de los movimientos sociales en América Latina hoy, así como de años anteriores, y captar mejor cómo, cuándo y por qué los movimientos de la región han cambiado con el paso del tiempo.

PERSPECTIVAS Y CONTRIBUCIONES DE LA ECONOMÍA POLÍTICA Y LA SOCIOLOGÍA POLÍTICA A LOS MOVIMIENTOS SOCIALES LATINOAMERICANOS ACTUALES

LAS PREMISAS BÁSICAS DE LA TEORIZACIÓN DE LOS NMS

Las principales menciones del punto de inflexión histórico y teórico señalan a los ensayos conjuntos e individuales de Escobar y Álvarez en su volumen de 1992, así como a los comentarios de los editores en su volumen conjunto posterior –auto-reconocido como una extensión del primer libro (*cfr.* Álvarez et al., 1998: 2-3, 431)– y también a los ensayos de varios colaboradores en ambos libros.

Los dos volúmenes no son idénticos en su perspectiva u objetivos planteados. El primer volumen revela mucha más variación en los marcos de análisis adoptados por los colaboradores, mientras que el segundo volumen se asienta de manera más homogénea en el ámbito de la antropología pos estructural y de los estudios culturales de la variante de la Escuela de Birmingham. De hecho, el primer volumen contiene varios autores cuya perspectiva es la sociología política. Aún así, tienen lo suficiente en común como para merecer una vinculación teórica. Asimismo, dentro de la tradición teórica de los NMS hay una variedad de perspectivas que han tenido una fuerte influencia en el pensamiento político de América Latina, en especial la obra de Alain Touraine. Las teorizaciones de los NMS, en general, incluyen el siguiente conjunto de supuestos y afirmaciones:

1. Consideran que los intentos previos del análisis del movimiento social están dominados por los enfoques funcionalista y marxista, y por un enfoque (casi) exclusivo en las luchas de clase y laborales.
2. Encuentran que la mayoría de los movimientos que aparecen en América Latina desde los años 80 son novedosos en sus objetivos, constituciones internas y componentes, y por lo tanto, se requiere una nueva teorización para que sean comprensibles.
3. Sostienen que los analistas del movimiento social ahora deben centrar su atención en los elementos culturales de los movimientos sociales, especialmente en la creación y negociación

de los nuevos significados emergentes de estos movimientos. Así, privilegian las preocupaciones interpretativas e ideográficas que tipifican los antropólogos; preocupaciones que, consideran, han sido ignoradas por otros investigadores del movimiento social.

4. Afirman que los movimientos sociales en América Latina han llegado a basarse en gran parte en identidades colectivas recién fraguadas o activadas y, por lo tanto, son profundamente diferentes de los intereses materiales derivados de las clases sociales en los que se basaban los movimientos anteriores (ver también Haber, 1996).

ALGUNAS PREMISAS BÁSICAS DE ECONOMÍA POLÍTICA Y SOCIOLOGÍA POLÍTICA

Sostenemos que los enfoques conjuntos de la sociología política y de la economía política, fundamentados históricamente, dan mejor cuenta de los orígenes, trayectorias y resultados de los movimientos sociales que la teoría de los NMS –y no solo en el pasado sino también en el presente.

Los focos en la cultura y el discurso de la teoría de los NMS, y el análisis de las nuevas identidades colectivas emergentes fraguadas en algunos movimientos sociales, deben integrarse aún más con las perspectivas de la economía política y la sociología política.

Las explicaciones basadas en la economía política se concentran en las relaciones estructurales y desiguales en las cuales está inserta la vida de las personas. A menudo, estas relaciones son percibidas como injustas y modificables, percepciones que puede llevar a (o ser mejoradas por) unir fuerzas con otros que están igualmente perjudicados. También proporcionan un marco para comprender cómo los contextos más amplios en los que se despliega la vida de las personas –que incluyen al Estado y otros acuerdos políticos institucionales, el macro-mercado y otras condiciones económicas, las normas, las tradiciones y las prácticas culturales– pueden influir en las iniciativas colectivas para el cambio, y con qué efectos. El marco de análisis de la sociología política, a su vez, mira dentro de la "caja negra", es decir, las características de los propios movimientos que influyen en su formación, tácticas y eficacia, como por ejemplo, liderazgo grupal, recursos, estrategias y grupo de alianzas.

Este par de marcos tiene numerosas fortalezas. En primer lugar, ayudan a explicar por qué las personas sujetas a las mismas condiciones desconcertantes pueden diferir en los movimientos sociales a los que se unen, y por qué los movimientos a los que se unen pueden adoptar formas diferentes y diferir en sus logros. En segundo lugar,

ayudan a dar cuenta de las condiciones bajo las cuales las identidades particulares salen a la palestra, inducen a la formación de movimientos sociales y delinean sus resultados; al hacerlo profundizan la comprensión de los movimientos en los que se enfocan quienes analizan los NMS. En tercer lugar, identifican las condiciones bajo las cuales los rituales, valores, tradiciones e ideologías distintivas adquieren significado e influyen en los movimientos sociales. No obstante, aún podríamos argumentar que los movimientos sociales no están determinados mecánicamente por las características de la estructura social. Son históricamente contingentes, varían con las condiciones locales, que también incluyen lo que los sociólogos llaman "agencia": las iniciativas de personas comunes, activistas y líderes. Las personas sujetas a injusticias similares, reales y percibidas, pueden responder a estas de forma diferente, aunque sobre todo bajo condiciones limitadas.

Las personas pueden tolerar las desigualdades y las injusticias que experimentan, incluso de mala gana, por la mera razón de que sienten que su situación es inmutable. Pueden recurrir a soluciones individuales, tales como salir de las relaciones que no les gustan, por ejemplo, a través de la migración o del cambio de trabajo (*cfr.* Hirschman, 1970). Sin embargo, en lugar de eso, también pueden movilizarse colectivamente para mejorar su situación cuando creen que las condiciones son propicias. Los desfavorecidos económicamente pueden realizar huelgas, organizar cortes de rutas y mucho más para interrumpir la producción y la economía. Estas son las armas de los débiles, que son más propensos que aquellos con más recursos y mejor conectados de optar por las formas colectivas de resistencia, precisamente porque los canales institucionales para resarcir sus privaciones tienden a estar cerrados o trabajan en su contra. Asimismo, las clases media y alta también pueden movilizarse por el cambio. Aunque sus posiciones más dominantes en las jerarquías sociales, económicas y políticas suelen trabajan a su favor y les proporcionan acceso a canales informales entre bambalinas, así como a canales formales para lograr los cambios que codician, cuando esos canales dejan sus problemas sin resolver ellos también pueden recurrir a modos colectivos de resistencia.

Si estamos en lo cierto de que "lo político" también es central en los movimientos sociales, desde sus formaciones a sus resultados, los Estados y las estructuras políticas también deben ser tenidos en cuenta. Los teóricos de los NMS han tratado de abordar el Estado y su "inserción" en la sociedad en general. No obstante, el Estado es más que un simple "interlocutor" de las demandas y el activismo del movimiento social, como lo denomina Escobar (Escobar y Álvarez 1992: 83). En esto, el Estado con todo su poder y materialidad ocupa

una posición única vis a vis los reclamos de muchos movimientos sociales y la manera de corregirlos; su rol en los movimientos sociales debe entenderse con claridad, analítica y empíricamente.

Los repertorios del movimiento social, a su vez, se han visto afectados por la interacción de la estructura social con la cultura y, también, por las estructuras estatales y las políticas de Estado, y por las características de la economía política en las que se despliega la vida de los pueblos. Charles Tilly y sus colaboradores señalaron claramente hace décadas que los repertorios de la resistencia popular han variado a lo largo del tiempo, según el cambio de condiciones (Shorter y Tilly, 1974; Tilly y Tilly, 1981; Tilly et al., 1975; Tilly, 1978, 1995). Por ejemplo, en Europa el repertorio viró de los disturbios por alimentos, resistencia a la conscripción, rebelión contra los recaudadores de impuestos y ocupaciones de tierras y bosques organizadas a las manifestaciones, asambleas de protesta, huelgas y mítines electorales entre los siglos XVIII y XIX. Tilly y sus colaboradores señalaron que en el siglo XX se hicieron más comunes las actividades proactivas y duraderas de las asociaciones a gran escala con un propósito especial. Según ellos estos cambios se remontan a la mayor concentración económica y la proletarización, por un lado, y al creciente poder del Estado y la institucionalización de la democracia liberal, por el otro. En esencia, como el *locus* del poder en la sociedad cambió, se alteraron los intereses, las oportunidades y capacidades para la acción colectiva de la gente común. Entre nuestros propios casos latinoamericanos tratados en este documento también pudimos observar elementos cambiantes en los repertorios de resistencia nacionales y grupales, los cuales mostraron e incluso explayaron su ya rica variedad de protestas colectivas, como veremos a continuación en nuestras discusiones empíricas.

LOCALIZACIÓN DE LOS RECLAMOS ESTRUCTURALES EN LAS DESIGUALDADES DE CLASE, ESTAMENTO Y PODER

Las estructuras sociales afectan directamente a los movimientos sociales debido a la distribución desigual de poder, riqueza y prestigio dentro de las sociedades, que genera intereses dispares entre personas situadas diferentemente según clase, raza/etnia, género y otras jerarquías, y también capacidades dispares para actuar en pos de sus propios intereses. Quienes controlan los medios de coerción física y los medios de producción de riqueza tienen poder sobre quienes no lo hacen. Sobre esta conjunción de temas, Max Weber (1978: 926-940) elaboró sus famosas distinciones entre clases, estamentos y detentadores de poder; fenómenos que crean tres tipos de desigualdades diferentes, de corte transversal, en las sociedades complejas. Cada

uno de estos tipos merece atención, y todos son relevantes para las discusiones que realizaremos aquí.

Diferencias de clase. En "Clases, Estamentos y Partidos" Weber (1978: 926-940) sostuvo que las diferencias de clase radican en dos patrones de desigualdad económica diferentes: la propiedad (o no) de la propiedad privada productiva –reconoce que los marxianos acertaron al subrayar ese fenómeno–pero también las posibilidades de vida en el mercado. Así, para Weber la propiedad/desposesión junto a las desigualdades en el mercado se combinan para definir las posiciones de clase social. Con respecto a los elementos de desigualdad en el mercado, Weber también estableció un esquema tripartito para el estudio de los conflictos de clase; y ese argumento luego fue sutilmente reelaborado por Norbert Wiley (1967). Tres tipos de relaciones de clase, de dominantes/subordinados, emergen dondequiera que se cristalicen los sistemas de mercado capitalistas, que representan al crédito, las materias primas y los mercados de trabajo. Respectivamente, enfrentan a: acreedores y deudores, vendedores y compradores, empleadores y empleados. Cada una de estas relaciones de mercado tiende a generar presiones para el cambio desde el interior de la clase más vulnerable, que aparece segunda en la lista, y en cada escenario ese grupo a menudo recurre a los gobiernos y operadores estatales para el paliativo de sus males económicos, cuando fracasan las apelaciones o protestas interclasistas. Como señala Wiley, en cada caso la clase baja está llevando a cabo una especie de socialismo, al requerir la protección del Estado por su posición más vulnerable.

Distinciones estamentales. A diferencia de las posiciones de clase que, en principio, son mutable si las personas pueden cambiar sus perfiles de posesión de propiedades o sus (des) ventajas en el mercado laboral, las distinciones estamentales *normalmente* se otorgan al nacer, y tales posiciones entre los grupos de estatus privilegiado *normalmente* están asociadas con (los intentos de hacer valer) los monopolios de acceso a prerrequisitos, bienes y servicios especialmente preciados; asimismo, están simbolizadas por las distinciones rubricadas de los estilos de consumo entre tales grupos. En otra parte, Weber sostiene que los reclamos de estos monopolios u otros estándares sociales jerárquicos pueden no solo estar respaldados por el propio sistema legal, sino que también pueden ser mantenidos por controles más informales, arraigados en la costumbre y la convención (Weber, 1978: 319-325). Sostiene que en el sistema de castas de la India ha prevalecido una instancia de desigualdades estamentales excepcionalmente agudas, que (indicativamente) durante mucho tiempo ha sobrevivido su abolición legal formal hace más de medio siglo, coetánea a la Independencia de la India. Si argumentamos por analogía,

el estatus de las mujeres (vs hombres) y también el de los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes (vs grupos étnicos de ascendencia europea) pueden ser concebidos sin reparos como conjuntos de jerarquías estamentales desiguales, con ventajas sistemáticas e incluso monopolios asegurados tiempo atrás por varones y también por blancos y mestizos en América Latina.

Ejercicio del poder del Estado. Como sostuvimos anteriormente, el Estado, su legislación y sus capacidades de hacer cumplir la ley son, obviamente, fuentes potenciales y potentes para la creación y la aplicación coercitiva de todo tipo de privilegios y menoscabos económicos, materiales y políticos. Que es, precisamente, un punto ciego en muchas de las teorizaciones de los NMS, que asumen que los conflictos de clase y sus reclamos subyacentes son "únicamente" por aspectos "económicos". Esto es totalmente falso, y volvemos a considerar los análisis de Weber y Wiley señalados anteriormente: históricamente hablando, estos conflictos de clase han sido sistemáticamente *desplazados* de la zona de producción al ámbito de la política nacional, y en todo el planeta esos conflictos han llevado una y otra vez a la creación de controles estatales sobre cuestiones tales como la duración de la jornada laboral, el salario mínimo, los beneficios establecidos por las disposiciones, regulaciones de salud y seguridad en el lugar de trabajo, y así sucesivamente.

La importancia del Estado es multifacética. En primer lugar, el Estado de por sí es central para la creación inicial y la extensión de ciertos derechos *y* para los desafíos a tales derechos, incluyendo, a veces, transformaciones masivas de los derechos de propiedad distribuidos y definidos de manera diferente (especialmente en el contexto de las revoluciones). Cabe destacar que, mediante los subsidios y otras políticas, los Estados están profundamente involucrados en mantener y ampliar o, en otros casos, quitar y socavar las protecciones materiales para la población en toda América Latina. El segundo punto es especialmente relevante cuando consideramos sistemas estamentales de discriminación y desprestigio, puesto que el Estado también es el pivote de los sistemas de discriminación política establecida *y* de los intentos de cambiar/transformar dichos sistemas a través de las leyes contra la discriminación o de los cambios constitucionales, de las leyes de "acción afirmativa" o de la instalación de sistemas de cupos. Su importancia es evidente en temas como la reciente propagación regional de los cupos (o cuotas) de género para las elecciones legislativas nacionales, y en Brasil, en el inicio de las plazas de raza/color en el acceso a la educación superior pública. *Por lo tanto*, para entender cómo y por qué los grupos (auto) identificados por género, raza y etnia, así como por la orientación sexual y la falta de propiedades –por

ejemplo, los movimientos entre los ocupantes urbanos y rurales o entre los pobladores rurales sin tierra (descritos a continuación)– llegan a movilizarse por derechos y beneficios, primero debemos observar los sesgos estatales en la distribución/asignación de derechos y beneficios, antes de centrarnos en políticas de identidad y en (presuntos) objetivos identitarios.

Modelos mixtos y fuentes de injusticias materiales. Otra debilidad teórica de algunos estudios de los NMS deriva del modo de pensamiento implícito en las afirmaciones empíricas de los teóricos en Europa y América Latina. En ambas regiones han argumentado que, si los movimientos basados en la clase trabajadora han declinado, entonces deben de haberlos reemplazado *otras* identidades *diferentes* como "conductoras" del activismo del movimiento. Como es el caso de los teóricos posmodernistas más en general, las variedades del pensamiento de los NMS a menudo "descubren" la "activación" de las identidades indígenas previamente latentes (en particular), que tal vez se habían suprimido debido a un conjunto comprensible de preocupaciones de clase, dada la crisis material que han enfrentado las clases más bajas de América Latina en su conjunto.[1]

Ciertamente, estamos de acuerdo que para un buen análisis social es importante prestar atención a nuestros múltiples estatus –"identidades", si se quiere–; sin embargo, discrepamos con *cualquier* sugerencia de que tales avances conceptuales y empíricos son las contribuciones originales de notables posmodernos como Michel Foucault.[2] Bastante alejados del monólogo de Shakespeare "El mundo entero es un escenario", o de los comentarios de Marx en las ediciones posteriores de *El Capital* –que solo optó por analizar a los seres humanos como "personificaciones de categorías económicas"–, ahora tenemos un siglo completo del desarrollo de la teoría del rol social en la historia del pensamiento sociológico, que siempre *comienza con la suposición de que cada ser humano posee múltiples identidades y no una única identidad* (por ejemplo, "trabajador"). La declaración fundacional, si es que la hay, probablemente se encuentre en "La red de afiliaciones grupales" de Georg Simmel, escrita hace un siglo (Simmel, 1955; en una traducción posterior). A partir de entonces, siguió el desarrollo formalizado y reflexivo de la teoría del rol impulsado por muchos académicos, incluyendo el antropólogo Ralph Linton, pero los más notables fueron los debates de Robert K. Merton de los

1 Se podría considerar que todas estas selecciones sobre el feminismo están ejemplificadas en los Caps. 3, 8, 12.

2 Esa sugerencia socava el postulado magnífico de Starn en Escobar y Álvarez (1992: 95).

conceptos de estatus, rol, juegos de estatus, juegos de rol, secuencias de estatus y así sucesivamente, publicados por primera vez hace más de medio siglo en el que, posiblemente, sea el libro más importante en la teoría sociológica del siglo XX (Merton, 1968: 422-440). Estas lagunas de revisión en la literatura de los escritos de los posmodernistas han pasado desapercibidas, y las virtudes del enfoque simmeliano clásico sobre los *múltiples* grupos que nos circundan y los *múltiples* roles que *todos* jugamos, ahora se replantearon forzosamente, junto con una crítica a las ideas posmodernas sobre estas cuestiones (Pescosolido y Rubin, 2000).

Dentro de los estudios de los movimientos sociales de América Latina, los trabajos de la antropóloga June Nash han proporcionado modelos refinados de análisis sintético, que combinan de forma eficaz los estudios de las múltiples situaciones estamentales de las personas entre las cuales realizó el trabajo de campo. En sus estudios sobre el activismo de los mineros bolivianos del estaño, dentro de una región del altiplano donde las culturas Quechua y Aymara viven profundamente, su trabajo integra a la perfección el análisis de los fundamentos de la clase obrera del altiplano y la/s cultura/s de los mineros del estaño en toda su riqueza étnica (Nash, 1979, 2001/1989). En sus estudios más recientes sobre el EZLN revolucionario mexicano (los zapatistas), el lector se encuentra con una fusión diferente, que se enfoca en la vida compleja y el activismo del movimiento de campesinos (a menudo sin tierras), mujeres y grupos indígenas vilipendiados de Chiapas, el estado más pobre de México (Nash, 2003).

UN MOVIMIENTO QUE INTEGRA INJUSTICIAS DE CLASE CON ULTRAJES ÉTNICOS: EL MAS DE BOLIVIA

La historia reciente de Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia demuestra elegantemente que las múltiples identidades de clase y de etnia no son fuentes mutuamente excluyentes para la producción de injusticias materiales estructuradas dentro del orden social, sino que se pueden reforzar y afirmar mutuamente. El MAS comenzó bajo el liderazgo de un cocalero llamado Evo Morales, que organizó a sus compañeros cocaleros en la región oriental del Chapare, Bolivia, para luchar contra los intentos múltiples y sostenidos del Gobierno Federal de Bolivia (bajo presión del Gobierno de Estados Unidos) para suprimir el cultivo y la venta de hojas de coca. En cada sentido significativo del término, este movimiento comenzó, así, como una lucha sobre las concepciones de los agricultores de sus "derechos de propiedad" –la mejor manera de cultivar sus propias tierras–, que son la esencia misma de las diferencias de clase (como dijimos anteriormente). Además, estos campesinos resistieron, tanto de forma encubierta como

abierta, la intrusión del Estado (y de EEUU) en el elemento "basado en el mercado" de las distinciones de clase, así como resistieron a las intrusiones estatales y extranjeras en sus decisiones de producción impulsadas por el mercado y orientadas por la exportación.

A partir de entonces la trayectoria del MAS y su desarrollo tuvo una doble transformación, puesto que se amplió su base para incluir varias comunidades indígenas del país, junto con los mestizos, de clase media baja, baja y obrera: la mayoría demográfica del país. Amplió su propia definición para centrarse en la distribución desigual de la tierra en todo el país, e hizo un intento vigoroso para ampliar los derechos indígenas y el acceso a los recursos políticos y materiales en general.

El viraje del MAS se basó en una estrategia política clara, primero en la búsqueda de la elección presidencial y los poderes parlamentarios, luego de reescritura al por mayor de la Constitución de la Nación, que estableció la capacidad y los derechos de Morales y el MAS para alcanzar los elementos de su agenda ampliada: la propiedad y los derechos indígenas. Todos estos objetivos han sido promovidos por una cadena larga de éxitos políticos nacionales conducidos por el MAS, que incluyen el movimiento de protestas masivas y, finalmente, exitosas contra la privatización de los sectores de la economía de suministro de gas y agua (actividades que, a la sazón, resultaron con la expulsión de Morales del Congreso). Los votantes bolivianos apoyaron firmemente la primera elección triunfante de Morales a la Presidencia en 2005; su referéndum de enero de 2009 para crear una nueva Constitución, que dio una base jurídica para la expansión de los derechos indígenas, la reforma de derechos de propiedad y otros cambios; y su reelección de diciembre de 2009 y las victorias arrasadoras del MAS en el Congreso que lo acompañaron. Todas estas victorias del MAS fueron ganadas contra la oposición reaccionaria de los contramovimientos desarrollados por los bolivianos de clase media y alta, que viven principalmente en los estados más ricos, pero más escasamente poblados, del este de Bolivia, conocidos como la región de la Media Luna. Solo en la región de la Media Luna, Morales, no pudo conquistar grandes mayorías; y hay correlaciones fuertemente negativas en Bolivia entre el voto por Morales en 2009 y los ingresos per cápita de los distintos departamentos bolivianos.[3]

---

3 La Corte Nacional Electoral de Bolivia dio a conocer los resultados el 28 de enero de 2009; a mediados de 2010 podían consultarse en <http://www.cne.org.bo/ResultadosRNC2009/wfrm-Dirimidor.aspx>. En los nueve departamentos bolivianos, los resultados de la votación se correlacionan -0,24 con la renta per cápita y -0.41 con

MOVIMIENTOS Y PROTESTAS ARRAIGADOS EN LOS CONFLICTOS DE CLASE: CAMPESINOS SIN TIERRA, TRABAJADORES, CONSUMIDORES Y DEUDORES

UN MOVIMIENTO MASIVO ARRAIGADO EN LA DESPOSESIÓN DE TIERRAS: EL EJEMPLO DEL MST DE BRASIL

El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (*Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra*, MST) de Brasil, llegó a ser el movimiento social más grande y más activo en toda América Latina a finales del siglo XX. Se formó en 1984, en un país que ostentaba uno de los sistemas de tenencia de la tierra más inequitativos del planeta: la mala distribución de tierras en Brasil, no hace mucho tiempo, generó un coeficiente Gini de desigualdad que alcanzó 0.843, en una escala de 0 a 1 (Ondetti, 2004, 2008: 60). En la región Amazónica, una sola empresa controla tierras cuya extensión es equiparable a la de Suiza (Ross, 2000: 488, Tabla 2, primera entrada). Ante tales desigualdades, el MST comenzó sus procesos de movilización hace 30 años, con la demanda de tierras sobre todo en sus campañas. De su repertorio, el elemento más común del movimiento ha sido la invasión de tierras, seguida por las demandas al Estado para que, a continuación, conceda los derechos de propiedad; pero también ha empleado bloqueos de carreteras, ha organizado manifestaciones multitudinarias y marchas, ha resguardado asentamientos comunitarios, ha establecido una fuerte presencia en Internet e, incluso, colocado a sus propios cuadros en puestos clave en las organizaciones estatales. En 2009, se informó que el movimiento había iniciado 230 mil ocupaciones de tierra y había formado 1.200 asentamientos de reforma agraria, tenía organizaciones activas en 23 de los 26 estados de Brasil y había ayudado a más de 146 mil familias a acceder a 5 millones de hectáreas de tierra (Vanden, 2007; Ondetti, 2008; Hammond, 2013).[4] Tanto por su duración como por su nivel de actividad, el MST se ha convertido en el movimiento social más importante de América Latina.

---

los valores específicos por departamento de una variante del Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, que también incluye elementos igualmente ponderados para la alfabetización y la esperanza de vida al nacer; los cálculos se realizaron utilizando los datos de Bolivia-PNUD (2004: 15-16, 18, 20, 151). Para consultar fuentes excelentes sobre los eventos bolivianos a los que nos referimos acá, ver también: Barr (2005); Crabtree (2005); Domingo (2005); Hylton y Thomson (2007); Olivera y Lewis (2004); y, Postero (2010).

4 Carecemos de espacio suficiente aquí para seguir elaborando el tema. Para abordajes más completos, ver: Hammond (2009, 2013); Ondetti, (2008); Wright y Wolford (2003); Navarro (2010); Carter (2010); y nuestro propio análisis, más breve, en Wickham-Crowley y Eckstein (2010).

Y, en este contexto, tenemos que decir algo obvio: a pesar de su gran tamaño, importancia y logros, el MST es ignorado casi por completo por los partidarios de la teorización de los NMS. ¿Por qué? El MST no se centra en la cultura ni en el debate discursivo; ni "pretende" hacer afirmaciones de identidad colectiva. En cambio, es obvio que el MST está profundamente arraigado en un conjunto de reclamos de clase, con raíces económicas, sobre la distribución de la propiedad de las tierras agrarias. En cuanto a la variedad de enfoques, derivados de la economía política y la sociología política, no sostenemos que aquí se puede aplicar solo una variante teórica, puesto que los analistas cercanos al MST han abordado estas cuestiones por sí mismos. Sin embargo, todos estos intentos variados (someramente señalados aquí) para "explicar" al MST comienzan con hambre de tierras. Por ejemplo, Wendy Wolford (2010) considera útil tres perspectivas diferentes de movimientos sociales (algunas de las cuales hemos señalado anteriormente), pero argumenta que deben complementarse con otros tipos de puntos de vista y evidencias para una comprensión más cabal de los procesos del MST que ella ha examinado. Para otra consideración diferente de "qué teorías son más adecuadas" para analizar al MST, Gabriel Ondetti (2008) sugiere otras opciones. Asimismo, Wickham-Crowley (2004, refiriéndose a Wolford, 2003) ha defendido la adecuación de las teorías de Jeffery Paige (1975), que predicen las diversas formas que podrían adoptar los movimientos agrarios y sus bases sociales variadas. La táctica central del MST de las invasiones de tierras ha interpelado mucho a los brasileños realmente desposeídos que se enfrentan a los sistemas agrarios a gran escala, dominados por terratenientes; en cambio, cuando apelan a los propietarios campesinos (algunos con los títulos de propiedad recién acuñados) de producción a pequeña escala, sin embargo, su atractivo disminuye notablemente. El modelo de Paige predice ambos resultados.

Las cuestiones materiales y económicas también han sido invocadas por Angus Wright, al tratar de explicar el posible *declive* del MST como organización del movimiento social, donde señala los esfuerzos de colonización de tierras del Estado brasileño en el interior de la Amazonía, que podrían "agotar" algunas bases hambrientas de tierras de las fortalezas del MST (al respecto, ver también: Carter, 2010).[5] Por nuestra parte, señalamos la importancia de la iniciativa de Brasil, que ahora tiene más de una década de vigencia, que da dinero

5 Wright, Wolford, Ondetti, Carter y Wickham-Crowley participaron en un panel sobre el MST en el Congreso LASA 2004 celebrado en Las Vegas, Nevada, EEUU.

en efectivo directamente a las madres pobres de niños pequeños, tanto en zonas rurales como urbanas. Este programa Bolsa Familia bien podría estar disminuyendo la base material de las demandas del MST.

LA CLASE OBRERA Y LAS PROTESTAS LABORALES

Cualquier análisis del ascenso y declive de las huelgas, herramienta clásica de los movimientos obreros, debe ser sintética y unir múltiples herramientas teóricas. Por supuesto, las cuestiones centrales son los reclamos materiales de los propios trabajadores, anclados en los niveles de remuneración y beneficios, condiciones de trabajo y seguridad en el empleo. Además, son centrales las estructuras de oportunidad política (Tarrow, 1989, 1998) en el nivel de la política nacional, que permiten (por ejemplo, aperturas democráticas) u obstruyen (por ejemplo, la represión política de la actividad de huelga) las oportunidades de participar en protestas públicas y colectivas. Por otra parte, la naturaleza de las economías políticas internacionales ha cambiado a lo largo de las décadas, de forma tal que cambiaron los costos potenciales que podrían soportar los trabajadores que consideran los beneficios potenciales de recurrir a las huelgas.

En Brasil, cuando la sociedad volvió a la democracia en los años 80, el nivel de actividad de huelga ascendió a uno de los más altos que se hayan observado en cualquier lugar de la tierra (Noronha et al., 1998). Sin embargo, allí y en otros lugares de América Latina los modelos globales de la actividad de huelga en general han descendido en los años siguientes, como ha documentado Susan Eckstein (2002). Ella también ha analizado esos cambios desde el punto de vista de la economía política y sostiene que la globalización y la (re)instalación cada vez más fluida de las fabricas en casi todos los lugares el mundo han aumentado agudamente el riesgo para los trabajadores que intentan utilizar el mecanismo de la huelga para lograr mejores convenios con las grandes corporaciones: este tipo de empresas puede cambiar las operaciones a emplazamientos de menor costo mucho más fácilmente que en el pasado. Este patrón a menudo se denomina "carrera hacia el fondo": mientras que en décadas anteriores podría haber favorecido la creación de maquiladoras en México, en un pasado más reciente el trabajo fabril ha sido trasplantado cada vez más a lugares con salarios súper bajos, como Bangladesh. Eckstein también sostiene que, para el caso de Brasil (*inter alia*), los gobiernos –incluso los elegidos democráticamente– a menudo se han alineado con las corporaciones extranjeras respecto de la mano de obra y de la aplicación de políticas económicas nacionales, debido a que no quieren perder la inversión extranjera, las divisas o las fuentes foráneas de crecimiento del empleo.

Las múltiples protestas en México también han demostrado que los trabajadores descontentos podrían recurrir a otras tácticas dentro de sus repertorios, diferentes a la huelga, en especial si tales acciones colectivas logran atraer la atención de los medios de comunicación a sus preocupaciones. A finales de los 90, las enfermeras del sector público, hartas de la escasez de suministros médico-sanitarios derivada del ajuste fiscal neoliberal, públicamente se sacaron sangre de sus brazos con jeringas y, luego, las vaciaron embadurnando las puertas de los administradores del hospital, para lograr que sus reclamos tuvieran cobertura mediática. Y en la Capital del estado de Tabasco, los barrenderos públicos presionaron colectivamente para obtener compensaciones por los servicios privados que los políticos les exijan y por la reincorporación de los puestos de trabajo perdidos a causa de las políticas de austeridad neoliberales. Organizaron una huelga de hambre, marcharon en masa a la Ciudad de México y se precipitaron al Congreso, donde se desnudaron para presionar por sus demandas.[6]

Como sugieren los relatos anteriores, el Estado puede llegar a estar profundamente involucrado en los conflictos de clase, y puede hacerlo en una gran variedad de formas. En Venezuela, la "aristocracia" obrera del sector petrolero, de hecho, se alineó con las compañías petroleras en un conflicto con el Gobierno de Hugo Chávez, pero perdió la lucha. En Argentina, un importante movimiento de trabajadores comenzó principalmente con un conjunto de demandas de clase, pero pronto amplió su lista de reclamos y "añadió" exigencias más amplias de justicia política y hasta el derrocamiento de un gobierno que había dejado de ser percibido como legítimo (Auyero, 2007).

PROTESTAS DE CONSUMIDORES

La crisis de la deuda en la región en los años 80 –radicada en un profundo endeudamiento con la banca extranjera para financiar el desarrollo, seguido por las dificultades para pagar el préstamo debido a la debilidad de los sectores de exportación– fueron el tiro de gracia para el modelo nacionalista de desarrollo industrial que había prevalecido en la mayor parte de América Latina durante décadas. La sustitución de importaciones se desacreditó, y la crisis de la deuda creó las condiciones bajo las cuales los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) presionaron para la reestructuración económica. Los gobiernos latinoamericanos recortaron los subsidios de subsistencia, a los que la población urbana había llegado a considerar que tenía derecho. El Estado se achicó y, desde el punto de vista de muchas

6 *New York Times*, 21 de enero de 1997, p. 10.

personas de las clases baja y trabajadora, e incluso algunas de clase media, además, se hizo mezquino (para más detalles, ver Eckstein, 2006). América Latina no fue la única en reestructurar de un modo que los costos de subsistencia se incrementaron, aunque en ninguna otra región del mundo se experimentaron tantas protestas centradas en los alimentos y otros bienes de consumo, considerados como derechos conquistados. Esa concentración específica de la región, tal vez, se deriva de dos patrones latinoamericanos distintivos: desde hace tiempo ha sido la región del Tercer Mundo más urbanizada, con más pueblos que dependen del mercado de alimentos; y las poblaciones y economías políticas de sus países han sido profundamente "impactadas" (*shocked*) por la magnitud de los programas de reestructuración neoliberal que impusieron.

Las expectativas de los pobres urbanos de América Latina coincidieron estrechamente con los patrones centenarios comunes a Europa, América Latina y otros lugares, donde llegaron a ser nominadas como la "economía moral", o un sistema económico que en muchos aspectos es *anti* libre mercado en sus fundamentos culturales. Sus principios principales son pocos y claros: la subsistencia y las necesidades locales vienen primero, y las violaciones de estas normas puede provocar indignación y protestas colectivas (Weber, 1978: 1.328, 13.931; Thompson, 1971; Wright, 1985; Scott, 1976). En varios países latinoamericanos, a partir de las reformas neoliberales, los pueblos sufrieron una retracción repentina y colectiva de alimentos y otros subsidios, que habían llegado a ser considerados como derechos de subsistencia en una época en que los ingresos menguaron. Iracundos, los habitantes de la ciudad salieron a las calles. Mientras que unos principalmente dirigieron su bronca contra las autoridades, algunos otros habitantes saquearon supermercados, donde habían experimentado las restricciones de los precios inflados. Las revueltas de los consumidores urbanos ocurrieron en, por lo menos, la mitad de los países latinoamericanos en los años 80 (*cfr.* Walton, 2001/1989, 1998), y países como Ecuador, Bolivia y Argentina las experimentaron en los primeros años del nuevo siglo (Almeida, 2007). Las bases materiales de estos levantamientos los vuelven, sin dudas, el equivalente actual de los disturbios por el pan ocasionados por los *sans culottes* y los trabajadores en Francia e Inglaterra durante los siglos XVIII y XIX (Rudé, 1981; Thompson, 1971). Todos estos tipos de protestas están, además, profundamente arraigados en las relaciones de clase, aunque se encuentran típicamente en los puntos de consumo, en vez de en los lugares de producción.

No obstante, los aumentos de precios por sí solos ni provocaron los disturbios ni determinaron la forma que tomaron. Las protestas

latinoamericanas mostraron varias combinaciones de huelgas, manifestaciones, paros cívicos, disturbios, saqueos y ataques a edificios gubernamentales en diferentes países, en línea con los distintos repertorios nacionales de resistencia, diferentes condiciones macroeconómicas y políticas, diferentes relaciones Estado/sociedad, diferentes alianzas grupales y distinta participación organizacional. Los recortes de subsidios, por ejemplo, generaron disturbios en Jamaica, Argentina y Venezuela, manifestaciones callejeras en Chile y huelgas y bloqueos de carreteras en los países andinos. Un disturbio gigantesco, conocido como el Caracazo, sacudió la Capital de Venezuela y otras ciudades a comienzos de 1989 en respuesta a ese tipo de recortes, y solo se dispersó después de la pérdida de cientos de vidas (Coronil y Skurski, 1991: 291). Las denominadas "protestas contra el FMI" son erupciones aparentemente espontáneas que, por lo general, implican algún grado de coordinación. En especial, ocurrieron cuando contaron con el respaldo de los sindicatos y del clero inspirado en la Teología de la Liberación,[7] ahí donde las divisiones políticas y las luchas de poder prepararon el terreno y cuando los gobiernos fueron débiles e impopulares (ver Walton, 1998, 2001/1989). El trabajo de base preparado por los sindicatos ilustra cómo la clase social, en su forma organizada, pronto logró instalar reclamos económicos fuera del lugar de trabajo. Allí donde tales condiciones sindicales, religiosas y estatales no prevalecieron, como en México, tales protestas no ocurrieron a pesar de los recortes generalizados en los subsidios a los consumidores.

El impacto de las protestas por el costo de subsistencia también varió. Cuando las revueltas tuvieron base amplia, los insurgentes han tenido éxito en lograr que los gobiernos, ansiosos por restablecer el orden y sus propias reivindicaciones para gobernar, retraigan o reduzcan las subidas de los precios. Incluso cuando se reinstauraron las subvenciones a los consumidores, los gobiernos ocasionalmente se derrumbaron bajo el peso de los reclamos por los derechos de subsistencia. Esto ocurrió, por ejemplo, en Ecuador, donde las protestas de sindicalistas, maestros y grupos indígenas paralizaron el país y pusieron a los funcionarios entre la espada y la pared. En un intento de apaciguar a la población mediante el repliegue de los precios, los gobiernos en bancarrota fiscal dejaron de pagar los préstamos extranjeros, entraron en mora y, en la desesperación, recurrieron a políticas

7 En los años 60, los teólogos latinoamericanos formularon una doctrina social de inspiración bíblica que abogaba por una "opción preferencial por los pobres". En consecuencia, las luchas de subsistencia se convirtieron en uno de sus focos de preocupación.

hiperinflacionarias que los hicieron aún más impopulares. La resistencia continua a los aumentos de precios, en el contexto de la devaluación del valor de la moneda nacional, contribuyó a la derrocar a dos presidentes elegidos allí, en 1997 y 2000. Argentina, *grosso modo*, hizo eco de los eventos ecuatorianos a finales de 2001 y comienzos de 2002 cuando las protestas masivas de los consumidores ocasionaron la salida de la Casa de Gobierno del Presidente Fernando de la Rúa y de una corta lista de sucesores, ya que la economía dolarizada de Argentina se desplomó, la relación peso-dólar fue desguazada, el gobierno dejó de pagar los préstamos internacionales y siguió una gran devaluación del peso (*Boston Globe*, 6 de enero de 2002, p. A6).

PROTESTAS DE DEUDORES

Aunque las clases más privilegiadas suelen abordar sus preocupaciones económicas a través de los canales institucionales y sus vínculos informales con los políticos, cuando estos fracasan, han formado movimientos propios como vimos anteriormente en el caso de Bolivia. Estos han incluido movimientos que abordan sus preocupaciones financieras. Los movimientos de clase media basados en cuestiones económicas, en los últimos años se han centrado en mitigar sus deudas, especialmente cuando los gobiernos devalúan la moneda nacional en respuesta a la crisis institucional. En México en 1993, y varios años después en Brasil, por ejemplo, surgieron movimientos de deudores para presionar a sus respectivos gobiernos para que abordaran y mitigaran sus obligaciones con los prestamistas (Eckstein, 2002: 344-345). Luego, en Argentina en 2002, surgió un movimiento denominado "ahorristas", que incluía a quienes protestaban contra el gobierno por las pérdidas en sus cuentas de ahorros como consecuencia del congelamiento bancario y las devaluaciones monetarias orquestados por el Estado (Almeida, 2003: 352). En los casos de los movimientos de deudores y ahorristas señalados aquí, las demandas se han centrado en el requerimiento del paliativo estatal de deudas y de obligaciones prestatarias (incluidas las regulaciones de los tipos de interés).

PROTESTAS RELACIONADAS INDIRECTAMENTE CON LAS DESIGUALDADES MATERIALES Y DE CLASE

La sección anterior se centró en los movimientos de protesta directamente arraigados en una variedad de obvias desventajas de clase, dada la perspectiva weberiana de clases desde de la cual escribimos. En la sección que sigue, las desventajas socioeconómicas y materiales aún prevalecen entre, y foguean a, los miembros perjudicados de estos movimientos sociales, pero ya no podemos describirlas como

de "clase" en el sentido exacto del término. Pero con más certeza aún, *tampoco* derivan de las formaciones de "identidad colectiva" o de otros enfoques derivados de los escritos de los teóricos de los NMS.

PROTESTAS POR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

A finales del siglo XX apareció una noción ampliada de derecho social y material, a medida que más grupos reclamaban el derecho a una educación gratuita. Debido a que el nivel de educación en las sociedades complejas se ha convertido, cada vez más, en el pivote para la inserción de los adultos jóvenes en la estructura de clase social, su vínculo con las cuestiones socioeconómicas y las divisiones de clase es patente, y el análisis de la relación entre años de escolaridad y la posición de clase en la vida adulta ha sido un elemento básico de la literatura sociológica sobre el logro de estatus al menos durante medio siglo (para Brasil, ver: Pastore, 1982; Pastore y Silva, 2002). Y, como veremos a continuación, los Estados y sus políticas educativas han sido el blanco predilecto de la ira de los manifestantes.

Liderados por los jóvenes de las clases media y trabajadora organizadas, los manifestantes se han centrado en el acceso a la educación universitaria (de la que podrían beneficiarse), en lugar de en las lagunas persistentes y, en ciertos países, hasta masivas en las oportunidades de escolaridad primaria y secundaria que limitan severamente las posibilidades de vida de los pobres de zonas rurales y urbanas (*cfr.* BID 1998: 27, para más datos; también sobre Brasil ver Birdsall, 1996). Cuando los gobiernos neoliberales de la región trataron de cobrar por estudios universitarios previamente gratuitos, los estudiantes protestaron colectivamente. Así, los estudiantes venezolanos se amotinaron en 1997 contra los recortes en las subvenciones escolares y de transporte, y en Nicaragua los estudiantes protestaron por los recortes en la financiación universitaria (Almeida y Walker, 2007) (junto con los habitantes de las favelas o villas miserias que salieron a las calles furiosos por los aumentos de los precios al consumidor). Los estudiantes se enfurecieron más por lo que consideraban un atropello a sus derechos que por los nuevos costos de matrícula en sí.

Los estudiantes mexicanos han sido más persistentes que sus compañeros en otras partes de la región, en protestar por los cargos de matrícula propuestos por el Estado. En 1988, en la Capital, cientos de miles de estudiantes marcharon en protesta contra el intento del gobierno de imponer cuotas y tarifas (junto con exámenes de ingreso), justo cuando la gran devaluación del peso y las medidas de austeridad habían aumentado dramáticamente los costos de vida. El gobierno no se atrevió a disparar contra los estudiantes, como ocurrió en 1968, dado que nunca ha recuperado la legitimidad plenamente después de

la masacre de estudiantes en Tlatelolco. Los estudiantes ganaron al captar la imaginación de la Ciudad de México; el gobierno dejó sin efecto la imposición de los nuevos cargos (Castañeda, 1993: 204).

De algún modo, la historia se repitió una década más tarde cuando los estudiantes cerraron otra vez el campus de la universidad pública (Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM) en la Capital, después de que el gobierno anunciara que las tarifas de inscripción pasarían de costar unos pocos centavos a $140 por año. Esta vez, sin embargo, los organizadores de la huelga se negaron a dar marcha atrás cuando el gobierno propuso que los pagos de matrícula sean voluntarios. En su lugar ampliaron sus demandas exigiendo, además, la democratización universitaria, la renuncia del rector y el incremento de la participación estudiantil en las instancias de toma de decisiones de la Universidad. Sin embargo, la parálisis de la educación universitaria generó fragmentaciones en el movimiento de protesta, y después de 10 meses el gobierno finalmente lo quebró. Al aprender de la Historia, el Presidente Ernesto Zedillo ordenó a la policía entrar sin armas al campus de la UNAM, y se aseguró de que la operación se llevara a cabo bajo la vigilancia de observadores oficiales de derechos humanos.

Aun más recientemente, en mayo de 2011 comenzaron las protestas estudiantiles masivas de los secundarios y universitarios chilenos contra las políticas del gobierno y las propuestas que favorecen las formas no tradicionales y privadas de educación superior en detrimento del gran sistema de universidades públicas de Chile. Si bien lograron obtener algunas concesiones del Presidente Sebastián Piñera las reivindicaciones de los manifestantes, en el año 2013, aún no habían sido completamente resueltas (ver en este volumen). Durante esos dos años se presenciaron múltiples protestas, con una participación de 100 mil o más estudiantes cada una, que a menudo implicaron la ocupación de selectos campus universitarios (Peterson, 2012).

PROTESTAS CONTRA EL CRIMEN

Bajo el neoliberalismo, el orden moral de las ciudades se erosionó más allá de las cuestiones discutidas. Los habitantes desesperados de las ciudades de la región han desafiado la ley, de forma individual y en grupos organizados y se volcaron a robos, hurtos, saqueos, actividad mafiosa, secuestros y asesinatos en una escala sin precedentes (Caldeira, 2000; Portes y Roberts, 2005). Este giro de los acontecimientos está visiblemente relacionado con la desposesión de bienes, entre otras cosas. Además, la vuelta a la actividad ilícita reveló que un aumento general de la inseguridad económica, en parte asociado a una disminución de oportunidades de trabajo en el sector formal que

empeoró por las políticas neoliberales, llevó a un creciente número de personas en la región a hacer justicia con mano propia para satisfacer sus anhelos económicos. La pobreza y el desempleo, junto con las drogas, la corrupción policial y el afianzamiento de gobiernos débiles y ruines, son la raíz del aumento de la actividad ilegal. En algunos países, las bandas mafiosas también contribuyeron al deterioro de la ley y el orden y, a su vez, al aumento de la delincuencia.[8] Y dado que el número de bandas se incrementó, han contribuido a una cultura de la ilegalidad que volvió tal criminalidad mucho más probable. Los agentes policiales de numerosos países se convirtieron en parte del problema, y no en su solución, ya que se unieron a las filas de los delincuentes, operando con impunidad.

La escalada delictiva dio lugar a nuevos movimientos contra el crimen, liderados por la clase media pero de base policlasista, con algunas de las movilizaciones más grandes de los últimos tiempos. México, Brasil, Colombia y Argentina están entre los países que presenciaron tales movimientos. Al exigirle al gobierno medidas más duras contra el crimen, los participantes de los movimientos hicieron uso de símbolos de resistencia culturalmente elaborados. Basados en la inseguridad personal y económica causada por el delito, estos movimientos se han formado también por las características asociadas con la nueva estructura de oportunidad política que se ha desencadenado con la democratización en la región. Con acceso a los medios de comunicación, facilitado por la democracia, a menudo seleccionan símbolos de resistencia para captar la imaginación popular; por ejemplo, frecuentemente se visten de blanco. La competencia electoral vinculada a la democracia ha impulsado algunos de los movimientos, ya que los candidatos de la oposición han expresado preocupaciones por la delincuencia para desacreditar la capacidad de los operadores designados para mantener la ley y el orden (por ejemplo, ver Eckstein, 2006: 32-34).

PROTESTAS BASADAS EN LAS DESVENTAJAS ESTAMENTALES

PROTESTAS ESTAMENTALES I: MOVILIZACIONES ARRAIGADAS EN LA RAZA Y LA ETNIA

Siete colecciones recientes sobre los movimientos sociales latinoamericanos han demostrado el profundo poder de permanencia de la teo-

8 La deportación estadounidense de indocumentados latinoamericanos que se habían afiliado a pandillas en los Estados Unidos, especialmente en Los Ángeles, ha impulsado una transnacionalización de bandas mafiosas estadounidenses, especialmente a El Salvador desde donde se han desplegado a otros países de la región (Cruz, 2013).

ría del "antiguo régimen": son las editadas por Eckstein (2001/1989); Eckstein y Wickham-Crowley (2003a, 2003b); Johnston y Almeida (2006); Stahler-Sholk, Vanden y Kuecker (2008); Prashad y Ballvé (2006); y López et al. (2008). Más de 100 contribuciones a esas colecciones destacan rutinariamente la importancia crítica de las condiciones económicas y políticas en la activación de identidades (a veces, previamente latentes) y en la configuración de las trayectorias de los movimientos, lo que sugiere implícita si no explícitamente que el estudio de tales condiciones debe ser parte de toda teoría de los movimientos sociales.

Lo que es más importante en el contexto inmediato, en estas colecciones y otros escritos recientes se muestra que los movimientos indígenas se preocupan por lograr *derechos y recursos materiales y políticos* que las desigualdades de clase existentes y la falta de privilegios estamentales establecidos, de larga data, les habían negado. Por consiguiente, los análisis sugieren que esas preocupaciones movilizadoras deben ser centrales en la teorización de los movimientos sociales.

Los movimientos contemporáneos entre los pueblos indígenas de América Latina, con sus culturas variadas y distintivas, ante todo, no pueden ser explicados culturalmente de una manera simple. De lo contrario, en lugar de ser nuevos al universo de los movimientos sociales de América Latina datarían de la época colonial, ya que algunas de las preocupaciones de los movimientos indígenas tienen siglos de antigüedad. Y el mero hecho de que los principales movimientos sociales indígenas ya habían surgido en la época colonial desafía los reclamos de "novedad" de los NMS.[9] Así, las conjeturas de los NMS acerca de lo "novedoso" de los movimientos indígenas contemporáneos, en parte, se basan en una simple omisión histórica.

Dentro de los círculos teóricos de los NMS, primero en Europa y después en América Latina, los analistas encontraron que los miembros de los "nuevos" movimientos sociales, incluso los de base étnica, realizaban demandas enfocadas en las nuevas identidades y en la búsqueda de formación de la identidad, *en lugar de* perseguir intereses de clase (ver los comentarios de: Polletta y Jasper, 2001; y Gohn, 2007).[10] Por el contrario, varios analistas de los movimientos indígenas actuales en América Latina han hecho eco del argumento

9 Por ejemplo, Huizer (1972: 3, 88-105) señala que solo en Bolivia hubo miles de protestas indígenas, durante y después de la era colonial.

10 Y para los movimientos europeos del siglo XIX, Craig Calhoun (1993) refuta enérgicamente las afirmaciones de los teóricos de los NMS acerca de la supuesta novedad de los elementos culturales y de la formación de la identidad colectiva.

de Orrin Starn sobre Perú (1992), donde les dice a los analistas que no se pueden ignoran las motivaciones básicas de los pueblos indígenas arraigadas en las necesidades materiales y la escasez.

Varios analistas que observaron de cerca el movimiento indígena masivo y actual en Ecuador plantearon el mismo punto: tanto Nathan Whitten (1996: 197-198) como John Peeler, este último en su ensayo en Eckstein y Wickham-Crowley (2003b: 266), informan que los objetivos materiales/políticos fueron centrales en el mayor levantamiento de pueblos indígenas en la historia ecuatoriana, que estalló en junio de 1990,[11] un levantamiento que ha influido en otros movimientos indígenas del país en los años posteriores. En Bolivia, Felipe Quispe lidera un movimiento de base Aymara, el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), que *sitúa* a la identidad indígena en el centro de sus objetivos y de su propia imagen Sin embargo, incluso estas cosas ciertamente no se reducen a una simple formación de identidad. Roxana Liendo, una ex trabajadora de una ONG familiarizada con su trayectoria dijo que: "esto no es porque rechacen la modernidad [...] sino que es un llamamiento codificado por justicia social y mayor respeto". Ella también sostiene que estos mismos Aymaras todavía están pidiendo, específicamente, que se entreguen los tractores prometidos hace mucho tiempo, entre otros productos de tecnología agrícola moderna a los que aspiran (Crabtree, 2005: 85-86). Irónicamente, una extensa revisión de la literatura reciente sobre los movimientos indígenas, que argumenta desde la perspectiva de la antropología y en el modo de la teoría de los NMS, en realidad, *confirma* nuestro argumento sobre la centralidad de las cuestiones materiales y políticas. Los autores señalan que "[…] el territorio –lograr derechos territoriales– sigue siendo el principal objetivo de las organizaciones indígenas" (Jackson y Warren, 2005: 553, 564-566). Charles Hale (2006: 271) ha realizado un argumento similar respecto a Guatemala (y más allá). Así, a pesar de esto, la teoría de los NMS postula que el movimiento contemporáneo en el que la *raison d'être* descansa única o principalmente en el "estatus simbólico" de las "identidades colectivas" es anómalo.

No es sorprendente que las demandas materiales, habitacionales, políticas y educativas realizadas al Estado hayan sido frecuentes entre los movimientos indígenas recientes, en especial los reclamos por derechos y autonomía y, en ciertas instancias, la garantía de las cuotas o cupos en la representación política, el bilingüismo y la

11 Sobre los movimientos indígenas en Ecuador, ver también Zamosc (1994) y Yashar (2005).

modificación de los contenidos impartidos en la educación pública.[12] En su Constitución de 1991 Colombia otorgó a los afrocolombianos derechos de cuota para dos escaños legislativos. El gobierno boliviano introdujo el bilingüismo incluso antes de que el país eligiera a su primer presidente indígena, Evo Morales. Y el gobierno brasileño, con Fernando Henrique Cardoso, comenzó a garantizar un mayor acceso a la educación superior a los afrodescendientes nacidos en Brasil, con un sistema de cuotas en las vacantes de las universidades públicas basado en el color de la piel. No se trataba simplemente de una política proactiva de su parte, porque hacía rato que los afrodescendientes brasileños hacían campaña en pos de un mayor acceso a la educación superior mediante el eslogan *Direitas Ja!*[13] Mientras tanto, en Guatemala, los intelectuales indígenas presionaron por cambios en los planes de estudios escolares para incluir las perspectivas de los pueblos indígenas.

PROTESTAS ESTAMENTALES II: MOVILIZACIONES BASADAS EN EL GÉNERO

Las preocupaciones de las mujeres están determinadas por su posición social, en sus familias y la sociedad en general, y normalmente se enfocan en su condición de subordinación. Analíticamente, el género puede tener consecuencias de dos maneras distintas: como base social de movilización y como un conjunto de cuestiones que conciernen a las mujeres como tales, o en combinación con la clase y con los estamentos e identidades étnicas y raciales.

Antes de movilizarse por las preocupaciones específicas de género, las mujeres participaron en una variedad de movimientos sociales. Por ejemplo, muchas mujeres activaron en los movimientos de

---

12 Algo similar ocurrió en África y Asia durante los procesos de descolonización que siguieron al fin de la Segunda Guerra Mundial. Geertz (1963, 1970) se refirió al surgimiento de la "política primordial" en los nuevos Estados poscoloniales de África y Asia después de la Segunda Guerra Mundial.

13 Ver el sugerente documental de PBS, "Brasil en blanco y negro" ('Brazil in Black and White ', Wide Angle, 2007), que ofrece imágenes de vídeo de algunas de esas protestas, entre otras cosas. La cuota se implementó a través de la selección de fotografías estandarizadas tomadas de todos los "solicitantes de cuotas", y su porcentaje de objetivos varió de estado a estado en todo Brasil, dependiendo del tamaño de la población afrodescendiente en cada uno; dos objetivos típicos fueron 20% (para Brasilia/Distrito Federal) y 40% (para Bahía). En los debates públicos concomitantes sobre la raza, casi siempre vehementes, era omitido un segundo elemento del nuevo sistema de cuotas. Este apuntaba directamente a las desventajas socioeconómicas, al instalar además un cupo mínimo de ingresantes provenientes de las escuelas secundarias públicas de la nación, puesto que los solicitantes de las escuelas secundarias de gestión privada dominaban totalmente el acceso a carreras como Medicina.

ocupaciones y asentamientos de los años 60, un periodo de migración masiva del campo a la ciudad en el contexto de los cambios desarrollistas en la sustitución de importaciones. Al permanecer en sus barrios durante el día mientras sus compañeros trabajaban en otros lugares, estaban bien posicionadas estratégicamente para defender los recamos de sus familias por terrenos, presionar por servicios urbanos y defenderse de la policía, los asesores fiscales y otros agentes estatales (*cfr.* Vélez-Ibáñez, 1983: 119-122).

Aunque fue la crisis política y económica de los años 80, asociada al régimen militar represivo y la reestructuración neoliberal, que al causar la espiral ascendente del costo de vida catapultó a las mujeres *qua* las mujeres al ámbito público, primero en defensa de sus derechos a la maternidad (y abuelidad) respecto de sus hijos/as que "desaparecieron" bajo los regímenes militares, y después en oposición a los aumentos respaldados por el Estado de los precios de los alimentos básicos, combustible y servicios que padecían directamente ya que eran las que estaban a cargo de la administración hogareña. Preocupadas por las necesidades de subsistencia, las mujeres formaron movimientos basados en el consumo. Se movilizaron colectivamente para protestar por los recortes en las subvenciones estatales que escalaron sus costos de vida y formaron agrupaciones barriales de compra, comercialización y ahorro. Las preocupaciones de clase eran subyacentes a estos movimientos. Fueron mujeres de ingresos limitados (que incluían a las de clase media baja y clase obrera, así como a las pobres) quienes formaron la base de los movimientos, ya que los ricos podían absorber los aumentos de precios. Aunque estos movimientos impulsaron a las mujeres colectivamente a la esfera pública, estos no tenían la intención de transformar el lugar de la mujer en el hogar o en la sociedad en general.

Los volúmenes de 1992 y 1998 prometieron sendos análisis sobre la vida de las mujeres, pero en vez de examinar la gran variedad de eventos decisivos para las mujeres de la región, que participaron políticamente, ambos volúmenes se centran en los debates y discursos generados casi exclusivamente dentro de los límites de las organizaciones y conferencias feministas. Nuestra propia inclinación analítica es buscar en los modelos reales mediante los cuales las mujeres en conjunto han (o habían) abordado su falta de poder en el Estado y la política en general, en lugar de detenernos excesivamente en las palabras y los textos generados entre los grupos feministas. Por ejemplo, los estudios detallados del acceso de las mujeres al voto y a altos cargos políticos en América Latina han demostrado que la concesión del sufragio femenino se produjo en un modelo global,

entonces de difusión intrarregional –en una suerte de "epidemia" política transnacional– en el segundo tercio del siglo XX (Ramírez et al., 1997), y, a continuación, una epidemia espacio-temporal muy similar llevó a la sanción legal de los cupos o cuotas de género para las elecciones legislativas nacionales, en las últimas dos décadas en la mayoría de América Latina (Htun, 2003; Barrig, 2006; Krook, 2009). Este último proceso de fijación de cupos –que consagraba en la legislación el acceso de las mujeres, mediado por el partido, a las palancas de poder político de sus naciones– se estableció en 1991 en la Argentina y en 1997 prevalecía en más de la mitad de las naciones latinoamericanas.

Cuadro 3.1
Comparación de las premisas clave de tres enfoques para la comprensión de los movimientos sociales latinoamericanos contemporáneos: nuevos movimientos sociales (NMS), economía política y sociología política

Criterios de evaluación	Nuevos movimientos sociales	Economía política	Sociología política
Historicidad	Discontinuidad con los movimientos anteriores respecto a las bases sociales típicas y preocupaciones específicas	Formación y problemas del movimiento trazados por las condiciones políticas y económicas frecuentemente cambiantes en niveles macro (nacional e internacional) y locales, incluyendo las estructuras y procesos estatales, tales como represión, elecciones y cooptación	Las estructuras de oportunidades ampliadas limitan los riesgos de las protestas; derechos ampliados *de jure*, pero ejercidos *de facto*; aumento del acceso a ideas transnacionales y redes sociales que sirven como modelos de cambio
Bases sociales de los movimientos	Bases sociales no clasistas variadas, fundadas en nuevas identidades colectivas emergentes. Por ejemplo, mujeres, grupos raciales e indígenas, gays/lesbianas, "verdes" y demócratas de base	Grupos de bases laborales (v.g.: ingresos y beneficios; seguridad laboral o abusos); consumidores (v.g.: costo de vida, acceso a la vivienda y la tierra); deudores (v.g.: alivio de la deuda), grupos de género y indígenas o raciales (v.g.: reclamos por justicia (re) distributiva)	Clases sin privilegios y grupos de estatus (por ejemplo, para este último, indígenas y mujeres). Nuevos y viejos demandantes de derechos (por ejemplo, para derechos indígenas o étnicos; igualdad de género; derechos humanos; a favor de la democracia)

Criterios de evaluación	Nuevos movimientos sociales	Economía política	Sociología política
Orígenes y/o causas de la movilización	Construcción colectiva de identidades creación y cambios culturales en los significados (a menudo emergentes de discursos intragrupales) que fomentan nuevos reclamos colectivos en modos extra y anti institucionales	*Micro*: movimientos defensivos y proactivos arraigados en injusticias materiales, sociales y/o políticas, percibidas y compartidas colectivamente. *Macro*: percepciones de que los beneficios de la protesta colectiva superan no sólo los riesgos, sino también las posibles ganancias de "la salida"	Demandas compartidas y percibidas colectivamente, que buscan nuevas garantías y acceso político. Formación del movimiento favorecida por el liderazgo y por el acceso a recursos (por ejemplo, suministros de material) y por todo el apoyo de "*outsiders*", por ejemplo: de ONG, medios de comunicación, intelectuales y partidos políticos

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES

En el Cuadro 3.1 hemos resumido los diversos enfoques del estudio de los movimientos sociales discutidos en este ensayo. Esos comentarios tabulados y abreviados abarcan los estudios realizados en América Latina, pero además pueden considerarse aplicables más allá de América Latina. En un sentido similar, las particularidades de los tres enfoques también sugieren lineamientos conceptuales más amplios que los que se encuentran en nuestro ensayo.

Los estudios y la teorización sobre los nuevos movimientos sociales en América Latina fueron concebidos tanto para proporcionar modelos de análisis como para inspirar inquietudes por los nuevos tipos de grupos y movimientos sociales, acaso relegados, pero cada vez más frecuentes en la región. Buscaban y pretendían hacerlo desde una nueva perspectiva, en la cual las cuestiones culturales y de identidad colectiva serían las herramientas conceptuales privilegiadas.

Desde la perspectiva de nuestro marco de sociología política y economía política, el estilo de la teorización de los NMS aún no tiene un pleno desarrollo y, ciertamente, no es representativo de la investigación en curso sobre una variedad de movimientos sociales latinoamericanos. Por ejemplo, la teoría de los NMS no puede explicar la disminución de movimientos históricamente importantes, como las huelgas obreras, un cambio perfectamente inteligible desde la perspectiva de la economía política. En las últimas décadas, además, los cambios políticos concomitantes en la región, especialmente con la re-democratización, han creado *oportunidades* novedosas para la

formación de la resistencia colectiva –para todas las personas agraviadas, independientemente de la "causa"– que los regímenes represivos anteriores habían hecho tan difícil; y que es precisamente lo que la teoría de la estructura de la oportunidad política nos llevaría a esperar (Tarrow 1989, 1998). Los defensores de los NMS ya habían planteado un reflujo del activismo del movimiento con motivaciones materiales y económicas en América Latina a principios de los años 90, pero las antologías contemporáneas más recientes continúan encontrando y analizando una gran cantidad de esta clase de actividades de movimiento. Los teóricos de los NMS parecen restar importancia a las desigualdades de los grupos étnicos (*y de* clase) de siglos de antigüedad experimentadas los pueblos indígenas y los afrodescendientes de la región, y su consecuente recurso histórico *y* contemporáneo al activismo del movimiento social en modos que *confrontan directamente* los poderes de los Estados, ya que son críticos para el mantenimiento de ambos tipos de desigualdad. Si los grupos indígenas, las mujeres y otros similares se movilizan de una manera que antes no lo hacían, la razón se explica menos por las nuevas identidades culturales como tales, como sugieren los teóricos de los NMS, que por el cambio de las condiciones y oportunidades estructurales.

Sin embargo, las contribuciones positivas de la perspectiva de los NMS no deben dejar de ser reconocidas. Al inspirar estudios sobre aquellos movimientos sociales omitidos, en particular, por los politólogos, que se han centrado principalmente en las instituciones políticas, las estructuras y los procesos formales, los analistas de los NMS deben ser elogiados. Si se leen selectivamente, de hecho, se poden encontrar muchas virtudes en los ensayos escritos dentro del universo teórico de los NMS, y nos alegramos por ello. La investigación bien hecha y el buen análisis pueden llegar desde un sinfín de puntos de partida teóricos, lo que beneficia a todos los que estudian el rico y variado universo de movimientos sociales latinoamericanos. Esperamos un futuro en el que el enfoque cultural y discursivo, y el análisis de las nuevas identidades colectivas emergentes fraguadas por algunos movimientos sociales, se integren más profundamente con las perspectivas de la economía política y la sociología política que hemos destacado en este ensayo. Este campo de estudio es, y debe ser, una casa con muchas habitaciones.

BIBLIOGRAFÍA

Almeida, P. 2003 'Opportunity organizations and threat induced contention: Protest waves in authoritarian settings' en *American Journal of Sociology*, *109*(2): 345-400.

Almeida, P. 2007 'Defensive mobilization: Popular movements against economic adjustment policies in Latin America' en *Latin American Perspectives*, *34*(3): 123-139.

Almeida, P. D. y Walker, E. 2007 "El avance de la globalización neoliberal: Una comparación de tres campañas de movimientos populares en Centroamérica" en *Revista Centroamericana de Ciencias Sociales*, *4*(1): 51-76.

Álvarez, S.; Dagnino, E. y Escobar, A. (eds.) 1998 *Cultures of politics, politics of cultures: re-visioning Latin American social movements* (Boulder: Westview).

Auyero, J. 2007 *Routine politics and violence in Argentina: The gray zone of state power* (Cambridge: Cambridge University Press).

Barr, R. R. 2005 'Bolivia: Another uncompleted revolution' en *Latin American Politics and Society*, *47*(3): 69-90.

Barrig, M. 2006 'Latin American feminism: Gains, losses and hard times' en Prashad, V. y Ballvé, T. (eds.) *Dispatches from Latin America: On the frontlines against neoliberalism* (Cambridge: South End Press) pp. 47-58

Birdsall, N. (ed.) 1996 *Opportunity foregone: Education in Brazil* (Washington, D.C.: Inter-American Development Bank).

Bolivia. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2004 *Informe de desarrollo humano 2002* (La Paz: PNUD).

Caldeira, T. P. do Rio 2000 *City of walls: Crime, segregation, and citizenship in São Paulo* (Berkeley: University of California Press).

Calhoun, C. 1993 ''New social movements' of the early nineteenth century' en *Social Science History*, *17*(3): 385-427.

Carter, M. 2010 'The landless rural workers movement and democracy in Brazil' en *Latin American Research Review*, *45*: 186-217, Número especial.

Castañeda, J. 1993 *Utopia unarmed: The Latin American left after the cold war* (Nueva York: Alfred A. Knopf).

Coronil, F. y Skurski, J. 1991 'Dismembering and remembering the nation: Semantics of political violence in Venezuela' en *Comparative Studies in Society and History*, *33*(2): 288-337.

Crabtree, J. 2005 *Patterns of protest: Politics and social movements in Bolivia* (Londres: Latin America Bureau).

Cruz, J. M. 2013 'Beyond social remittances: Migration and transnational gangs in Central America' en Eckstein, S. y Najam, A. (eds.) *How immigrants impact their homelands* (Durham: Duke University Press) pp. 213-233

Domingo, P. 2005 'Democracy and new social forces in Bolivia' en *Social Forces*, *83*(4): 1.727-1.743.

Eckstein, S. (ed.) 2001 (1989) *Power and popular protest: Latin American social movements* (Berkeley: University of California Press) 2° edición.

Eckstein, S. 2002 'Globalization and mobilization: Resistance to neoliberalism in Latin America' en Guillén, M. F. et al. (eds.) *The new economic sociology: Developments in an emerging field* (Nueva York: Sage) pp. 330-367.

Eckstein, S. 2006 'Urban resistance to neoliberal democracy in Latin America' en *Colombia Internacional* (Universidad de los Andes), *63*: 12-39, enero-junio.

Eckstein, S. y Wickham-Crowley, T. P. (eds.) 2003a *Struggles for social rights in Latin America* (Nueva York: Routledge).

Eckstein, S. y Wickham-Crowley, T. P. (eds.) 2003b *What justice? Whose justice? Fighting for fairness in Latin America* (Berkeley: University of California Press).

Escobar, A. y Alvarez, S. (eds.) 1992 *The making of social movements in Latin America* (Boulder: Westview Press).

Geertz, C. 1963 'The integrative revolution: Primordial sentiments and civil politics in the new states' en Geertz, C. (ed.) *Old societies and new states* (Glencoe: The Free Press) pp. 105-157.

Geertz, C. 1970 'Primordial sentiments and civil politics in new states' en Nordlinger, E. (ed.) *Politics and society* (Englewood Cliffs: Prentice-Hall) pp 209-219.

Gohn, M. da G. 2007 *Teorias dos movimentos sociais* (San Pablo: Ediçes Loyola) 6° edición.

Haber, P. L. 1996 'Identity and political process: Recent trends in the study of Latin American social movements' en *Latin American Research Review*, *31*(1): 171-188.

Hale, C. R. 2006 'Rethinking indigenous politics in the era of the 'Indio Permitido'' en Prashad, V. y Ballvé, T. (eds.) *Dispatches from Latin America: On the frontlines against neoliberalism* (Cambridge: South End Press) pp. 266-280.

Hammond, J. L. 2009 'Land occupations, violence, and the politics of agrarian reform in Brazil' en *Latin American Perspectives*, *36*(4): 156-77.

Hammond, J. L. 2013 'Landless workers movement (MST) Brazil' en Snow, D. A. et al. (eds.) *The Wiley-Blackwell, encyclopedia of social and political movements* (Londres: Basil Blackwell) [Disponible en internet].

Hirschman, A. 1970 *Exit, voice, and loyalty: Responses decline in firms, organizations, and states* (Cambridge: Harvard University Press).

Htun, M. 2003 'Why identity groups get represented in politics', agosto (*mimeo*; citado con permiso del autor).

Huizer, G. 1972 *The revolutionary potential of peasants in Latin America* (Lexington: Lexington Books).

Hylton, F. y Thomson, S. 2007 *Revolutionary horizons: Past and present in Bolivian politics* (Londres: Verso).

Inter-American Development Bank (IDB) 1998 *Facing up to inequality in Latin America: Economic and social progress in Latin America, 1998-1999 Report* (Baltimore: Johns Hopkins University Press for the IDB).

Jackson, J. E. y Warren, K. B. 2005 'Indigenous movements in Latin America, 1992-2004: Controversies, ironies, new directions' en *Annual Review of Anthropology*, *34*: 549-573.

Johnston, H. y Almeida, P. (eds.) 2006 *Latin American social movements: Globalization, democratization, and transnational networks* (Oxford: Rowman & Littlefield).

Krook, M. L. 2009 *Quotas for women in politics: Gender and candidate selection reform worldwide* (Oxford: Oxford University Press).

López Maya, M.; Carrera, N. I. y Calveiro, P. 2008 *Luchas contrahegemónicas y cambios políticos recientes de América Latina* (Buenos Aires: CLACSO).

Merton, R. K. 1968 *Social theory and social structure* (Nueva York: The Free Press) 3° edición aumentada.

Nash, J. 1979 *We eat the mines and the mines eat us: Dependency and exploitation in Bolivian tin mines* (Nueva York: Columbia University Press).

Nash, J. 2001 (1989) Cultural resistance and class consciousness in Bolivian tin-mining communities' en Eckstein, S. (ed.) *Power and popular protest: Latin American social movements* (Berkeley: University of California Press) Capítulo 5, 2° edición.

Nash, J. 2003 'The war of the peace: Indigenous women's struggle for social justice in Chiapas, Mexico' en *What justice? Whose justice? Fighting for fairness in Latin America* (Berkeley: University of California Press) Capítulo 11.

Navarro, Z. 2010 'The Brazilian landless movement (MST): Critical times' en *REDES* (Santa Cruz do Sul) *15*(1): 196-223.

Noronha, E. G.; Gebrim, V. y Elias, J. Jr. 1998 'Explicações para um ciclo excepcional de greves: o caso brasileiro', Presentado

en la *21*st *International Congress of the Latin American Studies Association (LASA)*, Chicago, Illinois, 24 a 26 de septiembre.

Olivera, O. y Lewis, T. (colab.) 2004 *¡Cochabamba! water war in Bolivia* (Cambridge: South End Press).

Ondetti, G. 2004 'Revolution or palliative? Assessing the cardoso land reform', Presentado en la sesión "The Brazilian countryside I: social mobilization and citizenship" en la *25*th *International Congress of the Latin American Studies Association (LASA)*, Las Vegas, Nevada, 7 a 9 de octubre.

Ondetti, G. 2008 *Land, protest, and politics: The landless movement and the struggle for agrarian reform in Brazil* (University Park: Pennsylvania State University Press).

Paige, J. 1975 *Agrarian revolution: Social movements and export agriculture in the underdeveloped world* (Nueva York, Free Press).

Pastore, J. 1982 *Inequality and social mobility in Brazil* (Madison: University of Wisconsin Press).

Pastore, J. y Silva, N. do V. 2002 *Mobilidade social no Brasil* (São Paulo: Makron Books).

Pescosolido, B. y Rubin, B. 2000 'The web of group affiliations revisited: Social life, postmodernism, and sociology' en *American Sociological Review*, *65*(1): 52-76.

Peterson, B. 2012 'Chilean students demand education reform' en *The Nation*, 29 de junio. En <http://www.thenation.com/blog/168676/chilean-students-demand-education-reform> Acceso 16 de diciembre de 2013.

Polletta, F. y Jasper, J. M. 2001 'Collective identity and social movements' en *Annual Review of Sociology*, *27*: 283-305.

Portes, A. y Roberts, B. 2005 'Free market city' en *Studies in Comparative International Development*, *40*(1): 43-82.

Postero, N. 2010 'The struggle to create a radical democracy in Bolivia' en *Latin American Research Review*, *45*: 59-78, Número especial.

Prashad, V. y Ballvé, T. (eds.) 2006 *Dispatches from Latin America: On the frontlines against neoliberalism* (Cambridge: South End Press).

Ramirez, F.; Soysal, Y. y Shanahan, S. 1997 'The changing logic of political citizenship: Cross-national acquisition of women's suffrage rights, 1890-1990' en *American Sociological Review*, *62*(5): 735-745.

Ross, J. L. S. 2000 *Geografía do Brasil* (São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo) 3° edición.

Rudé, G. 1981 *The crowd in history, 1730-1848* (Londres: Lawrence & Wishart) Edición revisada.

Scott, J. C. 1976 *The moral economy of the peasant* (New Haven: Yale University Press).

Shorter, E. y Tilly, C. 1974 *Strikes in France, 1830-1968* (Nueva York: Cambridge University Press).

Simmel, G. 1955 *Conflict and the web of group affiliations* (Glencoe: The Free Press) [Traducido por K. H. Wolff y R. Bendix].

Stahler-Sholk, R.; Vanden, H. y Kuecker, G. D. (eds.) 2008 *Latin American social movements in the twenty-first century: resistance, power, and democracy* (Lanham: Rowman & Littlefield).

Tarrow, S. 1989 *Struggle, politics, and reform: Collective action, social movements, and cycles of protest* (Ithaca: Center for International Studies, Cornell University).

Tarrow, S. 1998 *Power in movement: Social movements, collective action, and politics* (Cambridge: Cambridge University Press) 2 edición.

Thompson, E. P. 1971 'The moral economy of the English crowd in the eighteenth century' en *Past and Present*, *50*: 76-136.

Tilly, C. 1978 *From mobilization to revolution* (Reading: Addison-Wesley).

Tilly, C. 1995 *Popular contention in Great Britain, 1758-1834* (Cambridge: Harvard University Press).

Tilly, L. y Tilly, C. (eds.) 1981 *Class conflict and collective action* (Beverly Hills: Sage).

Tilly, C.; Tilly, L. y Tilly, R. 1975 *The rebellious century, 1830-1930* (Cambridge: Harvard University Press).

Vanden, H. E. 2007 'Social movements, hegemony, and new forms of resistance' en *Latin American Perspectives*, *34*(2): 17-30, marzo.

Vélez-Ibáñez, C. 1983 *Rituals of marginality* (Berkeley: University of California Press).

Walton, J. 1998 'Urban conflict and social movements in poor countries: Theory and evidence of collective action' en *International Journal of Urban and Regional Research*, *22*(3): 460-481.

Walton, J. 2001 'Debt, protest, and the state in Latin America' en Eckstein, S. (ed.) *Power and popular protest: Latin American social movements* (Berkeley: University of California Press) Capítulo 10; 2° edición.

Weber, M. 1978 *Economy and Society: An outline of interpretive sociology* (Berkeley: University of California Press) [editado por G. Roth y C. Wittich; traducido por E. Fischoff et al.].

Whitten, N., Jr. 1996 'The Ecuadorian Levantamiento Indígena of 1990 and the Epitomizing Symbol of 1992' en Hill, J. D. (ed.)

History, power, and identity: Ethnogenesis in the Americas, 1492-1992 (Iowa City: University of Iowa Press) pp. 193-218.

Wickham-Crowley, T. P. 2004 'Commentary', Presentado en la sesión "The Brazilian Countryside I: Social Mobilization and Citizenship" en el *25*th *International Congress of the Latin American Studies Association* (LASA), Las Vegas, Nevada, del 7 al 9 de octubre.

Wickham-Crowley, T. y Eckstein, S. 2010 'Économie et sociologie politiques du militantisme et des repertoires des mouvements sociaux récents en Amérique Latine' en *Revue Internationale de Politique Comparée*, *17*(2): 29-52.

Wide Angle (PBS Television) 2007 'Brazil in black and white' emisión del 4 de septiembre. En <http://www.pbs.org/wnet/wideangle/episodes/brazil-inblack-and-white/video-full-episode/2104/> Acceso noviembre de 2010.

Wiley, N. 1967 'America's unique class politics: The interplay of the labor, credit, and commodity markets' en *American Sociological Review*, *32*(4): 529-541.

Wolford, W. 2003 'Families, fields, and fighting for land: The spatial dynamics of contention in rural Brazil' en *Mobilization: An International Journal, 8*(2): 201-215.

Wolford, W. 2010 *This land is ours now: Social mobilizations and the meaning of land in Brazil* (Durham: Duke University Press).

Wright, T. 1985 'The politics of urban provisioning in Latin American history' en Super, J. y Wright, T. (eds.) *Food, politics, and society in Latin America* (Lincoln: University of Nebraska Press) pp. 24-45.

Wright, A. y Wolford, W. 2003 *To inherit the earth: The landless movement and the struggle for a new Brazil* (Oakland: Food First Books).

Yashar, D. 2005 *Contesting citizenship in Latin America: The rise of indigenous movements and the postliberal challenge* (Cambridge: Cambridge University Press).

Zamosc, L. 1994 'Agrarian protest and the Indian movement in the Ecuadorian Highlands' en *Latin American Research Review*, *29*(3): 37-68.

CÓMO CITAR ESTA PUBLICACIÓN:
Wickham-Crowley, Timothy P. and Susan Eva Eckstein. 2017. "Los movimientos sociales latinoamericanos y la ratificación del poder de las teorías estructurales" Pp. 49-82 en Paul Almeida y Allen Cordero Ulate, Eds., *Movimientos Sociales en América Latina: Perspectivas, Tendencias y Casos*. Buenos Aires: CLACSO.

4

David Ortiz*

REPRESIÓN ESTATAL Y MOVILIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA

INTRODUCCIÓN

Los estudios de sociología y ciencias políticas que revisitan la relación entre represión estatal y movilización son abundantes, la mayor parte de esta investigación explora los casos en el Norte Global, pero también hay una bibliografía vasta que analiza el rol de la represión y la movilización en América Latina (por ejemplo, Brockett, 1991, 2005; Eckstein, 2001; Almeida, 2003, 2008b; Carey, 2006; Trejo, 2012). La represión estatal hacia la movilización es una forma particular de control político en el que "el propósito del control es prevenir o disminuir los desafíos directos y no institucionales al poder social, cultural o político (es decir, protesta, activismo y movimientos sociales)" (Earl, 2011: 262). Por lo tanto, la represión estatal a las movilizaciones se puede manifestar en formas muy diversas, que van desde las formas no violentas y encubiertas a las violentas y hostiles (por ejemplo, hostigamiento, censura, detenciones, amenazas, violencia policial, desapariciones forzadas, masacres), pueden ser llevadas a cabo por diferentes actores (por ejemplo, fuerzas armadas, fuerzas policiales, escuadrones de la muerte), en diferentes niveles (nacional, estatal o provincial y local) y sus características pueden variar según el tipo de

* New Mexico State University, Las Cruces, EEUU.

régimen en el que se producen (por ejemplo, democrático, semidemocrático, autoritario) y/o el oponente en particular que el Estado está tratando de reprimir (es decir, a aquellos que representan una seria amenaza para el régimen o que pueden ser cooptados), entre otros.

Dada la infinidad de formas en que esta relación puede ser (y ha sido) explorada, utilizo la historia sociopolítica de la región para dividir este ensayo en dos períodos. La primera parte explora la época pre democratización (desde 1900 hasta fines de 1980), donde la mayoría de las movilizaciones fueron realizadas por movimientos sociales con el deseo de transformar los gobiernos autoritarios y extremadamente corporativistas en otros más flexibles, democráticos y representativos. Las movilizaciones que se produjeron de 1900 a fines de los años 20 fueron, principalmente, luchas para obtener derechos laborales y agrarios. Estos esfuerzos se estancaron entre los años 30 y 50 por los numerosos autoritarismos que surgieron en respuesta a los efectos de la Gran Depresión en la región, y los años 60 y 80 estuvieron marcados por las luchas contra las dictaduras de larga duración y los regímenes corporativos autoritarios enquistados. Las respuestas represivas del Estado a estos desafíos fueron altamente coercitivas, generalmente rápidas y a veces brutales, que llevaron a la radicalización de muchos movimientos, la aparición de guerrillas en varios países (Wickham-Crowley, 2001) y finalmente a una ola de transiciones a la democracia.

La segunda parte del capítulo explora la represión estatal y las movilizaciones durante el período pos autoritario (de los 90 a la actualidad). Dentro de este período, la mayoría de los Estados latinoamericanos completaron sus transiciones a democracias electorales, disminuyeron las formas más atroces y coercitivas de represión estatal, dando lugar a formas *menos severas* de represión (por ejemplo, fuerzas policiales más profesionalizadas, uso de armas no letales). Como resultado, comenzaron a abrirse oportunidades para las movilizaciones que derivaron en el rápido crecimiento de los movimientos de derechos sociales, los movimientos por la identidad (por ejemplo, Eckstein y Wickham-Crowley, 2003; Cleary, 2007; Stahler-Sholk et al., 2008) y los movimientos en respuesta a la globalización y las políticas neoliberales (por ejemplo, Johnston y Almeida, 2006; Petras y Veltmeyer, 2011).

REPRESIÓN Y MOVILIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA DURANTE EL PERÍODO AUTORITARIO

Como señala acertadamente Eckstein "la historia latinoamericana del siglo XX ha estado marcada por los cambios entre regímenes autoritarios y democráticos" (2001: 11). Sin embargo, en su mayoría estos

cambios se han producido entre el autoritarismo y las democracias de baja intensidad corporativistas y/o muy populistas (Gills, 2000). Esto creó una atmósfera donde la sociedad civil tuvo breves aperturas de oportunidad política (McAdam, 1982; Tarrow, 1998) para generar lazos y redes, formar y coordinar organizaciones civiles y organizar movilizaciones no violentas durante los períodos de democratización de baja intensidad. Por otra parte, esas mismas estructuras podrían ser utilizadas para repertorios más radicales y violentos de confrontación (Tilly, 1986) cuando los regímenes clausuraran las oportunidades al hacerse aún más autoritarios y represivos, como señala oportunamente Almeida (2003) al examinar el caso de El Salvador. Este patrón de movilización basada en la oportunidad política y movilización inducida por amenazas (Goldstone y Tilly, 2001) se produce en la mayoría de los países latinoamericanos durante el siglo XX, donde algunos Estados destruyeron de manera más eficiente que otros la capacidad organizativa de la disidencia durante los períodos autoritarios –principalmente, debido a la fuerza de su ejército y el control sobre su territorio (Goodwin, 2001; Ortiz, 2007, 2013).

NACIONES INCIPIENTES: MOVIMIENTOS SOCIALES Y REPRESIÓN ESTATAL DESPUÉS DE LA INDEPENDENCIA

Entre 1900 y 1920, América Latina era una región de naciones emergentes que habían obtenido su independencia de las principales potencias coloniales en el siglo anterior. Sus regímenes precarios estaban tratando de construir instituciones políticas y sociales para fortalecer a sus países y resguardarse de las políticas de intervención de los Estados Unidos y su expansionista Doctrina Monroe (Vanden y Prevost, 2009). La mayoría de las naciones todavía eran débiles, inestables o estaban en caos. Tenían instituciones sociopolíticas muy controvertidas en las que las élites políticas divididas estaban tratando de imponer su poder recién adquirido (Wiarda y Kline, 2007), y la mayoría aún operaban bajo sistemas de explotación económica creados por los legados de las estructuras coloniales (Rock, 1994; Thomas, 2012). Algunos países, como México (1876-1910) y Venezuela (1908-1935), establecieron dictaduras personalistas. Muchos, como Argentina, Chile, Bolivia, Colombia y Brasil, establecieron democracias oligárquicas de baja intensidad. Otros, incluyendo a Cuba, Honduras, Nicaragua, Haití y la República Dominicana, fueron ocupados por la Infantería de Marina de los Estados Unidos.

Al mismo tiempo, las luchas del floreciente movimiento obrero organizado en la última parte del siglo XIX, y la Revolución Rusa a principios del siglo XX, tuvieron un impacto tremendo en la organización y formación de los movimientos de trabajadores y campesinos

en América Latina. Este ambiente fomentó la disidencia popular en forma de protestas por cuestiones laborales y agrarias –fogueadas por tendencias anarquistas y socialistas, en algunos países– que, en general, culminaron con una fuerte represión estatal y una tendencia creciente de los Estados hacia el autoritarismo y el corporativismo (Thomas, 2012).

Por ejemplo, en el año 1907, en Argentina, la recién fundada Federación Obrera Regional Argentina (FORA) –un sindicato anarquista– lideró una huelga de inquilinos de 140 mil familias, en un quite de pago de protesta para oponerse a la falta de regulaciones de vivienda en vecindades o conventillos, en medio del incremento de los precios de alquiler y las terribles condiciones de vida en la ciudad de Buenos Aires (Godio, 2000). La respuesta de las autoridades argentinas fue enviar a la policía y los bomberos a desalojar violentamente a todas las familias de trabajadores que protestaban, mediante el uso de mangueras a presión con agua helada durante los meses de invierno, para dispersarlos (Godio, 2000: 147). Este patrón de represión continuó hasta 1909, cuando la FORA organizó una marcha conmemorando el Primero de Mayo que fue duramente reprimida por la policía montada de la ciudad de Buenos Aires, que disparó contra una multitud de más de 15 mil trabajadores reunidos en la Plaza Lorea, matando a una docena de obreros, hiriendo a otros 80 y arrestando a 16 dirigentes anarquistas en los días siguientes (Schiller, 2005). En respuesta, la FORA decidió llamar a una huelga general de trabajadores exigiendo la renuncia del jefe de policía; y contó con el apoyo del Partido Socialista (PS) y la Unión General de Trabajadores (UGT). En los días siguientes, la policía disparó contra el cortejo fúnebre de los caídos en la masacre del Primero de Mayo y clausuró locales y oficinas gremiales. Al final, la huelga se levantó cuando el Gobierno otorgó concesiones al liberar a los trabajadores y líderes sindicales detenidos y permitir la reapertura de los locales sindicales.

En México, en junio de 1906, más de 2 mil mineros de una empresa estadounidenses que operaba en Cananea, Sonora, exigió el mismo salario y trato que sus homólogos estadounidenses. La policía rural de Porfirio Díaz abrió fuego contra los huelguistas mexicanos, matando a 23 e hiriendo a otros tantos (Novelo, 1980; Cárdenas, 1998). Al tercer día de huelga, Díaz declaró la Ley Marcial, detuvo a todos los dirigentes sindicales y reabrió la empresa minera. El 7 de enero del año siguiente, en Veracruz, miles de trabajadores lanzaron piedras y se manifestaron desnudos frente a la fábrica de textil de Río Blanco. La policía montada y las milicias dispersaron a los trabajadores beligerantes que huyeron a las ciudades cercanas,

saqueando casas e interrumpiendo el servicio de tranvías (Gamboa, 1991). La respuesta de las fuerzas militares fue abrir fuego contra los trabajadores y sus familias, matando alrededor de 500 trabajadores y arrestando a más de 200 (García Díaz, 2007). Las huelgas laborales de Cananea y Río Blanco trascendieron las demandas de los trabajadores al resaltar el carácter represivo de la dictadura de Porfirio Díaz, y se las consideran como parte de los movimientos precursores de la Revolución Mexicana. El papel de los trabajadores en la revolución posterior continuó con la creación de la Casa del Obrero Mundial (COM) en 1912, una congregación socialista de trabajadores que apoyaron a la facción revolucionaria de Carranza a cambio de derechos sociales y económicos para los trabajadores (Carr, 1976; Bizberg y Zapata, 2010). Esto marcaría el inicio de un sistema de representación corporativa basado en relaciones clientelares.

Esta ola de protestas obreras y campesinas en América Latina se intensificó entre 1917 y 1920. Las respuestas estatales fueron muy violentas y represivas, incluyendo el uso de fuerzas policiales y militares, de escuadrones paramilitares, de leyes que restringían la organización laboral y la suspensión de las libertades civiles en la mayoría de los países, como Argentina (Adelman, 1993), Bolivia (Klein, 1969), Brasil (Wolfe, 1991), Chile (Albert, 1988), Colombia (Valencia, 1984), Ecuador (Ycaza, 1991), Honduras (Meza, 1985), Paraguay (Alexander, 1965), Perú (Collier y Collier, 1991) y Uruguay (Sala de Touron y Landinelli, 1984).

LOS EFECTOS DE LA GRAN DEPRESIÓN SOBRE EL MOVIMIENTO Y LOS ESTADOS EN AMÉRICA LATINA

Hacia fines del 20, los políticos reformistas –ayudados por el temor generalizado al comunismo entre las élites económicas– comenzaron a impulsar prácticas más democráticas y liberales, y a incorporar grupos marginados a través de políticas de intervención del Estado en la mayoría de los países latinoamericanos (Calvert y Calvert, 1990; Korzeniewitz, 2000). Pero esta mayor incorporación política y liberalización duró poco, y el inicio de la Gran Depresión socavaría tanto la relativa prosperidad económica como la apertura política que la mayoría de los regímenes estaban experimentando (Halperín Donghi, 1993). Por ejemplo, Almeida (2008a) señala cómo, hacia finales de los años 20, El Salvador entró en un período de creciente liberalización política que condujo a la formación de sindicatos laborales y campesinos semiautónomos bajo la anuencia de Estado. Sin embargo, en 1930, los efectos de la Gran Depresión en los precios del café llevaron a una disminución significativa en los salarios que causó protestas no violentas en varias partes del país. El gobierno ci-

vil respondió con una serie de estrategias represivas, como arrestos, violencia policial y leyes limitaban los derechos de reunión pública (Almeida, 2008a). A finales de 1931, después de un golpe de Estado triunfante y la llegada de una nueva dictadura militar, aumentó el nivel de represión violenta y persecución, obligando a los movimientos laborales y campesinos a radicalizarse y operar en la clandestinidad. El autoritarismo de Estado se incrementó al mismo ritmo que se radicalizaban los movimientos laborales y campesinos, que llevó a un levantamiento insurgente masivo en 1932 y culminó en una masacre de decenas de miles de personas. Esta masacre marcó el comienzo de un nuevo período de gobierno autoritario altamente represivo en El Salvador (Almeida, 2003, 2008a).

Entre los años 30 y 50, la mayoría de los países de América Latina experimentó cambios similares entre autoritarismos en forma de dictadura y aperturas políticas en forma de democracias de baja intensidad. En su mayoría las dictaduras fueron breves por naturaleza, con respaldo militar a determinadas reformas oligárquicas o populistas, la instalación de nuevos gobiernos civiles para apoyar esos cambios y, luego, salir del gobierno (Blake, 2005). A mediados de los años 30, las dictaduras militares represivas habían ido y venido en Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, Honduras, Perú y Uruguay; pero las de Brasil, República Dominicana, El Salvador y Nicaragua fueron más estables. Además, en los 50 la mayoría de los países de América Latina había optado por un sistema económico de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), al cerrar sus mercados a las inversiones extranjeras para desarrollar economías industriales nacionales fuertes (Blake, 2005; Zapata, 2010).

La mayoría de las dictaduras centroamericanas y caribeñas fueron brutalmente represivas y lograron frenar la mayoría de las formas de protesta abierta, dejando a los movimientos sociales oportunidades políticas muy limitadas y obligando a la mayoría de la oposición a permanecer oculta y organizarse de forma encubierta (Bulmer-Thomas, 1987). Por ejemplo, las políticas represivas fueron características del régimen de Ubico (1931-1944) en Guatemala, que regularmente torturó y asesinó a opositores políticos y firmó varias leyes que aprobaban las ejecuciones de trabajadores realizadas por terratenientes como una medida "disciplinaria" (Grieb, 1979). En Honduras, el gobierno de Tiburcio Carías Andino (1932-1949) restringió las libertades civiles, creó la policía secreta y comenzó una campaña de censura y represión contra toda oposición (Meza, 1985; Dodd, 2005). Asimismo, en Nicaragua, Anastasio Somoza asesinó a Augusto Sandino y a 300 de sus seguidores en Wiwili, utilizó la Guardia Nacional como una red de espionaje que persiguió y asesinó a

todos los activistas del movimiento social popular que se opusieron a su poder político (Walter, 1993).

En contraste, algunas dictaduras del Cono Sur –aunque seguían siendo represivas– fueron más permisivas hacia la organización social de los trabajadores y campesinos. Esto se tradujo en más oportunidades para la movilización y en patrones de represión y acuerdos que, algunas veces, llevaron a la caída de los regímenes dictatoriales. En Uruguay, por ejemplo, la breve dictadura del General Terra (1933-1938) no pudo reprimir eficazmente una serie de huelgas generales organizadas por el movimiento laboral; esto generó la presión suficiente para hacer que convocara a elecciones, que dieron como resultado un gobierno más liberal que duró hasta los años 50 (Korzeniewitz, 2000). A finales del 30, con el apoyo de los partidos políticos de izquierda en el Congreso, los trabajadores bolivianos ganaron el derecho a la negociación colectiva. En 1942, durante el gobierno en extremo represivo de Enrique Peñaranda, los dos grandes sindicatos mineros convocaron una huelga exigiendo aumentos salariales. En lugar de negociar con los trabajadores, el Gobierno de Peñaranda arrestó a los dirigentes sindicales y mató a siete mineros. Cuando la huelga recrudeció, Peñaranda ordenó al Ejército boliviano abrir fuego sobre la multitud de 7 mil manifestantes, matando a más de 400 (Klein, 1971). Esto llevó directamente a un golpe de Estado y a la caída del régimen de Peñaranda en 1943.

En Argentina, una dictadura militar dio paso a una serie de gobiernos conservadores democráticos de baja intensidad y fraudulentos, que originaron la gran crisis agraria en los años 30. Esto produjo a un desplazamiento interno masivo de inmigrantes rurales pobres y desposeídos a las zonas urbanas (Di Tella, 1990; Rossi, 2013a) y otro golpe militar en 1943. Juan Perón, durante la dictadura, se convirtió en Ministro de Guerra y Ministro de Bienestar Social y fue muy popular entre los trabajadores. Cuando otros miembros de la Junta Militar lo depusieron y encarcelaron, una protesta masiva de trabajadores agremiados y nuevos inmigrantes obligó a su liberación. Se postuló para la Presidencia en 1946, después de hacer alianzas con los dirigentes sindicales y otras minorías sub representadas (Di Tella, 1990). Perón incorporó a la mayoría de los sindicatos, los nuevos inmigrantes y otros sectores populares en una coalición política que, efectivamente, logró movilizar a su favor (Rossi, 2013a).

El caso de México fue *sui generis*, ya que el Partido Revolucionario Institucional (PRI)[1] rigió como el partido gobernante *de facto*

1 El PRI atravesó muchas reorganizaciones compositivas y redefiniciones políticas –fogueadas por las divisiones dentro de las élites políticas del partido– en las que

durante más de 70 años (Krauze, 1997). Aunque no llegó a ser una dictadura, el régimen de México fue muy autoritario y corporativista con una fachada de política electoral democrática. Aún así, el PRI tuvo mucho éxito al incorporar las demandas laborales y campesinas en organizaciones creadas y controladas por el Estado, para luego movilizar electoralmente esos grupos y organizaciones en apoyo del Partido (Collier y Collier, 1991; Favela, 2010; Zapata, 2010). Institucionalizaron los derechos de los trabajadores nacionales en la Ley Federal del Trabajo y crearon la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) y la Confederación Nacional Campesina (CNC), dos asociaciones nacionales que incorporaron a la mayoría de las organizaciones sindicales y agrarias locales y regionales para unificarlas, y que fueron las mediadoras oficiales entre los intereses de los trabajadores y los campesinos y el Estado. A las organizaciones populares que no quisieran vincularse al Partido se les permitiría existir de forma autónoma, pero también se verían obligadas a sobrevivir sin ningún tipo de apoyo a sus demandas (Hellman, 1988). No obstante, hubo numerosas organizaciones que expresaron regularmente sus demandas de manera pacífica a través de tácticas de movilización clásica tales como manifestaciones, marchas y ocupaciones de espacios públicos durante este período (Hellman, 2008). El PRI fue muy tolerante con este tipo de movilización social durante este tiempo, y varias organizaciones sindicales no afiliadas (por ejemplo, ferroviarios, petroleros y mineros) articularon campañas de protestas significativas durante el período 1938-1948, que culminaron dado que el Estado cedió a sus demandas.

AUTORITARISMO BUROCRÁTICO MILITAR, RADICALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO Y DEMOCRATIZACIÓN

En los años 60, los rápidos procesos de urbanización e industrialización del modelo ISI comenzaron a mostrar graves tensiones económicas y políticas en los países latinoamericanos. A nivel nacional, los países latinoamericanos acumularon grandes deudas para financiar los proyectos de industrialización, pero no pudieron realizar las reformas sociales prometidas. A nivel internacional, la Guerra Fría y la Revolución Cubana también tuvieron dos consecuencias importantes para la región. En primer lugar, el aumento del intervencionismo mi-

---

se le modificó el nombre. Cuando fue fundado en 1929 por el Presidente Plutarco Elías Calles, el nombre del partido era Partido Nacional de la Revolución (PNR). En 1936, el Presidente Lázaro Cárdenas cambió el nombre del partido a Partido de la Revolución Mexicana (PRM), y en 1946, el Presidente Manuel Ávila Camacho dio al partido su nombre actual.

litar de los Estados Unidos para evitar un "giro al socialismo" (Wiarda y Kline, 2007). En segundo lugar, un régimen socialista triunfante en la región alentó las aspiraciones políticas de la izquierda y sus políticas redistributivas, que también fueron impulsadas por el crecimiento de nuevas alternativas en Europa occidental y el mundo comunista (Collier, 2001).

La combinación de estos factores sirvió para polarizar aún más a los países latinoamericanos, en los 60 y 70. Una ola creciente de movilización política y protestas alimentó los miedos conservadores y generó aprensión hacia las prácticas democráticas a favor giros perentorios hacia autoritarismos de derechas. Hacia fines de los 60, la mayoría de los países latinoamericanos tenían dictaduras militares o regímenes civiles muy autoritarios –a menudo, respaldados o avalados por las agencias de inteligencia, los militares o el gobierno de los Estados Unidos. Solo Venezuela y Costa Rica tuvieron democracias estables (Wiarda y Kline, 2007), y Colombia, aunque democrática, sufrió un conflicto prolongado, asimétrico y de baja intensidad. Esta ola de dictaduras fue diferente de aquellas de la primera parte del siglo XX. En lugar de regímenes personalistas de corto plazo, los militares tomaron el poder por un período prolongado de tiempo (Blake, 2005). Se impusieron autoritarismos burocrático-militares (especialmente en América del Sur) como una manera de generar orden sociopolítico y fomentar el desarrollo económico (O'Donnell, 1975, 1982). Según Collier (2001), la mayoría de estos regímenes tenía la clara intención de promover el crecimiento económico posponiendo las políticas de redistribución y tratando de controlar o destruir a los grupos políticos de izquierdas, campesinos y movimientos laborales.

Aunque el nivel de violencia propiciado por el Estado varió de un país a otro, las acciones represivas más corrientes incluyeron menoscabos continuos a las libertades civiles, violaciones rampantes a los derechos humanos, deportaciones o exilios obligatorios, arrestos injustificados, detenciones sin juicio, torturas, desapariciones forzadas, asesinatos y masacres –todos perpetrados por las fuerzas militarizadas (por ejemplo, Wood, 2003; Pereira, 2005). Con el tiempo, estos esfuerzos brutales para eliminar las asociaciones civiles y la movilización a menudo llevaron a los movimientos sociales, los grupos disidentes y sus miembros a radicalizarse o unirse a organizaciones insurgentes, fomentando la aparición de guerrillas urbanas y rurales con tácticas violentas en varios países (por ejemplo, Almeida, 2003, 2008a; Pereira, 2005; Brockett, 2005). Esto también afectó a los repertorios contestatarios de los movimientos. Tácticas como la guerra de guerrillas, ocupaciones de edificios públicos, tomas de pueblos de provincias, secuestros de renombrados miembros de la élite, ataques

armados y atentados se incrementaron con la creciente radicalización de los movimientos de oposición (por ejemplo, Salazar, 2006). Los militares, a su vez, usaron la amenaza de las guerrillas como justificación para el incremento de sus prácticas represivas violentas y las violaciones de los derechos civiles (Blake, 2005), causando la destrucción o la escalada de la reacción hostil de las guerrillas y otros grupos disidentes (Martin, 2007; Ortiz, 2007, 2013).

Un gran número de estudios comparativos y de caso detalla las atrocidades cometidas durante este tiempo en América Latina por los regímenes dictatoriales y las respuestas de los grupos radicales y guerrilleros (por ejemplo, Wright, 2007; Sikkink, 2008; Hayner, 2010; Stern, 2010; De Gregori, 2012). En El Salvador (Viterna, 2006, 2013; Wood, 2003; Almeida, 2008a) y Guatemala (Brockett, 1991, 2005; Brett, 2008; Rothenberg, 2012), la escalada *quid pro quo* de la violencia entre el ejército y la guerrilla –el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)– se extendió hasta principios de los años 90. Cientos de miles fueron asesinados y muchos miles están desaparecidos. Del mismo modo, los efectos del régimen brutalmente represivo de Somoza, que provocaron la radicalización de una gran variedad de asociaciones civiles y grupos del movimiento social en Nicaragua, llevó a la formación y el crecimiento del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que empleó sus tácticas contenciosas y violentas (Molyneux, 1985; Wickham-Crowley, 1992; Spalding, 1994) para expulsar al clan Somoza del poder.

En países del Cono Sur, como Chile, el ejército suspendió la Constitución, encarceló a casi 40 mil personas sin juicio previo en un estadio que sirvió como centro de detención, torturó decenas de miles en Villa Grimaldi y otros campos de concentración, ejecutó casi 2.500 y desapareció a más de 1.300 activistas políticos, estudiantes y trabajadores, entre otros, considerados "subversivos" (Gómez-Barris, 2010). La brutal represión acabó con la mayoría de las formas de protesta, aunque siguieron algunas protestas simbólicas, como la danza *La Cueca Sola* en el que las viudas de los desaparecidos bailan solas (García de Castro, 2002). Por otra parte, hubo un crecimiento de grupos urbanos radicalizados como *los pobladores* (Salman, 1994; Garcés, 2002), y grupos de guerrilla urbana como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) que bombardearon edificios, secuestraron y mataron a oficiales del ejército e, incluso, realizaron un fallido intento de asesinato a Pinochet (Salazar, 2006). Del mismo modo, la "guerra sucia" perpetuada por los militares argentinos y sus escuadrones de la muerte implicó la desaparición, asesinato, tortura y detención ilegal

de decenas de miles de civiles y disidentes (CONADEP, 1984; Novaro y Palermo, 2003). La represión del Estado argentino fue desafiada por la inquebrantable movilización de grupos no violentos, como las Madres de Plaza de Mayo (Álvarez, 1990; Navarro, 2001; Borland, 2006), y por el crecimiento de guerrillas radicales urbanas y rurales, como los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) (Gillespie, 1982; Lewis, 2001), cuyo repertorio violento incluyó ataques armados, atentados civiles y no gubernamentales y secuestros de civiles y políticos prominentes (Novaro y Palermo, 2003).

En Brasil, a pesar de que la represión violenta no estuvo tan extendida como en Chile y Argentina, hubo un patrón similar de desprecio a las libertades civiles, incluyendo encarcelamientos masivos, torturas y tribunales militares que realizaron ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas. Inicialmente, los estudiantes orquestaron manifestaciones masivas contra el nuevo régimen, pero el ejército suspendió los *habeas corpus*, declaró el Estado de sitio y reprimió violentamente a los estudiantes (Skidmore, 1990; Pereira, 2005; Codato, 2006). Varias facciones del movimiento anticastrense se radicalizaron y formaron movimientos de guerrilla urbana como la Ação Libertadora Nacional (ALN) y el Movimento Revolucionário 8 de Outubro (M8), que recurrieron a tácticas contestatarias y violentas. Pero el régimen se hizo más brutal en su represión a la guerrilla que, eventualmente, mermó (Rose, 2005). A mediados de los 70, un grupo militar más moderado ascendió al poder y se inició un proceso de apertura gradual, que restauró las libertades civiles y paulatinamente avanzó hacia la democratización. Esto propició una cantidad sin precedentes de organizaciones no violentas de movimientos sociales contra los militares, que llevaron a la campaña de movilización masiva de la sociedad civil, *diretas já*, que se extendió durante varios años y en muchos lugares, y que culminó con la elección del primer presidente civil en 1985 (Mainwaring y Viola, 1984; Hochstetler, 2000). A mediados de los 80, el legado brutal de casi dos décadas de regímenes militares violentos había creado un descontento generalizado por las violaciones de los derechos humanos en América Latina. Además, el empeoramiento de las condiciones económicas debido al fracaso del modelo ISI en una economía mundial cada vez más interdependiente y el crecimiento de la élite y las divisiones militares (Blake, 2005) crearían las condiciones para el desmantelamiento de los regímenes militares en la mayoría de los países. Internacionalmente, el debilitamiento económico de la URSS, la inminente caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría causarían que los Estados Unidos aplacara sus políticas intervencionistas a favor de los regímenes militares "estables" en América Latina (Vanden y Prevost, 2009). La combinación

de estos factores significó que la mayor parte de América Latina experimentaría un período de transición a la democracia, conocida como la tercera ola de democratización (Hagopian y Mainwaring, 2005).

REPRESIÓN Y MOVILIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA DESPUÉS DE LAS TRANSICIONES A LA DEMOCRACIA

No hay duda de que los movimientos sociales desempeñaron un papel en la ola de transiciones a la democracia que se produjo en América Latina entre 1978 y 1992. Como en el caso de Brasil, el rol que desempeñaron las organizaciones de movimientos sociales durante las transiciones democráticas en otros países de América Latina sería crucial para derrocar a los regímenes militares y regresar a la democracia. Los movimientos sociales, o bien forzaron la salida de los militares a través de una combinación de grupos guerrilleros y de la sociedad civil, como en el caso de el Salvador, Guatemala, Nicaragua, y Honduras (Wood, 2003; Booth et al., 2006; Johnston y Almeida, 2006; Brett, 2008), o bien presionaron a los regímenes militares para lograr una apertura a través de una coalición de trabajadores, la Iglesia, estudiantes y otras organizaciones de la sociedad civil (Mainwaring, 1986; Foweraker y Landman, 1997; Collier, 1999). Mientras que la mayoría de los países de América Latina ya había realizado la transición a la democracia a finales de 90, el caso mexicano fue diferente. El país no pasó por una dictadura pero mantuvo su régimen autoritario, denominado *dictablanda*, hasta el final del siglo XX. A mediados de los 60, había signos claros de que el régimen extremadamente autoritario y corporativista del PRI no era tan representativo e inclusivo como lo fue entre finales del 30 y los 40. Una serie de movilizaciones que comenzaron con la protesta estudiantil y la masacre de 1968, seguidas por las protestas de los afectados por el terremoto en 1985, las movilizaciones por la reforma electoral tras el fraude en las elecciones de 1988, la rebelión Zapatista y los movimientos del Barzón en 1994, llevaron a la liberalización política gradual y a una apertura a la democracia –retrasada, pero pacífica– en el año 2000 que culminó con la elección del Presidente Vicente Fox del Partido Acción Nacional (PAN), el primer presidente en la historia del país que no era del PRI.

A medida que avanzaban los proyectos de democratización nacional durante los 80, empeoraban las crisis económicas en América Latina. Altamente endeudados por los gastos colosales requeridos para construir capacidades industriales –demandados por el proyecto ISI– y frente a una recesión global, impulsada por la caída drástica de los precios del petróleo, México y otros países de la región se declararon incapaces de pagar sus deudas externas (Pastor, 1989; Blake, 2005). Para resolver esta situación, los bancos nacionales tuvieron

que reestructurar sus deudas a través de la adquisición de nuevos préstamos de instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Los préstamos condicionaron a los gobiernos a promulgar una serie de reformas neoliberales, como recortar el gasto público en vivienda, servicios de salud, educación y cuentas de jubilación (Garuda, 2000; Przeworski y Vreeland, 2000); prescribir aumentos en los niveles impositivos, reducir salarios y restringir el crédito (Crisp y Kelly, 1999); y a privatizar las industrias nacionales como las de servicios médicos, producción de petróleo, energía eléctrica y telecomunicaciones (Brown, 2009).

Como resultado, la mayoría de los movimientos sociales del siglo XXI en la región surgieron de la combinación de la apertura de oportunidades políticas impulsadas por el proceso de democratización y la oposición a la reducción de derechos sociales y económicos impulsados por la aplicación de los programas neoliberales y las políticas de ajuste estructural. Los nuevos regímenes de transición fueron mucho más permisivos a la existencia de movimientos sociales y organizaciones cívicas, lo que significó que los reclamos relacionados con la amenaza de represión no fueron tan sobresalientes, y además, el deseo imperativo de oponerse a los militares dejó de ser la fuerza asociativa central tal como lo fue bajo los regímenes autoritarios. Al mismo tiempo, los derechos sociales y económicos que se establecieron en las décadas anteriores se fueron erosionando rápidamente por la privatización de bienes públicos y por las políticas económicas que enfatizaban en recortar puestos de trabajo, en aumentar los impuestos y en la rápida apertura de las industrias previamente protegidas, que llevó al aumento de la pobreza y la desigualdad de ingresos (Cleary, 2007; Brown, 2009).

La combinación de estas dos tendencias condujo a la disminución del apoyo a los movimientos guerrilleros y fomentó el rápido crecimiento y la diversificación de los movimientos sociales con un espectro mucho más amplio de reclamos que en la década anterior. Estos nuevos movimientos se manifestaron por cuestiones como las reformas antineoliberales, el medioambiente, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, la discriminación étnica y racial, los derechos LGBT, los derechos de los indígenas, entre otros (Eckstein y Álvarez, 1992; Álvarez et al., 1998; Almeida y Johnston, 2006). Por consiguiente, los repertorios contestatarios de los movimientos durante este período también fueron cada vez menos radicales. Tácticas como secuestros de miembros de la élite de alto perfil, ataques armados y atentados fueron utilizados con menos frecuencia, mientras que aumentó el apoyo a las marchas, cortes de rutas, huelgas, manifestaciones, ocupaciones de espacios públicos y sentadas pacíficas –aunque

aún disruptivas. Los gobiernos, a su vez, se abstuvieron del uso habitual de las fuerzas armadas para controlar las protestas, reemplazándolas por unidades policiales antidisturbios altamente especializadas y profesionalizadas, que fueron organizadas, desplegadas, entrenadas y armadas específicamente para enfrentar y controlar a las multitudes. Como resultado, las violaciones de los derechos civiles y las prácticas coercitivas violentas, tales como las desapariciones forzadas, las torturas y las detenciones ilegales masivos disminuyeron considerablemente. Aún así, los abusos de la policía, tales como disparos, golpizas, uso de gas lacrimógeno, balas de goma y otros atropellos a los derechos humanos siguen siendo comunes (por ejemplo, Cleary, 2007). Del mismo modo, aparecieron algunos repertorios de contención violentos, como el uso de bombas Molotov, vandalismo de la propiedad pública, tomas de edificios y lanzamiento de piedras. Incluso, los movimientos guerrilleros clásicos –como, por ejemplo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Ejército Popular Revolucionario (EPR) en México– surgieron durante este período, pero esto no fue tan frecuente como en los años 60 y 70.

DEMOCRATIZACIÓN Y NEOLIBERALISMO: REACCIÓN CONTRA LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD

Dadas las circunstancias descritas anteriormente, muchas de las protestas durante este período estuvieron directa o indirectamente vinculadas con la participación y la implementación de los programas económicos del FMI y el Banco Mundial y con las políticas de austeridad promovidas por estas organizaciones (Auyero, 2001; Almeida, 2008b; Rossi, 2013b; Silva, 2009; Arce, 2010). Los ciudadanos participaron en movilizaciones contra los organismos internacionales (Almeida, 2007; Silva, 2009) y protestaron contra la pérdida de legitimidad de sus gobiernos nacionales (Auyero, 2004; Ortiz y Béjar, 2013). Con casi 300 acciones contestatarias ocurridas en la región entre 1995 y 2001, las campañas de protesta antineoliberales han formado una ola de movilización constante que comenzó en los 90 y continúa hasta ahora (Almeida, 2007, 2010).

Por ejemplo en Buenos Aires, Argentina, el 19 y 20 de diciembre de 2001, miles de personas salieron a las calles golpeando cacerolas (denominados *cacerolazos*) y gritando "Que se vayan todos" en protesta contra la decisión del gobierno de limitar la cantidad de dinero por semana que la gente podía retirar de sus cuentas bancarias, para evitar un mayor desfinanciamiento del sistema bancario. Esta fue la última de una serie de medidas neoliberales adoptadas por el Gobierno argentino, después de la firma de un acuerdo con el FMI. Las protestas masivas y violentas resultantes incluyeron pintadas en

las fachadas, roturas de vidrios, irrupción y ocupación de los bancos por la fuerza, aún después de promulgado el Estado de sitio. Estas protestas fueron el pico de un ciclo de contención que incluyó muchos cortes de rutas por parte de trabajadores desocupados (piqueteros), protestas, saqueos y disturbios que ocasionaron la renuncia del Presidente Fernando de la Rúa y continuaron hasta el año 2003 (Auyero, 2001; Rossi, 2013c; Alcañiz y Scheier, 2008; Villalón, 2008; Silva, 2009).

En un caso similar, los manifestantes bolivianos realizaron protestas masivas, cortes de rutas y una huelga general exigiendo la renuncia del presidente Hugo Banzer durante las dos semanas que siguieron al intento del gobierno de vender el sistema público de agua potable de Cochabamba a la multinacional Aguas del Tunari, en lo que hoy se conoce como la guerra del agua (Arce y Rice, 2009). El gobierno boliviano envió a la policía antidisturbios que utilizó gases lacrimógenos y balas de goma para detener a los manifestantes, quienes entonces respondieron tirando piedras y bombas Molotov. La violencia se intensificó cuando el presidente declaró el Estado de sitio y recurrió al ejército para hacerlo cumplir. En abril de 2000, después de un par de meses de enfrentamientos, los soldados eliminaron la mayoría de las barricadas pero mataron a un adolescente en el proceso. Esto radicalizó las protestas y reunió a más de 100 mil manifestantes furiosos en las calles, donde sobrepasaron a los soldados y utilizaron sus armas contra ellos. El gobierno decidió rápidamente revertir los planes para privatizar el sistema público de agua (Olivera y Lewis, 2004; Spronk y Webber, 2008).

Ecuador también experimentó protestas masivas en el año 2001 como respuesta a las medidas de austeridad, los planes para la privatización de la electricidad y los sectores de telecomunicaciones y el otorgamiento de una concesión de 30 años a una empresa extranjera para el suministro de agua potable y saneamiento a la ciudad de Guayaquil. El 21 y 22 de enero, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) –las dos organizaciones indígenas y campesinas más grandes del país– junto a coaliciones de trabajadores y estudiantes, coordinaron campañas de movilización nacional que consistieron en marchas y cortes de rutas en todo el país, así como la toma de un par de estaciones de radio y televisión en la zona de Chimborazo. El gobierno respondió imponiendo el Estado de emergencia nacional, limitando las reuniones públicas y viajes en todo el país y desplegando el ejército y la policía para arrestar a líderes de la protesta. Aún así, miles de trabajadores indígenas y campesinos marcharon a Quito el 7 de febrero, obligando

al Presidente Noboa a reunirse con ellos y a suspender la implementación de las medidas de austeridad (Perrault y Valdivia, 2010).

En América Latina ocurrieron muchos casos similares de campañas de movilización contra el neoliberalismo durante las dos primeras décadas del siglo, que se han explorado ampliamente y publicado en la literatura académica. Algunos de los ejemplos más destacados son: la segunda guerra del agua de 2005 (en El Alto) y las guerras del gas a nivel nacional de 2003 y 2005 en Bolivia, que llevaron a la renuncia del Presidente Mesa (Arce y Rice, 2009; Spronk y Webber, 2008); las huelgas masivas contra la privatización y por la asistencia sanitaria en El Salvador de 1999 a 2000 y de 2002 a 2003 (Almeida, 2008a); los numerosos cortes de ruta del movimiento piquetero en Argentina desde 1997 hasta la actualidad (Auyero, 2003; Merklen, 2005; Rossi, 2013c); las persistentes campañas para la ocupación de tierras del Movimento Sem Terra (MST) de Brasil desde principios de los 90 (Wright y Wolford, 2003; Fernandes, 2005; Navarro, 2007; Hammond, 2009; Ondetti, 2011); y la revolución de los pingüinos de Chile en 2006 y los movimientos de estudiantes universitarios contra la privatización de la educación en 2009 y de 2011 a 2013 (Salinas y Fraser, 2012; Donoso, 2013; Stromquist y Sanyal, 2013; Von Bülow y Bidegain Ponte, en este volumen).

DE LOS DERECHOS, LA RESPONSABILIDAD Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA DEMOCRACIA

Aunque los movimientos sociales contra las políticas de austeridad fueron los que más prevalecieron en la región durante la primera parte del siglo XXI, también aumentó la cantidad de movimientos que promueven los derechos sociales y las cuestiones sobre la identidad. Los movimientos por los derechos sociales y la identidad –por ejemplo, los movimientos indígenas, los movimientos por el derecho a la tierra, los movimientos ambientales, los movimientos LGBT, los movimientos de mujeres– proporcionan las formas para que los diversos grupos articulen las demandas y lleven a cabo los esfuerzos, y así, corregir las violaciones que durante mucho tiempo habían sido subsumidas por las luchas más urgentes para derrocar a los regímenes autoritarios (Eckstein y Wickham-Crowley, 2003). Muchos de estos movimientos intentan redefinir la ciudadanía y la identidad en construcciones colectivas, que son más significativas, incluyentes y representativas de los grupos desfavorecidos (Álvarez et al., 1998; Stahler-Sholk et al., 2008), desafiando la representatividad y la responsabilidad de sus propios sistemas políticos (MacKinnon y Feoli, 2013). Algunos de estos movimientos buscan incidir el sistema de gobierno de manera tradicional mediante el uso de las instituciones

políticas *in situ*, mientras que otros buscan la autonomía del Estado y favorecen un proceso más horizontal y participativo en la toma de decisiones (Sitrin, 2012).

Los movimientos indígenas en Bolivia, por ejemplo, realizaron esfuerzos significativos para aumentar su participación e inclusión en los procesos de toma de decisiones a través de la transformación de las instituciones políticas existentes de la democracia (Postero, 2011). Las organizaciones de los agricultores de coca, como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), hicieron una alianza con la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIODB) para formar una coalición indígena-campesina que se movilizó por los derechos de los indígenas en La Paz en 1992. En 1995, esta coalición indígena-campesina decidió formar el Partido Movimiento al Socialismo (MAS), con Evo Morales como su líder. La presión internacional para privatizar bienes públicos como el agua y los ataques contra los agricultores de coca "ilegal" en la región llevó a una cantidad de acciones colectivas sorprendentes en las regiones de Cochabamba y el Chapare, entre 2000 y 2003 (Lucero, 2013). Además de marchas y bloqueos de las carreteras principales, los agricultores de coca en la región de Chapare utilizaron tácticas más agresivas como invadir y ocupar puestos militares (Zibechi, 2010; Barndt, 2012). Las respuestas del ejército y la policía a estas tácticas causaron enfrentamientos violentos frecuentes por la eliminación de los cortes de ruta, seguidos del arresto y encarcelamiento de los manifestantes. Dadas estas circunstancias, el MAS obtuvo el apoyo de la izquierda urbana y, en las elecciones de 2005, Morales fue elegido Presidente de Bolivia (Do Alto, 2010). Con el control de la Presidencia, el Senado y la Cámara de Diputados, el MAS puso en marcha un proyecto de redefinición y reconstrucción nacional (Albro, 2005, 2013) en el que se reformó la Constitución para crear un "Estado multinacional y pluricultural basado en las autonomías de los pueblos indígenas" (Komadina y Geffroy, 2007: 119; Silva, en este volumen).

Al mismo tiempo, otros movimientos se basaron en la autonomía del Estado, la participación horizontal y las tácticas performativas contestatarias innovadoras. Por ejemplo, después de 11 años de lucha, los cambios de un movimiento guerrillero a un movimiento no violento de derechos indígenas y un acuerdo con el gobierno (es decir, los Acuerdos de San Andrés), de hecho, fracasaron, y no se tradujeron en una mayor autonomía constitucional para los grupos indígenas en México (Trejo, 2012; Inclán, en este volumen), el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) lanzó La Otra Campaña en 2005. La campaña marcó un alejamiento de los esfuerzos zapatistas

anteriores para lograr sus objetivos en el marco de la política institucional. En cambio, rearticularon sus objetivos para avanzar su agenda mediante la disolución de la mayoría de las relaciones de poder con las instituciones gubernamentales y de la política institucional (Muñoz Ramírez, 2003; Mora, 2008). Crearon los Municipios Autónomos Indígenas y las Juntas del Buen Gobierno para gobernar a todos las municipalidades, agrupadas en cinco conglomerados regionales denominados Caracoles. Los cargos en los consejos son rotativos y por tiempo limitado, de modo que cada miembro aprende a desempeñar cada función y todos los miembros de los municipios, en algún momento, pueden ser parte de los consejos.

Como señaló Mora (2008: 157), los consejos "coordinan las actividades con las comisiones de salud, educación y agrícolas, creadas para proporcionar al EZLN las bases con de los programas sociales alternativos a los del Estado mexicano". En la práctica, todos los municipios comparten y se ayudan unos a otros para ofrecer programas de educación y materiales, servicios de atención médica y medicinas, capacitación agrícola y productos y otros servicios. Se trata de un sistema de autogobierno complejo y multifacético, que conlleva autonomía de la burocracia política local y estatal a las comunidades zapatistas. Desafortunadamente, esto hace que el EZLN sea vulnerable a la agresión del Estado. Los informes de los abusos policiales, el encarcelamiento injustificado de miembros de la comunidad, cateos ilegales, allanamientos y decomisos de tierras aumentaron su frecuencia durante la administración Calderón so pretexto de la guerra contra las drogas (Earle y Simonelli, 2011).

De manera similar, en la última década muchos otros movimientos sociales en la región se han inclinado por los procesos de organización horizontales, la autonomía de las instituciones políticas del Estado y el uso de tácticas contestatarias innovadoras para impulsar sus objetivos. Algunos de los ejemplos más destacados incluyen: el movimiento de asambleas (Almeyra, 2004; Rossi, 2005; Villalón, 2008) con sus tácticas de asamblea pública y su revisión de la democracia delegativa en la Argentina; el Frente de Esculacho Popular (FEP) en Brasil e H.I.J.O.S. en Argentina, con sus protestas de deshonra pública (*esculachos* o escraches) a los ex militares dictadores y torturadores (Villalón, 2008; Sitrin, 2012); y el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas con su táctica de ocupar las fábricas abandonadas y reabrirlas mediante la autogestión (Alcañiz y Scheier, 2008; Almeyra, 2004; Sitrin, 2012). La mayoría de estos movimientos tiene objetivos específicos, pero también intentan redefinir las relaciones sociales con las instituciones del Estado al empoderar a sus miembros para que participen activamente en los procesos de toma

de decisiones políticas mediante el uso de tácticas contestatarias innovadoras, el rechazo de las formas clásicas de la política institucional jerárquica, la redefinición de la participación política en formas menos institucionalizadas y el intento de transformar la democracia institucional para dar lugar a modelos de participación política más horizontales e incluyentes.

CONCLUSIÓN

En este capítulo se trazó el desarrollo de la movilización y de la represión del Estado en América Latina, al observar dos períodos distintos en la historia de la región. Durante el período previo a la democratización, los esfuerzos del movimiento social y la sociedad civil –si bien diversos y multifacéticos– por lo general, se movilizaron para lograr instituciones políticas más representativas y liberales y en contra de los gobiernos autoritarios y en extremo corporativos de la región. Las respuestas del Estado a estos movimientos variaron según los períodos de liberalización moderada o de autoritarismo arraigado, dando por resultado un patrón de movilizaciones basadas en las oportunidades políticas o inducidas por las amenazas. Durante los años 60 y 70, el aumento del autoritarismo y la represión brutal condujeron a un período de radicalización del movimiento, con la aparición de grupos guerrilleros urbanos y rurales con repertorios contenciosos violentos.

El período pos democratización contó con el crecimiento y la diversificación de los movimientos sociales, debido a la apertura de nuevas oportunidades políticas instadas por el proceso de democratización y la degradación de los derechos sociales ocasionada por la aplicación de las políticas neoliberales. La movilización durante este período no solo se realizó para avanzar en cuestiones de identidad, reparar los derechos sociales o luchar contra las políticas neoliberales, sino también para crear formas más directas de participación democrática y política que rompen con las relaciones de poder político establecidas en la política institucional. En consecuencia, los repertorios contestatarios de los movimientos sociales también se ampliaron y diversificaron adaptándose al nuevo contexto democrático más permisivo, deviniendo un poco menos radicales aunque perturbadores e, incluso, muy innovadores. Al mismo tiempo, las respuestas del Estado a la movilización fueron menos abiertamente represivas y las fuerzas militares fueron sustituidas por unidades profesionalizadas de policía antidisturbios. La tortura generalizada, las violaciones flagrantes de los derechos humanos y desapariciones disminuyeron considerablemente durante este período. Aún así, la brutalidad policial y la violencia durante el control de las protestas son hechos habituales.

Los investigadores que exploran la relación entre movilización y represión estatal en América Latina tienen muchas oportunidades potenciales para futuras investigaciones. Dos áreas, en particular, parecen estar poco desarrolladas en la literatura vigente. En primer lugar, como los movimientos actuales continúan adoptando nuevas estrategias contestatarias, el uso de los medios de comunicación social se ha vuelto cada vez más importante (por ejemplo, Valenzuela, Arriagada y Scherman, 2012; Valenzuela, 2013). Los medios de comunicación social se utilizan no solo como un recurso empleado en la organización y difusión de acciones contestatarias y lineamientos del movimiento social, sino también como un rasgo relevante en la identidad de algunos movimientos (por ejemplo, *#YoSoy132* en México; Tavera y Johnston, en este volumen). Como el uso de las redes sociales es cada vez más importante para el desarrollo de los movimientos sociales en la región, será igualmente importante examinar cómo va a reaccionar el Estado a esta tendencia. ¿Los Estados participarán en tácticas represivas al restringir el acceso y uso de los medios de comunicación social durante los períodos de alta movilización? Los Estados ¿promulgaran leyes para restringir el uso de internet y los sitios de los medios sociales en determinadas circunstancias? O ¿van a monitorear todas las actividades en línea de los "grupos disidentes" en nombre de cuestiones de seguridad nacional? ¿Cómo afectaría cualquiera de estas acciones a los movimientos sociales que se basan en los medios sociales como recursos para organizar, difundir sus programas y movilizar? Ya hemos visto a los regímenes autoritarios de otras regiones del mundo frenar el uso de internet durante las movilizaciones, como en el caso de Egipto durante la Primavera Árabe (Howard, 2010; Howard y Hussain, 2011). También tenemos ejemplos de países democráticos tratando de legalizar las restricciones al uso de internet, permitiendo la aplicación de la ley para bloquear el acceso a la totalidad de los dominios de internet (por ejemplo, PIPA y SOPA en los Estados Unidos), y el uso de las agencias gubernamentales para monitorear los medios sociales y otros sitios de internet en nombre de la seguridad nacional (por ejemplo, Estados Unidos actualmente hace ambas cosas).

Por último, otra tendencia importante de esta última década ha sido el desarrollo y expansión de redes transnacionales entre las colectividades de oposición y los grupos de la sociedad civil. Los investigadores han señalado que una amplia variedad de movimientos indígenas, de trabajadores, ambientales y otros han formado grandes redes transnacionales en las que se basan para compartir experiencias, intercambiar estrategias de encuadre, obtener recursos y planificar acciones contenciosas simultáneas o, incluso, campañas

contestatarias transnacionales (por ejemplo, Olesen, 2006; Stewart, 2006; Silva, 2013). A medida que estas agendas de los movimientos sociales transnacionales se desarrollen, será importante entender lo que –acaso– harán los Estados y los Estados agrupados para contrarrestar dichas agendas. Bajo los regímenes militares autoritarios de los años 70, las redes transnacionales formadas por varios movimientos guerrilleros en el Cono Sur llevaron a que los regímenes militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela formaran operaciones regionales para reprimir este tipo de redes, es decir, la Operación Cóndor (por ejemplo, McSherry, 2002). ¿Surgirán en la región agendas transnacionales similares de represión, control o vigilancia de las actividades de los movimientos sociales?

BIBLIOGRAFÍA

Adelman, J. 1993 'State and labour in Argentina: The portworkers of Buenos Aires, 1910-21' en *Journal of Latin American Studies*, *25*: 73-102.

Albert, B. 1988 *South America and the first World War: The impact of the war on Brazil, Argentina, Peru and Chile* (Nueva York: Cambridge University Press).

Albro, R. 2005 'The indigenous in the plural in Bolivia's oppositional politics' en *Bulletin of Latin American Research*, *24*(2): 433-453.

Albro, R. 2013 'Movement toward socialism (MASIPSP) (Bolivia)' en Snow, D. A. et al. (eds.) *The Wiley-Blackwell encyclopedia of social and political movements* (Nueva York: Blackwell).

Alcañiz, I. y Scheier, M. 2008 'New social movements with old party politics: The MTL piqueteros and the communist party in Argentina' Stahler-Sholk, R.; Vanden, H. E. y Kuecker, G. D. (eds.) *Latin American social movements in the twenty-first century: Resistance, power, and democracy* (Lanham: Rowman & Littlefield) pp. 61-76.

Alexander, R. J. 1965 *Organized labor in Latin America* (Nueva York: The Free Press).

Almeida, P. D. 2003 'Opportunity organizations and threat induced contention: Protest waves in authoritarian settings' en *American Journal of Sociology*, *109*(2): 345-400.

Almeida, P. D. 2007 'Defensive mobilization: Popular movements against economic adjustment policies in Latin America' en *Latin American Perspectives*, *34*(3): 123-139.

Almeida, P. D. 2008a *Waves of protest. popular struggles in El Salvador, 1925-2005* (Minneapolis: University of Minnesota Press).

Almeida, P. D. 2008b 'The sequencing of success: Organizing templates and neoliberal policy outcomes' en *Mobilization: An International Quarterly, 13*(2): 165-187.

Almeida, P. D. 2010 'Globalization and collective action' en Leicht, K. T. y Jenkins, J. C. (eds.) *Handbook of politics: State and society in global perspective* (Nueva York: Springer) pp. 305-326.

Almeida, P. D. y Johnston, H. 2006 'Neoliberal globalization and popular movements in Latin America' en Johnston, H. y Almeida, P. D. (eds.) *Latin American social movements: Globalization, democratization, and transnational networks* (Lanham: Rowman & Littlefield) pp. 3-18.

Almeyra, G. 2004 *La protesta social en la Argentina (1990-2004)* (Buenos Aires: Ediciones Continente).

Álvarez, S. 1990 *Engendering democracy in Brazil: Women's movements in transition politics* (Princeton: Princeton University Press).

Álvarez, S.; Dagnino, E. y Escobar, A. 1998 *Cultures of politics, politics of cultures: Re-visioning Latin American social movements* (Boulder: Westview Press).

Arce, M. 2010 'Parties and social protest in Latin America's neoliberal era' en *Party Politics*, *16*(5): 669-686.

Arce, M. y Rice, R. 2009 'Societal protest in post-stabilization Bolivia' en *Latin American Research Review*, *44*(1): 88-101.

Auyero, J. 2001 'Glocal riots' en *International Sociology*, *16*(1): 33-53.

Auyero, J. 2003 *Contentious lives: Two Argentine women, two protests, and the quest for recognition* (Durham: Duke University Press).

Auyero, J. 2004 'The moral politics of the Argentine crowds' en *Mobilization*, *9*(3): 311-327.

Barndt, W. T. 2012 'On the brink of violence: Work, fear and the state in the Bolivian regions' en. Ascher, W y Mirovitskaya, N. (eds.) *Economic development strategies and the evolution of violence in Latin America. Politics, economics, and inclusive development* (Nueva York: Palgrave Macmillan) pp. 125-151.

Bizberg, I. y Zapata, F. 2010 *Movimientos Sociales. Serie Los Grandes Problemas de México* (México D.F.: El Colegio de México).

Blake, C. H. 2005 *Politics in Latin America* (Boston: Houghton Mifflin).

Booth, J. A.; Walker, T. W. y Wade, C. J. 2006 *Understanding Central America: Global forces, rebellion, and change* (Boulder: Westview Press).

Borland, E. 2006 'The mature resistance of the Madres de Plaza de Mayo' en Johnston, H. y Almeida, P. D. (eds.) *Latin American social movements: Globalization, democratization, and transnational networks* (Lanham: Rowman & Littlefield) pp. 115-130.

Brett, R. 2008 *Social movements, indigenous politics and democratisation in Guatemala, 1985-1996* (Boston: Brill).

Brockett, C. D. 1991 'The structure of political opportunities and peasant mobilization in Central America' en *Comparative Politics*, *23*(3): 253-274.

Brockett, C. D. 2005 *Political movements and violence in Central America* (Nueva York: Cambridge University Press).

Brown, C. 2009 'Democracy's Friend or Foe? The effects of recent IMF conditional lending in Latin

America' en *International Political Science Review*, *30*(4): 431-457.

Bulmer-Thomas, V. 1987 *The Political Economy of Central America since 1920* (Nueva York: Cambridge University Press).

Calvert, P. y Calvert, S. 1990 *Latin America in the twentieth century* (Nueva York: St. Martin's Press).

Cárdenas, N. 1998 'La huelga de Cananea en 1906: Una reinterpretación' en *Estudios Sociológicos*, *16*(48): 117-146.

Carey, S. C. 2006 'The dynamic relationship between protest and repression' en *Political Research Quarterly*, *59*(1): 1-11.

Carr, B. 1976 *El movimiento obrero y la política en México, 1910-1929* (México D.F.: Secretaría de Educación Pública).

Cleary, E. 2007 *Mobilizing for human rights in Latin America* (Bloomfield: Kumarian Press).

Codato, A. N. 2006 'A political history of the Brazilian transition from military dictatorship to democracy' en Adriano, N. C. (ed.) *Political transition and democratic consolidation: Studies on contemporary Brazil* (Nueva York: Nova Science Publishers) pp. 83-106.

Collier, D. 2001 'Bureaucratic authoritarianism' en Joel, K. (ed.) *The oxford companion to politics of theworld* (Nueva York: Oxford University Press) pp. 93-95.

Collier, R. B. 1999 *Paths toward Democracy: The working class and elites in Western Europe and South America* (Nueva York: Oxford University Press).

Collier, R. B. y Collier, D. 1991 *Shaping the political arena: Critical junctures, the labor movement, and regime dynamics in Latin America* (Princeton: Princeton University Press).

Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) 1984 *Nunca Más: Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas* (Buenos Aires: Eudeba).

Crisp, B. F. y Kelly, M. J. 1999 'The socioeconomic impacts of structural adjustment' en *International Studies Quarterly*, *43*(3): 533-552.

De Gregori, C. I. 2012 *How difficult it is to be God: Shining path's politics of war in Peru, 1980-1999* (Madison: University of Wisconsin Press).

Di Tella, T. 1990 *Latin American politics: A theoretical framework* (Austin: University of Texas Press).

Do Alto, H. 2010 'El MAS-IPSP boliviano, entre la protesta callejera y la política institucional' en Monasterios, K.; Stefanoni, P. y Do Alto, H. (eds.) *Reinventando la nación en Bolivia* (La Paz: Plural / CLACSO) pp. 71-110.

Dodd, T. J. 2005 *Tiburcio Carias: Portrait of a Honduran political leader* (Baton Rouge: Louisiana State University Press).

Donoso, S. 2013 'Dynamics of change in Chile: Explaining the emergence of the 2006 *Pingüino* Movement' en *Journal of Latin American Studies*, *45*(1): 1-29.

Earl, J. 2011 'Political repression: Iron fists, velvet gloves, and diffuse control' en *Annual Review of Sociology*, *37*, 261-284.

Earle, D. y Simonelli, J. 2011 'Zapatista Autonomy in Cartel Mexico: Preserving Smallholder Viability' en *Culture, Agriculture, Food, and Environment*, *33*(2): 133-140.

Eckstein, S. 2001 *Power and popular protest: Latin American social movements* (Berkeley: University of California Press).

Eckstein, S. y Álvarez, S. 1992 *The making of social movements in Latin America: Identity, strategy, and democracy* (Boulder: Westview Press).

Eckstein, S. y Wickham-Crowley, T. P. 2003 *Struggles for social rights in Latin America* (Nueva York: Routledge).

Favela, M. 2010 Sistema Político y Protesta Social: del autoritarismo a la pluralidad" en Bizberg, I. y Zapata, F. (eds.) *Movimientos Sociales. Serie Los Grandes Problemas de México* (México, D.F.: El Colegio de México) pp. 101-146.

Fernandes, B. M. 2005 'The occupation as a form of access to the land in Brazil: A theoretical and methodological contribution' en Moyo, S. y Yeros, P. (eds.) *Reclaiming the land: The resurgence of rural movements in Africa, Asia and Latin America* (Londres: Zed Books) pp. 317-340.

Foweraker, J. y Landman, T. 1997 *Citizenship rights and social movements: A comparative and statistical analysis* (Nueva York: Oxford University Press).

Gamboa, L. 1991 "La huelga textil de 1906-1907 en Atlixco" en *Historia Mexicana*, *41*(1): 135-161.

Garcés, M. 2002 *Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970* (Santiago: LOM Ediciones).

García Castro, A. 2002 'The third party: Power, disappearances, performances' en *Diogenes*, *49*(1): 66-76.

García Díaz, B. 2007 *La huelga de Río Blanco* (Xalapa: Gobierno del Estado de Veracruz-Universidad Veracruzana).

Garuda, G. 2000 'The distributional effects of IMF programs: A cross-country analysis' en *World Development*, *28*(6): 1,031-1,051.

Gillespie, R. 1982 *Soldiers of Perón: Argentina's Montoneros* (Oxford: Nueva York University Pres).

Gills, B. 2000 'American power, neo-liberal economic globalization, and low-intensity democracy: An unstable trinity' en Cox, M.; Inkenberry, J. y Inoguchi, T. (eds.) *American democracy promotion: Impulses, strategies, and impacts* (Nueva York: Oxford University Press) pp. 326-344.

Godio, J. 2000 *Historia del Movimiento Obrero Argentino (1870-2000)* (Buenos Aires: Corregidor).

Goldstone, J. A., y Tilly, C. 2001 'Threat (and Opportunity): Popular action and state response in the dynamics of contentious action' en Aminzade, R. et al. (eds.) *Silence and voice in the study of contentious politics* (Nueva York: Cambridge University Press) pp. 179-194.

Gómez-Barris, M. 2010 'Witness citizenship: The place of Villa Grimaldi in Chilean memory' en *Sociological Forum*, *25*(1): 34.

Goodwin, J. 2001 *No other way out: States and revolutionary movements, 1945-1991* (Nueva York: Cambridge University Press).

Grieb, K. J. 1979 *Guatemalan Caudillo: The regime of Jorge Ubico 1931-1944* (Athens: Ohio University Press).

Hagopian, F. y Mainwaring, S. 2005 *The third wave of democratization in Latin America. Advances and setbacks* (Nueva York: Cambridge University Press).

Halperín Donghi, T. 1993 *The contemporary history of Latin America* (Durham: Duke University Press).

Hammond, J. L. 2009 'Land occupations, violence, and the politics of Agrarian reform in Brazil' en *Latin American Perspectives*, *36*(4): 156-177.

Hayner, P. B. 2010 *Unspeakable truths: Transitional justice and the challenge of truth commissions* (Nueva York: Routledge).

Hellman, J. A. 1988 *Mexico in crises* (Nueva York: Holmes & Meier).

Hellman, J. A. 2008 'Mexican popular movements, clientelism, and the process of democratization' en Stahler-Sholk, R.; Vanden, H. E. y Kuecker, G. D. (eds.) 2008 *Latin American social movements in the twenty-first century: Resistance, power, and democracy* (Lanham: Rowman & Littlefield) pp. 61-76.

Hochstetler, K. 2000 'Democratizing pressures from below? Social movements in the new Brazilian democracy' en Kingstone, P. R. y Power, T. J. (eds.) *Democratic Brazil: Actors, institutions, and processes* (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press) pp. 167-182.

Howard, P. N. 2010 *The digital origins of dictatorship and democracy: Information technology and political islam* (Nueva York: Oxford University Press).

Howard, P. N. y Hussain, M. M. 2011 'The role of digital media' en *Journal of Democracy*, *22*(3): 35-48.

Johnston, H. y Almeida, P. D. (eds.) 2006 *Latin American social movements: Globalization, democratization, and transnational networks* (Lanham: Rowman & Littlefield).

Klein, H. S. 1969 *Parties and political change in Bolivia, 1880-1952* (Nueva York: Cambridge University Press).

Klein, H. S. 1971 'Prelude to revolution' en Malloy, J. y Thorn, R. (eds.) *Beyond the revolution: Bolivia since 1952* (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press) pp. 25-52.

Komadina, J. y Geffroy, C. 2007 *El Poder del Movimiento Político. Estrategia, Tramas Organizativas e Identidad del MAS en Cochabamba (1999-2005)* (La Paz: Universidad Mayor de San Simón).

Korzeniewitz, R. P. 2000 'Democracy and dictatorship in continental Latin America during the interwar period' en *Studies in Comparative International Development*, *35*(1): 41-72.

Krauze, E. 1997 *Mexico: Biography of power. A history of modern Mexico, 1810-1996* (Nueva York: Harper Collins).

Lewis, P. H. 2001 *Guerrillas and Generals: The dirty war in Argentina* (Nueva York: Praeger).

Lucero, J. A. 2013 'Seeing like and international NGO: Encountering development and indigenous politics in the Andes' en Silva, E. (ed.) *Transnational activism and national movements in Latin America: Bridging the divide* (Nueva York: Routledge) pp. 80-105.

MacKinnon, M. y Feoli, L. 2013 *Representation and effectiveness in Latin American democracies: Congress, judiciary and civil society* (Nueva York: Routledge / Chapman & Hal)l.

Mainwaring, S. 1986 *The Catholic Church and politics in Brazil, 1916-1985* (Stanford: Stanford University Press).

Mainwaring, S. y Viola, E. 1984 'New social movements, political culture, and democracy: Brazil and Argentina in the 1980s' en *Telos*, *61*, 17-52.

Martin, B. 2007 *Justice ignited: The dynamics of backfire* (Lanham: Rowman & Littlefield).

McAdam, D. 1982 *Political process and the development of black insurgency, 1930-1970* (Chicago: University of Chicago Press).

McSherry, P. 2002 'Tracking the origins of a state terror network: Operation Condor' en *Latin American Perspectives*, *29*(1): 36-60.

Merklen, D. 2005 *Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003)* (Buenos Aires: Gorla).

Meza, V. 1985 'Historia del Movimiento obrero en Honduras' en González Casanova, P. (ed.) *Historia del Movimiento Obrero en América Latina* (México D.F.: Siglo XXI) pp. 128-195.

Molyneux, M. 1985 'Mobilization without emancipation? Women's interests, the state and revolution in Nicaragua' en *Feminist Studies*, *11*(2): 227-254.

Mora, M. 2008 "Zapatista anti-capitalist politics and the 'Other Campaign: Learning from the Struggle for Indigenous Rights and Autonomy'" en Stahler-Sholk, R.; Vanden, H. E. y Kuecker, G. D. (eds.) 2008 *Latin American social movements in the twenty-first century: Resistance, power, and democracy* (Lanham: Rowman & Littlefield) pp. 151- 164.

Muñoz Ramírez, G. 2003 *20 y 10. El Fuego y la Palabra* (México D.F.: Rebeldía/La Jornada).

Navarro, M. 2001 'The personal is political: Las Madres de Plaza de Mayo' en Eckstein, S. (ed.): *Power and popular protest: Latin American social movements* (Berkeley: University of California Press) pp. 241-258.

Navarro, Z. 2007 "'Mobilization without Emancipation': The social struggles of the landless in Brazil" en De Sousa Santos, B. (ed.) *Another production is possible: Beyond the capitalist canon* (Londres: Verso) pp. 146-178.

Novaro, M. y Palermo, V. 2003 *La Dictadura Militar (1976-1983)* (Buenos Aires: Editorial Paidós).

Novelo, V. 1980 'De Huelgas, Movilizaciones y otras Acciones de los Mineros del Carbón de Coahuila' en *Revista Mexicana de Sociología*, *42*(4): 1355-1377.

O'Donnell, G. 1975 *Reflexiones sobre las tendencias generales de cambio del Estado burocrático-autoritario* (Buenos Aires: Centro de Estudios de Estado y Sociedad).

O'Donnell, G. 1982 *El Estado burocrático autoritario* (Buenos Aires: Editorial de Belgrano).

Olesen, T. 2006 'The zapatistas and transnational framing' en Johnston, H. y Almeida, P. (eds.) *Latin American social movements: Globalization, democratization, and transnational networks* (Lanham: Rowman & Littlefield) pp. 179-196.

Olivera, O. y Lewis, T. 2004 *¡Cochabamba! Water war in Bolivia* (Cambridge: South End Press).

Ondetti, G. 2011 *Land, protest, and politics: The landless movement and the struggle for Agrarian reform in Brazil* (University Park: Pennsylvania State University Press).

Ortiz, D. G. 2007 'Confronting oppression with violence: Inequality, military infrastructure, and dissident repression' en *Mobilization*, *12*(3): 219-238.

Ortiz, D. G. 2013 'Rocks, bottles and weak autocracies: The role of political regime settings on contention-repression interactions' en *Mobilization*, *18*(3): 289-312.

Ortiz, D. G. y Béjar, S. 2013 'IMF-sponsored economic programs and collective action in Latin America, 1980-2002' en *Conflict Management and Peace Science*, *30*(5): 492-515.

Pastor, M. 1989 'Latin America, the debt crisis, and the international monetary fund' en *Latin American Perspectives*, *16*(1): 79-110.

Pereira, A. W. 2005 *Political (In)justice. Authoritarianism and the rule of law in Brazil, Chile, and Argentina* (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press).

Perrault, T. y Valdivia, G. 2010 'Hydrocarbons, popular protest and national imaginaries: Ecuador and Bolivia in comparative context' en *Geoforum*, *41*: 689-699.

Petras, J. y Veltmeyer, H. 2011 *Social movements in Latin America: Neoliberalism and popular resistance* (Nueva York: Palgrave Macmillan).

Postero, N. 2011 'The struggle to create a radical democracy in Bolivia' en *Latin American Research Review*, *45*: 59-78.

Przeworski, A. y Vreeland, J. 2000 'The effects of the IMF on economic growth' en *Journal of Development Economics*, *62*(2): 384-421.

Rock, D. 1994 *Latin America in the 1940s: War and postwar transitions* (Berkeley: University of California Press).

Rose, R. S. 2005 *The Unpast: Elite Violence and Social Control in Brazil, 1954-2000* (Athens: Ohio University Press).

Rossi, F. M. 2005 'Las Asambleas Vecinales y Populares en la Argentina: Las Particularidades Organizativas de la Acción Colectiva Contenciosa' en *Sociológica*, *19*(57): 113-45.

Rossi, F. M. 2013a 'Peronism' en Snow, D. A. et al. (eds.) *The Wiley-Blackwell encyclopedia of social and political movements* (Nueva York: Blackwell) pp. 925-928.

Rossi, F. M. 2013b 'Juggling multiple agendas: The struggle of trade unions against national, continental and international neoliberalism in Argentina' en Silva, E. (ed.) *Transnational activism and national movements in Latin America: Bridging the divide* (Londres: Routledge) pp. 141-160.

Rossi, F. M. 2013c 'Piqueteros (workers/unemployment movement in Argentina)' en Snow, D. A. et al. (eds.) *The Wiley-Blackwell encyclopedia of social and political movements* (Nueva York: Blackwell) pp. 929-932.

Rothenberg, D. 2012 *Memory of silence: The Guatemalan truth commission report* (Nueva York: Palgrave Macmillan).

Sala de Touron, L. y Landinelli, J. E. 1984 '50 Años del Movimiento Obrero Uruguayo' en González Casanova, P. (ed.) *Historia del Movimiento Obrero en América Latina* (México D.F.: Siglo XXI).

Salazar, G. 2006 *La violencia política popular en las "Grandes Alamedas". La violencia en Chile 1947-1987* (Santiago: LOM Ediciones).

Salinas, D. y Fraser, P. 2012 'Educational opportunity and contentious politics: The 2011 Chilean student movement' en *Berkeley Review of Education*, *3*(1): 17-47.

Salman, T. 1994 'Challenging the city, joining the city: The Chilean pobladores between social movement and social integration' en *Bulletin of Latin American Research*, *13*(1): 79-90.

Schiller, H. 2005 *Momentos de luchas populares* (Buenos Aires: Ediciones Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos).

Sikkink, K. 2008 'From Pariah state to global protagonist: Argentina and the struggle for international human rights' en *Latin American Politics and Society*, *50*: 1-29.

Silva, E. 2009 *Challenging neoliberalism in Latin America* (Nueva York: Cambridge University Press).

Silva, E. 2013 *Transnational activism and national movements in Latin America: Bridging the divide* (Londres: Routledge).

Sitrin, M. A. 2012 *Everyday revolutions: Horizontalism and autonom y in Argentina* (Nueva York: Zed Books).

Skidmore, T. E. 1990 *The politics of military rule in Brazil, 1964-1985* (Nueva York: Oxford University Press).

Spalding, R. J. 1994 *Capitalists and revolution in Nicaragua: Opposition and accommodation, 1979-1993* (Charlotte: University of North Carolina Press).

Spronk, S. y Webber, J. R. 2008 'Struggles against accumulation by dispossession in Bolivia: The political economy of natural resource contention' en Stahler-Sholk, R.; Vanden, H. E. y Kuecker, G. D. (eds.) *Latin American social movements in the twenty-first century: Resistance, power, and democracy* (Lanham: Rowman & Littlefield) pp. 77-91.

Stahler-Sholk, R.; Vanden, H. E. y Kuecker, G. D. (eds.) 2008 *Latin American social movements in the twenty-first century: Resistance, power, and democracy* (Lanham: Rowman & Littlefield).

Stern, S. J. 2010 *Reckoning with pinochet: The memory question in democratic Chile, 1989-2006* (Durham: Duke University Press).

Stromquist, N. P. y Sanyal, A. 2013 'Student resistance to neoliberalism in Chile' en *International Studies in Sociology of Education*, *23*(2): 152-178.

Stewart, J. 2006 'When local troubles become transnational: The transformation of a Guatemalan indigenous rights movement' en Johnston, H. y Almeida, P. (eds.) *Latin American social movements: Globalization, democratization, and transnational networks* (Lanham: Rowman & Littlefield) pp. 196-214.

Tarrow, S. 1998 *Power in movement: Social movements and contentious politics* (Nueva York: Cambridge University Press).

Thomas, M. 2012 *Violence and colonial order. Police, workers and protest in the European colonial empires, 1918-1940* (Nueva York: Cambridge University Press).

Tilly, C. 1986 *The contentious French* (Cambridge: Belknap Press.

Trejo, G. 2012 *Popular movements in autocracies: Religion, repression, and indigenous collective action in Mexico* (Nueva York: Cambridge University Press).

Valencia, E. 1984 'El movimiento obrero colombiano' en González Casanova, P. (ed.) *Historia del Movimiento Obrero en América Latina* (México D.F.: Siglo XXI) pp. 9-151.

Valenzuela, S. 2013 'Unpacking the use of social media for protest behavior: The roles of information, opinión expression, and activism' en *American Behavioral Scientist*, *57*(7): 920-942.

Valenzuela, S.; Arriagada, A. y Scherman, A. 2012 The social media basis of youth protest behavior: The case of Chile' en *Journal of Communication*, *62*(2): 299-314.

Vanden, H. E. y Prevost, G. 2009 *Politics of Latin America. The power game* (Nueva York: Oxford University Press).

Villalón, R. 2008 'Neoliberalims, corruption andlegacies of contention: Argentina's social movements, 1993-2006' en Stahler-Sholk, R.; Vanden, H. E. y Kuecker, G. D. (eds.) *Latin American social movements in the twenty-first century: Resistance, power, and democracy* (Lanham: Rowman & Littlefield) pp. 253-270.

Viterna, J. 2006 'Pulled, pushed and persuaded: Explaining women's mobilization into the Salvadoran Guerrilla Army' en *American Journal of Sociology*, *112*(1): 1-45.

Viterna, J. 2013 *Women in war: The micro-processes of mobilization in El Salvador* (Nueva York: Oxford University Press).

Walter, K. 1993 *Regime of Anastasio Somoza, 1936-1956* (Charlotte: The University of North Carolina Press).

Wiarda, H. J. y Kline, H. F. 2007 *A concise introduction to Latin American politics and development* (Boulder: Westview Press).

Wickham-Crowley, T. P. 1992 *Guerrillas and revolution in Latin America. A comparative study of insurgents and regimes since 1956* (Princeton: Princeton University Press).

Wickham-Crowley, T. P. 2001 'Winners, losers, and also-rans: Toward a comparative sociology of Latin American Guerrilla movements' en Eckstein, S. (ed.) *Power and popular protest: Latin American social movements* (Berkeley: University of California Press) pp. 132-181.

Wolfe, J. 1991 'Anarchist ideology, worker practice: The 1917 general strike and the formation of Sao Paulo's working class' en *Hispanic American Historical Review*, *71*: 809-846.

Wood, E. J. 2003 *Insurgent collective action and Civil War in El Salvador* (Nueva York: Cambridge University Press).

Wright, T. C. 2007 *State terrorism in Latin America* (Lanham: Rowman & Littlefield).

Wright, A. L. y Wolford, W. 2003 *To inherit the earth: The landless movement and the struggle for a new Brazil* (Oakland: Food First Books).

Ycaza, P. 1991 *Historia del Movimiento Obrero Ecuatoriano II* (Quito: Cedime-Ciudad).

Zapata, F. 2010 "Movimientos sociales y conflicto laboral en el siglo XX" en Bizberg, I. y Zapata, F. (eds.) *Movimientos Sociales. Serie Los grandes problemas de México* (México D.F.: El Colegio de México) pp. 61-100.

Zibechi, R. 2010 *Dispersing power: Social movements as anti-state forces* (Oakland: AK Press).

CÓMO CITAR ESTA PUBLICACIÓN:
Ortiz, David G. 2017. "Represión estatal y movilización en América Latina" Pp. 83-114 en Paul Almeida y Allen Cordero Ulate, Eds., *Movimientos Sociales en América Latina: Perspectivas, Tendencias y Casos*. Buenos Aires: CLACSO.

5

Ligia Tavera Fenollosa* y Hank Johnston**

ARTEFACTOS DE PROTESTA EN EL CAMPO DEL MOVIMIENTO SOCIAL MEXICANO: REFLEXIONES EN TORNO AL "HIJASTRO" DEL ANÁLISIS CULTURAL

Las perspectivas de las ciencias sociales en la cultura que predominaban en el pasado hacían hincapié en la interrelación de símbolos, categorías y creencias. La cultura era una vasta red y su influencia se observaba en la coordinación de los comportamientos y rituales cotidianos. Esta visión se basaba en un "mito de integración cultural" (Archer, 1996: 2) que resaltaba la consistencia de las orientaciones ideacionales de los grupos sociales, específicamente los que hablan el mismo idioma. Dos generaciones de científicos sociales, nutridas por Durkheim, Kroeber, Boas, Benedict y Parsons, adhirieron mayormente a ese punto de vista de un tejido cultural uniforme. El énfasis cultural, aplicado a la política y la protesta, generalmente tomó la forma de observar las creencias, actitudes y predisposiciones entre las diferentes poblaciones, midiendo cómo se distribuyen estos significados y vinculándolos con las conductas políticas (Inglehart, 1990, 1997; Willdavsky, 2006; Rochon, 1998; Jasper, 1997). La presunción era que toda acción social está precedida por ideaciones, al conocer

* Departamento de Sociología, FLACSO-México, México D.F., México.

** Department of Sociology, San Diego State University, San Diego, EEUU.

cómo se agrupan estos significados el analista puede decir mucho acerca de los patrones de conductas, tales como votar o adherir a un movimiento social.

En los estudios de la protesta, aproximaciones a la cultura un tanto diferentes entraron en el campo a través de la noción de marco (*framing*) como un elemento en el reclutamiento y la participación, primero a través de la psicología social (Gamson et al., 1982) y luego del interaccionismo simbólico (Snow et al., 1986). Por casi una década, la perspectiva de encuadre (*framing*), especialmente en las elaboraciones de David Snow, Robert Benford y sus colegas (Benford, 1993, 1997; Snow y Benford, 1988), y un renovado interés en el concepto de identidad colectiva, que se encendió por la investigación europea de los nuevos movimientos sociales, fueron los principales portadores del análisis cultural al campo de la investigación del movimiento y la protesta social. En aquel momento, la publicación de *Social Movements and Culture* (Johnston y Klandermans, 1995) reunió las perspectivas estadounidenses y europeas para presentar varios enfoques analíticos nuevos provenientes de diversos campos de las ciencias sociales: análisis discursivo, sociología de la cultura, análisis narrativo, psicología social y ciencia cognitiva. Desde entonces ha habido importantes contribuciones al canon cultural que han ido más allá del encuadre: Jasper (1997); Rochon (1998); Steinberg (1999); Davis (2002); Young (2002); Stryker et al. (2000); Ewick y Silbey (2003); Goodwin y Jasper (2004); y Polletta (2006), para mencionar algunos. Un hilo discernible entre estos estudios es que en la producción de cultura hay diversidad y conflicto inherentes, desplazando la atención analítica de los componentes ideacionales estándares de la cultura hacia la *diversidad* de la producción cultural, discursos y marcos, y cómo estos se reflejan en lo que se produce: textos, habla, narrativas y performances culturales.

En los últimos años, los avances en sociología de la cultura han rasgado aún más el intrincado entramado cultural de décadas pasadas. La han politizado, contextualizado, relativizado y de-construido para resaltar la diversidad inherente de la cultura y enfatizar en los procesos que generan conflictos que subyacen a la diversidad cultural. Estas nuevas orientaciones de investigación cuestionaron los enfoques lineales de la cultura que medían actitudes, creencias, opiniones o los marcos conceptuales como causas de la participación en el movimiento. Ann Norton, en su manifiesto del análisis cultural en la política, afirma, "la cultura no es una variable 'independiente' o 'dependiente'. Sencillamente, la cultura no es una variable" (Norton, 2004: 2). Su posición es que, puesto que nada está fuera de la cultura, toda sociedad, proceso social, institución social u organización

del movimiento social no pueden tener más o menos cultura. Este punto de vista socava los enfoques estándares sobre los movimientos sociales que buscan identificar los modelos generales de su desarrollo y trayectorias. Durante mucho tiempo, los *shibboleth* del análisis cultural moderno, tales como narraciones, texto, discurso, metáfora, rituales, actores y performances quedaban al margen de los métodos de investigación comúnmente practicados en el campo. ¿Qué hace un estudiante de los movimientos sociales en esta situación? ¿Cómo podemos observar la movilización de la protesta en un contexto de trabajo teórico que redefine los procesos de la cultura como ubicuos y relativos, aunque diversos, fragmentados y en conflicto?

DIMENSIONES DEL ANÁLISIS CULTURAL

Para poder clasificar estas preguntas, comenzamos con tres dimensiones básicas de la cultura: ideaciones, performances y artefactos. En los enfoques contemporáneos de la cultura están estrechamente interrelacionados y se refuerzan mutuamente. De hecho, vienen en tanda; si hay acción social intencional, no se tendrá uno sin los otros dos. Las ideaciones son los objetos tradicionales del análisis cultural, tales como ideologías, marcos, valores, creencias, mentalidades, representaciones sociales, *habitus* o las normas de conducta más específicas, incluyendo la comprensión de las formas normativas de la protesta –el repertorio del movimiento social moderno. También podemos incluir aquí las reformulaciones cognitivas recientes de estos conceptos, tales como esquemas, algoritmos y gramáticas que son compartidas colectivamente (Di Maggio, 1997; Johnston, 1995, 2010). Entendidos como "ideologías" y/o marcos, los elementos ideacionales siempre han sido componentes clave de lo que es el movimiento social. El tema clave del análisis cultural posmoderno, sin embargo, es que siempre hay diversidad y conflicto en estas ideas, en lugar de verlas principalmente como una fuerza de integración y coordinación.

La segunda dimensión de análisis cultural es la performance. Como un reflejo de la influencia de la sociología de la cultura, los eventos de protesta se consideran cada vez más como de performances de protesta –una sutil modificación de la perspectiva que captura el despliegue dinámico de las acciones de diversos protagonistas (grupos que protestan) y antagonistas (policía, testigos, manifestantes del contramovimiento). Resumiendo, las performances nacen cuando se actúan y se les da vida a los elementos ideacionales de la primera dimensión. La mayoría de los analistas hoy aceptan como un axioma que la cultura no es simplemente una sumatoria de creencias, valores y entendimientos individuales, sino que es un reflejo de cómo se personifican en la performance social o acción social, des-

tacando los aspectos agentivos y colectivos de la cultura, así como la continuidad de su producción y la diversidad de interpretaciones. Por otra parte, hay performance cultural cuando los artefactos se producen y/o interpretan. Pero también –y esto es un principio central del análisis cultural contemporáneo– las mismas performances son "artefactos" en diferentes grados, ya que aquellos presentes en la acción –sus públicos– las "leen como textos" y les otorgan significados. Dicho simplemente, las performances son espacios donde se lleva a cabo la cultura (Alexander, 2006: 32-34). Representan los nodos ubicuos de la diversidad y contención en la cultura, así como a los nudos de la red cultural que unen a individuos y grupos según convergen las interpretaciones.

Dada la centralidad del enfoque performativo en el pensamiento cultural actual y la hegemonía de las ideaciones sobre la teorización cultural del pasado, es justo decir que la tercera dimensión analítica –el artefacto cultural– es el "hijastro" del análisis cultural. Como fragmentos de cerámica o reliquias funerarias, la presunción parece ser que pueden decirnos algo de una cultura, pero no demasiado. Los artefactos se producen de forma individual o colectiva, tales como música, arte, literatura, discursos, narrativas, videos, panfletos de reclutamiento y otros textos de los movimientos. Ya sean producto de la creatividad de una persona o del esfuerzo colectivo, los artefactos cobran importancia porque *siempre* son interpretados socialmente por sus públicos y forman parte de la continua *creación de la cultura* a través de una interpretación posterior, aunque ya se hayan "materializado" en su creación inicial. Están estrechamente vinculados con las ideaciones, porque las ideas suelen ser subyacentes a la producción de un artefacto, o la expropiación de uno, como plantearemos. Sin embargo, los artefactos son únicos porque, a diferencia de las ideas, son objetos concretos y materiales. Son importantes para los participantes del movimiento social porque, en la medida en que invocan interpretaciones compartidas, ayudan a superar la inevitable diversidad de un movimiento. También pueden fomentar la identidad colectiva en torno a estos significados compartidos para que se puedan realizar las actividades coordinadas de movimiento. Su materialidad significa que el o la analista puede señalarlos como evidencia de su interpretación, para ser juzgada por otros.

La sombra que se cierne detrás de la discusión del análisis cultural de este capítulo es su relación con los enfoques de los procesos políticos de base estructural que predominan en los análisis del desarrollo del movimiento social. Por un lado, sostenemos que esta división bien conocida y ampliamente discutida entre cultura y política es ciertamente artificial, en el sentido de que toda política –los intereses

que la impulsan, las relaciones estructurales que la limitan y los conflictos que la definen– es cultural. La contención política, obviamente, tiene sus artefactos, ideologías y representaciones, lo que significa que la política contenciosa puede ser analizada con herramientas y conceptos culturales. Por otro lado, establecer la oposición entre política y cultura también puede ser útil, como veremos. No es raro que ciertas instancias de contención política *necesiten*, más que otras, las herramientas del análisis cultural. En la medida en que los intereses, el poder político y la estructura son más centrales en la aparición y el desarrollo de un movimiento social pueden restringirlo más, tornando la interpretación de las performances, ideologías y artefactos relativamente menos abierta y menos sujeta a procesos sociales de interpretación y, por lo tanto, menos necesaria. La otra cara de la moneda, y especialmente para nuestros propósitos de pensar en los movimientos latinoamericanos, es que hay contextos políticos donde –aunque los intereses, el poder y la organización están presentes– son menos determinantes de las trayectorias de movilización en relación con los factores culturales debido a las barreras estructurales históricas y las instituciones políticas actuales. Tenemos especialmente en cuenta los casos en que las instituciones políticas democráticas y las organizaciones de compromiso cívico podrían ser menos elaboradas.

Nuestro enfoque en México está guiado, en parte, por este hiato entre los enfoques del proceso político y cultural hacia los movimientos sociales. Por supuesto, no hay democracias perfectas, y los regímenes estatales varían por cómo cumplen los requisitos democráticos básicos. Entre estos, la capacidad de respuesta a los ciudadanos es primordial, y es central para la aparición de los movimientos sociales. Cuando los canales políticos están cerrados, los ciudadanos elegirán medios extra-institucionales para expresar demandas y reclamos. Especialmente entre las democracias emergentes de América Latina, las estructuras democráticas de la administración estatal están mancilladas por el pasado, y las elites políticas con frecuencia son poco receptivas a las demandas ciudadanas. Otros residuos del pasado no democrático son la corrupción y las redes clientelares, que los ciudadanos ven como violaciones a la igualdad de acceso, y los estilos de vida ostentosos de los políticos electos. No sorprende que en el verano de 2013, los problemas de corrupción y la presentación impositiva inexacta de los estadios de fútbol produjeran una ola de protestas masivas en Brasil. En otro contexto, otro tiempo, lugar y memoria histórica, las protestas podrían haber sido localizadas como simples demandas políticas puntuales para revertir el aumento de la tarifa de autobús. Del mismo modo, no es sorprendente que la construcción de un monumento de varios millones de dólares estadounidenses en la

Ciudad de México se convirtiera en un icono de la corrupción gubernamental y la falta de respuesta para varios movimientos mexicanos y para la sociedad mexicana en general (en breve, retomaremos este punto).

Establecimos nuestra presentación sobre la proposición de que, allí donde persisten residuos de un pasado menos democrático, como es el caso de México y varios otros Estados latinoamericanos, las percepciones culturales de los procesos de movilización pueden ser especialmente instructivas. Decimos esto basados en la investigación sobre los procesos de movilización en regímenes represivos donde el simbolismo, el *doble sentido*, la organización fraguada y la dependencia en redes disidentes entre los intelectuales tienen los principales roles en la organización de la oposición. Por supuesto, la razón es que en los Estados represivos los canales para acción contenciosa más directa están cerrados por la falta de respuesta de las instituciones políticas. Sugerimos que es una proposición plausible que, en el balance entre los factores del proceso político de la articulación de intereses y las instituciones políticas y los factores culturales performativos, de definición artefactual y construcción social, estos últimos –los elementos culturales de la movilización– tengan un peso significativo. No es que los elementos del proceso político no sean relevantes, sino que de su equilibrio con el análisis cultural resultan perspectivas importantes.

Para elucidar completamente esta paradoja, el presente capítulo se centra en varios sitios y momentos de movilización, seleccionados del movimiento social mexicano contemporáneo, donde las herramientas de análisis cultural –y sobre todo los "hijastros" del análisis cultural, los artefactos culturales– son relativamente más importantes. Sin embargo, como veremos, nuestro análisis raramente pierde de vista a la política. De hecho, incluso los candidatos más anómalos, aquellos casos que aparentemente se centran en cuestiones culturales –de "alta cultura" como el debate intelectual y la poética– con frecuencia no son sino representaciones simbólicas de la política contenciosa.

La cultura como artefactoLa pregunta que nos planteamos es si hay instancias en las que los artefactos culturales se mueven a ubicaciones más primarias en las trayectorias de movilización de los movimientos sociales. En investigaciones anteriores, en formas de gobierno con menos canales abiertos para realizar reclamos, se ha observado que los movimientos suelen reclamar por medio de artefactos materiales –lugares, música, imágenes icónicas, banderas y monumentos. Estos, a menudo, se convierten en sitios centrales del simbolismo de oposición porque los otros canales están cerrados. Esta es una pro-

puesta que estamos desarrollando, en general, con respecto al rol de la cultura, pero aquí nos referimos específicamente a aquellas producciones culturales concretas, típicamente cargadas de simbolismo, que identificamos como artefactos materiales y textuales.

Hay artefactos de protesta de "alta cultura", como las artes plásticas, la poesía, la literatura, el teatro, la música, incluso la ópera, y sus homólogos en la cultura popular: rimas, música, bromas, máscaras (Guy Fawkes), símbolos icónicos para nombrar algunos pocos. Es justo decir que, aunque los investigadores del movimiento social reconocen ampliamente que los artefactos culturales desempeñan un rol en alguna parte de la ecuación de movilización, a menudo son relegados a un estatus secundario –interesante, pero periférico. Sin embargo, las canciones del movimiento por los derechos civiles, las imágenes cinceladas y fuertes de los trabajadores en los afiches del movimiento obrero, el grafiti ubicuo de la izquierda sudamericana, no solo representan las ideologías del movimiento y las injusticias compartidas que impulsan su producción original, sino que una vez devenidas "artefactos" invocan una amplia gama de respuestas en las colectividades donde entran en juego. Y, más importante aún, es difícil concebir que la movilización del movimiento ocurra sin ellos. ¿Su ubicuidad es simplemente una coincidencia, o los analistas omiten algo fundamental acerca de su constitución? El punto es –y uno de los conocimientos que la sociología de la cultura puede ofrecer a los estudios de la protesta– que estos artefactos tienen su propio lugar central en la matriz del movimiento social, que es más que un mero reflejo de las fuerzas políticas e ideológicas importantes. Los productores de estos artefactos culturales, el sustento social de los artefactos mismos y las diversas formas en que los públicos responden a ellos implican que los artefactos pueden desempeñar roles clave en las trayectorias de movilización, ya que los actores sociales los encuentran, se los apropian, los discuten, los modifican y, tal vez, hasta mejoren aún más sus roles. Esto significa que el analista está posibilitado para considerar a los artefactos culturales de maneras que van más allá de pensar en ellos simplemente como "símbolos poderosos". Son muy relevantes para un manual sobre movimientos sociales en América Latina, pues pueden desempeñar roles especialmente destacados en regímenes políticos menos abiertos donde está coaccionada la expresión de las demandas.

En los párrafos siguientes vamos a considerar dos campañas de protesta recientes en el sector del movimiento social en México, que ilustran la importancia de un conjunto de procesos culturales que demuestran el carácter complejo y reticulado de la interpretación que se centra en los artefactos culturales cuando son intervenidos (y pro-

ducidos) por los actores del movimiento social. Comenzamos nuestra discusión con un artefacto cultural de materialidad monumental, que, no obstante, provoca una gran diversidad de interpretaciones como puntos de movilización. A continuación, nos enfocamos en el entramado complejo de performances, públicos y artefactos culturales en la campaña de estudiantes *#YoSoy132*. Concluimos señalando las diversas maneras en que la sociología de la cultura brinda, al investigador de los movimientos sociales, un modo más elaborado de pensar sobre artefactos y protestas, cuando el repertorio estándar funciona con restricciones limitadas.

LA ESTELA DE LUZ

La Estela de Luz es un monumento con incrustaciones de cuarzo de 341 pies de altura construido en la Ciudad de México por el Gobierno Federal para conmemorar el Bicentenario de la Independencia de México (ver Imagen 5.1). Desde su inauguración oficial –y tardía– en enero de 2012, se ha convertido en un imán para las protestas y en el símbolo del régimen corrupto e insensible del Presidente Felipe Calderón. Su historia no solo afirma la importancia de los artefactos en las trayectorias de movilización, sino que también pone de relieve la contestación que a veces rodea su representación, en este caso, el conflicto entre el significado oficial de la Estela y el atribuido a esta por los críticos del régimen y, sobre todo, por el movimiento de amplia base social: el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD). Para el Gobierno, en sus propias palabras, la Estela fue creada como: "un monumento para mirar al futuro, basado en la memoria de nuestras luchas. Una Estela para conmemorar a los hombres más importantes de nuestra Nación y a sus actos. Ubicada en Paseo de la Reforma, un lugar lleno de historia. Estela de luz. Monumento conmemorativo. Doscientos años de ser orgullosamente mexicanos".[1]

Por el contrario, para el movimiento MPJD y muchos ciudadanos mexicanos críticos del gobierno, la Estela representa la corrupción, la ineptitud y la falta de respuesta del Estado mexicano. Esta interpretación fue presentada por primera vez por los medios de comunicación críticos en 2011, y ganó espacio en la opinión pública cuando salieron a la luz las revelaciones sobre sus costos inflados, secretos y amoríos ligados a su construcción. "Todo esto representa algo acerca de lo que nosotros, los mexicanos, hemos observado con respecto al procedimiento gubernamental oscuro, torpe y ofensivo, dejando hoy una

1 Es interesante notar que mientras que el gobierno mexicano hizo hincapié en la orientación de la Estela hacia el futuro, el movimiento social quiso traer el pasado al presente mediante la resignificación de la Estela.

Imagen 5.1
La Estela de Luz, Paseo de la Reforma, México D. F.

clarísima Estela de Oscuridad".[2]

El arquitecto que diseñó la Estela informó de la presión del secretario de Educación para que guardara silencio sobre la corrupción en su construcción. "Monumento a la corrupción", fue la frase utilizada por los medios de comunicación para captar la esencia de esta resignificación. Pero el relato presentado por el movimiento MPJD proyectó estas críticas de un modo más amplio, poniéndolas a la luz de los fracasos políticos del gobierno, en particular, al elegir construir un monumento a un costo de $ 83 millones de dólares estadounidenses, y al empeñarse en librar una verdadera guerra contra los narcotraficantes que se ha cobrado la vida de 60 mil ciudadanos mexicanos.[3] La guerra en sí es un reto importante para la legitimidad del régimen y refleja una crisis en la capacidad del Estado dentro de sus propias fronteras. En los últimos años, el MPJD ha crecido significativamente como vocero, no solo de las familias de las víctimas, sino también de todos los que viven con miedo e inseguridad en México. Al situar el significado de la Estela en este contexto más amplio, el movimiento generalizó el significado de oposición sobre el monumento, pasando de la corrupción al fracaso del Estado. Este giro lo convirtió en un símbolo potente en el entorno del movimiento social en México en años recientes.

El MPJD es uno de los muchos casos de "activismo de pérdida y dolor" que han surgido en México en los últimos años. [4] Se desencade-

---

2 En <http://nuestromedio.mx/colaboradores/el-mirador/3618-una-estela-de-oscuridad>.

3 Ver <http://www.washingtonpost.com/world/the_americas/calderon-finishes-his-six-year-drug-war-atstalemate/2012/11/26/82c90a94-31eb-11e2-92f0-496af-208bf23_story_1.html>.

4 Otros casos de acción política motivados por tragedias personales son: el secuestro y asesinato de Fernando Martí, hijo de Alejandro Martí, de 14 años, copropietario de una de las cadenas de artículos deportivos más grandes de México y fundador de

nó por el asesinato, en marzo de 2011, de Juan Francisco Sicilia –hijo del poeta y escritor Javier Sicilia–, tres de sus amigos y dos familiares de sus amigos. El movimiento ha sido extremadamente acertado en la movilización de los padres, familiares y amigos de las miles de víctimas, que han sido asesinadas, secuestradas, desaparecidas o arrestadas por cargos inventados desde el comienzo de la "guerra contra las drogas" de Calderón. Ha organizado caravanas hacia el norte y sur de México y a los Estados Unidos, ha concertado un raro encuentro con el Presidente Felipe Calderón para debatir sobre la nueva guerra la contra las drogas, celebró una reunión con los candidatos presidenciales de 2012 y participó activamente en el proyecto de la Ley General de Víctimas, que indemniza a las víctimas del crimen organizado.

En este punto, los especialistas en movimientos sociales podrían estar preguntándose si nuestro debate va más allá de la observación de que los artefactos pueden ser símbolos que pulsan, poderosamente, acordes que resuenan entre el público. Si eso fuera todo lo que estamos ofreciendo, una crítica justa sería que no hemos logrado nada más que cambiar el nombre a la idea de "simbolismo movilizador", que ya es ampliamente reconocida, aunque por lo general logra un papel secundario en el desarrollo del movimiento. ¿Qué se obtiene al denominar "artefactos culturales" a símbolos potentes y al situarlos en los enfoques culturales contemporáneos de la política y la sociología? ¿Es una adición más a la letanía de términos que a menudo enreda el diálogo entre la investigación del movimiento social y la sociología de la cultura? ¿Exactamente, qué ofrecemos aquí que sea nuevo?

Aplicado a los movimientos sociales y desde la perspectiva de la sociología de la cultura, las claves para el concepto de artefacto cultural se encuentran, en primer lugar, en el proceso temporal de cómo un objeto se convierte en un artefacto; en segundo lugar, en la diversidad de interpretaciones que lo rodean; en tercer lugar, en el proceso continuo de su redefinición multifacética que se concentra más y más en las representaciones ampliamente compartidas; y en cuarto lugar, en su rol central en la movilización como un disparador de estas interpretaciones, que en el léxico de los estudios de la protesta son llamados marcos de acción colectiva. Los enfoques tradicionales podrían rastrear el significado de oposición emergente de la

México SOS, una organización civil por la seguridad y la justicia. Otro caso es el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de Isabel Miranda de Wallace, quien llevó a cabo personalmente las investigaciones que condujeron a la captura de los asesinos de su hijo y, más tarde, fundó la asociación Alto al Secuestro; incluso ha participado activamente con Martí y Sicilia en la redacción de la Ley General de Víctimas.

Estela como un cambio en la opinión pública impulsado a través de los medios de comunicación. La materialidad de la Estela en Paseo de la Reforma y el debate público en ciernes reforzaron estas interpretaciones críticas y de oposición entre los sectores de la población, de modo que hubo una contienda sobre los significados: el oficial y el de oposición. Desde una perspectiva de 30 mil pies este punto de vista no es incorrecto, estrictamente hablando; pero, para una ciencia social precisa de cómo los artefactos afectan a la movilización, tenemos que estar más cerca de la tierra. De lo contrario, el analista omitirá las experiencias mediante las cuales los actores sociales crean cultura *a través de* la interacción *en torno a* los artefactos. Aquí es donde puede ayudarnos la sociología de la cultura.

El surgimiento de un significado de oposición en torno a un artefacto cultural es un proceso complejo y multifacético. La sociología de la cultura nos indica que no podemos tratarlo como una manifestación colectiva singular en el nivel del "debate público". Por el contrario, los artefactos generan múltiples *simbolismos* que se transmiten a través de redes de relaciones personales donde se producen debates y se forman acuerdos colectivos situacionales e interactivos. A diferencia del monumento mismo, que es austero en su materialidad particular en el corazón del Distrito Federal, analizar la emergencia de su significado de oposición dirige la atención analítica a sitios más pequeños y multitudinarios. Estos son los lugares donde ocurren las performances colectivas de las concepciones personales de micro-nivel. Estas performances son, también, pruebas públicas –a veces tentativas, a veces tajantes– de esas concepciones. Flotan delicadamente en las aguas de las concepciones, percepciones, confirmaciones y modificaciones de los otros, junto a sus rechazos. Todas estas micro-performances a se realizan colectivamente, a través de intercambios, discursos, narraciones, cuestionamientos, entre otros. Es axiomático que en la interacción y el habla se produce la cultura y los artefactos cobran influencia.

Para el analista, cualquier interpretación colectiva de un artefacto en el nivel de agregación debe comenzar aquí como un mar de fondo, una primera *matriz de efectos*, para acuñar un término a partir del cual las interpretaciones cobran vida a medida que se difunden por las redes de interacción interpersonales a través de micro-performances según las concepciones del actor en torno a un artefacto. Solo luego, cuando los significados de oposición, variados pero convergentes se aglutinen en espacios de performances más grandes pueden ser elaborados más aún en los grandes encuentros colectivos –las protestas en la Estela, por ejemplo– que ocurren con frecuencia. Cuando eso sucede, las interpretaciones colectivas se concretan aún más a

medida que los espacios de las performances colectivas se agrandan y se comparten de manera más amplia.

Este último proceso se demuestra muy bien en las recientes protestas masivas en Brasil, donde los estadios de fútbol que costaron millones de dólares se convirtieron en artefactos de protesta. Las enormes movilizaciones populares en Brasil, las mayores en los últimos 20 años, se precipitaron en junio de 2013 por un aumento del 10% en las tarifas de autobús en San Pablo –una cuestión de política municipal relativamente sencilla– pero rápidamente se transformaron en un movimiento de protesta en todo el país que, como el caso de México, combinó las demandas contra la corrupción oficial, la insensibilidad y la banalidad de la elite política con los desafíos que fueron al corazón de la legitimidad del régimen. Uno de los manifestantes habló de las elites políticas de Brasil en palabras que reflejan cómo los estadios –como la Estela en México– fueron disparadores para reclamos mucho más profundos: "No invierten en educación, y siguen maquillando a la ciudad para mostrar al mundo que podemos albergar el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos [...] trabajamos 4 meses del año solo para pagar impuestos y no recibir nada a cambio" (Romero y Neuman, 2013). Del mismo modo, al comentar sobre la Estela, un manifestante dijo: "Se podría haber utilizado en cualquier otro lugar en las cosas que necesitamos, como seguridad pública. Fue una mala inversión".[5] Los monumentos crudamente materiales como los estadios de fútbol, especialmente en el contexto de la historia de Brasil como potencia del fútbol, y los planes para la Copa del Mundo se convirtieron en disparadores para un reservorio de diversos significados que se aglutinaron alrededor de la acumulación de ilegitimidad del gobierno, otra vez, como con la Estela de México. En México, la Estela recibió múltiples significados de oposición de las diferentes ramas de la matriz cultural que generó. Como observación general, las imágenes oficiales de un pilar de luz efectivamente conllevan una ironía muy densa para muchos ciudadanos mexicanos, primero, para aquellos que ven su construcción sumida en la oscuridad, el secreto y la corrupción. Segundo, conmemorar los 200 años del Estado mexicano independiente con la metáfora de la luz contrasta con la "oscuridad" de los funcionarios federales y locales en la nómina de pagos de los cárteles de la droga y con la desconfianza y la falta de legitimidad que muchos ciudadanos tienen hacia los funcionarios que combaten en la guerra contra las drogas. Pero además, diversos

5 Ver <http://articles.latimes.com/2012/feb/07/world/la-fgmexico-monument-20120207>.

grupos han ofrecido imágenes desafiantes. La luz falsa de la Estela ha sido contrastada con las pequeñas luces de las numerosas velas de vigilia, encendidas en memoria de quienes murieron en la guerra contra las drogas. Sus familiares han pagado los costos más altos que se puedan imaginar, y sus pérdidas a menudo son compensadas con magras investigaciones policiales, con obstrucción y escasez de información, y con insinuaciones frecuentes sobre la culpabilidad de la víctima en lugar de empatía.

Otro imaginario alternativo es captado por la palabra *esquela*, en lugar de *estela*. Se dice que la forma longitudinal del monumento representa las columnas alargadas de los avisos fúnebres de los periódicos o lápidas. Emilio Álvarez Icaza, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha hablado de la Estela como la "Esquela de Luz" para representar la asociación de las políticas del gobierno con la muerte. Debido a su color amarillento / verdoso y en alusión a la putrefacción del sistema político, la Estela también ha sido llamada "Estela de Pus".[6] En un tono más jocoso la Estela también es conocida, especialmente entre los jóvenes, como la "*suavicrema*" en referencia a una famosa galletita de vainilla. En contraste con la forma en que los activistas acuerdan ampliamente sobre la presencia monumental de la Estela con la oscuridad, esta incluso proveyó un símbolo al movimiento estudiantil *#YoSoy132* para sus acciones de resistencia, donde los estudiantes fueron el faro de luz, que no el Gobierno, en una protesta concertada en la base del monumento. En esa ocasión, un orador dijo: "Los jóvenes hemos encendido una luz en la vida pública del país […] No callemos más"[7]. En clara referencia a la Estela, el movimiento ha elegido como uno de sus *leitmotivs*: "Si no ardemos juntos ¿quién iluminará esta oscuridad para una verdadera democracia?"[8]

Como cuando los manifestantes brasileños ven los estadios, o la forma de punzante de la Estela vista desde las calles aledañas en la Ciudad de México, los artefactos culturales actúan como puntos de entrada para las diversas interpretaciones de oposición que definen lo que está pasando: corrupción, banalidad, injusticia, ilegitimidad, fracaso del Estado, y así sucesivamente. Aquí, artefactos culturales desencadenan marcos de acción colectiva, en el léxico de la perspectiva de los marcos referenciales, el marco de diagnóstico que esboza las

6 Ver <http://lastresyuncuarto.wordpress.com/2012/01/11/lasuavicrema-de-luz/>.

7 Ver <http://www.adnpolitico.com/ciudadanos/2012/05/23/universitarios-del-movimiento-yosoy132-marchan-porreforma>.

8 Ver <http://www.yosoy132media.org/>.

interpretaciones de "lo que está pasando acá". El concepto de marco no ha atraído a la sociología de la cultura de la misma manera que a los estudios de la protesta, aunque los "marcos primarios" son producciones culturales por excelencia (Goffman, 1974). En los estudios de la protesta, la perspectiva de los marcos se ha aplicado para restar énfasis a los micro-procesos que se analizan aquí, aunque el marco referencial básico del interaccionismo simbólico destaca su definición actual de manera paralela a la matriz cultural. De hecho, según su empleo en las cuestiones de movilización, los marcos mayormente no son concebidos en su sentido dinámico, sino en términos de estrategia: ¿cómo enmarcan los líderes y activistas el mensaje del movimiento a fin de maximizar su impacto en el público? (ver Snow, 2004, 2013; Snow et al., 2014).

Cerramos esta sección señalando que la perspectiva de la matriz desarrollada aquí es capaz de: (1) revitalizar el marco referencial como un micro-proceso basado en la realización cultural; e (2) indicar de qué maneras los artefactos culturales, tales como estadios y monumentos, funcionan como disparadores que activan ciertos marcos. Es completamente plausible que cada crítico mexicano de la Estela tenga un esquema de comprensión de esta ligeramente diferente, pero su materialidad artefactual los induce a iniciar las performances de interacción que, en última instancia, redefinen y fusionan las interpretaciones de modo que los marcos sucesivos conducen a acciones colectivas.

EL VIDEO "131 ESTUDIANTES DE LA IBERO"

Jeffrey Alexander ha señalado que el desarrollo de sociedades altamente complejas, diversas y diferenciadas crean las condiciones para –e incluso la necesidad de– la transformación de los rituales en performances (2004: 540). En sociedades menos desarrolladas, los rituales se actúan de acuerdo a libretos preestablecidos, y sus interpretaciones tienden a ser limitadas y cerradas al debate y la controversia. Las performances públicas contemporáneas, por el contrario, son procesos de comunicación simbólica más contingentes, donde los actores tienen mayor flexibilidad y los diversos públicos tienen mayor libertad de interpretación. Para la teoría cultural, las interpretaciones están en todas partes: en la política, la religión, las transacciones económicas, las finanzas y las relaciones internacionales (Alexander, 2006). Comprenden la red de creación de significados y el fundamento del análisis cultural contemporáneo vía las performances narrativas y la lectura de la acción social como un texto. En el campo de los estudios de la protesta, no es sorprendente que el trabajo clásico de Tilly (1995) sobre repertorios trace la transformación de las acciones colectivas

rituales precisas de los *sans culottes* urbanos y de los pueblos rurales, características de las sociedades tradicionales, a una acción contenciosa más flexible, diversa y consciente del público, característica de la sociedad moderna; el repertorio del movimiento social moderno.

Los eventos de protesta en el repertorio moderno también son, fundamentalmente, performances complejas. Tienen diversos actores, públicos –entre los cuales los medios de comunicación masivos desempeñan un rol central–, e interpretaciones multifacéticas basadas en la perspectiva y el contexto (Johnston, 2014). Sus elementos contingentes se ven a menudo en las formas en que se despliegan en direcciones muy distantes a las planeadas originalmente por sus organizadores. Pero las observaciones originales de Alexander sobre el tema se escribieron en el momento en que los investigadores recién comenzaban a indagar las funciones movilizadoras de internet, mucho menos de la web 2.0. En ese momento, estaba surgiendo Facebook y Twitter aún no había aparecido. De hecho, Alexander no podía haber previsto la forma en que los medios de comunicación sociales pueden transformar el análisis cultural de performances y artefactos, ni cómo las performances pueden ser "*artefactualizadas*" y, –como veremos en breve– a la inversa, cómo los artefactos pueden adquirir cualidades performativas al ser digitalizados y publicados en un blog o página de Facebook. El movimiento estudiantil mexicano *#YoSoy132* nos ofrece una oportunidad única y contemporánea para reflexionar sobre los efectos de Facebook, YouTube, Twitter, los teléfonos celulares, la comunicación instantánea y la grabación digital, así como la relación teórica entre performances y artefactos en el contexto del análisis cultural de las protestas. Es importante destacar, en un manual sobre movimientos sociales en América Latina, que lo hace en un contexto que es generalizable: el Estado mexicano es un régimen político en un proceso de transición, caracterizado por una limitada capacidad de respuesta y una apertura restringida a la participación popular en el gobierno. Además, el caso *#YoSoy132* puede arrojar luz sobre los movimientos por mayor participación democrática y transparencia política, no solo en América Latina sino también en Medio Oriente, Asia y África.

#YoSoy132 es la movilización de estudiantes más dinámica que México haya presenciado desde el movimiento estudiantil de 1968. Comenzó como una acción de protesta contra la manipulación de información perpetrada por los medios de comunicación y los políticos –en particular los miembros del PRI y el PVEM– y rápidamente se convirtió en un movimiento estudiantil de base amplia en pos de la democratización de los medios de comunicación, las elecciones libres, justas y documentadas y en oposición a las violaciones de los

derechos humanos y las políticas neoliberales del gobierno. Es el primer movimiento nacional no partidista que ha surgido en medio de una campaña electoral y el primero en haber organizado un debate con los candidatos presidenciales.[9] Es un movimiento horizontal y sin líderes por una democracia real, que tiene reminiscencias de los movimientos de la juventud en España (M15 o los Indignados), los Estados Unidos (Occupy Wall Street), Turquía (Plaza Taksim) y de todo escenario que implique el uso intensivo de las funciones de red de internet vía medios de comunicación social. En el plano teórico, los orígenes de *#YoSoy132* se encuentran en la intersección de las performances, el público y los artefactos culturales. En términos empíricos, sus orígenes se remontan a la visita del candidato presidencial del PRI-PVEM Enrique Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana, una universidad católica y privada en la Ciudad de México.

El viernes 11 de mayo de 2012, el candidato del PRI-PVEM a la Presidencia de México, Enrique Peña Nieto, fue a la Universidad Iberoamericana como parte del foro "Buen Ciudadano Ibero", que incluía conferencias individuales de los candidatos presidenciales.[10] Fue recibido con hostilidad y durante su intervención fue interpelado severamente sobre la represión ejercida el 3 y 4 de mayo de 2006 contra el pueblo de Atenco, los miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y los simpatizantes de La Otra Campaña y el EZLN, mientras él era gobernador del estado de México.[11] Justo

---

9 El debate fue publicado en línea y fue visto más de 1,3 millones de veces.

10 El candidato Manuel Andrés López Obrador fue el primero en visitar la Iberoamericana en 22 de abril de 2012 y dejó la Universidad en medio de gritos de ¡Presidente! ¡Presidente! Ver <http://www.proceso.com.mx/?p=305260Z>. Josefina Vázquez Mota visitó la Iberoamericana el 4 de junio de 2012, después de que el movimiento *#YoSoy132* se había iniciado. Los miembros del movimiento llevaron fotografías de los niños de la guardería ABC que murieron en un incendio en Sonora, México, en 2009. En total, murieron 49 niños y 76 resultaron heridos. La tragedia desencadenó otro "movimiento de dolor y pérdida": Manos Unidas por Nuestros Hijos. Según las investigaciones realizadas por el movimiento, el fuego que mató a los niños fue intencional con el propósito de destruir documentos relacionados con la deuda de $10.000.000.000,00 (10 mil millones de pesos mexicanos) generada durante la administración del ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, en la ejecución de su programa de proyecto de desarrollo llamado "Plan Sonora Proyecta", ver <http://mexico.cnn.com/fotogalerias/2012/06/04/josefinavazquez-mota-visita-la-universidad-iberoamericana>; <http://www.sandiegored.com/noticias/37984/ABC-daycare-fire-was-started-on-purpose/>.

11 De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la represión en Atenco –donde se violaron los derechos de 209 personas, hirieron y torturaron a 206 personas, abusaron sexualmente de 26 mujeres y asesinaron a 2 varones de 14 y 20 años– es una de las más cruentas en la historia de los movimientos sociales.

antes de dejar el auditorio, Peña Nieto decidió responder a ese planteo. Sin titubear se refirió a la brutal represión en Atenco como un acto de autoridad "[…] que asumo personalmente, para restablecer el orden y la paz, en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública, como además debo decirlo, fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias".[12] El público reaccionó enérgicamente a su respuesta autoritaria. Cuando salía de la Universidad, Peña fue seguido por un grupo de estudiantes que abucheaban: ¡La Ibero no te quiere! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Cobarde! ¡Asesino! y otras expresiones de rechazo.[13] Sus otras actividades en la universidad fueron canceladas y Peña Nieto salió de la universidad por una puerta lateral.

A propósito de la observación de Alexander (2012) sobre la contingencia de las performances, basta decir que Peña Nieto no tenía idea del drama que le deparaba aquel día. Podrá haber anticipado este tipo de preguntas, pero las exclamaciones y la falta de respeto mostradas por los estudiantes, y su retirada rápida y poco decorosa, ciertamente, no fueron previstas. Además, desde la perspectiva de los estudiantes, sus planes se han desarrollado en direcciones inesperadas. Mientras que los estudiantes, en particular desde el departamento de Comunicaciones, habían examinado los registros de Peña Nieto y tenían previsto interrogarlo sobre eso, no podían haber anticipado el curso en que se desarrollarían los acontecimientos. De antemano, la comparecencia de Peña Nieto en la universidad, difícilmente podría haberse considerado como un evento riesgoso. La Universidad Iberoamericana (UIA) es una institución educativa donde la oposición política ha sido escasa. Sin embargo, y a pesar de los intentos de su personal para prevenir este tipo de performances de oposición a través del soborno y la intimidación (Muñoz, 2011; Figueiras, 2012), su aparición en la Iberoamericana se desplegó de tal manera que su visita se convirtió en un punto de inflexión, no solo para su campaña y todo el proceso electoral, sino también para el movimiento social mexicano. La performance de protesta de los estudiantes de la Ibero fue condenada enérgicamente por algunos comentaristas, ignorada por otros y –significativo para el desarrollo del movimiento, en especial– distorsionada adrede por representantes de alto rango del PRI y el PVEM, y por las principales cadenas televisivas y la prensa escri-

12 Rosa Elvira Vargas, *La Jornada*, sábado 12 de mayo de 2012, p. 5.

13 Ver, por ejemplo, <http://www.youtube.com/watch?v=VCa1QwwwF6s>; <http://www.youtube.com/watch?v=xlqS1abNCkw>.

ta. Entre los políticos, el vocero del PVEM, el presidente del PRI y el líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares del PRI pusieron en duda la identidad de los manifestantes, sembrando dudas sobre si eran estudiantes universitarios, implicando que estaban presentes como agentes provocadores de otros partidos. Estas declaraciones ultrajaban la autonomía de los estudiantes, al minimizar la veracidad de sus preguntas y la autenticidad de su performance de protesta. Los eventos en la Universidad también fueron socavados por sectores de los medios de comunicación que, o bien no cubrieron el evento, o lo editaron eliminando las manifestaciones de protesta. Además, los periódicos vinculados a la Organización Editorial Mexicana oficial, la mayor organización de medios de comunicación en México,[14] reportaron una actuación exitosa y encantadora de Peña Nieto –justo lo contrario de lo que sucedió.

El presidente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, se refirió a los estudiantes como "un grupo de jóvenes intolerantes" como "un grupo de jóvenes que no eran representativos de la comunidad Iberoamericana".[15] El líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares del PRI, Emilio Gamboa Patrón, declaró que era responsabilidad de las autoridades de la Ibero investigar "quién había estado detrás de los estudiantes" exactamente, quiénes habían protestado contra la visita de Peña Nieto a la Ibero.[16] Por último, el vocero del Partido Verde, Arturo Escobar, cuando narraba lo que estaba ocurriendo en la universidad, dijo que los manifestantes no eran jóvenes, sino que tenían entre 30 y 35 años de edad; que no eran "más de 20" y que "eran grupos cercanos a López Obrador".[17] En una tergiversación aún más obtusa de la performance en la Ibero, los periódicos *El Sol de México* y *La Crónica de Hoy* publicaron en su página principal: "Éxito de Peña en la Ibero, pese al intento orquestado de boicot". En cierto punto, y de forma similar a lo ocurrido en Egipto con los canales inglés y árabe de Al Jazeera (Alexander, 2012: 68), los videos que se difundieron en YouTube yuxtaponen el montaje pacífico, solidario y afable transmitido por Televisa con las imágenes de los estudiantes abucheando a Peña Nieto. Como sostuvo un observador: "Fue increí-

---

14 La Organización Editorial Mexicana publica 70 periódicos a nivel local, regional y nacional, tiene 24 estaciones de radio, una agencia de noticias, un canal de televisión y 44 sitios de internet.

15 Figueiras Tapia (2012).

16 Ver <http://mexico.cnn.com/nacional/2012/05/11/el-pri-llama-intolerantes-a-los-jovenes-que-abucearon-a-pena-en-la-ibero>.

17 Ver <http://www.youtube.com/watch?v=hca6lzoE2z8>. López Obrador es el candidato presidencial de la izquierda.

ble. Si se compara lo que pasó con lo que se presentó en televisión, claramente son dos mundos diferentes".[18]

Los estudiantes de la Iberoamericana se sintieron ofendidos por la caracterización negativa de ellos en los medios de comunicación, por los reportes inciertos de la protesta y por la aceptación general del libreto armado por el PRI sobre los eventos. De hecho, sin la campaña de tergiversación coordinada oficialmente y sin la dramática respuesta de los estudiantes, la protesta en la Ibero, probablemente, hubiera sido olvidada pronto, cuando el ciclo de atención de los medios de comunicación pasara a otros temas. Sin embargo, las investigaciones de políticas públicas muestran que la imagen pública de un grupo es crucial para la manera en que se aceptan sus posiciones (Donovan, 2001; Schneider e Ingram, 1993; Itkonen, 2007), y los manifestantes con una imagen pública desfavorable tienen más probabilidades de ser ignorados y desacreditados. Los estudiantes no estaban dispuestos a dejar pasar el ataque de la narrativa oficial sin responder. Agravando su desafío, la batalla por la cobertura mediática se libró en una cancha inclinada. Por un lado, los manifestantes necesitaban los medios de comunicación más que los medios a ellos (Gamson y Wolfsfeld, 1993). Por el otro, la aceptación del relato oficial de las protestas refleja cómo los funcionarios públicos, los candidatos políticos y los representantes de los partidos reciben respaldo automático de los medios de comunicación, mientras que los actores de movimiento deben luchar para establecerlo. Más que en otros regímenes estatales, en México los medios masivos no son autónomos y neutros, aunque a menudo son agentes y lacayos de los grupos dominantes que los movimientos desafían.

A esta combinación de performance de protesta y confrontación del público, se agregan Facebook, Twitter y teléfonos celulares. Los medios de comunicación social tienen el potencial de reducir drásticamente la necesidad de los grupos de protesta de tener cobertura en los medios de comunicación tradicionales. Las performances artefactualizadas a través de las tecnologías digitales pueden desempeñar un papel decisivo en la conformación de las percepciones del público, y pueden convertirse en elementos integrales en el despliegue de la performance de la protesta. Consideremos las imágenes del cuerpo caído de Neda Agah-Soltan, tiroteado por las fuerzas de seguridad el 22 de junio de 2009 durante las protestas callejeras como parte de las movilizaciones del Movimiento Verde iraní con-

18 Ver <http://classwaru.org/2012/06/11/yosoy132-student-led-uprising-in-mexico-an-interview-with-patrick-cuninghame-professor-mexico-city/>.

tra las elecciones fraudulentas. La conmovedora imagen se viralizó por todo el mundo, convirtiéndose en un artefacto que representa la brutalidad y la falta de respuesta del régimen. Esta clase de imágenes pueden desafiar las auto-caracterizaciones del régimen como defensores moderados del orden público, como lo hacen las fotos de los rastrillajes de la seguridad siria en Homs y Alepo y, por el contrario, pueden desempeñar un papel clave al desafiar las caracterizaciones desfavorables de los manifestantes por parte de oponentes poderosos, disputando la cobertura mediática distorsionada y creando interpretaciones alternativas de los acontecimientos y las personas. Además, pueden contribuir a revelar de manera inequívoca el papel sesgado, partidario y comprometido de los medios de comunicación. La grabación de imagen y sonido es una tecnología que presenta oportunidades para las artefactualizaciones de performances muy dispersas.

Los vídeos de YouTube son vistos por millones de personas y analizados por los comentaristas de los medios, ciudadanos y activistas, volviéndolos disponibles para nuevas categorías de hacer cultura. Independientemente de la forma que tomen las performances artefactualizadas, su producción original se produce en contextos diferentes de su lectura y/o reproducción posterior y se convierten en el foco de nuevas performances y generan diferentes interpretaciones. Una performance artefactualizada tiene una vida cultural diferente de la original e invoca la práctica cultural activa de los participantes subsiguientes (Johnston, 2009, 2010).

Indignados por la tergiversación de los medios de comunicación respecto de los eventos en la Universidad Iberoamericana, y en respuesta directa al intento de los miembros de alto rango del PRI y PVEM de denigrar su imagen pública, los estudiantes realizaron un video para demostrar que el relato oficial de los acontecimientos era falso. Enmarcado como una afirmación del derecho básico de los estudiantes de responder a las acusaciones contra ellos, el video comienza con un formato de carta de presentación que interpela directamente a los políticos vinculados al PRI y PVEM que habían intentado construir una imagen pública negativa de los manifestantes.

Estimados Joaquín Coldwell, Arturo Escobar, Emilio Gamboa, así como medios de comunicación de dudosa neutralidad. Usamos nuestro derecho de réplica para desmentirlos. Somos estudiantes de la Ibero, no acarreados, no porros, y nadie nos entrenó para nada.

Esta presentación inicial es seguida por una secuencia de 11 minutos en la que 131 mujeres y hombres jóvenes frente a cámara, en primer plano, simplemente sostienen sus credenciales universitarias mientras dicen sus nombres y su número de identificación. No hay demandas, no hay llamadas a movilización ni solicitudes de apoyo.

Los manifestantes simplemente destacaron, de una forma dramática, su identidad como estudiantes y que no eran agitadores enviados por los partidos de la oposición.

A través de la consecuente creación de un "artefacto de identidad digital", los estudiantes pudieron contar su versión de la historia. Al demostrar quiénes eran realmente, los estudiantes también le aclararon al público que habían sido acusados injustamente por los representantes del PRI y PVEM y que las representaciones de los medios de comunicación no eran de buena fe, por decir poco. De esta manera, pudieron participar activamente en la construcción de su imagen pública: esto no fue una victoria menor, dada la concentración de los medios de comunicación tradicionales en México y su enorme influencia política. Además, al exhibir su "verdadera identidad", los estudiantes mostraron de manera inequívoca el papel sesgado, partidista y comprometido de los medios masivos.

El video "131 Estudiantes de la Ibero" se difundió ampliamente a través de las redes digitales. Fue publicado en YouTube el 14 de mayo a las 8:30 h, y a las 14:25 h ya había sido visto por 21.747 usuarios. En Twitter, se convirtió rápidamente en *trending topic;* el tema "131 Estudiantes de la Ibero" ocupó el primer lugar en la lista de tendencias hasta las 19: 00 h.[19] Entre las múltiples interpretaciones que el video suscitó se destacó una en particular. En medio de conversaciones con amigos, algunos de ellos de la Ibero, a un estudiante del Tecnológico de Monterrey en la Ciudad de México, se le ocurrió la idea de crear el *hashtag* y una página web titulada *#YoSoy132* (Figueiras 2012; Muñoz y *Desinformémonos*, 2011). A través de esta micro-performance, digitalizada y artefactualizada el estudiante se unió simbólicamente a los 131 estudiantes de la Ibero que aparecen en el video. Al hacerlo, no solo expresó su apoyo personal a su causa sino que, fundamentalmente, amplió el artefacto cultural al crear simbólicamente el intersticio 132, un espacio vacío, un puesto vacante, un lugar desocupado a ser apropiado por todo simpatizante con la protesta de los estudiantes de la Iberoamericana. Simbólicamente, número 132 es un ciudadano de México que está indignado, en lo inmediato, por las declaraciones públicas falaces que siguieron a la protesta y/o enfurecido por la cobertura mediática sesgada, parcial e interesada de los hechos. Es un artefacto con diversas interpretaciones. Pero también, y de manera más amplia, no lo es. 132 está indignado por la falta de respuestas y la corrupción características de la política institucional en su país, por el déficit de la democracia que impera allí y por los intereses en-

19 Ver <http://www.proceso.com.mx/?p=307494>; Figueiras Tapia (2012).

quistados que bloquean la reforma política. Estas interpretaciones del artefacto cultural mejoraron aún más su rol, de manera tal que resultó decisivo para la trayectoria de movilización del movimiento estudiantil.

En los días siguientes, se impulsaron movilizaciones bajo el *hashtag #YoSoy132* y otros similares, como *#MarchaYoSoy132*. El 23 de mayo, entre 15 mil y 20 mil estudiantes de universidades públicas y privadas, jóvenes y ciudadanos se congregaron en la base de la Estela de Luz, y ahí el movimiento *#YoSoy132* levantó vuelo. Desde entonces, se expandió a nivel nacional. Asiduamente, se llevaron a cabo asambleas estudiantiles, y en cada una de las universidades del país se formó una rama propia. Con aproximadamente 3,5 millones personas que votarían por primera vez en las elecciones del 2012, el movimiento estudiantil cambió radicalmente el proceso electoral al organizar un debate público con todos los candidatos presidenciales –excepto Peña Nieto, que declinó la invitación a participar–, y al restaurar la incertidumbre en la contienda electoral que, hasta la aparición del movimiento, grandes sectores de la sociedad mexicana percibían como un triunfo seguro del PRI. El movimiento continuó después de las elecciones del 1 de julio, celebra reuniones nacionales periódicamente y se pronuncia en cada debate importante en la agenda pública, como la reforma al sistema educativo y el sector energético y, obviamente, sobre la democratización de los medios de comunicación.[20]

Esta breve crónica de cómo las raíces del movimiento *#YoSoy132* se centran en un artefacto digital, basado en los medios de comunicación social que resonó ampliamente entre la juventud mexicana muestra que, en lugar de ser hijastros relegados del análisis cultural, los artefactos culturales –su producción, su arraigo social y las maneras en que el público responde a ellas– pueden desempeñar roles clave en el derrotero de un movimiento. De hecho, las raíces de *#YoSoy132* en un video en línea muy visitado y en las respuestas que suscitó en los medios sociales muestran que los artefactos digitales pueden ser instrumentales para dar vida a un movimiento. Atraen a diversas poblaciones, enlazadas por el drama que representa su presencia como artefactos, y luego conecta a los visitantes en espacios donde se pasa información y se desarrollan debates. Esto contrasta con las relaciones relativamente fijas de las estructuras de movilización de los movimientos del pasado. Este caso en particular ilustra muy bien cómo los artefactos culturales pueden ser utilizados en la

20 Para más información, ver <http://www.yosoy132media.org>.

producción de significados de oposición y cómo el despliegue de los eventos y acciones en torno a ellos puede llegar a ser fundamental para la identidad y la génesis del movimiento. Lo que nos gustaría destacar en este punto es que esto no ocurrió por el boceto de marcos estratégicos y movilizaciones de un movimiento grupal, sino por el entramado complejo y extenso de performances, públicos y artefactos culturales.

Así como las performances individuales pueden ser artefactualizadas y convertirse en una nueva clase de performance que produce un "artefacto cultural", este último también puede servir como objetivo de nuevas interpretaciones y performances. Puesto que son objetos materiales, concretos, los artefactos culturales pueden ser discutidos, resignificados, amplificados o expropiados para acciones futuras por los miembros y por los no miembros del movimiento, por igual. Como se señaló anteriormente, los artefactos adquieren relevancia porque siempre son interpretados por sus públicos. Las interpretaciones cobran vida a medida que se difunden entre redes de interacción interpersonales mediante las micro-performances de las propias comprensiones de los actores. Los artefactos se convierten en el soporte de las micro-performances de oposición cuando los espectadores discuten sobre estas, comentan su significado y su audacia y, en algunos casos, reaccionan con nuevas performances que, a su vez, pueden incrementar el rol opositor de los artefactos culturales.

CONCLUSIÓN

Este capítulo se ha construido en base a la proposición que donde persisten residuos de un pasado menos democrático, como es el caso de México y otros países de América Latina, los puntos de vista culturales de la protesta social pueden ser particularmente útiles porque los canales directos de acceso político permanecen menos abiertos. Esta proposición implica que para tener una mejor comprensión de los movimientos sociales debemos reconocer a la cultura como constitutiva de la política, advirtiéndonos contra la visión que permea gran parte del trabajo actual sobre movimientos sociales, ya sea desde la perspectiva del proceso político o el enfoque de los nuevos movimientos sociales, de la cultura y la política como dos esferas opuestas, adhiriendo a los trabajos recientes del análisis cultural de los movimientos sociales.

Se han identificado tres elementos básicos de la sociología de la cultura particularmente relevantes para el estudio de la protesta social: artefactos culturales, performances y públicos. Con respecto a los artefactos culturales, hemos sostenido que ofrecen al investi-

gador de los movimientos sociales una forma más elaborada de pensar acerca de los procesos de movilización. En lugar del hijastro del análisis cultural, o, como se estila en la investigación del movimiento social, simplemente "potentes símbolos de movilización", vemos:

» La diversidad de interpretaciones que los rodean. Con respecto a la Estela, no solo está la interpretación oficial, o la oficial y la de oposición, sino también múltiples interpretaciones que varían según las ramas de la matriz,
» El movimiento de estas interpretaciones diversas a través de las ramas de la matriz cultural, donde son reforzadas, elaboradas, probadas y corroboradas por medio de micro-performances, y luego,
» Su fusión alrededor de los temas de ilegitimidad general del Estado como performances colectivas más grandes, tales como protestas, marchas, manifestaciones, discursos, entre otros, que crea sitios de significación adicional para los participantes y proporciona experiencias comunes ampliamente compartidas,
» Los artefactos culturales desencadenan la aplicación de marcos de acción colectiva que, aunque son muy variables (ya que son individuales y están guardados en la memoria según las experiencias pasadas), se vuelven "colectivos" en micro-performances cuando los actores individuales discuten sus interpretaciones con los otros. Esto es, el proceso colectivo por el cual los marcos se cuajan alrededor de interpretaciones compartidas.

En suma, una comprensión más completa de los procesos de encuadre nos exige ir más allá de: (1) el sesgo ideacional y escrito en el estudio de los procesos de encuadre, y (2) la tendencia a estudiar los procesos de encuadre desde una perspectiva instrumental centrada en el movimiento.

Nuestros dos casos han demostrado también que la puesta en escena de una performance de protesta resonante puede ser en sí misma un logro importante en regímenes menos democráticos, ya sea por la obstrucción estatal, la represión o la manipulación de los medios de comunicación. Estos casos también han demostrado que con la artefactualización de las performances, ya sea a través de las tecnologías digitales o de la creatividad en la interpretación del simbolismo, los movimientos sociales pueden aumentar su capacidad de oposición. Esto ha permitido que los movimientos desafíen las interpretaciones desfavorables de los oponentes poderosos, disputen la cobertura mediática distorsionada, influyan en las percepciones del público sobre la situación y eludan la vigilancia y la represión desaforada.

Para cerrar, lo vemos en un punto de convergencia entre los dos movimientos que se describen en este capítulo. Así como los estudiantes de la Iberoamericana estaban indignados, los miembros del MPJD se sintieron profundamente ofendidos por los intentos gubernamentales de caracterizar a las víctimas del crimen organizado como "daños colaterales", "meros números" o "estadísticas". También se han indignado por las declaraciones infames que atentan contra la inocencia de las víctimas, sugiriendo que aquellos a quienes asesinaron o desaparecieron "algo habrán hecho" o "deben haber participado en actividades delictivas". La costumbre de las autoridades mexicanas de asumir que las víctimas mismas son delincuentes o están relacionadas con criminales se ha convertido en un reclamo que el MPJD y su fundador, Javier Sicilia, han confrontado durante toda la campaña para esclarecerlo.

También, como *#YoSoy132*, el movimiento MPJD ha tenido mucho éxito al mostrar que esto no es cierto. Su éxito no se ha basado en artefactos digitales sino más bien en actos performativos sencillos, como la pronunciación de los nombres de las víctimas, y en pequeños artefactos culturales. Por ejemplo, a pesar de haberse inaugurado casi en secreto, la ceremonia de apertura de la Estela fue interrumpida por una performance del MPJD en la cual, además de la luz de las velas, por un altavoz se gritaba el nombre completo de una víctima, mientras que el público respondía "¡no debió haber muerto!" Aparte de estas performances, el movimiento ha recurrido a los artefactos culturales que apuntan a la transformación de los números generales y fríos de la guerra contra las drogas de Calderón en seres humanos únicos, irrepetibles, con un nombre y un apellido. Ha colocado placas –similares a las placas conmemorativas que se encuentran en calles, monumentos y otros lugares públicos y que tienen reminiscencia con las placas de nombres en las lápidas– en plazas, edificios e incluso en la Estela. La colocación de las placas o baldosas no ha pasado desapercibida, y las autoridades locales e institucionales las han eliminado, algunas de las cuales fueron reemplazadas posteriormente por el movimiento o por las mismas autoridades. Cuando un ciudadano, o un vecino del barrio o un visitante ve una placa de identificación, él o ella recuerda que la estrategia de Calderón contra los traficantes de drogas ha costado una vida, ha destruido una familia y les ha provocado a las comunidades un profundo dolor. Las placas de identificación desencadenan la aplicación de marcos de acción colectiva que ayudan a construir interpretaciones de oposición al discurso oficial de Calderón, que lo obligaron a cambiar y reconocer públicamente el alto costo social de su estrategia contra las drogas, transformando también la cobertura de los medios de comunicación y el debate pú-

blico sobre el crimen organizado, el narcotráfico, y la capacidad del Estado.

Al centrarnos en la compleja y extensa interacción entre performances, público y artefactos culturales, hemos presentado una explicación convincente de los movimientos sociales contemporáneos en México que va más allá de los enfoques estratégicos de la protesta, demostrando la centralidad de los artefactos culturales, y del análisis cultural en general, en la explicación de los movimientos de protesta y su despliegue.

BIBLIOGRAFÍA

Alexander, J. 2004 'Cultural pragmatics: Social performance between ritual and strategy' en *Sociological Theory, 22*(4): 527-573.

Alexander, J. 2012 *Performative revolution in Egypt* (Londres: Bloomsbury Academic).

Alexander, J., Giesen, B., & Mast, J. L. 2006 *Social performance: Symbolic action, cultural pragmatics and ritual* (Nueva York: Cambridge University Press).

Archer, M. S. 1996 *Culture and agency: The place of culture in social theory* (Nueva York: Cambridge University Press).

Benford, R. 1993 'Frame disputes in the nuclear disarmament movement' en *Social Forces*, *71*: 409-430.

Benford, R. 1997 'An insider's critique of the social movement framing perspective' en *Sociological Inquiry*, *67*: 409-430.

Davis, J. E. 2002 *Stories of change: Narrative and social movements* (Albany: SUNY Press).

Di Maggio, P. J. 1997 'Culture and cognition' en *Annual Review of Sociology, 23:* 263-287.

Donovan, M. C. 2001 *Taking aim: Target populations and the wars on AIDS and Drugs* (Washington, DC: Georgetown University Press).

Ewick, P. y Silbey, S. 2003 'Narrating social structure: Stories of resistance to legal authority' en *American Journal of Sociology*, *108*: 1.328-1.372.

Figueiras Tapia, L. (coord.) 2012 *Del 131 al #YoSoy132. Elección 2012* (México D. F.: Comunicación y Política Editores).

Goffman, E. 1974 *Frame analysis* (Cambridge: Harvard University Press).

Gamson, W. y Wolfsfeld, G. 1993 'Movements and media as interacting systems' en *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, *528*: 114-125.

Gamson, W.; Fireman, B. y Rytina, S. 1982 *Encounters with unjust authority* (Homewood: Dorsey).

Goodwin, J. y Jasper, J. M. 2004 *Rethinking social movement* (Lanham: Rowman & Littlefield).

Inglehart, R. 1990 *Culture shift in advanced industrial society* (Princeton: Princeton University Press).

Inglehart, R. 1997 *Modernization and postmodernization: Cutlual economic, and political change in 43 societies* (Princeton: Princeton University Press).

Itkonen, T. 2007 'Politics of passion: Collective action from pain and loss' en *American Journal of Education*, *113*(4): 577-604.

Jasper, J. M. 1997 *The art of moral protest* (Chicago: University of Chicago Press).

Johnston, H. 1995 'A methodology for frame analysis: From discourse to cognitive schemata' en Johnston, H. y Klandermans, B. (eds.) *Social movements and culture* (Minneapolis: University of Minnesota Press) pp. 217-246.

Johnston, H. 2009 *Culture, social movements, and protest* (Aldershot: Ashgate).

Johnston, H. 2010 'Cultural analysis of political protest' en Leicht, K. T. y Jenkins, J. C. (eds.) *Handbook of politics* (Nueva York: Springer) pp. 327-348.

Johnston, H. 2014 *What is a social movement?* (Cambridge: Polity Press).

Johnston, H. y Klandermans, B. 1995 *Social movements and culture* (Minneapolis: University of Minnesota Press).

Muñoz Ramírez, G. y Desinformémonos (coords.) 2011 *#YoSoy132* (México D. F.: Ediciones Bola de Cristal).

Norton, A. 2004 *Ninety-five theses on politics, culture, and method* (New Haven: Yale University Press).

Polletta, F. 2006 *It was like a fever: Storytelling in protest and politics* (Chicago: University Chicago Press).

Rochon, T. R. 1998 *Culture moves: Ideas, activism, and changing values* (Princeton: Princeton University Press).

Romero, S. y Neuman, W. 2013 'Brazil protests pull in array of grievances' en *New York Times*, 21 de junio, A1.

Schneider, A. y Ingram, H. 1993 'Social construction of target populations: Implications for politics and policy' en *American Political Science Review*, *87*(2): 334-347.

Snow, D. 2004 'Framing processes, ideology, and discursive fields' en Snow, D. A.; Soule, S. A. y Kriesi, H. (eds.) *The Blackwell companion to social movements* (Malden: Blackwell) pp. 380-412.

Snow, D. A. 2013 'Framing and social movements' en Snow, D. A. et al. (eds.) *Encyclopedia of social and political movements* (Malden: Wiley-Blackwell) pp. 470-475.

Snow, D. A. y Benford, R. D. 1988 'Ideology, frame resonance, and participant mobilization' en Klandermans, B.; Kriesi, H. & Tarrow, S. (eds.) *International social movement research* (Greenwich: JAI Press) pp. 197-217.

Snow, D. A. et al. 1986 'Frame alignment processes, micromobilization, and movement participation' en *American Sociological Review*, *51*: 464-481.

Snow, D. A. et al. 2014 'The emergence and development of framing perspective: Twenty-five years since the publication of frame alignment and what lies ahead' en *Mobilization*, *19*(1): 227-246.

Steinberg, M. W. 1999 *Fighting words: Working-class formation, collective action, and discourse in early nineteenth century England* (Ithaca: Cornell University Press).

Stryker, S.; Owens, T. J. y White, R. W. (eds.) 2000 *Self, identity, and social movements* (Minneapolis: University of Minnesota Press).

Wildavsky, A. 2006 *Cultural analsysis* (New Burnswick: Transaction Publishers) Edited by Brendon Swedlow.

Young, M. 2002 'Confessional protest: The religious birth of U.S. national social movements' en *American Sociological Review*, *67*: 660-688.

CÓMO CITAR ESTA PUBLICACIÓN:
Tavera Fenollosa, Liga and Hank Johnston. 2017. "Artefactos de protesta en el campo del movimiento social mexicano: Reflexiones en torno al "hijastro" del análisis cultural" Pp. 115-142 en Paul Almeida y Allen Cordero Ulate, Eds., *Movimientos Sociales en América Latina: Perspectivas, Tendencias y Casos*. Buenos Aires: CLACSO.

PARTE II:
TEMAS CRÍTICOS DE LA MOVILIZACIÓN POPULAR CONTEMPORÁNEA

6

Lynn Horton*

MOVIMIENTOS DE MUJERES EN AMÉRICA LATINA

INTRODUCCIÓN

La trayectoria de la movilización de las mujeres en América Latina contemporánea incorpora avances importantes y desafíos en curso. Con una ola de reformas legislativas y normativas en toda la región las mujeres habían logrado, en gran parte, igualdad formal ante la ley a fines de la década de 2000. Participan en trabajo remunerado fuera del hogar, en un número considerable, y están avanzando rápidamente en logros educativos. Sin embargo, las mujeres en América Latina todavía se enfrentan a una serie de desafíos vinculados a las intersecciones de sus identidades de género, clase, raciales/étnicas. En términos económicos, las mujeres se concentran en los empleos precarios y mal pagados del sector informal. Ellas ganan en promedio de 10% a 40% menos que los hombres y el 28% de los hogares indigentes de la región están encabezados por mujeres (Banco Mundial, 2012: 7, 23).

Los cupos de género, actualmente en vigor en una docena de países de América Latina, han aumentado la representación política de las mujeres, y sin embargo las mujeres siguen enfrentando barreras de género para acceder y participar en las arenas políticas formales

* Chapman University, Orange, EEUU.

(Jaquette, 2009). En el hogar, las mujeres deben lidiar a menudo con relaciones de poder desiguales y el control de los recursos, así como con violencia y sexismo. La integridad física y el bienestar de las mujeres de América Latina también están en riesgo por las limitaciones que enfrentan para tener el control de su sexualidad y obtener acceso a servicios de salud reproductiva seguros y asequibles y a educación sexual. Gran parte de esta persistente desigualdad se ve reforzada a través de las ideologías de género que representan actividades, rasgos y valores masculinos que son identificados como superiores. Las contribuciones de las mujeres en el hogar, la comunidad y la nación se devalúan y se vuelven casi invisibles, aún cuando las mujeres reciben la responsabilidad primordial en el trabajo no remunerado de labores domésticas y el cuidado de niños.

Las respuestas individuales y colectivas de las mujeres a estos patrones de exclusión y desigualdad han sido diversas, formados por distintas historias nacionales, culturas y procesos políticos. Asimismo, sus experiencias como activistas están mediadas por el género, la clase y por sus identidades raciales y étnicas. Para las mujeres afrodescendientes, indígenas, de bajos ingresos y campesinas, en particular, la desigualdad de género se agrava con la discriminación por raza, clase y procedencia.

De este panorama diverso de feminismos en la región, en las próximas secciones se identifican varias etapas extensas de movilización de mujeres en América Latina contemporánea. Primero, el capítulo explora la movilización de las mujeres en los 70 y 80 contra los regímenes autoritarios y a favor de las causas nacionalistas y de clase. Examina cómo, para las mujeres, las experiencias de las estructuras de oportunidad política, incorporación al movimiento, encuadre y agravios vinculados a la identidad se diferenciaron de aquellos en los movimientos dominados por hombres.

Las secciones siguientes exploran los factores que impulsaron a las mujeres a una segunda fase de mayor conciencia feminista en los 90, y cómo los movimientos de mujeres han luchado con autonomía de los partidos políticos de izquierda y el Estado. Finalmente, en este capítulo se identifican diversos aspectos importantes en ciernes para los movimientos de mujeres, la implementación y la aplicación de leyes y políticas de igualdad de género, la diversidad entre las mujeres y las implicancias de género de las nuevas políticas sociales en la región. Para ilustrar esas tendencias, este capítulo se basa en fuentes secundarias, así como en 38 entrevistas realizadas por la autora con mujeres activistas de base, de los niveles regional y nacional en Nicaragua y El Salvador.

UNA MOVILIZACIÓN QUE NO SE BASA EN EL GÉNERO

Las mujeres en América Latina tienen una larga historia de movilización en una variedad de temas sociales y políticos. La primera ola de feministas a principios del siglo XX luchó para conseguir el sufragio, reformas democráticas y códigos de familia equitativos. El resurgimiento de la movilización de mujeres en los 70 y 80, sin embargo, tuvo varias características distintivas. Mientras que las mujeres en la región siempre habían sido conscientes de las desigualdades y la discriminación de género, las mujeres en los albores de esta segunda ola no necesariamente colocaban la igualdad de género en el centro de sus luchas (Craske, 1999). Antes bien, se movilizaron a favor de las reformas democráticas, el nacionalismo y el socialismo, y en contra de las políticas económicas neoliberales. Tres procesos nacionales y mundiales facilitaron activismo colectivo de las mujeres: las características de género de la represión política desplegada por los regímenes autoritarios de esta época; el surgimiento de movimientos izquierdistas, nacionalistas; y los impactos de las reformas económicas neoliberales en las mujeres.

Los académicos han enfatizado mucho en la importancia de las estructuras de oportunidades políticas favorables para la aparición y la eficacia de los movimientos sociales en América Latina. Tales aperturas no son universales en su alcance, pues son interpretadas y experimentadas de manera diferente por las mujeres (Franceschet, 2005). En particular, los períodos de transición nacional y realineación política que desarticulan y desbaratan espacios políticos, instituciones y prácticas tradicionales y dominadas por los hombres, pueden crear nuevas aperturas favorables para los movimientos de mujeres.

Esto ocurrió en países como Argentina y Chile, donde los regímenes autoritarios redujeron brutalmente los espacios formales de participación política mediante el cierre de las asambleas nacionales, la ilegalización de los partidos políticos y al señalar a los activistas varones como blancos para la represión. La violencia estatal intensificó el sentido, la indignación y los reclamos de las mujeres, especialmente cuando los compañeros y los miembros de sus familias se convirtieron en víctimas. En el contexto del colapso de los espacios políticos formales de disidencia, las mujeres se movilizaron en espacios informales para abogar por los derechos humanos. Fundaron organizaciones de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo en Argentina, Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Chile y Madres de los Desaparecidos (CoMadres) en El Salvador. La movilización de las mujeres en cuestiones de derechos humanos se

vio favorecida por las normas tradicionales de género en América Latina que han representado a las mujeres como apolíticas, con una moralidad superior, sacrificadas y sujetas a la protección masculina. En algunos casos, estas normas de género paternalistas ofrecieron a las mujeres activistas algún grado de protección contra la represión del Estado (Jaquette, 2009).

Las mujeres también se integraron a movimientos revolucionarios, nacionalistas y dominados por hombres. Los movimientos como el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua adoptaron un discurso de igualdad de género y reclutaron activamente a mujeres en sus organizaciones guerrilleras. Este reclutamiento de mujeres surgió de la necesidad de establecer rangos, así como del reconocimiento de los líderes de las formas en que las mujeres podían subvertir las normas tradicionales de género y hacer contribuciones únicas (Viterna, 2013). Las mujeres combatientes y colaboradoras, eventualmente, llegaron a ser casi un tercio de la composición de estos movimientos revolucionarios (Kampwirth, 2004; Luciak, 2001).

Un tercer factor en los albores de la segunda ola de movilización de las mujeres fue la implementación de las reformas económicas neoliberales. Estas reformas en América Latina han incluido típicamente las políticas de libre comercio, las privatizaciones, la reducción de los servicios y los subsidios de los Estados y el debilitamiento de las protecciones laborales. Los especialistas identifican un sesgo masculino en la conceptualización e implementación de tales reformas. En particular, la merma de los servicios estatales y una mayor precarización de las condiciones de trabajo afectan desproporcionadamente a las mujeres, en el cruce de los términos de género y clase (Elson, 1992).

Las mujeres de bajos ingresos, en sus roles de madres responsables de la supervivencia familiar, han tenido que lidiar con la intensificación de la inseguridad y el estrés, y el aumento de sus cargas de trabajo doméstico y de cuidado que ya eran excesivas y sin remunerar. En países como Ecuador y Chile, las mujeres organizaron comedores comunitarios y se movilizaron colectivamente para exigir el acceso asequible a vivienda, alimentos, agua y transporte público (Lind, 2005). De manera similar a las mujeres de los movimientos de derechos humanos y revolucionarios, las mujeres urbanas de bajos ingresos que se movilizaron contra el neoliberalismo no priorizaron intereses de género. Antes bien, las preocupaciones de clase, la indignación moral y el compromiso con el socialismo nacionalista fueron factores clave de motivación

BARRERAS A LA PARTICIPACIÓN EN EL MOVIMIENTO

Junto con las estructuras de oportunidades políticas de género, las mujeres han enfrentado limitaciones sociales y materiales específicas de género para participar plenamente en los movimientos sociales. Esta sección destaca las entrevistas realizadas por la autora a las dirigentes regionales, de base de los movimientos de mujeres en El Salvador y Nicaragua. Muchas de las mujeres, que luego formaron parte de los liderazgos centrales de los movimientos feministas contemporáneos, comenzaron su activismo en movimientos revolucionarios de izquierdas: el FMLN en El Salvador y el FSLN en Nicaragua.

En las entrevistas, las mujeres identificaron los materiales específicos de género y los factores socioculturales que han bosquejado su capacidad y disposición para unirse a los movimientos sociales. En primer lugar, las mujeres en general tienen acceso desigual a recursos sociales y económicos, y enfrentan desigualdades culturales y de poder que limitan, especialmente, a las mujeres de bajos ingresos. Por ejemplo, las dirigentes de base en Nicaragua y El Salvador indicaron que incluso pequeños gastos, como perder varias horas de trabajo o pagar el pasaje de autobús para asistir a una reunión, son serios obstáculos para las mujeres pobres.

Las barreras económicas se ven agravadas por la división sexual del trabajo que hace recaer en las mujeres la responsabilidad primaria del trabajo doméstico y el cuidado de los niños. La doble carga de trabajo de las mujeres limita la energía y el tiempo que tienen disponible para el activismo. Del mismo modo, las normas y los valores tradicionales de género, la dicotomía público / privado, ubica a las mujeres en la casa, mientras que las actividades de "la calle" como la política y la acción colectiva se representan como el ámbito de competencia de los hombres. En América Latina, el doble estándar sexual desalienta a las mujeres de participar en acciones colectivas, ya que las mujeres que se activan en los movimientos sociales son, a menudo, criticadas por trasgredir las normas femeniles de pureza sexual. Las redes sociales comunitarias en las zonas rurales más tradicionales, en particular, pueden ser muy invectivas del activismo de las mujeres mediante el infundio y la estigmatización de las activistas, por ejemplo, como promiscuas, malas madres y lesbianas.

Las líderes de base centroamericanas también advirtieron sobre la presión generalizada e incluso violencia masculina de pareja contra las mujeres que participan activamente en movimientos sociales. Las parejas masculinas han reaccionado con celos e ira al percibir que las mujeres desatendían las tareas domésticas socialmente asignadas y las responsabilidades del cuidado infantil. Según las activistas entrevistadas, las presiones negativas de las parejas hicieron

que muchas mujeres optaran por abandonar su participación en los movimientos sociales.

Además de estos factores externos, las lideresas entrevistadas en Nicaragua y El Salvador identificaron cierta reticencia inicial a participar en los movimientos sociales debido a las creencias y normas patriarcales internalizadas. Ellas creían que la actividad política era solo para los hombres y que las mujeres carecían de conocimientos y habilidades para participar en los movimientos y, mucho menos, para asumir posiciones de liderazgo. Varias dirigentes de base informaron que, en sus inicios, los movimientos sociales eran un entorno desconocido y aterrador. Muchas tuvieron que superar sus miedos de hablar frente a grupos, unirse a una protesta y enfrentar a la policía o las fuerzas militares, a través de procesos de empoderamiento de mediano y largo plazo, que son cualitativamente diferentes de los caminos de sus contrapartes masculinos del movimiento.

RECURSOS DEL MOVIMIENTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Si bien las mujeres latinoamericanas han tenido que lidiar con obstáculos de género en su activismo, los movimientos de mujeres contemporáneos también han tenido acceso a recursos clave: redes transnacionales de defensa de género y marcos de maternidad. Las redes transnacionales de género en América Latina se remontan a la Conferencia de las Mujeres de la ONU, celebrada en la ciudad de México en 1975. En los 80, las mujeres latinoamericanas llevaron a cabo una serie de encuentros regionales para desarrollar estrategias y agendas de política regional (Chinchilla y Hass 2007; Alvarez et al., 2002). Estos vínculos les han brindado a los movimientos de mujeres acceso a recursos internacionales, pericia y nuevos espacios de participación (Craske y Molyneux, 2002). Asimismo, han impulsado el desarrollo de una mayor capacidad organizativa y han ayudado a los movimientos de mujeres para lograr que los gobiernos nacionales asuman sus responsabilidades.

A nivel ideológico, las activistas de América Latina han apropiado, adaptado y transformado los discursos feministas transnacionales. Empero, aún en los años 2000, el término feminista todavía es resistido en la región. Algunas activistas de base en El Salvador, por ejemplo, eran reacias a adoptar un término que asociaban a ideas radicales y extranjeras. Los vínculos transnacionales también pueden reproducir relaciones de poder desiguales entre las activistas feministas del Norte, más acomodadas, y las feministas de América Latina que ellas respaldan (Thayer, 2010).

Los marcos son otro recurso moral y simbólico crítico para los movimientos sociales, y el repertorio de marcos disponibles para los

movimientos de mujeres ha sido distinto del utilizado por los movimientos dominados por hombres. Ante todo, el marco de maternidad ha estado en el centro de la movilización de mujeres en América Latina como una herramienta que delinea la forma en que las activistas interpretan su propia acción colectiva y, al mismo tiempo, la percepción del público externo.

Los marcos son empleados por los movimientos sociales para reclutar nuevos miembros y obtener apoyo externo para la causa (Snow y Benford, 1992). Son particularmente eficaces cuando resuenan con el eco de los valores, creencias, normas y símbolos. En América Latina, el marco de maternidad ha servido como marco maestro que incorpora las construcciones generalizadas y culturalmente arraigadas de los roles de la mujer en la sociedad. Sin embargo, los marcos de maternidad han sido complejos y adaptativos. Estos han reproducido, tanto como impugnado, las relaciones de género tradicionales (Bayard de Volo, 2001).

El marco de maternidad ha sido una herramienta importante para acceder a espacios políticos formales e informales. Las mujeres han participado en la acción colectiva y en política representándose como madres abnegadas, apolíticas; un marco que desvía la crítica potencial de sus transgresiones en los espacios de actividades políticas tradicionalmente masculinos. El marco de maternidad también es eficaz porque se nutre de los valores y creencias de género, compartidas por todo el abanico de líneas políticas de izquierda a derecha: que las madres ejercen desde una autoridad moral superior. Para los grupos de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo, que se movilizaron durante la guerra sucia en Argentina, este marco proporcionó cierto grado de protección contra la represión, la tortura y el encarcelamiento perpetrados por el Estado.

Es importante tener en cuenta que las mujeres utilizan los marcos maternales como un tipo de esencialismo estratégico al enfatizar en sus discursos y acciones, dirigidos hacia el público externo, las representaciones idealizadas y simplificadas de madres. Un posible motivo de preocupación es que la fuerte dependencia de los marcos de maternidad puede socavar otros intereses e identidades de las mujeres. Aunque son eficaces en determinados temas, como las cuestiones de derechos humanos, pueden limitar el alcance y las formas del activismo de las mujeres en la región (Jaquette, 2009).

Pero las activistas hicieron mucho más que reproducir meramente imágenes de género tradicionales. También ejercieron la maternidad militante o politizada como sujetas políticas asertivas y proactivas. Las mujeres de bajos ingresos de los movimientos de base urbanos, por ejemplo, se movilizaron como madres para abogar por

la supervivencia de sus familias. Y al hacerlo, en países como Ecuador y Chile, tomaron los problemas "familiares" privados y los sacaron a la palestra como asuntos políticos, vinculados a las políticas estatales y sujetos a la acción colectiva (Cosgrove, 2010; Chinchilla y Hass, 2007; Lind, 2005).

Las mujeres salvadoreñas y nicaragüenses que se unieron a los movimientos guerrilleros izquierdistas también participaron en actividades que amplificaron sus identidades individuales más allá del rol de madre y expandieron los límites de los roles de género tradicionales. Mientras que el FMLN y el FSLN adoptaron políticas explícitas de igualdad de género en los 80, en los hechos persistieron las creencias y prácticas machistas. Las dificultades y exigencias de las condiciones de la guerra en ambos países, sin embargo, ofrecieron nuevas oportunidades a las mujeres. Junto a las actividades más tradicionales de cuidado y apoyo, como cocineras, operadoras de radio, maestras y delegadas políticas, las mujeres activistas salvadoreñas recordaron con orgullo las duras condiciones que soportaron y sus roles de combate en las zonas de guerra. En Nicaragua en la década del 80, con la escasez de mano de obra masculina, las mujeres realizaron trabajos agrícolas no tradicionales y sirvieron en las fuerzas armadas y las milicias. Estas actividades transgresoras de los roles de género les permitieron a las mujeres ganar confianza en sí mismas, desarrollar nuevas capacidades, ampliar sus redes sociales y confrontar el sexismo. Asimismo, las mujeres llamaron la atención directamente respecto de estas capacidades y empoderamiento en sus años posteriores, a medida que adoptaron roles de liderazgo en los movimientos feministas con objetivos cardinales explícitos de transformación de género e igualdad.

MARGINACIÓN POSTRANSICIÓN

La movilización de las mujeres por los derechos humanos, la supervivencia familiar y el nacionalismo clasista sugieren que las demandas que movilizan a las mujeres hacia la acción colectiva no pueden darse por sentadas. Antes bien, son complejas y experimentan múltiples fases en las que las demandas de género se vuelven más o menos relevantes. Molyneux (1985) sugirió que las mujeres de bajos ingresos tienden a dar prioridad a los intereses de género prácticos, a las necesidades de supervivencia del día a día, que no son necesariamente analizados desde una perspectiva de género. Por el contrario, los intereses estratégicos de género se centran en la igualdad de género a largo plazo y la transformación de roles y normas de género. Investigaciones recientes sugieren que esto es más complejo que una simple dicotomía y que, durante los años 90 y 2000, se registró un

crecimiento en los movimientos de mujeres en América Latina que emergió sobre todo de los movimientos de reforma democráticos, de base clasista y que se centra directamente en las cuestiones de género (Stephen, 1997). Cabe señalar que en este período, por lo general, las mujeres en los movimientos populares, de base no siempre se identifican como "feministas", un término que aún suele ser identificado como "extranjero" y "radical", inapropiado en América Latina.

Esta transformación tuvo lugar en el contexto de la emergencia y la consolidación de regímenes democráticos en gran parte de América Latina y la firma de los Acuerdos de Paz en América Central. Sobre todo, la democratización ha tenido un impacto complejo en la fuerza del movimiento social y los niveles de movilización y, en algunos países, la reapertura de la política formal y el aumento de la fuerza de los partidos políticos ha generado un proceso de desmovilización de los movimientos sociales. Como con el cambio anterior en las estructuras de oportunidades políticas, estos procesos han sido interpretados y vividos de diferentes maneras por las mujeres que enfrentan nuevas barreras de género y nuevas oportunidades en la democracia formal y los Acuerdos de Paz (Waylen, 2007; Friedman, 2000).

Las experiencias de las mujeres en El Salvador y Nicaragua durante la posguerra proporcionan indicios sobre los factores que facilitaron la transfiguración de las demandas y la conciencia de las mujeres hacia formas feministas de activismo. Durante los años de guerra en Centroamérica, muchas activistas de izquierdas desplegaron una doble militancia ya que participaban, simultáneamente, en organizaciones feministas y revolucionarias de izquierda (Shayne, 2003). Sin embargo, en la época posterior a la transición, algunas lograron una mayor autonomía de los partidos políticos de izquierda. Durante la guerra civil y la crisis económica de los 80 en Nicaragua, el FSLN subsumió las problemáticas de las mujeres a objetivos más amplios de unidad nacional. Después de la derrota electoral del FSLN en 1990, los movimientos de mujeres moderaron sus lazos con el partido y consiguieron mayor autonomía.

Del mismo modo, en El Salvador, con los Acuerdos de Paz de 1992 y la democracia renovada los partidos políticos recién revitalizados, dominados por hombres, se resistieron a la incorporación plena de las mujeres. En toda la región, las prácticas y creencias sexistas han persistido aún en partidos de izquierda con un discurso formal de igualdad de género y, con frecuencia, los hombres han sido reacios a compartir el poder con las mujeres (Kampwirth, 2004; Luciak, 2001). Las activistas a menudo realizan un trabajo vital, entre bambalinas, en la formación y mantenimiento de las redes sociales, que es menos prominente y menos valorado que los roles de los hombres

en los movimientos sociales. Esta invisibilidad relativa de las contribuciones de las mujeres durante los años de guerra en El Salvador socavó los reclamos por la igualdad de oportunidades e inclusión de las mujeres en el período de posguerra. Las lideresas del FMLN, por ejemplo, fueron presionadas para que retomaran a roles domésticos más limitados cuando terminó la guerra.

Las activistas salvadoreñas entrevistadas sugirieron que en lugar de llamar la atención sobre el marco de maternidad para confrontar la restauración de las normas y roles tradicionales de género, optaron por destacar sus contribuciones no tradicionales durante los años de guerra. Destacaron su coraje, sacrificios y resistencia física para fortalecer sus solicitudes de recursos materiales de posguerra y de acceso a posiciones de liderazgo. Una segunda estrategia importante de los movimientos de mujeres *vis a vis* partidos políticos de izquierda ha sido crear movimientos de mujeres más autónomos que ubican al frente las cuestiones de género.

El resurgimiento de los partidos políticos también ha sacado al ruedo divisiones partidistas y diferencias políticas entre mujeres. Tales divisiones, por supuesto, siempre han existido en América Latina, ya que las mujeres se han movilizado tanto en el ámbito político de la izquierda como en el de la derecha (González y Kampwirth, 2001). En Nicaragua, por ejemplo, las mujeres en las zonas de guerra rurales en los años 90 se polarizaron profundamente en campamentos revolucionarios y contrarrevolucionarios. Así como las mujeres de izquierdas han utilizado un marco de maternidad militante para legitimar su activismo político, las mujeres conservadoras han enmarcado su movilización como una defensa contra la desintegración de la familia tradicional. Una de las estrategias de postransición que los movimientos de mujeres han empleado para superar esas diferencias partidarias ha sido identificar temas específicos, con los cuales las mujeres pueden formar coaliciones transversales a las líneas del partido, como las campañas contra la violencia familiar y la agresión sexual.

LOS ESTADOS Y LA AUTONOMÍA DEL MOVIMIENTO

Los problemas de autonomía también han caracterizado las relaciones postransición de los movimientos de mujeres con el Estado. En toda la región en la etapa postransición, los gobiernos crearon nuevos ministerios y oficinas de la mujer, y los movimientos respondieron de distintas maneras a esta tendencia popular e institucionalización de las cuestiones de género. Por un lado, los movimientos conocidos como Las Autónomas intentaron mantener los movimientos de mujeres independientes del Estado. Estos movimientos tienden a ser atendidos por voluntarios y a operar con fondos limitados (Alvarez, 2009).

Su enfoque se alinea con un patrón más amplio, el de los movimientos sociales basados en la identidad, cuyos objetivos centran menos en los procesos políticos formales y en el cambio de leyes y políticas (Alvarez et al., 1998). Antes bien, trabajan en las arenas de la cultura y la vida cotidiana para confrontar prácticas y creencias patriarcales. Los movimientos feministas autónomos han trabajado para transformar las relaciones de poder en cuanto a género y reinventar valores, creencias y roles de género. Desafían la división sexual del trabajo, el doble estándar sexual y promueven el acceso de las mujeres a servicios reproductivos asequibles y seguros.

En cambio, las activistas conocidas como "las institucionalistas" han ingresado en los nuevos espacios institucionales que se abrieron en el período postransición con la creación de los ministerios y oficinas de la mujer del nuevo gobierno, para promover la igualdad de género y la formación e implementación de políticas públicas con perspectiva de género. En paralelo a estas oficinas estatales, en América Latina durante los 90, hubo un fuerte incremento de organizaciones no gubernamentales (ONG) que se centraron en la realización de proyectos de desarrollo vinculados al género y la prestación de servicios sociales. Un caso muy estudiado de tal institucionalización es el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAM) de Chile. Muchas de las mujeres que se unieron al SERNAM eran de clase media y alta, siguiendo la tendencia más amplia de la profesionalización, tecnificación y "oenegeización" de la promoción de los asuntos de las mujeres (Franceschet, 2005).

En esta tendencia se observan varias implicaciones negativas posibles. En primer lugar, como con los otros movimientos sociales, las feministas que interactúan estrechamente con el Estado se arriesgan a despolitizar las desigualdades de género, oscurecer los conflictos y morigerar tanto el análisis subyacente como las soluciones propuestas a las desigualdades de género. Las agencias de mujeres pueden terminar reforzando roles tradicionales de género, o correr el riesgo de ser desfinanciadas y/o cerradas por gobiernos conservadores. Las mujeres con perspectivas más críticas, si son francas, se arriesgan a perder su empleo, y los proyectos y procesos feministas más transformadores tienen menos posibilidades de recibir financiación. Las lideresas activistas que ocupan cargos en las oficinas de gobierno también pueden ser cooptadas, pues sus salarios más favorables, mejores condiciones de trabajo y financiamiento las distancian de las bases.

SERNAM, por ejemplo, no apoya las campañas feministas chilenas para legalizar el divorcio o el aborto terapéutico (Chinchilla y Haas, 2007). Asimismo, en Chile postransición se ha abierto una grieta entre las mujeres de clase media y alta que trabajan para el Estado

y las ONG profesionales y las organizaciones de base en los barrios de la clase trabajadora, debilitando la representación y la responsabilidad dentro y entre los movimientos de mujeres.

Por otro lado, el compromiso de los movimientos de mujeres con el Estado ha avanzado en la igualdad de género ya que los ministerios y las oficinas de la mujer del gobierno han iniciado y propiciado las transformaciones en la legislación y las políticas en temas como la discriminación de género en el lugar de trabajo, violencia doméstica, agresión sexual, leyes de matrimonio y derechos de familia y reproductivos (Cosgrove, 2010). Estas oficinas de la mujer también han supervisado las políticas estatales e impulsaron la implementación de proyectos y servicios con perspectiva de género. La investigación sugiere, además, que los movimientos pueden ser más eficaces en periodos de realineamiento cuando los partidos políticos se esfuerzan activamente para construir una base de apoyo apelando a los movimientos de mujeres (Waylen, 2007).

LOS RESULTADOS DEL MOVIMIENTO Y LOS DESAFÍOS FUTUROS

Para el año 2010, la lista de logros de los movimientos de mujeres en América Latina en política formal y en el ámbito legislativo fue sustancial. En una cascada normativa, los gobiernos de la región han aprobado leyes que promueven la igualdad formal de género. Los códigos familiares y laborales ya no discriminan a las mujeres y las cuotas o cupos de género promocionan la participación de las mujeres en política en una docena de países. Los avances en materia de derechos reproductivos y en temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo han sido más lentos, en parte debido a la continua influencia social y política de la Iglesia Católica.

Los movimientos de mujeres han logrado otros avances importantes, aunque son más difíciles de medir. A través de su participación en los movimientos, las activistas han experimentado el empoderamiento individual y colectivo, una transformación de la conciencia. Ellas han logrado una voz más potente, han construido lazos de apoyo mutuo y han superado los temores de participar en actividades políticas tradicionalmente masculinas. Los movimientos de mujeres han confrontado las estrechas concepciones de ciudadanía y democracia, argumentando que la democracia debe transcurrir tanto en la nación como en el hogar. Han tenido un éxito limitado en el desafío a los valores, normas y prácticas sexistas a nivel comunitario y familiar. Aunque ha habido unidad en las campañas sobre temas como violencia doméstica o agresión sexual, otras cuestiones como el aborto, la reconfiguración de la división sexual del trabajo y los roles de género siguen siendo controvertidas y todavía dividen a las mujeres.

Mientras que las mujeres de América Latina en gran medida han logrado igualdad formal ante la ley sigue habiendo importantes desafíos, en particular, la aplicación y el cumplimiento de la legislación y las políticas de género existentes; las tensiones de la diversidad en los movimientos de mujeres; y las respuestas feministas a las reformas de las políticas sociales de la segunda etapa.

En primer lugar, la falta de recursos para su cumplimiento, la resistencia por parte de las instituciones dominadas por hombres para llevar a la práctica a una mayor equidad de género, y el conjunto de creencias y valores sexistas desplegado en los espacios de la vida cotidiana han contribuido a una implementación y cumplimiento inadecuados de las políticas y legislación de igualdad de género, perpetuando así los resultados desiguales. Del mismo modo, mientras que han aumentado las cuotas de género en la representación de las mujeres en las legislaturas de América Latina, persisten las preocupaciones sobre el contenido sustantivo de la participación de las mujeres en la política formal. Las mujeres pueden participar en política en mayor número, pero no necesariamente utilizan ese acceso reciente para avanzar en la igualdad de género.

Las activistas sugieren que la presencia de mujeres en posiciones de poder no debe ser meramente simbólica. Antes bien, las mujeres necesitan llevar la conciencia de género a los espacios políticos formales; centrándose no solo en cuestiones tradicionalmente femeninas, sino también aplicar la perspectiva de género a cuestiones sociopolíticas más amplias. También destacan la necesidad de un enfoque multifacético hacia la promoción de género que opera en varios niveles. Las reformas legislativas y políticas son necesarias, pero no suficientes. Las feministas continúan trabajando para socavar las creencias, valores y prácticas patriarcales, a nivel comunitario y doméstico, así como en espacios institucionales nacionales y transnacionales.

Un segundo desafío para los movimientos de mujeres es el de la diversidad entre mujeres. Los investigadores señalan que no se debe suponer que los movimientos de mujeres son intrínsecamente democráticos o inclusivos. Los movimientos de mujeres en América Latina, por lo general, no han logrado representar plenamente las perspectivas y necesidades de las mujeres pobres y trabajadoras, lesbianas, indígenas y afrodescendientes. Las mujeres enfrentan desigualdad y exclusión no solo vinculada a la identidad de género, sino también de clase, orientación sexual, raza/etnia, capacidad física, etcétera.

Un caso particularmente relevante es el de las mujeres indígenas. Los movimientos indígenas durante el siglo XXI se han movilizado mucho y han logrado avances importantes respecto al reconocimiento de los derechos a la tierra, los derechos culturales y las reformas

constitucionales. Empero, las identidades de las mujeres indígenas son multifacéticas y fluidas, y enfrentan exclusión y marginación en múltiples dimensiones, cuestiones que no se abordan adecuadamente en los movimientos feministas regionales, en gran parte dirigidos por mujeres de clase media que no son indígenas (Speed et al., 2006; Richards, 2004). En respuesta, las mujeres han negociado un "feminismo indígena" que confronta el sexismo en las organizaciones indígenas y la exclusión racial en las organizaciones feministas (Hernández Castillo, 2010). Las mujeres indígenas y las afrodescendientes siguen reclamándoles a los movimientos feministas: más voz, visibilidad, reconocimiento y respeto de las diferencias culturales.

Un tercer tema para los movimientos de mujeres es el cambio reciente en las políticas sociales gubernamentales. A diferencia de las reformas neoliberales anteriores, más descarnadas, que privatizaron y redujeron los servicios y subsidios estatales, las reformas de la segunda etapa buscan una asistencia focalizada, dirigida a empoderar a las mujeres y construir su capital humano. Las feministas han expresado su preocupación, sin embargo, pues tales programas sociales focalizan a las mujeres y afianzan aún más los estereotipos de género en los cuales la principal función y responsabilidad de las mujeres es ser madre: la cuidadora abnegada y sacrificada de la familia, la comunidad y la nación. Como tal, las nuevas políticas sociales pueden significar una carga adicional para las mujeres de bajos ingresos, ya agobiadas con el estrés y la responsabilidad de la supervivencia familiar. Los investigadores y los activistas sostienen que la atención debe centrarse en las relaciones de poder desiguales en cuanto a género y en las desigualdades estructurales, así como en las transformaciones de las masculinidades en la región, tradicionalmente vinculadas a múltiples parejas sexuales y desinteresadas del bienestar económico y emocional de los niños y del trabajo doméstico.

Por último, los recorridos de los movimientos de mujeres en América Latina siempre pueden enriquecer e in-formar la teoría de los movimientos sociales en la región, en términos más generales. Sugieren que en lugar de considerar como universales las experiencias de los movimientos sociales, en su mayoría dominados por hombres, es necesario examinar la forma en que las oportunidades políticas y las demandas de los movimientos, los procesos de incorporación al movimiento y los marcos referenciales están, asimismo, mediados y formados por identidades de género, entre otras no menos importantes.

BIBLIOGRAFÍA

Alvarez, S. E. 2009 'Beyond NGOization? Reflections from Latin America' en *Development*, *52*(2), 175-184.

Alvarez, S. E.; Dagnino, E. y Escobar, A. (eds.) 1998 *Cultures of politics, politics of cultures: Re-visioning Latin American social movements* (Boulder: Westview Press).

Alvarez, S. E. et al. 2002 'Encountering Latin American and Caribbean feminisms' en *Signs*, *28*(2), 537-579.

Bayard de Volo, L. 2001 *Mothers of heroes and martyrs: Gender identity politics in Nicaragua, 1979-1999* (Baltimore: Johns Hopkins University Press).

Chinchilla, N. y Haas, Liesl 2007 '*De Protesta a Propuesta*: The Contributions and Challenges of Latin American Feminism' en Hershberg, E. y Rosen F. (eds.) *Latin America after neo-liberalism: Turning the tide in the 21st century* (Nueva York: New Press).

Cosgrove, S. 2010 *Leadership from the margins: Women and civil society organizations in Argentina, Chile, and El Salvador* (Rutgers University Press: Nueva Jersey).

Craske, N. 1999 *Women and politics in Latin America* (Cambridge: Polity Press).

Craske, N., y Molyneux, M. (eds.) 2002 *Gender and the politics of rights and democracy in Latin America* (Londres: Palgrave).

Elson, D. 1992 'From survival strategies to transformation strategies: Women's needs and structural adjustment' en Benería, L. y Feldman S. (eds.) *Unequal burden: Economic crisis, persistent poverty, and women's work* (Boulder: Westview Press).

Franceschet, S. 2005 *Women and politics in Chile* (Boulder: Lynne Rienner).

Friedman, E. J. 2000 *Unfinished transitions: Women and the gendered development of democracy in Venezuela, 1936-1996* (University Park: Penn State University Press).

González, V. y Kampwirth, K. (eds.) 2001 *Radical women in Latin America: Left and right* (University Park: Pennsylvania State University Press).

Hernández Castillo, A. 2010 'The Emergence of Indigenous Feminism in Latin America' en *Signs*, *35*(3), 539-545.

Jaquette, J. S. (ed.) 2009 *Feminist agendas and democracy in Latin America* (Durham: Duke University Press).

Kampwirth, K. 2004 *Feminism and the legacy of revolution: Nicaragua, El Salvador, and Chiapas* (Athens: Ohio University Press).

Lind, A. C. 2005 *Gendered paradoxes: Women's movements, state restructuring, and global development in Ecuador* (University Park: Penn State University Press).

Luciak, I. 2001 *After the revolution: Gender and democracy in El Salvador, Nicaragua, and Guatemala* (Baltimore: Johns Hopkins Press).

Molyneux, M. 1985 'Mobilization without Emancipation? Women's Interests, the state, and revolution in Nicaragua' en *Feminist Studies*, *11*(2), 227-254.

Richards, P. 2004 *Pobladoras, indígenas, and the state: Conflicts over women's rights in Chile* (New Brunswick: Rutgers University Press).

Shayne, J. 2003 *The revolution question: Feminisms in El Salvador, Chile, and Cuba* (New Brunswick: Rutgers University Press).

Snow, D. A. y Benford, R. D. 1992 'Master Frames and Cycles of Protest' en Morris, A. D. y Mueller, C. M. (eds.) *Frontiers in social movement theory* (New Haven: Yale University Press).

Speed, S.; Hernández, A. y Stephen, L. (eds.) 2006 *Dissident women: Gender and cultural politics in Chiapas* (Austin: University of Texas Press).

Stephen, L. 1997 *Women and social movements in Latin America: Power from below* (Austin: University of Texas Press).

Thayer, M. 2010 *Making transnational feminism: Rural women, NGO activists, and northern donors in Brazil* (Nueva York: Routledge).

Viterna, Jocelyn 2013 *Women in war: The micro-processes of mobilization in El Salvador* (Oxford: Oxford University Press).

Waylen, Georgina 2007 *Engendering transitions: Women's mobilization, institutions, and gender out- comes* (Oxford: Oxford University Press).

World Bank 2012 *The effect of women's economic power in Latin America and the Caribbean* (Washington: World Bank Document).

CÓMO CITAR ESTA PUBLICACIÓN:
Horton, Lynn. 2017. "Movimientos de mujeres en América Latina" Pp. 145-160 en Paul Almeida y Allen Cordero Ulate, Eds., *Movimientos Sociales en América Latina: Perspectivas, Tendencias y Casos*. Buenos Aires: CLACSO.

7

Ian Breckenridge-Jackson, Natasha Radojcic,
Ellen Reese, Elizabeth Schwarz y Christopher Vito*

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES LATINOAMERICANOS Y EL PROCESO DEL FORO SOCIAL MUNDIAL

INTRODUCCIÓN

Desde su asamblea fundacional en Porto Alegre, Brasil, en 2001, el Foro Social Mundial (FSM) se ha convertido rápidamente en el mayor encuentro internacional de activistas sociales progresistas que buscan resistir a la globalización neoliberal y democratizar la economía global. El proceso del FSM, desde entonces, ha generado foros locales, nacionales, regionales y temáticos tanto en América Latina como en otros lugares del mundo. En estos encuentros, y el proceso a través del cual se organizan, los activistas de diferentes movimientos intercambian ideas, construyen redes sociales y emprenden acciones colectivas. Este capítulo ofrece una breve descripción de los orígenes del proceso del FSM, de sus principales participantes y de cómo los movimientos sociales de América Latina se han relacionado con él y lo emplean para promover sus objetivos. Los activistas latinoamericanos desempeñaron papeles clave en la formación del FSM. Mientras que esta experiencia ha ayudado a los movimientos sociales en América Latina y más allá a impulsar sus objetivos, la obtención de reconocimiento dentro de este proceso ha sido más fácil para algunos movimientos que para otros.

* University of California, Riverside, EEUU.

ORÍGENES Y DESARROLLO DEL FSM

El FSM nació de los primeros movimientos de resistencia a la globalización neoliberal. Estos movimientos fueron, inicialmente, más fuertes en el Sur Global donde surgieron las protestas contra los programas de ajuste estructural, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial durante los años 70 y 80. Dichos movimientos se revitalizaron y se hicieron más visibles en América del Norte a partir de la rebelión zapatista en México en 1994, el encuentro internacional contra el neoliberalismo organizado por los Zapatistas y sus simpatizantes en 1996 y en las protestas de la Contra-cumbre de Seattle (*Battle in Seattle*) en repudio a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1999 (Smith et al., 2007).

El FSM fue concebido como la alternativa popular del Foro Económico Mundial (FEM), un encuentro anual de empresarios internacionales líderes que tiene lugar en Davos, Suiza. El FEM se ha reunido con ese nombre desde 1987 y surgió a partir de los encuentros previos de empresarios europeos líderes, que se habían producido desde el año 1971. En el año 2000, los activistas celebraron el primer contra evento al FEM, conocido como "Davos alternativo" o Foro "anti Davos". Participaron activistas de todo el mundo, incluidos los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, el Foro Mundial de Alternativas, la Marcha Mundial de Mujeres, y la Asociación por la Tributación de las Transacciones Financieras para la Ayuda de la Ciudadanía (ATTAC). El evento incluyó talleres, así como una conferencia de prensa y una manifestación de protesta afuera de las reuniones del FEM (Teivainen, 2002).

Ese mismo año se forjaron los planes para el primer FSM. La idea inicial para el FSM fue concebida por Oded Grajew, que dirigía la Asociación Brasileña de Empresarios por la Ciudadanía (CIVES). Los planes para el primer FSM se desarrollaron en una reunión que tuvo lugar en París en el año 2000 entre Grajew, Bernard Cassen (Presidente de ATTAC) y Francisco (Chico) Whitaker, un activista brasileño y líder del Partido de los Trabajadores. Los tres activistas acordaron celebrar el primer encuentro del FSM en Porto Alegre, Brasil, en 2001, al mismo tiempo que las reuniones del FEM en Davos. Las futuras reuniones del FSM posibilitarían el concierto de respuestas a las reuniones del FEM. Porto Alegre fue considerado como el lugar perfecto para la primera reunión del FSM, dado que se había convertido en un bastión del Partido de los Trabajadores y la ciudad había adoptado, recientemente, un proceso de presupuesto participativo en el que los grupos populares participaron en la asignación de recursos públicos (Teivainen, 2002; Smythe, 2011).

Mientras que el FEM congrega a los principales empresarios internacionales, el FSM reúne a los activistas que se oponen al neoliberalismo, incluyendo a los representantes de diversos movimientos sociales de base y organizaciones progresistas. Cuando se celebró la primera reunión del FSM, en 2001, las reformas neoliberales ya se habían extendido por toda América Latina. Aunque los gobiernos de Chávez y Castro han resistido claramente a estas reformas, muchos partidos de izquierda en América Latina claudicaron ante el neoliberalismo. Sin embargo, la resistencia popular al neoliberalismo en América Latina fue creciendo (Almeida, 2007), cobrando formas violentas a la vez que no violentas. Para muchos, el despliegue del FSM fue visto como una manera de avanzar y unir de forma continua a la oposición contra el neoliberalismo tanto en América Latina como en el Norte y Sur globales, y para contribuir al desarrollo de una visión compartida de una alternativa más democrática y ambientalmente sostenible (Harris, 2002; Smythe, 2011).

Participaron activistas de diversos movimientos sociales progresistas no violentos, incluyendo aquellos que desarrollan medios de comunicación alternativos, los movimientos por los derechos de los grupos oprimidos (mujeres, minorías raciales, indígenas y lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, etc.) y el movimiento contra la guerra. Sin embargo, los movimientos armados, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los Zapatistas, no fueron invitados a participar en el proceso del FSM debido a su dependencia de tácticas violentas. Inicialmente, la Asociación de las Madres de Plaza del Mayo de Argentina tampoco fue invitada a participar en el FSM, pero el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra en Brasil protestó por su exclusión y pagó los pasajes de avión de sus líderes para que pudieran asistir (Harris, 2002). Aunque el FSM es a-partidario, el Partido de los Trabajadores ha contribuido a financiar los encuentros del FMS en Brasil y los políticos de izquierda vinculados a este partido, y a los partidos de izquierda en otros países, han sido destacados oradores en los encuentros. Mientras que algunos participantes del FSM, que adoptan formas de democracia directa y formas de organización más autónoma y horizontales han sido críticos de las interconexiones entre los partidos de izquierda y los políticos en el proceso del FSM, otros izquierdistas han promovido estas interconexiones.

El FSM está organizado por un consejo internacional, integrado por representantes de diversas organizaciones de activistas de todo el mundo, y un comité organizador local con sede en la ciudad y el país donde se realiza el foro. El consejo internacional decide dónde y cuándo se realizará el FSM y desarrolla políticas generales respecto

a cómo serán organizadas y financiadas las reuniones. El comité organizador toma decisiones con respecto a la logística de la reunión y trabaja para garantizar los recursos y la participación de voluntarios y organizaciones locales y regionales. En sus primeros años, el consejo internacional solía estar dominado por organizaciones de América Latina, Europa y América del Norte, pero, con el tiempo, ha ido incluyendo a otras regiones (Teivainen, 2011).

Las reuniones del FSM comienzan tradicionalmente con una marcha de apertura por las calles de la ciudad anfitriona, donde los participantes exhiben pancartas, remeras o playeras y banderas de sus diversas organizaciones y movimientos. También se muestran banderas de diversos países, que proporcionan un indicador visual del carácter internacional del evento. La marcha es una cacofonía ruidosa de tambores y cantos en múltiples idiomas. La mayor parte del programa del FSM se compone de talleres, cuyo tamaño va de un puñado a cientos de personas. En los talleres, los activistas discuten sus experiencias, comentan sus próximas acciones o intercambian ideas y participan en la crítica o el debate político. Muchos talleres abordan temáticas específicas de los movimientos de justicia social y reúnen a los activistas de esos movimientos en distintos países para debatir sobre sus luchas y experiencias a nivel local, nacional, regional o transnacional. Con todo, algunos talleres se centran en los diálogos entre distintas clases de movimientos para explorar similitudes y diferencias en sus perspectivas y demandas. Los grandes eventos plenarios congregan a miles de personas en paneles de debate entre celebridades de izquierdas, como políticos o escritores y activistas reconocidos. En los talleres y plenarios hay voluntarios ofician de traductores e intérpretes, muchos de los cuales están afiliados a Babels, una red internacional de traductores que nació de los esfuerzos para preparar el Foro Social Europeo 2002. En los eventos más grandes, se ofrece traducción simultánea. En eventos más pequeños, los asistentes se sientan junto a los intérpretes u otros asistentes que hablan su idioma (Smith et al., 2007).

Durante los encuentros del FSM, los participantes pueden disfrutar espectáculos culturales de todo el mundo, incluyendo danza y conciertos musicales en vivo, así como proyecciones de películas independientes. Asimismo, hay feriantes que venden alimentos, artesanías, remeras o playeras, libros y varios tipos de productos de "comercio justo" de todo el mundo. Las Carpas de Solidaridad proporcionan un espacio para que los activistas puedan compartir información sobre sus organizaciones o campañas, y para que los participantes se conozcan y hablen de manera casual. El FSM convoca a periodistas de todo el mundo, a quienes les brinda espacio y acceso a Internet

para que puedan preparar a sus notas para distribución y difusión, así como acceso a eventos plenarios (Smith et al., 2007).

Los Campamentos Intercontinentales de la Juventud se establecieron en la primera reunión del FSM, en respuesta a la escasez de viviendas asequibles. Las organizaciones de la juventud brasileña tradicionales, incluyendo a aquellas afiliadas al Partido de los Trabajadores, el Partido Comunista de Brasil, el Partido Socialista de los Trabajadores Unificado y a la Unión de la Juventud Socialista, participaron inicialmente. Luego, en el año 2002, se formó un comité de juventud más amplio: el Comité Organizador del Campamento que condujo a la creación de talleres y programas liderados por jóvenes con el objetivo de crear un espacio autónomo "que estaba experimentando con nuevas formas de interactuar, vivir y organizarse" que sus promotores consideraban diferentes a las del FSM (Wood, 2010: 52). Hubo 1.500 participantes en el campamento de la juventud original (Juris, 2006). En 2005, hubo 35 mil participantes del campamento de la juventud. Sin embargo, ha habido una continua tensión entre los participantes asociados con los partidos políticos de izquierda (basados en formas de representación democráticas) y aquellos que se identificaban con redes más horizontales, que propugnan formas de democracia directa (Kerswell, 2012: 78). Sin embargo, los programas y las prácticas encontrados en los campamentos de la juventud han variado según los contextos, ya que la horizontalidad, tan popular entre la juventud de Porto Alegre, no fue tan frecuente en otros lugares, como en Caracas, Venezuela, en 2006 (Wood, 2010).

Aunque que el FSM fue concebido inicialmente más como un "espacio abierto" que como un cuerpo político que toma decisiones, algunos organizadores y participantes trataron de hacer avanzar el proceso del FSM más allá de una mera "charla de trabajo". Para incentivar una mayor unidad y acción colectiva entre los participantes del foro social se desarrollaron las "asambleas del movimiento social". En las "asambleas del movimiento social" (o "asambleas del movimiento del pueblo" como se las denomina en los Estados Unidos), participantes de diversos espacios y movimientos se reúnen y se comprometen a apoyar varias propuestas de acción. La estructura y los procesos de decisión de estas asambleas varían según los contextos locales, algunas asambleas son más deliberativas que otras. La primera asamblea del movimiento social fue la Asamblea del Movimiento Social Europeo, que se produjo durante la primera reunión del FSM en 2001, en Porto Alegre, y fue utilizada para promover el primer Foro Social Europeo (FSE). Las "asambleas" del movimiento social, con el tiempo, se incorporaron a las reuniones preparatorias y encuentros del FSE y, desde entonces, se han integrado asambleas similares al proceso del

foro social en otros contextos. Desde 2007 los encuentros del FSM han terminado con una "asamblea del movimiento social" formal, en la cual se emiten los llamados a la acción y solidaridad internacionales, que luego se resumen y difunden. Este proceso ha contribuido a promover diversos días internacionales de acción y campañas transnacionales (Juris y Smith, 2011; Smith y Doerr, 2011).

SEDES Y ENCUENTROS DEL FORO SOCIAL MUNDIAL

En el Cuadro 7.1 se muestra la lista de todos los encuentros del FSM que se han producido desde el año 2001. Las tres primeras reuniones FSM tuvieron lugar en Porto Alegre, Brasil, entre 2001 y 2003, y después de la reunión en Mumbai, India, en 2004, el FSM regresó a Brasil en 2005 (Corbeil, 2012; Smith y Smythe, 2011). En general, las reuniones del FSM han crecido en tamaño desde la primera reunión del FSM en Porto Alegre, que atrajo a 20 mil personas. Aunque la asistencia ha fluctuado según los diferentes lugares de reunión, las celebradas en Porto Alegre fueron las más numerosas. En el año 2005 asistieron 155 mil personas, y en el año 2003 estuvieron representados 156 países.

El sexto FSM, celebrado en 2006, proporcionó una versión policéntrica del foro con el fin de diversificarlo y "globalizarlo". La reunión del FSM de 2006 se organizó en tres encuentros simultáneos en tres continentes: Bamako, Mali (África), Caracas, Venezuela (Sudamérica) y Karachi, Pakistán (Asia). Esta estrategia policéntrica fue diseñada para integrar a las personas que no pueden viajar y para ofrecer un formato más democrático e inclusivo (Corbeil, 2012; Hammond, 2006). En la reunión de América del Sur, celebrada en Caracas, Venezuela, se allegaron cerca de 80 mil participantes de hasta 150 países para participar en las 1.800 actividades programadas (Kaneshiro et al., 2011). La reunión puso de relieve el debate sobre las formas en que los gobiernos locales deben ser incluidos en las reuniones. Por un lado, el régimen de Chávez y la "Revolución Bolivariana" en Venezuela tuvo la oportunidad de resaltar algunos de sus programas más progresistas. Pero, por otro lado, los críticos sintieron que la integración de los políticos y los programas gubernamentales en el espacio de reunión del FSM era contrapuesto a los ideales del FSM (Hammond, 2006). Un observador describió el FSM de Caracas como "más cerca de un proyecto antiimperialista ortodoxo que de un foro alter-globalización" (Wood, 2010: 314), mientras que otros recibieron con agrado la presencia de políticos y partidos de izquierda.

En 2008 y 2010, el Consejo Internacional no celebró reuniones del FSM. En 2008, patrocinó el evento "día(s) global(es) de acción y

Cuadro 7.1
Asistencia al Foro Social Mundial

Año	Ubicación del FSM	Asistencia total	Cantidad de actividades	Cantidad de países representados
2001	Porto Alegre, Brasil	20.000	420	117
2002	Porto Alegre, Brasil	60.000	622	123
2003	Porto Alegre, Brasil	100.000	1.286	156
2004	Mumbai, India	135.000	1200	117
2005	Porto Alegre, Brasil	155.000	2.000	122
2006a	Caracas, Venezuela	80.000	1.800	150
2006	Bamako, Mali	15.000	600	–
2006	Karachi Pakistán	30.000	720	–
2007	Nairobi, Kenia	66.000	1.500	110
2008b	Mundial	–	–	–
2009	Belén, Brasil	100.000	2.000	150
2010c	Mundial	–	–	–
2011	Dakar, Senegal	75.000	1.200	132
2012	Porto Alegre, Brasil	40.000	670	120

Fuente: De Sousa Santos (2004) y sitio web del Foro Social Mundial.
Notas: a. La reunión de 2006 se organizó en tres reuniones simultáneas: en la ciudad de Caracas, Venezuela; Bamako, Malí; y Karachi, Pakistán. Por consiguiente, estos datos representan solo uno de los tres encuentros. | b. La reunión de 2008 fue diseñada como el Día de Acción y Movilización y tuvo actividades en varias ciudades del mundo. | c. Los organizadores del foro del año 2010 fomentaron la creación de foros a nivel nacional, regional y local; se produjeron más de 35 encuentros.

movilización" alrededor del 26 de enero, con el designio de ampliar el alcance del proceso del foro social y reducir los recursos y esfuerzos que exigía la planificación de reuniones mundiales. Por entonces, algunas organizaciones de activistas pensaron que los métodos de planificación del FSM estaban desviando esfuerzos de la organización de las bases y de la acción colectiva para favorecer las reuniones bianuales. En 2010, los organizadores del FSM fomentaron la difusión de los foros sociales locales, nacionales y regionales.

En 2009, la reunión del FSM regresó a Brasil, pero esta vez tuvo lugar en la ciudad de Belén, en el Amazonas. Smythe y Byrd (2010: 96) explican:

> El Consejo Internacional tomó una decisión política calculada al realizar el Foro en la ciudad emplazada en la desembocadura del Amazonas en el nordeste de Brasil, una región en el corazón de la lucha contra un modelo de desarrollo y sus consecuencias ambientales, que amenazan el modo de vida de los pueblos indígenas y tienen implicaciones globales.

La reunión del FSM 2009 se centró mayormente en problemáticas del Brasil, en parte debido a los viajes extensos y costosos a una ubicación remota. Con la esperanza de expandir el alcance del FSM 2009, los organizadores crearon Belén Ampliado para llegar a aquellos que no podrían asistir en persona pero que aún así podían participar "usando Internet, teléfono, emisiones de radio y proyecciones de video mediante las redes sociales del sitio web del FSM en <www.openfsm.net>" (Smythe y Byrd, 2010: 103). El temario del FSM 2009 en Belén incluyó la globalización neoliberal, el ritmo de desarrollo en la región y las implicancias para sus pueblos. Asimismo, surgieron temas más amplios, como el cambio climático, los derechos humanos, la crisis financiera global y la dislocación económica. Los líderes de izquierda de Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Paraguay también participaron de los debates del FSM. Como sucedió antes, mientras que algunos participantes fueron renuentes a la presencia de los Gobiernos, otros la apoyaron (Smythe y Byrd, 2010).

Desde entonces, la reunión del Foro Social Mundial ha sido celebrada en Dakar, Senegal, en 2011 y volvió a Porto Alegre en 2012. La reunión de Porto Alegre de 2012, a la que asistieron 40 mil personas, se centró en diversos temas, como el Movimiento de la Primavera Árabe, el Movimiento Occupy Wall Street, los Indignados de España y la marcha "Tomar las Calles" del 5 de junio por la justicia social y ambiental.

FOROS SOCIALES NACIONALES, REGIONALES Y LOCALES EN AMÉRICA LATINA

Desde el principio, Brasil ha sido un centro importante para la actividad del foro social. Brasil no solo fue anfitrión de 6 encuentros del FSM, también ha alojado a más de 20 foros temáticos, varios foros regionales transfronterizos, 24 foros subnacionales y 2 foros sociales nacionales (Smith y Smythe, 2011: 40). Sin embargo, la fuerte conexión entre Brasil y el FSM no es sorprendente si se considera que varios de los miembros fundadores del Foro Social Mundial eran activistas brasileños.

El estado de Minas Gerais, en Brasil, fue la ubicación del primer foro subnacional, que está vinculado al FSM de 2001 en Porto Alegre. El mismo grupo desarrolló el Foro Social de Minas Gerais en 2001,

2002, 2004, y 2005. Estas inspiraron el primer foro nacional, el Foro Social Brasileño, que tuvo lugar en la ciudad de Belo Horizonte en noviembre de 2003. Allí se celebró un foro subnacional en 2004 y siguió un segundo Foro Social Brasileño en 2006 (Smith y Smythe 2011). En Chile, el proceso del foro social ha tenido lugar en Santiago, que fue la ubicación de 2 foros nacionales, en 2004 y 2006, y de 3 foros temáticos. Además, en Chile hubo 11 foros subnacionales entre 2004 y 2006. La actividad del Foro Social en Chile surgió de la reacción subyacente en las luchas por la integración económica. En contraste, a partir de 2011, se han celebrado solamente 5 foros sociales en México, lo cual puede ser a causa de "la complejidad de las relaciones Estado-sociedad, las fortalezas y debilidades de los actores colectivos y el estado de activismo político" (Smith y Smythe, 2011: 36).

El Cuadro 7.2 muestra la ubicación de los foros sociales regionales, nacionales, locales y temáticos que se produjeron entre 2010 y 2012. Como se destaca, la mayoría de ellos ha tenido lugar en Brasil aunque también se han producido en otros países, incluyendo Argentina, Ecuador, El Salvador, México y Paraguay. Por lo general, estos foros temáticos se enfocan en la educación, pero se han abordado otros temas como migración, crisis financiera, y teología y justicia social.

Cuadro 7.2
Foros regionales, locales y nacionales realizados
en América Latina entre 2010 y 2012

Foro	Año	Ubicación
Foros regionales		
Foro Social Pan Amazonia	2010	Brasil
Foro Social Américas 2010	2010	Paraguay
Foro International de Tierras	2010	Ecuador
Foros locales		
Foro Social Temático de Bahía	2010	Brasil
Foro Social Mundial de Serra Gaucha	2010	Brasil
Gran Foro Social 10 años de Porto Alegre	2010	Brasil
Foro Social de San Pablo	2012	Brasil
Foros nacionales		
Foro Social Mundial de El Salvador	2010	El Salvador

Foro	Año	Ubicación
Foros Temáticos - educación		
Foro Mundial de Educación en la Primera Infancia y Juventud	2010	Brasil
Primer Foro Mundial de Cultura y Educación para la Transformación	2010	Brasil
Foro Internacional de Educación: diversidad e identidad en países de la diáspora africana	2010	Brasil
Foro Comunidad Académica Internacional	2011	Argentina
Foros Temáticos - otros		
Foro temático - Alternativas a la crisis financiera	2010	México
Foro Social Mundial - Migraciones	2010	Ecuador
Foro de Economía Social Solidaria y Feria Mundial de Economía Solidaria	2010	Brasil
Sexto Foro Mundial de Jueces	2010	Brasil
Foro Mundial - Derecho y Justicia: Teología y Liberación	2010	Brasil
Foro temático: Crisis capitalista, justicia social y ambiental	2012	Brasil
Foro Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino	2012	Brasil

Fuente: Elaboración propia.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICIPANTES DEL FSM: RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Las encuestas entre los adultos participantes de las reuniones del FSM 2005 realizadas por el Grupo de Investigación del Movimiento Social Transnacional de la Universidad de California, Riverside (UCR) iluminan sobre la composición y la dinámica de estos eventos en Brasil. Estas encuestas se realizaron en tres idiomas (64,6% en portugués, 18,8% en inglés y 16,6% en español) en varios lugares. El Cuadro 7.3 resume los resultados de esta encuesta teniendo en cuenta las características demográficas de los encuestados, mientras que el Cuadro 7.4 resume los resultados considerando sus características políticas y organizativas. Se ponderaron las respuestas según la representación nacional y regional de los participantes inscritos.

Como muestra el Cuadro 7.3, la mayor parte de los asistentes son jóvenes. Con respecto a la educación, casi la mitad de los encuestados tenía 16 o más años de escolaridad. Los resultados de la encuesta IBASE, de manera similar, muestran que la mayoría de los asistentes eran menores de 35, mientras que los niveles de educación eran altos

en relación con la población en general (IBASE, 2005). Con respecto a la raza, más del 40% de los participantes se identificaron como blancos, muy pocos asistentes se identificaron como negros, multirraciales, latinos/hispanos, indígenas, asiático/isleño del Pacífico o del Medio Oriente. Una pequeña cantidad de participantes se identificaron de otras maneras como, por ejemplo, mediante su nacionalidad o religión (Álvarez et al., 2008). Mientras que IBASE solo les preguntó a los encuestados brasileños sobre la raza, también hallaron que la mayor parte de los participantes se identificaron como blancos. Entre los participantes, hubo apenas más hombres que mujeres, un hallazgo corroborado por la encuesta de IBASE (IBASE, 2005).

Cuadro 7.3
Características demográficas de los participantes
del FSM 2005 (porcentajes válidos; ponderados)

Características demográficas	(%)
Idioma del cuestionario	
Inglés	18,8
Español	16,6
Portugués	64,6
Región de residencia	
Sudamérica	88,1
Europa	4,4
América del Norte (con o sin México)	2,5
Asia	2,5
África	1,7
Centroamérica y el Caribe	0,7
Oceanía	0,2
Género	
Hombre	51,9
Mujer	48,1
Edad	
18-25	45,9

26-35	26,6
36-45	13,3
46-55	3,2
56-65	9,7
66 y más	1,3
Etnia / Raza	
Negro	18,4
Medio oriente	0,6
Asiático / Islas del Pacífico	2,5
Indígena	1,3
Latino / Hispano	6,9
Blanco	44
Multirracial	10
Otro (o respuestas dudosas)	16,3
Años de escolaridad	
0	0,2
1-5	1,8
6-10	6
11-15	42,9
16 y más	49,1

Fuentes: Reese et al. (2008b)

Cuadro 7.4
Experiencias políticas y afiliaciones de los participantes
del FSM 2005 (porcentajes válidos; ponderados)

Experiencias y afiliaciones políticas	(%)
Participación previa en foros sociales	
0	60,7
1	20,3
2	10,3

Experiencias y afiliaciones políticas	(%)
3 a 5	8,7
6 y más	0
Afiliaciones organizacionales	
ONG	41,3
Sindicatos / gremios	21,8
Partidos políticos	20,6
Movimientos sociales	36,3
Agencias gubernamentales	3,2
Sin afiliación	19,6
Asiste en representación de alguna organización	
Sí	79,5
No	20,5
Participación en protestas durante el último año	
0	16,8
1	21,4
2 a 4	35,8
5 y más	26
Participación activa en al menos un movimiento	
Sí	72,5
No	27,5

Fuentes: Reese et al. (2008b).

Muchos de los asistentes del FSM 2005 estaban vinculados a redes de activismo a través de la participación previa en los movimientos sociales y organizaciones afiliadas, un hallazgo corroborado por la encuesta de IBASE (IBASE, 2005). De hecho, la mayoría de los encuestados pertenecía a alguna organización política y la mayoría asistía al foro en nombre de una organización. Los encuestados tendían a estar afiliados a organizaciones no gubernamentales (ONG) y a organizaciones de movimientos sociales.

La mayoría de los encuestados en el FSM 2005 participaba activamente en movimientos sociales, cerca de las tres cuartas partes de

los asistentes al FSM 2005 participaba activamente en al menos un movimiento social. Los encuestados activaban con más frecuencia en movimientos por el medioambiente, los derechos humanos/civiles y por la paz. Esta cifra es un poco más alta que los resultados de la encuesta de IBASE, pero los especialistas indicaron que puede ser porque la encuesta de IBASE preguntó acerca de la participación con menos tipos de movimientos e incluyó más cantidad de encuestados locales (IBASE, 2005; Reese et al., 2008a). Más del 80% de los encuestados participó en al menos una acción de protesta durante los 12 meses anteriores. Más de un tercio de los encuestados participó en dos a cuatro protestas, y más de un cuarto participó en cinco o más.

La ubicación del foro incide en quienes participan, lo cual es evidente al comparar el FSM 2005 en Porto Alegre con el FSM 2007 en Nairobi. Según el Comité Organizador, más del 88% de participantes inscritos en el encuentro de Porto Alegre en 2005 eran de América del Sur, de los cuales un 80% eran de Brasil. En comparación, solo el 69% de los asistentes de Nairobi eran de África y el 48% eran de Kenia. En contraste con los asistentes en Porto Alegre, los participantes del FSM 2007 en Nairobi fueron de un rango etario mayor, completaron la encuesta en inglés y en su mayoría se identificaron como negros. También tendieron a estar ligeramente menos escolarizados que los asistentes de Porto Alegre. En el FSM 2007, la mayoría de los encuestados estaban afiliados a organizaciones, aunque el porcentaje de los encuestados afiliados a ONG fue mayor y a organizaciones de movimientos sociales fue menor que en Porto Alegre en 2005. Los especialistas sugieren que las ONG fueron más frecuentes debido a la abrumadora pobreza de África y la dependencia del financiamiento internacional. Incluso, la afiliación a sindicatos fue menor en el FSM 2007, lo que refleja la relativa debilidad del movimiento obrero dentro de Kenia. Más de un tercio de los encuestados en el FSM 2007 no había participado en ninguna actividad de protesta en los últimos 12 meses. Sin embargo, tanto en el FSM 2005 como en el FSM 2007, más de la mitad de los encuestados había participado en más de dos acciones de protesta en los últimos 12 meses (Reese et al., 2008a).

LOS MOVIMIENTOS LATINOAMERICANOS Y EL PROCESO DEL FORO SOCIAL

Como comentamos anteriormente, una amplia gama de movimientos, redes y organizaciones han participado en las reuniones del Foro Social Mundial. A continuación, nos centramos en cómo el proceso del FSM se ha empleado para avanzar con la resistencia popular al neoliberalismo, la justicia ambiental y los derechos de los grupos marginados, incluidas las mujeres y los indígenas. Estos ejemplos sir-

ven simplemente para ilustrar algunas de las diversas maneras en que los activistas del movimiento se han comprometido con la experiencia del FSM, así como algunos de los desafíos a los que se han enfrentado en él.

AMBIENTALISMO Y OPOSICIÓN POPULAR AL NEOLIBERALISMO

El FSM ha contribuido a construir coaliciones entre naciones y movimientos contra el neoliberalismo. Como en otros lugares del mundo, los activistas latinoamericanos criticaron el neoliberalismo por servir a los intereses de las clases altas y las empresas transnacionales y por antidemocrático. Muchos grupos consideran que sus gobiernos nacionales les prestan cada vez menos atención, incluyendo "la clase trabajadora urbana, el campesinado, los trabajadores rurales, los sectores más bajos de la clase media, los miembros del amplio sector informal y las comunidades indígenas" (Harris, 2002: 139).

Organizar y unir a estos grupos diferentes ha sido obstaculizado por los esfuerzos de los gobiernos en reprimir, cooptar y "dividir y gobernar". Por otra parte, las fuerzas progresistas no han logrado desarrollar una estrategia eficaz contra la globalización capitalista neoliberal o una visión coherente de alguna alternativa. La resistencia popular contra el neoliberalismo, en general, ha sido defensiva, como oponerse a las medidas de austeridad, al Fondo Monetario Internacional, al ajuste estructural y las políticas de libre comercio, en lugar de unirse en torno a una visión de futuro compartida (Harris, 2002; Almeida, 2014).

No obstante, cuando comenzó el FSM se estaban desplegando varias alianzas nuevas contra el neoliberalismo y han participado en el proceso FSM. Entre estas estaba el Movimiento Sin Tierra (MST) en Brasil, que ha impulsado la unión de los pequeños productores, los campesinos sin tierra y los trabajadores contra las reformas neoliberales que benefician a los agronegocios. La Confederación de Nacionalidades del Ecuador (CONAIE) ha ayudado a vincular las luchas indígenas a las de los sindicatos de campesinos y trabajadores rurales y a construir alianzas internacionales. Aunque los participantes del FSM abrazan el principio de que "otro mundo es posible", están divididos en sus visiones de futuro. Mientras que algunos adoptan perspectivas radicales del socialismo democrático, comunismo o anarquismo, otros adoptan un enfoque más reformista (Harris, 2002).

En 2005, el proceso de presupuesto participativo en Porto Alegre fue un tema importante de debate. Los activistas participaron en una secuencia de talleres para difundir el presupuesto participativo como una alternativa al neoliberalismo y a la privatización de bienes que, previamente, eran públicos. Entre ellos estaba la Comisión Nacional

en Defensa del Agua y de la Vida (CDNAV), que consta de 40 movimientos sociales locales de Uruguay. Los esfuerzos de la CDNAV para impulsar el presupuesto participativo culminó en un referendo votado por la mayoría del pueblo uruguayo que prohíbe la privatización del agua y de los servicios de agua potable (Almeida, 2010). Poco después, la CDNAV propuso mecanismos de participación siguiendo los lineamientos del modelo de presupuesto participativo de Porto Alegre 2005 (Allahwala y Keil, 2005).

La lucha por la justicia ambiental es otro tema importante en las reuniones del FSM y, con frecuencia, está vinculada a la resistencia contra el neoliberalismo. Por ejemplo, la reunión del FSM 2006 en Caracas, Venezuela, se centró en varios temas, incluyendo la "deuda ecológica [...] y la lucha por la preservación de los recursos naturales, o más apropiadamente, los recursos globales comunes" (Pallister, 2006: 270). La "'naturaleza flexible del Foro' ofrece un espacio comunicativo para que las personas compartan sus experiencias" (Kaneshiro et al., 2011: 201), permitiéndoles participar y unirse a diversas clases de activistas y organizaciones ambientales. Por ejemplo, en el Foro 2005 en Brasil, un taller centrado en la "Naturaleza en venta" reunió a diferentes grupos como: "Sobrevivencia, una organización colectiva paraguaya que se ocupa de numerosos problemas ambientales como los derechos de agua, la sostenibilidad ecológica y la biodiversidad; Amigos de la Tierra Internacional, una gran ONG estadounidense; World Rainforest Movement, un grupo conservacionista con sede en Uruguay y Gran Bretaña; e incluso la Central Unica dos Trabalhadores (CUT), la confederación de sindicatos de trabajadores más poderosa de Brasil" (Kaneshiro et al., 2011: 201). El foro policéntrico de Caracas 2006 destacó el tema de "capitalismo y amenazas a la vida", que ayudó a tender puentes entre los activistas ambientales comprometidos con temas como el calentamiento global con aquellos que luchan por los derechos a las tierras nativas y los derechos sexuales y reproductivos (Kaneshiro et al., 2011). Así, el proceso del FSM no solo ha ayudado a construir alianzas entre países, sino también entre movimientos.

LOS MOVIMIENTOS INDÍGENAS Y DE MUJERES

El proceso del foro social ofrece un nuevo espacio para el activismo feminista y la construcción de coaliciones. La presencia feminista en el FSM ha influido significativamente en la crítica de los participantes a la economía global actual y en las perspectivas de formas alternativas de globalización. En el llamado de Porto Alegre de 2001 se incluyó un mensaje que decía "la globalización refuerza el sistema patriarcal y sexista", y sostuvo que la igualdad entre mujeres y hombres debe

ser un elemento central de la lucha de activistas por una mejor alternativa (Hewitt y Karides, 2011: 85). Durante la segunda reunión del FSM en Porto Alegre, el Llamamiento de los Movimientos Sociales declaró en sus objetivos que están luchando "contra un sistema sexista, racista y de violencia, que privilegia los intereses del capital y el patriarcado sobre las necesidades y aspiraciones de los pueblos" (Vargas, 2003: 911). En las discusiones sobre la democratización de la economía global, las feministas han contribuido a centrar la atención de los participantes en dos aspectos: el "socioeconómico, arraigado en las estructuras políticas y económicas de la sociedad; y el cultural o simbólico, arraigado en los patrones sociales de representación, interpretación y comunicación" (Vargas, 2003: 912).

También durante el segundo FSM, la Articulación Feminista Marcosur ofreció novedosos espacios para la comunicación entre activistas. Los talleres se enfocaron en temas que van desde "Mujeres Migrantes: fronteras anchas y ajenas" y "Sexo, Mentiras y Comercio Internacional" a "Discriminación e Intolerancia". Además, la red global Mujeres viviendo bajo leyes musulmanas participó en el proceso FSM mediante la elaboración de las experiencias de palestinos e israelíes "coordinando y luchando tanto contra la agresión israelí como contra la exclusividad de género de ambas realidades" (Vargas, 2003: 918). Por último, Planeta Femea (Planeta Femenino) fue un espacio creado en el FSM por feministas brasileñas para intercambiar experiencias y estrategias, y para participar en actividades culturales. Este espacio impulsó la campaña del 28 de septiembre, o el Día de la Lucha por el Aborto en América Latina, que también fue una protesta contra la política de Bush, Presidente de los Estados Unidos por entonces, de retirar la ayuda financiera a las ONG que apoyan el aborto y a aquellas relacionadas con las reformas legales o de consultas médicas sobre abortos (Vargas, 2003).

Pero mientras que las feministas han influido en el proceso FSM desde sus inicios, también han luchado por lograr mayor visibilidad en él. A los talleres feministas asistían pocos hombres, y la perspectiva feminista no era ampliamente compartida por los participantes y organizadores del FSM. En general, las mujeres estuvieron sub representadas entre los panelistas durante las primeras reuniones del FSM. Las mujeres de grupos marginados, como las lesbianas, las migrantes, etcétera, fueron particularmente segregadas. Con el tiempo, a través de la lucha y la participación activa en la planificación de reuniones y eventos del FSM, las feministas aumentaron su visibilidad dentro del proceso del FSM; la inclusión de los principios de igualdad y diversidad en la Carta de Principios del FSM contribuyó a estos esfuerzos. La representación de las mujeres como oradoras en

los grandes eventos del FSM aumentó en las reuniones posteriores, mientras que los temas feministas en los talleres se hicieron más frecuentes (Eschle y Maiguashca, 2010; Hewitt y Karides, 2011; Karides y Ponniah, 2008; Vargas, 2005). Aún así, el apoyo a determinados objetivos feministas –como el derecho al aborto– sigue siendo disputado en las reuniones del Foro Social donde participan muchos activistas religiosos, y el apoyo al feminismo ha variado de un lugar a otro (Eschle y Maiguashca, 2010; Willis y Roskos, 2007). Sin embargo, muchas feministas han considerado que el FSM es un lugar importante para elevar la conciencia sobre el patriarcado y las luchas de las mujeres en todo el mundo, y para construir alianzas transnacionales (Karides y Hewitt, 2011).

Como las feministas, muchos grupos indígenas ven al FSM como una espada de doble filo. Por un lado, es una herramienta útil y una oportunidad para vincularse con activistas de otros movimientos y países. Por otro lado, las reuniones del FSM han sido percibidas como excluyentes, dominadas por blancos y, en general, poco interesadas en las cuestiones específicas pertinentes a las comunidades indígenas (Becker y Koda, 2011). Teniendo en cuenta cómo la colonización y el capitalismo neoliberal han afectado negativamente los derechos de los pueblos indígenas a su tierra, sustento y cultura, no es sorprendente que las organizaciones de derechos indígenas hayan participado en el proceso del FSM desde el principio. Muchos vieron al FSM como la oportunidad perfecta para que los activistas indígenas resalten las cuestiones centrales para sus comunidades. Los activistas indígenas tuvieron una amplia presencia en el Foro Social de las Américas en Quito, en julio de 2004, y en el FSM 2005 en Porto Alegre. En cambio, tuvieron bastante menos presencia en el encuentro policéntrico de 2006 en Venezuela, en parte debido a la extensión de la ciudad y, además, porque los paneles estuvieron menos centralizados (Becker y Koda, 2011).

También como las feministas, los grupos indígenas han criticado el proceso del FSM por haberlos marginado. Los pueblos indígenas comunicaron sentimientos de exclusión durante las reuniones del FSM y sugirieron que su reducido número, sumado a la falta de recursos, implicaba que sus voces no eran escuchadas. Por ejemplo, en la reunión del FSM 2005 se creó un espacio designado específicamente para los grupos indígenas, y mientras que este espacio aparte ofreció una oportunidad para el diálogo y el debate, también limitó la comunicación con los activistas no indígenas que participaban en el proceso del FSM. Asimismo, la reunión del FSM 2004 celebrada en India, se centró en temas locales y no abordó los temas más pertinentes para los pueblos indígenas de las Américas (Becker y Koda,

2011). Aunque garantizar la inclusión de los pueblos indígenas de la Amazonía y su entorno fue una prioridad para los organizadores de la reunión del FSM 2009 en Belén, Brasil, el hecho de que la traducción se limitaba a un pequeño número de sesiones constituyó un desafío para que todas las voces sean escuchadas. De 2.000 eventos, 1.400 fueron en portugués y las ONG con más recursos financiaron algunas sesiones auto-organizadas, lo que ahondó "la brecha comunicacional con los activistas y movimientos locales" (Smythe y Byrd, 2010: 103).

CONCLUSIÓN

Emergente de los movimientos contra la globalización neoliberal y con raigambre en el Partido de los Trabajadores de Brasil, el FSM se ha convertido en el escenario mundial del encuentro internacional de activistas sociales progresistas. América Latina ha desempeñado un papel fundamental en el surgimiento y el éxito del FSM, ya que en 7 de los últimos 12 años se ha celebrado en ciudades de Brasil o Venezuela. América Latina ha sido un semillero de foros sociales regionales, nacionales y subnacionales liderados por Brasil. Aunque la presencia de políticos izquierdistas de América Latina ha despertado preocupación con respecto a la autonomía del FSM de partidos políticos y gobiernos, también resalta la influencia política de los socialistas en la región. Mientras que la lucha contra el neoliberalismo y por la justicia global en general ha predominado en las reuniones del FSM, varios movimientos que luchan por causas específicas y por los derechos de determinados grupos marginados también han participado y luchado por una mayor visibilidad en este proceso. Al hacerlo, han contribuido a profundizar la conciencia política de los activistas, a construir alianzas y a fortalecer las diferentes campañas de los movimientos sociales en América Latina y más allá.

Si bien los investigadores han explorado el proceso del FSM en diversos contextos, es perentoria más investigación comparativa sobre cómo el proceso del FSM en América Latina contrasta con aquellos de otras regiones. Además, es necesaria una investigación histórica adicional sobre la relación cambiante entre el proceso del FSM y los partidos de izquierda, especialmente en el contexto de la reciente muerte del Presidente venezolano Hugo Chávez, la figura más prominente de la marea rosa, y más ampliamente por el ascenso y caída de varios partidos socialistas y líderes. Desde su apogeo en 2005, la asistencia al FSM ha disminuido, incluso en Brasil. Comprender los factores que contribuyen a esta disminución, y las implicancias del aumento y la declinación de la asistencia al FSM, también merecen atención académica.

BIBLIOGRAFÍA

Allahwala, A. y Keil, R. 2005 'Introduction to a debate on World Social Forum' en *International Journal of Urban and Regional Research*, *29*(2): 409-416.

Almeida, P. 2007 'Defensive mobilization: Popular movements against economic adjustment policies in Latin América' en *Latin American Perspectives*, *34*(3): 123-139.

Almeida, P. 2010 'Social movement partyism: Collective action and political parties' en Van Dyke, N. y McCammon, H. (eds.) *Strategic alliances: New studies of social movement coalitions* (Minneapolis: University of Minnesota Press) pp. 170-196.

Almeida, P. 2014 *Mobilizing democracy: Globalization and citizen protest* (Baltimore: Johns Hopkins University Press).

Álvarez, R. et al. 2008 'The contours of color at the World Social Forum: Reflections on racialized politics, representation, and the global justice movement' en *Critical Sociology*, *34*(3): 389-407.

Becker, M. y Koda, A. N. 2011 'Indigenous Peoples and Social Forums' en Smith, J. et al. (eds.) *Handbook on World Social Forum Activism* (Boulder: Paradigm Publishers) pp. 105-124.

Corbeil, J. R. 2012 'The World Social Forum: An exploration of the movement through an alternative development lens' en *ProQuest* (Ann Arbor), AAIMR79860.

De Sousa Santos, B. 2004 'The World Social Forum: A user's manual' en <http://www.ces.uc.pt/bss/documentos/fsm_eng.pdf> Acceso julio de 2013.

Eschle, C. y Maiguashca, B. 2010 *Making feminist sense of the global justice movement* (Lanham: Rowman & Littlefield).

Hammond, J. 2006 'The possible world and the actual state: The World Social Forum in Caracas' en *Latin American Perspectives*, *33*(3): 122-131.

Harris, R. L. 2002 'Resistance and alternatives to globalization in Latin America and the Caribbean' en *Latin American Perspectives*, *29*(6): 136-151.

Hewitt, L. y Karides, M. 2011 'More than a shadow of a difference? Feminist participation in the World Social Forum' en Smith, J. et al. (eds.) *Handbook on World Social Forum Activism* (Boulder: Paradigm Publishers) pp. 85-104.

Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) 2005 *An X-Ray of Participation in the 2005 Forum: Elements*

for a Debate (Rio de Janeiro: IBASE). En <www.ibase.org.br/userimages/relatorio_fsm2005_INGLES2.pdf> Acceso julio de 2013.

Juris, J. 2006 'Youth and the World Social Forum' en *SSRC Web Forum on Youth Activism*. En <http://ya.ssrc.org/transnational/Juris/> Acceso 8 de agosto de 2013.

Juris, J.; Smith, J. y USSF Research Collective 2011 'In the belly of empire: The U.S. social forum process' en Smith, J. et al. (eds.) *Handbook on World Social Forum Activism* (Boulder: Paradigm Publishers) pp. 283-302.

Kaneshiro, M.; Lawrence, K. S. y Chase-Dunn, C. 2011 'Global environmentalists and their movements at the World Social Forums' en Smith, J. et al. (eds.) *Handbook on World Social Forum Activism* (Boulder: Paradigm Publishers) pp. 186-205.

Karides, M. y Ponniah, T. 2008 'In defense of World Social Forum VII' en Blau, J. y Karides, M. (eds.) *The world and US social forums: A better world is possible and necessary* (Leiden: Brill) pp. 7-20.

Kerswell, T. 2012 'Globalizing the social movements? Labour and the World Social Forum' en *Theory in Action*, *5*(3): 73-92.

Pallister, E. 2006 'Continuity and change: An eyewitness account of the World Social Forum' en *Globalizations*, *3*(2): 270-272.

Reese, E. et al. 2008a 'Research Note: Surveys of World Social Forum Participants Show Influence of Place and Base in the Global Public Sphere' en *Mobilization: An International Quarterly*, *13*(4): 431-445.

Reese, E. et al. 2008b "'Institute for Research on World Systems Working Paper #45. Appendix for 'Research Note: Surveys of World Social Forum Participants Show Influence of Place and Base in the Global Public Sphere'" en *Mobilization: An International Journal*, *13*(4): 431-445.

Smith, J. y Doerr, N. 2011 Democratic innovation in the U.S. and European social forums' en Smith, J. et al. (eds.) *Handbook on World Social Forum activism* (Boulder: Paradigm Publishers) pp. 339-359.

Smith, J. et al. 2007 *Global democracy and the world social forums* (Boulder: Paradigm Publishers).

Smith, P. y Smythe, E. 2011 '(In)Fertile ground? Social forum activism in its regional and local dimensions' en Smith, J. et al. (eds.) *Handbook on World Social Forum activism* (Boulder: Paradigm Publishers) pp. 29-49.

Smythe, E. 2011 'Our world is not for sale!: The WSF process and transnational resistance to international trade' en Smith, J. et al. (eds.) *Handbook on World Social Forum activism* (Boulder: Paradigm Publishers) pp. 166-185.

Smythe, E. y Byrd, S. 2010 'World Social Forum activism in Belem and beyond' en *Journal of World-Systems Research*, *16*, 94-105.

Teivainen, T. 2002 'The World Social Forum and global democratization: Learning from Porto Alegre' en *Third World Quarterly*, *23*(4): 621-632.

Teivainen, T. 2011 'The political and its absence in the world social forum: Implications for democracy in the forum and in the world' en Smith, J. et al. (eds.) *Handbook on World Social Forum activism* (Boulder: Paradigm Publishers) pp. 50-63.

Vargas, V. 2003 'Feminism, globalization and the global justice and solidarity movement' en *Cultural Studies*, *17*(6): 905-920.

Vargas, V. 2005 'Feminisms and the World Social Forum: Space for dialogue and confrontation' en *Development* (Cambridge), *48*(2): 107-110.

Willis, P. K. y Roskos, L. H. 2007 'Is another world possible when violence against women is ignored? Some questions from the Boston Social Forum' en *Peace & Change*, *32*(4): 520-545.

Wood, L. 2010 'Horizontalist youth camps and the Bolivarian Revolution: A Story of blocked diffusion' en *Journal of World Systems Research*, *16*: 48-62.

CÓMO CITAR ESTA PUBLICACIÓN:
Breckenridge-Jackson, Ian, Natasha Radojcic, Ellen Reese, Elizabeth Schwarz, and Chistopher Vito. 2017. "Los movimientos sociales latinoamericanos y el proceso del Foro Social Mundial" Pp. 161-182 en Paul Almeida y Allen Cordero, Eds., *Movimientos Sociales en América Latina: Perspectivas, Tendencias y Casos*. Buenos Aires: CLACSO.

8

Robert Mackin*

TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN Y MOVIMIENTOS SOCIALES

Por más de dos generaciones, la teología de la liberación ha servido de inspiración a los movimientos populares en América Latina y más allá. En los años 60 y 70, los obispos latinoamericanos se reunieron en conferencias regionales para articular los principios fundamentales de la teología de la liberación, con más ardor en Medellín, Colombia en 1968. Los movimientos de laicos, como las comunidades eclesiales de base (CEB), y los movimientos sacerdotales, como el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo en Argentina, reclamaron cierta identificación con la teología de la liberación. En los años 80 y 90, los liberacionistas fueron protagonistas clave en los movimientos por la democratización en América Latina y, desde entonces, han apoyado muchas de las candidaturas de la "marea rosa", es decir, la ola de gobiernos de izquierda y centroizquierda en América Latina que han llegado al poder en los últimos 10-15 años. Estos incluyen a Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, un ex obrero con fuertes vínculos con la iglesia liberacionista, así como la sucesora de Lula, la recientemente reelecta Dilma Rousseff. Los investigadores también han documentado la forma en que la teología de la liberación inspiró a activistas y

* Texas A&M University, College Station, EEUU.

movimientos, como el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra en Brasil (Wolford, 2006) y la nueva ola de movimientos indígenas en América Latina (Cleary y Steigenga, 2004). La relación de la teología de la liberación con los movimientos revolucionarios también ha sido explorada en Nicaragua con los sandinistas (Berryman, 1984; Booth, 1985) y en México con los zapatistas (Harvey, 1994; Kovic, 2004). Por último, en América Latina la teología de la liberación sigue inspirando nuevos planteos teológicos, como la teología inculturada (Cleary y Steigenga, 2004) y las teologías de la liberación de la sexualidad y la igualdad de género (Althaus-Reid, 2006b).

La teología de la liberación también inspiró movimientos fuera de América Latina. Solo en Estados Unidos, surgió una teología de la liberación negra (para una revisión ver Antonio, 2007). Asimismo, han surgido teólogas feministas que brindaron críticas fundamentales a los teólogos de la liberación. Por otra parte, la teología de la liberación inspiró a las iglesias cristianas predominantemente de clase media blanca en Estados Unidos, Canadá y Europa a enfocarse en cuestiones de justicia social. Este movimiento de solidaridad, que fue muy fuerte durante los 80, intentó contrarrestar las políticas de Ronald Reagan en América Central (Smith, 1996). En otros lugares, la teología de la liberación ha influido en los movimientos en África, Europa y Asia (Smith, 1991).

Sin embargo, a pesar del impacto que ha tenido el movimiento de la teología de la liberación en la sociedad y la religión de América Latina, el consenso entre eruditos es que la teología de la liberación, si no ha muerto, está en declive (Drogus y Stewart-Gambino, 2005; Burdick, 2004). Las explicaciones académicas sobre el reflujo de la teología de la liberación destacan cómo un contramovimiento conservador dentro de la Iglesia Católica la desafió con éxito (Stewart-Gambino, 1992). En esta contienda, los esfuerzos de la jerarquía de la Iglesia para controlar a los teólogos de la liberación fueron cardinales, comenzando con las elecciones de 1972 del arzobispo conservador Alfonso López Trujillo como Secretario General de la Conferencia de los Obispos en el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) y continuando con la política del Vaticano bajo los Papas Juan Pablo II y Benedicto XVI de reemplazar a los obispos progresistas por unos más conservadores. El cardenal Joseph Ratzinger, que en 2005 se convirtió en el Papa Benedicto XVI, también intentó deslegitimar la teología de la liberación *qua* teología con dos enseñanzas oficiales emitidas por la Congregación Vaticana para la Doctrina de la Fe. Esta dinámica de sofrenar la teología de la liberación también se produjo a nivel local, donde los obispos restringieron las actividades de los movimientos y organizaciones católicos, que llevó a muchos

liberacionistas a desplegar su activismo en movimientos con escaso o ningún lazo con la iglesia, mientras que otros se mantuvieron activos en sus iglesias, aunque enervados por las restricciones impuestas por la jerarquía (Drogus y Stewart-Gambino, 2005).

Empero, algunos estudiosos sostienen que sería erróneo atribuir el reflujo de la teología de la liberación únicamente a los esfuerzos del contramovimiento conservador católico. También debemos considerar el impacto negativo de la caída de la Unión Soviética para todos los movimientos de izquierda, incluyendo la teología de la liberación; así como el efecto de un cambio social significativo, como el retorno a la democracia en muchas partes de América Latina en los años 80 y 90. Estos autores señalan que los movimientos sociales a menudo experimentan una fase de declive y de transformación después de un período de cambio social a gran escala (ver Drogus y Stewart-Gambino, 2005). Por otra parte, Daniel Levine (2006) y Frances Hagopian (2009) han señalado que la América Latina contemporánea es mucho más pluralista de lo que fue hace dos generaciones, no solo en lo político sino también en lo religioso. La expansión fastuosa del protestantismo en las últimas tres décadas, especialmente el pentecostalismo y el fundamentalismo, ha cambiado a la sociedad civil de América Latina (Chesnut, 2003; Gill, 1998). Como resultado de esta transformación, la Iglesia Católica Apostólica Romana ya no goza del monopolio religioso en América Latina (Levine, 2006).

La investigación sobre el movimiento de la teología de la liberación y su impacto en los movimientos sociales de América Latina es enorme y todavía suscita debate académico en diversas disciplinas. En el transcurso del capítulo, vamos a ver no solo las contribuciones importantes que han hecho los estudiosos de los movimientos sociales a la investigación sobre la teología de la liberación, sino también cómo este trabajo de investigación ha contribuido a la teorización sobre los movimientos sociales. Debido al tamaño y complejidad de estas literaturas, este capítulo se limita a tres objetivos. Primero, voy a describir los orígenes del movimiento de la teología de la liberación. Segundo, voy a resumir los debates sobre las investigaciones que abordan variaciones en la influencia de la teología de la liberación durante sus años más influyentes (los 60 y 70). Y tercero, voy a explorar si la teología de la liberación continúa influyendo y cómo, o ya no, a los movimientos contemporáneos. Consideradas en conjunto, las investigaciones examinadas dejan en claro que la secularización ha tenido un gran impacto en la teología de la liberación como movimiento. Dejando de lado los casos en que los liberacionistas participan en movimientos y organizaciones con vínculos formales con la Iglesia Católica Apostólica Romana (como las CEB), es difícil discernir las raíces

religiosas de los movimientos que ya no se identifican abiertamente como católicos o cristianos. Por lo tanto, en la conclusión retomo la cuestión de la secularización, es decir, la decreciente importancia de la religión –incluso en los movimientos con gran participación de personas religiosas.

LOS ORÍGENES DE LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN

El punto de viraje para el movimiento de la teología de la liberación se produjo en la segunda reunión de la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) de los católicos en Medellín, Colombia en 1968 (Smith, 1991). El objetivo de la reunión fue implementar las conclusiones del Concilio Vaticano II (1962-1965) en América Latina. Las conclusiones de la Conferencia, que establecieron la agenda del movimiento para los años siguientes, fueron tres. Primero, en el concepto de hacer una "opción preferencial por los pobres", la Iglesia latinoamericana se comprometió con la ardua situación de los pobres y oprimidos. Segundo, los obispos sugirieron que la mejor manera para que la Iglesia tuviera solidaridad con los pobres era promover las CEB, que se habían experimentado primero en Brasil y Panamá, y luego en Chile y México. Tercero, los obispos –claramente inspirados por la teoría de la dependencia– sostuvieron que la dependencia estructural de América Latina hacia países más desarrollados se tradujo en "una situación pecaminosa", según la cual los habitantes de los países desarrollados se hicieron más ricos mientras que los pobres de América latina luchaban por sobrevivir.

Uno de los textos fundacionales del movimiento, *Una teología de la liberación* (1973), fue escrito por un joven sacerdote peruano, el padre Gustavo Gutiérrez, uno de los tantos liberacionistas que ayudaron a los obispos de América Latina en la redacción de los textos clave de Medellín. Gutiérrez (1973) realizó tres contribuciones primordiales. En primer lugar, esbozó una nueva forma de hacer teología que enfatizaba la "praxis", definida como "vivir activamente la propia fe" (McGovern, 1989: 32). El concepto de "praxis" tiene raíces marxistas; sin embargo, también estuvo inspirado en la metodología de "ver, juzgar y actuar" del padre Joseph Cardijn, utilizada inicialmente entre los Jóvenes Obreros Católicos de Bélgica en los años 20 (Horn, 2009). En segundo lugar, Gutiérrez destacó la liberación como un tema central de la Biblia, especialmente en el *Libro del Éxodo*, que reza: "[…] mostró que Dios actúa en la historia a través de la acción *política*, que liberó las personas de la miseria y la opresión en Egipto, que los formó como pueblo y los guió hacia la construcción de una sociedad nueva y más justa" (énfasis original, McGovern, 1989: 10). En tercer lugar, sostuvo que la Iglesia no puede ser neutral; pues hacerlo

ayudaría a mantener un statu quo injusto. Señaló: "En nuestros tiempos y en nuestro continente, ser solidarios con los 'pobres' [...] significa correr riesgos personales –incluso poner la propia vida en peligro" (Gutiérrez, 1973: 301).

La teología de la liberación brindó una crítica radical de la sociedad y llamó a la Iglesia Católica a asumir un nuevo rol, uno que estuviese del lado de los pobres y los oprimidos. Tal cambio en el énfasis, como se señaló anteriormente, rápidamente se tradujo en un contramovimiento. Una vez que fue elegido Secretario General de la CELAM en 1972, el arzobispo (y luego cardenal) López Trujillo de Colombia intentó limitar la influencia de la teología de la liberación mediante la eliminación de los párrocos progresistas de los puestos clave en la CELAM (Smith, 1991).

Para la tercera reunión de la CELAM en Puebla, México, en 1979, muchos esperaban que los conservadores y el Papa Juan Pablo II, recién entronizado, distanciaran a la Iglesia de las conclusiones radicales de Medellín. Pero en un movimiento sorprendente, Juan Pablo II apoyó a las CEB en un discurso ante la Conferencia de Puebla. Poco después de eso, los obispos reunidos reafirmaron muchas de las conclusiones centrales de Medellín, incluyendo que la Iglesia debe hacer una "opción preferencial por los pobres". Sin embargo, esto no resolvió la situación de la teología de la liberación en la Iglesia.

En 1984, el cardenal Joseph Ratzinger, jefe de la Congregación para la Doctrina de la Fe sita en el Vaticano, emitió una "Instrucción sobre ciertos aspectos de la teología de la liberación". Si bien reconoce la liberación como un tema legítimo para los teólogos, Ratzinger criticó tres aspectos de lo que él llamó "ciertas formas" de la teología de la liberación que, según sostuvo: redujo la fe a la política; adoptó acríticamente el marxismo; y atacó a la autoridad en la Iglesia. Los liberacionistas trataron de minimizar el efecto paralizante de la "Instrucción", señalando que Ratzinger no identificó a ningún teólogo particular por su nombre y que, en general, sus ideas fueron consistentes con las esbozadas por Ratzinger (McGovern, 1989). Por su parte, Gutiérrez había indicado claramente en sus primeros escritos que la liberación era un proceso complejo y debía ser entendida en tres niveles interdependientes: "[...] en un nivel sociopolítico, como el pleno desarrollo de las personas y, por último, como liberación del pecado" (McGovern, 1989: 224; Gutiérrez, 1973).

EXPLICACIONES DE LAS VARIACIONES DE INTENSIDAD DE LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN

Para los estudiosos de la teología de la liberación, una de las áreas más fructíferas refiere a las explicaciones sobre la variación en la fuerza

del movimiento. La teología de la liberación fue más fuerte en Brasil y Chile (Adriance, 1986; Hewitt, 1991; Neuhouser, 1989; Sanders, 1969; Smith, 1991; Vallier, 1970, 1972). En ambos lugares, los obispos progresistas se unieron a sacerdotes, monjas y laicos, tanto antes como después del inicio de la dictadura militar. Por ejemplo, antes del ascenso del dictador Pinochet, la jerarquía chilena fue considerada como una de las más progresistas en América Latina al promover la formación del Consejo de Obispos de América Latina (CELAM) e impulsar la reforma agraria en Chile durante la implementación de un programa de reforma agraria para las tierras ociosas de la Iglesia (Gill, 1998; Thiesenhusen, 1966; Vallier, 1972). Al mismo tiempo, promovieron el activismo entre los laicos no solo en las CEB, sino también en movimientos patrocinados oficialmente que tenían una larga historia en la Iglesia, incluyendo los movimientos de Acción Católica específicos para estudiantes, trabajadores y campesinos (Fernández-Fernández, 1996; Horn, 2009; Mackin, 2012; Poggi, 1967). Antes del golpe de Estado de 1964 en Brasil, los obispos brasileños habían promovido reformas para mejorar las vidas de los pobres (Bruneau, 1974, 1982; Mainwaring, 1986; Neuhouser, 1989). En los años 70, había más grupos CEB en Brasil que en cualquier otro lugar en América Latina (Dussel, 1992). Después de que los militares tomaron el poder en ambos países, la jerarquía de la Iglesia se unió a los activistas para exigir el retorno a la democracia.

En otros lugares, la teología de la liberación fue notablemente menos influyente. En Argentina, la Iglesia fue considerada mayormente como aval del gobierno militar, incluso durante la guerra sucia de los años 1976-1983, cuando la represión estaba en su punto álgido (Burdick, 1995; Gill, 1998; Torres, 1992). Aunque en Argentina surgió un movimiento de sacerdotes progresistas, el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, gozaron de poca influencia entre la jerarquía y en la sociedad (Burdick, 1995). En Colombia y Venezuela, las jerarquías de la Iglesia siempre se alinearon con los conservadores (Levine, 1981). En México, la Iglesia adoptó oficialmente una postura independiente vis a vis el Estado, aunque los líderes de la Iglesia constantemente marginaron a los progresistas y defendieron la represión estatal (Arias et al., 1981; Ceballos Ramírez, 1991; Malo et al., 1986). Incluso en El Salvador, una de las iglesias progresistas más conocidas, el arzobispo Oscar Romero fue numéricamente eclipsado por los conservadores en la jerarquía de la Iglesia (Berryman, 1984).

Las encuestas del catolicismo latinoamericano revelan la existencia de liberacionistas en casi todos los países; no obstante, fue solo en un puñado de estos que los liberacionistas y los progresistas en general definieron el "centro de gravedad" de la iglesia (Mainwaring

y Wilde, 1989: 5). ¿Cómo se explica esta variación? Las explicaciones académicas del cambio social en la Iglesia Católica enfatizan el papel de las elites eclesiásticas, los movimientos de masas o los desafíos en el entorno organizacional de la Iglesia.

Los teóricos de la dependencia de la elite sostienen que los cambios en la Iglesia Católica o bien son instigados por las elites o solo se difunden ampliamente una vez que cuentan con su aprobación. Debido al control jerárquico en la Iglesia Católica, las innovaciones y los movimientos que estas inspiran se desvanecen cuando las elites les retiran su apoyo (Kurtz, 1986; Smith, 1991). Las explicaciones del surgimiento de la teología de la liberación a partir de la dependencia de la elite sostienen que las reformas emanadas del Concilio Vaticano II desataron una serie de cambios dramáticos en toda la Iglesia, uno de los cuales fue el movimiento de la teología de la liberación en América Latina (Levine, 1992; Mainwaring, 1986; Sigmund, 1990; Wilde, 2004). Los críticos señalan que en muchos lugares, los líderes nacionales y locales de la Iglesia llevaron a cabo reformas progresistas antes del Concilio Vaticano II. Específicamente, la investigación acerca de la diócesis de Cuernavaca, México (Malo et al., 1986; Mackin, 2003; Suárez, 1970), y los Episcopados nacionales de Chile y Brasil demuestran que las reformas eclesiásticas comenzaron antes del inicio del Concilio Vaticano II en 1962 (Bruneau, 1974, 1982; Mainwaring, 1986; Smith, 1982; Stewart-Gambino, 1992; Vallier, 1970, 1972).

Un segundo enfoque para el estudio del cambio social en la Iglesia Católica es la teoría del movimiento de masas. Estos expertos destacan que los cambios entre las elites de la Iglesia y, en la iglesia de manera más general, son el resultado de la movilización masiva de los laicos. Es decir, la presión de los grupos de marginados y explotados que se organizan para protestar contra la pobreza y el deterioro de las condiciones socioeconómicas explican mejor el cambio social en la Iglesia Católica. Por ejemplo, muchos estudiosos de la movilización masiva consideraron a los CEB como una fuerza revolucionaria en la Iglesia y la sociedad latinoamericanas (Berryman, 1984; Lernoux, 1980). Los críticos de este punto de vista argumentaron, sin embargo, que los obispos locales tenían un impacto significativo en la fuerza y la orientación política de las CEB (Hewitt, 1991; Levine, 1981; Cleary y Stewart-Gambino, 1992; ver también, Cousineau, 2003).

En los últimos años ha surgido un tercer enfoque que se centra en cómo los cambios en el entorno organizacional afectan a los cambios en la Iglesia (Neuhouser, 1989; Scott, 2003). Los primeros trabajos sobre este tema destacaron la importancia de la represión estatal en el surgimiento de la teología de la liberación (Berryman, 1984), mientras que los trabajos más recientes han puesto de relieve la

competencia de grupos y movimientos fuera de la Iglesia (Gill, 1998; Neuhouser, 1989; Vallier, 1970). Los académicos del primer grupo destacan cómo las Iglesias nacionales que desafiaron a los regímenes estatales represivos, pidiendo respeto a los derechos humanos y democratización, giraron hacia la izquierda. La principal crítica de este enfoque radica en el hecho de que en muchos lugares (por ejemplo, Chile y Brasil), la Iglesia nacional ya había tomado posturas progresivas antes de la aparición de los regímenes autoritarios. Por lo tanto, identificar al terrorismo de Estado como el principal factor causal para explicar el surgimiento de la teología de la liberación –en América Latina– es insostenible.

Un segundo grupo de expertos que se centran en el entorno organizacional han enfatizado la importancia de la competencia entre los movimientos religiosos en el surgimiento de la teología de la liberación. Se destaca el trabajo de Anthony Gill (1998), que sugiere que los obispos son "potenciadores de feligreses", y por lo tanto una amenaza protestante viable que aumenta la probabilidad de que las conferencias episcopales nacionales condenen públicamente los regímenes autoritarios. Los críticos de este punto de vista señalan que una dependencia excesiva en los factores coyunturales del cambio social omite explicaciones internas clave (Mackin, 2010, 2012). Dicho esto, el trabajo de Gill (1998) ha sido crucial para entender la relación entre la competencia religiosa y el cambio religioso.

En la actualidad, no existe consenso en la literatura acerca de por qué surgió la teología de la liberación, ni cuándo o dónde lo hizo. Las primeras explicaciones destacaron el conflicto Iglesia-Estado y los enfoques más recientes se han centrado en el conflicto Iglesia-sociedad. Recientemente, Goldfrank y Rowell (2012) han sugerido el retorno a un enfoque en las relaciones Iglesia-Estado argumentando que, ahí donde las Iglesias eran más autónomas de los Estados, fueron más propensas a denunciarlos por los abusos a los derechos humanos.

LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES CONTEMPORÁNEOS

Los investigadores se han interesado en estudiar no solo el surgimiento, la continuidad y la merma del movimiento de la teología de la liberación (Smith, 1991; Drogus y Stewart-Gambino, 2005), sino también en cómo el movimiento ha influido o ha desembocado en otros movimientos (Meyer y Whittier, 1994). Esta parte del capítulo abreva en la investigación sobre la relación entre la teología de la liberación y los movimientos indígenas, políticos y de igualdad de género.

MOVIMIENTOS INDÍGENAS NACIONALES Y TRANSNACIONALES

En los últimos 30 años, hubo una explosión de la movilización indígena de América Latina. Para dar un ejemplo, Chase Smith (citado en Cleary y Steigenga, 2004) señala que en los 90 aproximadamente el 70% de las poblaciones indígenas solo en la Cuenca del Amazonas estaban involucradas en algún tipo de organización indígena. Los movimientos indígenas funcionan no solo a nivel local o comunitario, sino que también operan a nivel regional, nacional e internacional como movimientos compuestos por más de un grupo indígena (Yashar, 2005: 100). Los liberacionistas han sido especialmente influyentes en los movimientos indígenas de Ecuador, México y Perú, aunque la influencia de la teología de la liberación y de la religión en general ha variado con el tiempo.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia Católica en muchas partes de América Latina trató de organizar a los indígenas en movimientos patrocinados oficialmente como Acción Católica y Acción Católica Especializada (Calder, 2004; Mackin, 2012). Estos movimientos patrocinados por la Iglesia recalcaron en la asimilación y el desarrollismo (Calder, 2004). Sin embargo, después del Concilio Vaticano II, y frente a una rápida expansión de la población protestante en muchas partes de América Latina, los líderes católicos desarrollaron un nuevo enfoque, llamado la "pastoral indígena", que abarcaba la historia y la cultura indígenas. Con el tiempo, esto ha llevado a la aprobación del Vaticano de la teología inculturada. En el caso de Guatemala, por ejemplo, no había párrocos indígenas ni tampoco ningún funcionario de la Iglesia que hablara alguna lengua indígena, en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial (Calder 2004). En un intento por responder mejor a la población indígena, Virginia Garrard-Burnett (2004: 125) señala el cambio en Guatemala hacia una teología inculturada que refleja un intento de "[...] de contextualizar las narrativas cristianas de sus referencias culturales occidentales y reubicarlas dentro de un *telos* o cosmovisión maya". La teología inculturada se desarrolló en muchas partes de América Latina, incluyendo el sur de México donde el obispo Samuel Ruiz García impulsó el desarrollo de la "teología india", que no solo reconocía la cosmovisión indígena, sino también la complicidad histórica de la Iglesia Católica durante siglos de colonización. Este enfoque refleja claros vínculos con la teología de la liberación, aunque era de orientación netamente indígena (Cleary, 2004).

Se debe subrayar que el cambio de la Iglesia Católica hacia una "pastoral indígena" no fue universalmente aceptado por las poblaciones indígenas; en general, los grupos indígenas tendieron a responder de tres maneras. Algunos respondieron de manera positiva

a las propuestas de la Iglesia Católica, participando activamente en el desarrollo y aplicación de una teología inculturada católica (Judd, 2004). Muchos indígenas optaron por el evangelismo, sobre todo el pentecostalismo y el fundamentalismo, que con los años se ha vuelto más comprometido políticamente y ha abrazado el activismo por la justicia social y el ecumenismo (Freston, 2008). Sin embargo, otro grupo no solo rechazó la "pastoral indígena", sino que también rechazó al cristianismo como una religión extranjera que juega un papel importante en subyugar a las poblaciones indígenas en América Latina. Muchos han tratado de revitalizar las creencias tradicionales indígenas (Garrard-Burnett, 2004). Dentro de la Iglesia Católica, la adopción de una "pastoral indígena" ha cambiado el contenido y la forma de la relación de la Iglesia con las comunidades indígenas. En su estudio de la teología de la liberación en el Perú, Peña (1995) señala que durante la época en que la teología de la liberación fue más fuerte, los sacerdotes del Perú desempeñaron el papel de intelectuales orgánicos en los movimientos católicos progresistas. Sin embargo, los estudios recientes sugieren que el papel actual de los funcionarios de la Iglesia es muy diferente: en lugar de líderes, son más propensos a desempeñar el papel de "intermediarios" o interlocutores, para ayudar a resolver los conflictos entre los movimientos indígenas y el Estado, las corporaciones u otros actores (Brooks, 1999; Brysk, 2000; Yashar, 2005). Así, los eruditos que intentan discernir las raíces religiosas de los movimientos indígenas descubren que el carácter de la religión y la naturaleza de la relación de los funcionarios religiosos con el movimiento cambian con el tiempo.

Las explicaciones académicas para la ola de movilización indígena actual destacan tres factores. En primer lugar, las organizaciones y redes indígenas preexistentes como los sindicatos y los movimientos patrocinados por la Iglesia fueron cruciales (Yashar, 2005). Aún cuando estos movimientos y organizaciones fueron mentados como parte del esfuerzo conservador para contrarrestar la organización marxista entre los indígenas, muchas veces esos mismos movimientos facilitaron el surgimiento de otros movimientos, que luego fueron más progresistas y, a veces, radicales (para más información sobre este punto, ver Mackin, 2012). En segundo lugar, los expertos indican que los cambios estructurales políticos y económicos en América Latina tuvieron un impacto devastador en las poblaciones rurales, especialmente las indígenas (Brysk, 2000; Cleary y Steigenga, 2004; Yashar, 2005). La adopción de las estrategias de desarrollo neoliberal en los años 80 y 90 redujo la capacidad del Estado para abordar las ineficiencias del mercado y proporcionar acceso al capital mientras que, al mismo tiempo, recortaba el gasto social. Los agricultores

se vieron especialmente perjudicados. En 1992, los agricultores de América Latina recibieron el 30% menos por sus productos que en la década anterior (Clearly, 2004). Así, las políticas neoliberales abandonaron a su suerte a las poblaciones rurales indígenas, entre otras (Cleary, 2004:55). Yashar (2005) afirma que los cambios en el ámbito político también son cruciales para entender la variación en el carácter y el éxito de los movimientos indígenas. Además de los cambios de políticas económicas, las reformas agrarias, los cambios en los regímenes de ciudadanía y la presencia de nuevos "espacio[s] de asociación política y redes transcomunitarias" también alentaron la movilización indígena (Yashar, 2005: 153).

Estos factores se desplegaron de manera diferente en distintos lugares. Por ejemplo, en Ecuador, la Iglesia Católica bajo la guía del obispo Proaño fue una acérrima defensora de los indígenas. Proaño, conocido como el Obispo de los Indios, "[...] celebró regularmente asambleas de base, organizó campañas de alfabetización por radio, les devolvió a los indios las tierras eclesiales [...] construyó un centro de convenciones de la comunidad indígena [...] inició un seminario indígena [y] formó a [una] gran cantidad de agentes pastorales indígenas […]" (Brysk, 2004: 32). Pero los católicos no estaban solos: muchos protestantes, aunque tardaron en involucrarse, con el tiempo también llegaron a defender los derechos indígenas. Alison Brysk cita a un indio evangélico "indignado" que desafió a sus pastores misioneros norteamericanos a comprometerse más socialmente: "Ellos [los misioneros] nos impidieron ir a protestar, diciendo que solo teníamos que rezar, ahora [de todas formas] cuando hay problemas salimos pues tenemos que ver a los hermanos que pasan hambre o a los que son maltratados en los autobuses" (Brysk, 2004: 28). En Ecuador, las Iglesias católicas y evangélicas fueron cruciales para el éxito del movimiento indígena. Sin embargo, la presencia de una exhaustiva reforma agraria y del gobierno militar que animó a los indígenas a movilizarse, también fueron factores cruciales para explicar el tamaño y la cohesión del movimiento indígena ecuatoriano (Brysk, 2004; Yashar, 2005).

En México, los estados del sur son conocidos por tener las mayores poblaciones de indígenas, pero entre las décadas del 70 y 90 también eran conocidos por tener los obispos más progresistas. En los años 70 el obispo Samuel Ruiz García, de San Cristóbal de las Casas, desempeñó un rol decisivo para movilizar a los indígenas en un movimiento nacional. Irónicamente, lo hizo con la aprobación y el apoyo financiero del gobierno federal que buscaba aumentar su legitimidad entre las poblaciones indígenas (Harvey, 1994; Kovic, 2004). El obispo Ruiz formó a un gran número de catequistas laicos que promovieron

las ideas liberacionistas. Más tarde, San Cristóbal se convirtió en uno de los lugares clave donde se desarrolló la "teología india". Cuando estalló la lucha, el 1 de enero de 1994, el obispo Ruiz fue llamado como mediador para lograr la paz entre el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Estado. Probablemente no sea exagerado decir que los zapatistas encarnaron la resistencia al neoliberalismo en México, y en muchas partes del mundo, en los años 90. Los zapatistas y su carismático portavoz, el subcomandante Marcos, criticaron el modelo de desarrollo que exporta recursos cruciales, como la energía, de regiones predominantemente indígenas de México mientras que aporta ganancias económicas exiguas a las comunidades indígenas. Así, el caso del sur de México demuestra que la combinación de vínculos con la Iglesia y cambios estructurales es lo que a menudo conduce a la movilización indígena (Brysk, 2000; Yashar, 2005).

Los indígenas están entre los sectores mejor organizados de América Latina, influyen en las elecciones nacionales en Ecuador y Bolivia e inciden en el debate político en México y Guatemala. Si no fuera por Sendero Luminoso, por un lado, y las políticas autoritarias del Presidente Alberto Fujimori, por el otro, el Perú probablemente habría tenido un movimiento indígena fuerte y cohesionado como los de Ecuador y México (Clearly, 2004). Además, los indígenas han sido protagonistas clave en el movimiento campesino transnacional, como en La Vía Campesina, que se originó en América Latina pero ahora tiene representantes en América del Norte, Europa, Asia y África (Desmarais, 2009). Los movimientos indígenas de América Latina y La Vía Campesina han figurado entre los principales colaboradores del movimiento antiglobalización *Otro Mundo es Posible* (Desmarais, 2009; Martínez-Torres y Rosset, 2010).

LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN Y LOS MOVIMIENTOS POLÍTICOS

Durante mucho tiempo, los movimientos sociales han sido concebidos como la política por medios "extra institucionales" (Snow y Soule 2010) o "no convencionales" (Della Porta y Diani, 2006). Sin embargo, en los últimos años los investigadores han ampliado el alcance de sus análisis. Tilly (1993) y Foran (2005) sugieren que los investigadores deben ampliar el espectro de las prácticas que estudian. En un extremo de este espectro ampliado está el uso de la teoría sobre el movimiento social de Foran (2005) para desarrollar una teoría general de las revoluciones. Del otro lado de este continuum está la noción de Almeida (2006) de movimiento social partidario, que conceptualiza una de las formas en que los movimientos sociales buscan alcanzar sus objetivos mediante la movilización en apoyo a los partidos políticos que los comparten.

En esta parte del capítulo, recurro a esta perspectiva más amplia de la actividad del movimiento social para examinar la relevancia de la teología de la liberación en los movimientos sociales contemporáneos en América Latina. Al emplear esta perspectiva ampliada de la acción colectiva, vemos la influencia de la teología de la liberación a través de una serie de prácticas, que van de los movimientos revolucionarios a la participación en los partidos políticos convencionales. En algún lugar entre estos dos extremos, la teología de la liberación también ha formado a los movimientos de protesta y los movimientos de reforma radical (McAdam, 1996).

La relación entre los liberacionistas y los movimientos revolucionarios es extensa y compleja. Como se señaló anteriormente, los especialistas en movimientos masivos han sugerido que la teología de la liberación refleja el crecimiento de un movimiento radical que brota de las masas católicas. El texto clásico de Berryman (1984), *Religious Roots of Rebellion*, documenta el papel de los cristianos radicales, en su mayoría católicos, en los movimientos revolucionarios de América Central. Otros investigadores han explorado las formas en que las organizaciones católicas, los movimientos y los sujetos desarrollaron una conciencia de oposición radical (Almeida, 2008; Booth, 1985; Peterson, 1996; Viterna, 2006; Wood, 2003). En Nicaragua, los cristianos fueron muy activos en el movimiento sandinista y en 1979, cuando finalmente derrocaron al dictador Somoza, muchos liberacionistas aceptaron roles en el nuevo gobierno revolucionario. Como señala Booth (1985:212), "[...] muchos clérigos Católicos Apostólicos Romanos tuvieron cargos gubernamentales, incluyendo al ministro de Relaciones Exteriores, Miguel d'Escoto Brockman, un sacerdote Maryknoll, y el ministro de Cultura Ernesto Cardenal, un padre trapense". Los cristianos progresistas y radicales, tanto los católicos como los protestantes, también desempeñaron papeles importantes en el movimiento revolucionario y en la construcción del Estado revolucionario en Nicaragua (Lancaster, 1988). Mientras que Nicaragua es el único ejemplo de un movimiento revolucionario latinoamericano –aparte de Cuba en 1959– que derrocó con éxito a un dictador por medios violentos; los católicos y protestantes radicales fueron cruciales para el movimiento revolucionario en El Salvador (Almeida, 2008; Berryman, 1984); aunque en líneas generales este no fue el caso en Guatemala, donde los protestantes estuvieron estrechamente aliados al régimen (Brysk, 2004; Calder, 2004; Garrard-Burnet, 2004).

Sin embargo, la mayoría de los liberacionistas no han sido ni son revolucionarios, y en su lugar eligieron participar en movimientos no violentos y de base amplia. Durante el período del régimen autoritario burocrático militar, en muchas partes de América Latina (entre

los años 60 y 90), los liberacionistas fueron más propensos a protestar que a pretenden derrocar violentamente a estos regímenes. En Chile, por ejemplo, una amplia gama de activistas, incluyendo a los liberacionistas, trabajó a través de la Arquidiócesis de Santiago, la "Vicaría de Solidaridad", para documentar los abusos a los derechos humanos de la dictadura de Pinochet. Con gran riesgo personal, bajo el liderazgo y la protección del cardenal Silva Henríquez, los activistas articularon la crítica ética de la dictadura (Lowden 1996). Loveman (1998) señala que, cuando la jerarquía de la Iglesia Católica de América Latina apoyó activamente a las organizaciones de derechos humanos, como en Chile, estas organizaciones surgieron antes y tuvieron más facilidades para acceder a los recursos para respaldar su esfuerzo. Ella señala que en Uruguay la Iglesia fue débil institucionalmente, lenta para criticar al régimen que llegó al poder en un *autogolpe* en 1973, y debido a eso las organizaciones de derechos humanos surgieron más tarde y más débiles de lo que lo hicieron en Chile. Argentina es un caso intermedio, donde los activistas católicos y protestantes se movilizaron contra el régimen militar, pero la jerarquía de la Iglesia Católica fue considerada como aliada a la estructura castrense (Loveman, 1998). En otros lugares de América Latina, los liberacionistas desplegaron un activismo no violento de alto riesgo (por ejemplo, para Brasil, ver Mainwaring, 1986) y fueron actores importantes en la transición a la democracia en la región (Cavendish, 1995; Fleet y Smith, 1997; Smith 1991, 1994).

Una vez que se restableció la democracia en América Latina, muchos activistas optaron por canalizar sus esfuerzos hacia los partidos políticos tradicionales. En Brasil, muchos activistas evangélicos y católicos se unieron al Partido de los Trabajadores en apoyo de Lula que, finalmente, fue Presidente por dos términos, de 2003 a 2011. En Chile y Perú ocurrió un proceso similar: católicos y protestantes participaron activamente en el movimiento de democratización (Fleet y Smith, 1997). El enroque entre el activismo en la iglesia y el activismo en un partido político no refleja un cambio en las creencias religiosas. En contraste, para muchos refleja cambios en la jerarquía de la Iglesia Católica, que hizo que ser activista *católico* sea mucho más problemático que en el pasado. En sus entrevistas retrospectivas con mujeres activistas de las CEB, Drogus y Stewart-Gambino (2005) encontraron que una de las principales razones por las que muchas mujeres cambiaron su activismo en movimientos y organizaciones eclesiásticas, como las CEB, a partidos políticos, como el Partido de los Trabajadores, se basó en la disminución del apoyo de la jerarquía católica a las CEB y los movimientos católicos progresistas en general.

Además de la protesta, los liberacionistas han sido importantes en otro tipo de activismo no convencional, que los expertos denominan movimientos de reforma radical (McAdam, 1996). Por ejemplo, en Brasil el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST, *Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra*) ha sido descrito por James Petras como "el movimiento social más dinámico, mejor organizado y eficaz" en la historia de Brasil (citado en Wolford, 2006: 163). El MST realiza invasiones de tierras en terrenos baldíos. No sorprende que los terratenientes se opusieran al movimiento. Sin embargo, el MST ha encontrado apoyo constante tanto por parte del Estado, en el Gobierno de Lula y el Partido de los Trabajadores, como de la Iglesia. Partiendo de la teoría del movimiento social, Wendy Wolford (2006) señala que el MST surgió en los años 80 debido a tres factores. En primer lugar, los cambios en la estructura de las oportunidades políticas asociados con la democratización que en 1985 significó que los activistas contaran con un ambiente más liberal para organizarse. En segundo lugar, el apoyo institucional crucial proporcionado por los grupos religiosos católicos y protestantes progresistas de las zonas rurales de Brasil. De hecho, Miguel Carter (2009: 91) subraya la importancia para el MST de los liberacionistas y, más en general, de los católicos progresistas: "[...] De hecho, en ninguna parte de la crónica de la religión del mundo una institución espiritual líder ha desempeñado un papel tan importante en apoyo a la reforma agraria como lo ha hecho la Iglesia Católica brasileña" Y, en tercer lugar, las comunidades rurales tenían reclamos debido a la reestructuración agrícola de los años 70, que dio lugar a la aparición de una extensa clase de campesinos sin tierra (Wolford, 2006). Mientras que el MST no se identifica como un movimiento católico o cristiano, como muchos otros movimientos sociales, tiene raíces religiosas. Otro ejemplo de reforma radical puede verse en los presupuestos participativos en los gobiernos estatales y municipales administrados por el Partido de los Trabajadores. Porto Alegre, Brasil –que fue sede anfitriona del Foro Social Mundial en 2006– ha sido un laboratorio importante para poner a prueba las ideas de la democracia deliberativa (Baiocchi, 2005). Sin embargo, otras ciudades brasileñas también han llevado a la práctica este proceso con diversos grados de éxito (Baiocchi, 2003). Goldfrank y Schneider (2003: 157) definen los presupuestos participativos como "un proceso en el que los ciudadanos se reúnen en asambleas públicas abiertas para decidir qué inversiones y servicios son más importantes para su comunidad y para el interés público. Después de fijar las prioridades presupuestarias, los participantes eligen a los delegados regionales, quienes a su vez eligen a los concejales del presupuesto". A continuación, estos funcionarios van a diseñar

e implementar un plan de presupuesto que se envía nuevamente a los miembros del presupuesto participativo para que lo evalúen. En un análisis del presupuesto participativo en el estado de Rio Grande do Sul, los investigadores encontraron que los liberacionistas católicos y protestantes fueron cruciales para el desarrollo del presupuesto participativo en las ciudades más pequeñas del estado (Goldfrank y Schneider, 2003: 171). Observamos una dinámica similar en otras partes de Brasil: las Iglesias Católica y Protestante han desempeñado un papel trascendente en la implementación exitosa del presupuesto participativo (Baiocchi, 2003). La teología de la liberación sigue influyendo en la política latinoamericana. En el pasado influyó en la actividad revolucionaria, hoy es más influyente en movimientos que no son formalmente religiosos, como por ejemplo en Brasil en los empeños del Partido de los Trabajadores en la democracia deliberativa y los movimientos de reforma radical como el MST.

LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN Y LOS MOVIMIENTOS DE IGUALDAD DE GÉNERO

Muchos académicos han reconocido la omisión del feminismo, los movimientos de mujeres y las cuestiones de igualdad de género, de manera más general, en los documentos publicados de los teólogos de la liberación. Este patrón de omisión, en gran parte, también se reprodujo en las primeras investigaciones sobre la teología de la liberación (Burdick, 2004; Drogus, 1992; Althaus-Reid, 2006). Las críticas de las feministas liberacionistas a la teología de la liberación tardaron en ser reconocidas, pero con los años llegaron a ser consideradas seriamente por los liberacionistas (Grey, 2007). Dicho esto, solo en los últimos años hemos visto la influencia, pequeña pero creciente, de los académicos que están desarrollando un replanteo crítico y sistemático de la teología de la liberación a la luz de la opresión y la marginación de poblaciones basadas en el género y la sexualidad, es decir, en la propia identidad como gay, lesbiana, bisexual o transgénero (Althaus-Reid, 2006; Petrella, 2004). La teología de la liberación tardó en reconocer la (des)igualdad de género, a pesar del hecho de que la mayoría de los feligreses y la mayoría de los líderes y participantes de las CEB han sido mujeres. Por ejemplo, durante los años 70 y 80, el período más influyente de la teología de la liberación en Brasil, aproximadamente el 90% de los participantes y líderes de las CEB brasileñas eran mujeres (Drogus, 1992). ¿Por qué los liberacionistas, y los católicos más en general, fueron reacios a afrontar las cuestiones de igualdad de género?

Los liberacionistas tardaron en reconocer la (des)igualdad de género porque, en su período inicial, la liberación se centró en la

intersección de la liberación espiritual con la liberación política y económica. Como señala Althaus-Reid (2006: 1) "[...] Muchos de los teólogos pioneros de la década del 70, católicos y protestantes por igual, coincidieron en una comprensión marxista ingenua de que la revolución social iba a borrar de nuestras vidas cada una de las áreas de injusticia, incluyendo las injusticias relacionadas con el género y la raza". Si bien Althaus-Reid sobreestima la influencia del marxismo en la teología de la liberación (McGovern, 1989), la autora refleja los resultados de muchos investigadores que consideran que los liberacionistas y las CEB, en particular, tenían una clara tendencia a marginar las cuestiones de género (Burdick 2004; Cleary y Stewart-Gambino, 1992). Los críticos perciben que esto aún es un problema, como se refleja en las decisiones recientes de los dirigentes varones del FSLN en Nicaragua y el FMLN en El Salvador al borrar el acceso al aborto legal de sus respectivas plataformas partidarias, con el fin de dar cabida a las opiniones de los católicos conservadores (Kampwith, 2010; Viterna, 2012).

La forma lenta y desigual en que los liberacionistas, y las CEB en particular, abordaron las cuestiones de las mujeres es una de las razones por las que muchos latinoamericanos pobres optaron por Iglesias protestantes y pentecostales en los últimos 40-50 años (Burdick, 2004; Cleary y Stewart-Gambino, 1992). Esto no quiere decir que las mujeres encuentren en las iglesias evangélicas y pentecostales semilleros del feminismo. Antes bien, una explicación parcial del éxito de los protestantes, especialmente los grupos pentecostales, entre las mujeres pobres refleja el hecho de que estas Iglesias asistieron a las mujeres en la esfera doméstica o "privada", concretamente en los casos en que las mujeres buscaron ayuda para enfrentar esposos abusivos y alcohólicos. Los investigadores han encontrado que, si bien las Iglesias protestantes y pentecostales alientan formalmente a sus feligreses a adoptar roles de género tradicionales, también sin proponérselo influyeron en que las mujeres y los hombres se vean mutuamente como iguales (Steigenga y Smilde, 1999). Mientras que los hombres y las mujeres protestantes y pentecostales (pero también muchos católicos) son reticentes a identificarse como feministas, sus puntos de vista sobre la igualdad se superponen considerablemente con las principales corrientes del feminismo (Steigenga y Smilde, 1999).

Una segunda razón por la que la teología de la liberación tardó en reconocer la desigualdad de género se deriva de las normas de género tradicionales católicas basadas en las teorías de derecho natural, que insisten en la complementariedad de género, con roles claramente definidos para hombres y mujeres. Desde el papado de Juan XXIII, la Iglesia ha modificado su postura sobre las mujeres, especialmente en

relación con los derechos de las mujeres que trabajan fuera del hogar (ver Dorr, 1992). Dicho esto, Althaus-Reid (2006) señala que los primeros de liberacionistas, como Enrique Dussel, abogaron por la liberación social y económica, al tiempo que esperaban que se mantuvieran las normas tradicionales de género. Althaus-Reid (2006) comenta que, con el tiempo, los puntos de vista de Dussel sobre la igualdad de género han evolucionado, pero no sus puntos de vista sobre la sexualidad.

Si bien los liberacionistas estaban claramente influenciados por los puntos de vista tradicionales católicos sobre cuestiones de género, así también lo estaban los escritos de muchos de los primeros teólogos de la liberación feministas, que instaban a la valorización de las mujeres pero no se oponían a las concepciones tradicionales de género. En cambio, esencializaron a las mujeres como madres –acto conocido como mariología– en lugar de teorizar desde una perspectiva más crítica sobre género y sexualidad (Althaus-Reid, 2006).

Mientras estos debates entre los teólogos de la liberación sobre el género y la igualdad han seguido evolucionando, los especialistas también han documentado el cambio de creencias y prácticas entre los laicos. Estos expertos encontraron que los movimientos liberacionistas, especialmente las CEB, fueron cruciales en el desarrollo de la conciencia feminista entre los participantes. Adriance (1995), por ejemplo, encontró que la participación en las CEB en las zonas rurales de Brasil desempeñó un papel importante en el desarrollo de la conciencia feminista entre las mujeres participantes que desarrollaron habilidades de liderazgo y comunicación a través de la lectura compartida y el análisis de la Biblia. Burdick (2004) sostiene que uno de los legados de la teología de la liberación en Brasil es el incremento espectacular de la atención prestada por la Iglesia a la igualdad de género, incluyendo las preocupaciones sobre abuso físico y sexual de mujeres y menores de edad en el hogar.

A pesar del efecto positivo observado en ideologías de género más igualitarias a partir de la participación en las CEB, estas no deben ser caracterizadas en términos generales y sin sus particularidades. Hay una variación considerable entre los activistas de las CEB respecto a sus puntos de vista sobre la igualdad de género y la política en general (Drogus, 1992; Hewitt, 1991). Además, mientras que los liberacionistas y los católicos progresistas en general aceptan la igualdad de género, muchos no se identifican como feministas. Si se toman en consideración los puntos de vista sobre el acceso al aborto legal y a la anticoncepción, hay aún menos consenso entre los católicos latinoamericanos (Maier y Lebon, 2010).

Una explicación de la relación desigual y, por momentos, difícil entre liberacionistas y feministas se debe al hecho de que, en América

Latina, el feminismo es un concepto sujeto a controversias (Álvarez, 2010). Cuando los liberacionistas se definen como feministas por lo general es alguna forma de "feminismo popular" (Di Marco, 2010) o "feminismo de base" (Drogus y Stewart-Gambino, 2005), en contraste con el "feminismo hegemónico" de la llamada segunda ola del feminismo dominada, casi siempre, por activistas blancos de clase media (Di Marco, 2010). Los feministas populares asociados a la teología de la liberación con frecuencia participan en un proceso de resignificación que enfatiza la identidad religiosa, de clase y de raza, además de la identidad de género. Drogus y Stewart-Gambino (2005) exploran este tema entre las mujeres de Chile y Brasil que comenzaron su activismo en las CEB o en otros movimientos patrocinados por la Iglesia. Mientras que las mujeres de ambos países sostuvieron puntos de vista similares sobre la igualdad de género, sus puntos de vista sobre el feminismo variaron. Las brasileñas fueron mucho más propensas a adoptar un feminismo resignificado, mientras que las chilenas fueron mucho más propensas a rechazar por completo la etiqueta de feminismo, independientemente de la calificación. Probablemente, las diferencias reflejan, por un lado, que la enseñanza oficial de la Iglesia Católica es muy crítica del feminismo, pero por otro lado, las historias diversas de la teología de la liberación y las CEB en cada país. Drogus y Stewart-Gambino (2005) señalan que mientras que las activistas chilenas estaban más ligadas a las estructuras formales de la Iglesia, con vínculos más débiles con otros movimientos sociales de la sociedad civil, en el caso de Brasil sucedió lo contrario. Allá, las activistas en las CEB tendieron mucho más a desplegar redes entre partidos políticos de oposición y movimientos feministas, adquiriendo nuevas ideas y desarrollando nuevos contactos, precisamente, entre los que podían presentar un entendimiento más complejo del feminismo del que habrían encontrado en la Iglesia.

¿TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN ADÓNDE?

En el capítulo se ha demostrado la importancia de la contribución que los académicos que estudian la teología de la liberación han hecho a la teoría del movimiento social. Los estudiosos han explorado el surgimiento de la teología de la liberación (Smith, 1991), su radicalización (Neuhouser, 1989), pero también el papel de las amenazas (Almeida, 2008) y la represión (Loveman, 1998; Mainwaring, 1986) en la conformación del movimiento. Otros han examinado la importancia de los vínculos preexistentes (Adriance, 1995; Mackin, 2012), el liderazgo clerical (Peña, 1995) y las consecuencias a largo plazo del activismo (Drogus y Stewart-Gambino, 2005). Más recientemente,

los investigadores han explorado la relación entre la participación en el movimiento y el desarrollo de la conciencia feminista (Adriance, 1995; Burdick, 2004; Drogus y Stewart-Gambino, 2005); y también la importancia de las emociones para la movilización (Viterna, 2006). Sin embargo, en los últimos 20 años, varios eruditos han escrito el obituario de la teología de la liberación (ver los trabajos revisitados en Drogus, 1995; y también en Levine, 1995; Nagle, 1995). Las elegías han señalado que el movimiento era demasiado radical, demasiado marxista, demasiado materialista, demasiado patriarcal, demasiado inmune a sus críticos y sordo al clamor de los pobres que, en definitiva, querían algo más, acaso protestantismo. En un artículo reciente, Daniel Levine citó a un amigo latinoamericano, que dijo: "Mientras que la Iglesia Católica estaba optando por los pobres, esos mismos pobres estaban optando por el protestantismo" (Levine, 2006: 5).

En este capítulo, he sostenido que la teología de la liberación sigue inspirando a los movimientos en América Latina, allá y acullá. La teología de la liberación, que vivió su apogeo en los 60 y 70, siempre fue un movimiento minoritario en la Iglesia Católica de América Latina y más aún en las Iglesias Protestantes (Brooks, 1999; Burdick, 2004; Drogus, 1992; Levine, 1992; Stewart-Gambino y Cleary, 1992). Como movimiento, que en la actualidad tiene considerablemente menos apoyo entre la jerarquía y menos adherentes entre los laicos, la teología de la liberación además está claramente menos vinculada a la Iglesia institucional que en el pasado. Como resultado, es más difícil precisar su influencia en la Iglesia y entre los movimientos contemporáneos. Al mismo tiempo que la teología de la liberación se ha debilitado, está más diversa que nunca, pues abarca una gran variedad de puntos de vista y formas de movilización. En otra parte sostuve (Mackin, 2010) que si bien los liberacionistas pueden no compartir alguna de las características (por ejemplo, puntos de vista sobre el socialismo, la igualdad de género; o, tipos de activismo, tales como la protesta o la revolución) tienen cierto "parecido familiar". Lo que es más importante, a diferencia de otros movimientos sociales, la teología de la liberación, y en particular las CEB, comenzaron como un movimiento religioso (Cousineau, 2003). Omitir la dimensión religiosa nos llevaría a pasar por alto cómo la fe motiva el activismo (Pieper y Young, 2010).

Sin embargo, cuando examinamos la influencia de la teología de la liberación en movimientos sociales contemporáneos vemos un patrón claro, específicamente la secularización, es decir, la decreciente importancia de la religión. Hay dos paradigmas discernibles en los debates sobre la secularización. En primer lugar, basándose en las teorías de la elección racional, los especialistas en economías

religiosas sugieren que los mercados religiosos competitivos conducen a un aumento de la vitalidad religiosa (ver: Chestnut, 2003; Gill 1998; Hagopian, 2009). Las críticas a este enfoque se han discutido previamente en este capítulo (pero, para una revisión más completa ver: Mackin, 2012). Para nuestros propósitos aquí, un enfoque más fructífero es el modelo de conflicto de la secularización (ver Casanova, 1994; Chaves, 1994; Gorski, 2003; Pieper y Young, 2010; Smith, 2003; Yamane, 1997) que sugiere que la merma (o el aumento) de la religión es el corolario del conflicto. La secularización, definida como la "disminución del alcance de la autoridad religiosa", por lo tanto, es una cuestión abierta: se puede retardar, detener o incluso revertir.

Asimismo, los especialistas del modelo de conflicto de la secularización sugieren que distingamos entre niveles de análisis individual, organizacional y social (Chaves, 1994). Por ejemplo, consideremos a los activistas de largos años de las CEB brasileñas y chilenas, descritos previamente en la investigación de Drogus y Stewart-Gambino (2005). Al examinar estos datos a la luz de un modelo de conflicto de la secularización se puede observar que, a nivel individual, la teología de la liberación sigue motivándolos. Sin embargo, la forma en que las mujeres despliegan su activismo ha cambiado considerablemente, en principio debido a los cambios en la política de la Iglesia implementados por los obispos conservadores en cada país. En Brasil, esto se tradujo en que las ex activistas de las CEB tienden más a participar en movimientos que son independientes de la Iglesia. En Chile, las ex activistas de las CEB permanecen activas en su iglesia, pero en movimientos que tienen poca semejanza con las CEB u otros movimientos progresistas del pasado.

Además de centrarse en el nivel de análisis individual, el modelo de conflicto de la secularización invita a examinar la secularización en los niveles organizacional y social. Al revisar la investigación sobre los movimientos descritos en la segunda mitad de este capítulo –los movimientos indígenas, los movimientos revolucionarios, y así, sucesivamente– emerge un patrón claro. Muchos de estos movimientos y organizaciones rara vez se identifican como explícitamente religiosos o hacen legitimaciones religiosas, aún cuando muchas veces las Iglesias Católica y Protestante fueron cruciales en la formación inicial del movimiento. Esto sugiere que la secularización de estos movimientos está ocurriendo. La teología de la liberación no está muerta, pero se ha transfigurado.

BIBLIOGRAFÍA

Adriance, M. 1986 *Opting for the poor* (Kansas City: Sheed and Ward).

Adriance, M. 1995 *Promised land: Base Christian communities and the struggle for the Amazon* (Albandy: SUNY).

Almeida, P. 2006 'Social movement unionism, social movement partyism, and policy outcomes: Health care privatizations in El Salvador' en Johnston, H. y Almeida, P. (eds.) *Latin American social movements: Globalization, democratization, and transnational networks* (Lanham: Rowan & Littlefield) pp. 57-73.

Almeida, P. 2008 *Waves of protest: Popular struggle in El Salvador, 1925-2005* (Minneapolis: University of Minnesota Press).

Althaus-Reid, M. 2006a 'Let them talk…!' Doing liberation theology from Latin American closets' en Althaus-Reid, M. (ed.) *Liberation theology and sexuality* (Burlington: Ashgate) pp. 5-17.

Althaus-Reid, M. (ed.) 2006b *Liberation theology and sexuality* (Burlington: Ashgate).

Álvarez, S. E. 2010. 'Forward' en Maier, E. y Lebon, N. (eds.) *Women's activism in Latin America and the Caribbean: Engendering social justice, democratizing citizenship* (New Brunswick: Rutgers University Press) pp. xi-xiv.

Antonio, E. 2007 'Black theology' en Rowland, C. (ed.) *The Cambridge companion to liberation theology* (Cambridge: Cambridge University Press) 2° edición, pp. 79-104.

Arias, P.; Castillo, A. y López, C. 1981 *Radiografía de la Iglesia Católica en México* (México D. F.: Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM) pp. 1.970-1.978.

Baiocchi, G. (ed.) 2003 *Radicals in power: The workers' party (PT) and experiments in urban democracy in Brazil* (Londres: Zed Books).

Baiocchi, G. (ed.) 2005 *Militants and citizens: The politics of participatory democracy in Porto Alegre* (Stanford: Stanford University Press).

Berryman, P. 1984 *The religious roots of rebellion: Christians in Central American revolutions* (Maryknoll: Orbis Books).

Booth, J. A. 1985 *The end and the beginning: The Nicaraguan revolution* (Boulder: Westview Press).

Brooks, S. 1999 'Catholic activism in the 1990s: New strategies for the neoliberal age' en Smith, C. y Prokopy, J. (eds.) *Latin American religion in motion* (Nueva York: Routledge) pp. 67-89.

Bruneau, T. C. 1974 *The political transformation of the Brazilian Catholic Church* (Nueva York: Cambridge University Press).

Bruneau, T. C. 1982 *The church in Brazil: The politics of religion* (Austin: University of Texas Press).

Brysk, A. 2000 *From tribal village to global village: Indian rights and international relations in Latin America* (Stanford: Stanford University Press).

Brysk, A. 2004 'From civil society to collective action: The politics of religion in Ecuador' en Cleary, E. L. y Steigenga, T. J. (eds.) *Resurgent voices in Latin America: Indigenous peoples, political mobilization, and religious change* (New Brunswick: Rutgers University Press) pp. 25-42.

Burdick, M. A. 1995 *For God and fatherland: Religion and politics in Argentina* (Albany: State University of New York Press).

Burdick, J. 2004 *Legacies of liberation: The progressive Catholic church in Brazil at the start of a new millennium* (Burlington: Ashgate).

Calder, B. 2004 'Interwoven histories: The Catholic Church and the Maya, 1940 to the present' en Cleary, E. L. y Steigenga, T. J. (eds.) *Resurgent voices in Latin America: Indigenous peoples, political mobilization, and religious change* (New Brunswick: Rutgers University Press) pp. 93-124.

Carter, M. 2009 'The landless rural workers' movement and the struggle for social justice in Brazil' en Deere, C. D. y Royce, F. S. (eds.) *Rural social movements in Latin America: Organizing for sustainable livelihoods* (Gainesville: University of Press Florida) pp. 87-115.

Casanova, J. 1994 *Public religions in the modern world* (Chicago: University of Chicago Press).

Cavendish, J. 1995 'Christian base communities and the building of democracy: Brazil and Chile' en Swatos, J. W. H. (ed.) *Religion and democracy in Latin America* (New Brunswick: Transaction Publishers) pp. 75-92.

Ceballos Ramírez, M. 1991 *Historia de Rerum Novarum en México (1867-1931): Estudios* (México D.F.: Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana).

Chaves, M. 1994 'Secularization as declining scope of religious authority' en *Social Forces*, *72*: 749-774.

Chesnut, R. A. 2003 *Competitive spirits: Latin America's new religious economy* (Oxford: Oxford University Press).

Cleary, E. L. 2004 'New voice in religion and politics in Bolivia and Peru' en Cleary, E. L. y Steigenga, T. J. (eds.) *Resurgent voices in Latin America: Indigenous peoples, political mobilization, and religious change* (New Brunswick: Rutgers University Press) pp. 43-64.

Cleary, E. L. y Steigenga, T. J. 2004 *Resurgent voices in Latin America: Indigenous peoples, political mobilization, and religious change* (New Brunswick: Rutgers University Press).

Cleary, E. L. y Stewart-Gambino, H. W. (eds.) 1992 *Conflict and competition: The Latin American church in a changing* (Boulder: Lynne Rienner).

Cleary, E. L. y Stewart-Gambino, H. W. (eds.) 1996 *Power, politics, and Pentecostals in Latin America* (Boulder: Westview Press).

Cousineau, M. A. 2003 'Not blaming the Pope: The roots of the crisis in Brazilian base communities' en *Journal of Church and State*, *45*: 349-365.

Deere, C. D. y Royce, F. S. (eds.) 2009 *Rural social movements in Latin America: Organizing for sustainable livelihoods* (Gainesville: University Press of Florida).

Della Porta, D. y Diani, M. 2006 *Social movements: An introduction* (Oxford: Blackwell).

Desmarais, A. A. 2009 'La Vía Campesina: Globalizing peasants' en Deere, C. D. y Royce, F. S. (eds.) *Rural social movements in Latin America: Organizing for sustainable livelihoods* (Gainesville: University Press of Florida) pp. 33-54.

Di Marco, G. 2010 'Women's movements in Argentina: Tensions and articulations' en Maier, E. y Lebon, N. (eds.) *Women's activism in Latin America and the Caribbean: Engendering social justice, democratizing citizenship* (New Brunswick: Rutgers University Press) pp. 159-174.

Dorr, D. 1992 *Option for the poor: A hundred years of Catholic social teaching* (Maryknoll: Orbis).

Drogus, C. A. 1992 'Popular movements and the limits of political mobilization at the grassroots in Brazil' en Cleary, E. L. y Stewart-Gambino, H. W. (eds.) *Conflict and competition: The Latin American church in a changing environment* (Boulder: Lynne Rienner) pp. 63-86.

Drogus, C. A. 1995 'The rise and decline of liberation theology: Churches, faith, and political change in Latin America' en *Comparative Politics*, *27*: 465-477.

Drogus, C. A. y Stewart-Gambino, H. 2005 *Activist faith: Grassroots women in democratic Brazil and Chile* (University Park: Penn State University Press).

Dussel, E. D. 1992 *The Church in Latin America, 1492- 1992* (Maryknoll: Orbis Books).

Fernández-Fernández, D. 1996 *Historia Oral de La Iglesia Católica en Santiago de Chile: desde el Concilio Vaticano II hasta el golpe militar de 1973* (Cadiz: Universidad de Cadiz).

Fleet, M. y Smith, B. H. 1997 *The Catholic Church and democracy in Chile and Peru* (Notre Dame: University of Notre Dame Press).

Foran, J. 2005 *Taking power: On the origins of third world revolutions* (Nueva York: Cambridge University Press).

Freston, P. (ed.) 2008 *Evangelical Christianity and democracy in Latin America* (Nueva York: Oxford University Press).

Garrard-Burnett, V. 2004 'God was already here when Columbus arrived: Inculturation theology and the Mayan movement in Guatemala' en Cleary, E. L. y Steigenga, T. J. (eds.) *Resurgent voices in Latin America: Indigenous peoples, political mobilization, and religious change* (New Brunswick: Rutgers University Press) pp. 125-153.

Gill, A. 1998 *Rendering Unto Ceasar: The Catholic Church and the State in Latin America* (Chicago: University of Chicago Press).

Goldfrank, B. y Rowell, N. 2012 'Church, State, and Human Rights in Latin America' en *Politics, Religion & Ideology, 13*: 25-51.

Goldfrank, B. y Schneider, A. 2003 'Restraining the revolution or deepening democracy? The workers' party in Rio Grande do Sul' en Gianpaolo, B. *Radicals in power: The workers' party (PT) and experiments in urban democracy in Brazil* (Londres: Zed Books) pp. 155-175.

Gorski, P. S. 2003 'Historicizing the secularization debate' en Dillon, M. (ed.) *Handbook of the sociology of religion* (Nueva York: Cambridge University Press) pp. 110-122.

Grey, M. 2007 'Feminist theology: A critical theology of liberation' en Rowland, C. (ed.) *The Cambridge companion to liberation theology* (Cambridge: Cambridge University Press) 2° edición, pp. 105-122

Gutiérrez, G. 1973 (1971) *A theology of liberation: History, politics and salvation* (Maryknoll: Orbis Books).

Hagopian, F. (ed.) 2009 *Religious pluralism, democracy, and the Catholic Church in Latin America* (Notre Dame: University of Notre Dame Press).

Harvey, N. 1994 'Rebellion in Chiapas: Rural reforms, Campesino radicalism, and the limits to Salinismo' en *Transformation of rural Mexico* (La Jolla: Center for US-Mexican Studies, San Diego University of California) pp. 1-43.

Hewitt, W. E. 1991 *Base Christian communities and social change in Brazil* (Lincoln: University of Nebraska Press).

Horn, G. R. 2009 *West European liberation theology: The first wave (1924-1959)* (Nueva York: Oxford University Press).

Johnston, H. y Almeida, P. (eds.) 2006 *Latin American social movements: Globalization, democratization, and transnational networks* (Lanham: Rowan & Littlefield).

Judd, S. P. 2004 'The indigenous theology movement in Latin America: Encounters of memory, resistance, and hope at the crossroads' en Cleary, E. L. y Steigenga, T. J. (eds.) *Resurgent voices in Latin America: Indigenous peoples, political mobilization, and religious change* (New Brunswick: Rutgers University Press) pp. 210-230.

Kampwirth, K. 2010 'Gender politics in Nicaragua: Feminism, antifeminism, and the return of Daniel Ortega' en Maier, E. y Lebon, N. (eds.) *Women's activism in Latin America and the Caribbean: Engendering social justice, democratizing citizenship* (New Brunswick: Rutgers University Press) pp. 111-126.

Kovic, C. 2004 'Mayan Catholics in Chiapas, Mexico: Practicing faith on their own terms' en Cleary, E. L. y Steigenga, T. J. (eds.) *Resurgent voices in Latin America: Indigenous peoples, political mobilization, and religious change* (New Brunswick: Rutgers University Press) pp. 187-209.

Kurtz, L. R. 1986 *The politics of Heresy: The modernist Crisis in Roman Catholicism* (Berkeley: University of California Press).

Lancaster, R. N. 1988 *Thanks to God and the revolution: Popular religion and class consciousness in the new Nicaragua* (Nueva York: Columbia University Press).

Lernoux, P. 1980 *Cry of the people: United States involvement in the rise of fascism, torture, and murder and the persecution of the Catholic Church in Latin America* (Garden City: Doubleday).

Levine, D. H. 1981 *Religion and politics in Latin America: The Catholic church in Venezuela and Colombia* (Princeton: Princeton University Press).

Levine, D. H. 1992 *Popular voices in Latin American Catholicism* (Princeton: Princeton University Press).

Levine, D. H. 1995 'On premature reports of the death of liberation theology' en *The Review of Politics*, *57*: 105-131.

Levine, D. H. 2006 "Religión y Política en América Latina. La nueva cara pública de la Religión" en *Sociedad y Religión (Buenos Aires)*, *28*: 7-29.

Loveman, M. 1998 'High-risk collective action: Defending human rights in Chile, Uruguay, and Argentina' en *American Journal of Sociology*, *104*: 477-525.

Lowden, P. M. 1996 *Moral opposition to authoritarian rule in Chile, 1973-1990* (Nueva York: Macmillan).

Mackin, R. S. 2003 'Becoming the red bishop of Cuernavaca: Rethinking Gill's religious competition model' en *Sociology of Religion*, *64*: 499-514.

Mackin, R. S. 2010 'In word and deed: Assessing the strength of progressive Catholicism in Latin America, 1960-1970s' en *Sociology of Religion*, *72*(2): 216-242.

Mackin, R. S. 2012 'Liberation theology: The radicalization of social Catholic movements' en *Politics, Religion & Ideology*, *13*: 333-351.

Maier, E. y Lebon, N. 2010 *Women's activism in Latin America and the Caribbean: Engendering social justice, democratizing citizenship* (New Brunswick: Rutgers University Press).

Mainwaring, S. 1986 *The Catholic church and politics in Brazil, 1916-1985* (Stanford: Stanford University Press).

Mainwaring, S. y Wilde, A. 1989 *The progressive church in Latin America* (Notre Dame: University of Notre Dame Press).

Malo, M. C. et al. 1986 *La participación de los cristianos en el proceso popular de liberación en México* (México D.F.: Siglo XXI).

Martínez-Torres, M. E. y Rosset, P. M. 2010 'La Vía Campesina: The birth and evolution of a transnational social movement' en *Journal of Peasant Studies*, *37*: 149-175.

McAdam, D. 1996 'Conceptual origins, current problems, future directions' en McAdam, D.; McCarthy, J. D. y Zald, M. *Comparative perspectives on social movements: Political opportunities, mobilizing structures, and cultural framings* (Nueva York: Cambridge University Press) pp. 23-40.

McGovern, A. F. 1989 *Liberation theology and its critics: Toward an assessment* (Maryknoll: Orbis Books).

Meyer, D. S. y Whittier, N. 1994 'Social movement spillover' en *Social Problems*, *41*: 277-298.

Nagle, R. 1995 *Claiming the virgin: The broken promise of liberation theology in Brazil* (Nueva York: Routledge).

Neuhouser, K. 1989 'The radicalization of the Brazilian Catholic church in comparative perspective' en *American Sociological Review*, *54*: 233-244.

Peña, M. 1995 *Theologies and liberation in Peru: The role of ideas in social movements* (Philadelphia: Temple University Press).

Peterson, A. L. 1996 *Martyrdom and the politics of memory: Progressive Catholicism in El Salvador's civil war* (Albany: SUNY).

Petrella, I. 2004 *The future of liberation theology: An argument and manifesto* (Burlington: Ashgate).

Pieper, C. y Young, M. P. 2010 'Religion and postsecular politics' en *Handbook of politics: State and society in global perspective* (Nueva York: Springer) pp. 349-366.

Poggi, G. 1967 *Catholic action in Italy: The sociology of a sponsored organization* (Stanford: Stanford University Press).

Sanders, T. G. 1969 *Catholic innovation in a changing Latin America* (Cuernavaca: Centro Intercultural de Documentación).

Scott, W. R. 2003 *Organizations: Rational, natural, and open systems* (Upper Saddle River: Prentice Hall) 5° edición.

Sigmund, P. 1990 *Liberation theology at the cross-roads: Democracy or revolution?* (Nueva York: Oxford University Press).

Smith, B. 1982 *The church and politics in Chile: Challenges to modern Catholicism* (Princeton: Princeton University Press).

Smith, C. 1991 *The emergence of liberation theology: Radical religion and social movement theory* (Chicago: University of Chicago Press).

Smith, C. 1994 'The spirit and democracy: Base communities, Protestantism, and democratization in Latin America' en *Sociology of Religion*, *55*: 119-143.

Smith, C. 1996 *Resisting Reagan: The US Central America peace movement* (Chicago: University of Chicago Press).

Smith, C. (ed.) 2003 *The secular revolution: Power, interests, and conflict in the secularization of American public life* (Berkeley: University of California Press).

Smith, C. y Prokopy, J. (eds.) 1999 *Latin American religion in motion* (Nueva York: Routledge).

Snow, D. A. y Soule, S. A. 2010 *A primer on social movements* (Nueva York: Norton).

Steigenga, T. J. y Smilde, D. A. 1999 'Wrapped in the Holy Shawl: The strange case of conservative Christians and gender equality in Latin America' en Smith, C. y Prokopy, J. (eds.) *Latin American religion in motion* (Nueva York: Routledge) pp. 173-186.

Stewart-Gambino, H. 1992 'Introduction: New game, new rules' en Cleary, E. L. y Stewart-Gambino, H. (eds.) *Conflict and competition: The Latin American church in a changing environment* (pp. 1-19 (Boulder: Lynne Rienner).

Suárez, L. 1970 *Cuernavaca ante el Vaticano* (México D.F.: Grijalbo).

Thiesenhusen, W. C. 1966 *Chile's experiments in agrarian reform* (Madison: University of Wisconsin Press).

Tilly, C. 1993 *European Revolutions, 1492-1992* (Oxford: Blackwell).

Torres, C. A. 1992 *The church, society, and hegemony: A critical sociology of religion in Latin America*. (Westport: Praeger) Translated by Richard A. Young.

Vallier, I. 1970 *Catholicism, social control, and modernization in Latin America* (Englewood Cliffs: Prentice-Hall).

Vallier, I. 1972 'Church 'Development' in Latin America: A five-country comparison' en Schmitt, K. M. (ed.) *The Roman Catholic Church in Modern Latin America* (Nueva York: Knopf) pp. 167-193.

Viterna, J. S. 2006 'Pulled, pushed, and persuaded: Explaining women's mobilization into the Salvadoran guerrilla army' en *American Journal of Sociology*, *112*: 1-45.

Viterna, J. S. 2012 'The left and "life" in El Salvador' en *Politics & Gender*, *8*: 248-254.

Wilde, M. J. 2004 'How culture mattered at Vatican II: Collegiality trumps authority in the council's social movement organizations' en *American Sociological Review*, *69*(4): 576-602.

Wolford, W. 2006 'Families, fields, and fighting for land: The spatial dynamics of contention in rural Brazil' en Johnston, H. y Almeida, P. (eds.) *Latin American social movements: Globalization, democratization, and transnational networks* (Lanham: Rowan & Littlefield) pp. 163-176.

Wood, E. J. 2003 *Insurgent collective action and Civil war in El Salvador* (Nueva York: Cambridge University Press).

Yamane, D. 1997 'Secularization on trial: In defense of a neosecularization paradigm' en *Journal for the Scientific Study of Religion, 36:* 109-122.

Yashar, D. J. 2005 *Contesting citizenship in Latin America: The rise of indigenous movements and the postliberal challenge* (Nueva York: Cambridge University Press).

CÓMO CITAR ESTA PUBLICACIÓN:
Mackin, Robert. 2017. "Teología de la Liberación y movimientos sociales" Pp. 183-212 en Paul Almeida y Allen Cordero Ulate, Eds., *Movimientos Sociales en América Latina: Perspectivas, Tendencias y Casos*. Buenos Aires: CLACSO.

9

Federico M. Rossi*

MÁS ALLÁ DEL CLIENTELISMO: EL MOVIMIENTO PIQUETERO Y EL ESTADO EN ARGENTINA

INTRODUCCIÓN

Los piqueteros, movimiento de trabajadores desocupados de Argentina, surgieron en 1996. Desde entonces se han desempeñado, en la arena sociopolítica argentina, como uno de los principales actores contestatarios en la resistencia a las consecuencias sociales de las reformas neoliberales y en la lucha por la reincorporación de los sectores populares, durante casi dos décadas. El nombre *piqueteros* se basa en el tipo de acción de protesta que hizo que el movimiento fuera públicamente famoso: los piquetes / cortes de las principales rutas del país, en sus demandas por trabajo, subsidios de desempleo, alimentos, etcétera.[1] Los piqueteros, como un conjunto de actores, cumplen con los requisitos básicos para ser considerados como un movimiento

* Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - Universidad Nacional de San Martín, Argentina.

1 Esto no implica que el movimiento piquetero organice únicamente piquetes. Denominar a un actor a partir de una de sus formas de reclamo puede parecer confuso, pero ya que la denominación más conocida y ampliamente atribuida a este actor se preservó en los debates políticos y académicos, es una elección lingüísticamente pragmática que permite una comprensión clara del movimiento que se estudia.

social.[2] Desde la aparición de las primeras protestas de trabajadores desocupados en la Argentina, el movimiento se ha organizado cada vez más como una red de actores con tendencia contestataria, que más de una década después siguen activos. Como todo movimiento, el movimiento piquetero se compone de varias organizaciones del movimiento social (ver Cuadro 9.1). Con respecto a su identidad, a pesar de la disparidad de las ideologías de las diferentes organizaciones sociales que conforman el movimiento, todas las organizaciones de trabajadores desocupados se reconocen (y son reconocidas por sus oponentes y aliados), como parte de un movimiento llamado piquetero (*cf*. Svampa y Pereyra, 2003: cap. 4). Se puede definir a los piqueteros como desocupados que luchan por su plena reincorporación sociopolítica como ciudadanos y trabajadores. Finalmente, el uso de la protesta es una dimensión constante y crucial de este movimiento.

En su lucha por ver el fin de las consecuencias sociales negativas del neoliberalismo y para asegurar los puestos de trabajo y/o subsidios de desempleo como un medio de incorporación sociopolítica, los piqueteros deben tratar con una amplia gama de actores, tales como funcionarios públicos electos y designados, intermediarios políticos y sindicales informales (operadores, punteros, etc.), la Policía, las Iglesias y las organizaciones no gubernamentales (ONG). El propósito de este capítulo es presentar las características básicas de la relación de los piqueteros con las instituciones del Estado. Primero expongo las limitaciones de las explicaciones basadas en el clientelismo, de las interacciones entre los piqueteros y las instituciones del Estado. A continuación, propongo una alternativa lógica para el esquema de interacción en cuestión, que se basa en dos elementos: la evolución de las políticas públicas y la disputa territorial entre el movimiento y otros actores políticos. Asimismo, analizo brevemente la interacción estratégica entre el Estado y las principales organizaciones piqueteras.

LAS LIMITACIONES DE LAS EXPLICACIONES BASADAS EN EL CLIENTELISMO

El debate acerca de la interacción del movimiento piquetero con el Estado se ha centrado mayoritariamente en determinar si este vínculo es, o no es, clientelista (ver Pereyra et al., 2008). El clientelismo,

2 Defino al movimiento social como *redes informales de interacciones orientadas al conflicto compuestas por individuos, grupos y/u organizaciones que, basadas en la solidaridad compartida, cuentan con una identidad política colectiva y utilizan la protesta como un medio –entre otros– para presentarse en la arena pública* (Melucci, 1989; Diani, 1992; Della Porta y Diani, 1999: 13-16; Snow et al., 2004: 3-15; Rossi, 2006: 243-246).

Cuadro 9.1
El movimiento piquetero

Principales organizaciones de movimientos sociales	Organizaciones políticas referentes	Ideología	Principal ubicación geográfica
Barrios de Pie	*Patria Libre - Movimiento Libres del Sur*	Nacional-populista	Buenos Aires y Córdoba
Corriente Clasista y Combativa (CCC)	*Partido Comunista Revolucionario (PCR)*	Maoísta	Buenos Aires, Salta y Jujuy
Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD) "Aníbal Verón"	*Movimiento Patriótico Revolucionario (MPR) "Quebracho"*	Nacional-populista	Buenos Aires
Frente Popular "Darío Santillán" (FPDS)	–	Autonomista	Buenos Aires
Federación de Trabajadores por la Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV)	*Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) desde 2006*	Teología de la liberación y nacional-populista	Buenos Aires y Santa Fe
Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD)	–	Nacional-populista	Buenos Aires, Chaco y Salta
Movimiento "Evita"	–	Peronista de izquierda	Buenos Aires
Movimiento Sin Trabajo (MST) "Teresa Vive"	*Movimiento Socialista de Trabajadores (MST)*	Trotskista	Ciudad de Buenos Aires
Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) "Aníbal Verón"	*Movimiento Guevarista*	Guevarista	Buenos Aires
Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) La Juanita	*Coalición Cívica - Alianza por una República de Iguales (CC-ARI) desde 2007*	Socialdemócrata	Buenos Aires
Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Solano y alrededores	–	Autonomista	Buenos Aires y Río Negro
Movimiento Territorial Liberación (MTL)	*Partido Comunista de la Argentina (PCA)*	Marxista-leninista	Ciudad de Buenos Aires
Movimiento de Trabajadores Desocupados "Teresa Rodríguez" (MTR) - Coordinadora de Unidad Barrial (CUBa)	*Movimiento Guevarista y Partido Revolucionario de la Liberación*	Guevarista y trotskista	Buenos Aires
Organización Barrial (OB) "Tupac Amaru"	CTA desde 2003	Nacional-populista e indigenista	Jujuy
Polo Obrero (PO)	*Partido Obrero (PO)*	Trotskista	Buenos Aires y Salta
Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) Mosconi	–	Sindicalista	Salta

Fuente: Adaptado de Rossi (2013).

en general, es "entendido como el intercambio específico de votos y prebendas, como bienes, favores y servicios entre los pobres y la elite" (Auyero, 2000b: 19). Esto se ha abordado a través de perspectivas etnográficas, análisis cuantitativos, estudios de caso e historias de vida.[3] Aunque las opiniones están divididas, se lo puede organizar en dos tipos principales: (1) clientelismo "hacia arriba" y (2) clientelismo "hacia abajo". Según Cerrutti y Grimson (2004: 53), en el primer caso esto significaría la relación entre los líderes de las organizaciones del movimiento social y los trabajadores, y en el segundo caso, la relación entre las organizaciones piqueteras y las instituciones del Estado u otra organización política externa a los movimientos. Al mismo tiempo, para la mayoría de los investigadores, el clientelismo aparece junto a la represión estatal (ver el capítulo de Ortiz, en este volumen). Voy a mostrar las limitaciones del enfoque basado en el clientelismo para estudiar la interacción entre los piqueteros y el Estado.

Hay algunos estudios de caso e investigaciones etnográficas interesantes que muestran cómo los líderes en las redes de organizaciones asociadas con una protesta luego se convierten en los responsables de la redistribución de los recursos que se han obtenido, y cómo esto, a continuación, produce una serie de relaciones asimétricas entre los miembros. Las etnografías del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTR) "Teresa Rodríguez" de Florencio Varela, como las de Quirós (2006) y Ferrauri Curto (2006), muestran la dificultad de definir como clientelar esta relación "hacia arriba" (Ferrauri Curto, 2006); o la posibilidad de considerarla como una de las muchas redes relacionales de los sectores populares (Quirós, 2006). Lo que destaca de estas investigaciones etnográficas es su capacidad para presentar evidencia que soslaya explicaciones dicotómicas o simplificadoras y enfatiza la continuidad entre rutina y política contestataria (ver también Auyero, 2007). Quirós (2006) demuestra que mecanismos en apariencia equivalentes en distintos contextos tienen significados diferentes: lo que en un contexto podría parecer clientelismo, en otro, en realidad podría ser más similar al empoderamiento. Quisiera añadir cómo estos enlaces asimétricos puede ser estudiados a través de los resultados, positivos o negativos, para los implicados. Como señala

3 Entre los expertos de la Argentina, el debate clientelismo / patronazgo es muy fructífero. Se puede obtener información adicional, a partir de la variedad de interpretaciones de los mismos datos cuantitativos sobre el voto cautivo: Brusco et al. (2004), Stokes (2005) y Nichter (2008). En cuanto al patronazgo, ver: Orlansky (2009) versus Calvo y Murillo (2009), como seguimiento de la contribución original de Calvo y Murillo (2004). Por último, el análisis etnográfico de Auyero (2000a) de las villas miseria generó debates sobre algunos puntos por Peux (2006) y, en parte, Torres (2006).

Merklen (2005), los sectores populares emplean diferentes tipos de estrategias de supervivencia. Asimismo, como destaca Auyero (2000a), esta no es necesariamente una relación manipuladora, sino una basada en la confianza mutua y la ayuda que implica obligaciones recíprocas que, en general, son percibidas positivamente por los miembros, siempre y cuando el individuo se sienta integrado a la red.

Como Auyero lo ha puesto de manifiesto con especial claridad, la relación entre el clientelismo y la protesta no es, como generalmente se entiende, "un acuerdo que es el *opuesto* de la acción colectiva contenciosa; como una forma de atomización y fragmentación del electorado o de los 'sectores populares' [...] como una forma de inhibir la organización colectiva y desalentar participación política real y efectiva" (Auyero, 2002: 204, cursivas en el original). Por el contrario, continúa, "Si miramos más de cerca determinados episodios contenciosos, veremos que las redes clientelistas están profundamente insertas en la génesis, *el despliegue y el resultado* de la acción colectiva contenciosa" (Auyero, 2002: 204, cursivas en el original). Por lo tanto, para estudiar la participación política de los sectores populares es necesario comprender que el clientelismo, la protesta y la participación de movimientos sociales son parte de un repertorio más amplio de acciones de los sectores populares, en su búsqueda de reducir la distancia con el Estado como fuente de bienestar y seguridad. En palabras de Merklen (2005: 64-65):

> Hay que destacar que las organizaciones se sitúan en el contexto más amplio de estrategias de supervivencia, como elemento adicional de la serie heterogénea e inestable de herramientas [de supervivencia] empleadas por una familia. Este aspecto es importante porque nos permite captar mejor la tensión bajo la cual opera la acción colectiva, en el contexto de una articulación entre los términos de "urgencia" y "proyecto". De esta manera, podemos evitar la alternativa errónea que tiende a poner a los sectores populares ante la disyuntiva ciudadanía *vs* clientelismo. Cuando la movilización se lleva a cabo por organizaciones que perduran, que son estables, éstos se enfrentan con el doble requisito de la construcción de un proyecto colectivo capaz de orientar las acciones y organizarse desde las bases, y responder a la urgencia producida por el deterioro cíclico de las condiciones de miseria debido al hecho de que la reproducción de la vida cotidiana depende de los recursos controlados por el sistema político.

Varios autores han argumentado que el clientelismo no es sino uno más de los muchos tipos posibles de vínculos entre la población y el Estado (Kitschelt, 2000; Piattoni, 2001). Kitschelt (2000: 873) sostiene que, en muchos países:

> En ausencia de un Estado de bienestar redistributivo, los políticos democráticos pueden contener las luchas distributivas para que no se salgan de control y amenacen los cimientos de la democracia[4] construyendo vínculos clientelistas entre los ciudadanos y las elites cuando las circunstancias son propicias en términos de desarrollo socioeconómico, formación del Estado, instituciones políticas, relaciones de propiedad político económicas o segmentación etnocultural. Para las democracias de la India a gran parte de América Latina, la política clientelista ha constituido el equivalente funcional del Estado de bienestar, al apaciguar a los desposeídos para que acaten las órdenes políticas que benefician enormemente a los poseedores.

Aunque bastantes autores reconocen la relación inequívoca entre el clientelismo y las reformas neoliberales, muchos de estos relatos se basan en una premisa individualista que no llega a aprehender la característica definitoria de la relación entre el movimiento piquetero y el Gobierno o el Partido Justicialista (PJ), peronista. Cuando la unidad de análisis es el movimiento social no estamos tratando con individuos atomizados sino, antes bien, con grupos organizados. Los individuos pueden participar en varias redes simultáneamente (Quirós, 2006, 2009), y el clientelismo puede ser una de las muchas estrategias de supervivencia de los pobres urbanos (como, por ejemplo, la estrategia del "cazador" estudiada por Merklen, 2000). Por esta razón, la relación entre el Estado y los pobres urbanos, si se organizaron como un movimiento, debe considerase como compuesta por un vínculo poliádico, más que por uno diádico, con subdivisiones internas que son cruciales. En otras palabras, el vínculo entre los agentes informales de PJ / Estado y los pobres urbanos no es directo, sino que está mediado por numerosas organizaciones y grupos que están en desacuerdo: varias facciones PJ compiten entre sí; también algunos sindicatos como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA); además, organizaciones de servicio social de la Iglesia Católica Apostólica Romana (principalmente Cáritas) y las Iglesias evangélicas; y facciones peronistas que no son del PJ, partidos de izquierda,[5] ONG, ex comunidades cristianas de base y organizaciones piqueteras que dependen de grupos informales o con

4 En mi opinión, la palabra "democracia" ahí bien podría ser reemplazada por "capitalismo".

5 Principalmente, el Movimiento Popular Revolucionario (MPR) "Quebracho", Patria Libre - Movimiento Libres del Sur, el Partido Comunista Revolucionario (PCR) y el Partido Obrero (PO).

liderazgo personalizado. Por lo tanto, mientras que en determinadas organizaciones del movimiento social puede haber casos de lazos clientelares "hacia arriba"[6] –que pueden ser explicados según los términos de Auyero (1999) como experiencias dóxicas– la relación del movimiento piquetero con diferentes gobiernos y actores en pugna es muy variada. Mientras que en algunos casos esto puede implicar un intercambio de recursos de apoyo u otros "bienes" de algún tipo, la relación no es entre individuos atomizados, sino más bien entre grupos organizados que se disputan el distrito electoral y los recursos en un territorio sujeto a tensión entre la gobernabilidad y la disrupción.

Uno de los principales dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), una de las organizaciones piqueteras más grandes, ilustró este argumento cuando me explicó en 2007 por qué su organización se había aliado al intendente justicialista de La Matanza, aunque dependen de la rama maoísta y –a la vez– abstencionista del PCR:

> P: Parecería que la forma en la que el [ex] intendente de La Matanza ha administrado el Gobierno municipal y gestionado su relación con las organizaciones sociales matanceras es, en cierta manera, diferente a la establecida por otros intendentes del Gran Buenos Aires ¿no es cierto?
>
> R: Sí, porque pensamos que él no quiere grietas en la relación con nosotros (y para nosotros no sería bueno que esta relación se rompa, pero si se tiene que romper, se rompe) porque creo que ellos también se dieron cuenta de que somos los únicos que pueden pudrirle el rancho, acá, cuando surge una crisis. No somos los únicos, pero constituimos la principal fuerza que es capaz de crear una ruptura con el potencial de precipitar una crisis política. Por eso él tiene que cuidarse con nosotros, porque si te ofuscas, o si sos como fue [el Presidente Néstor] Kirchner con nosotros, al diablo, te la pudrimos y nos jugamos hasta las últimas consecuencias. Tal vez perdamos, pero vamos a correr ese riesgo y los dejamos con un lío en La Matanza. Por eso, él es muy cuidadoso en esta relación.

Este líder piquetero no fue el único en percibir esta tensión entre la necesidad de gobernabilidad y el poder disruptivo del movimiento. Un político de alto rango también ilustró este argumento en 2008 al contarme una anécdota de la época en que era ministro de la provincia de Buenos Aires:

---

6 Algunos estudios excelentes de la relación "hacia arriba" entre los líderes de las organizaciones y los miembros del movimiento son: Delamata (2004, 2005), Ferrauri Curto (2006) y Quirós (2006), entre otros.

> Yo era el ministro de [tal cartera] durante los saqueos [inminentes] a finales de 2002, y [al final] no hubo saqueos. Hablamos con todo el mundo. Desplegué a todos los policías de la provincia de Buenos Aires para negociar con cada líder piquetero, en todas partes. Además, en una asamblea [de una organización piquetera] en Moreno habían decidido saquear de todos modos, personalmente fui a la asamblea porque un policía me llamó y me dijo: "Mira, acá decidieron hacerlo". El policía llamó a su jefe, y este llamó a su superior, que entonces me llamó y me dijo: "Mira, acá hay una asamblea y están decidiendo que igual van a saquear [a pesar de los acuerdos con el Gobierno]". ¿Por qué? Porque provenían de una posición más ideológica, más política. Así que corrí a esa asamblea y llegué cuando ya casi estaban terminando. Les imploré que me escucharan. Y entonces les dije: "Muchachos, no creo que haya un golpe de Estado militar inminente en Argentina, pero no les demos razones para planear uno. Si ustedes van y saquean, y algún pibe muere... Y si lo hacen, piensen que alguien podría salir herido: un comerciante, un policía o alguno de sus hijos... Esta idea es una locura. Discutamos el tema. ¿Qué necesitan?" Y me escribieron una lista de demandas, que como rehén, obviamente, dije que sí a todo, y más tarde empecé a borrar de la lista todo lo que yo sabía que era mentira... y de esta manera se resolvió la situación.

Es en esta relación de poder, basada en la dependencia mutua, que se revelan las limitaciones de ver esta relación como meramente clientelar. No es un juego con individuos en una posición de la debilidad absoluta, sino más bien una relación entre dos actores colectivos, cada uno con sus fortalezas y debilidades y que tienen algo que ofrecer a cambio, algo que el actor contendiente también requiere como recurso para sus propios objetivos políticos. Debido a esto, no pueden ignorarse el uno al otro. Sin embargo, esto no significa necesariamente que la relación sea afectiva o únicamente contenciosa –el lazo es instrumental.

Asimismo, una serie de artículos han intentado determinar en términos cuantitativos si el tipo de vínculo que los piqueteros disfrutan con el Gobierno puede ser descrito como clientelista. La pregunta que estos estudios han intentado abordar es si la asignación de subvenciones públicas para el desempleo está relacionada con el tipo de partido en el Gobierno o con la cantidad de protestas en el distrito. Todas las investigaciones cuantitativas realizadas hasta ahora coinciden –aunque en grados diferentes– en la mayor importancia de la distribución de subsidios de desempleo basados en el partidismo durante la segunda presidencia de Carlos Menem (1995-1999), en comparación con la presidencia posterior de Fernando De la Rúa (1999-2001) donde no hay ninguna correlación significativa que nos permita

afirmar que el partidismo era la razón de asignación de subsidios (Lodola, 2005; Weitz-Shapiro, 2006)[7]. Al mismo tiempo, según Lodola (2006: 532) la protesta se vuelve más relevante a medida que el movimiento piquetero aumenta su capacidad de movilización, mientras Weitz-Shapiro (2006: 139) concluye que "la protesta tiene un efecto estadístico y sustantivo importante en el financiamiento". Por último, Giraudy (2007) ha confirmado estos resultados en un periodo de tiempo extenso (1993-2002), añadiendo que no solo la protesta es un factor importante, sino también las necesidades sociales y económicas de la provincia en combinación con las características de las instituciones federales de Argentina.[8] Para resumir, parece haber una diferencia significativa entre los recursos que se asignan basados en las demandas colectivas y los resultantes de los lazos individuales.

Además de esto, en la Argentina el clientelismo está lejos de producir un electorado cautivo.[9] A pesar de la existencia de patronazgo, este tiene una correlación mínima con éxito electoral del PJ, ya que, según Calvo y Murillo (2004: 750-751) "Un incremento del 1% en el empleo público provincial lleva a un aumento del 0,066% en el voto peronista [...]. Por el contrario, el empleo público no es estadísticamente significativo para explicar la votación de la UCR-Alianza". Por lo tanto, se podría sostener que, lógicamente, debe haber otros tipos de vínculos políticos simultáneos –y, a veces, alternativos– organizados entre los pobres y las instituciones del Estado produciendo esquemas de interacción que no se limitan al clientelismo o el patronazgo político. Sin negar que la protesta –al menos en su etapa embrionaria– podría ser concebida en las mismas redes en las que reposa el clientelismo (Auyero, 2003; Quirós, 2006), están muy lejos de ser las únicas redes en juego en el proceso de la protesta. Como lo han demostrado algunas de las investigaciones más recientes, puesto que el vínculo producido por la interacción de los piqueteros con

7 Los piqueteros surgieron en los últimos tres años del segundo mandato de la presidencia de Menem, lo que podría explicar la supuesta menor importancia de la protesta si se mide todo el mandato sin tener esto en cuenta.

8 Estos resultados y conclusiones fueron recientemente confirmados y reiterados por Franceschelli y Ronconi (2009), que utilizan un enfoque metodológico diferente.

9 "Por lo tanto, la imagen de un amplio electorado clientelar 'cautivo' (estereotipado por los medios de comunicación y, a veces, adoptado irreflexivamente por los académicos) en el caso que estoy analizando es empíricamente inestable. Aunque no deja de ser significativa, la dimensión de los círculos internos de los punteros apenas puede dar cuenta de la 'conquista del voto' y la 'construcción de consenso electoral', que generalmente se atribuye al clientelismo. Si vamos a utilizar la palabra 'clientelismo', por tanto, debemos restringirla al círculo interno de la experiencia dóxica" (Auyero, 1999: 326).

el Gobierno se sostiene en el tiempo, respecto al principal mecanismo en el esquema de interacción con el Estado, el clientelismo y el patronazgo se vuelven menos relevantes (Massetti, 2009; Pereyra et al., 2008; Pérez y Natalucci, 2012). Al mismo tiempo, la coordinación continua de la protesta y otras actividades en torno a las organizaciones políticas producen vínculos asimétricos y variados entre los funcionarios estatales, los pobres organizados y los líderes de las organizaciones sociales. En suma, el clientelismo sigue ocupando un lugar central en los intentos de los pobres por reducir su distancia con el Estado con fines de supervivencia. Dicho esto, existen otros mecanismos de vinculación dentro de un repertorio predominante de estrategias usadas por el movimiento piquetero que, en gran parte, permanecen inexplorados (Rossi, 2015).

En definitiva, lo que muestran estos estudios previos y los ejemplos que doy –como mínimo– es la dificultad para clasificar el sustrato clientelar en la relación entre las organizaciones piqueteras y las instituciones del Estado, según la evidencia obtenida a través de los estudios de caso en profundidad y la investigación etnográfica. Y además, en contraste con el discurso abrumador sobre clientelismo en el ámbito político y los medios de comunicación, los datos cuantitativos refutan la afirmación de que el clientelismo es la principal fuente del vínculo entre los piqueteros y el Estado. En general, estos trabajos académicos sobre los piqueteros demostraron con creces que debemos buscar una explicación más refinada del esquema de interacción entre los piqueteros y el Estado.

ESQUEMA DE INTERACCIÓN

El vínculo entre las instituciones del Estado y el movimiento piquetero se forja a través de canales formales e informales. El esquema de interacción se basa en un fundamento que, acertadamente, describe uno de los intermediarios informales del Estado en la Casa de Gobierno que entrevisté en 2008: "la raíz del problema siempre está en la armonización de la red de intereses creados; hay una relación basada en intereses". Ya sea formal o informal, esta relación opera a través de acuerdos personales y divisiones que casi siempre son de carácter no oficial y que solo aplica a ciertos distritos o áreas localizadas, algo que el mismo intermediario estatal caracteriza como "una institucionalidad extraoficial que existe". El esquema de interacción del movimiento piquetero con las instituciones del Estado se compone de dos elementos principales:

1. Evolución de las políticas públicas sobre el desempleo: Cuando las relaciones entre el movimiento y el Estado han girado en

torno a un reclamo por un tema que está sujeto a un ámbito específico de políticas públicas (como, por ejemplo, construcción de viviendas, suministro de alimentos, etc.), el vínculo ha sido a través de la dependencia estatal responsable de esa política.

2. Tensión entre gobernabilidad territorial / disrupción: Cuando las relaciones entre el movimiento y el Estado han sido el resultado de una disputa por el control territorial y/o la tensión entre la gobernabilidad y la ruptura. El vínculo ha sido a través de algunas facciones del PJ o del Frepaso durante el Gobierno de la Rúa o las divisiones entre los Gobiernos municipales, provinciales y nacionales.

En términos teóricos, el primer elemento es la constitución, como resultado de las protestas piqueteras, de un nuevo dominio de la política pública piquetera, según divisiones formales específicas y procedimientos estatales. El segundo elemento se basa en la territorialización de la política y la tensión entre la disrupción organizada e instigada por los movimientos sociales y los intentos del Estado para controlar esa disrupción. Para el primer elemento, son cruciales las divisiones dentro del aparato del Estado, tales como conflictos entre ministerios. Para el segundo elemento, hay dos tipos de divisiones posibles de la elite: dentro de la misma escala de acción (por ejemplo, entre miembros del partido en la misma coalición de gobierno) y a través de múltiples escalas de acción (por ejemplo, entre los intendentes y el gobernador en una provincia). Al analizar esto, deberíamos considerar que las oportunidades políticas constan de un componente horizontal (es decir, divisiones *intra*-escalares de la elite) y un componente vertical (es decir, divisiones *inter*-escalares de la elite).

En relación al primer elemento del esquema de interacción, los cambios ocurrieron en el tipo y uso de los subsidios de desempleo. El presidente Menem utilizó los Planes Trabajar I, II, y III como una solución a las situaciones conflictivas focalizadas, sin ninguna otra política de desempleo. Durante el mandato presidencial de De la Rúa continuó el mismo tipo de subsidios menemistas, sumados al Programa de Emergencia Laboral (PEL), pero el objetivo era controlar el clientelismo del PJ y redirigirlo a la expansión del apoyo territorial de la coalición de gobierno. Después de la renuncia forzada de De la Rúa a finales de 2001, el Presidente Eduardo Duhalde amplió los subsidios de desempleo hasta llegar a casi 2 millones de beneficiarios con el Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (PJJHD). Por último, el Presidente Néstor Kirchner finalizó la distribución del

PJJHD y dividió la responsabilidad estatal de las políticas piqueteras. Mientras que el Ministerio de Trabajo siguió siendo responsable por los subsidios de desempleo, el Ministerio de Desarrollo Social estuvo a cargo de las políticas sociales de apoyo a las cooperativas de construcción de viviendas, la capacitación laboral, entre otras. El Gobierno de Kirchner tuvo dos enfoques predominantes –y simultáneos– en la distribución de los subsidios por desempleo: (1) subsidios informales distribuidos por operadores (*brokers* o agentes informales del Estado), como instrumentos de negociación política y de resolución de situaciones conflictivas concretas y (2) planes de Emergencia Comunitaria (PEC), subsidios formalmente institucionalizados y distribuidos por la Secretaría de Empleo (Ministerio de Trabajo) para la cobertura de individuos durante períodos de desempleo.

Respecto al segundo elemento, la disputa territorial ha evolucionado hasta alcanzar la escala nacional como resultado de la relación entre los intendentes y el movimiento en los distritos de Florencio Varela (PJ, pro Duhalde) y La Matanza (PJ, contra Duhalde) de 1999 a 2001, ya que los intendentes competían entre sí y con Duhalde (el principal líder del PJ en la provincia de Buenos Aires). Además, este diferendo fue parte del movimiento de oposición contra la Presidencia de De la Rúa –al mismo tiempo que algunos sectores de esa coalición apoyaban a ciertas organizaciones piqueteras. Este periodo atravesó un proceso relacional de dos etapas. Hasta el final de la presidencia de De la Rúa, lo que predominó fue una relación basada en la amenaza de disrupción por parte del movimiento y de provisión de recursos por parte del Estado para garantizar la gobernabilidad en base a acuerdos informales (producidos inicialmente a escala municipal, y luego a escala nacional hacia el fin de 2001). La Presidencia de Duhalde vio el comienzo de una nueva relación predominante, que denomino como "acuerdos para la sostenibilidad de la gobernabilidad", una modalidad que aplica a la mitad del grupo de las principales organizaciones piqueteras[10] y que implicó la estandarización de la lógica iniciada por De la Rúa.

Con el sucesor de Duhalde, Néstor Kirchner (y continuado por Cristina Fernández de Kirchner durante la primera mitad de su mandato), la multiplicidad de caminos específicos creció a medida que el Estado intentó anexar base territorial a su coalición, mientras desmovilizó –sin el uso de la represión física violenta– a aquellos

10 La Federación de Trabajadores por la Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), la CCC, el Polo Obrero (PO), el Movimiento Sin Trabajo (MST) "Teresa Vive", el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) "Aníbal Verón" y el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD).

que se negaron a participar o apoyar al Gobierno. Fue durante este período que se amplió la incorporación parcial de los piqueteros a la coalición de gobierno.

ESTRATEGIAS DE INTERACCIÓN POR ORGANIZACIÓN PIQUETERA: UNA SINOPSIS

El esquema de interacción implica acciones estratégicas tomadas tanto por las dependencias del Estado como por las organizaciones piqueteras. En el resto de este capítulo voy a mostrar cómo las principales organizaciones del movimiento piquetero siguieron diferentes trayectorias dentro de una lucha común en aras de una plena reincorporación sociopolítica. Aunque se trata de un proceso histórico y dinámico, es posible identificar un esquema específico para cada organización del movimiento social, que voy a resumir aquí e ilustrar a través de algunas de las organizaciones más relevantes. Como demostraré, uno de los elementos cruciales para la diferenciación de las diversas trayectorias de las organizaciones piqueteras es que algunas dependen de un partido político estructurado, mientras que otras carecen de tal cosa.

Desde la aparición del movimiento en 1996 a la legitimación de los piqueteros como un nuevo actor nacional al final de la Presidencia de la Rúa y durante la breve Presidencia de Adolfo Rodríguez Saá en diciembre de 2001, la estrategia era intercambiar gobernabilidad por recursos. Principalmente esto implicó, entre otras cosas, subsidios de desempleo a cambio de frenar los piquetes. Desde el principio, pero sobre todo desde la Presidencia de Duhalde (2002-2003), el movimiento se ha dividido en grupos a partir de su relación con el Estado. Durante el mandato de Duhalde, un grupo de organizaciones del movimiento social siguió la senda de establecer acuerdos para la sostenibilidad de la gobernabilidad (FTV y CCC). Un segundo grupo no aceptó estos acuerdos. Dentro de ese grupo, hubo dos estrategias alternativas: una de disrupción (MTR y la Coordinadora de Trabajadores Desocupados, CTD "Aníbal Verón", y sus posteriores subdivisiones) y otra de captura de votos electorales (principalmente, PO, MST "Teresa Vive" y el MIJD).

A partir de la estabilización del régimen bajo el Gobierno de Duhalde, hasta diciembre de 2008 (el final del período analizado), las estrategias de interacción pre legitimación solo fueron desplegadas por aquellas organizaciones del movimiento social que tenían un grado muy bajo de formalización interna y burocratización. Estas organizaciones dependían completamente de uno o dos líderes y, en consecuencia, se convirtieron en objeto de preferencia del PJ para establecer contactos informales e individualizados. Por un lado, esto de

hecho ha sucedido con el MTD "Aníbal Verón", el MIJD y la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de Mosconi, cuyos líderes fueron capaces de mostrar, a través de repetidas instancias de disrupción, que su liderazgo era el elemento clave en la capacidad de sus organizaciones para producir, y luego controlar, la disrupción en ciertas áreas. Por otro lado, esto no ha sucedido en el caso del MTR, a pesar de ser una organización personalizada. El estilo de organización foquista y de vanguardia del MTR produjo una ruptura permanente de los acuerdos con los miembros aliados del movimiento piquetero, mientras que les disputaba el dominio del movimiento a las principales organizaciones: la FTV y la CCC. Como resultado, el MTR demostró incapacidad o falta de interés en respetar los acuerdos informales establecidos con los intendentes del PJ (principalmente, en Florencio Varela), los punteros de la gobernación de Federico Ruckauf (1999-2002) y el sector aliado de Duhalde en la provincia de Buenos Aires.

Tras el abrupto fin del Gobierno de Duhalde por los asesinatos de dos miembros del movimiento piquetero, la Presidencia de Néstor Kirchner avanzó mucho más en la incorporación de los piqueteros a la coalición. El Gobierno de Kirchner comenzó desde una posición muy débil, tras ganar con el 22% de los votos. Así, en la búsqueda de legitimación y de reconstrucción de una base territorial, Kirchner invitó a casi todas las organizaciones del movimiento social a integrarse –en un papel secundario– a la coalición de gobierno, que finalmente fue aceptada por casi la mitad del movimiento. Esta decisión reconfiguró la interacción de la mayoría de las organizaciones, aunque no la CCC y el MTR, que ya habían cambiado su relación con el Estado bajo el Gobierno de Duhalde. Las principales organizaciones del movimiento social que se integraron a la coalición del Gobierno de Kirchner fueron: la FTV (2003 al 2015) y Barrios de Pie (2004-2008); conjuntamente, en el año 2003 el Gobierno creó el Movimiento "Evita", con el objetivo de unificar diversas secciones aisladas y pequeñas del movimiento social.[11]

La estrategia de interacción adoptada por la FTV durante el periodo de 2003-2008 puede ser interpretada como una emulación de la estructura descentralizada de lazos sociales del PJ, que había usado el intercambio de gobernabilidad por acceso a recursos y/o puestos electorales. Por lo tanto, la FTV puede ser definida como una red de

11 Luego, la Organización Barrial "Tupac Amaru" de la provincia de Jujuy se unió al sector de los aliados del Gobierno. Esta organización ha crecido muy rápido debido a sus vínculos con los Gobiernos nacional y provincial (Battezzati, 2012). Aunque es importante a nivel provincial, esta organización no es crucial para la dinámica nacional debido a la centralización política de la Argentina en Buenos Aires.

líderes territoriales que comparten el uso del emblema "FTV" y que producen acuerdos locales con total autonomía (entre sí y con los coordinadores nacionales) con sus equivalentes, los interlocutores del "PJ" (en su mayoría, intendentes y gobernadores). Este acercamiento informal le permitió a la FTV tener flexibilidad y capacidad de adaptación frente a las fluctuaciones constantes del PJ, pero al mismo tiempo la hicieron vulnerable y dependiente de los recursos proporcionados por el PJ (que provenían del Estado). Debido a esto, la FTV perdió miembros de las bases constantemente y algunos de sus dirigentes fueron cooptados mediante acuerdos con el PJ o con funcionarios estatales, como ocurrió con algunos de los miembros fundadores de la FTV luego de que fueran integrados al equipo de operadores informales de la Casa de Gobierno.

Durante el período 2004-2008, Barrios de Pie fundamentó su estrategia de interacción en la producción individualizada de acuerdos con los líderes del PJ (como un aliado interno del Gobierno) con el objetivo de colonizar posiciones dentro del Estado. Esta estrategia se basó en la capacidad del partido de izquierda detrás la organización, aunque pequeño y muy verticalista, de establecer acuerdos en los distritos, a pesar de la necesidad de una negociación separada con cada líder justicialista –debido a la organización descentralizada y mal estructurada del PJ. En consecuencia, a pesar de que la estructura de estos acuerdos no se formalizó, sino que fue más bien *ad hoc*, la forma en que se establecieron garantizó un sentido de continuidad muy valorado, que ayudó a mantener los vínculos entre esta organización y sus aliados gubernamentales. Con esta estrategia Barrios de Pie logró múltiples cargos en ministerios nacionales y provinciales, así como sus primeros cargos electos (diputados nacionales y provinciales) en varias provincias.

Entre los principales aliados del Gobierno, el más reciente ha sido el Movimiento "Evita", un caso particular de creación desde arriba. El Movimiento "Evita" representa el intento de la facción a favor de Kirchner por construir una base territorial y reorganizar algunos grupos del ala izquierda asociados con los Montoneros en el PJ. En la disputa por el control crucial del territorio en el Gran Buenos Aires, el Movimiento "Evita" se construyó en base al desprendimiento de la facción peronista de la organización política MPR "Quebracho" junto a varios MTD derivados de la CTD "Aníbal Verón". Después de un período inicial (2004) en el MTD, el Movimiento "Evita" comenzó a redefinirse como una agrupación peronista de izquierda a favor de Kirchner, que milita dentro y fuera del PJ, con el objetivo de consolidar una base territorial en el Gran Buenos Aires. A pesar de que en 2007 su máximo líder se convirtió en el Secretario de

las Organizaciones Territoriales del PJ, la principal diferencia entre el Movimiento "Evita" y las otras agrupaciones justicialistas ha sido una mayor autonomía de los líderes del partido, frente a las agrupaciones *pejotistas* controlada por sus intendentes. El Movimiento "Evita" tiene su propio líder sin objetivos electorales para sí y, en consecuencia, trabaja bajo la lógica de acuerdos en lugar de subordinación en su búsqueda por conquistar espacios políticos dentro del PJ.

Con respecto a las organizaciones piqueteras que se mantuvieron en la oposición, algunas de las principales han sido el MTR, el PO, la CCC y el MTD de La Juanita. Durante este período el MTR continuó con la estrategia anterior, aunque como actor externo tuvo dificultades para sostener los acuerdos individualizados e informales con los dirigentes justicialistas. Esta dificultad para mantener un nivel básico de confianza con sus aliados y antagonistas dejó al MTR en la posición de ser considerado como un actor incontrolable por ambas partes. Esto llevó a un proceso de subdivisiones gradual pero sostenido y, eventualmente, casi a la disolución, un desenlace que fue impulsado por algunos funcionarios y operadores informales.

A pesar de aplicar la misma estrategia de acuerdos personalizados con dirigentes del PJ como actor externo, la trayectoria del PO –condicionado por el Partido Obrero trotskista para capturar votos– fue completamente diferente de la del MTR. Desde 1999, el PO creció rápidamente a través de una estrategia de disrupción autocontrolada y limitada. Como resultado de este enfoque, el PO fue visto como particularmente susceptible al establecimiento de "acuerdos para la sostenibilidad de la gobernabilidad". Aumentó su poder político sobre todo durante la Presidencia de Duhalde, y lo mantuvo mientras el acuerdo de cooperación del cogobierno Kirchner-Duhalde fue válido (2003-2005).

Como sucedió con el MTR, la CCC –vinculada al PCR, maoísta y abstencionista– continuó hasta finales de 2008 con la misma estrategia de interacción que comenzara antes de 2003. La CCC estableció acuerdos individuales con sectores de las facciones de centroderecha del PJ y de la Unión Cívica Radical (UCR), con el objetivo de constituir una coalición insurreccional policlasista. Con esta estrategia en la mira, se produjeron alianzas con algunas agrupaciones y líderes antikirchneristas a cambio de apoyo (al ofrecer una base territorial masiva y movilización electoral). Este tipo de vínculo estratégico alcanzó la escala nacional durante la Presidencia provisional de una semana de Rodríguez Saá, y fue utilizado en 2003 para impulsar su candidatura a la Presidencia. Además, la estrategia de la CCC fue muy importante en las puebladas de 1992-1999 en Jujuy y Salta, y

durante la revuelta impositiva y el *lockout* nacional de los terratenientes en el año 2008.

Por último, hay una estrategia de interacción que únicamente fue seguida por una organización pequeña, el MTD de La Juanita, pionera en la formación del movimiento. Después de rechazar la solicitud de subsidios de desempleo, este MTD inició una estrategia de mutación en una ONG. En otras palabras, esta organización moderó sus reivindicaciones y estrategias contestatarias, reemplazándolas por un proyecto de donaciones centrado en agendas de acción. Comenzó a operar de manera similar a cualquier ONG profesionalizada, se alió a las empresas privadas y al Partido de clase media Coalición Cívica - Alianza por una República de Iguales (CCC-ARI). Por otra parte, el mandato del líder principal como diputado nacional por la CC-ARI (2007-2011) representó un enfoque diferente en el Congreso que el de Barrio de Pie, la FTV o, incluso, la CCC. La agenda parlamentaria del MTD de La Juanita se centró en las comisiones legislativas relacionadas con las cooperativas y las ONG, en vez de en las comisiones vinculadas a las cuestiones del desempleo y de la tierra. Para el movimiento popular en Argentina, el camino adoptado por esta organización del movimiento social es atípico.

CONCLUSIÓN

En este capítulo sostuve que las dimensiones que se basan en lo colectivo son elementos explicativos más contundentes del sendero tomado por los piqueteros, que las explicaciones individuales basadas en la interacción Estado-piqueteros. Mientras que en algunos casos esto puede implicar un intercambio de recursos por apoyo o alguna otra clase de "bienes", como he demostrado, la relación no es entre individuos atomizados, sino antes bien entre grupos organizados que se disputan el distrito electoral y los recursos en un territorio sujeto a la tensión entre la gobernabilidad y la disrupción. En otras palabras, cuando la unidad de análisis es el movimiento social, no estamos tratando con individuos atomizados sino con grupos organizados. Por esta razón, la relación entre el Estado y los pobres urbanos, si se organizaron en un movimiento, puede ser vista como un compuesto poliádico en lugar de un vínculo diádico, con subdivisiones internas que son cruciales (el Cuadro 9.1 sintetiza la diversidad interna del movimiento piquetero).

Asimismo, desde un punto de vista político que excede lo contencioso, pudimos ver que el esquema de interacción de los piqueteros con el Estado se basa en la combinación de la evolución de las políticas públicas en materia de desempleo y la tensión territorial entre la búsqueda de gobernabilidad del Estado y capacidad del movimiento

para producir disrupción. Sin embargo, esto no significa necesariamente que la relación sea afectiva o únicamente contenciosa –el lazo social es instrumental, forjado a través de canales formales e informales.

Espero que las investigaciones, como las que yo he repasado aquí brevemente y las mías propias, hayan dejado claro que el análisis de la relación Estado-piqueteros en términos de clientelismo lleva a un callejón sin salida. Se deben hacer esfuerzos para entender en profundidad el proceso político inherente a este movimiento y el esquema de interacción que ha desarrollado. En otras palabras, el clientelismo es solo uno de los muchos tipos de vínculos interactivos disponibles, y es reduccionista limitar la relación de los piqueteros y el Estado a estos términos. Aunque se han dado algunos primeros pasos importantes para entender la dimensión relacional de los piqueteros, la mayoría de las investigaciones se han centrado en la dimensión contenciosa del proceso; por lo tanto, explicar las expresiones institucionales de este esquema de interacción sigue siendo un trabajo en ciernes. Si reconocemos que la interacción del movimiento piquetero con el Estado es en parte contenciosa y que incluye clientelismo, cooptación y patronazgo –pero que no se limita a ninguna de ellas– surge una imagen más amplia y más compleja. Para poder hacer esto tenemos que crear algunas herramientas analíticas adicionales, que enriquecerán la literatura sobre movimientos sociales mediante la presentación de un análisis multidimensional y no dicotómico de los espacios de interacción cuyas dinámicas no son únicamente contenciosas y que, al mismo tiempo, son multiescalares y multiinstitucionales.

BIBLIOGRAFÍA

Auyero, J. 1999 'From the client's point(s) of view': How poor people perceive and evaluate political clientelism' en *Theory and Society*, *28:* 297-334.

Auyero, J. 2000a *Poor people's politics: Peronist survival networks & the legacy of Evita* (Durham: Duke University Press).

Auyero, J. 2000b 'The logic of clientelism in Argentina: An ethnographic account' en *Latin American Research Review, 35*(3): 55-81.

Auyero, J. 2002 "Los cambios en el repertorio de la protesta social en la Argentina" en *Desarrollo Económico*, *42*(166): 187-210.

Auyero, J. 2003 *Contentious lives: Two argentine women, two protests, and the quest for recognition* (Durham: Duke University Press).

Auyero, J. 2007 *Routine politics and violence in Argentina: The grey zone of state power* (Cambridge: Cambridge University Press).

Battezzati, S. 2012 "La Tupac Amaru: intermediación de intereses de los sectores populares informales en la provincia de Jujuy" en *Desarrollo Económico*, *52*(205): 147-171.

Brusco, V.; Nazareno, M. y Stokes, S. 2004 'Vote buying in Argentina' en *Latin American Research Review*, *39*(2): 66-88.

Calvo, E. y Murillo, M. V. 2004 'Who delivers? Partisan clients in the Argentine electoral market' en *American Journal of Political Science*, *48*(4): 742-757.

Calvo, E. y Murillo, M. V. 2009 "Respuesta al comentario de Dora Orlansky: '¿Validez de una demostración? Patronazgo y empleo público provincial'" en *Desarrollo Económico*, *48*(192): 559-61.

Cerrutti, M. y Grimson, A. 2004 "Buenos Aires, neoliberalismo y después. Cambios socioeconómicos y respuestas populares" en *The Center for Migration and Development* (Princeton University), *Working Paper Series #04-04d*.

Delamata, G. 2004 *Los barrios desbordados. Las organizaciones de desocupados del Gran Buenos Aires* (Buenos Aires: Centro Cultural Ricardo Rojas / EUDEBA).

Delamata, G. 2005 "Las organizaciones de desocupados del Gran Buenos Aires y la(s) crisis" en Schuster, F. et al. (eds.) *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea* (Buenos Aires: Prometeo) pp. 365-385.

Della Porta, D. y Diani, M. 1999 *Social movements: An introduction* (Oxford: Blackwell).

Diani, M. 1992 'The concept of social movements' en *Sociological Review*, *40*: 1-25.

Ferrauri Curto, M. C. 2006 "Lucha y papeles en una organización piquetera del sur de Buenos Aires" en Míguez, D. y Semán, P. (eds.) *Entre santos, cumbias y piquetes: Las culturas populares en la Argentina reciente* (Buenos Aires: Biblos) pp. 145-164.

Franceschelli, I. y Ronconi, L. 2009 'The effect of workfare policy on social movement mobilizations' en *Economics Letters, 105*(3): 315-317.

Giraudy, A. 2007 'The distributive politics of emergency employment programs in Argentina (1993-2002' en *Latin American Research Review*, *42*(2): 33-55.

Kitschelt, H. 2000 'Linkages between citizens and politicians in democratic polities' en *Comparative Political Studies*, *33*(6/7): 845-879.

Lodola, G. 2005 "Protesta popular y redes clientelares en la Argentina: el reparto federal del Plan Trabajar (1996-2001)" en *Desarrollo Económico*, *44*(176): 515-516.

Massetti, A. 2009 "Cuando los movimientos se institucionalizan. Las organizaciones territoriales urbanas en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires" en Delamata, G. (ed.) *Movilizaciones sociales: ¿nuevas ciudadanías?* (Buenos Aires: Biblos) pp. 205-235.

Melucci, A. 1989 *Nomads of the Present. Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society* (Philadelphia: Temple University Press).

Merklen, D. 2000 "Vivir en los márgenes: la lógica del cazador. Notas sobre sociabilidad y cultura en los asentamientos del Gran Buenos Aires" en Svampa, M. (ed.) *Desde abajo. La transformación de las identidades sociales* (Buenos Aires: Biblos) pp. 81-120.

Merklen, D. 2005 *Pobres Ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003*) (Buenos Aires: Gorla).

Nichter, S. 2008 'Vote buying or turnout buying? Machine politics and the secret ballot' en *American Political Science Review*, *102*(1): 19-31.

Orlansky, D. 2009 "¿Validez de una demostración? Patronazgo y empleo público provincial" en *Desarrollo Económico*, *48*(192): 557-558.

Pereyra, S.; Pérez, G. y Schuster, F. (eds.) 2008 *La huella piquetera. Avatares de las organizaciones de desocupados después de 2001* (La Plata: Ediciones Al margen).

Pérez, G. y Natalucci, A. 2012 "*Vamos las bandas': organizaciones y militancia kirchnerista* (Buenos Aires: Nueva Trilce).

Peux, N. 2006 "Política y prácticas clientelares en las villas del conurbano bonaerense" en Míguez, D. y Semán, P. (eds.) *Entre santos, cumbias y piquetes. Las culturas populares en la Argentina reciente* (Buenos Aires: Biblos) pp. 183- 195.

Piattoni, S. (ed.) 2001 *Clientelism, interests, and democratic representation: The European experience in historical and comparative perspective* (Cambridge: Cambridge University Press).

Quirós, J. 2006 *Cruzando la Sarmiento: Una etnografía sobre piqueteros en la trama social sur del Gran Buenos Aires* (Buenos Aires: Antropofagia-IDES).

Quirós, J. 2009 "Política e economia na ação coletiva: uma crítica etnográfica às premissas dicotômicas" en *Mana-Estudos De Antropologia Social*, *15*(1): 127-153.

Rossi, F. M. 2006 "Movimientos Sociales" en L. Aznar y M. De Luca (eds.), *Política. Cuestiones y Problemas* (Buenos Aires: Ariel) pp. 235-274.

Rossi, F. M. 2013 'Piqueteros (Workers/unemployment movement in Argentina)' en Snow, D. et al. (eds.) *The WileyBlackwell encyclopedia of social and political movements* (Oxford: Wiley-Blackwell) pp. 929-932.

Rossi, F. M. 2015 'Conceptualizing strategy making in a collective and historical perspective' en Rossi F. M. y Von Bülow M. (eds.) *Social movement dynamics: New perspectives on theory and research from Latin America* (Farnham: Ashgate -The Mobilization Series on Social Movements, Protest, and Culture).

Snow, D.; Soule, S. y Kriesi, H. 2004 'Mapping the terrain' en Snow, D.; Soule, S. y Kriesi, H. (eds.) *The Blackwell companion to social movements* (Oxford: Blackwell) pp. 3-16.

Stokes, S. C. 2005 'Perverse accountability: A formal model of machine politics with evidence from Argentina' en *American Political Science Review*, *99*(3): 315-325.

Svampa, M. y Pereyra, S. 2003 *Entre la ruta y el barrio: la experiencia de las organizaciones piqueteras* (Buenos Aires: Biblos).

Torres, F. 2006 *Todavía piqueteros: la CTD Aníbal Verón* (La Plata: Editorial de la Universidad de La Plata).

Weitz-Shapiro, R. 2006 'Partisanship and protest: The politics of workfare distribution in Argentina' en *Latin American Research Review*, *41*(3): 122-147.

CÓMO CITAR ESTA PUBLICACIÓN:
Rossi, Federico M. 2017. "Más allá del clientelismo: el movimiento piquetero y el Estado en Argentina" Pp. 213-234 en Paul Almeida y Allen Cordero Ulate, Eds., *Movimientos Sociales en América Latina: Perspectivas, Tendencias y Casos*. Buenos Aires: CLACSO.

PARTE III:
LUCHAS INDÍGENAS
EN EL CONTINENTE

10

Eduardo Silva*

DESARROLLOS, POLÍTICAS Y MOVIMIENTOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN ECUADOR Y BOLIVIA

PREPARANDO EL ESCENARIO

Los pueblos Indígenas de Bolivia y Ecuador comparten una larga historia de centurias de conquista, dominación y resistencia que se remonta al 1500 (Stern, 1987). Ambos países tienen grandes poblaciones indígenas, predominantemente rurales, con importantes distinciones entre las naciones del altiplano y las tierras bajas; aunque cercana al 60%, la población indígena de Bolivia casi duplica a la de Ecuador.[1] En ambos países la población del altiplano es, por mucho, más numerosa, más densa geográficamente, más homogénea étnica y culturalmente, tiene una historia más larga e intensa de contacto con la economía y la sociedad dominantes, y ha desarrollado una agricultura de naturaleza campesina basada en pequeñas unidades de producción. Por el contrario, los indígenas de las tierras bajas en

* Tulane University, New Orleans, EEUU.

1 La cifra de Bolivia es del Censo 2001 y se basa en la auto-identificación. Este dato está sujeto a controversias, debido a que las cifras preliminares para el censo de 2012 –que también se basa en la auto-identificación– están cerca del 40%. Abundan las hipótesis para esta discrepancia, pero en cualquier caso, la población indígena de Bolivia sigue siendo mayor que la de Ecuador.

la cuenca amazónica habitan en áreas de mayor amplitud geográfica que están escasamente pobladas, y practican una economía de subsistencia. Recién a partir de los 60, con el desarrollo de la extracción de hidrocarburos y la rápida expansión del agronegocio, tuvieron un contacto mucho más intenso con la sociedad dominante.[2]

Este capítulo traza la trayectoria del movimiento de los pueblos indígenas modernos de estos dos países en tres períodos distintos: los años de formación bajo el populismo nacional (entre los 60 y los 80), el liderazgo en los ciclos de contención antineoliberal (de los años 80 al 2005) y su relación con los gobiernos de izquierda que los sucedieron en el período posneoliberal (de 2006 al presente). Cuenta la historia de su apogeo, de su relativo ocaso y de las luchas actuales. También muestra que para la mayor parte de los períodos nacional populista y neoliberal, los movimientos indígenas en Bolivia y Ecuador desarrollaron caminos similares y luego divergieron radicalmente en el periodo posneoliberal. La narración se enfoca en las mayores campañas del movimiento, los principales protagonistas, y en las relaciones cambiantes con el Estado a partir de los 50 y los 60 hasta el presente. Estos estuvieron profundamente influenciados por los modelos de desarrollo socioeconómico y político característico de cada período, que formaron las oportunidades políticas y las amenazas a las que los movimientos indígenas respondieron. Por supuesto, los participantes del movimiento tienen agencia, y por lo tanto, basándonos en un modelo de proceso político de los movimientos, también examinamos cómo los líderes perciben las oportunidades y amenazas, construyen sus organizaciones y enmarcan las cuestiones, no solo en términos de sus movimientos, sino en relación al Estado, los partidos políticos y otros movimientos del sector popular (Tarrow, 2011; Goldstone, 2003).

---

2 En Bolivia, la población del altiplano es predominantemente Quechua o Aymara, aunque también viven en los valles montañosos entre las tierras altas y las bajas. A medida que avanzaba el siglo XX se aceleraba la migración del campo a la ciudad, especialmente a El Alto que se cierne sobre La Paz. Aproximadamente 17 naciones indígenas diferentes viven en las tierras bajas, entre ellos Guaraní y Chiquitano y Moxeño. Los indígenas de los altos ecuatorianos son en su mayoría Quechua hablantes, y son descendientes de las naciones indígenas que habitaron la zona antes de los Incas. También se ha producido una migración considerable a Quito y Cuenca. Las Naciones de la cuenca amazónica incluyen a los Secoyas, Sionas, Cofan, Huaorani, Zaparo, Shuar y Achuar. Puesto que Ecuador tiene salida al mar, también hay pueblos indígenas costeros como los Chachis.

EL POPULISMO NACIONAL Y LOS MOVIMIENTOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, DE LOS AÑOS 50 A MEDIADOS DE LOS 80

Tras la crisis del régimen de la elite oligárquica agrominera en los 40 y 50, que excluía a los sectores populares de la política, el período nacional populista en Bolivia y Ecuador optó por un modelo de desarrollo económico dirigido por el Estado. Tanto los gobiernos democráticos progresistas como los militares buscaron incluir los reclamos y las demandas políticas, económicas y sociales de los sectores populares. La política urbana dominó el período nacional populista, ergo, los sindicatos urbanos se convirtieron en las principales organizaciones del movimiento del sector popular (Collier y Collier, 1991).

Sin embargo, hubo un componente rural en el proyecto nacional populista de Bolivia y Ecuador. Durante este período, el Estado incorporó a la población indígena del altiplano al ámbito político a través de los sindicatos campesinos, tratando de integrarlas a la nación en base a la noción de clase en lugar de la de identidad indígena. La reforma agraria, el desarrollo de la infraestructura y el apoyo financiero del Estado a la agricultura campesina beneficiaron a sus comunidades. Las zonas de tierras bajas apenas estaban empezando a integrarse a la nación con la expansión de la explotación de los recursos naturales. Durante este período, los sindicatos de campesinos indígenas estuvieron subordinados a los sindicatos urbanos, que eran considerados el principal sector transformador de la clase obrera en la lucha contra la dominación capitalista.

Bolivia. La Revolución de 1952, una de las pocas revoluciones sociales de América Latina que fue fuertemente apoyada por las clases trabajadoras urbanas y liderada por mineros militantes, dio comienzo al período nacional populista en Bolivia. Bajo el consiguiente régimen democrático reformista liderado por el Partido Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de clase media comenzó la reforma agraria, una demanda rural clave de los indígenas campesinos, y la población indígena rural se organizó en sindicatos campesinos para respaldarla. Aunque se redistribuyó la tierra, el material de apoyo para la agricultura campesina se retrasó. Los militares derrocaron el régimen democrático en 1964, establecieron un gobierno militar y, a principios de los 70, establecieron un Pacto Militar Campesino para fortalecer su régimen. Los militares unificaron los sindicatos campesinos en una confederación controlada por el Estado y prometieron abordar sus reclamos. Sin embargo, hacia fines de los 70, los impuestos sobre la tierra y la represión alienaron a los líderes de los nuevos sindicatos campesinos del gobierno militar (Klein, 2003).

Mientras estos hitos organizacionales se desplegaban, dos hebras de identidad etnocultural indígena dentro de ellas –katarismo e indianismo– estimularon la formación de un movimiento independiente de campesinos indígenas entre 1968 y 1979. El katarismo, que dominó inicialmente, combinó la conciencia de clase (defensa de los intereses de los campesinos) con la defensa de los derechos étnicos y culturales. Este desarrollo tuvo profundas consecuencias para las luchas futuras. En primer lugar, se generaron demandas por un Estado boliviano que fuera tolerante de la diversidad étnica y que incluyera tanto a las formas de gobierno indígenas como a las occidentales (Healy y Paulson, 2000). Eventualmente, estas demandas se consagraron en la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia en 2009. En segundo lugar, facilitó la construcción de alianzas con otros movimientos sociales y partidos políticos de izquierda (Van Cott, 2005: 35) tales como la principal organización laboral militante, la Central Obrera Boliviana (COB).

El resultado de este segundo desarrollo es que, como la redemocratización del movimiento se inició en 1978, la COB ayudó a los dirigentes sindicales campesinos kataristas a formar una organización campesina unificada y políticamente independiente: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Bolivianos (CSUTCB). Principalmente representaba a los campesinos del altiplano, incluyendo los del Valle de Cochabamba, y estaba afiliada a la COB. No obstante, la CSUTCB no gozó de mucha influencia en la COB. Esta última estaba dominada por los sindicatos mineros e industriales cuya orientación marxista exigía la subordinación de los campesinos a la vanguardia del proletariado (Ticona, 2000: 119-29). Aparte de estas dificultades, la propensión del movimiento indígena campesino para establecer alianzas policlasistas e interétnicas fue un elemento clave en el desarrollo de los ciclos de contención antineoliberal que se desarrollaron en los 90 y a principios de 2000.

Ecuador. Al igual que en Bolivia, el Estado nacional populista había organizado a las comunidades indígenas bajo la identidad campesina y tuvo un impacto mucho mayor en la población indígena del altiplano. Las leyes de reforma agraria durante los gobiernos militares de los años 60 y 70 alentaron a los pueblos indígenas a registrarse como campesinos. Las comunidades campesinas constituidas legalmente fortalecieron la autoridad de la comunidad indígena y el derecho consuetudinario (Guerrero, 1993). En los 60, crearon la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (FENOC).[3] Con la

3 La primera organización del pueblo indígena fue la Federación Ecuatoriana de

ayuda de la FENOC, las comunidades organizaron líneas corporativas en pos de recibir los beneficios prometidos, tales como tierra, crédito y mejoramiento de la infraestructura (Hurtado, 1980; Isaacs, 1993; Schodt, 1987; Yashar, 2005). Mientras tanto, en la región amazónica, el desarrollo petrolero y las invasiones colonizadoras de tierras provocaron la organización de los pueblos indígenas, especialmente los Shuar (Gerlach, 2003).

En los 70, los indígenas de las tierras altas y bajas también se habían organizado de forma independiente. A finales de los 70, los indígenas del altiplano crearon la ECUARUNARI (*Ecuador Runacunapac Riccharimuri*, Movimiento de los Indígenas del Ecuador o Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador) y los indígenas de las tierras bajas formaron la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE). El marco de las luchas de los pueblos indígenas impulsado por ECUARUNARI mezcló cuestiones campesinas como tierra, precios para la producción agrícola y sus productos, subsidios y condiciones de trabajo con elevar la conciencia sobre la etnia y la identidad indígena. Desplazó constantemente a la FENOC, de orientación clasista, de las comunidades indígenas. La CONFENIAE surgió en respuesta a la apropiación de tierras por parte de terratenientes, colonos y compañías petroleras. La conservación y protección de la integridad territorial fue uno de sus principales desafíos, ya que era inseparable de la supervivencia cultural y étnica (Benavides, 2004: 140-41; Gerlach, 2003; Selveston-Scher, 2001; Yashar, 2005; Zamosc, 2004).

NEOLIBERALISMO, 1984-2005

A medida que los sindicatos se debilitaban durante el período neoliberal en Bolivia y Ecuador, los movimientos de los pueblos indígenas se levantaron para liderar la lucha contra los programas de reestructuración económica de libre mercado. Se situaron en el centro de las heterogéneas coaliciones clasistas de izquierdas, movilizándose contra las reformas del mercado y en pos del restablecimiento de los esfuerzos por mayor desarrollo y bienestar impulsados por el Estado. El período también presenció el resurgimiento de la identidad indígena como un principio clave de organización; así, las demandas combinaron los reclamos por la autonomía indígena con las necesidades materiales. Además, los movimientos indígenas crearon partidos políticos para llevar su lucha directamente a la arena política.

Indios (FEI), creada entre líneas clasistas-campesinas en los años 40. La reforma agraria fue su mayor demanda y una vez que se logró, en la década del 60, la FEI declino rápidamente.

Durante este período, los grupos indígenas de las tierras bajas experimentaron grandes avances en la organización del movimiento, al añadir su poder asociativo al de los sindicatos indígenas del altiplano.

El periodo neoliberal fue paradójico. Por un lado, ofreció oportunidades de fomentar el desarrollo organizacional basado en la identidad indígena con el fin de promover el multiculturalismo. El foco estaba en las lenguas, las fiestas, los rituales, la cosmología y en cómo la cultura conforma las rutinas de la vida cotidiana. Por otro lado, las reformas económicas neoliberales también representaron amenazas (Almeida, 2007). Perjudicaron materialmente a los pueblos indígenas y los excluyeron del proceso político de forma sistemática. Esta combinación, más la descentralización política, atizó el fuego de la movilización indígena.

OPORTUNIDADES

En general, el proyecto neoliberal excluyó a las fuerzas sociales de la formulación de políticas socioeconómicas. Sin embargo, en aras de la promoción de la igualdad formal, el proyecto neoliberal alentó a los movimientos sociales siempre y cuando sus actividades se limitaran a arenas no económicas. Así, los gobiernos hicieron hincapié en el reconocimiento formal de los derechos individuales y culturales de los grupos subalternos hasta ahora marginados, como los pueblos indígenas. Se supuso que la igualdad formal ante la ley y la promoción de la diversidad cultural y étnica no afectarían la formulación de políticas económicas.

Un objetivo político clave del proyecto neoliberal fue reducir el tamaño y las funciones del Estado en la economía y fortalecer a la sociedad civil local. Con el fin de eludir al Estado, las agencias internacionales de desarrollo se basaron en gran medida en las organizaciones no gubernamentales (ONG) para distribuir servicios y programas, y para promover la organización de la sociedad civil autónoma del Estado. Las ONG penetraron con mayor profundidad en las áreas donde la presencia de las organizaciones que se desarrollaron durante el período nacional populista era escasa o nula. Como resultado, las ONG que promocionaban los derechos indígenas fueron más efectivas en la organización de los movimientos entre los grupos étnicos de las tierras bajas, que tendían a estar más marginados del conjunto de la economía capitalista, dependían más de una economía de subsistencia y tenían poblaciones de menor densidad dispersas en territorios mucho más grandes.

El papel central de las ONG tuvo otro impacto. Proporcionaron un vínculo con el movimiento ambiental. Los pueblos indígenas, especialmente los que viven en las regiones amazónicas, fueron

considerados víctimas del desarrollo. Las organizaciones internacionales, en particular las Naciones Unidas y más tarde el Banco Mundial, promovieron los derechos indígenas y el desarrollo ambientalmente sostenible. Las ONG se asociaron con las incipientes organizaciones indígenas para promover la demarcación de tierras nativas, de parques nacionales que limitarían los proyectos de desarrollo en gran escala y para apoyar las economías comunitarias alternativas, ecológicas y de pequeña escala. También abogaron por la legislación ambiental. Esta alianza de ONG ambientales y organizaciones de los pueblos indígenas fue importante durante las protestas antineoliberales y en las luchas del período posneoliberal.

En Bolivia, a principios de los 80, las ONG colaboraron en la formación de dos organizaciones importantes. Una de ellas fue la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), la principal organización del movimiento social indígena de las tierras bajas tropicales.[4] Las luchas principales de la CIDOB son contra la expansión de la frontera agrícola y contra la exploración y explotación de hidrocarburos. La otra fue CONAMAQ, que representaba a los Aymara y Quechua del altiplano que viven en tierras de pastoreo marginales y que están débilmente integrados a los mercados y, por lo tanto, todavía están apegados a formas comunales de producción (Zegada et al., 2008).

En Ecuador, en los años 80, la nación Shuar en ese país junto a varias ONG formaron la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE).[5] Una de sus luchas cardinales fue la pelea contra la degradación ambiental de sus tierras y la devastación de sus comunidades debido a la explotación petrolera (Gerlach, 2003). En los años 80 y 90, las ONG ambientales internacionales respaldaron decididamente sus luchas contra las compañías petroleras internacionales y la expansión de la explotación de los yacimientos petrolíferos. Las ONG ambientales también se vincularon con comunidades específicas con la intención de establecer áreas protegidas. El Parque Nacional Yasuní se volvió emblemático; ubicándose por encima de las reservas de petróleo más importantes.[6]

---

4 Los pueblos que formaron la CIDOB incluyeron a los Chiquitanos, Ayoreos, Guarayos y Guaraníes.

5 Los otros miembros son los pueblos Kichwa, Acuar, Siona, Secoya, Cofán y Huaorani. La principal ONG consultora es el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA).

6 El Parque Nacional Yasuní es una zona de 9.820 km^2 entre los ríos Napo y Curaray en las provincias de Napo y Pastaza en la Amazonía ecuatoriana. Se encuentra en la región ecológica de bosques húmedos de Napo, de predominio selvático.

CICLOS DE CONTENCIÓN ANTINEOLIBERAL

A pesar de estas oportunidades de inclusión cultural, los efectos negativos de las reformas económicas, sociales y políticas neoliberales llevaron a las organizaciones del movimiento indígena de Bolivia y Ecuador a protestar con mayor intensidad desde 1990 hasta principios de los años 2000 (Silva, 2009). Entre los comienzos de las reformas neoliberales en 1984-1985 y principios de los años 90 se hizo evidente que los sindicatos estaban demasiado debilitados para liderar la lucha. Mientras que la contención antineoliberal cobró impulso, primero en Ecuador y luego en Bolivia, la población indígena del movimiento tuvo roles de liderazgo cruciales y construyó coaliciones heterogéneas con organizaciones de la clase media y sectores populares urbanos, ambientales y laborales. El rol de liderazgo fue más claro en Ecuador, bajo la dirección de la Confederación Nacional de Indígenas Ecuatorianos (CONAIE), que en Bolivia donde no hubo una confederación general los pueblos indígenas de ese tipo. Pasemos, ahora, a las campañas más grandes y sus resultados.

Ecuador. El siguiente hito en el desarrollo de la organización del poder de los pueblos indígenas ecuatorianos se produjo en 1986 cuando ECUARUNARI y CONFENIAE se unieron y formaron la CONAIE, en reacción al inicio de las reformas económicas neoliberales durante la administración de León Febres Cordero (1984-1988) (Yashar, 2005). Los unió la encrucijada de las cuestiones de la tierra y la supervivencia cultural. El programa de estabilización económica de Febres Cordero, al enfatizar en la reducción del gasto público, el recorte de subsidios al consumo de los hogares pobres y de los trabajos de construcción en las zonas rurales patrocinados por el Estado, eliminó o redujo drásticamente el apoyo estatal a la agricultura campesina y devaluó la moneda. La pronunciada escalada de precios y la pérdida de ingresos amenazaron los ya precarios medios de subsistencia de las comunidades rurales indígenas pobres, cuyos habitantes, en su mayoría, poseían exiguas parcelas de tierra que dependían de los subsidios estatales a la agricultura campesina y de ingresos suplementarios a fin de satisfacer sus necesidades. Por otra parte, la obstinación del gobierno en la empresa privada y la promoción del agronegocio amenazaron la seguridad de la tenencia de parcelas en las tierras altas y bajas (Pallares 2002: 210-11; Zamosc, 1994). La profundización de la pobreza y la pérdida de la tierra o de la capacidad de producción agraria destruiría las comunidades indígenas y, con ello, su cultura.

Estas amenazas impulsaron a la CONAIE a la acción directa.[7] En junio de 1990, la CONAIE organizó el primero de varios "Levantamientos Nacionales Indígenas". La movilización duró 10 días y se basó en organizaciones indígenas y campesinas no afiliadas y sus nuevas formas de protesta (como el corte de rutas), paralizado seis provincias del altiplano de gran importancia comercial. El levantamiento indígena transformó a CONAIE en un actor político nacional, líder del movimiento social en Ecuador.

La CONAIE tradujo hábilmente las amenazas que planteaban las reformas económicas neoliberales en dispositivos y demandas con un marco común que apelaban a su base diversa. La tierra y el acceso a los recursos del Estado para el desarrollo de la comunidad y la agricultura campesina fueron cuestiones centrales. Otros dispositivos y demandas con marcos de referencia clave fueron más políticos y culturales, como el derecho a la autogestión y el autogobierno de las comunidades indígenas. Eventualmente, esto se convirtió en la base de los reclamos constitucionales por un Estado Plurinacional, que requirió el establecimiento de una Asamblea Constituyente como una condición necesaria previa (Silva, 2009).

Los esfuerzos sostenidos por presidencias posteriores para profundizar las reformas económicas y políticas orientadas al mercado, convirtieron a estas demandas en el núcleo irreductible de la plataforma de la CONAIE. Pero los líderes de la CONAIE concluyeron, desde el principio, que la lucha contra el neoliberalismo requería alianzas con otros sectores populares y organizaciones de clase media que también estaban protestando, como los sindicatos, las asociaciones barriales urbanas, los movimientos contra el libre comercio, los grupos de derechos humanos, las asociaciones docentes y los gremios de empleados del Estado. La CONAIE asumió el liderazgo porque estos grupos no eran lo suficientemente fuertes como para organizar movilizaciones nacionales, masivas. Los gobiernos se dieron por aludidos, por cierto, recién cuando la CONAIE entró en la contienda. Y así, por el resto de la década, la CONAIE condujo varios ciclos de contención antineoliberal. En el proceso, la CONAIE amplió su marco

7 Inicialmente, la CONAIE decidió defender las cuestiones culturales. En la primera parte de la administración de Rodrigo Borjas (1988-1992) la CONAIE presionó con éxito por los programas bilingües y, en 1988, el Gobierno estableció un Programa de Educación Bilingüe Intercultural que la CONAIE ayudaría a implementar (Zamosc, 1994). La CONAIE, sin embargo, también fue muy sensible a las organizaciones indígenas regionales y locales. Los miembros del altiplano querían que la CONAIE luchara por las cuestiones de la tierra, que implicaba tomar una postura más polémica hacia el Gobierno.

referencial y multiplicó sus demandas para incluir los intereses de otros grupos que estaban protestando. Debido a que los gobiernos se negaron a dar marcha atrás (a pesar de que a veces negociaron acuerdos solo para renegar de ellos) la CONAIE condujo movilizaciones que se tornaron expresamente políticas, exigiendo la renuncia de los presidentes implicados. Pasemos ahora a algunas de las campañas más importantes.

Además de la estabilización económica rigurosa, la Presidencia de Sixto Durán (1992-1996) prosiguió un programa de ajuste estructural económico agresivo que incluía reducciones arancelarias escarpadas, liberalización del mercado financiero, del mercado de capitales y de la inversión extranjera, privatización de empresas estatales y una reforma agraria a favor de la agroindustria (García, 2003: 87-88; Norte, 2004). El detonante, del ciclo de movilización conducido por la CONAIE que siguió, fue el intento de Durán de sancionar a través de la legislatura una ley habilitante que le daría rienda suelta para implementar su plan de modernización.[8]

Entre 1993 y 1995, los sindicatos del sector público y privado, una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil y la CONAIE realizaron numerosas protestas que alcanzaron un crescendo a mediados de 1994, cuando la CONAIE organizó un Segundo Levantamiento Indígena en reacción a la aprobación apresurada de una ley de desarrollo agrario que favorecería al sector agroindustrial. Esta fue una gran "Movilización por la Vida" de los pueblos indígenas de las tierras altas y bajas. Las demandas centrales seguían siendo las mismas que en 1990, pero definidas con más claridad (CONAIE, 1994). Para abarcar a otros grupos de protesta, el encuadre de la CONAIE subrayó la amenaza unánime del neoliberalismo a todos los sectores populares, un peligro que requería una respuesta solidaria. La CONAIE también exigió un referéndum para convocar a una Asamblea Constituyente. En medio de crecientes tensiones diplomáticas con Perú, el gobierno finalmente negoció con los manifestantes y ofreció concesiones pertinentes a la reforma agraria, crédito a los campesinos y acceso a los derechos de agua (Silva, 2009).

El sucesor de Durán, Abdalá Bucaram, renegó de estas concesiones y propuso seguir con el programa neoliberal original de Durán, añadiéndole una vuelta de tuerca: dolarizar por completo la economía mediante la utilización del dólar como moneda nacional. Esto requeriría un tipo programa de estabilización fiscal estilo "terapia de *shock*". La CONAIE, los sindicatos y un frente amplio de la sociedad

8 Para aprobar una ley habilitante, un congreso delega temporalmente la capacidad legislativa a la rama ejecutiva.

civil se movilizaron a principios de 1997. El ciclo de contención antineoliberal que siguió exigió la destitución de Bucaram. Bucaram duró apenas 6 meses en el cargo (de agosto de 1996 a febrero de 1997) puesto que el establishment político y gran parte del sector privado también se volvieron contra él. El gobierno provisional que lo sucedió accedió a una Asamblea Constituyente. Para la CONAIE, los resultados fueron mixtos. Los pueblos indígenas obtuvieron muchos derechos relacionados con temas culturales, étnicos y administrativos locales. Sin embargo, el núcleo socioeconómico de la plataforma de la CONAIE fue derrotado. La privatización, y por lo tanto la expansión de los agronegocios, se reafirmó y las demandas para la participación del sector popular (es decir, la CONAIE) en la formulación de políticas no prosperaron (Silva, 2009).

El ciclo final de contención antineoliberal, en el que la CONAIE jugó un papel de liderazgo, resultó en el derrocamiento del presidente consecutivo de Ecuador, Jamil Mahuad (1998-2000). Mahuad comenzó su presidencia decidido a impulsar reformas neoliberales, una tarea que se hacía aún más urgente por la profunda crisis económica que suscitó políticas de estabilización económica de terapia de *shock* y una renovada determinación de dolarizar la economía. Estalló otro largo ciclo de movilización y la CONAIE organizó otro Levantamiento Indígena para darle fuerza decisiva. Pronto se estableció una dinámica en la cual Mahuad negociaba con la CONAIE y las otras organizaciones que protestaban, accedía a concesiones de las que luego renegaba, lo que provocaba un nuevo auge en el ciclo de protestas (Silva, 2009). Este esquema radicalizó a una facción de la CONAIE, que comenzó a creer que los pueblos indígenas no tendrían justicia en la democracia del Ecuador. Tomaron una postura golpista y, en el año 2000, apoyaron al coronel disidente Lucio Gutiérrez y a algunos oficiales de rango inferior en un golpe de Estado. Irrumpieron con éxito en el palacio presidencial y, después de que Mahuad huyera de la escena, establecieron un breve Gobierno de Salvación Nacional cívico-militar, que duró apenas 24 horas debido a que el alto mando militar negoció rápidamente un retorno democrático (Zamosc, 2007). La aventura golpista marcó el comienzo de un período de declive de la CONAIE y, entre otros problemas, contribuyó a la pérdida de su liderazgo en los sectores populares y la sociedad civil. Las credenciales democráticas de la CONAIE fueron cuestionadas y se generaron conflictos internos debilitantes. Estos problemas se profundizaron cuando la CONAIE respaldó la campaña presidencial de ex coronel Lucio Gutiérrez, que ganó a finales de 2002. Cuando asumió el cargo, los líderes de la CONAIE ascendieron a puestos importantes en el gabinete y otros nombramientos gubernamentales. Gutiérrez, sin

embargo, impulsó una política de "golpear y negociar". Durante la campaña impulsó una plataforma nacional populista, pero una vez en el poder cambió de bando e implementó programas de estabilización económica, desplegó un gobierno corrupto y nepotista, y manipuló las divisiones internas entre ECUARUNAI y CONFENIAE a su favor. Este contratiempo político debilitó aún más a la CONAIE. Así, cuando la sociedad civil se levantó para destituir a Gutiérrez, la CONAIE se movilizó pero no podía conducir, en lo más mínimo, porque sus dirigentes perdieron la confianza de sus bases en las comunidades, y ya no respondieron sus convocatorias a la movilización. Por otra parte, la población percibía a la CONAIE como un grupo de interés indigenista estrecho, cuyos líderes se centraban principalmente en obtener empleos gubernamentales (Wolff, 2007; Zamosc, 2007).

Durante el período neoliberal, la CONAIE exigió con insistencia que los gobiernos la reconozcan como representante de los pueblos indígenas ecuatorianos y que, como tal, la incluyan en el proceso de formulación de políticas. A tal fin, la CONAIE participó en la formación de un partido político en 1995 para que los pueblos indígenas pudieran tener a sus propios candidatos en cargos políticos. El Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik - Nuevo País tuvo un éxito moderado en los niveles nacional y local. Su participación en la Asamblea Constituyente de 1998 fue, acaso, su mejor momento (Andolina, 2003). Pachakutik se unió formalmente al Gobierno de Gutiérrez, pero sus ministros renunciaron después de que él cambiara de bandos y comenzara a aplicar las mismas políticas neoliberales que perjudicaron a las comunidades indígenas (Becker, 2011a).

Bolivia. El movimiento de los pueblos indígenas de Bolivia nunca construyó una confederación capaz de coordinar la acción como en el caso de Ecuador (Yashar, 2005). Aún así, sus organizaciones desempeñaron un papel destacado en los ciclos de contención antineoliberal que asolaron al país, especialmente a partir de mediados de los 90. Pasemos ahora a un examen de tres de los principales hitos en el desarrollo del movimiento y sus las campañas.

Cuando el período neoliberal de Bolivia se puso en marcha durante la presidencia de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989), la CSUTCB era la principal organización indígena en Bolivia, aunque como miembro de la COB estaba subordinada a los sindicatos de trabajadores mineros y a los sindicatos urbanos (Zegada et al., 2008). Los sindicatos, sin embargo, fueron incapaces de resistir de manera efectiva las agresivas reformas neoliberales. En este contexto, el éxito de las federaciones de cocaleros afiliados a la CSUTCB a finales de los 80 se convirtió en el primer hito en el ascenso de los movimientos de

los pueblos indígenas a un papel de liderazgo entre los sectores populares y los grupos subalternos en la resistencia al neoliberalismo. Fueron eficaces en la lucha contra las políticas de erradicación de coca patrocinadas por Estados Unidos y en obligar al gobierno a negociar con ellos. Las federaciones de coca utilizaron imágenes indigenistas y culturales de la resistencia que apelaban a los campesinos indígenas y a las organizaciones laborales urbanas. La coca se había convertido en un símbolo de la cultura indígena y de la resistencia nacional a la opresión externa en el frente económico (Silva, 2009).

Un segundo hito se produjo durante la primera presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) que implementó un programa económico, social y político neoliberal agresivo, cuando la CSUTCB, bajo el liderazgo de las federaciones de cocaleros, organizó una marcha por la Vida, la Coca y la Soberanía Nacional en 1994. Además de la defensa de la coca, las organizaciones de los sectores populares rurales y urbanos protestaron contra la privatización y las políticas favorables al agronegocio. Marcharon por el restablecimiento del apoyo a la agricultura campesina. Un signo del liderazgo creciente de la Federación de cocaleros fue el hecho de que la movilización de sindicatos y otros grupos se agostó una vez que el gobierno concedió la principal demanda de los productores de coca: el compromiso para poner fin a la erradicación forzosa de la planta (Pinto Ocampo, 2004). La campaña culminó en 1996, con las negociaciones sobre una ley de reforma agraria de inspiración neoliberal. Los indígenas del altiplano obtuvieron protecciones contra la usurpación de tierras, cuando lograron garantizar el acuerdo según el cual la Superintendencia agraria no tendría autoridad para regular sobre las cuestiones de la tenencia de la tierra. Los indígenas de las tierras bajas tuvieron una victoria aún más significativa. La legislación reconoció la propiedad comunal, que era mucho más frecuente en la Amazonía (Silva, 2009).

La guerra del agua de Cochabamba, en el año 2000, se ha convertido en un icono de la contención antineoliberal en Bolivia. Aunque no fue liderada por los principales movimientos indígenas nacionales en sí, tuvieron un papel importante en ella. La disputa contra la privatización del agua involucró a una coalición policlasista y multiétnica, y muchas de las organizaciones locales en las pequeñas comunidades cerca de Cochabamba y en los barrios de la ciudad estaban controladas por los pueblos indígenas (Olivera y Lewis, 2004; Assies, 2003). La lucha fue feroz y épica. Al final, las obras de agua de Cochabamba no se privatizaron. Las organizaciones de los movimientos indígenas, como la CSUTCB, desempeñaron un papel trascendente en la movilización. La CSUTCB colocó los derechos de

agua en su lista de reclamos y se movilizó en La Paz, paralizando la capital y ampliando la lucha del nivel local al nacional para, finalmente, copar también los departamentos de Oruru y Tarija.

La guerra del gas de 2003 marcó el apogeo de los ciclos de contención antineoliberal en Bolivia. Los movimientos de los pueblos indígenas, especialmente la CSUTCB, desempeñaron un papel destacado en ella. La guerra del gas comenzó cuando Gonzalo Sánchez de Lozada, en su segunda presidencia, les ofreció bajos impuestos a las empresas internacionales para ampliar el campo de explotación de gas y exportar gas natural a California. Esto culminó con su renuncia ese mismo año. A partir de febrero de 2003, la CSUTCB se movilizó contra los planes del gobierno alegando que se le estaba regalando a los extranjeros un recurso natural muy valioso, en lugar de ser utilizado para el desarrollo nacional (Crabtree, 2005). Las organizaciones barriales de la estratégica ciudad de El Alto que se cierne sobre La Paz se sumaron, como así también lo hicieron los sindicatos locales. El Alto tiene una población predominantemente indígena, muchos de ellos nuevos migrantes del campo, y respondieron a la convocatoria de la CSUTCB (Lazar, 2008). Luego de una serie de enfrentamientos feroces en febrero y octubre, que implicaron a una amplia coalición policlasista y multiétnica, Sánchez de Lozada fue obligado a renunciar y las concesiones de gas fueron suspendidas (Assies, 2004; Kohl y Farthing, 2006).

Como en Ecuador, el movimiento de pueblos indígenas formó un partido político, el Movimiento al Socialismo (MAS) (Harten, 2011; Zuazo, 2009). Fue organizado entre líneas sindicales campesinas-CSUTCB. A diferencia de Pachakutik en Ecuador, este fue un partido policlasista y multiétnico que apeló, así, a un electorado más grande. Su candidato, Evo Morales, de extracción indígena, líder de las federaciones de cocaleros tuvo un segundo lugar ajustado en las elecciones presidenciales del 2002. El MAS ayudó a organizar una movilización masiva durante la guerra del gas.

La guerra del gas tuvo resultados significativos. El Gobierno provisional de Carlos Mesa abandonó la política de su predecesor, que privilegiaba la concesión a empresas internacionales. En el mismo orden de importancia, se estableció la agenda para un futuro gobierno del MAS, conocida como la agenda de octubre. Sus principales ejes fueron el compromiso de nacionalizar el gas para financiar el desarrollo económico con equidad social dirigido por el Estado; establecer una Asamblea Constituyente para sentar las bases legales para la recuperación de la soberanía nacional ante la globalización; la reforma agraria para llevar justicia social al campo; y juicios a los políticos delincuentes.

POSNEOLIBERALISMO

Los ciclos de movilización antineoliberal liderados por los pueblos indígenas en Bolivia y Ecuador contribuyeron a la elección de gobiernos de izquierda en ambos países, a mediados de los años 2000. Estos gobiernos, alrededor de su primer año, desempeñaron un papel importante en asegurar o reforzar los derechos de sus pueblos en las Asambleas Constituyentes, encargadas de la recomposición del Estado nación y su relación con los ciudadanos.[9] Después de eso, sin embargo, los caminos de los movimientos de los pueblos indígenas en Bolivia y Ecuador divergieron profundamente, en especial en relación a los gobiernos de izquierda y el Estado. En Bolivia, vemos una mezcla cambiante de cooperación y confrontación del 2006 a la actualidad. En Ecuador, parece dominar la confrontación. En ambos países, gran parte del conflicto se remonta al auge de los *commodities* que se inició en los años 2000. Eso ha fomentado la intensificación de la explotación de los recursos naturales renovables y no renovables, que ha provocado numerosas protestas defensivas contra los megaproyectos de desarrollo. En resumen, creo que es justo decir que, en ambos casos, los movimientos de los pueblos Indígenas se han debilitado de los picos que habían logrado durante los ciclos de movilización antineoliberal, aunque el deterioro parece ser más pronunciado en el Ecuador.

LOS MOVIMIENTOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LAS ASAMBLEAS CONSTITUYENTES EN BOLIVIA Y ECUADOR

En Bolivia, el partido que ganó la Presidencia con Evo Morales en 2006, el MAS, incluyó importantes organizaciones indígenas del altiplano. Al principio de su gobierno, las principales organizaciones del movimiento social indígena formaron un Pacto de Unidad (Silva, 2013). El Pacto de Unidad trabajó estrechamente con los representantes del MAS en la Asamblea Constituyente. Ellos aseguraron que en la nueva Constitución se declarara a Bolivia como Estado Plurinacional, en el que los pueblos indígenas tenían derecho a un territorio autónomo y que debían ser consultados para autorizar los proyectos de desarrollo en sus tierras. Se promovieron la descolonización y la interculturalidad. Los derechos económicos también recibieron estatus constitucional, incluyendo: salarios dignos, reforma agraria,

9 Las organizaciones del movimiento desempeñaron un papel directo pues las cláusulas que redactaron se incluyeron en la nueva Constitución. En otras ocasiones, su efecto fue mediado por los delegados del MAS en la Asamblea Constituyente Para una revisión detallada de la conexión entre protesta y políticas, ver Silva (2013a). Para la participación de los pueblos indígenas en esas asambleas, ver Garcés (2010) y Becker (2011a, 2011b).

soberanía alimentaria, salud y seguridad social (Garcés, 2010). Los movimientos de los pueblos indígenas, especialmente la CSUTCB, se movilizaron para defender el Gobierno de Evo Morales y el proceso de cambio constitucional de la oposición cuasi insurreccional y secesionista de los departamentos de tierras bajas –llamados Media Luna– liderados por el departamento de Santa Cruz, que se habían hecho ricos como resultado de la expansión violenta de los agronegocios.

En Ecuador, el Gobierno de la "revolución ciudadana" de Rafael Correa tuvo una relación conflictiva con la principal confederación nacional indígena desde un principio, en gran parte por razones políticas (De la Torre, 2012). Sin embargo, la CONAIE, al trabajar con Pachakutik en la Asamblea Constituyente fue capaz de reafirmar y fortalecer las cláusulas fundamentales de los derechos indígenas que habían ganado en la Asamblea Constituyente de 1998 (Acosta, 2008). La nueva Constitución promueve la plurinacionalidad, la interculturalidad, la protección del medio ambiente y los derechos colectivos, como el compromiso con la soberanía alimentaria y los controles sobre la formación de grandes latifundios. Derechos económicos similares a los de Bolivia, también recibieron carácter constitucional (Becker, 2011b).

DERROTEROS DIVERGENTES

Bolivia. Las organizaciones del movimiento indígena en Bolivia desarrollaron dos vías paralelas en su relación con el Gobierno de Evo Morales, después de que la nueva Constitución fuera aprobada por referéndum nacional en 2009. La primera vía consiste, sobre todo, en relaciones de cooperación con la CSUTCB, cocaleros y grupos afines del altiplano, incluyendo a una organización feminista indígena, que formaban parte de la coalición de base del MAS (Silva, 2013b). Muchos de sus miembros han obtenido cargos en el Estado, en el Gobierno central y a nivel subnacional (desde ministros a personal administrativo), y han mantenido (y ganado) escaños del MAS en la nueva Asamblea Nacional y a nivel municipal (Do Alto y Stefanoni, 2010). Además, la CSUTCB y las otras principales organizaciones de movimientos sociales del MAS apoyan incondicionalmente el Gobierno de Evo Morales en cuestiones políticas controversiales, y organizaron contra-movimientos cuando los indígenas de las tierras bajas, los sindicatos urbanos y otros movimientos sociales se movilizaron en contra de determinadas políticas del gobierno después de 2009 (Zuazo, 2010).[10] La segunda vía consiste en relaciones conflic-

10 Estos desarrollos han generado quejas de que el movimiento indígena del altiplano ha sido cooptado por el Gobierno.

tivas con CIDOB y CONAMAQ, así como con los movimientos ambientales, en dos decisiones políticas fundamentales del Gobierno de Morales. Por un lado, el gobierno favoreció los proyectos de desarrollo de infraestructura y minería a gran escala, y esto requería sobrepasar los intereses de la comunidad local que a menudo están en contra de este tipo de proyectos. Por otro lado, se retrasó la implementación de las autonomías territoriales indígenas establecidas en la Constitución.

Estas tensiones culminaron en el conflicto sobre el Territorio Indígena Parque Nacional Isoboro Sécure (TIPNIS). El gobierno decidió construir un tramo de carretera pavimentada que conecta dos departamentos del país (así como Bolivia al Brasil) en un área protegida que reivindica la condición de territorio indígena autónomo. El Gobierno del MAS no consultó a las comunidades locales –aunque, legalmente, debería haberlo hecho– si aprobaban que la carretera pasara por su territorio. Esto unificó a CIDOB y CONAMAQ para defender los derechos de autonomía de los TIPNIS, y enfrentó a los colonos y cocaleros a la CIDOB en apoyo de la autopista (y de la preferencia del gobierno). En señal de protesta, la CIDOB y el CONAMQ con el apoyo de ambientalistas y ONG organizaron dos marchas de los pueblos indígenas desde las zonas afectadas a La Paz. La primera, impulsada en agosto de 2011, fue un éxito. Recibió un importante apoyo, la atención de los medios de comunicación y la administración desestimó el plan. Cuando la administración comenzó a dar marcha atrás, CIDOB y CONAMAQ impulsaron una segunda marcha que fue menos exitosa (Lanzara y Arias, 2010; Fundación, 2012; Calla, 2012). Mientras que los manifestantes estaban acampados frente a la Casa de Gobierno, las facciones disidentes de CIDOB organizaron una elección en Santa Cruz para reemplazar al máximo dirigente que, junto con la mayoría de los líderes que lo respaldaban, estaba en La Paz con los manifestantes. Como corresponde, eligieron a una Directora Ejecutiva y la CIDOB se dividió (Silva, 2013). Después de mucho ir y venir sobre la conveniencia de permitir que se construya la autopista, en el 2013 la administración de Morales decidió a suspender la construcción hasta que todas las controversias pendientes fueran resueltas.

Ecuador. Hay dos razones principales para las tensiones entre el Gobierno de Rafael Correa y la CONAIE. En primer lugar, la CONAIE fue una simpatizante tardía de su candidatura a la Presidencia. En reacción a sus desventuras políticas con Gutiérrez, CONAIE/Pachakutik decidieron impulsar su propio candidato a la Presidencia en 2006, con resultados vergonzosamente magros. Solo entonces, la CONAIE apoyó a regañadientes a Correa en la segunda ronda de

votación (Larrea, 2009). En segundo lugar, Correa y su círculo interno creían que los grupos de interés estrechos eran un obstáculo para la realización de políticas acertadas para el bien común, y pensaban que la CONAIE era ese tipo de organización. Por lo tanto, a la CONAIE no se le permitió desempeñar un rol importante en el proceso político ni cogobernar con el Estado en asuntos relacionados directamente con los intereses de las naciones indígenas. La CONAIE se encontraba en una mala posición para presionar por su más caro interés, tener un rol importante en la formulación de políticas. Sus desventuras políticas la habían dejado dividida internamente y había perdido bastante legitimidad en el escenario político nacional (Martínez Abarca, 2011).

Los esfuerzos de la administración de Correa para romper la conexión entre la organización nacional y su base en las comunidades locales debilitó aún más a la CONAIE. El éxito de las organizaciones del movimiento social indígena nacional y regional dependía, en parte, de su rol de intermediarios entre las instituciones del Estado y las comunidades indígenas locales para obtener bienes, servicios y legislación para la comunidad. El Gobierno de Correa, sin embargo, decidió movilizar electoralmente a la ciudadanía alrededor de una agenda política, construida a partir de la acuñada por los movimientos sociales que habían liderado la resistencia al neoliberalismo. Así, en lo que atañe a los pueblos indígenas, el gobierno estableció una conexión directa con las organizaciones de base de la CONAIE –las comunidades indígenas mismas–, para brindar más bienes públicos como proyectos de infraestructura, instalaciones educativas, hospitalarias y otros beneficios (Tuaza, 2011; Muñoz Eraso, 2010).

Como en Bolivia, un compromiso con el desarrollo basado en la expansión de los recursos naturales ha iniciado nuevos conflictos con el movimiento social indígena y sus aliados en el movimiento ambiental (Becker, 2011a: 176-184; Martínez Abarca, 2011: 109-112). En el plano de la política nacional, el detonante ha sido el destino del Parque Nacional Yasuní. Se trata de un área protegida habitada por pueblos indígenas, asentada en la cima de importantes reservas de petróleo. Las comunidades locales no quieren el desarrollo petrolero, habida cuenta de la desastrosa experiencia con los Shuar y otros pueblos de la Amazonia. En un principio, la administración de Correa se comprometió a no explotar las reservas. Pero en 2013 revirtió su decisión, y ahora propicia su desarrollo. Queda por verse si la CONAIE y otros movimientos sociales encuentran en esta decisión la oportunidad de revivir su capacidad para movilizar a su base y reconstruir su coordinación con una coalición heterogénea que se oponga al modelo de desarrollo del gobierno. La CONAIE, sus federaciones miembro y los ambientalistas podrían añadir conflictos sociales más localizados,

que han surgido debido a la necesidad del gobierno de aumentar las exportaciones de recursos naturales renovables y no renovables.

LOS MOVIMIENTOS INDÍGENAS Y EL DOBLE MOVIMIENTO DE LA SOCIEDAD CAPITALISTA DE KARL POLANYI

Este capítulo subraya que, a partir de los años 70 y 80 los movimientos sociales indígenas de Ecuador y Bolivia se organizaron con éxito en torno a la identidad cultural y los intereses materiales. Es necesario entender ambas corrientes inherentes a sus luchas, si queremos comprenderlas plenamente. El ensayo destaca que los movimientos de los pueblos indígenas en Ecuador y Bolivia desempeñaron un papel fundamental en los ciclos de movilización antineoliberal, desde los 90 hasta principios de los 2000, y que allanaron el camino a los gobiernos de izquierda que siguieron. Una vez que los gobiernos de izquierda estuvieron en el poder, el destino de los movimientos divergió agudamente –de la incorporación parcial de Evo Morales a la exclusión de las organizaciones del movimiento indígena nacional y regional en Ecuador.

Pero también vimos que hay similitudes en el destino de los movimientos de los pueblos indígenas en Bolivia y Ecuador posneoliberales. Para empezar, se han debilitado desde su auge durante la movilización antineoliberal. Los gobiernos de izquierda atendieron algunas de sus demandas materiales, culturales y políticas, desmovilizándolos parcialmente. Los gobiernos de izquierda, además, intervinieron en ellos directamente para reorganizar sus bases de apoyo sociopolítico. Asimismo, el modelo de desarrollo económico de los gobiernos de izquierda provocó conflictos porque se basaba en la intensificación de la extracción de los recursos naturales. Esto a menudo pone a las comunidades indígenas y sus aliados contra los megaproyectos respaldados por el gobierno.

¿Qué podrían significar las luchas antineoliberales y el desarrollo posneoliberal en los movimientos de los pueblos indígenas de Ecuador y Bolivia en un sentido histórico más amplio? Partiendo de Karl Polanyi (2001) podemos pensar en los movimientos de los pueblos indígenas, incluso en su actual declive relativo, como una nueva fuente de liderazgo de los movimientos contra la construcción de la sociedad de mercado. Polanyi argumenta que el capitalismo de libre mercado busca intensificar la comodificación de la tierra, el trabajo y el capital tanto como sea posible. En el proceso, busca subyugar la política y la sociedad a la utopía de una economía de mercado autorregulado, lo que significa que la política y la organización social deben blindar a los mecanismos de mercado de las fuerzas que pretenden distorsionarlos. Como sostiene Polanyi, tierra, trabajo y capital, sin embargo,

son más que *commodities*. También personifican las relaciones sociales y los medios de subsistencia que dan sentido y estabilidad a las vidas de los seres humanos. Por lo tanto, las personas naturalmente buscan protegerse de los mercados cuando éstos son demasiado intrusivos y perjudiciales para la vida cotidiana. Esta dinámica genera el doble movimiento de la sociedad capitalista. El capital intenta imponer la economía de mercado autorregulado y subordinar la política y la sociedad a él. Eso provoca la reacción natural de las personas para defenderse de la embestida del mercado.

Podemos pensar en el período neoliberal en América Latina como uno en el que hubo un intento de construir una forma contemporánea de sociedad de mercado, que exigía el desmantelamiento de la protección a los mercados fomentada por el populismo nacional y de los logros colectivos de los sectores populares organizados, principalmente los sindicatos. En este contexto, los movimientos de los pueblos indígenas de Ecuador y Bolivia se levantaron para liderar la lucha contra el neoliberalismo, porque a pesar del reconocimiento cultural que ofrecía el neoliberalismo, las amenazas materiales a los individuos y las comunidades –en forma de aumento de los precios, disminución de los subsidios al consumo y la producción, acaparamiento de tierras, disminución de los salarios, exclusión política, entre otras– fueron severas. Ese fue el sustrato que motivó la movilización extraordinaria de la época, aunque, por supuesto, intervinieron otros factores (Silva, 2009, 2012).[11]

Los movimientos de los pueblos indígenas se levantaron para liderar los contra-movimientos que enfrentan a la sociedad de mercado contemporánea, en parte porque la globalización neoliberal debilitó sustancialmente los sindicatos que habían liderado la movilización de sectores populares contra el régimen oligárquico en los años 50 y 60. Una vez que los gobiernos de izquierdas llegaron al poder y gobernaron con programas de izquierda que incluyen a la salud, la educación, la vivienda, la infraestructura, los ingresos, las necesidades agropecuarias y las demandas culturales, era natural que menguaran los movimientos (Tarrow, 2011). Muchas de sus demandas fueron satisfechas, aunque de forma selectiva. No obstante, es claro que los movimientos de los pueblos indígenas en Ecuador y Bolivia seguirán siendo actores sociales y políticos importantes, si es que no los principales, por un buen rato. Incluso en su condición limitada, poseen más energía asociativa que otras organizaciones de la sociedad civil.

---

11 Para una interpretación polanyiana de la movilización popular en Centroamérica, ver Paul Almeida (2007).

BIBLIOGRAFÍA

Acosta, A. 2008 *Bitácora Constituyente* (Quito: Abya Yala).

Almeida, PD. 2007 'Defensive mobilization: Popular movements against economic adjustment policies in Latin America' en *Latin American Perspectives*, *34*(3): 123-139.

Andolina, R. J. 2003 'The Sovereign and its Shadow: Constituent Assembly and Indigenous Movement in Ecuador' en *Journal of Latin American Studies*, *35*: 721-750.

Assies, W. 2003 'David versus Goliath in Cochabamba: Water rights, Neoliberalism and the Revival of Social Protest in Bolivia' en *Latin American Perspectives*, *30*(3): 14-36.

Assies, W. 2004 Bolivia: A Gasified Economy. *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, *76*: 25-43, abril.

Becker, M. 2011a *¡Pachakutik! Indigenous Movements and Electoral Politics in Ecuador* (Nueva York: Rowman & Littlefield).

Becker, M. 2011b 'Correa, Indigenous Movements, and the Writing of a New Constitution in Ecuador' en *Latin American Perspectives*, *38*(1): 47-62.

Benavides, H. 2004 *Making Ecuadorian Histories: Four Centuries of Defining Power* (Austin: University of Texas Press).

Calla, R. 2012 "TIPNIS y Amazonía: Contradicciones en la agenda ecológica de Bolivia" en *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, *92*: 77-83, abril.

Collier, R. B. y Collier D. 1991 *Shaping the Political Arena* (Princeton: Princeton University Press).

CONAIE 1994 "Mandato de la Movilización por la Vida", Asamblea Extraordinaria de la CONAIE, Riobamba, 7 a 8 de junio. En <http://abyayala.nativeweb.org/ec.> Acceso 27 de junio de 2008.

Crabtree, J. 2005 *Patterns of Protest: Politics and Social Transformation in Bolivia* (Londres: Latin America Bureau).

De la Torre, C. 2012 'Rafael Correa's Government, Social Movements, and Civil Society in Ecuador' en Cannon, B. y Kirby, P. (eds.) *Civil society and the State in Left-Led Latin America: Challenges and Limitations to Democratization* (Londres: Zed Books) pp. 48-62.

Do Alto, H., y Stafanoni, P. 2010 "El MAS: Las ambivalencias de la democracia corporativa" en Orellana, L. A. G. y Yapur, F. L. G. (eds.) *Mutaciones del campo político* (La Paz: UNDP).

Fundación T. 2012 *Marcha indígena por el TIPNIS: La lucha en defensa de los territorios* (La Paz: Fundación Tierra).

Garcés, F. 2010 *El Pacto de Unidad y el proceso de construcción de una propuesta de constitución política de Estado: Sistematización de una experiencia* (La Paz: Centro Cooperativo Sueco).

García-Serrano, F. 2003 "Política, Estado y Diversidad Cultural: A propósito del Movimiento Indígena Ecuatoriano" en Bretón, V. y García, F. (eds.) *Estado, Etnicidad y Movimientos Sociales en América Latina* (Barcelona: Icaria).

Gerlach, A. 2003 *Indians, Oil, and Politics: A Recent History of Ecuador* (Wilmington: Scholarly Resources, Inc.).

Goldstone, J. (ed.) 2003 *States, Parties, and Social Movements: Protest and the Dynamics of Institutional Change* (Cambridge: Cambridge University Press).

Guerrero, A. 1993 "De sujetos indios a ciudadanos étnicos" en Adrianzén, A. et al. (eds.) *Democracia, Etnicidad y Violencia Política en los Países Andinos* (Lima: IEP Ediciones / Instituto Francés de Estudios Andinos).

Harten, S. 2011 *The Rise of Evo Morales and the MAS* (Nueva York: Zed Books).

Healy, K. y Paulson, S. 2000 'Political Economies of Identity in Bolivia, 1952-1998' en *The Journal of Latin American Anthropology*, *5*(2): 2-29.

Hurtado, O. 1980 *Political Power in Ecuador* (Albuquerque: University of New Mexico Press).

Isaacs, A. 1993 *Military Rule and Transition in Ecuador, 1972-92* (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press).

Klein, H. 2003 *A Concise History of Bolivia* (Cambridge: Cambridge University Press).

Kohl, B. y Farthing, L. (eds.) 2006 *Impasse in Bolivia: Neoliberal Hegemony and Popular Resistance* (Londres: Zed Books).

Lanzara, G. y Arias B. 2010 *Represa Cachuela Esperanza: Posibles consecuencias socioeconómicas y ambientales de su construcción* (La Paz: Editorial CIPCA).

Larrea, G. 2009 *La Revolución Ciudadana* (Quito: Planeta).

Lazar, S. 2008 *El Alto, Rebel City: Self and Citizenship in Andean Bolivia* (Durham: Duke University Press).

Martínez Abarca, M. 2011 *El Cascabel del Gatopardo: La revolución ciudadana y su relación con el movimiento indígena* (Quito: FLACSO / Abya Yala).

Muñoz Eraso, J. P. 2010 "Gabinetes itinerantes, enlaces ciudadanos y consejos comunales" en *Ecuador Debate 80*, agosto.

North, L. L. 2004 'State Building, State Dismantling, and Financial Crisis in Ecuador' en Burt, J. M. y Mauceri, P. (eds.) *Politics in the Andes: Identity, Conflict, and Reform* (Pittsburg: University of Pittsburgh Press).

Olivera, O. y Lewis, T. 2004 Cochabamba: Water War in Bolivia (Cambridge: Southend Press).

Pallares, A. 2002 *From Peasant Struggles to Indian Resistance: The Ecuadorian Andes in the Late Twenti eth Century* (Norman: University of Oklahoma Press).

Pinto Ocampo, M. T. 2004 "Entre la Represión y la Concertación: Los Cocaleros en el Chapare y en el Putumayo" en *Informe Final del Concurso: Movimientos Sociales y Nuevos Conflictos en América Latina y el Caribe* (Buenos Aires: CLACSO-Programa Regional de Becas).

Polanyi, K. 2001 *The Great Transformation* (Boston: Beacon Press).

Schodt, D. W. 1987 *Ecuador: An Andean Enigma* (Boulder: Westview Press).

Selveston-Scher, M. 2001 *Ethnopolitics in Ecuador: Indigenous Rights and the Strengthening of Democracy* (Coral Gables: North-South Center Press).

Silva, E. 2009 *Challenging Neoliberalism in Latin America* (Cambridge: Cambridge University Press).

Silva, E. 2012 'Exchange Rising? Karl Polanyi and Contentious Politics in Latin America' en *Latin American Politics and Society*, *54*(3): 1-32.

Silva, E. 2013a 'Protest and Policy Change', Paper presented at the *American Political Science Convention*, Chicago, Illinois, 29-31.

Silva, E. 2013b 'Social Movements, Policy, and Conflict in Post-Neoliberal Latin America: Bolivia in the Time of Evo Morales' en *Research in Political Sociology*, *21*: 51-76.

Stern, S. J. (ed.) 1987 *Resistance, Rebellion, and Consciousness in the Andean Peasant World, 18th to 20th Centuries* (Madison: University of Wisconsin Press).

Tarrow, S. 2011 *Power in Movement* (Nueva York: Cambridge University Press) 4° edición .

Ticona, E. 2000 *Organización y Liderazgo Aymara, 1979-1996* (La Paz: Universidad de la Cordillera, AGRUCO).

Tuaza, L. 2011 "La relación del Gobierno de Correa y las bases indígenas: Políticas públicas en el medio rural" en *Ecuador Debate 83*, agosto.

Van Cott, D. L. 2005 *From Movements to Parties in Latin America: The Evolution of Ethnic Politics* (Nueva York: Cambridge University Press).

Wolff, J. 2007 '(De)Mobilizing the Marginalized: A comparison of the Argentine *Piqueteros* and Ecuador's Indigenous Movement' en *Journal of Latin American Studies*, *39*(1): 1-29.

Yashar, D. 2005 *Contesting Citizenship in Latin America: Indigenous Movements and the Post-liberal Challenge* (Nueva York: Cambridge University Press).

Zamosc, L. 1994 'Agrarian Protest and the Indian Movement in the Ecuadorian Highlands' en *Latin American Research Review 29*(3): 37-68.

Zamosc, L. 2004 'The Indian Movement in Ecuador: From Politics of Influence to Politics of Power' en Postero, N. G. y Zamosc L. (eds.) *The Struggle for Indigenous Rights in Latin America* (Brighton: Sussex Academic Press).

Zamosc, L. 2007 'The Indian Movement and Political Democracy in Ecuador' en *Latin American Politcs and Society*, *49*(3): 1-34.

Zegada, M. T.; Tórrez, Y. F. y Cámara, G. 2008 *Movimientos sociales en tiempos de poder: articulaciones y campos de conflicto en el gobierno del MAS* (La Paz: Plural Editores).

Zuazo, M. 2009 *Cómo nació el MAS: La ruralización de la política en Bolivia* (La Paz: FES-ILDIS).

Zuazo, M. 2010 "¿Los movimientos sociales en el poder? El gobierno del MAS en Bolivia" en *Nueva Sociedad*, N° 227: 120-135, mayo-junio.

CÓMO CITAR ESTA PUBLICACIÓN:
Silva, Eduardo. 2017. "Desarrollos, políticas y movimientos de los pueblos indígenas en Ecuador y Bolivia" Pp. 237-260 en Paul Almeida y Allen Cordero Ulate, Eds., *Movimientos Sociales en América Latina: Perspectivas, Tendencias y Casos*. Buenos Aires: CLACSO.

11

María Inclán*

OPORTUNIDADES COMO PUERTAS CORREDIZAS: LOS ZAPATISTAS Y SU CICLO DE PROTESTAS**

INTRODUCCIÓN

El surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha sido ampliamente documentado y estudiado por académicos que intentan descubrir y explicar qué fue lo que condujo a los indígenas mayas de Chiapas a tomar las armas en 1994. El abundante corpus bibliográfico resultante apunta al declive de las condiciones económicas en la región debido a las reformas neoliberales implementadas desde mediados de la década del 80 (Collier y Quaratiello, 1994; Estrada, 2005; Harvey, 1998; Legorreta, 1998; Leyva, 2005). Pero en esa literatura también se citan las privaciones que, durante generaciones, padecieron estos campesinos desde la época colonial (Benjamin, 1996; Higgins, 2004; Viqueira y Ruz, 1995). El presente estudio no intenta explicar el surgimiento del movimiento zapatista. En cambio, analiza las condiciones en las cuales se desarrolló su ciclo de protesta desde que el EZLN apareció públicamente por primera vez en 1994, hasta 2003,

* División de Estudios Políticos, Centro de Investigación y Docencia Económicas, México D.F., México.

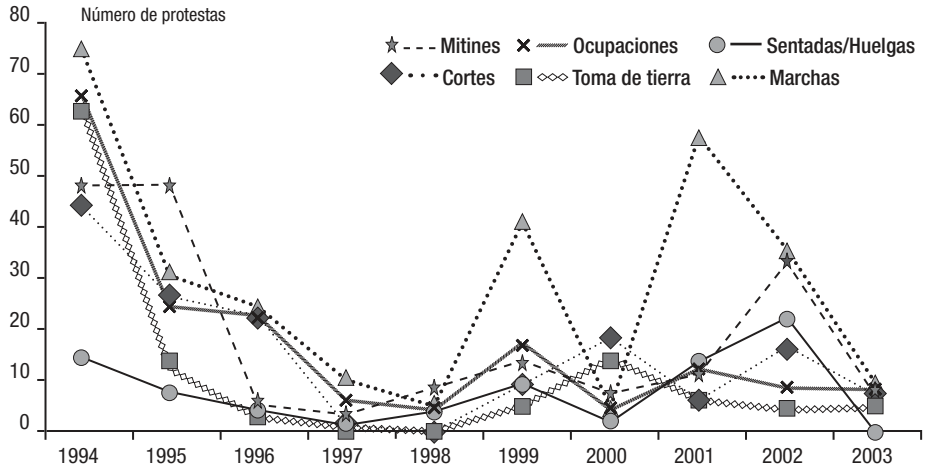
** Versiones anteriores de este capitulo fueron publicado como: "Oportunidades políticas como puertas corredizas: los zapatistas y su ciclo de protesta" *Estudios Sociológicos* Vol. 29, No. 87 (septiembre-diciembre 2011), pp. 795-831 y "Sliding Doors of Opportunity: Zapatistas and Their Cycle of Protest." *Mobilization: An International Quarterly*: February 2009, Vol. 14, No. 1, pp. 85-106.

cuando los zapatistas abandonaron su estrategia de protesta y concentraron sus esfuerzos en establecer una estructura para la gestión autónoma. En particular, este estudio examina cuatro factores para determinar si sirvieron como oportunidades para el ciclo de protesta zapatista. Los factores evaluados son: las aperturas electorales, en los niveles local y nacional; la presencia de un aliado político potencial en el poder; la capacidad del Estado mexicano para reprimir; y, la internacionalización del movimiento. Dado que el movimiento zapatista se desarrolló durante la transición mexicana a políticas electorales más competitivas, estudiarlo ofrece la oportunidad de examinar el enfoque de oportunidad política en un entorno político cambiante, mientras que brinda explicaciones sobre cómo se desarrolló el movimiento zapatista cuando estas condiciones cambiantes resultaron no ser oportunidades para impulsar la causa zapatista en el Estado mexicano.

Este estudio contribuye a la literatura comparada sobre movimientos sociales de tres maneras. Primero, al indagar cómo las aperturas electorales pueden devenir en oportunidades o escollos para el movimiento social aporta a la abundante bibliografía que utiliza el enfoque de oportunidades políticas en los movimientos sociales en países en vías de desarrollo y con gobiernos autoritarios (Einwohner, 2003; Kurzman, 1996; Loveman, 1998; Noonan, 1995; Oberschall, 1996; Rasler, 1996; Zdravomyslova, 1996). Segundo, al examinar las oportunidades en tres niveles diferentes –local, nacional e internacional– se ofrece un minucioso análisis comparativo de los efectos relativos de esas condiciones sobre el ciclo de protesta de un movimiento. Tercero, este estudio presenta un análisis cuantitativo sistemático de las protestas zapatistas. Este estudio analiza los efectos de los factores políticos locales, nacionales e internacionales como oportunidades en el desarrollo del ciclo de protesta zapatista, utilizando un modelo transversal de relevo de eventos en series de tiempo. Por lo tanto, el estudio incorpora y elabora muchos de los argumentos planteados por análisis cualitativos sobre el movimiento zapatista. Esas investigaciones han examinado tres temas principales: las complejidades del conflicto en Chiapas (Collier y Quaratiello, 1994; Harvey, 1998; Legorreta, 1998; Leyva y Ascencio, 1996; Mattiace, 1997; Stephen, 2002; Viqueira y Ruz, 1995); el rol del movimiento en la transición democrática mexicana (García de León, 2005); y la importancia de las ONG transnacionales y los medios de comunicación electrónicos en la internacionalización del movimiento zapatista (Bruhn, 1999; Castells, 1997; Collier y Collier, 2005; Hellman, 1999; Moksnes, 2005; Rus, 1995; Schulz, 1998).

La primera sección resume el desarrollo del movimiento zapatista desde del levantamiento del EZLN en 1994 hasta 2003, cuando

Gráfica 11.1
Ciclo de protesta zapatista en Chiapas, 1994-2003



Fuente: Codificación de las protestas a partir de los reportes de protestas informados en *La Jornada*.

los zapatistas establecieron oficialmente sus fuentes autónomas de autoridad, las cinco Juntas de Buen Gobierno. La segunda sección presenta las hipótesis de las oportunidades políticas aplicables al estudio del ciclo de protesta zapatista. En la tercera sección se discuten los datos y los métodos, y la sección final presenta los hallazgos del estudio y sus contribuciones a la literatura de las estructuras de las oportunidades políticas en general y del movimiento zapatista en particular.

EL CICLO DE PROTESTA ZAPATISTA DE 1994 A 2003

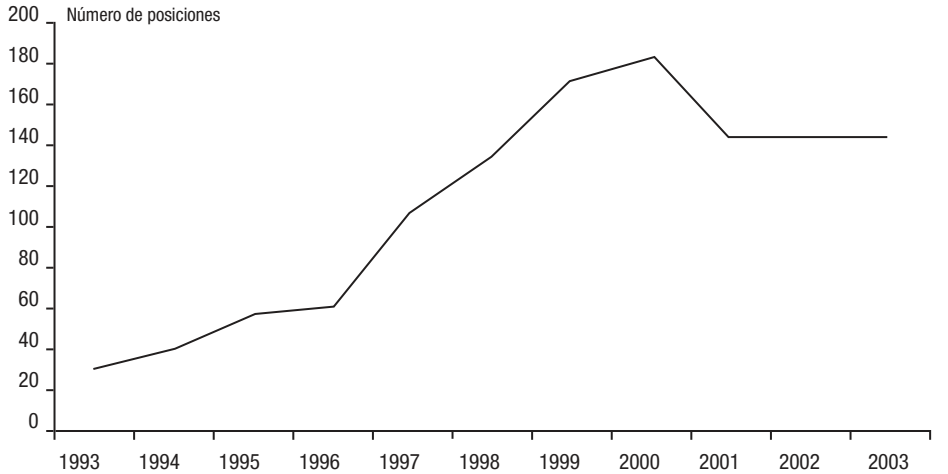
Este ciclo de protesta emergió inmediatamente después de que el EZLN y el Ejército mexicano acordaran el cese de los enfrentamientos, declarado por el Gobierno mexicano el 12 de enero de 1994. Las imágenes de guerra entre las dos fuerzas desiguales transmitidas por la televisión e internet escandalizaron al público dentro y fuera de México, y generaron demostraciones masivas que demandaban el fin de las hostilidades contra el grupo guerrillero precariamente armado. Aunque estas rápidas respuestas tuvieron lugar fuera de la región del conflicto a partir del alto al fuego, los simpatizantes zapatistas comenzaron a manifestar en Chiapas a pesar del férreo cordón militar alrededor de sus cuarteles y refugios. La Gráfica 11.1 muestra la distribución de las protestas en Chiapas.

Las protestas tuvieron distintas formas desde huelgas, sentadas, marchas y cortes de ruta a mítines, ocupaciones de edificios y tierras. Dado que el reclamo de tierras era una de las demandas más importantes, si es que no la principal causa del levantamiento zapatista, las ocupaciones de tierras se sucedieron durante y después de los levantamientos. Hubo más de 1.700 ocupaciones de tierras en reclamo de 148 mil hectáreas, dentro y fuera de la región de conflicto (ver Villafuerte et al., 1999). Las primeras ocupaciones de tierras ocurrieron en esa región, en lo que ahora se considera el territorio zapatista. Sin embargo, no todas las ocupaciones de tierras fueron impulsadas por los zapatistas. Otras organizaciones campesinas también sacaron ventaja del caos para conseguir tierras para sus miembros. Subsiguientemente, las ocupaciones de tierras disminuyeron tras llegar a un acuerdo para resolver el conflicto, que fue firmado *a posteriori* entre los representantes del gobierno, los latifundistas afectados y los campesinos invasores (Villafuerte et al., 1999). Los zapatistas, entonces, volvieron a protestar mediante marchas, asambleas, cortes de ruta y ocupaciones de edificios públicos. La mayoría de las asambleas fueron en apoyo del diálogo pacifista entre el EZLN y el Gobierno mexicano, que tuvo lugar de 1994 a 1996. Estos encuentros buscaban generar propuestas para resolver conflictos y presionar al gobierno para que diera lugar a las demandas zapatistas. Los cortes de ruta, las marchas y las ocupaciones de edificios surgieron de los conflictos tras las elecciones locales y nacionales de 1994, 1997, 2000 y 2003; y estaban dirigidos contra las autoridades locales y estatales implicadas en fraudes o que no cumplieron sus promesas de campaña al asumir sus cargos.

En septiembre de 1996, el diálogo entre el EZLN y la delegación federal se congeló, a partir de que el Presidente Ernesto Zedillo no quisiera reconocer los Acuerdos de San Andrés que habían sido firmados en febrero y garantizaban derechos autónomos a los pueblos indígenas de México. Entonces, el EZLN optó por lanzar una campaña de resistencia usando diversas tácticas, entre ellas el silencio de parte del vocero del EZLN, el Subcomandante Marcos, el rechazo a todo programa estatal que fuera considerado como estrategia contrainsurgente y la cesación de pagos por servicios públicos como, por ejemplo, la electricidad.[1] El voto de silencio zapatista redujo el ciclo de protesta a su punto mínimo en 1997. Para entonces, la presencia militar en la región había aumentado significativamente (ver

1 Entrevista personal con un miembro del Centro de Capacitación para el Autodesarrollo de los Pueblos Indígenas en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, febrero de 2003.

Gráfica 11.2
Posiciones militares en Chiapas, 1994-2003



Fuente: Global Exchange y CIEPAC (1999).

la Gráfica 11.2; y también, Global Exchange y CIEPAC, 1999). Mientras tanto, las tensiones entre las comunidades a favor y en contra de los zapatistas se intensificaron debido al hostigamiento de las autoridades locales en contra de la campaña de resistencia zapatista, que inadvertidamente aisló a las comunidades disidentes. La decisión de las comunidades anti-zapatistas de tomar las armas, también contribuyo a intensificar la tensión (Hirales, 1998). Las tensiones escalaron tanto en la región Norte como en Los Altos. El 22 de diciembre de 1997, un grupo anti-zapatista masacró a 45 personas en el pueblo de Acteal, Chenalhó. El Gobierno nacional respondió enviando más tropas a la región para mantener el orden y contener la violencia y las protestas. Aunque la presencia militar ayudó a contener la violencia, las protestas se desencadenaron nuevamente, esta vez en demanda del reconocimiento de los Acuerdos de San Andrés y el retiro de las tropas de la región.

Una serie de protestas se sucedieron luego de la victoria en el año 2000 de Vicente Fox, el primer candidato presidencial que no pertenecía al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que había gobernado en México desde 1929. La victoria de Fox trajo nuevas esperanzas al movimiento zapatista, porque había prometido durante su campaña presidencial resolver el conflicto de Chiapas, respetar los Acuerdos de San Andrés y enviar al Congreso mexicano la Ley de Derechos y

Cultura Indígenas (Ley COCOPA), que había sido redactada después de los Acuerdos en 1996 por la Comisión de Concordia y Pacificación.

El EZLN respondió positivamente a la propuesta de retomar el diálogo interrumpido, pero puso otras dos condiciones: el retiro de siete de las posiciones militares que rodeaban el territorio zapatista y la liberación de todos los prisioneros zapatistas (Subcomandante Marcos, 2000). Cuando asumió el poder, el Presidente Fox retiró al ejército de las siete posiciones que rodeaban los cuarteles del EZLN en la Selva Lacandona y algunos retenes situados en diferentes puntos del estado de Chiapas, envió la Ley de Derechos y Cultura Indígenas al Congreso y liberó a todos los prisioneros zapatistas que no estuvieran imputados en causas penales.[2] Las protestas continuaron en apoyo a la Ley de Derechos y Cultura Indígenas, pero el ciclo de protesta zapatista perdió fulgor en 2001, luego de que el Congreso mexicano aprobara una versión diluida de la Ley. Sintiéndose traicionados nuevamente por el Gobierno mexicano, los zapatistas dirigieron sus esfuerzos a establecer sus propias autoridades autónomas, las Juntas de Buen Gobierno, en sus cinco capitales regionales, los Caracoles.

Entretanto, se implementaron varias reformas electorales de los 90 para garantizar la equidad y la transparencia de estos procesos. Estas reformas aseguraban que los procesos electorales y los resultados serían considerados libres y transparentes, y aceleraron el triunfo de la oposición en todos los niveles de gobierno. En 1997, el PRI perdió la mayoría absoluta en el Congreso por primera vez desde 1929. Antes del levantamiento zapatista, el PRI controlaba el 64,2% de los curules en la Cámara de Diputados, el derechista Partido Acción Nacional (PAN) tenía un 18% y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) un 8%. En 1997, el PRI retuvo solo un 47,8% de escaños, mientras que el PAN aumentó a 24,2% y el PRD a 25%. Para las elecciones del año 2000, el PRI había perdido aún más terreno, ganando únicamente 42%, mientras que el PAN logró un 42,2% y el PRD 10%. En 2003, el PRI se recuperó un poco al ganar 44,8%, mientras que el PAN retuvo un 30,2% y el PRD 19,4% (IFE, 2003).

Como se destacó anteriormente, Vicente Fox del PAN ganó la presidencia en 2000 en lo que hoy se consideran las primeras elecciones presidenciales libres y justas en el país. Esas reformas electorales también iniciaron cambios a nivel local. En el caso de Chiapas, hasta 1994 solo 1 de las 111 localidades estaba bajo el gobierno del PAN. Todas las demás estaban bajo el dominio del PRI. Pero en las elecciones

2 Entrevista personal realizada en octubre de 2002 en la ciudad de México con el senador por Chiapas (PRD) y miembro de COCOPA (2000-2006).

de 1995, el PAN ganó 4 municipios, mientras que el PRD ganó 18. Para el año 2001, el PRI había perdido ante otros partidos un total de 46 municipios. Todos estos cambios pudieron haber sido percibidos por los simpatizantes de los zapatistas como oportunidades para movilizarse. En la próxima sección se contextualizan estos acontecimientos en el marco de la teoría de las oportunidades políticas, a fin de analizar cómo estas aperturas institucionales y especificas afectaron el ciclo de protesta zapatista.

LAS OPORTUNIDADES POLÍTICAS Y EL MOVIMIENTO ZAPATISTA

Las oportunidades políticas han sido definidas como las condiciones de poder institucional e informal que, al ser percibidas como oportunidades por los actores sociales, brindan incentivos para su acción colectiva (Meyer y Minkoff, 2004; Rootes, 2002; Tarrow, 1994). En 1973, Peter Eisinger acuñó el término *estructuras de oportunidad política* mientras estudiaba el comportamiento político contestatario en ciudades de los Estados Unidos. Su trabajo inicial sobre oportunidades políticas generó muchos más estudios, y el enfoque de las oportunidades políticas floreció. Algunos académicos examinaron cómo las oportunidades abiertas en regímenes democráticos occidentales sólidos fomentaron el surgimiento, el desarrollo y el éxito relativo de los movimientos sociales (Kitschelt, 1986; Kriesi *et al.*, 1992; 1995; Piven y Cloward, 1979; Rucht, 1996; Tarrow, 1994). Otros se enfocaron en cómo la falta de oportunidades políticas podía detonar movilizaciones en países con regímenes autoritarios y en sistemas políticos democráticos que continuaban cerrados a las demandas disidentes (Einwohner, 2003; Kurzman, 1996; Loveman, 1998; McAdam, 1982; Noonan, 1995; Rasler, 1996; Tarrow, 1989). Finalmente, algunos estudios han indagado las oportunidades políticas para la movilización social durante las transiciones democráticas (Foweraker y Craig, 1990; O'Donnell y Schmitter, 1986; Pickvance, 1995; Zdravomyslova, 1996).

Este estallido de estudios condujo a un gran desacuerdo sobre la definición y la estimación de la estructura de las oportunidades políticas. Algunos estudios han resaltado la influencia de las condiciones institucionales generales del sistema político como oportunidades, mientras que otros han enfatizado que las condiciones específicas pueden servir como oportunidades solo para determinados movimientos. Al definir tanto las condiciones generales como las específicas, los expertos han diferido aún más. Así, en 1996 se proclamó que el enfoque general estaba perdiendo su poder explicativo porque corría el riesgo de convertirse en "una esponja que absorbe todos los aspectos del entorno del movimiento social" (Gamson y Meyer, 1996:

275). En respuesta, Doug McAdam resumió el enfoque de acuerdo a las cuatro dimensiones que habían aparecido consistentemente entre los estudios seminales en aquel periodo (Brockett, 1991; Kriesi *et al.*, 1992; Rucht, 1996; Tarrow, 1994); primero, la apertura del sistema político; segundo, la estabilidad de los alineamientos de las elites subyacente al sistema político; tercero, la presencia de aliados; y cuarto, la capacidad represiva del Estado (McAdam, 1996: 26). A pesar de este intento de reconciliar las diferencias entre las definiciones de oportunidad política y los resultados, continuó la falta de consenso. En 2004, David Meyer y Debra Minkoff ofrecieron una revisión del concepto de oportunidades políticas al sostener que la elección de medidas de la oportunidad política depende de si la variable que se pretende explicar es actividad de protesta, organización o resultados. Para la actividad de protesta (el objeto de interés del presente estudio), sugirieron examinar las medidas de las condiciones específicas, en lugar de las medidas de la apertura política general del sistema (como, por ejemplo, entornos institucionales) pues los que protestan buscarán aperturas específicas para impulsar las actividades de protesta, mientras que el acceso institucional general, por definición, hará disminuir esa actividad.

Según los estudios de movimientos sociales en entornos abiertos y cerrados, las condiciones políticas abiertas sirven como oportunidades en escenarios democráticos, mientras que las condiciones cerradas y represivas en entornos autoritarios también funcionan como "oportunidades" para los actores en los movimientos sociales. No obstante, los movimientos sociales también surgen en las transiciones democráticas y enfrentan condiciones políticas cambiantes. Este escenario resembla las condiciones destacadas por Eisinger (1973) como disparadores de la movilización de protesta. Él argumentó que el comportamiento político contencioso mostraba una relación curvilínea hacia las condiciones políticas como oportunidades y, por ende, lo más probable sería que la actividad de protesta ocurriera en entornos que tuvieran una mezcla de condiciones políticas abiertas y cerradas, mientras que los ambientes extremadamente cerrados o los muy abiertos serían casi inmunes a los eventos de protesta. Durante los períodos de transición democrática, cuando las condiciones políticas son inestables, estas situaciones combinan oportunidades abiertas y cerradas para la contienda. Si bien la contienda surge inicialmente como reacción a la falta de oportunidades políticas (Goodwin y Jasper, 1999; Hipsher, 1998; Jenkins y Schock, 1992; Oberschall, 2000; Schock, 1999), a medida que la estructura del sistema político cambia y se abren nuevas oportunidades, los actores de los movimientos sociales responden primero con más protestas, alentados por su éxito

percibido al presionar por aperturas (Tarrow, 1994), y luego sacando ventaja de las aperturas institucionales para avanzar aun más sus demandas sin tener que recurrir a actividades contenciosas (Pickvance, 1995).

Dado que el movimiento zapatista surgió y se desarrolló durante el mismo periodo en que se implementaron reformas electorales y tuvieron lugar elecciones más transparentes, este estudio analiza tanto las dimensiones institucionales generales como las específicas de las oportunidades políticas para comprender cómo los cambios institucionales y las aperturas especificas hacia los zapatistas perfilaron el desarrollo de su ciclo de protesta. Estudiar tanto las oportunidades políticas institucionales como las específicas permite, además, verificar la existencia de una correlación curvilínea entre las condiciones políticas y actividad de protesta en relación con el argumento de que la mayor parte de la actividad contenciosa ocurre durante procesos que combinan oportunidades políticas de abiertas y cerradas. Al mismo tiempo, el presente estudio corrobora si las aperturas específicas concedidas a los zapatistas durante los periodos de diálogo y aprobación de la Ley de Derechos y Cultura Indígenas se convirtieron en oportunidades para aumentar la fuerza de su ciclo de protesta.

Se consideran cinco factores como oportunidades potenciales para el ciclo de protesta zapatista. El primero es la apertura del sistema político mexicano, medido por los cambios de poder producidos por las elecciones en los Gobiernos locales y el Congreso federal y por las aperturas específicas a los zapatistas creadas por los diálogos entre el EZLN y el Gobierno mexicano en 1996 y por las deliberaciones sobre la Ley de Derechos y Cultura Indígenas en el Congreso mexicano en 2001. El segundo factor analizado es la estabilidad de los alineamientos de las elites que subyace en los sistemas políticos locales y nacionales, medida por el fraccionamiento electoral local y nacional. El tercer factor considerado es la presencia de aliados locales y nacionales, evaluada según el grado de apoyo regional y nacional al PRD. El cuarto factor es la capacidad represiva del Estado, calculada acorde al número de posiciones militares en la región de conflicto. El último factor analizado consiste en las oportunidades brindadas a los zapatistas por los medios de comunicación internacionales, estimadas por la evaluación de las opiniones que expresaron los diarios internacionales sobre los zapatistas y el Gobierno mexicano. Aunque este factor no es una de las medidas convencionales de las oportunidades políticas, la inmensa atención de los medios de comunicación internacionales que lograron los zapatistas y que mantuvieron durante su ciclo de protesta pudo haber abierto nuevas oportunidades para el movimiento, como captar la atención de redes de solidaridad

transnacionales. Por consiguiente, se lo puede considerar como un factor de oportunidad específico para el desarrollo del movimiento.

APERTURA DEL SISTEMA POLÍTICO

El levantamiento del EZLN prorrumpió contra el régimen autoritario del PRI. Por más de seis décadas, el PRI había dominado las arenas políticas locales y nacionales, y había perpetrado injusticias socioeconómicas en la región. Estas acciones llevaron al surgimiento del grupo guerrillero (Collier y Quaratiello, 1994; Harvey, 1998; Legorreta, 1998; Leyva y Ascencio, 1996). Por lo tanto, es razonable asumir que al principio el sistema político estaba cerrado a cualquier interés ajeno a la estructura corporativista de representación de intereses establecida por el régimen partidario-estatal del PRI. Por ende, así como se ha demostrado que los electores marginales actúan en entornos políticos cerrados (Meyer, 2004), los zapatistas consideraron necesario optar por la insurgencia. Sin embargo, las condiciones cambiaron en 1994. Tanto a nivel local como nacional, las elecciones se volvieron más competitivas y transparentes y permitieron triunfos electorales para la oposición. La consecuente presión generada por la opinión pública nacional e internacional obligó al gobierno federal a negociar, por primera vez, con un grupo rebelde. Luego de 12 días de insurrecciones, el gobierno federal convino poner fin a las hostilidades y negociar. Posteriormente, con la firma de los Acuerdos de San Andrés en 1996 y las deliberaciones sobre la Ley de Derechos y Cultura Indígenas en el Congreso mexicano en 2001, surgieron otras aperturas (García de León, 2005).

De acuerdo al corpus literario sobre oportunidades políticas y democratización, la actividad de protesta debería florecer durante los periodos de transición, mientras que los entornos cerrados o muy abiertos serían casi inmunes a la actividad contenciosa, siguiendo una relación con forma de U invertida (Eisinger, 1973; O'Donnell y Schmitter, 1986; Tilly, 1978; Pickvance, 1995; Zdravomyslova, 1996). Si esta hipótesis es correcta, entonces las aperturas electorales a nivel local y nacional debieron haber alentado la movilización de protesta zapatista, al menos inicialmente, dado que pudieron haber percibido estos cambios como oportunidades para presionar a los nuevos gobiernos y esperado que reaccionaran a las protestas de un modo más favorable que el PRI. Del mismo modo, las oportunidades específicas para el movimiento que ofrecieron los periodos de diálogo y la aprobación en el Congreso nacional de una ley de derechos indígenas habrían generado más movilizaciones de protesta durante esos periodos para reclamar por una resolución a sus demandas. Por lo tanto, se pude plantear la hipótesis que tanto las aperturas institucionales

como las específicas funcionaron como oportunidades para el ciclo de protesta zapatista.

ESTABILIDAD DE LOS ALINEAMIENTOS DE LAS ELITES

La literatura sobre las oportunidades políticas sugiere que un movimiento social tiene mayores posibilidades de triunfo cuando las elites subyacentes de en la *polis* se realinean en torno a los problemas planteados por el movimiento (Piven y Cloward, 1979; Jenkins y Perrow, 1977; Kriesi et al., 1995; Tarrow, 1994). El levantamiento del EZLN demandó una respuesta del gobierno federal. Sin embargo, también llevó a varias fuerzas políticas en México a reconocer los reclamos de los rebeldes, al vincular las causas de la rebelión con la ineptitud y la falta de voluntad del PRI para responder a los reclamos de campesinos e indígenas, tomando partido por las demandas zapatistas pero condenando el uso de la violencia para resolverlas. Entonces, se puede plantear la hipótesis de que si las elites electorales se habían realineado y se vieron obligadas a responder, al menos discursivamente, a las causas que llevaron al levantamiento del EZLN, los zapatistas percibieron estos cambios de posiciones como oportunidades y ejercieron mayor presión con sus manifestaciones de protesta. La mayor competencia y la inestabilidad de las elites respecto de las demandas zapatistas pudieron haber forjado la percepción de oportunidades potenciales para avanzar con sus demandas, y los zapatistas pudieron haberse sentido motivados y alentados a protestar.[3]

PRESENCIA DE ALIADOS

Numerosas investigaciones han mostrado que la presencia de aliados es una variable clave que influye en la supervivencia y el éxito de un movimiento (Cress y Snow, 2000; Jenkins et al., 2003; Minkoff, 1997; Piven y Cloward, 1979; Tarrow, 1994). En particular, cuando se desarrolla una alianza entre los actores del movimiento social y sus aliados políticos que logra promover los objetivos del movimiento, tener otros aliados políticos influyentes que empodera al movimiento para seguir su lucha por medios combativos (Della Porta y Diani, 1999; Katzenstein y Mueller, 1987; Kreisi et al., 1995). Aunque los zapatistas nunca reconocieron a ningún partido político como aliado oficial, el

3 Es importante diferenciar a los simpatizantes zapatistas de los miembros del EZLN. Aunque la milicia del EZLN no estaba interesada en participar del proceso electoral, los miembros de las comunidades zapatistas votaron en las elecciones, excepto durante el boicot electoral de 1997 promovido por el EZLN. Así, los miembros de las comunidades zapatistas pudieron haber percibido oportunidades para promover sus demandas en la apertura de la arena electoral.

PRD fue considerado partidario de la causa zapatista, especialmente durante las elecciones. Por consiguiente, se puede plantear la hipótesis de la existencia de una relación positiva entre la actividad de protesta zapatista y una mayor presencia electoral –local y nacional– del PRD. Pero según los zapatistas, el PRD demostró ser incapaz o carente de voluntad para impulsar los objetivos del movimiento de desafiar el tenaz régimen del PRI.[4] Zapatistas y perredistas podrían haberse aliado en una lucha conjunta de forma contenciosa contra del PRI, pero una vez que el PRD ganase el poder y demostrase su ineptitud, la alianza se habría roto. En ambos casos, estas condiciones deberían haber incrementado la actividad de protesta: primero, los zapatistas y los perredistas habrían protestado en forma conjunta en contra del régimen del PRI; luego los zapatistas habrían protestado en contra de la incapacidad y/o falta de voluntad del PRD para impulsar la agenda zapatista. Para evaluar cómo la presencia de aliados fortaleció el ciclo de protesta zapatista es necesario examinar aquellos escenarios donde el apoyo del PRD aumentó, pero que no fue lo suficientemente grande para ganar las elecciones. La medida de la apertura relativa del sistema político empleada aquí ya evalúa si los zapatistas habrían protestado en contra de otros gobiernos aparte del PRI.[5]

CAPACIDAD REPRESIVA DEL ESTADO

Si el Estado aplica consistentemente la represión, o amenaza con su uso, puede disparar la actividad de protesta e intensificarla (Almeida, 2003; Feierabend et al., 1973; Goldstone y Tilly, 2001; Rasler, 1996). En este caso, la capacidad del Estado mexicano para reprimir a los zapatistas era incuestionable. El sitio militar alrededor a las comunidades zapatistas y a través del estado de Chiapas fue mentado para impedir el crecimiento y la propagación de la influencia del EZLN en la región (Hirales, 1998; Legorreta, 1998; Leyva y Ascencio, 1996).[6] Así, posteriormente al levantamiento del EZLN, con el tiempo, los efectivos militares y sus posiciones aumentaron (Global Exchange y

4 El 19 de junio de 2000 Marcos declaró que, si bien el EZLN creía que el PRD era una fuerza política necesaria para representar a la izquierda en las elecciones, los zapatistas no se consideraban perredistas; y siguieron criticando a todos los partidos políticos por su comportamiento alejado de la sociedad y por su única preocupación de ganar las elecciones y no de representar la agenda del pueblo una vez en el poder (Subcomandante Marcos, 2000).

5 Dado que la mayoría de los gobiernos locales que dejaron de ser del PRI pasaron a ser del PRD, no existió el riesgo de que otros partidos se adjudicaran el efecto significativo de la presencia de aliados en el poder.

6 Principal mediador por la Paz (1995-1997), entrevista personal en México D.F., noviembre de 2002.

CIEPAC, 1999). A la vez, la presión ejercida por la opinión pública nacional e internacional sobre el Estado mexicano elevó los costos de la represión. Los defensores de los zapatistas han argumentado que la presencia del ejército en la región no intimidaba a la población como se había esperado sino que, antes bien, fomentaba las movilizaciones de protesta.[7] Si esta afirmación es correcta, entonces las protestas debieron haber aumentado a pesar de (o en oposición a) la mayor presencia militar en la región.

OPORTUNIDADES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNACIONALES

La literatura sobre movimientos transnacionales sugiere que la presencia de organizaciones de movimientos internacionales y los medios de comunicación ayudan a los actores locales a construir un movimiento social más amplio al establecer identidades comunes que cruzan fronteras, creando redes y ejerciendo presión sobre el gobierno ya sea para que responda a las demandas del movimiento local o para que ponga fin a las hostilidades en contra de los insurgentes, o para ambas (Bob, 2002; Collier y Collier, 2005; Keck y Sikkink, 1998; Tarrow, 2005). En el caso de los zapatistas, fue ampliamente registrado que la atención inicial de los medios en torno al levantamiento condujo a una nutrida presencia de ONG internacionales que evitaron que el gobierno federal mexicano reprimiera al grupo rebelde, como en el efecto *boomerang* señalado por Margaret Keck y Kathryn Sikkink (Keck y Sikkink, 1998; ver también Collier y Collier, 2005; Hellman 1999; Rus, 1995; Schulz, 1998).[8] Asimismo, la supervivencia de la lucha zapatista fue directamente solventada por organizaciones transnacionales que han canalizado recursos para proyectos productivos en la región de conflicto (Moksnes, 2005).[9] No obstante, la naturaleza clandestina y subversiva del EZLN hace imposible rastrear los montos y los orígenes de los recursos que se pusieron a disposición

7 Entrevistas personales con miembros del Enlace Civil, Coordinación Regional de la Resistencia Civil de la Sociedad Civil de Los Altos de Chiapas, y con representantes de Servicios Internacionales para la Paz (SIPAZ) en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, de febrero a abril de 2003.

8 Sin embargo, cabe destacar que ningún país ejerció presión alguna directamente sobre el Gobierno mexicano para que resolviera el conflicto en Chiapas.

9 Entrevistas personales con miembros de Enlace Civil, Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI), Proyectos, Servicios de Consultoría para el Desarrollo Social, y SIPAZ en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, de febrero a abril de 2003.

de los zapatistas. Solo se dispone de información anecdótica.[10] Por lo tanto, resulta imposible realizar un análisis sistemático acerca del rol de las redes de solidaridad transnacionales para ese momento. Sin embargo, al menos se puede indagar la cantidad de opiniones sobre el movimiento en los medios y analizar si esta cobertura tuvo algún efecto en el movimiento a nivel local. Según William Gamson y Gadi Wolfsfeld, a mayor atención de los medios, mayor será el impacto en el encuadre del movimiento (1993: 123). Katy Pickvance (1997) también ha apuntado que cuanto más y mejor informada esté la audiencia no participante del movimiento, las posibilidades de que este adquiera una base de apoyo que expresará su respaldo durante las campañas electorales al adherir a un candidato que represente las demandas del movimiento serán mayores.

En el caso del movimiento zapatista, algunas de las ONG que trabajan en el área concentraron sus esfuerzos en mantener a las comunidades más alejadas informadas sobre las reacciones hacia el movimiento.[11] Este modo indirecto de relacionar la atención de los medios internacionales con la movilización ofrece una visión de si esta situación representó, o no, una oportunidad para el movimiento. En el caso de los zapatistas, la ayuda de las organizaciones transnacionales aumentó a partir de que el EZLN captara la atención de la comunidad internacional en 1994. Cuanto mayor sea la atención internacional y más favorable sea su opinión del movimiento, mayores serán las posibilidades de que este obtenga apoyo internacional de organizaciones transnacionales.

La atención de los medios internacionales debió haber funcionado entonces como una oportunidad para que el movimiento accediera a recursos y redes transnacionales, debido a que la opinión pública era favorable a la causa zapatista. Esta interpretación podría ser válida si se asume que cuanta más información sobre el movimiento estuviera disponible para las organizaciones transnacionales, más predispuestos estarían a apoyar la causa del movimiento (Smith, 1997). Con mayores recursos y apoyo, los zapatistas se podrían haber

---

10 Mientras se realizaba a cabo el trabajo de campo para esta investigación, cuando se solicitaba información acerca de las organizaciones internacionales que apoyaban la causa zapatista se percibió resistencia de parte de los activistas que trabajaban en la región.

11 Melel Xojobal es una de las organizaciones que trabajan para mantener informadas a las comunidades indígenas. Algunas otras organizaciones dedicadas a esta tarea son los Servicios Internacionales para la Paz (SIPAZ), el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (FrayBA) y la Alianza Cívica.

sentido alentados a seguir protestando. Sin embargo, es importante destacar que esta suposición no representa una relación directa entre el progreso del movimiento zapatista y el apoyo internacional, sino solo un primer intento por relacionar sistemáticamente la atención de los medios de comunicación internacionales con el desarrollo del movimiento.

VARIABLES Y RECOLECCIÓN DE DATOS

VARIABLE DEPENDIENTE: PROTESTAS

La actividad de protesta zapatista se mide aquí por el número de protestas anuales que los simpatizantes zapatistas realizaron de 1994 a 2003. La unidad de análisis es municipio/año, ya que los datos se recogieron para cada municipio y se registraron anualmente. Los reportes de los diarios locales y nacionales sobre la actividad de protesta de los zapatistas fueron codificados para determinar el número de protestas. Los eventos de protesta se definen aquí como "acción o acciones públicas colectivas de actores no estatales, que involucraran al menos 3 personas, y con el propósito expreso de criticar o disentir y elevar demandas sociales y/o políticas" (Rootes, 2003: 53). Para evitar inflación en los datos, los eventos de protesta fueron codificados como un único evento aun cuando duraran varios días (McCarthy et al., 1996).

La mayoría de los informes periodísticos fueron relevados del diario mexicano nacional *La Jornada*. Para controlar el sesgo potencial de selección y descripción de los eventos, los informes de los diarios nacionales y locales fueron triangulados (Earl et al., 2004). Para el periodo de 1994 a 1996, se consultó el diario publicado en San Cristóbal de Las Casas, *El Tiempo* (que posteriormente se denominó *La Foja Coleta*). El archivo de datos de Melel Xojobal (2003) se usó para el periodo de 1997 a 2003. Este archivo registra una síntesis diaria de las noticias de diarios locales y nacionales sobre Chiapas. La triangulación de fuentes locales y nacionales no solo amplía la cobertura de eventos, sino que también ayuda a evitar posibles sesgos en la información de las distintas fuentes informativas utilizadas. El Cuadro 11.1 resume el número de eventos reportados tanto en los diarios locales como nacionales para los años 1998, 1999, 2001 y 2002.

El Cuadro 11.1 revela la obvia disparidad de cobertura entre las fuentes locales y nacionales. Aproximadamente, la mitad de los eventos no fueron reportados en el diario nacional *La Jornada*. Los eventos no reportados ahí parecían consistentemente ser de menor magnitud que los reportados por la cobertura local. Incluir los eventos menores permitió ampliar la base de datos. Incluso, el empleo

de modelos adicionales solo con los eventos reportados localmente permitió controlar los posibles resultados divergentes. No se encontraron diferencias. Por lo tanto, a pesar del sesgo consistente en el número de eventos de protesta cubiertos, el "núcleo duro" de noticias provenientes de fuentes locales y nacionales pareció ser exacto y confiable para los propósitos de este estudio (Earl et al., 2004: 72).

Cuadro 11.1
Reportes de diarios locales y nacionales
sobre eventos de protesta (selección de años)

	1998	1999	2001	2002
Número de eventos reportados en periódicos nacionales y extranjeros	25	63	85	80
Número de eventos reportados únicamente en periódicos nacionales	16	37	35	46

Fuente: eventos de protesta reportados por *La Jornada*, *La Foja Coleta* y *Melel Xojobal*.

VARIABLES EXPLICATIVAS

APERTURA DEL SISTEMA POLÍTICO

Los investigadores que se han centrado en las dimensiones institucionales de las oportunidades políticas han identificado los sistemas políticos usando una tipología en la cual una dimensión caracteriza el sistema político de un gobierno como abierto o cerrado, dependiendo de su propia apertura a las demandas realizadas por los actores de los movimientos sociales, mientras que una segunda dimensión categoriza un sistema gubernamental como fuerte o débil según su capacidad de cambiar políticas en respuesta a estas demandas (Kitschelt, 1986; Kriesi et al., 1992). Otros investigadores han elaborado más esta segunda dimensión examinando aperturas específicas. Estas aperturas son específicas para un movimiento particular, pero no para todos los otros tipos de movimientos. Entre los ejemplos están los pactos directos entre el Estado y los actores del movimiento social, el diseño de políticas, los fallos judiciales y la aprobación de leyes que contemplan las demandas de un movimiento particular como oportunidades para ese movimiento (Meyer y Minkoff, 2004; Van Cott, 2001).

De la tipología de los sistemas políticos, en este estudio solo se utiliza la dimensión abierto-cerrado. La estimación de la apertura del sistema político local se ha determinado al analizar el partido en el

poder bajo los supuestos de que los gobiernos del PRI eran cerrados y que los cambios de régimen señalaban aperturas, dado que un gobierno distinto del PRI sería más abierto a demandas previamente objetadas como las de los zapatistas. Se construyó una variable dicotómica para diferenciar gobiernos priistas de los no priistas cada tres años, que es la regularidad de las elecciones locales en México. Los datos sobre los partidos en el poder se tomaron de los resultados electorales disponibles en el Instituto Estatal Electoral de Chiapas (IEE-Chiapas, 2003). Las aperturas específicas para los zapatistas se identificaron analizando los periodos de diálogo exitoso entre el EZLN y el gobierno nacional en 1996, cuando se firmaron los Acuerdos de San Andrés y se aprobó la Ley de Derechos y Cultura Indígenas en 2001. Para identificar estos periodos se usó otra variable dicotómica.

ESTABILIDAD DE LOS ALINEAMIENTOS DE LAS ELITES

La estabilidad de las políticas electorales locales y nacionales se evaluó analizando los datos electorales de las elecciones locales y nacionales y empleando la fórmula de fragmentación electoral de Rein Taagepera y Matthew Schugart (1989). El coeficiente de correlación entre estas dos variables es 0,4351, lo que presenta problemas de multicolinealidad. Este problema potencial se estimó empleando modelos adicionales (modelos 2 y 3) que excluyen una variable a la vez. El índice de fragmentación se calculó con la siguiente fórmula: $f = 1 - \sum (vi2)$, donde vi es la proporción de votos ganados por cada partido. Esta medición permite cuantificar la fragmentación electoral y con ello la competitividad de las elecciones. Cuanto mayor es el índice de fragmentación, más fraccionado está el electorado y más competitivas son las elecciones, y por lo tanto más inestables los alineamientos políticos. El IEE-Chiapas (2003) y el Instituto Federal Electoral (IFE, 2003) proveyeron data sobre las elecciones locales y nacionales para sus respectivos Congresos, realizadas cada tres años. Pero mientras que la variación en las elecciones locales es transversal y temporal, la variación en los resultados nacionales es solo temporal.[12]

PRESENCIA DE ALIADOS

Los mismos datos electorales se usaron para evaluar la presencia del apoyo al PRD tanto en las localidades de Chiapas como a nivel nacional. El porcentaje del voto al PRD se consideró como medida de la presencia de aliados políticos, solo cuando no fue suficiente para que

12 Evaluar la fragmentación electoral nacional a nivel de distritos haría que las mediciones nacionales y locales sean difíciles de diferenciar. También incrementaría la multicolinealidad entre ellas y, en consecuencia, sesgaría los resultados del análisis.

el partido ganara el poder. Este enfoque permite diferenciar esta medida de la empleada para identificar la apertura del sistema político local. El coeficiente de correlación entre las dos es solo de 0,2863, y por lo tanto no hay problema importante alguno de multicolinealidad. La prueba de correlación entre la fragmentación electoral local y el apoyo al PRD fue solo de 0,1612; consiguientemente, el problema de covarianza parece ser pequeño. Sin embargo, la correlación entre fragmentación electoral nacional y el apoyo al PRD fue de 0,8780. Este problema se corrigió empleando modelos diferentes (modelos 2 y 3) de los que se extrae una variable a la vez por modelo. Nuevamente, aquí la variación en el nivel local es entre casos y temporal, mientras que en el nivel nacional es solo temporal.[13]

CAPACIDAD REPRESIVA DEL ESTADO

Para evaluar esta variable se empleó el conteo anual de posiciones y retenes militares por municipio. Los mapas de las posiciones y retenes militares se relevaron de las publicaciones del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (ver Global Exchange y CIEPAC, 1999; CIEPAC, 2003). Esta medición puede ser criticada por no estimar con exactitud la capacidad de represión del Estado, debido a que el ejército no es la institución a cargo de monitorear o reprimir la actividad de protesta. Además, los datos recolectados no provienen de una fuente oficial sino de una ONG, la cual puede introducir algún sesgo en sus reportes. Desafortunadamente, los reportes de la Policía mexicana sobre eventos de protesta no son de dominio público, ni tampoco lo son los datos sobre el número de efectivos militares y el gasto militar o policial. En consecuencia, no pueden ser usados para medir la represión en México, como lo han hecho los investigadores al estudiar la represión de las protestas en otros contextos (Earl et al., 2003). Los cables periodísticos sobre los eventos de protesta zapatista rara vez mencionaban la presencia militar o policial, y por lo tanto no se pudieron utilizar sistemáticamente. Aunque es un indicador tosco y no una medida directa de la represión, la información sobre la presencia militar es considerada la mejor aproximación disponible para medir la represión debido a que la presencia militar en la región pretendía ser una amenaza para contener la fuerza de los zapatistas. Se supone que los efectos de los cambios

13 Medir la presencia de aliados con data de nivel de distritos erraría la estimación de esta variable a nivel nacional, dado que solo se incluirían los distritos de Chiapas en lugar de todos los distritos electorales del país. Asimismo, este enfoque crearía problemas en la diferenciación de las medidas locales y nacionales para esta variable y podría aumentar el problema de multicolinealidad.

en la ubicación y el número de retenes militares en la región podrían percibirse solo en la actividad de protesta zapatista futura. A tal fin, una variable de presencia militar rezagada se incluyó en el modelo.

OPORTUNIDADES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNACIONALES

Estas oportunidades fueron medidas examinando los artículos de opinión sobre el movimiento publicados por dos diarios: *The New York Times* en Estados Unidos y *El País* en España. Estos diarios se seleccionaron como fuentes confiables de la atención dedicada al movimiento zapatista por su amplia cobertura de noticias internacionales. Usando una variable dicotómica, las opiniones expresadas en los artículos periodísticos se codificaron de la siguiente manera: a cada artículo se le asignaron dos valores para dar cuenta de su opinión, uno que reflejaba su opinión sobre el gobierno y el otro su opinión sobre el movimiento; se consignó "1" para una opinión favorable y "0" para una desfavorable. Las opiniones se agregaron por año, y luego se creó una variable porcentual para calcular la proporción de opiniones favorables y desfavorables para cada uno sobre el total de las opiniones publicadas en ambas fuentes periodísticas. Las variables rezagadas fueron utilizadas bajo el supuesto de que la opinión actual en los medios de comunicación sería conocida por los zapatistas solo después de un periodo relativamente prolongado.[14] Las opiniones favorables al EZLN se relacionarían positivamente con la actividad de protesta, mientras que las opiniones desfavorables al EZLN o favorables al Gobierno mexicano mostrarían una relación negativa con los eventos de protesta.

VARIABLES DE CONTROL

Los datos sociodemográficos, así como los datos sobre el tamaño del municipio y la actividad de protesta previa fueron usados como controles. Se incluyó un índice de marginación como una medida para controlar los efectos de los perjuicios socioeconómicos en Chiapas en la promoción de los eventos de protesta. El índice de marginación hace referencia a las condiciones municipales de educación, ocupación y

14 El uso inteligente de internet de los zapatistas fue principalmente a través de las ONG simpatizantes en la región (como las mencionadas en la nota al pie 12). No podemos asumir que en las áreas remotas de Chiapas la población, que es la que está protestando, tiene acceso inmediato a las noticias internacionales. Únicamente tuvieron acceso a ellas después de que ONG, como Melel Xojobal, ofrecieran un resumen de noticias locales, nacionales e internacionales al público en general. Por lo tanto, se puede asumir que medió un largo período de tiempo entre la publicación de opiniones del movimiento expresadas en diarios internacionales y el momento en que los manifestantes zapatistas supieron de ellas y se organizaron para protestar.

vivienda. Se utilizó una escala de cinco categorías para definir el nivel de marginación del municipio, donde 1 equivale a un nivel muy bajo de marginación y 5 equivale a uno muy alto. Los datos de marginación fueron tomados del Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2003), que midió este indicador cada cinco años en 1995, 2000 y 2005. Para controlar que las municipalidades más grandes y populosas tuvieran mayor riesgo de experimentar más actividad de protesta, el tamaño de la localidad se usó como una variable de exposición en el modelo (Long y Freese, 2006). Esta data proviene de los censos nacionales de 1995, 2000 y 2005 relevados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2005). Ambos indicadores reflejan la variación transversal y temporal entre los seis primeros años (1994-1999) y los cuatro últimos (2000-2003) del periodo en estudio. Finalmente, los efectos de amplificación de las protestas pasadas en la actividad de protesta futura se controlaron mediante la inclusión de los valores rezagados de la variable dependiente en el modelo (Rasler, 1996).

MODELOS DE ANÁLISIS PARA LAS PROTESTAS ZAPATISTAS

Dado que la variable dependiente consiste en conteos de protestas zapatistas por año y localidad, el procedimiento de estimación más apropiado a seguir es un modelo de conteo de eventos (Barron, 1992; King, 1989; Land et al., 1996). De manera más específica, se empleó un modelo binomial negativo de series de tiempo y transversal para el conteo de eventos, usando el tamaño de la población como la variable de exposición para corregir la sobredispersión de la actividad de protesta (Long y Freese, 2006). Cuando cada caso es observado en el mismo número fijo de unidades temporales (en este caso, en años), lo convencional es caracterizar el diseño como ocasiones cruzadas por casos en el tiempo (Bryk y Raudenbush, 1992: 2). Además, la diferencia en las variables de nivel superior ("Nivel 2") es solo temporal y, por tanto, los que se podrían considerar como factores predictivos de "Nivel 2" son los mismos para todos los casos y pueden ser operacionalizados con un enfoque de efectos fijos (Luke, 2004: 21).

El número de protestas se reporta como un índice de incidencia de eventos según espacio y tiempo. El número promedio de eventos en un municipio fue de 0,65 (con una variación de 6,93). En los municipios que tuvieron al menos una protesta en el periodo, el número promedio de protestas fue de 3,35 eventos en un año (con una variación de 26,49). Estos resultados demuestran que las protestas entre municipios están sobredispersas. Mientras que algunas localidades no tuvieron ni una sola protesta, otras fueron continuos epicentros de protestas, y algunas otras experimentaron al menos una protesta en ese mismo período.

Esta sobredispersión de protestas en el estado de Chiapas surge de dos fuentes diferentes. Una se relaciona con el supuesto comportamiento estratégico de los agitadores zapatistas, que habría hecho que algunas localidades sean mejores blancos para las protestas por su pujante posición socioeconómica y política. Los zapatistas elegirían protestar en ciudades o pueblos donde pudiesen lograr el máximo impacto y atraer la mayor atención del público, el Estado y los medios de comunicación. De este modo, las ciudades más grandes con estructuras políticas y económicas importantes serían mejores blancos para las protestas. Tal sería el caso de ciudades como Tuxtla Gutiérrez (capital del estado), San Cristóbal de Las Casas y Palenque (centros culturales), Tapachula (ciudad fronteriza) y Comitán, Ocosingo y Las Margaritas (centros de actividad económica). Al impactar en las funciones regulares de estos centros, los manifestantes zapatistas podrían causarle importantes golpes al estado y lo forzarían a responder más rápidamente. La otra fuente de sobredispersión proviene del impacto que tuvo la actividad de protesta anterior del EZLN en las protestas subsecuentes. Es decir, las municipalidades que han experimentado eventos de protesta en el pasado tienen más probabilidades de volver a experimentarlos en el futuro. Este es el caso de localidades con una larga tradición de luchas campesinas y movilización como Altamirano, San Andrés Larráinzar, Simojovel y Venustiano Carranza (Harvey, 1998). Para explicar el hecho de que los eventos de protesta en un municipio por año no son casos independientes, se incluyeron en el modelo valores rezagados de la variable dependiente.

La sobredispersión de los eventos de protesta se representa con un modelo binomial negativo en lugar de un modelo de Poisson regular (Long y Freese, 2006) usando el tamaño de la población como variable de exposición. Después de controlar el tamaño de la población, el promedio de protestas en cada localidad por año fue de 9,8, con un máximo de 10 y un mínimo de 2 protestas. Para corregir las posibles heterocedasticidad y correlación serial, se estimaron errores estándares robustos agrupados por municipio. Los resultados de la estimación se presentan en el Cuadro 11.2 y se discuten en la siguiente sección.

RESULTADOS

Una vez que el levantamiento del EZLN desencadenó el ciclo de protestas en Chiapas, se esperaba que la actividad de protesta aumentara por dos razones: primero, por las aperturas específicas que los periodos de diálogo ofrecieron a los zapatistas; y segundo, como consecuencia de aperturas electorales que llevaron a otros partidos al poder, que aumentaron la competitividad de las elecciones y permitieron que surgieran aliados influyentes. Sin embargo, los resultados

muestran que estas aperturas redujeron la actividad de protesta zapatista en las localidades que tuvieron elecciones más competitivas mientras que las localidades restantes que estaban gobernadas por el PRI y con mayor presencia militar continuaron siendo el centro de las protestas. En otras palabras, la actividad de protesta zapatista tuvo menos posibilidades de ocurrir en las localidades que habían experimentado algún cambio de gobierno desplazando al PRI, que tuvieron elecciones más competitivas y menor presencia militar. Inversamente, la actividad de protesta zapatista pareció concentrarse en las localidades gobernadas por el PRI, que tenían alineamientos electorales más estables y mayor presencia militar. Los municipios gobernados por el PRI experimentaron 0,45 más protestas que los municipios no priistas ($p < 0{,}05$), mientras que los municipios con elecciones más competitivas tuvieron 1,82 menos eventos de protesta ($p < 0{,}10$). El emplazamiento de un retén militar más en un municipio aumentó la probabilidad estadística de actividad de protesta futura en 0,06 ($p < 0{,}05$).

Asimismo, los resultados que muestran las variables en el nivel nacional confirman este patrón. A medida que las elecciones nacionales se volvieron más competitivas y la presencia del PRD –un aliado zapatista potencial– creció en el Congreso nacional, la actividad de protesta zapatista disminuyó significativamente. Con un aumento de un 25% (una desviación estándar) en el fraccionamiento electoral nacional, la actividad de protesta disminuyó en 3,55 eventos de protesta ($p < 0{,}01$ en el modelo 2). Un aumento de 4,14% (una desviación estándar) en apoyo al PRD en el nivel nacional disminuyó la actividad en 0,22 menos eventos de protesta ($p < 0{,}01$ en el modelo 3). Esta tendencia parece haber persistido aun durante periodos de aperturas específicas a los zapatistas. Los Acuerdos de San Andrés en 1996 y las deliberaciones sobre la Ley de Derechos y Cultura Indígenas en 2001 también disminuyeron significativamente la actividad de protesta zapatista. Los resultados muestran que durante los años de negociaciones hubo 0,94 menos protestas que en otros años ($p < 0{,}05$). Así, en contra de las predicciones, las aperturas específicas no funcionaron como desencadenantes de las protestas.

También se encontraron significativos efectos de correlación serial (Rasler, 1996). Los zapatistas tendieron a protestar más a menudo donde ya habían desplegado sus protestas con anterioridad. Un evento de protesta adicional en el año previo desencadenó 0,04 ($p < 0{,}05$) más protestas el año siguiente. Estos resultados sugieren que estas aperturas convirtieron los entornos cerrados restantes –los municipios gobernados por el PRI con mayor presencia militar– en epicentros de las movilizaciones de protesta. Para confirmar este enunciado,

Cuadro 11.2
Factores predictivos de la probabilidad de protestas zapatistas en Chiapas, 1994-2003

	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3
Variables locales			
Apertura del sistema político: Gobierno del PRI	0,49 (0,20)**	0,38 (0,20)*	0,53 (0,19)***
Inestabilidad de los alineamientos de las élites: Fragmentación electoral	– 1,82 (0,46)***	– 1,66 (0,46)***	– 1,99 (0,43)***
Presencia de aliados: Apoyo del PRD	– 0,33 (0,51)	– 0,67 (0,50)	– 0,27 (0,51)
Capacidad represiva del Estado: Retenes militares (rezagados)	0,06 (0,02)***	0,06 (0,02)***	0,06 (0,02)***
Variables nacionales			
Apertura del sistema político: Período de negociaciones fingidas (1996 y 2001)	– 0,94 (0,30)***	– 1,38 (0,28)***	– 0,75 (0,23)***
Inestabilidad de los alineamientos de las élites: Fragmentación electoral	– 0,88 (86)	– 3,55 (0,38)***	
Presencia de aliados: Apoyo del PRD	– 0,18 (0,05)***		– 0,22 (0,02)***
Variables internacionales			
Favorable a los zapatistas	0,04 (0,009)	0,02 (0,007)***	0,01 (0,07)
Favorable al gobierno mexicano	0,001 (0,006)	0,01 (0,005)**	0,02 (0,005)
Controles			
Marginación	0,32 (0,10)***	0,35 (0,10)***	0,31 (0,10)***
Protestas anteriores (variable dependiente rezagada)	0,04 (0,02)**	0,04 (0,02)**	0,04 (0,02)**

Número de observaciones: 1.095 | Número de conglomerados: 111 | Log de probabilidad = – 799,2955 | Ch^2 *de Wald* (15): 498,68
Ref.: PRI, Partido Revolucionario Institucional; PRD, Partido de la Revolución Democrática.
* Estadísticamente significante al 0,10% | ** Estadísticamente significante al 0,05% | *** Estadísticamente significante al 0%.
Fuente: Elaboración propia.

utilicé modelos adicionales para comprobar un efecto curvilíneo de la apertura del sistema político en la actividad de protesta (Eisinger, 1973; Tilly, 1978). Los resultados del segundo análisis refutaron el enunciado. El término cuadrático de apertura en el nivel local, medido por el porcentaje cuadrático de votos del PRI, mostró que la relación entre estas dos variables no era ni significativa ni curvilínea.[15]

La Gráfica 3 ilustra cómo, en las localidades donde otro partido había reemplazado al PRI, el número de protestas fue el más alto durante año anterior al cambio de administración y el mínimo el año

15 Los coeficientes para el porcentaje de votos del PRI como medida de la apertura del sistema político local y su término cuadrático fueron 0,26 (error estándar = 1,51) y 1,28 (error estándar = 1,98), respectivamente.

en el que el nuevo partido tomó el poder. Por ejemplo, Altamirano vivió solo un evento de protesta durante el Gobierno del PRD de 1995 a 1998, en comparación con diez eventos durante el Gobierno del PRI de 1999 a 2001. Otro ejemplo en el mismo año es Ixtapa, donde solo ocurrieron dos eventos de protesta durante el Gobierno del PRD y siete durante el Gobierno del PRI.[16]

La afirmación de que los sistemas políticos locales cerrados llevaron a más protestas zapatistas que los entornos abiertos se sustenta en la relación positiva entre la ubicación de las posiciones militares y las protestas zapatistas con el tiempo. Se realizaron análisis adicionales para verificar si la expansión de la presencia militar en la región siguió a un aumento en la actividad de protesta, o si el incremento en las protestas siguió al aumento de retenes y posiciones militares.

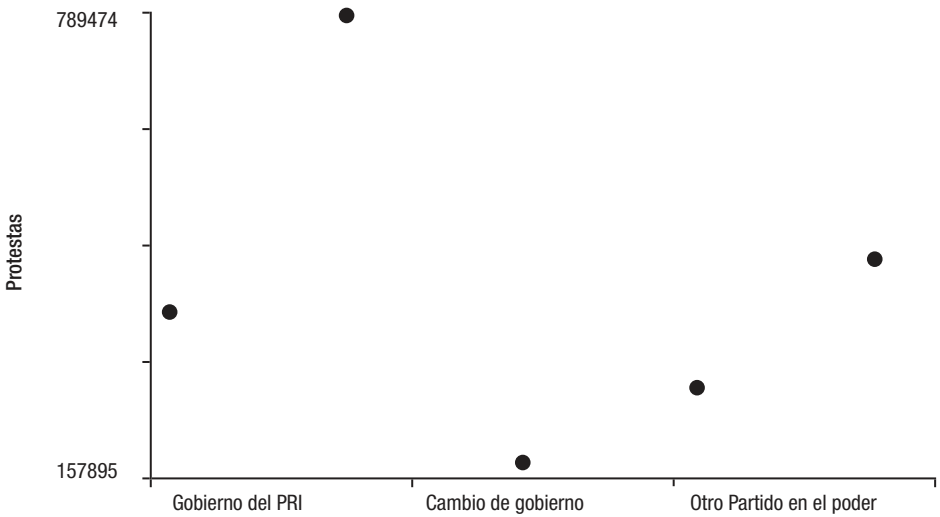
El Cuadro 11.3 muestra que la actividad de protesta siguió al aumento en el número de retenes militares en la región. Las protestas zapatistas crecieron al ritmo que se multiplicaron los retenes militares. Solo en los últimos dos años se invirtió la relación, lo que indica un impacto negativo en futuras actividades de protesta. En esos años, la presencia militar disminuyó porque el presidente Fox ordenó la retirada del ejército de la región en el año 2000. Así, la presencia militar en la región no solo fracasó en disuadir a los zapatistas de protestar, sino que en realidad alentó la actividad de protesta, como lo han percibido los miembros de diversas ONG.[17]

Finalmente, los resultados de la atención de los medios de comunicación internacionales parecen ser significativos solo en el modelo 2, pero no en los otros dos modelos. Las variables de los medios de comunicación internacionales son susceptibles a la multicolinealidad entre el fraccionamiento electoral local y nacional. Como los resultados en los modelos 1 y 3 son consistentes, sus resultados son más confiables que los del modelo 2. Estos dos modelos muestran que la relación entre la atención de los medios internacionales y actividad de protesta fue positiva mas no significativa. Por lo tanto, el vínculo entre estos dos factores es remoto; a pesar de los intentos de las ONG en la región por mantener a las comunidades zapatistas informadas acerca de los hechos que ocurren allende la zona del conflicto y que

16 Otros ejemplos incluyen Coapilla, con un evento durante el Gobierno del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN) desde 1995 hasta 1998, y dos eventos durante el Gobierno del PRI (1999-2001); y Frontera Hidalgo, con un evento durante el Gobierno del PRD (1995-1998) y dos eventos durante el Gobierno del PRI (1999-2001).

17 Entrevistas personales con miembros de CIEPAC, Enlace Civil, COMPAZ y SIPAZ en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, de febrero a marzo de 2003.

Gráfica 11.3
Cambios de régimen y cantidad promedio de protestas zapatistas en un municipio



Cuadro 11.3
Retenes militares y protestas zapatistas en Chiapas, 1994-2003

Variable dependiente: cantidad anual de protestas zapatistas por municipio	Coeficientes (y errores estándares robustos) agrupados por municipio
Predicción de protestas. Capacidad represiva del Estado:	
Retenes militares en el tiempo t – 3	0,20** (0,13)
Retenes militares en el tiempo t – 2	0,15** (0,04)
Retenes militares en el tiempo t – 1	0,17** (0,05)
Retenes militares en el tiempo t	0,12* (0,01)
Retenes militares en el tiempo t + 1	0,18** (0,06)
Retenes militares en el tiempo t + 2	– 0,46** (0,18)
Retenes militares en el tiempo t + 3	– 0,003 (0,18)
Año	0,55** (0,13)

Número de observaciones: 441 | Número de conglomerados: 111 | Log de probabilidad = – 206,89 | Chi2 de Wald (15): 41,96 |
* Estadísticamente significante al 0,05% | ** Estadísticamente significante al 0%. | Fuente: Elaboración propia.

afectan al movimiento. La opinión de los medios de comunicación internacionales pudo haber abierto oportunidades para que los zapatistas llegaran al sector del movimiento social transnacional por ayuda, pero no ha funcionado como factor desencadenante de la protesta. No obstante, estos resultados merecen un mayor análisis.

DISCUSIÓN

Los resultados presentados sugieren varias contribuciones importantes al conocimiento académico de los movimientos sociales en general y del movimiento zapatista en particular. Primero, este estudio muestra que las estructuras de oportunidad política influyen de diversas maneras en la movilización de protesta, dependiendo del contexto. Los entornos democráticos tienen más probabilidades de garantizar acceso y concesiones sustantivas a las demandas de los movimientos sociales, especialmente cuando el Estado es abierto y tiene la capacidad de responder a las demandas planteadas por actores disidentes (Kitschelt, 1986; Kriesi et al., 1992; 1995; Tarrow, 1994). En entornos cerrados y represivos, la falta de oportunidades es lo que desencadena la movilización (Einwohner, 2003; Kurzman, 1996; Loveman, 1998; McAdam, 1982; Noonan, 1995; Rasler, 1996; Tarrow, 1989). Para los movimientos que se despliegan durante aperturas electorales, los efectos de la actividad de protesta no se pueden predecir consistentemente ya que provocan gran incertidumbre. Esta tendencia es aún más pronunciada cuando estas aperturas no se traducen en oportunidades sustantivas para impulsar las demandas del movimiento a través de canales institucionales y cuando las negociaciones con el Estado solo han traído concesiones procedimentales más que sustantivas.

La teoría de las oportunidades políticas predice que aunque la actividad de protesta podría desencadenarse por la naturaleza relativamente cerrada del sistema político, cuando los entornos comienzan a abrirse, la actividad de protesta aumenta trazando una trayectoria curvilínea (Eisinger, 1973; Tilly, 1978). Pero no debe olvidarse que esta teoría fue desarrollada para explicar la actividad de protesta dentro de democracias bien establecidas, y no para explicar el ciclo de protesta durante las aperturas democráticas en países en vías de desarrollo. En este último caso, el cambio de partido gobernante, los realineamientos subyacentes de las elites políticas a la política establecida y el incremento de la presencia de aliados políticos potenciales en el poder –factores que deberían haber funcionado como oportunidades para la movilización, tal como sucede en escenarios democráticos– se convirtieron en atenuantes de la actividad de protesta. La explicación de este resultado podría ser que, a medida que surgieron oportunidades para que la oposición ganara más poder, los incentivos para

seguir protestado disminuyeron (Pickvance, 1995). Pero en el caso zapatista, las aperturas democráticas se detuvieron en el nivel electoral y no implicaron ningún cambio institucional importante que pudiera haber abierto oportunidades para incorporar intereses disidentes como los de los zapatistas en la agenda del Estado. Asimismo, cuando el PRD, el aliado zapatista potencial, resultó ser incapaz (o carente de voluntad, según los zapatistas) de representar las demandas zapatistas una vez que hubo ganado posiciones de poder, se rompió la alianza incipiente. Así, para los zapatistas, estas oportunidades institucionales fueron solo temporales, un resultado que inicialmente ayudó a menguar la actividad de protesta en las localidades más abiertas y la concentró en los entornos cerrados remanentes. Una vez que estas aperturas probaron ser momentáneas, desalentaron a los zapatistas de continuar protestando.

Las aperturas específicas para los zapatistas también resultaron ser oportunidades momentáneas. No aportaron concesión sustantiva alguna al movimiento zapatista. Sin embargo, inicialmente, ayudaron a reducir la actividad de protesta, tal vez debido a un sentimiento de esperanza acerca de la resolución del conflicto creado por estas oportunidades. Una vez que las oportunidades institucionales y específicas resultaron ser "falsas" para impulsar las demandas del movimiento, los zapatistas decidieron lograr sus objetivos directamente creando en 2003 sus propias estructuras de autoridad autónoma, las Juntas del Buen Gobierno, luego de que el Gobierno mexicano aprobara una versión diluida de la Ley de Derechos y Cultura Indígenas en 2001.

De este modo, los manifestantes zapatistas se movilizaron durante las oportunidades efímeras que les presentaron las aperturas estructurales y específicas, que no se tradujeron en concesiones sustantivas ni en oportunidades importantes para impulsar las demandas del movimiento. Así, estas aperturas decepcionantes persuadieron a los zapatistas de reencauzar sus tácticas de movilización, primero centrándose en los entornos cerrados remanentes y, luego, empleando su tiempo y energía para realizar ellos mismos sus objetivos, mediante la creación de autoridades locales paralelas a las del Estado. Las futuras investigaciones acerca de otros movimientos, que se desarrollen en condiciones políticas cambiantes que no lleguen a convertirse en oportunidades significativas y concesiones que impulsen la agenda del movimiento, podrían consolidar los hallazgos de este estudio.

Finalmente, el vínculo entre atención de los medios de comunicación internacionales y el ciclo de protesta zapatista parece remoto. La atención internacional ayudó a evitar mayores agresiones del Estado contra los zapatistas, y el apoyo de las redes transnacionales ha sido perentorio para la supervivencia de la causa zapatista dentro y fuera de

la región de conflicto. Pero los resultados presentados en este estudio sugieren que la atención de los medios internacionales no tuvo ningún efecto significativo en el desarrollo del ciclo de protestas. No obstante, este tema merece una mayor investigación en un futuro, cuando la información sistemática sobre las redes transnacionales que trabajan en la región esté disponible. Por ahora, los especialistas solo pueden basarse en datos indirectos y estudios de caso aislados para mostrar la influencia cardinal de los factores y actores internacionales en la supervivencia del movimiento zapatista (Bob, 2005; Colllier y Collier, 2005; Hellman, 1999; Moksnes, 2005; Rus, 1995; Schulz, 1998).

BIBLIOGRAFÍA

Almeida, P. D. 2003 'Opportunity organizations and threat-induced contention: Protest waves in authoritarian settings' en *American Journal of Sociology*, *109*(2): 345-400.

Barron, D. 1992 'The analysis of count data: Over-dispersion and autocorrelation' en *Sociological Methodology*, *22*: 179-220.

Benjamin, T. 1996 *A rich land, a poor people: Politics and society in modern Chiapas* (Albuquerque: University of New Mexico Press).

Bob, C. 2002 'Political-process theory and transnational movements: Dialectics of protest among Nigeria's Ogoni minority' en *Social Problems, 49*(3): 395-415.

Bob, C. 2005 *The marketing of rebellion: Insurgents, media, and international activism* (Cambridge: Cambridge University Press).

Brockett, C. D. 1991 'The structure of political opportunities and peasant mobilization in central America' en *Comparative Politics*, *23*(3): 253-274.

Bruhn, K. 1999 'Antonio Gramsci and the *palabra verdadera*: The political discourse of Mexico's guerrilla forces' en *Journal of Inter-American Studies and World Affairs*, *41*(2): 29-55.

Bryk, A. S. y Raudenbush, S. W. 1992 *Hierarchical linear models: Applications and data analysis methods* (Newbury Park: Sage).

Castells, M. 1997 *The power of identity* (Oxford: Blackwell).

Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC) 2003 'Mapas militares' en <http://www.ciepac.org> acceso 7 de enero de 2003.

Collier, G. A. y Collier, J. F. 2005 'The Zapatista rebellion in the context of globalization' en *Journal of Peasant Studies*, *32*(3-4): 450-460.

Collier, G. A. y Quaratiello, E. L. 1994 *Basta! Land and the Zapatista rebellion* (Oakland: Institute for Food and Development Policy).

Consejo Nacional de Población (CONAPO) 2003 'Índices de marginación' en <http://www.conapo.gob.mx> Acceso 3 de septiembre de 2003.

Cress, D. M. y Snow, D. A. 2000 'The outcomes of homeless mobilization: The influence of organization, disruption, political mediation, and framing' en *American Journal of Sociology*, *105*(4): 1.063-1.104.

Della Porta, D. y Diani, M. 1999 *Social movements* (Malden: Blackwell).

Earl, J.; Soule, S. A. y McCarthy, J. D. 2003 'Protest under fire? Explaining the policing of protest' en *American Sociological Review*, *68*(4): 581-606.

Earl, J. et al. 2004 'The use of newspaper data in the study of collective action' en *Annual Review of Sociology*, *30*: 65-80.

Einwohner, R. L. 2003 'Opportunity, honor, and action in the warsaw ghetto uprising of 1943' en *American Journal of Sociology*, *109*(3): 650-675.

Eisinger, P. 1973 'The conditions of protest behavior in American cities' en *American Political Science Review*, *67*(1): 11-28.

Estrada, M. 2005 'The 'Armed Community in Rebellion': Neo-zapatismo in the tojolab'al Cañadas, Chiapas (1988-1996)' en *Journal of Peasant Studies*, *32*(3-4): 528-554.

Feierabend, I. K.; Feierabend, R. L. y Nesvold, B. A. 1973 'The comparative study of revolution and violence' en *Comparative Politics*, *5*(3): 393-424.

Foweraker, J. y Craig, A. L. (eds.) 1990 *Popular movements and political change in Mexico* (Londres: Lynne Rienner).

Gamson, W. A. y Meyer, D. S. 1996 'Framing political opportunity' en McAdam, D.; McCarthy, J. D. y Zald, M. N. (eds.) *Comparative perspectives on social movements* (Cambridge: Cambridge University Press) pp. 275-290.

Gamson, W. A. y Wolfsfeld, G. 1993 'Movements and media as interacting systems' en *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, *528*: 114-125.

García de León, A. 2005 'From revolution to transition: The Chiapas rebellion and the path to democracy in Mexico' en *Journal of Peasant Studies*, *32*(3-4): 508-527.

Global Exchange y Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC) 1999 *Siempre cerca, Siempre lejos: Las Fuerzas Armadas en México* (México D.F.: Cencos).

Goldstone, J. A. y Tilly, C. 2001 'Threat (and opportunity) Popular action and state response in the dynamics of contentious action' en Aminzade, R. R. et al. (eds.) *Silence and voice in the study of contentious politics* (Cambridge: Cambridge University Press) pp. 179-194.

Goodwin, J. y Jasper, J. M. 1999 'Caught in a winding, snarling vine: The structural bias of political-process theory' en *Sociological Forum*, *14*(1): 27-54.

Harvey, N. 1998 *The Chiapas rebellion: The struggle for land and democracy* (Durham: Duke University Press).

Hellman, J. A. 1999 'Real and virtual Chiapas: Magic realism and the Left' en Panitch, L. y Leys, C. (eds.) *Necessary and unnecessary utopias: Socialist register 2000* (Near Woodbridge: Merlin) pp. 161-186.

Higgins, N. P. 2004 *Understanding the Chiapas rebellion: Modernist visions and the invisible Indian* (Austin: University of Texas Press).

Hipsher, P. L. 1998 'Democratic transitions and social movement outcomes' en Giugni, M. G. McAdam, D. y Tilly, C. (eds.) *From contention to democracy* (Lanham: Rowman and Littlefield) pp. 149-167.

Hirales, G. 1998 *Camino a Acteal* (México D.F.: Rayuela).

Instituto Estatal Electoral de Chiapas (IEE-Chiapas) 2003 'Procesos electorales' en <http://www.iee-chiapas.org.mx> Acceso 3 de octubre de 2003.

Instituto Federal Electoral (IFE) 2003 'Estadísticas de las Elecciones Federales de México' en <http://www.ife.org.mx> Acceso 3 de octubre de 2003.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 2005 Sistema Municipal de Base de Datos' en <http://www.inegi.gob.mx> acceso 5 de noviembre de 2005.

Jenkins, J. C. y Perrow, C. 1977 'Insurgency of the powerless: Farm worker movements (1946-1972)' en *American Sociological Review*, *42*(2): 249-268.

Jenkins, J. C. y Schock, K. 1992 'Global structures and political processes in the study of domestic political conflict' en *Annual Review of Sociology*, *18*: 161-185.

Jenkins, J. C.; Jacobs, D. y Agnone, J. 2003 'Political opportunities and African-American protest, 1948-1997' en *American Journal of Sociology*, *109*(2): 277-303.

Katzenstein, M. y Mueller, C. 1987 *The women's movements of the United States and Western Europe* (Philadelphia: Temple University Press).

Keck, M. E. y Sikkink, K. 1998 *Activists beyond borders* (Ithaca: Cornell University Press).

King, G. 1989 'A seemingly unrelated Poisson regression model' en *Sociological Methods and Research*, *17*(4): 235-255.

Kitschelt, H. 1986 'Political-opportunity structure and political protest: Antinuclear movements in four democracies' en *British Journal of Political Science*, *16*(1): 57-85.

Kriesi, H. et al. 1992 'New social movements and political opportunities in western Europe' en *European Journal of Political Research*, *22*(2): 219-244.

Kriesi, H. et al. 1995 *New social movements in Western Europe: A comparative analysis* (Minneapolis: University of Minnesota Press).

Kurzman, C. 1996 'Structural opportunity and perceived opportunity in social-movement theory: The Iranian revolution of 1979' en *American Sociological Review*, *61*(1): 53-70.

Land, K. C.; McCall, P. L. y Nagin, D. S. 1996 'A comparison of Poisson, negative binomial, and semiparametric mixed Poisson regression models' en *Sociological Methods and Research*, *24*: 387-442.

Legorreta, M. C. 1998 *Religión, política y guerrillas en Las Cañadas de la Selva Lacandona* (México D.F.: Cal y Arena).

Leyva, X. 2005 'Indigenismo, Indianismo, and 'ethnic citizenship' in Chiapas' en *Journal of Peasant Studies*, *32*(3-4): 555-583.

Leyva, X. y Ascencio, G. 1996 *Lacandona al filo del agua* (México D.F.: Fondo de Cultura Económica).

Long, S. J. y Freese, J. 2006 *Regression models for categorical and limited dependent variables using Stata* (College Station: Stata Corp) 2da edición.

Loveman, M. 1998 'High-risk collective action: Defending human rights in Chile, Uruguay, and Argentina' en *American Journal of Sociology*, *104*(2): 477-525.

Luke, D. A. 2004 *Multilevel modeling* (Thousand Oaks: Sage).

Mattiace, S. I. 1997 'Zapata Vive! The EZLN, Indigenous politics, and the autonomy movement in Mexico' en *Journal of Latin American Anthropology*, *3*(1): 32-71.

McAdam, D. 1982 *Political process and the development of black insurgency, 1930-1970* (Chicago: University of Chicago Press).

McAdam, D. 1996 'Conceptual origins, current problems, and future directions' en McAdam, D.; McCarthy, J. D. y Zald, M. N. (eds.) *Comparative perspectives on social movements* (Cambridge: Cambridge University Press) pp. 23-40.

McCarthy, J. D.; McPhail, C. y Smith, J. 1996 'Images of protest: Dimensions of selection bias in media coverage of Washington demonstrations, 1982 and 1991' en *American Sociological Review*, *61*(3): 478-499.

Melel, X. 2003 *Síntesis Informativa, 1997-2003* (s/d).

Meyer, D. S. 2004 'Protest and political opportunities' en *Annual Review of Sociology*, *30*: 125-145.

Meyer, D. S. y Minkoff, D. C. 2004 'Conceptualizing political opportunity' en *Social Forces*, *82*(4): 1.457-1.492.

Minkoff, D. 1997 'The sequencing of social movements' en *American Sociological Review*, *62*(5): 779-799.

Moksnes, H. 2005 'Suffering for justice in Chiapas: Religion and the globalization of ethnic identity' en *Journal of Peasant Studies*, *32*(3-4): 584-607.

Noonan, R. K. 1995 'Women against the state: Political opportunities and collective action frames in Chile's transition to democracy' en *Sociological Forum*, *10*(1): 81-111.

Oberschall, A. 1996 'Opportunities and framing in the Eastern European revolts of 1989' en McAdam, D.; McCarthy, J. D. y Zald, M. N. (eds.) *Comparative perspectives on social movements* (Cambridge: Cambridge University Press) pp. 93-121.

Oberschall, A. 2000 'Social movements and the transition to democracy' en *Democratization*, *7*: 25-45.

O'Donnell, G. y Schmitter, P. C. 1986 *Transitions from authoritarian rule: Tentative conclusions about uncertain democracies* (Baltimore: Johns Hopkins University Press).

Pickvance, C. 1995 'Social movements in the transition from state socialism: Convergence or divergence?' en Maheu, L. (ed.) *Social movements and social classes: The future of collective action* (Londres: Sage) pp. 123-150.

Pickvance, K. 1997 'Social movements in Hungary and Russia: The case of environmental movements' en *European Sociological Review*, *13*(1): 35-54.

Piven, F. F. y Cloward, R. A. 1979 *Poor people's movements* (Nueva York: Vintage).

Rasler, K. 1996 'Concessions, repression, and political protest in the Iranian revolution' en *American Sociological Review*, *61*(1): 132-152.

Rootes, C. 2002 'Political-opportunity structures' en Barry, J. y Frankland, E. G. (eds.) *International encyclopedia of environmental politics* (Londres: Routledge) pp. 375-377.

Rootes, C. 2003 'Britain' en Rootes, C. (ed.) *Environmental protest in Western Europe* (Oxford: Oxford University Press) pp. 20-58.

Rucht, D. 1996 'The impact of national contexts on social-movement structures: A cross-movement and cross-national comparison' en McAdam, D.; McCarthy, J. D. y Zald, M. N. (eds.) *Comparative perspectives on social movements* (Cambridge: Cambridge University Press) pp. 185-204.

Rus, J. 1995 'Local adaptation to global change: The reordering of native society in highland Chiapas, Mexico, 1974-1994' en *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, *58*: 71-89.

Schock, K. 1999 'People power and political opportunities: Social-movement mobilization and outcomes in the Philippines and Burma' en *Social Problems*, *46*(3): 355-375.

Schulz, M. S. 1998 'Collective action across borders: Opportunity structures, networks capacities, and communicative praxis in the age of advanced globalization' en *Sociological Perspectives*, *41*(3): 587-616.

Smith, J. 1997 'Characteristics of the modern transnational social movement sector' en Smith, J.; Chatfield, C. y Pagnucco, R. (eds.) *Transnational social movements and global politics* (Syracuse: Syracuse University Press) pp. 42-58.

Stephen, L. 2002 *Zapata lives! Histories and cultural politics in Southern Mexico* (Berkeley: University of California Press).

Subcomandante, M. 2000 'Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional' en <http://www.jornada.unam.mx> acceso 12 de septiembre de 2006.

Taagepera, R. y Shugart, M. S. 1989 *Seats and votes: The effects and determinants of electoral systems* (New Haven: Yale University Press).

Tarrow, S. 1989 *Democracy and disorder: Protest and politics in Italy, 1965-1975* (Oxford: Clarendon).

Tarrow, S. 1994 *Power in movement: Social movements, collective action, and mass politics in the modern state* (Cambridge: Cambridge University Press).

Tarrow, S. 2005 *The new transnational activism* (Nueva York: Cambridge University Press).

Tilly, C. 1978 *From mobilization to revolution* (Reading: Addison-Wesley).

Van Cott, D. L. 2001 'Explaining ethnic-autonomy regimes in Latin América' en *Studies in Comparative International Development*, *35*: 30-58.

Villafuerte, D. et al. 1999 *La tierra en Chiapas: Viejos problemas nuevos* (México D.F.: Plaza y Valdés).

Viqueira, J. P. y Ruz, M. H. (eds.) 1995 *Los rumbos de otra historia* (México D.F.: UNAM).

Zdravomyslova, E. 1996 'Opportunities and framing in the transition to democracy: The case of Russia' en McAdam, D.; McCarthy, J. D. y Zald, M. N. (eds.) *Comparative perspectives on social movements* (Cambridge: Cambridge University Press) pp. 122- 137.

CÓMO CITAR ESTA PUBLICACIÓN:
Inclán, María. 2017. "Oportunidades como puertas corredizas: Los Zapatistas y su ciclo de protestas" Pp. 261-294 en Paul Almeida y Allen Cordero Ulate, Eds., *Movimientos Sociales en América Latina: Perspectivas, Tendencias y Casos*. Buenos Aires: CLACSO.

12

Giovanni Beluche V.*

PANAMÁ: LEVANTAMIENTOS OBREROS, INDÍGENAS Y POPULARES EN BOCAS DEL TORO**

EL CONTEXTO REGIONAL: EXCLUSIÓN, POBREZA Y DESIGUALDAD

Los últimos 30 años de historia en América Central muestran una inestabilidad política que va de situaciones explosivas a las de calma aparente. Esta inestabilidad regional es impulsada por los cambios productivos, políticos, económicos y culturales que han transformado las sociedades centroamericanas. Los procesos políticos más agudos ocurrieron durante los años 80, y resultaron en guerras civiles en varios países. Todos, con la excepción de Costa Rica, estaban gobernados por regímenes autoritarios. Los Acuerdos de Paz se firmaron al principio de los 90, dando lugar a procesos de democratización formal (Almeida, 2014), pero sin abordar las causas de los conflictos: gran exclusión social, pobreza material generalizada y desigualdad. Esto inició una fase de relativa estabilidad política y reactivación económica con poco impacto en el bienestar social, al punto que América Central es una de las regiones con mayor desigualdad en el mundo.

Transcurrida la primera década del nuevo siglo, hay pocos mecanismos para la redistribución de la riqueza generada y los sistemas democráticos siguen siendo muy frágiles. Además de pobreza,

* División de Extensión y Acción Social, Universidad Técnica Nacional de Costa Rica, San José, Costa Rica.

** Traducción de Eugenia Cervio y Sara Medina.

desigualdad y exclusión social, América Central se enfrenta a enormes problemas de vulnerabilidad ambiental (ver caps. 1, 17, y 18 en este volumen). En 1999, el Informe sobre el Estado de la Región[1] señaló la precariedad de los avances económicos y políticos. Quince años después se puede observar que las mismas debilidades aún persisten y, peor aún, con el regreso del golpe de Estado como mecanismo para dirimir disputas políticas.

El nuevo siglo comenzó con una fuerte caída en el crecimiento económico en casi todos los países como consecuencia de la desaceleración de la actividad económica global, una menor expansión del comercio mundial, los atentados del 11 de septiembre de 2001 y factores específicos de cada país. Dado que los Estados Unidos son el principal destino comercial de América Central, las fluctuaciones en su economía causaron un impacto inmediato y sensible en la región. Al finalizar la primera década del nuevo milenio, las severas consecuencias de la crisis capitalista global impactaban en las economías centroamericanas, demostrando una vez más la dependencia del istmo en la economía de Estados Unidos.

Si bien hay diferencias entre los distintos países, el modelo económico dominante aumenta la pobreza material, ensancha la brecha social, incrementa el desempleo y el trabajo informal, impone la flexibilización laboral y la desregulación de las relaciones laborales. El crecimiento económico es inestable y no fomenta el desarrollo social. La pobreza material afecta principalmente a los niños, las niñas y a los hogares encabezados por mujeres, y continúa siendo especialmente predominante en las zonas rurales. La pobreza material también se concentra en las regiones fronterizas, los territorios indígenas y costeros y en las zonas urbanas densamente pobladas.

Hace décadas, la cuestión de la integración política y económica se colocó en las agendas de los gobiernos, sin grandes avances. El advenimiento de las políticas neoliberales a partir de los años 80 favoreció al libre comercio, pero no mostró esfuerzos hacia la integración. Este objetivo estratégico ahora recuperó impulso, estimulado por las negociaciones y la firma de acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea.[2] Pero el mayor obstáculo para la integración sigue siendo el desarrollo desigual y combinado de los países y sus subregiones, que se refleja en las disparidades enormes. Los obstáculos para la integración y el desarrollo inclusivo se encuentran en las enormes diferencias en el desarrollo humano, los contrastes entre los sectores

1 Ver Estado de la Nación 1999 "Estado de la Región en desarrollo humano sostenible" (Costa Rica: Proyecto Estado de la Nación).

2 Panamá y Belice no han participado en esos acuerdos.

rurales y urbanos, las disparidades entre los enclaves modernos en las ciudades capitales que coexisten con vastas extensiones de pobreza y baja productividad en las mismas ciudades pero, especialmente, en las zonas rurales y fronterizas. En casi todos los países la región del Caribe sigue desconectada de la región del Pacífico, a pesar de ser extensa y muy rica en biodiversidad, recursos naturales y culturas. Las desigualdades entre los diferentes grupos sociales son alarmantes y han excluido a las mayorías del acceso a los servicios sociales y los beneficios del "desarrollo" –brechas entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres, entre indígenas, afro-caribeños y no indígenas.

Una breve revisión de la situación de la región, muy a grandes rasgos, deja claro que a pesar de las mejoras en los indicadores macroeconómicos, la implementación de mecanismos de redistribución de la riqueza socialmente producida , con el fin de mejorar el nivel de vida de la gran mayoría de los centroamericanos aún está pendiente. La fragilidad del proceso de democratización en varios países, la polarización política existente y los modelos de acumulación escogidos por los gobiernos auguran años difíciles por venir, en el camino que conduce a la construcción de sociedades más inclusivas y democráticas.

LA FLEXIBILIDAD LABORAL ESTABLECE EL TONO

Las políticas destinadas a socavar los derechos laborales y el debilitamiento de las organizaciones sindicales están en el centro del conflicto que se analiza en este capítulo, y que tuvo lugar en la provincia de Bocas del Toro (Panamá). La aprobación de una ley que, entre otras cosas, fue percibida como una agresión a los derechos de la clase obrera panameña desencadenó la crisis que se examinará a continuación. En una serie de publicaciones especializadas, la ONG ASEPROLA[3] y sus organizaciones aliadas han documentado y denunciado sistemáticamente las prácticas de flexibilización laboral y de las violaciones de los derechos laborales en Centroamérica. Las estrategias de flexibilización laboral apuntan a eludir el cumplimiento de los derechos laborales, en el contexto del modelo de liberalización económica imperante, como una ventaja competitiva (aumentando márgenes de ganancia) para empresas, basándose en la reducción de las garantías laborales y sociales de la clase trabajadora.

Siguiendo la misma lógica neoliberal de reducir o eliminar cualquier normativa considerada como barrera para el funcionamiento del libre mercado, la flexibilización laboral tiene como objetivo

3 Asociación de Servicios para la Promoción Laboral.

reducir al mínimo o suprimir las leyes creadas para proteger los derechos de las y los trabajadores. Las protecciones laborales y la negociación colectiva son consideradas, por las élites, como obstáculos para el desarrollo económico de la región. Esta flexibilidad tiene dos caras. Una parte se basa en reformas legales y la otra –la más común y generalizada en toda la región– se apoya en una flexibilidad *de facto*. Estas reducciones de los derechos previamente adquiridos por los sindicatos implican leyes nacionales e internacionales. La investigación realizada por ASEPROLA y la Campaña Regional contra la Flexibilidad Laboral demuestran la prevalencia de las seis estrategias de flexibilización:[4]

1. *Flexibilización de los contratos de trabajo:* es la estrategia principal para la violación de los derechos laborales, se implementa a través de la subcontratación, la externalización, la generalización de los servicios profesionales (disfraza la relación laboral) y las prácticas de trabajo a destajo domiciliario.
2. *Estrategias de flexibilización que violan el derecho de los trabajadores a un empleo estable:* se implementan a través de cambios en el nombre de la empresa, indemnización anual y minimización de la antigüedad de las y los trabajadores, cierres repentinos de empresas que reabren con nuevos nombres, contratos temporales, despidos tras el período de prueba, registro simultáneo de varias empresas en un mismo lugar de trabajo, despidos masivos injustificados alegando problemas financieros y ausencia de contratos por escrito.
3. *Estrategias de flexibilización que violan el derecho de los trabadores a una jornada limitada:* consiste en la extensión ilegal de la jornada de trabajo todos los días de la semana, a veces sin el pago de horas extras. Equiparación del medio-turno y el turno de noche, con el turno de día. Cómputo de horas por semana (4 × 3 o 4 × 4) en lugar de por día, sin el pago de horas extras. Eliminación de los descansos. Contratos por metas de producción en lugar de por los turnos de trabajo. Sobrecarga de trabajo y política de no contratar reemplazos por discapacidades, vacaciones y despidos. Combinación de múltiples funciones.
4. *Estrategias de flexibilización que violan el derecho de los trabajadores a un salario justo:* opera mediante la extensión de la jornada laboral sin pago de horas extras. Pago por metas de

4 Ver: Regional Campaign Against Labor Flexibility 2010 *Labor flexibility violates labor rights in Central America, trends and cases* (Costa Rica: Regional Campaign Against Labor Flexibility).

producción. Bonos de producción semanal, quincenal o mensual dependientes de la consecución de las metas diarias de producción. Retraso en el pago de salarios, sin el pago de intereses. Externalización a través de la cual la empresa tercerizada mantiene una porción de los salarios.

5. *Estrategias de flexibilización que violan el derecho de las personas que trabajan a la atención médica y/o cuidado de la salud y la seguridad social:* morosidad o falta de pago de seguridad social. Cambio de nombre de la empresa con el fin de evitar demandas. En las empresas tercerizadas, la falta de pago a la seguridad social es común. Deducciones ilegales a las personas con discapacidad o con licencia por maternidad. El personal médico de la compañía a veces encubre falta de pago de la cobertura social médica debido a una reducción en la cantidad de trabajadores y trabajadoras que buscan atención médica en las instalaciones de la seguridad social.
6. *Estrategias de flexibilización que violan el derecho de los trabajadores a formar sindicatos:* implementadas por medio de una violación directa del derecho a la organización sindical o a través de la persecución de los delegados sindicales. Despido de dirigentes sindicales, acoso de delegados y afiliados gremiales.

Todas estas prácticas violan los derechos laborales y sociales, además de violentar las normativas legales y los derechos humanos establecidos en una serie de convenios internacionales. A pesar de estas claras violaciones, las agencias responsables de hacer cumplir estos derechos implementan una política de impunidad que beneficia al sector empresarial. Estas estrategias de flexibilización se generalizaron en toda América Central pero hay escasas sanciones, lo que demuestra la complacencia de las autoridades responsables. El extremo ha sido el asesinato selectivo de dirigentes sindicales en varios países, especialmente en Guatemala, Honduras y Panamá.

ANTECEDENTES DEL LEVANTAMIENTO EN BOCAS DEL TORO

Los acontecimientos que tuvieron lugar en Panamá en julio de 2010 tienen sus antecedentes cercanos en el descontento popular provocado por la falta de mecanismos de redistribución de la riqueza socialmente producida. El crecimiento vigoroso de la economía panameña es claro: el Producto Interno Bruto (PIB) pasó de 23 mil millones de dólares en 2004 a 42 mil millones de dólares en 2008. El crecimiento económico alcanzó el 10,7% en 2008, en un aumento sostenido a partir de 2004. La tasa de crecimiento más baja de este período fue 7,5% (2004). Este crecimiento vigoroso no se tradujo en mejoras en la

calidad de vida de la vasta mayoría. Mientras se hablaba de una tasa oficial de desempleo del 5,2% en 2008, detrás de esta figura estaba oculto el enorme desempleo encubierto, con un sector informal que tiene un impacto visual inmediato en las grandes ciudades y que representa el 45% de los puestos de trabajo.

Con una economía dolarizada, el índice inflacionario en 2008 alcanzó 8,7%, el más alto desde los años 70. La danza de los millones generados por la economía transitista del Canal de Panamá[5] se concentró aún más en un grupo privilegiado cada vez pequeño, hasta el punto que Panamá está entre los tres países con las distorsiones más graves en la distribución de la riqueza en América Latina. Mientras que el PIB per cápita fue de USD $10.000 en 2009, la mayoría de los panameños no se benefician de la bonanza económica reciente. De hecho, el coeficiente de Gini en 2007 fue de 56,4, muy próximo a los coeficientes de Zimbabue (56,8) y Brasil (56,7), y más alto que los coeficientes de Nicaragua (55,1) y Honduras (55), respectivamente.

Con apenas 3,5 millones habitantes y una tasa de crecimiento económico impresionante, Panamá tiene un índice de pobreza vergonzoso de casi 30% a nivel nacional y 47% en las zonas rurales.[6] La población indígena asciende a unos 200 mil habitantes y la pobreza extrema cubre más del 90% de su territorio, según las estimaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Es el país de América Latina con el mayor número de personas encarceladas sin juicio. Los contrastes sociales en Panamá son extremos. Hay una abundancia de capital líquido en circulación y una burguesía presuntuosa que ostenta un estilo de vida del primer mundo. En contraste, la vida cotidiana de las mayorías se caracteriza por comunidades en áreas metropolitanas sin acceso al agua, con escuelas públicas precarias, un sistema de transporte público colapsado, bajos salarios que no alcanzan para la canasta básica de alimentos, informalidad generalizada, un sistema de atención médica y de salud saturado y niveles altos de violencia social y criminalidad.

LA CRISIS DEL BIPARTIDISMO Y EL GOBIERNO EMPRESARIAL

Con un 73% de participación electoral, Ricardo Martinelli y su Partido Cambio Democrático ganaron holgadamente las elecciones realizadas en mayo de 2009 con el 60% de los votos, frente al 37% obtenido por su rival Balbina Herrera, la candidata del Partido Revolucionario Democrático (PRD), fundado por el fallecido General Omar Torri-

5 El sector terciario, vinculado históricamente a la ruta de tránsito, emplea a dos tercios de la población activa.

6 CEPAL (2008).

jos Herrera. El gran número de votos obtenidos por Martinelli puede explicarse, principalmente, como un voto de castigo del pueblo panameño al PRD y al bipartidismo compartido con las diferentes fracciones del Partido Panameñista.[7] Los votantes expresaron su descontento por la desigualdad social sofocante creada por las políticas neoliberales, que se han implementado por cada uno de los gobiernos sucesivos desde la invasión militar de Estados Unidos en 1989 que derrocó al general Manuel Noriega. Este descontento se ha canalizado en una alternativa generada por las élites económicas (que se presenta como el Partido del Cambio Democrático), que es el resultado de una izquierda dividida[8] y de la dificultad de un sector importante con influencia sobre las clases populares de superar el sectarismo para construir una alternativa antineoliberal.[9]

El gobierno de Martinelli, que asumió el cargo el 1 de julio de 2009, se constituye de hombres de negocios, de sus empleados de confianza del sector privado y otros sectores conservadores como el Opus Dei, que ocupan puestos estratégicos en la administración. Un breve retrato familiar mostraría una imagen de Martinelli que se graduó de una academia militar en los E.E.UU. y en el INCAE; de un vicepresidente, una ministra de Educación y un ministro de Relaciones Exteriores que son activistas del Opus Dei.

La luna de miel entre los sectores populares y el nuevo gobierno no duraría mucho tiempo. Los acontecimientos acaecidos en julio de 2010 están arraigados en el descontento histórico de la gran mayoría de las y los panameños, ahora desilusionados por el incumplimiento de las promesas de cambio arengadas por el Partido del Cambio Democrático y el presidente Martinelli, que ya había sido parte del gobierno del PRD y del gabinete de Mireya Moscoso (Partido Panameñista).[10]

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES NO DAN TREGUA

Ni la alta participación electoral ni la luna de miel entre el nuevo gobierno y el pueblo, reflejados en las primeras encuestas de opinión, fueron capaces de eclipsar el sostenido descontento popular, expresa-

---

7 El Partido Panameñista volvió al poder ejecutivo en las elecciones presidenciales de mayo de 2014, pero el Partido del Cambio Democrático sigue manteniendo la mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional.

8 Un sector de la izquierda propuso al economista Juan Jované como candidato independiente, pero el Tribunal Electoral rechazó la candidatura. Tres días antes de las elecciones, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de Jované, pero era ya demasiado tarde para incluirlo en la boleta electoral.

9 Partido Alternativa Popular 2009 'Resultados electorales' (Panamá: en Internet).

10 Vázquez, Priscilla 2009 'The Defeat of the PRD in the Elections Does Not Mean the End of Hunger Politics' (Panamá: en Internet).

do a través de innumerables luchas en toda la República de Panamá. En este espacio sería imposible dar una descripción pormenorizada o un análisis extenso. Sin embargo, a modo de explicación preliminar, se destacarán algunos de los aspectos más significativos de la explosión social ocurrida en la provincia de Bocas del Toro y que más tarde se extendió a los principales centros urbanos.

El alto costo de la vida, los salarios paupérrimos, los caminos en condiciones deplorables, el turismo depredador, los proyectos de minería y represas, la falta de acceso al agua, el transporte público inhumano, la prevalencia del trabajo infantil, la inseguridad ciudadana, el deterioro de la infraestructura educativa y los contenidos de la educación pública, los exiguos servicios de salud pública, la flexibilización laboral, la invasión de empresas y colonos en territorios indígenas y los efectos de la crisis financiera mundial, son atisbos de esa otra Panamá excluida que se esconde tras los rascacielos, casinos y restaurantes lujosos, donde residen la élite y los beneficiarios exclusivos del modelo neoliberal imperante.

Una característica compartida por los movimientos sociales de la región centroamericana es la explosividad de los métodos de lucha. Los gobiernos les han demostrado a las organizaciones sociales que la única vía para ser escuchados es recurrir a los cortes de ruta, a las huelgas y manifestaciones públicas. La vía legal y las denuncias se han seguido usando, pero la impunidad es la regla para los delitos cometidos por políticos, empresarios y compañías transnacionales. El régimen político ha suprimido la independencia de poderes, que es la base de la democracia liberal. El Partido en el poder tiene el control de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, además de la Contraloría.

La defensa de los intereses empresariales para imponer la flexibilización laboral[11] ha conducido a serios conflictos con la clase trabajadora y otros grupos, vulnerando los derechos humanos. Destacan los enfrentamientos con los trabajadores de la construcción, que demandan condiciones de trabajo seguras entre otros reclamos, debido a las constantes muertes y accidentes de laborales en las obras. La respuesta del gobierno ha sido omisión, represión, detenciones arbitrarias y órdenes de captura contra dirigentes sindicales.[12]

Los sindicatos acusan al Ministerio de Trabajo de violar los derechos laborales. Después de un año de gobierno, la gestión del Partido Cambio Democrático no ha formalizado ninguna solicitud sindical.

---

11 Gandásegui, Marco 2009 'Analysis of the Elections' (Panamá: en Internet).

12 Incluso, algunos dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Construcción fueron asesinados durante las campañas de protesta. Estas acciones continúan impunes.

De las 19 solicitudes presentadas, rechazó 9 de manera completamente arbitraria. En menos de un año en el poder, los *rabiblancos*[13] han violado los derechos laborales y los acuerdos internacionales suscritos por Panamá, han liquidado la negociación colectiva y han "legalizado" el "derecho" de la policía a ultimar las manifestaciones.

También se han infringido las libertades de expresión e información. Más allá del cerco mediático, basado en el control estatal y la componenda con los grandes medios de comunicación, se ha llegado al extremo con el encarcelamiento del periodista Carlos Jerónimo Núñez por supuesta "difamación e injuria" contra un terrateniente de la provincia de Chiriquí, a quien denunció en varios artículos por producir desastres ambientales. En un comunicado de prensa, fechado el 2 de junio de 2010, la organización Unidad de Lucha Integral del Pueblo (ULIP) junto a otras agrupaciones denunciaron el cierre de programas de radio y televisión sin mediar otra explicación que "por órdenes superiores".

LA CLASE TRABAJADORA DE BOCAS DEL TORO MUESTRA EL CAMINO

Los eventos sucedidos en la provincia de Bocas del Toro durante el mes de julio de 2010 pueden ser categorizados como una insurrección obrera, popular e indígena, desencadenada por la lucha contra la Ley 30 (o Ley Chorizo), pero que también expresa el descontento acumulado durante varios años. Sectores como ambientalistas, campesinos, pueblos originarios y defensores de derechos humanos se articulan con la clase obrera y sus tradicionales métodos de lucha. Las movilizaciones en la lejana provincia de Bocas del Toro y la huelga general que se extendió a otras áreas del país, generaron una crisis política en la gestión de Martinelli, cuya magnitud era bastante impredecible.

Decir que la magnitud de la crisis era impredecible no implica desconocer el caldo de cultivo que estaba generando el descontento popular. Pero el gobierno empresarial se preparaba para celebrar su primer año en el poder con un alto índice de aprobación en las encuestas. El régimen político parecía ser sólido, al punto que decidió implementar un nuevo paquete de medidas neoliberales a través del Parlamento Nacional, sin calcular sus efectos resultantes. Durante los 2 meses previos a la crisis, el gobierno neoliberal aumentó el impuesto a las ventas del 5% al 7%, que afectó directamente el presupuesto de todos los consumidores; pasó la Ley Carcelazo, que criminaliza la protesta social; y, lo más importante, es que impuso la llamada Ley Chorizo (Ley 30) mediante el Congreso Nacional que

13 Argot popular panameño para la gente de las clases dominantes.

buscaba, entre otras medidas, liquidar al movimiento sindical.[14] Esta Ley, también conocida como 9 en 1, esconde modificaciones al Código Laboral, al Código Penal y a las normas jurídicas bajo el título de "Promoción de la Aviación Comercial". La nueva Ley, además, otorga potestad para declarar de interés nacional proyectos aciagos nocivos para el medio ambiente a discreción del Poder Ejecutivo, eludiendo así los estudios de impacto ambiental. Y, como si esto fuera poco, esta panoplia de leyes reforma la Ley de la Policía Nacional, creándole nuevas dificultades a la ciudadanía para protegerse ante el uso excesivo de la fuerza.

Todo el arco de medidas impuestas en el período previo al levantamiento de Bocas del Toro está dirigido a vulnerar derechos civiles, económicos y sociales, y carga el peso de la crisis económica global sobre las espaldas de la clase trabajadora, además de profundizar el modelo neoliberal imperante. En la ciudad capital había protestas y denuncias, pero fue en la provincia de Bocas del Toro donde la respuesta de los sectores populares fue más sostenida y militante.

BOCAS DEL TORO: UNA MEZCLA DE FACTORES

Vale preguntarse por qué el estallido más profundo se da en la remota provincia de Bocas del Toro. Un documento del Partido Alternativa Popular contiene una interesante reflexión sobre los factores que llevaron a que los trabajadores y trabajadoras bananeros tomaran la vanguardia contra el paquete de medidas del gobierno.[15] En las zonas indígenas que se encuentran en el istmo de Panamá, la tasa de pobreza material extrema supera el 90%; las zonas de Ngäbe -Buglé, Bri Bri y Naso-Teribe, de donde proviene la mayoría de la clase trabajadora bananera de Bocas del Toro, están entre las más afectadas por las condiciones de indigencia. De los casi 16 mil habitantes de la provincia, el 45% son indígenas de las culturas mencionadas antes. Seis de cada diez personas de Bocas del Toro son materialmente pobres y cuatro de cada diez viven en condiciones de pobreza material extrema.

La actividad turística se incrementó durante los últimos años, aunque circunscrita a la zona de las islas, ha generado limitados puestos de trabajo que requieren niveles de capacitación básicos, que la mayoría de los pobladores originarios no posee. La actividad bananera sigue siendo una importante fuente de empleo en vastas zonas de la provincia, bajo el control de la compañía transnacional Chiquita Brands. Como en toda zona bananera, la compañía marca el ritmo de

---

14 Obstaculiza el derecho a huelga, elimina la deducción de la cuota sindical y crea un organismo de representación sindical manipulado por el Ministerio de Trabajo.

15 Partido Alternativa Popular (2010).

la vida en la región, con la protección y complacencia de las autoridades nacionales y locales. Los trabajadores y trabajadoras están agremiados al SITRAIBANA, organización sindical representativa que es heredera de una larga tradición de lucha y que agrupa a unos 4 mil obreros y obreras .[16]

La pobreza y la desigualdad, junto a la creciente desilusión hacia un nuevo gobierno que profundiza el mismo modelo expoliador aplicado por sus predecesores, son el caldo de cultivo para la explosión social que estaba en ciernes. El detonante ocurrió cuando la compañía multinacional bananera se benefició con la nueva Ley Chorizo del gobierno, tratando de debilitar al sindicato negándose a recaudar y transferir las cotas sindicales. La respuesta de las y los trabajadores fue convocar a una huelga de 48 horas. La empresa no cedió, y la huelga fue declarada de tiempo indeterminado durante una asamblea de obreros y obreras bananeros. El gobierno, representado por la Ministra de Trabajo, cerró filas con la compañía; además respondió con bravuconadas, el Ministro de Seguridad y el Director de Policía profirieron acusaciones públicas en los medios contra los pueblos originarios, insultándolos al decir que se trataba de un movimiento de "unos pocos indios borrachos" (HREV, 2010).

Las y los trabajadores bananeros tomaron las calles y las comunidades locales salieron a respaldarlos. El gobierno envió cerca de mil policías para contener la huelga y las manifestaciones populares. El 7 y el 8 de julio marcaron la insurrección obrera y popular cuando se desató una violenta e injustificada represión estatal que dejó ocho muertos, incluyendo al líder Antonio Smith, afiliado a la Central Convergencia Nacional. Hubo centenares de heridos, con más de 50 de gravedad; las personas detenidas por las fuerzas de seguridad se contaban por cientos. Esta salvaje represión no hizo claudicar al pueblo de Bocas del Toro, lo que obligó al gobierno y la compañía a negociar la suspensión de aquellas secciones de la Ley Chorizo que contravenían los derechos sindicales.

BREVE CRONOLOGÍA DE LA CRISIS

A continuación, presento una breve cronología de los sucesos que tuvieron lugar los primeros días de julio de 2010 en Bocas del Toro. Para mayor información se recomienda, entre otros documentos, el trabajo de la organización de derechos humanos Human Rigths Everywhere

16 Aunque la última gran huelga bananera fue en los años 60, el sindicato ha mantenido la tradición de los clásicos métodos de la clase trabajadora: asambleas gremiales, control obrero de la empresa, piquetes, vigilancia obrera en las zonas periféricas, etcétera.

(HREV).[17] Como respuesta a la implementación de la Ley Chorizo por parte del gobierno y la compañía bananera, y exigiendo la derogación de los artículos lesivos de los derechos laborales, ambientales, penales y represivos y/o policiales, el viernes 2 de julio se inicia una huelga de 48 horas convocada por el SITRAIBANA y 4 sindicatos independientes. Las familias y los pobladores de las comunidades se sumaron a la protesta. El gobierno respondió mediante el despliegue injustificado de las fuerzas de seguridad. El 2 y 3 de julio hubo manifestaciones y cortes de ruta. El sábado 3 de julio la Bocas Fruit Company retuvo el pago de jornales, causando mayor descontento. Los manifestantes bloquearon la salida de los directivos de la compañía en la Parcela 13 de la región.

En respuesta a la falta de voluntad de las autoridades para negociar y por la retención de los salarios por parte de la compañía, el 4 de julio trabajadores bananeros declararon la huelga indefinida. El lunes 5 de julio se incrementaron los cortes de ruta, que aislaron a la ciudad de Changuinola afectando las actividades educativas, comerciales y turísticas. La indolencia del gobierno para ocuparse de la crisis era tal, que no fue sino hasta el martes 6 de julio que la Ministra de Trabajo, Alma Cortés, apareció en la escena del conflicto, aunque no llegó a ningún acuerdo con los huelguistas.

Luego del fracaso de la misión de la Ministra, la Policía Nacional intensificó sus acciones represivas. La resistencia popular continuó el miércoles 7 de julio, pese al asalto policial. Los choques con los manifestantes se extendieron y varios dirigentes sindicales y pobladores fueron arrestados. Las y los trabajadores exigieron la presencia del Presidente de la República, quien tuvo que cancelar su viaje a las finales del Mundial de fútbol, aunque tampoco fue a Bocas del Toro. En cambio, el jueves 8 de julio Martinelli envía al Ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, como jefe de la negociación. Para respaldarlo, el sábado 9 de julio el vicepresidente Juan Carlos Varela se unió a la comitiva.[18] Dejando un reguero de represión (que incluyó muertos, lesiones graves y arrestos masivos) la huelga concluyó el domingo 11 de julio con un acuerdo. Se convino la suspensión de los artículos de la Ley 30 (Ley Chorizo) que reclamaban los grupos sindicales durante un período de 3 meses.

BALANCE DE VÍCTIMAS Y VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS

Organismos de derechos humanos, ONG locales y miembros de la comunidad sostienen que la Policía Nacional utilizó una fuerza exce-

17 Basado en: HREV (2010).

18 Juan Carlos Varela ganó las elecciones presidenciales en mayo de 2014.

siva, escopetas con perdigones, fusiles de asalto, helicópteros, gases lacrimógenos y que les dispararon a los manifestantes en la cara. Una de las primeras víctimas fue el trabajador indígena Antonio Smith, quien recibió heridas múltiples de perdigones en el rostro.[19] Un informe presentado por la organización de derechos humanos HREV[20] reporta el fallecimiento de siete personas. Antonio Smith y Virgilio Castillo murieron a causa del accionar policial; Rubén Becker y Leonardo Santos por complicaciones respiratorias atribuibles a los gases lacrimógenos; Einar Quintero, Marcelina Carpintero y Florinda Peña, por eventos claramente relacionados con la represión, según ONG locales. Al momento del cierre del informe Valentín Palacios fue detenido, y aún sigue desaparecido.

El documento reporta que, por lo menos 256 personas resultaron heridas por disparos de perdigones, en 61 casos de gravedad (58 en los ojos y 3 con lesiones internas). Algunas de las lesiones provocaron ceguera irreversible. El análisis detallado de las áreas corporales impactadas por los perdigones indica que la mayoría de las víctimas sufrieron heridas por encima de la cintura, principalmente en la cabeza, los ojos, el pecho, la espalda y los brazos. Los testimonios registrados por HREV (2010) denuncian casos de tortura, trato cruel, inhumano o degradante de la Policía Nacional contra las y los detenidos. La policía también realizó arrestos en hospitales o cuando los lesionados buscaban o volvían de recibir asistencia médica.

A muchos les negaron la atención sanitaria a pesar de estar seriamente heridos. Se reportó que las fuerzas represivas proferían insultos racistas y amenazas de todo tipo a las personas detenidas, que les negaban la comida y les impedían dormir. Algunos prisioneros estuvieron incomunicados. El reporte incluye en detalle otras formas de tratos degradantes, como apuntar a la persona con un arma en la cabeza mientras estaba esposada y arrodillada; echar vinagre en las heridas abiertas; esparcir gas pimienta en la cara de personas detenidas; rociar gasolina en los alimentos antes de darlos; y muchos hombres y mujeres fueron despojados de sus ropas (HREV, 2010).

LA PROTESTA SE EXTIENDE DESDE BOCAS DEL TORO

Las noticias del levantamiento popular de Bocas del Toro fueron reportadas rápidamente, en particular por los medios informales y a través de las organizaciones sociales. Para evitar que trasciendan las noticias, la Policía tomó el control sobre la mayoría de puntos de acceso público a Internet. Las agencias de noticias y los medios de

19 Radio Temblor (2010).

20 HREV, op. cit.

comunicación privados informaban cautelosamente los hechos, presentándolos como una protesta más de grupos sindicales. Las televisoras costarricenses se enfocaron en los turistas de Costa Rica que habían quedado atrapados en la provincia del país vecino, otorgando poca importancia a la magnitud de la rebelión social y mucho menos a la violencia policial. Los medios sociales digitales se volvieron la principal herramienta de solidaridad e información. Las redes sociales transmitían noticias y expresiones de apoyo. En algunas ciudades centroamericanas hubo demostraciones frente a las embajadas de Panamá, exigiendo al gobierno panameño frenar la represión. Los noticieros televisivos y la prensa escrita de América Central ignoraron las acciones solidarias y siguieron dando informaciones aisladas. Sin embargo, los partidos políticos de izquierda y las organizaciones sociales y sindicales de la región intentaban romper el cerco informativo usando todos los medios a su alcance.

La inspiradora resistencia del pueblo de Bocas del Toro, sumada a la ineptitud del gobierno del Cambio Democrático para manejar la situación, se granjeó la simpatía de la mayoría de la población panameña. La dirigencia sindical nacional, primero temerosa y muy preocupada en mantener su poder relativo, no tuvo más remedio que llamar a una huelga general, que fue acatada parcialmente pero con una fuerte participación de sectores clave. Es llamativo que la CTRP[21] esperara hasta el 9 de julio para convocar una reunión de su Consejo de Delegados, a pesar del hecho de que SITRAIBANA está afiliado a esa confederación sindical. La huelga insurreccional en Bocas del Toro obligó a la dirigencia del CONATO,[22] a pasar de la denuncia contra la Ley Chorizo, a la acción y unirse al llamado hecho por la fracción independiente ULIP[23] para declarar la huelga general. Hasta ese momento la dirigencia del CONATO ni siquiera había tenido una reunión de su Consejo de Delegados. La organización sindical más grande de Panamá, constituida por el FRENADESO, condujo de manera independiente sus propias huelgas y movilizaciones de masas.

La ULIP convocó a un encuentro nacional cuando la Ley Chorizo fue enviada a la Asamblea Nacional, y tuvo un papel destacado en la huelga general del martes 13 de julio. El sindicato de trabajadores de la Coca Cola acató el llamado a huelga y los operarios paralizaron completamente la compañía; también acataron los sindicatos de docentes y de la construcción (SUNTRACS); la Federación Auténtica de

21 Central de Trabajadores de la República de Panamá.

22 Consejo Nacional de Trabajadores Organizados.

23 Unidad de Lucha Integral del Pueblo.

Trabajadores movilizó importantes sectores, destacándose los obreros de la compañía procesadora de lácteos La Estrella Azul y los de Cemento Panamá. En el resto del país la huelga no fue efectiva, con excepción de Bocas del Toro, aunque hubo marchas de protesta.

UN TRIUNFO PARCIAL Y FRÁGIL

La respuesta al llamado a huelga fue muy parcial, pero sobresalen dos triunfos políticos relativos atribuibles a los movimientos populares panameños:[24] la entrada a escena de las y los trabajadores industriales, que no se habían movilizado en años, y el alto de la ofensiva antipopular que venía librando el gobierno empresarial, que debió posponer la implementación de la llamada Ley Chorizo y aceptar que una comisión nacional revise la legislación. Más allá de que la comisión fue un factor desmovilizador y que implicaba el peligro de la legitimación de la Ley, el gobierno pretendía su implementación inmediata para desmantelar al movimiento sindical y erradicar cualquier resistencia a sus políticas neoliberales. El gobierno liderado por Martinelli perdió una batalla en el corto plazo (aunque no fue derrotado). El gobierno neoliberal experimentó el desgaste del respaldo popular y pagó un costo político por su torpe manejo de la crisis. La consultora de opinión pública *Dichter y Neira*, mediante un sondeo realizado a principios de julio, mostró una caída del 14% del índice de aprobación del presidente Martinelli. Si bien continuaba arriba del 50%, esta caída reflejaba una reducción considerable pues descendía desde el confortable 80% en que se encontraba previamente. A la pregunta de si lo volverían a elegir como presidente, el 60% de los encuestados dijo que no[25] *"porque no cumple sus promesas de campaña"*. A lo anterior hay que agregar el rechazo de la población a casi todo el gabinete, especialmente a los ministros de Trabajo y de Seguridad.

El nuevo contexto político, generado por la insurrección de Bocas del Toro y su correlato de protestas en el resto del país, no profundizó la crisis del gobierno porque en las calles durante la confrontación no hubo ninguna alternativa visible con influencia de masas. El descontento producido por la situación político económica que vive la gran mayoría de las y los panameños todavía no cuenta con canales de expresión política organizados, que se puedan percibir como una opción (con posibilidad de disputar el poder) que sea diferente de

24 Respecto a los movimientos populares, ver: Camacho y Menjívar (1989).

25 Curiosamente, al segundo día de haber presentado los resultados, esta información fue eliminada de la página en Internet.

los partidos tradicionales. Cuando Martinelli asumió la presidencia presentándose como la alternativa para el cambio, algunas medidas populistas ayudaron a consolidar su imagen. Pero, si el crecimiento económico no se traduce en mejoras para la calidad de vida y bienestar de las clases populares, el descontento continuará. Todo indica que el gobierno apunta a desarrollar aún más la tendencia actual hacia la concentración de la riqueza que, sumada al descrédito y la crisis interna del PRD,[26] abre oportunidades para una alternativa desde la izquierda panameña, que no ha podido aglutinarse debido al sectarismo de algunos de sus más destacados dirigentes (una tendencia que ha continuado hasta las elecciones de mayo de 2014).

Nada será igual que antes de la revuelta de Bocas del Toro, pero el gobierno podría recuperar capacidad de maniobra en la medida que la oposición se lo permita. Los movimientos sociales y populares panameños se fortalecieron, pero si no construyen sus propias herramientas políticas y continúan con las luchas fragmentadas podría haber una reforma constitucional con el fin de promocionar la reelección de Martinelli o de algún otro empresario.

Tampoco deberíamos descartar la profundización de las contradicciones de la improvisada alianza de gobierno, estimulada por la necesidad del Partido Panameñista de evitar desacreditarse. Las luchas y movilizaciones populares que vendrán pueden ampliar esas grietas o, alternativamente, la falta de unidad y la desmovilización podrán tener un efecto cicatrizante sobre tales heridas.

ESPACIO PARA UNA ALTERNATIVA POLÍTICA POPULAR

Años después de la crisis de Bocas del Toro, los crímenes cometidos durante la represión continúan impunes, mientras que la corrupción es rampante y no existe la separación de poderes del Estado. El gobierno tiene apoyo de las clases medias y las zonas rurales, los sectores populares siguen descontentos, pero la falta de alternativas contribuye a que reine la calma. El paso del tiempo y la pasividad de la oposición de izquierda han sido los mejores aliados de Martinelli, que continuó implementando su plan económico. El PRD no está muerto, pero por ahora no se ha recuperado de su crisis interna y sigue pagando por haber gobernado tantos años para los intereses del gran capital, que es el ganador en el modelo neoliberal. El Partido Panameñista forma parte del gobierno y ganó las elecciones presidenciales en 2014. Ahí reside una oportunidad para la creación

26 Partido Revolucionario Democrático, fuerza opositora y principal componente del bipartidismo que ha caracterizado el modelo de dominación en Panamá durante los últimos 20 años.

de una opción política alternativa –una visible y con influencia sobre segmentos importantes del movimiento obrero y popular bajo la forma de un frente amplio.

BIBLIOGRAFÍA

Abdallah A., Leda y Barillas, Byron 2009 *Estudio regional acerca del marco legal en derecho laboral y el estado actual de los derechos laborales. Centroamérica y República Dominicana* (Costa Rica: IIDH/USAID/PACT).

Almeida, P. 2014 *Mobilizing Democracy: Globalization and Citizen Protest* (Baltimore: Johns Hopkins University Press).

Ayala, Carlos 2010 *Análisis de las reformas laborales* (Panamá: s/d).

Beluche, Olmedo 1994 *Diez años de luchas políticas y sociales en Panamá* (Panamá: Edit. El autor).

Beluche, Olmedo 1999 *Estado, nación y clases sociales en Panamá* (Panamá: Edit. Portobelo).

Brown A., Harry 2009 *Partidos políticos y elecciones en Panamá: un enfoque institucionalista* (Panamá: Fundación Friedrich Ebert).

Camacho, D., y Menjívar, R. (coords.) 1989 *Los movimientos populares en América Latina* (México: Siglo XXI / Universidad de las Naciones Unidas).

Campaña Regional contra la Flexibilidad Laboral 2010 *Flexibilidad laboral violenta derechos laborales en Centroamérica. Tendencias y casos* (Costa Rica: Campaña Regional contra la Flexibilidad Laboral).

Campaña Regional contra la Flexibilidad Laboral y GMIES 2009 *Situación de los derechos laborales en Centroamérica*. Informe regional para la CIDH derechos laborales en Centroamérica. Centroamérica. Copia electrónica.

CEPAL 2008 *Anuario estadístico de CEPAL* (Santiago de Chile: CEPAL).

CEPAL 2009 *Panorama Social de América* (Santiago de Chile: CEPAL).

Chacón, José 2003 "Los Tratados de Libre Comercio y la integración social para la Centroamérica del Siglo XXI" en Aguilar S., Carlos (Comp.) *Los (Mal) Tratados de Libre Comercio* (Costa Rica: DEI).

Coronado, Jorge 2009 *La crisis en Centroamérica. Impactos y propuestas* (Costa Rica: Grupo Hemisférico Finanzas y Comercio, Comisión Nacional de Enlace-CNE).

Estado de la Nación 1999 *Estado de la región en desarrollo humano sostenible* (Costa Rica: Proyecto Estado de la Nación).

Estado de la Nación 2008 *Estado de la región en desarrollo humano sostenible* (Costa Rica: Proyecto Estado de la Nación).

Gandásegui, M. 2009 *Análisis de las elecciones* (Panamá: s/d).

HREV 2010 "Informe sobre la violación de los derechos humanos en Changuinola", Presentado en *Human Rigths Everywhere* del 7 al 11 de julio, Panamá.

Ministerio de Economía y Finanzas 2008 *Encuesta Nacional de Niveles de Vida* (Panamá: Ministerio de Economía y Finanzas).

Morales, Abelardo 2005 "La región centroamericana y los movimientos sociales". Ponencia presentada en el Encuentro Regional CEAL-Centroamérica. Costa Rica. Copia electrónica.

Obando, Juan Carlos y Rojas, Liliana 2007 *Mercado laboral en Centroamérica y República Dominicana* (Costa Rica: OIT/CECC/AECI).

Partido Alternativa Popular 2009 *Balance de las elecciones* (Panamá: en Internet).

Partido Alternativa Popular 2010 *Situación nacional. Directorio Político Nacional* (Panamá: en Internet).

Radio Temblor 2010 "Alerta, Panamá en pie de lucha" en *Reporte Periodístico*, 9 de julio (Panamá: en Internet).

Sojo, Carlos; Davis, Shelton y Gacitúa, Estanislao (Editores) 2004 *Desafíos del desarrollo social en Centroamérica* (Costa Rica: FLACSO/Banco Mundial).

ULIP/CONATO 2010 "Acción en defensa de la libertad de expresión". Comunicado de la Asociación Americana de Periodistas Bolivarianos, Colegio Nacional de Periodistas, Panamá.

Vázquez, P. 2009 *La derrota del PRD en las elecciones no significa acabar con la política de hambre* (Panamá: en Internet).

CÓMO CITAR ESTA PUBLICACIÓN:
Beluche V., Giovanni. 2017. "Panamá: levantamientos obreros, indígenas y populares en Bocas del Toro" Pp. 295-312 en Paul Almeida y Allen Cordero Ulate, Eds., *Movimientos Sociales en América Latina: Perspectivas, Tendencias y Casos*. Buenos Aires: CLACSO.

PARTE IV:
MOVIMIENTOS URBANOS
EN SUDAMÉRICA

13

Marisa von Bülow* y Germán Bidegain Ponte**

SE NECESITAN DOS PARA BAILAR TANGO: ESTUDIANTES, PARTIDOS POLÍTICOS Y PROTESTA EN CHILE, 2005-2013

INTRODUCCIÓN

En 2013, uno de los principales temas en debate durante las elecciones presidenciales en Chile fue la política educativa. La ganadora, la ex Presidenta Michelle Bachelet, hizo campaña con la promesa de promover una profunda reforma del sistema educativo, que incluía la propuesta inaudita de "avanzar decididamente hacia la universalización de la gratuidad".[1] No casualmente, en las protestas masivas de los dos años anteriores, lideradas por organizaciones de estudiantes universitarios, se exigían cambios profundos en el sistema educativo, en una oleada de movilización que sorprendió tanto a los activistas que coordinaron estas protestas como a los actores políticos en general. A pesar de la guerra de números –el gobierno y la policía restaron importancia a la participación, mientras que los activistas hicieron exactamente lo contrario– hay un consenso general de que estas han

* Instituto de Ciencias Políticas, Universidad de Brasilia, Brasil e Instituto de Ciencias Políticas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, Chile.
** Instituto de Ciencias Políticas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, Chile.

1 Ver la sección sobre educación en el Programa de Gobierno presentado durante la campaña, disponible en <http://michellebachelet.cl/programa/> en especial, p. 17.

sido las mayores manifestaciones en Chile desde la transición a la democracia en 1990 (Segovia y Gamboa, 2012; Somma, 2012). Las encuestas de opinión mostraron que la mayoría de los encuestados apoyó las protestas callejeras, y que la educación estaba entre las políticas públicas que más preocupaba a los chilenos, y que un magro 14% de los encuestados pensaba que el gobierno estaba haciendo un buen o muy buen trabajo en el área de educación.[2]

Este capítulo presenta el análisis de este importante movimiento, que se remonta en el tiempo para explicar su desarrollo a partir de 2005. Se presta especial atención a la relación entre el movimiento estudiantil y el sistema político. Más específicamente, presenta un análisis sobre su relación cambiante con los partidos políticos. Al hacerlo, no solo busca contribuir a los debates específicos sobre movimientos sociales en Chile, sino también a la discusión en curso en la literatura sobre movimientos sociales con referencia a las relaciones entre movimientos sociales y partidos políticos en contextos democráticos.

La relevancia de la interacción entre los partidos políticos y los movimientos sociales ha sido señalada por muchos investigadores de América Latina y de otros lugares, también (Goldstone, 2003; Van Cott, 2005; Arce, 2010; Almeida, 2010). A pesar de estas contribuciones, aún queda mucho por aprender acerca de las formas en que ocurren estas interacciones y sus cambios en el tiempo. Aunque estamos de acuerdo con la afirmación de que los límites entre "la política institucionalizada y no institucionalizada" son difusos y permeables (Goldstone, 2003: 2), también sostenemos una declaración tan amplia que solo puede ser un punto de partida. Más interesantes de entender son las variaciones en esta permeabilidad, las cuales dependen del contexto político específico, así como de las estrategias de los actores. Se ha argumentado que "el partido actúa como un puente entre la sociedad y el gobierno, y es un puente que los estrategas del movimiento no pueden resistirse a intentar cruzar" (Maguire, 1995: 202). El caso del movimiento estudiantil chileno muestra que esto no

2 Según las encuestas de opinión pública realizadas por el Centro de Estudios Públicos (CEP) a finales de 2010, el 38% de los encuestados pensaba que la educación era una de las tres áreas clave de política pública en las que el gobierno debía centrar sus esfuerzos. Este porcentaje aumentó a 44% durante el pico de las protestas (junio y julio de 2011), perdiendo importancia solo ante cuestiones de seguridad (47%). Los datos que comparan las respuestas a esta pregunta desde 1990 muestran que la educación nunca había sido considerada tan importante por tantos chilenos. A mediados de 2013, en la víspera de las elecciones presidenciales, la educación seguía siendo un área política clave para el 44% de los encuestados. A finales de 2011, más del 60% de los encuestados apoyó la organización de las protestas callejeras de los estudiantes. Ver datos disponibles en <www.cepchile.cl> acceso 31 de agosto de 2013.

es necesariamente cierto. Los muros que separan los movimientos sociales y los partidos políticos se pueden construir, demoler y construirse otra vez sobre un basamento diferente. También muestra que la posibilidad de cruzar ese puente puede crear tensiones internas dentro del movimiento, con importantes consecuencias en términos de sus estrategias y acciones.

Las movilizaciones estudiantiles son similares a otras protestas recientes en América Latina, en la medida en que se han puesto al frente y han centralizado la demanda de un mayor papel del Estado en la formulación de políticas públicas y, más concretamente, en la regulación de la función del mercado (Almeida, 2006, 2007; Roberts, 2008; Silva, 2009; Bellinger y Arce, 2011). Con el tiempo, el movimiento ha pasado de presentar una crítica específica al sistema de préstamos y becas, a abordar demandas cada vez más amplias que exigen el fin del lucro en el sistema educativo, el acceso igualitario a la educación, la garantía de la calidad en los programas terciarios y la democratización interna de las universidades. Estas demandas representan un gran desafío a los principios básicos del modelo educativo chileno que, como veremos, es uno de los sistemas más orientado al mercado del mundo. Así, en consonancia con otras protestas recientes en la región, el movimiento estudiantil chileno ha movilizado alrededor de un lineamiento o encuadre principal (Benford y Snow, 2000), que vincula las políticas neoliberales a la desigualdad y la injusticia.

Sin embargo, en países como Bolivia, Ecuador o Brasil, para citar solo tres ejemplos, algunos movimientos sociales han optado por la política electoral y los partidos políticos para lograr la ventaja necesaria para provocar un cambio (Almeida, 2010). A pesar de las significativas tensiones y ambigüedades en estos países, las coaliciones de centroizquierda que llegaron al poder en los últimos años tienen fuertes vínculos con los movimientos sociales (Silva, 2009). En Chile, sin embargo, el movimiento estudiantil no condujo a fuertes alianzas con los partidos políticos –todo lo contrario.

En este capítulo mostramos que, entre 2005 y 2013, se ha producido un creciente distanciamiento entre este movimiento social y los partidos políticos chilenos. Sobre todo, este proceso ha afectado la relación con los partidos de izquierda y centroizquierda que hasta entonces habían mantenido una fuerte presencia en el movimiento. Sin duda, esto forma parte de un cambio más general en las interacciones entre los partidos políticos y la sociedad civil. Como han señalado varios autores, a pesar de la continuidad histórica y la fuerza de su sistema de partidos políticos, Chile ha llegado a padecer el síndrome que también ha afectado a sus vecinos, que se caracteriza

por una creciente distancia entre los partidos políticos y la sociedad, en paralelo con una creciente crítica de los procesos electorales y las instituciones representativas (Roberts, 1998; Delamaza, 2005; Altman y Luna, 2011; Luna, 2011).

No obstante, si bien este proceso generalizado ciertamente es importante, en este capítulo sostenemos que los cambios en la relación entre el movimiento estudiantil y los partidos políticos son también el resultado de los intentos deliberados de las agrupaciones de activistas en pos de construir un movimiento más autónomo, que han tenido consecuencias importantes tanto dentro como fuera del movimiento. Internamente, para los partidos políticos implicó una pérdida de posiciones de liderazgo en las organizaciones estudiantiles y un fortalecimiento de las agrupaciones que se encuentran a la izquierda del espectro ideológico pero que rechazan todo vínculo con los partidos políticos tradicionales. Externamente, ha significado que los operadores políticos (*brokers*) tuvieron que enfrentar mayores obstáculos en sus intentos de construir puentes con los parlamentarios y funcionarios del gobierno, y hubo más resistencia de los líderes a participar de las negociaciones con esos actores. En general, para muchos líderes estudiantiles la crítica del sistema educativo iba de la mano con un rechazo de la política institucional y, más específicamente, de los canales representativos de la democracia.

Este no ha sido un proceso consensual, sino más bien uno muy divisivo e, incluso, contradictorio. De hecho, podemos señalar a varios líderes del movimiento que públicamente asumieron y defendieron su afiliación a partidos políticos. Sin embargo, estos líderes no eran la mayoría, y usualmente aclaraban con premura que no actuaban como activistas del partido sino como representantes del movimiento. En las elecciones de 2013, algunos ex líderes utilizaron la visibilidad y popularidad adquirida durante las protestas para lanzar campañas exitosas como candidatos al Congreso.[3] Sin embargo, al participar en política partidaria tuvieron que enfrentar el duro cuestionamiento de sus compañeros activistas, que les negaron su apoyo formal. Así, a pesar de los desacuerdos importantes dentro del movimiento mostramos que en las organizaciones estudiantiles los partidos políticos están menos presentes que en el pasado y sostenemos

3 Los ejemplos más conocidos atañen a los líderes más visibles de 2011 que ganaron escaños en la Cámara de Diputados en 2013: Camila Vallejo, del Partido Comunista, y Giorgio Jackson, de un nuevo movimiento independiente, Revolución Democrática. Además de Vallejo y Jackson, fueron elegidos otros dos líderes estudiantiles importantes: Gabriel Boric de otro movimiento independiente, Izquierda Autónoma, y Karol Cariola, también del Partido Comunista.

que, incluso en los casos en los que todavía tienen influencia, su poder se ha debilitado en el periodo estudiado.

Este capítulo se divide en dos secciones. La primera presenta las demandas del movimiento estudiantil a la luz de la situación actual del sistema educativo en Chile. Muestra que, a pesar de los avances significativos en materia de acceso a la educación, existen problemas importantes relacionados con la calidad educativa que afectan de manera desigual a diferentes grupos socioeconómicos. La segunda sección analiza el movimiento estudiantil de 2005 a 2013, con un enfoque especial en las protestas masivas que se realizaron en 2006 y, especialmente, en 2011. El análisis se basa en entrevistas con activistas realizadas entre octubre de 2011 y agosto de 2013,[4] así como en una revisión de los documentos producidos por las organizaciones estudiantiles y de los textos escritos por sus líderes.

¿EDUCACIÓN COMO UN DERECHO O COMO UN BIEN DE CONSUMO? EL SISTEMA EDUCATIVO Y LAS DEMANDAS DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

¡Lo que el pueblo necesita es educación gratuita, porque el pueblo está cansado de las leyes del mercado! (estribillo coreado durante las manifestaciones de protesta de 2011).

En julio de 2011, mientras que los estudiantes exigían en las calles el reconocimiento de la educación como un derecho de los ciudadanos, el Presidente Piñera declaró públicamente que la educación terciaria era un bien de consumo que debía ser concebido como una inversión personal que mejora las perspectivas de las personas que la adquieren.[5] Después de varios meses de protestas, esta declaración mostró la brecha abismal que separaba al gobierno de los estudiantes movilizados. Para entender esta polarización, es importante comprender las características básicas del sistema educativo chileno.

El sistema educativo actual se estableció en los años 80 durante la dictadura militar (1973-1989). Tras seguir los dictados del credo económico liberal, el régimen militar hizo cambios profundos en el sistema educativo tradicional, uno de cuyos principales objetivos

4 Entre febrero y noviembre de 2013 se realizaron 30 entrevistas con los líderes (aquellos que ocuparon cargos electivos clave en organizaciones de estudiantes durante 2006, 2010, 2011, 2012 y 2013) en las ciudades de Santiago, Concepción, Antofagasta y Punta Arenas.

5 Ver <http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/07/19/493428/presidente-pinera-afirma-que-la-educacion-es-un-bien-de-consumo.html> acceso 21 de agosto de 2013.

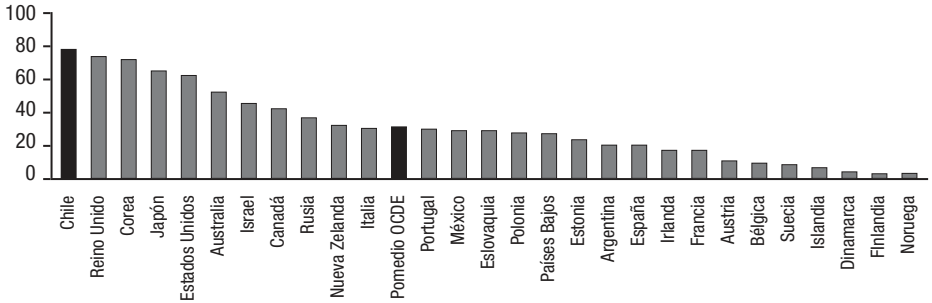
fue promover la mayor participación del sector privado en la prestación de servicios educativos. Después de la transición democrática de 1990, los gobiernos liderados por la coalición de centroizquierda Concertación de Partidos por la Democracia (en lo sucesivo, Concertación) invirtieron más recursos del Estado en el sistema educativo, con el objetivo de mejorar la calidad de la educación y ampliar su cobertura (Arellano, 2004; Donoso Díaz, 2005). Sin embargo, se mantuvo la estructura básica establecida por la dictadura que privilegia la provisión del mercado y la financiación privada (Cox, 2003: 16).

Los cambios realizados durante el período democrático han arrojado resultados mixtos. Por un lado, han tenido un gran éxito en términos de cobertura. En 1990, solo el 52% de la población entre 20 y 24 años había terminado la escuela secundaria. A partir de 2006, este porcentaje había aumentado al 80% (OECD y IBRD, 2009: 76). Con respecto a la educación terciaria (universidades, escuelas técnicas y formación pos secundaria), los números de inscripción también son impresionantes: mientras que en 1980 había menos de 120 mil estudiantes (OECD y IBRD, 2009), en 2011 hubo más de 1 millón (OECD, 2013). Por otro lado, el país ha fallado persistentemente disminuir la desigualdad en el acceso a una educación de calidad, y según la OCDE (OECD, 2013) tiene uno de los promedios más bajos de inversión pública en instituciones de educación superior. En consecuencia, como se muestra en la Gráfica 13.1, para la OCDE Chile es el país en el que los fondos privados representan el porcentaje más alto de los expendios en instituciones terciarias. En 2010, el 70,12% del expendio en instituciones de enseñanza superior salió de los hogares; el 22,11% fue inversión pública; y el 7,78% provino de otras entidades privadas.[6] Estos datos reflejan el hecho que, desde las reformas de los 80, la educación superior en Chile no es gratuita. El informe *Education at a glance 2013* de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE; OECD por sus siglas en inglés) propone una taxonomía que tiene en cuenta el costo de la matrícula y la ayuda financiera disponible para los estudiantes de diferentes países del mundo. Chile está clasificado como parte del grupo de "países con las matrículas más caras, pero con los sistemas de apoyo a estudiantes menos desarrollados" (OECD, 2013: 228).

Hay dos herramientas principales de ayuda financiera para los hogares de ingresos bajos y medios: préstamos y becas. Generalmente, las becas están condicionadas a los recursos de los hogares y a las calificaciones del estudiante en el examen de ingreso universitario.

6 Ver información disponible en <http://dx.doi.org/10.1787/ 888932846975>.

Gráfica 13.1
Aporte del expendio privado en las instituciones de educación superior, 2010 (en % del total)



Fuente: Elaboración propia, en base a datos publicados en la OCDE (OECD, 2013).

En 2009, solo el 13,8% de los estudiantes en las instituciones de educación superior recibieron algún tipo de beca (OECD, 2009: 106).[7] Con respecto a los préstamos, hay dos opciones principales respaldadas por el Estado. El Crédito Solidario (CS) es la opción más atractiva para los estudiantes (con bajas tasas de interés y condiciones más flexibles). Sin embargo, solo los estudiantes matriculados en las 25 universidades "tradicionales" (las instituciones de educación superior que existían antes de las reformas de los 80, que son también las más prestigiosas y las que exigen los mayores puntajes en el examen de ingreso) tienen acceso a este programa.[8] El segundo programa de préstamo fue establecido en 2005, como resultado de una alianza entre el Estado chileno y los bancos privados (pero con peores condiciones de contrato que el préstamo del CS). Este nuevo préstamo, el Crédito con Aval del Estado (CAE), está disponible para todos los estudiantes, y rápidamente se hizo muy popular. En 2009, después de 3 años de ejecución, la cantidad de deudores del CAE fue mayor que la cantidad de deudores de préstamo del CS tradicional (ver Gráfica 13.2).

De este modo, la expansión de la matrícula terciaria en Chile sucedió en paralelo con el endeudamiento creciente de grandes sectores de la sociedad. Si se consideran solo los estudiantes que utilizan los

7 Normalmente, las becas no cubren todos los costos de matrícula. Según la OCDE "se estima que las becas cubren, en la actualidad, entre 63% y 70% del costo real de la matrícula. Para el resto, los estudiantes deben solicitar préstamos" (OECD, 2009: 106).

8 Entre 1994 y 2010, más de medio millón de estudiantes utilizó el CS para pagar su educación (MINEDUC, 2011a: 11).

préstamos CS y CAE, en 2012 casi la mitad del total de estudiantes financiaba su educación a través de estos dos préstamos respaldados por el Estado, un número que es aún mayor si se le suman los estudiantes que contrajeron préstamos privados.[9] Las organizaciones estudiantiles tuvieron mucho éxito en conseguir apoyo en torno a una crítica dura al papel del mercado en la educación. Esto se realizó, inicialmente, concentrándose en los altos niveles de endeudamiento de los estudiantes y sus familias.

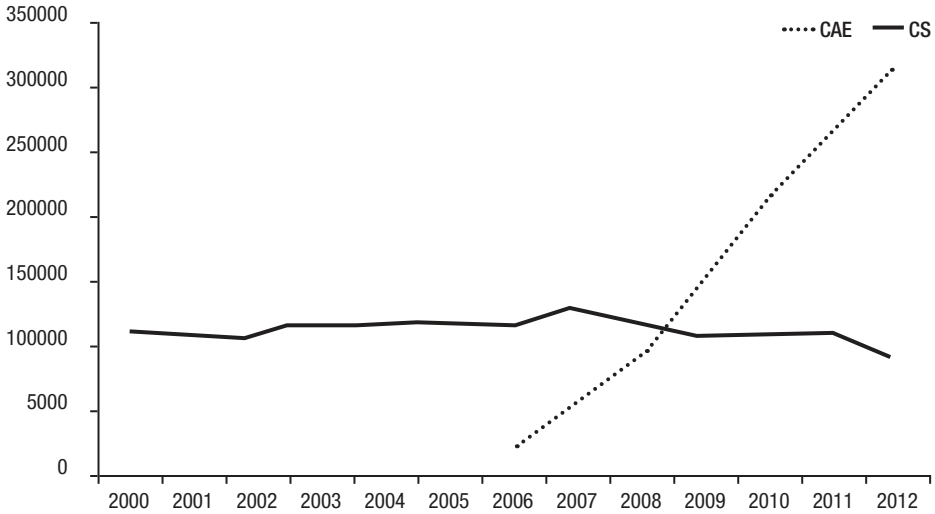
En conexión directa con las críticas de los estudiantes al sistema de financiación estaba la demanda de la aplicación de la ley que prohíbe lucrar a las universidades. De hecho, el eslogan más importante del movimiento estudiantil de 2011 fue: "No al lucro". El lucro fue presentado por los líderes estudiantiles como uno de los problemas centrales del sistema educativo y, además, considerado inmoral e ilegal. Hay tres tipos de instituciones de enseñanza terciaria en el sistema de educación superior chilena: Universidades, Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT). De acuerdo a la legislación chilena, las universidades tienen prohibido lucrar con sus actividades. Sin embargo, en Chile es ampliamente sabido que muchas universidades privadas, de hecho, obtienen ganancias (Mönckeberg, 2007), una situación que ha sido tácitamente aceptada por todos los gobiernos desde los años 80, independientemente de su orientación política. Según los estudiantes, las universidades deben reinvertir todas sus ganancias a fin de mejorar su calidad. Estas dos demandas clave –la revisión de la financiación y la aplicación de la prohibición de obtener lucro– fueron complementadas por una tercera, que consiste en garantizar el acceso a una educación de calidad para todos.

La desigualdad producida (y reproducida) por el sistema educativo puede ser presentada como un proceso de dos etapas. En una primera etapa, las instituciones primarias y secundarias segregan de acuerdo con el nivel económico de las familias: los estudiantes pobres van a las escuelas públicas, los grupos de ingresos medios asisten a las escuelas privadas subsidiadas por el Estado y los sectores de ingresos altos asisten a escuelas privadas de pago (Cox, 2003;

---

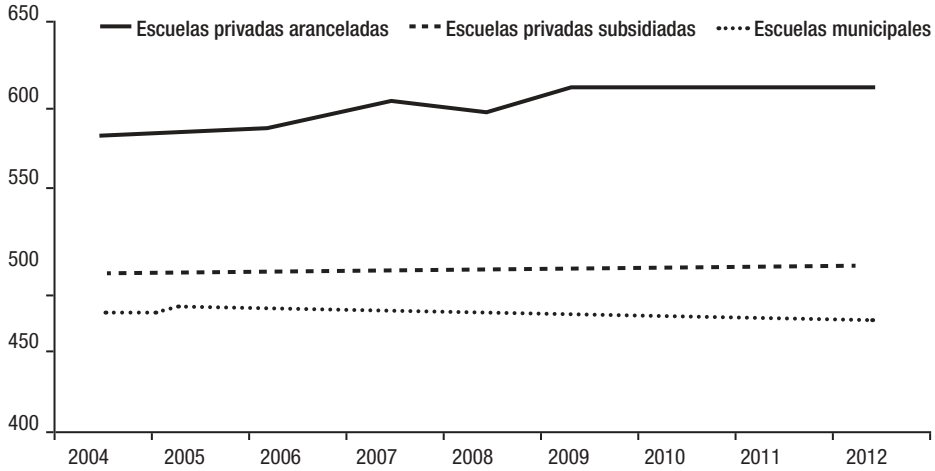
9 Es muy difícil saber la cantidad exacta de préstamos privados contratados, pero el número es alto. En un solo caso, el de los préstamos de la CORFO (Corporación de Fomento de la Producción de Chile), en 2012 había 106 mil estudiantes endeudados con este tipo de préstamo. Información divulgada por el Vicepresidente Ejecutivo de CORFO el 06/11/2013 durante la sesión de la Comisión de Educación, Deporte y Recreación de la Cámara de Representantes. La transcripción de la sesión está disponible en línea en <http://www.camara.cl/pdf.aspx? prmID=15577&prmtipo=ACTACOMISION> acceso 09 de agosto de 2013.

Gráfica 13.2
Cantidad de beneficiarios según tipo de préstamo por año (2000-2012)



Ref.: CAE, Crédito con Aval del Estado. CS, Crédito Solidario. | Fuente: Elaboración propia con datos del MINEDUC (2011b, 2013).

Gráfica 13.3
Resultados de la PSU según tipo de escuela por año (2004-2012)



Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educativo (DEMRE, Universidad de Chile). El DEMRE es la institución encargada de la Prueba de Selección Universitaria (PSU). La gráfica se basa en los datos de sus informes estadísticos anuales, disponibles en <www.demre.cl>.

García Huidobro, 2007).[10] La segunda etapa consecutiva se refiere al acceso a la educación superior. En Chile, la "Prueba de Selección Universitaria" (PSU) es un examen de ingreso utilizado por las mejores universidades. Cuanto mayor sea la calificación que un/a estudiante obtiene en la PSU, mejor es la educación terciaria que él o ella puede elegir. El problema con el sistema de selección de la PSU es que los resultados obtenidos reflejan las diferencias en la calidad de la educación que ofrecen las escuelas (ver Fig. 13.3). Como los estratos más pobres asisten a escuelas públicas, obtienen menores puntajes en la PSU. Por lo tanto, las puertas de las universidades y escuelas técnicas mejor clasificadas permanecen cerradas para ellos. Los líderes estudiantiles sostuvieron, en repetidas ocasiones, que esta era la realidad oculta detrás del tan celebrado mayor acceso de los sectores populares a la educación superior, a menudo citando datos de los informes de la OCDE. Según ellos, el sistema PSU no selecciona los mejores estudiantes, sino los más ricos.

A partir de los 90, los sucesivos gobiernos han hecho esfuerzos para mejorar la calidad de las instituciones terciarias. En 1999, se creó la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, que fue sustituida en 2006 por la Comisión Nacional de Acreditación y el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Este sistema no obliga a las instituciones a estar acreditadas, pero la acreditación conlleva algunos beneficios[11] y se ha convertido en una práctica común entre las universidades. En 2011, se acreditaron el 92% de las universidades. Las escuelas técnicas, que pueden otorgar títulos profesionales y técnicos, tienen una situación muy diferente. En 2011 se acreditaron solo el 39% de los IP y el 19% de los CFT (Jiménez de la Jara, Lagos Rojas y Durán del Fierro, 2011: 100). La calidad de la educación proporcionada por esas instituciones fue duramente criticada por los estudiantes, y se exigió un sistema de acreditación obligatorio. Por otra parte, aunque casi todas las universidades están acreditadas, los estudiantes sostuvieron que el sistema de acreditación no ha sido lo suficientemente transparente y que, por lo tanto, no garantiza la calidad de las instituciones acreditadas. En 2012 esas sospechas demostraron estar fundadas, cuando estalló un escándalo de corrupción

10 Según el Ministerio de Educación (2012), en el año 2011 el 39% de los estudiantes estaban matriculados en escuelas públicas, el 52% en escuelas subvencionadas y el 7% en escuelas privadas de pago. El 2% restante de los estudiantes estaban matriculados en instituciones secundarias financiadas por el Estado, pero administradas por actores privados que proporcionan capacitación técnica y profesional.

11 Por ejemplo, solo los estudiantes de las instituciones acreditadas pueden gozar del beneficio de ciertos préstamos respaldados por el Estado.

espectacular, que implicó directamente al Presidente de la Comisión Nacional Acreditación, que fue acusado de recibir sobornos. Como resultado, renunció a su puesto[12] y el Ministerio de Educación anunció una profunda reforma en el sistema de acreditación.[13]

Por último, un componente muy importante de la reforma educativa exigida por los estudiantes fue la democratización de las instituciones de educación superior. El movimiento estudiantil chileno, tradicionalmente, ha exigido procesos participativos que fomenten la intervención de los estudiantes en las estructuras de toma de decisiones de sus respectivas instituciones. La demanda tradicional de largo alcance del movimiento es la institucionalización del cogobierno, que asegure la participación de los estudiantes y trabajadores universitarios y su derecho al voto en las cuestiones decisivas de las universidades y escuelas técnicas, junto con los docentes y el cuerpo directivo. El marco legal actual, heredado de la dictadura, prohíbe explícitamente a todas las instituciones de educación superior que los representantes de los estudiantes y los sectores de trabajadores universitarios tengan derecho al voto en sus órganos de gobierno.[14] De hecho, la realidad actual de las organizaciones estudiantiles en el sistema de educación superior chileno está bastante lejos de las demandas de los estudiantes. Mientras que las universidades "tradicionales" permiten que los estudiantes elijan representantes y formen federaciones estudiantiles, en otras universidades los representantes son designados por las autoridades y, en muchos casos, el derecho de asociación está vedado (CONFECH, 2011). El movimiento estudiantil denuncia esta práctica como inconstitucional y como resultado de la desregulación del sistema universitario. Esta situación da cuentas de los muchos obstáculos que deben ser superados antes de pensar, siquiera, en la posibilidad de establecer el cogobierno en la educación superior chilena.

---

12 Ver <http://ciperchile.cl/2012/03/30/eugenio-diaz-renuncio-a-la-cna/> acceso 27 de agosto de 2013.

13 En enero de 2013, el Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso, que proponía la reforma del sistema de acreditación de las instituciones de educación superior. Actualmente, este proyecto de ley está en debate. Ver <http://www.gob.cl/destacados/2013/01/08/presidente-pinera-firmo-proyecto-de-ley-que-creanuevo-sistema-de-acreditacion-para-la-educacion-sup.htm> acceso 09 de mayo de 2013; y <http://www.biobiochile.cl/2012/12/17/ministro-beyer-pondra-suma-urgencia-aproyecto-que-busca-reformar-sistema-de-acreditacion.shtml> acceso 27 de agosto de 2013.

14 DFL 2 2010, Artículos 56 (letra e), 67 (letra e) y 75 (letra e). Esta fue una reacción de la dictadura contra la instauración del cogobierno en las universidades de la Reforma de 1968.

DE LA "TRAICIÓN" AL DISTANCIAMIENTO: LOS ESTUDIANTES Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Para comprender las movilizaciones de los estudiantes y su relación con el sistema de partidos chileno es imprescindible presentar una breve descripción de dos características importantes del sistema político del país. En primer lugar, las leyes electorales establecidas por la dictadura militar implican un fuerte incentivo hacia la concentración de los actores en dos alianzas electorales. No solo eso, sino que en el llamado sistema binomial dispuesto para las elecciones parlamentarias se estipula que, para ganar los dos asientos disponibles en cada distrito, el más votado de la coalición debe recibir dos veces el número de votos de la segunda mayoría. Por lo tanto, en la gran mayoría de los distritos cada coalición gana un escaño, dividiendo la composición final del Congreso en dos partes. Las leyes electorales en curso no solo tienden a sobrerrepresentar la primera minoría en el Congreso, sino que además restringen seriamente el acceso a los partidos políticos no incluidos en una de las dos coaliciones (Nohlen, 2000; Navia, 2008).

Las coaliciones que resultaron de estas normas son la "Concertación de Partidos por la Democracia" y la "Alianza por Chile". Entre 1990 y 2010, la Concertación ganó cuatro elecciones presidenciales seguidas. En 2010, la Alianza ganó las elecciones presidenciales por primera vez desde la transición del país a la democracia, pero en 2013 perdió de nuevo, esta vez ante una amplia coalición de partidos políticos que incluyeron a los de la Concertación más el Partido Comunista Chileno. Esta coalición, llamada Nueva Mayoría, le permitió a Michelle Bachelet ganar la Presidencia una vez más, en esta vuelta con una plataforma más izquierdista que incluyó, entre sus propuestas principales, la reforma educativa y una nueva Constitución.

Una segunda característica clave del sistema político es que hay normas estrictas respecto al número de votos necesarios para hacer cambios legislativos, lo que representa un importante obstáculo para las reformas. Antes de abandonar el poder, el gobierno militar promulgó leyes constitucionales en áreas estratégicas, incluyendo la educativa. Modificar estas leyes requiere lo que en Chile se conoce como "súpermayoría". En la práctica, estos requisitos de votación, junto con las normativas electorales que se explicaron anteriormente, aseguran que cada coalición puede ejercer un papel de veto a cualquier reforma de la Constitución.

Mientras que la Concertación ha sostenido tradicionalmente que fue incapaz de hacer reformas educativas sustanciales durante sus gobiernos debido a la capacidad de veto de los partidos de derecha, el movimiento estudiantil progresivamente se dio cuenta que

dentro de la Concertación misma había mucha resistencia a algunas de sus principales demandas. Como se argumentará a continuación, la experiencia de 2006 fue un hito importante en este proceso de aprendizaje que, más allá de la coalición en el poder, sería muy difícil lograr grandes cambios en el sistema educativo sin realizar, además, cambios en el sistema electoral y en el sistema de partidos políticos.

EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN EL TIEMPO: VOLVER A 2006

Bachelet, ¿estás con nosotros? (estribillo de los estudiantes que parafrasea el eslogan de campaña, "*Estoy contigo*", de la candidata presidencial Bachelet).

La "Revolución de los Pingüinos" no estaba siquiera cerca de ser realmente un movimiento revolucionario. Su nombre tiene que ver menos con impactos en las políticas públicas y más con la sorprendente aparición en la escena política de los estudiantes de las escuelas secundaria y preparatoria; un actor que nadie imaginó que tendría un poder de movilización tan amplio. Entre marzo y mayo de 2006, las protestas masivas que pedían cambios en la Ley de Educación pusieron gran presión en el entonces recién elegido Gobierno de la Presidenta socialista Michelle Bachelet, y catapultaron el sistema educativo a la cima de la agenda política.

Sostenemos que es imposible entender la relación entre los partidos políticos y el movimiento social de 2011 sin tener en cuenta lo que sucedió en este período. Sin embargo, en muchos aspectos la Revolución de los Pingüinos fue muy diferente de las protestas que sacudieron el país 5 años más tarde. En primer lugar, fue liderada por estudiantes secundarios, en contraste con los estudiantes universitarios que tomaron la vanguardia en 2011. De hecho, los estudiantes movilizados fueron apodados "pingüinos" por los uniformes blanco y negro que tenían que usar para ir la escuela. Asimismo, sus demandas tuvieron un enfoque un tanto diferente: pidieron el fin de las subvenciones públicas a las escuelas privadas, la des-municipalización[15] del sistema y boleto estudiantil gratuito. Además, a pesar

15 Las reformas militares de los años 80 descentralizaron la educación primaria y secundaria. Este proceso es conocido en Chile como la "municipalización" de la educación, porque los municipios pasaron a ser administrativamente responsables de las escuelas ubicadas en sus jurisdicciones. La demanda de "des-municipalización" apuntaba a reforzar el papel del Gobierno central en la prestación de educación pública.

de que fueron capaces de promover movilizaciones masivas, estas fueron más breves. La ola de movilizaciones que comenzó en 2011 ha sido mucho más sostenida y generalizada.

Lo más importante para este capítulo es que, en el año 2006, al menos una parte de la dirigencia estudiantil estaba estrechamente alineada con los partidos políticos de la por entonces coalición gobernante. Partidos como el Socialista y el Demócrata Cristiano, los más grandes de la Concertación, tenían estrechos vínculos con el movimiento estudiantil, que datan de antes de la dictadura. Como argumentaremos a continuación, la brecha entre el movimiento estudiantil y estos partidos políticos tradicionales se hizo mayor entre 2011-2013 de lo que fue durante las protestas de 2006.

Para los fines del análisis presentado en este capítulo, nos centraremos en esta última diferencia. A primera vista, las movilizaciones de 2006 son un caso claro de un movimiento social que intenta sacar provecho de la apertura de la estructura de oportunidad política. La elección de una presidenta socialista, que en 2005 basó su discurso de campaña en la necesidad de una mayor participación ciudadana, fue percibida por muchos líderes pingüinos como un momento positivo en el que habría menos represión. Al mismo tiempo, la presencia de aliados en el gobierno permitió mayores aperturas para el cambio (Donoso, 2013a: 21). De hecho, muchos estudiantes percibieron que el gobierno realmente quería hacer cambios, pero lo que podía hacer era limitado debido a la fuerza de la oposición en el Parlamento, y que el movimiento estudiantil podría ayudar al ejercer presión desde abajo.[16]

Después de varias semanas de negativas, en las que el gobierno primero ignoró las protestas y luego las criticó como "antidemocráticas" y violentas,[17] en junio de 2006 reaccionó de forma proactiva, aceptando algunas de las demandas estudiantes menores y proponiendo la creación de una Comisión Asesora sobre la Calidad de la Educación para discutir una propuesta de reforma más amplia. La gran Comisión anunciada por la Presidenta Bachelet contaba con 73 miembros, 12 de los cuales representaban a las organizaciones de estudiantes.[18] Si se debía o no participar en esta Comisión fue una

---

16 Entrevista personal con Daniel Carrillo, líder de estudiantes secundarios de 2006, Concepción, 30 de agosto de 2013.

17 En el primer discurso de la Presidenta Bachelet a la nación, en mayo de 2011, omitió las demandas de los estudiantes y se centró en una crítica de la violencia durante las protestas.

18 Ver <http://www.dii.uchile.cl/wp-content/uploads/2011/03/08_LA_TERCERA_Alto-nuuumero-de-integrantes-dificultara-a-trabajo-de-Consejo-Asesor-de-

cuestión de contención fuerte dentro del movimiento estudiantil. Al final, la mayoría decidió participar.[19]

Sin embargo, pocos días antes de la presentación del Informe de la Comisión, en diciembre de 2006, los representantes de los estudiantes se retiraron de esta, argumentando que el texto no reflejaba su requerimiento de una reforma clara y general del sistema educativo. En 2007, el Gobierno envió una propuesta legislativa al Congreso que incluía el cese de la financiación pública para las escuelas privadas que tuvieran fines lucrativos, entre otros cambios. Sin embargo, esta propuesta fue criticada fuertemente no solo por la oposición, sino también por los miembros de la coalición gobernante. Cuando, finalmente, en 2009 fue aprobada la nueva ley educativa (la Ley General de Educación) con los votos de ambas coaliciones, no incluyó ni una de las demandas clave de la Revolución de los Pingüinos. De hecho, durante todo 2008 los estudiantes protestaron contra el proyecto de ley, pero no lograron reproducir la masividad de las protestas de 2006. Los dirigentes estudiantiles involucrados en ese momento cuentan esta historia como una de frustración y, lo que es más importante, de "traición" de quienes consideraban aliados.

Aunque los principales líderes en 2011-2013 no eran los mismos que llevaron las movilizaciones de 2006, socializaron durante la experiencia del movimiento de los pingüinos, y muchos participaron personalmente en ambas olas de protesta. La evidencia de esta continuidad proviene no solo de las entrevistas que hemos realizado, sino también de los documentos y discursos que muestran la medida en que la perspectiva actual del movimiento ha sido formada por la experiencia previa. Como sostuvo en 2006 el presidente de una de las federaciones universitarias más importantes: "creo que nunca podré perdonar a Michelle Bachelet por la aprobación de la Ley General de Educación, y por la foto de los presidentes de la Concertación y la derecha con las manos levantadas celebrando el acuerdo. Menciono esto porque en el debate político no solo pesan los argumentos y la razón, sino también la experiencia, la confianza […]" (Grau, 2013). Otro líder importante en 2011 recuerda la misma foto, que fue tomada cuando se aprobó la nueva Ley: "mano a mano [...] los presidentes

---

Educaciooon.pdf> acceso 18 de enero de 2014.

19 La composición final de la Comisión contó con 82 miembros, 16 de los cuales eran representantes de los estudiantes. Ver el Informe Final de la Comisión, disponible en <http://www.facso.uchile.cl/ psicologia/epe/_documentos/GT_cultura_escolar_politica_educativa/recursos%20bibliograficos/articulos%20relacionados/consejoasesorpresidencialparalacalidaddelaeducacion(2006)informefinal.pdf> acceso 18 de enero de 2014.

de la derecha y los de partidos políticos de la Concertación [...]. Esta imagen representa la respuesta del sistema de partidos políticos a 2006, y tuvo un profundo impacto entre los estudiantes, condicionando la relación que establecerían con el sistema político en los años siguientes" (Figueroa, 2012: 81).

EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN 2011

El pueblo, unido, avanza sin partido (estribillo estudiantil coreado durante las protestas de 2011, que parafrasea la famosa consigna de principios de los años 70: "*El pueblo, unido, jamás será vencido*").

A principios de 2011, se desencadenó una nueva ola de protestas por el retraso en el pago de las becas públicas y por las manifestaciones de los estudiantes de una universidad privada (Universidad Central de Chile, UCEM), que se movilizaron contra una reforma que, en la práctica, legalizaría las prácticas de lucro en esa institución. Durante los meses de junio y julio, estas protestas reunieron a un número creciente de participantes. Entre mayo de 2011 y septiembre de 2013, se realizaron 23 protestas masivas en Santiago y en varias ciudades importantes del país. Se desconoce la cantidad de universidades y escuelas que estuvieron paralizadas porque los estudiantes ocuparon decenas de edificios durante largos períodos de tiempo a lo largo de Chile. Aunque el pico de este movimiento fue en julio y agosto 2011, las movilizaciones continuaron a lo largo de 2012 y 2013, con la promesa de muchas más por venir en un futuro cercano.

Al principio, la reacción del Presidente Piñera fue "esperar y ver" apostando a que el movimiento, eventualmente, se desgastaría. Sin embargo, como el índice de aprobación del Presidente se desplomó en los sondeos de opinión pública, y creció el apoyo al movimiento, el poder Ejecutivo trató de ajustar su estrategia a "la zanahoria atada a la vara". En julio de 2011, en un discurso en la televisión nacional, el Presidente propuso una serie de cambios en la política educativa. En esa ocasión, reconoció la necesidad de mejorar la calidad, acceso y financiamiento educativos, los tres pilares de la agenda del movimiento. El Presidente ofreció un "Gran Acuerdo Nacional por la Educación" (GANE), que incluía más fondos públicos para educación, un aumento en la cantidad de becas y una reducción en las tasas de interés para préstamos educativos. Sin embargo, el Presidente también se refirió a la posibilidad de legalizar el lucro en las universidades. Al mismo tiempo, se usaron con intensidad tácticas represivas contra

los manifestantes, llegando a su punto culminante en agosto de ese año.[20]

Para entender la relación entre los líderes estudiantiles y el Gobierno de Piñera, es importante tener en cuenta que ninguno de los partidos de la coalición gubernamental tenía representación alguna en las organizaciones estudiantiles más importantes. En Chile, los estudiantes de las llamadas "universidades tradicionales" forman federaciones, cuyos/as delegados/as electos/as se reúnen periódicamente en una Asamblea: la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH). Mientras que la Federación de cada Universidad es autónoma, la CONFECH es un espacio articulado de decisiones estratégicas del movimiento como un todo. A principios de 2011, solo una Federación tenía un presidente de derecha, pero una vez que la movilización cobró importancia este presidente fue derrocado y reemplazado por un nuevo líder, que era crítico con el Gobierno.[21] Por lo tanto, la Alianza no tuvo ninguna influencia en los procesos de toma de decisión internos de los movimientos, ni mucho acceso a la información sobre lo que se debatía en las organizaciones estudiantiles. Por otra parte, las organizaciones estudiantiles adoptaron una actitud defensiva hacia el gobierno, ya que consideraban que este profundizaría el enfoque orientado al mercado del modelo educativo chileno. El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile de 2010 lo expresó de esta manera: "Cuando la derecha ganó [las elecciones], provocó un cambio total en nuestra agenda. Queríamos estar en una postura ofensiva, pero tuvimos que asumir una defensiva porque el gobierno llegó con una agenda de privatización".[22]

En contraste, durante los gobiernos anteriores de la Concertación esa coalición siempre había contado con aliados dentro del movimiento estudiantil, por lo general activistas que pertenecían a las juventudes de los partidos políticos de centro e izquierdas. Esto significaba que el gobierno no solo podía controlar lo que estaba sucediendo al interior de las organizaciones estudiantiles, sino también tratar

---

20 Según datos policiales oficiales, las protestas organizadas durante los días 4, 18, 24, y 25 de agosto culminaron con 2.434 manifestantes detenidos (datos proporcionados a los investigadores por Carabineros de Chile).

21 Ver <http://www.diarioelcentro.cl/?q=noticia&id=6536> acceso 09 de mayo de 2013.

22 Entrevista personal con Julio Sarmiento, presidente durante 2010 de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Santiago, 15 de agosto de 2013.

de influir en sus procesos de toma de decisiones. Úrsula Schüler, ex líder de una escuela secundaria y líder en la Universidad de Chile en 2010 destacó la capacidad de desmovilización de la Concertación en contraste con el Gobierno de Piñera: "la derecha [política] en Chile [...] ni siquiera tiene una línea de comunicación directa con los líderes. La Concertación sí tenía, tenía sus operadores en las reuniones […] que hablaban directamente con el Ministerio [de Educación...]. Si tu eras un militante del Partido Socialista, alguien del Partido Socialista en el Ministerio podía llamar y decirte, "'Oye, cuéntame acerca de la reunión de la CONFECH' [...] y 'no exageren, ya es suficiente' [...]. La derecha no tenía nada comparable a eso". [23]

Sin embargo, como se sostuvo en la sección anterior, estos lazos se debilitaron o desaparecieron después de la Revolución de los Pingüinos de 2006 y de la aprobación de la nueva ley educativa en 2009. Así, aunque en 2011 hubo algunos líderes estudiantiles que pertenecieran a, o simpatizaban con los partidos de la Concertación, no tenían tanta ventaja como antes dentro del movimiento. Como sostuvo uno de los participantes: "no creo que en 2011 hubiera una Concertación [dentro del movimiento...] Solo había diputados y senadores que estaban más cerca del movimiento, que hablaban más con Giorgio [Jackson, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica], con Camila [Vallejo, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile] y con Camilo [Ballesteros, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago...]"[24] Entre los partidos de la oposición, el Partido Comunista fue, sin duda, el que tuvo mayor presencia e importancia entre los líderes estudiantiles.[25] Algunos de los líderes más visibles pertenecían a la Juventud Comunista y desempeñaron un papel destacado durante los eventos de 2011. Sin embargo, en 2012, incluso la influencia del Partido Comunista había disminuido, tras haber perdido muchas federaciones estudiantiles ante grupos radicales independientes.

Un líder estudiantil moderado que participó en la CONFECH explica: "hubo un proceso de cambio. [...] En un momento, la Juventud Comunista y los independientes moderados eran una clara mayoría. Pero, a medida que avanzaba el año, este grupo se fue reduciendo progresivamente. Los comunistas perdieron el control de muchas de

---

23 Entrevista personal con Úrsula Schüler, secretaria general durante 2009 de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Santiago, 5 de junio de 2013.

24 Entrevista personal con Julián Parra, vice presidente durante 2010 de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Santiago, 23 de mayo de 2013.

25 En el Congreso este era un partido muy pequeño, con 3 diputados (de un total de 120 representantes) y ningún senador.

sus federaciones, y los grupos radicales se volvieron cada vez más influyentes dentro de la CONFECH".[26] La voluntad de negociar con los partidos durante el conflicto y su cercanía con los líderes estudiantiles de la Concertación fueron dos de los principales argumentos utilizados de forma recurrente por los grupos autodefinidos como independientes para disputar con éxito las presidencias comunistas en muchas federaciones. Según su relación con las autoridades políticas, estos grupos independientes se pueden dividir en dos. El primero estaba integrado por los líderes moderados que creían que podría ser conveniente llegar a acuerdos con el gobierno y la oposición. Muchos de ellos habían estado afiliados a partidos de la Concertación en el pasado, pero se hicieron independientes como parte del proceso de distanciamiento de la coalición. Uno de estos líderes describe su interacción con el Partido Socialista, en el contexto de su campaña por una federación: "[...] la persona a cargo de la Juventud Socialista en las universidades me llamó para darme su apoyo, ya que yo todavía era, formalmente, un militante. Le pedí que por favor no se presentara ni me apoyara. Si quería que ganáramos las elecciones, lo mejor era no hacer alardes, sobre todo, porque yo ya no me identificaba más con el Partido. Además, nadie confiaría en ti si tuvieras el respaldo de un partido como el Socialista".[27]

El segundo grupo de independientes estaba conformado por líderes más radicales que se definían como "antipartidos" y que progresivamente ganaron espacio en la CONFECH al ritmo que crecían las movilizaciones y se sumaban mayores sectores del cuerpo estudiantil. Los líderes tenían una percepción muy negativa de todos los partidos políticos representados en el Congreso y trataron de evitar cualquier alianza posible con ellos, argumentando que el movimiento podía ser manipulado. Los sectores de estudiantes antipartidistas en Chile son conocidos como los "ultra", aunque muchos de sus miembros no están de acuerdo con esta etiqueta y hay una importante diversidad entre ellos. Cuando se les preguntó de qué manera preferirían ser identificados, dieron diversas respuestas: "izquierda revolucionaria", "izquierda no tradicional", "izquierda anticapitalista", "izquierda antineoliberal" o "izquierda no parlamentaria". A pesar de su diversidad, la mayoría de estos grupos son escépticos acerca de las instituciones representativas e instan por modalidades de organización más horizontales. Entre ellos hay libertarios, anarquistas y los que defienden el legado de los grupos revolucionarios de los años 60-80.

---

26 Entrevista personal con Sebastián Vielmas, secretario general en 2011 de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Santiago, 11 de junio de 2013.

27 Entrevista personal con un líder estudiantil de 2011.

Un elemento que unificó las tres facciones políticas fue la percepción del Gobierno de Piñera como una amenaza. Sin embargo, en cuanto el movimiento estudiantil de 2011 comenzó a ganar ímpetu las diferencias entre ellos se hicieron cada vez más evidentes. Mientras que los grupos "ultra" se opusieron vehementemente a cualquier alianza con los partidos políticos, los Comunistas, los pro Concertación y los sectores independientes más moderados querían trabajar con la oposición para poder presionar al Gobierno. El arqueo de poder entre estos dos grandes grupos condicionó las estrategias del movimiento estudiantil hacia el Ejecutivo y el Congreso. Estas tensiones y su relevancia en la definición de la estrategia del movimiento fueron subrayadas por el líder estudiantil comunista Camilo Ballesteros. Aunque él no está de acuerdo con la posición más radical hacia la política institucionalizada, cuando se le preguntó qué habría sucedido si las facciones radicalizadas no hubieran tenido un papel importante, respondió: "Probablemente, en la primera ronda de negociaciones, habría tomado lo que me ofrecían, habría aceptado eso. Pero al cabo, los 'ultra' no nos permitieron hacer eso [...] al final, más allá del papel desempeñado por cada uno de nosotros, lo que sucedió, lo bueno y lo malo, ocurrió porque estábamos todos allí".[28]

Al utilizar la experiencia de 2006 como un mantra, muchos dirigentes estudiantiles destacaron que "no puede haber negociación sin movilización",[29] es decir, que nunca aceptarían la desmovilización como una condición para abrir el diálogo. La experiencia de 2006 también fue importante en el sentido que cambió la percepción con respecto de quiénes podrían ser los aliados del movimiento. Según el líder estudiantil Sebastián Vielmas, "[...] la experiencia de 2006 fue un fantasma mencionado recurrentemente por todo el mundo. En los momentos en que debatíamos sobre las posibles instancias de diálogo, una de cada cinco intervenciones era de alguien que decía que no podíamos dejarnos enroscar de nuevo, como en 2006. […] El aprendizaje ha significado una desconfianza total". Esta desconfianza de todas las autoridades políticas, a menudo, pone a los líderes estudiantiles en situaciones incómodas, por ejemplo, cuando fueron fotografiados con funcionarios de partidos políticos y esto llevó a acusaciones de estar "vendiendo" el movimiento.[30]

---

28 Entrevista personal con Camilo Ballesteros, presidente durante 2010-2011 de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, Santiago, 15 de agosto de 2013.

29 Entrevista personal con Pablo Iriarte, presidente en 2011 de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica del Norte, Antofagasta, 15 de julio de 2013.

30 Entrevista personal con Sebastián Vielmas, secretario general en 2011 de la

Como resultado, durante todo el año 2011 el movimiento estudiantil priorizó la confrontación, con su repertorio tradicional de acción colectiva: las protestas en la calle y la ocupación de edificios públicos y escuelas. Además, algunos estudiantes secundarios se declararon en huelga de hambre, una táctica radical que no fue apoyada por la totalidad de la dirigencia.

A medida que el movimiento ganó impulso y apoyo de la opinión pública amplió su marco de acción colectiva, centrándose en una reestructuración general del sistema educativo, así como en las críticas al sistema electoral y en exigir la reforma fiscal y una nueva Constitución. Ante un poder Ejecutivo que no estaba dispuesto a negociar este marco ampliado y con un debate interno sobre la conveniencia de hacerlo incluso si había una oportunidad, el movimiento estudiantil viró al poder Legislativo como una plataforma desde la cual sus críticas serían más visibles. Semejante movimiento presentó los límites reales en cuanto a lograr un cambio, porque la posibilidad de conseguir los votos necesarios para una reforma era muy escasa, pero al participar en debates públicos con los parlamentarios sobre cuestiones que trataron desde la calidad de la educación al presupuesto nacional del próximo año fueron capaces de generar nuevas "ventanas para el movimiento" (Figueroa, 2012: 144-145). Además, estas iniciativas no implicaban cambios en la posición de rechazo a las alianzas con funcionarios políticos.

En 2012, los líderes estudiantiles reconocieron que "no hemos sido lo suficientemente fuertes"[31] para lograr los objetivos del movimiento. De hecho, la evaluación general de ese año fue muy pesimista, así como las perspectivas para el futuro del movimiento. Aunque el movimiento había sido capaz de poner la educación en el centro del debate político y hasta había conducido a la caída de ministros de Educación, el único cambio concreto en políticas públicas fue la disminución de las tasas de interés en los préstamos estudiantiles. Debido a las demandas cada vez más ambiciosas, que apuntaban a una transformación estructural del sistema educativo, ese cambio no ha sido considerado por las organizaciones estudiantiles como una victoria importante. No obstante, debe destacarse que la variación en las condiciones de préstamo CAE tuvo consecuencias importantes para los 365 mil estudiantes endeudados que se beneficiaron con este empréstito. La Ley promulgada en septiembre de 2012 redujo las

---

Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Santiago, June 11 de junio de 2013.

31 Mesa Directiva FECH 2012 "Agosto Estudiantil: declaración mesa FECH sobre la toma Casa Central Universidad de Chile", 18 de agosto.

tasas de interés del 6% al 2% y condicionó el reembolso del préstamo al salario de los estudiantes endeudados. Mientras que antes la deuda se debía saldar mediante el pago de cuotas fijas, de acuerdo a la nueva Ley el pago mensual de los deudores no podía exceder el 10% de su sueldo.[32] Sin lugar a dudas, esta Ley fue una consecuencia directa del movimiento estudiantil, que benefició a un importante número de familias chilenas de ingresos bajos y medios.

En este contexto, al menos una parte de la dirigencia comenzó a pensar el cambio en un período más largo. Como declaró Federico Huneeus, presidente en 2008 de una de las federaciones de estudiantes más importantes, antes de las elecciones de 2013: "El hecho de que no negociáramos permitió que el debate permanezca abierto, lo cual, a su vez, posibilitó que nuestras demandas alcanzaran niveles más altos [...] hoy día son parte del debate presidencial [...]. Estamos en un proceso en el que todavía podemos continuar acumulando, denunciar y exponer" (Donoso, 2013b: 27-28). En una reunión de la Confederación de Estudiantes celebrada en abril de 2012, se decidió que el movimiento pensaría en términos de objetivos a corto y largo plazo, "con la comprensión de que alcanzar metas de corto plazo no significa el final de la lucha de los estudiantes".[33]

Otros activistas decidieron virar a la política electoral, y, como resultado, cuatro líderes estudiantiles de 2010-2012 muy conocidos fueron elegidos para el Parlamento. Teniendo en cuenta lo acotado del sistema político chileno que hemos descrito anteriormente, no fue una hazaña menor. Sin embargo, este resultado no contradice el argumento que hemos presentado en este capítulo sobre el creciente distanciamiento entre el movimiento y los partidos políticos. Antes bien, demuestra que este ha sido un proceso contencioso, lleno de ambigüedades y tensiones.[34] Como aclaró perentoriamente el Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC): los nuevos diputados "No son representantes del movimiento estudiantil. No son el movimiento estudiantil en el Parlamento".[35] Tal

---

32 Ver <http://www.gob.cl/informa/2012/09/26/presidente-pinera-promulga-ley-que-otorga-beneficios-a-deudores-cae.htm> acceso 09 de junio de 2013.

33 Acta de la Asamblea de la CONFECH, 27 de abril de 2012.

34 También cabe destacar que Camila Vallejo, una de las líderes estudiantiles electas, había perdido su reelección como Presidenta de la Federación de Estudiantes de su universidad en 2012 ante otra facción de estudiantes que criticó su afiliación al PC chileno.

35 Ver la entrevista a la presidenta de la FEUC del 26 de diciembre, en <http://www.emol.com/ tendenciasymujer/Noticias/2013/12/26/25098/Naschla-Aburman-La-pinguina-que-aprendio-la-leccion-no-ceder-a-la-primera.aspx> acceso 26 de diciembre de 2013.

declaración, procedente de una de las facciones más moderadas dentro del movimiento, refleja la persistencia de los elevados niveles de desconfianza a las autoridades políticas, incluso hacia las que nacen dentro del movimiento. Además, es importante señalar que la CONFECH se negó sin rodeos a apoyar a los candidatos en las elecciones, incluso a aquellos que hicieron campaña en apoyo de las demandas del movimiento.

A la dirigencia estudiantil chilena, la ideología de la coalición gobernante (de derecha o izquierdas) le importa menos que a las generaciones de activistas anteriores, al igual que la afiliación política de los representantes en el Congreso. Tal como el Gobierno de Piñera, el nuevo Gobierno de Bachelet tendrá que enfrentar el desafío de reformar el sistema educativo en diálogo con un movimiento radicalizado, cuyas demandas básicas cuentan con un fuerte respaldo de la opinión pública, pero cuyo liderazgo tiene puentes más escasos y endebles con los partidos políticos.

CONCLUSIÓN

El año 2011 pasó sin que finalizaran las protestas de los estudiantes, que se extendieron hasta 2012, y mientras escribimos este capítulo (a finales de 2013) todavía están en curso. Si en el año 2011 la movilización llegó a su punto álgido, en 2012 y 2013 se llevaron a cabo con regularidad manifestaciones masivas en todo Chile, las ocupaciones de escuelas o universidades casi se volvieron parte de la vida política habitual, cayeron más ministros de Educación y se siguieron debatiendo las iniciativas legislativas para reformar varios aspectos de la educación. No obstante, el núcleo de las demandas de los estudiantes está lejos de ser alcanzado. Por lo tanto, todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones categóricas sobre este caso. Sin embargo, como hemos argumentado, es posible identificar tendencias interesantes que ayudan a explicar la paradoja vivida en los últimos 3 años: el movimiento estudiantil ha demostrado una gran resistencia y capacidad de movilización, pero al mismo tiempo enfrenta obstáculos que parecen infranqueables para alcanzar el profundo impacto que busca.

Para entender esta paradoja, hemos argumentado que es importante considerar el distanciamiento contradictorio y ambiguo pero progresivo entre el movimiento estudiantil y los partidos políticos. Este distanciamiento es más claro en el caso de partidos como el Socialista y el Demócrata Cristiano, que han tenido históricamente una fuerte presencia en los movimientos sociales en general, y en el movimiento estudiantil en particular. Sin embargo, hemos demostrado que el Partido Comunista también ha sido afectado, y que, en general,

existe una brecha mayor entre este movimiento social y las instituciones políticas. La reciente evolución de los acontecimientos políticos en Chile proporciona evidencia de esto. En 2013, Michelle Bachelet fue elegida una vez más como Presidenta del país, apoyada por una amplia coalición que incluye al Partido Comunista.[36] Este giro de los acontecimientos puso a los líderes comunistas de 2011 en una encrucijada crítica, ya que continuamente habían negado la posibilidad de colaborar con la campaña de Bachelet.[37]

Stearns y Almeida (2004) señalan que los partidos de la oposición son una puerta de entrada importante para que los movimientos sociales construyan coaliciones de tipo actor estatal – movimiento social. Según estos autores, este tipo de coalición es un recurso importante para provocar las reformas políticas que requieren de movimientos sociales. Sin embargo, el caso chileno muestra un escenario diferente. Mientras que el gobierno recientemente electo ha incluido en su plataforma de campaña electoral muchos de los reclamos del movimiento estudiantil de 2011, las organizaciones de estudiantes han insistido en varias ocasiones que no tienen ningún tipo de vínculo con la coalición política de la Nueva Mayoría. Por lo tanto, si el nuevo Gobierno cumple sus promesas y efectivamente reforma del sistema educativo en el sentido esperado por el movimiento estudiantil, estaríamos frente a un escenario diferente que el descrito por Stearns y Almeida: uno donde el movimiento social logra provocar reformas políticas importantes sin participar en ninguna coalición de tipo actor estatal – movimiento social, ni dejar de tener una actitud desafiante y escéptica ante todas las autoridades políticas.

AGRADECIMIENTOS

La investigación que se debate en esta publicación ha contado con el apoyo de diversas instituciones: Global Development Network (GDN), el Projecto Fondecyt 1130897 y el Proyecto RS130002 de la Iniciativa Científica Milenio del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Las opiniones expresadas en este capítulo no son necesariamente las de GDN o de las demás instituciones de apoyo. Agradecemos a Joa-

36 En 2009 la Concertación y el Partido Comunista llegaron un acuerdo electoral que les permitió a los comunistas tener parlamentarios en el Congreso por primera vez desde la transición (fueron elegidos tres diputados). Sin embargo, este pacto electoral no integró al PC a la coalición. De hecho, el PC integró una coalición diferente con su propio candidato presidencial.

37 Ver, por ejemplo, las declaraciones de Camila Vallejo en <http://www.lanacion.cl/camila-vallejo-jamas-haria-campana-por-bachelet/noticias/2012-01-15/171839.html> acceso 09 de junio de 2013.

quín Rozas y a los otros miembros del grupo de investigación Fondecyt por su ayuda con las entrevistas realizadas a los líderes estudiantiles; y a Antoine Maillet y Sofía Donoso por sus comentarios a la versión anterior de este capítulo. Una versión preliminar fue objeto de debate en el seminario organizado por el Instituto de Ciencias Políticas en la PUC-Chile, agradecemos los profusos comentarios y sugerencias recibidos entonces.

BIBLIOGRAFÍA

Almeida, P. 2006 'Social movement unionism, social movement partyism, and policy outcomes: Health care privatization in El Salvador' en Johnston, H. y Almeida, P. (eds.) *Latin American social movements: Globalization, democratization and transnational networks* (Maryland: Rowman & Littlefield Publishers) pp. 57-73.

Almeida, P. 2007 'Defensive mobilization: Popular movements against economic adjustment policies in Latin America' en *Latin American Perspectives*, *34*(3): 123-139.

Almeida, P. 2010 'Social movement partyism: Collective action and oppositional political parties in Latin America' en Dyke, N. V. y Mc Cammon, H. J. (eds.) *Strategic alliances: Coalition building and social movements* (Minneapolis: University of Minnesota Press) pp. 170-196.

Altman, D. y Luna, J. P. 2011 'Uprooted but stable: Chilean parties and the concept of party system institutionalization' en *Latin American Politics and Society*, *53*(2): 1-28.

Arce, M. 2010 'Parties and social protest in Latin America's Neoliberal Era' en *Party Politics*, *16*(5): 669-686.

Arellano, J. P. 2004 "Políticas Sociales para el Crecimiento con Equidad: Chile 1990-2002" en *Serie Estudios Socio/Económicos*, *26* (CIEPLAN).

Bellinger, P. T. Jr. y Arce M. 2011 'Protest and democracy in Latin America's Market Era' en *Political Research Quarterly*, *64*(3): 688-704.

Benford, R. D. y Snow, D. A. 2000 'Framing processes and social movements: An overview and assessment' en *Annual Review of Sociology*, *26*: 611-639.

CONFECH 2011 "Petitorio CONFECH 2011" en <http://es.slideshare.net/comunicacionesfeuach/petitorioconfech-final> Acceso 8 de abril de 2013.

Cox, C. 2003 "Las políticas educacionales de Chile en las últimas dos décadas del siglo XX" en Cox, C. (ed.) *Políticas educacionales*

de Chile en el cambio de siglo: La reforma del sistema escolar en Chile (Santiago: Editorial Universitaria) pp. 19-114.

Delamaza, G. 2005 *Tan lejos tan cerca: Políticas públicas y sociedad civil en Chile* (Santiago: LOM).

Donoso, D. S. 2005 "Reforma y Política Educacional en Chile 1990-2004: El Neoliberalismo en Crisis" en *Estudios Pedagógicos*, *XXXI*(1): 113-135.

Donoso, S. 2013a 'Dynamics of change in Chile: Explaining the emergence of the 2006 *Pingüino* Movement' en *Journal of Latin American Studies*, *45*(1): 1-29.

Donoso, S. 2013b 'Repoliticising education policies and the politics behind them: Tracing the evolvement of the Chilean Student Movement's collective action frame', Paper prepared for the *2013 LASA Conference*, 29 de mayo a 1 de junio, Washington DC (unpublished).

Figueroa, F. 2012 *Llegamos Para Quedarnos: Crónicas de la Revuelta Estudiantil* (Santiago: LOM).

García Huidobro, J. E. 2007 "La 'selección de alumnos' en la Ley General de Educación" en *Docencia 32*: 20-27.

Goldstone, J. A. (ed.) 2003 *States, parties and social movements* (Nueva York: Cambridge University Press).

Grau, N. 2013 "El fin del lucro y las razones para dudar de Bachelet" en *Ciperchile*, 8 de abril, en <http://ciperchile.cl/2013/04/08/el-fin-del-lucro-y-las-razones-para-dudar-de-la-promesa-de-bachelet/>.

Jiménez de la Jara, M.; Lagos Rojas, F. y Durán del Fierro, F. (eds.) 2011 *Propuestas para la Educación Superior: Foro Aequalis y las Transformaciones Necesarias* (Santiago: INACAP-AEQUALIS).

Luna, J. P. 2011 "Chile 2011: protestas, partidos políticos y perspectivas de cambio" en *Revista Argumentos*, *5*(5): 1-11. en <http://revistargumentos.org.pe/chile_2011.html>.

Maguire, D. 1995 'Opposition movements and opposition parties: Equal partners or dependent relations in the struggle for power and reform? ' en Jenkins, J. C. y Klandermans, B. (eds.) *The politics of social protest: Comparative perspectives on states and social movements* (Minneapolis: University of Minnesota Press) pp. 199-228.

MINEDUC 2011a *Informe. Fondo Solidario de Crédito Universitario 1994-2010* (Santiago: Ministerio de Educación).

MINEDUC 2011b *Estadísticas de la Educación 2011* (Santiago: Ministerio de Educación).

MINEDUC 2013 *Ayudas Estudiantiles 2012: División Educación Superior* (Santiago: Ministerio de Educación).

Mönckeberg, M. O. 2007 *El negocio de las universidades en Chile* (Santiago: Random House Mondadori).

Navia, P. 2008 'Legislative candidate selection in Chile' en Siavelis, P. M. y Morgenstern, S. (eds.) *Pathways to power: Political recruitment and candidate selection in Latin America* (Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press) pp. 92-118.

Nohlen, D. 2000 'Binomial electoral system' en Richard, R. (ed.) *International encyclopedia of elections* (Washington, DC: Congressional Quarterly Press).

OECD 2009 *Tertiary education in Chile* (París: OECD Publishing).

OECD 2013 *Education at a glance 2013: OECD indicators* (París: OECD Publishing).

OECD & IBRD 2009 *Reviews of national policies for education: Tertiary education in Chile* (París: OECD Publishing).

Roberts, K. M. 1998 *Deepening democracy? The modern left and social movements in Chile and Peru* (Stanford: Stanford University Press).

Roberts, K. M. 2008 'The mobilization of opposition to economic liberalization' en *Annual Review of Political Science*, *11*: 327-349.

Segovia, C. y Gamboa, R. 2012 "Chile: El año en que salimos a la calle" en *Revista de Ciencia Política*, *32*(1): 65-85.

Silva, E. 2009 *Challenging neoliberalism in Latin America* (Nueva York: Cambridge University Press).

Somma, N. 2012 'The Chilean student movement of 2011-2012: Challenging the marketization of education' en *Interface: a journal for and about social movements*, *4*(2): 296-309.

Stearns, L. B. y Almeida, P. 2004 'The formation of state actor-social movement coalitions and favorable policy outcomes' en *Social Problems*, *51*(4): 478-504.

Van, Cott, D. L. 2005 *From movements to parties in Latin America: The evolution of ethnic politics* (Nueva York: Cambridge University Press).

CÓMO CITAR ESTA PUBLICACIÓN:
Von Bulow, Marisa and German Bidegain Ponte. 2017. "Se necesitan dos para bailar tango: Estudiantes, partidos políticos y protesta en Chile, 2005-2013" Pp. 315-342 en Paul Almeida y Allen Cordero Ulate, Eds., M*ovimientos Sociales en América Latina: Perspectivas, Tendencias y Casos*. Buenos Aires: CLACSO.

14

Sujatha Fernandes*

MOVIMIENTOS SOCIALES URBANOS EN VENEZUELA

Las ciudades han jugado un papel estratégico importante en los procesos contemporáneos de cambio social en América Latina, especialmente dada la concentración de población en ellas. Según Saskia Sassen, desde el inicio de la década del 80, la ciudad surgió como un terreno importante de nuevos conflictos y reclamos, tanto del capital global como de los sectores desfavorecidos de la población concentrada en las áreas urbanas (Sassen, 1998). A medida que las clases de elite emergentes se hicieron cada vez más poderosas y transnacionales, en virtud de los procesos de reestructuración neoliberal, la clase trabajadora informal urbana ha devenido en la clase con el crecimiento más rápido en el planeta (Davis, 2006). Desconectadas de la economía formal, carentes de estructuras sindicales o de acceso al bienestar social y estigmatizadas por las clases medias, las "nuevas ciudades de la pobreza" son sitios importantes para la organización política. La población creciente de una clase trabajadora informal situada en favelas o villas miseria y en chozas en los márgenes de las principales ciudades, para la sociología de la protesta tiene implicaciones que en gran parte han sido inexploradas.

* University of New York, New York, EEUU.

A partir de las caracterizaciones de James Scott de las "micropolíticas" como formas cotidianas de resistencia, los investigadores de de América Latina han proporcionado registros enriquecedores sobre la conciencia y la cultura entre los habitantes de los barrios pobres urbanos en la era neoliberal. Pero junto a estas formas cotidianas de resistencia y supervivencia, también están floreciendo espacios de participación popular, donde los pobres urbanos se han organizado y hacen valer sus derechos. James Holston sostiene que el desarrollo de los barrios autoconstruidos en las periferias de las ciudades brasileñas foguea una "ciudadanía insurgente", ya que los residentes impugnaron las condiciones de segregación e ilegalidad a través de las cuales fueron excluidos de la ciudad formal (Holston, 2008). Es este tipo de organización del movimiento social en los barrios de Caracas, el que intento describir en este capítulo.

Los movimientos sociales urbanos en Caracas son extraordinariamente variados y heterogéneos. Hay agrupaciones de cuadros militantes que tienen sus raíces en la lucha guerrillera de los 60, así como colectivos que operan a través de asambleas y acciones de masas, y agrupaciones culturales basadas en la música, el canto y la danza. Estos movimientos se articulan en "redes de movimientos sociales", definidos por Sonia Álvarez, Evelina Dagnino y Arturo Escobar como "lazos establecidos entre las organizaciones del movimiento, los participantes individuales y otros actores de la sociedad civil y política y del Estado" (Álvarez et al., 1998: 15-16). Como afirman los autores, la metáfora de la red nos permite imaginar "múltiples capas de entramados de los actores del movimiento con los terrenos naturales ambientales, político-institucionales y culturales-discursivos en los que están inmersos". Las luchas culturales, políticas y por la identidad se despliegan en territorios espaciales definidos –el barrio, la plaza y la calle–, lo que sugiere la importancia del espacio público en la formación de las redes de movimientos sociales. Los diferendos sobre el espacio público urbano y la recuperación de las áreas privatizadas están produciendo nuevas concepciones de la esfera pública, como arenas para la deliberación y expresión (Smith y Low, 2006). Distingo los movimientos sociales urbanos de los partidos políticos y los sindicatos por su base en las redes de la vida cotidiana, su ubicación en el espacio barrial, en lugar del local partidario o la oficina sindical, y por sus intentos de establecer vínculos independientes del Estado. Mientras que los sindicatos tienden a involucrarse en cuestiones que son más estrictamente económicas –como los salarios, la duración de la jornada semanal de trabajo y los beneficios– los movimientos sociales urbanos consideran la desigualdad económica como una dimensión de la

experiencia de la marginalidad y han tendido a formular sus acciones en términos culturales y simbólicos.

Los movimientos sociales urbanos participan intensamente en política cultural, un concepto que han elaborado los investigadores de los "nuevos movimientos sociales" como Álvarez, Dagnino y Escobar, entre otros. Las teorías estándares sobre acción colectiva en sociología y ciencia política, a menudo, son criticadas por no abordar las dimensiones culturales de los movimientos sociales, ni las luchas discursivas en las que participan o la construcción de identidad (Stephen, 1997).[1] La política cultural no se refiere solo a aquellos grupos que explícitamente despliegan protestas culturales o emplean formas culturales. También incluye los intentos de los movimientos sociales para desafiar y redefinir los significados y las prácticas del orden cultural dominante. Mientras que algunos movimientos tienen éxito en la negociación y procesamiento de sus demandas a nivel institucional –que las hace más visibles a los teóricos de la corriente principal de la acción colectiva– los otros están comprometidos en una política cultural que redefine el significado de la cultura política, cuestionando no solo a los que están en el poder, sino la forma en que ese poder es ejercido.

HISTORIAS POLÍTICAS URBANAS

La memoria histórica y las narrativas de resistencia son fundamentales para la auto-construcción de los movimientos urbanos contemporáneos. Los líderes comunitarios en los barrios trazan su genealogía desde los movimientos clandestinos contra el régimen militar en los 50, pasando por el período de lucha guerrillera de los 60, el activismo cultural de los 70 y el surgimiento de nuevas formas de resistencia urbana en la década de los 80. Al mismo tiempo, los movimientos urbanos han participado en el cambio de las relaciones clientelares con el Estado, promovidas por más de tres décadas de Estado de bienestar

1 Los nuevos teóricos del movimiento social van más allá de la concepción reduccionista de política y cultura política que se encuentra en la sociología dominante y cierta teoría de movilización de recursos para evaluar las múltiples esferas en las que la dominación es impugnada (Álvarez, Dagnino y Escobar, 1998: 11). Aunque algunos estudios sobre la teoría de la movilización de recursos, como los "marcos de acción colectiva" de Sidney Tarrow y los "incentivos de identidad" de Debra Friedman y de Doug McAdam, se refieren a la teorización de los procesos culturales, otros han estado más preocupados con los procesos institucionales y estructurales, y cómo se procesan las demandas del movimiento en las esferas institucionales (Álvarez, Dagnino y Escobar, 1998). También, mientras que los teóricos de movilización de recursos a menudo asumen la existencia de identidades colectivas, los impulsores de la nueva teoría de los movimientos sociales están más interesados en la construcción y negociación de identidades.

redistributivo, tamizadas por el Estado neoliberal y luego reelaboradas por Hugo Chávez, el líder izquierdista radical que estuvo en el poder desde 1998 hasta su muerte en 2013. El enfoque de los sectores urbanos contemporáneos hacia el Gobierno de Chávez contiene elementos de ambos: autonomía basada en historias de lucha local y dependencia mutua que ha evolucionado con el tiempo. Podremos entender con más claridad esta dinámica contemporánea, mediante la exploración de la formación de movimientos sociales urbanos en los barrios y su arraigo en las historias políticas locales.

Durante el período pos 1958 de régimen nacional-populista en Venezuela bajo el Partido Acción Democrática, también conocido como AD o adeco, la maquinaria política creó un espacio para canalizar a través de los aparatos del Estado las cuestiones sobre redistribución y desigualdad, y así controlar a los sectores populares y reducir los antagonismos sociales. Como en el caso de la Argentina peronista de los años 40, las masas de la clase trabajadora urbana en Venezuela iban a ser incorporadas a la política como una reconocida fuerza social. Esto significó cambios discursivos en el lenguaje político cotidiano, con mayor énfasis en la dignidad de los trabajadores y los límites del poder de las clases altas en el control de riquezas y recursos. En la economía moral del período nacional-populista, el dirigente era el representante de "el pueblo" y el encargado de la defensa de sus intereses. Sin embargo, a diferencia de la legitimidad populista de los sandinistas en Nicaragua, el populismo de los peronistas y los adecos tuvo un carácter más reformista que revolucionario. AD intentó construir un partido reformista policlasista, en la búsqueda de un desarrollo capitalista junto a los intereses propietarios (Coronil, 1997: 141, 218). Los dirigentes desmovilizaron a la clase trabajadora e incorporaron los sindicatos al Estado, estableciendo la negociación colectiva como el único canal mediante el cual los trabajadores podrían ejercer presión. La exclusión de la izquierda de los acuerdos y pactos reforzó el cambio de AD hacia un programa político centrista.

Mientras que la máquina política clientelar de adecos desarrolló raíces profundas en la sociedad venezolana, había sectores y grupos en los barrios que estaban insatisfechos con las condiciones de la "democracia pactada". La exclusión del Partido Comunista tuvo graves repercusiones para la estabilidad del futuro régimen. También hubo voces disidentes dentro de AD, particularmente entre la juventud militante que había participado en la lucha clandestina contra el régimen militar. En abril de 1960, la rama juvenil de AD abandonó el partido y formó el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), aliado al Partido Comunista. Además, el 1 de enero de 1959 había sucedido la Revolución Cubana bajo el liderazgo de Fidel Castro, y esto tuvo un

impacto importante en Venezuela y América Latina. Juan Contreras, un organizador de la comunidad que más tarde fundó la Coordinadora Simón Bolívar (CSB) en 23 de Enero, relató que "en este momento [los 60] la gente comenzó a dejarse crecer la barba, tomar las armas e ir a las montañas; estuviera o no justificado pensaban que podían hacer lo que había hecho Fidel". Izquierdistas y revolucionarios formaron pequeñas unidades de guerrilla en las montañas y en los barrios. En los años 60 hubo muchos enfrentamientos armados ya que la guerrilla intentó tomar el poder. El barrio 23 de Enero fue el foco de conflictos y de la insurgencia urbana. Según Juan:

> Los guerrilleros se ubicaron en los techos de los edificios como francotiradores para hacer frente a las fuerzas armadas del orden público, como la policía, la policía política, el ejército y la gendarmería, y como consecuencia de eso muchos jóvenes fueron asesinados y perseguidos.

La comunidad de San Agustín también fue importante para el desarrollo de la guerrilla, y los barrios sirvieron de refugio para los insurgentes. En esos días la policía venía a "peinar" los barrios buscando insurgentes; a veces venían vestidos de civil, y usaban un pañuelo de identificación para evitar matarse unos a otros por error.[2] En La Vega, las guerrillas armadas llevaron a cabo expropiaciones estilo Robin Hood.[3] Como en el movimiento previo contra el régimen militar, los barrios, una vez más, se convirtieron en el foco de los movimientos opositores.

Los 60 fueron los años más intensos de la lucha armada. Para muchos líderes contemporáneos de las organizaciones comunitarias en los barrios fueron años formativos. "De una forma u otra somos el resultado de toda esta historia que tiene que ver con la parroquia", dice Juan. "Nosotros, especialmente yo y muchos compañeros que hoy forman parte de la Coordinadora, crecimos viendo esto. Somos los herederos de todos ellos, de toda esta lucha que comenzó en aquellos años, y desde muy jóvenes nos incorporamos a la lucha política". Algunos activistas como Edgar "El Gordo" Pérez, de La Vega, luego criticó lo que consideraba la "receta cubana para la revolución" adoptada por la guerrilla. Pero la perspectiva y la lucha de la guerrilla se mantuvieron en la memoria de muchos habitantes del barrio, en particular de los jóvenes que pasaban a la vida adulta en ese período. La autonomía parcial de los movimientos sociales urbanos se estableció

2 Entrevista con Luisa Álvarez, historiadora popular, San Agustín, mayo de 2004.

3 Entrevista con Héctor Ramírez, activista político, La Vega, enero de 2004.

durante estos años de lucha armada, especialmente en las parroquias como la de 23 de Enero. Los activistas de la guerrilla forjaron un polo alternativo de memoria histórica, que se desplegó en paralelo y en contraste con la profundización de las relaciones clientelares entre los habitantes del barrio y el Estado.

La década del 70 estuvo marcada por un cambio en las tácticas guerrilleras de los años 60. En 1969, Rafael Caldera del Partido Demócrata Cristiano COPEI llegó al poder. Caldera presidió lo que se conoce como la "pacificación" de los movimientos guerrilleros; esto implicaba desarmar parcialmente a la guerrilla, aunque algunos grupos se mantuvieron activos en la clandestinidad. El fracaso de la estrategia de la lucha armada se enfrentó de varias maneras: algunos grupos pasaron a formar partidos políticos como el Movimiento al Socialismo (MAS), algunos crearon frentes de masas y otros optaron por una estrategia de activismo cultural. El enroque de la resistencia armada por la lucha cultural refleja, en parte, la despolitización de la izquierda como resultado de la pacificación. Pero, al mismo tiempo, las tácticas de resistencia cultural fueron entretejidas en el hilado continuo del activismo comunitario que pretendía impugnar la segregación constante de los barrios.

Los habitantes del barrio 23 de Enero también habían comenzado a formar organizaciones deportivas, culturales y comunitarias durante los 70. Los residentes de los bloques populares participaron en acciones de protesta similares a las de los habitantes de otros barrios. Exigieron al gobierno que abordara los problemas edilicios y del sector, tales como electricidad, telefonía y saneamiento (Contreras, 2000). Alejandro Velasco sostiene que la pacificación bajo Caldera había creado una apertura para el tipo de trabajo comunitario que había sido dejado de lado por los militantes y el Estado durante la época de la guerrilla: "una corriente alternativa de activismo cobró fuerza: la que enfatizaba en las necesidades de la comunidad por sobre los objetivos políticos y que recurría a formas de acción colectiva sin armas, aunque no siempre pasivas, para lograr resultados". Velasco (2011) describe el surgimiento de grupos culturales como el Movimiento Social, Cultural y Artístico (MOSCA) en el sector Sierra Maestra; Como Gotas de Lluvia sobre el Desierto en la Zona E; grupos de teatro; y campañas contra la droga. Hubo un cambio de perspectiva: de tomar el poder del Estado a la acción colectiva centrada en problemáticas locales.

Los años 80 vieron el crecimiento y la consolidación de las asociaciones de vecinos, un movimiento de ayuda mutua y policlasista de habitantes organizados para resolver los problemas locales. El movimiento de vecinos había surgido entre sectores de clases medias y

altas en los 70, como un medio para defender los intereses de estos sectores contra los partidos políticos y los alcaldes (López Maya et al., 1999; Ellner, 1999). En 1971, 14 asociaciones de vecinos acaudalados fundaron la Federación de Asociaciones de Comunidades Urbanas (FACUR).[4] Uno de los objetivos del movimiento de vecinos fue cuestionar los proyectos de edificación urbana que violaban las ordenanzas oficiales, tales como la instalación de centros comerciales en zonas residenciales o la eliminación de espacios verdes (Grohmann, 1996). Inicialmente, los movimientos de vecinos consistían en grupos de defensa que representaban los intereses comunes de los residentes del sector de clases medias y altas.

Las clases medias y altas comenzaron a desempeñar un papel importante en la política durante los 80, especialmente dada la legitimidad decreciente de los partidos políticos debido a sus problemas internos y la corrupción. En 1978, los grupos de clase media refrendaron la aprobación de una ley conocida como la Ley Orgánica de Regímenes Municipales (LORM), que le daba a las asociaciones de vecinos los derechos de representación exclusiva de sus comunidades y alentaba a los municipios a formar nuevas asociaciones. A partir de esta ordenanza, hubo un auge de movimientos vecinales entre los diferentes sectores sociales y regiones de Venezuela. Debido a los exiguos recursos disponibles a través del clientelismo político para satisfacer las necesidades de subsistencia de los pobres, el movimiento de vecinos comenzó a extenderse a los barrios.[5] Pero a diferencia de los movimientos de vecinos de clase alta y media, las asociaciones de vecinos en los barrios funcionaban de manera similar a las Juntas Pro-Mejoras y estuvieron fuertemente dominadas por AD.[6] En La Vega, se agruparon 56 movimientos barriales en el Frente para la Integración de la Comunidad (FREINDECO) que, se dice, fue una iniciativa de AD (Rollón y Luisa, 1995). Al igual que los comités y organizaciones previos, las asociaciones canalizaron las demandas locales a través de los partidos políticos.

Hacia mediados de los 80, un movimiento de organizaciones barriales había comenzado a emerger, en contraste con las asociaciones de vecinos que estaban vinculadas a un programa de clase media. Durante los 80, los barrios sufrieron un fuerte impacto por la crisis de la deuda y la posterior devaluación de la moneda, que derivó en el aumento del desempleo, la caída en el valor de los salarios reales,

---

4 Ellner (1999: 78).

5 López Maya, Smilde y Stephany (1999: 63).

6 Ellner (1999: 78-82).

pobreza y desigualdad crecientes, el incremento de delitos violentos y un marcado deterioro en los servicios públicos (Buxton, 2003). Estas condiciones resaltan las distintas preocupaciones de los sectores populares, y la necesidad de una acción independiente para abordarlas. Como describe Holston en el caso de las organizaciones comunitarias en Brasil, como la Sociedad de Amigos del Barrio (SAB) y las Comunidades Cristianas de Base (CEB) que se distanciaron de las relaciones clientelares durante el régimen militar en los 80,[7] las organizaciones barriales en Caracas también desarrollaron nuevas formas de participación civil demandando igualdad en el derecho a la ciudad, reclamando recursos y acceso a los servicios básicos de la ciudad legal. Sus demandas no fueron procesadas a través de los canales de mediación establecidos, como los partidos políticos, las asociaciones barriales y los sindicatos, sino a través de nuevos colectivos con sus raíces en los movimientos sociales de largo plazo. Las organizaciones barriales participaron en huelgas, retención de vehículos públicos y otras acciones de protesta que estaban fuera del repertorio de los movimientos de barrio, más orientados a la presión legal.

Un ejemplo de movimiento de barrio que incorporó tácticas de acción directa fue el Grupo de Trabajo La Piedrita (GTLP), en el sector Arbolitos II del barrio 23 de Enero. El grupo nació el 26 de diciembre de 1986, como resultado de varias asambleas populares en el sector. Uno de los miembros del grupo, Valentín Santana, dice que tomaron el nombre La Piedrita del nombre del sector donde viven, pero además porque "una pequeña piedra en el zapato te irrita, y queríamos ser la irritación del barrio para que la gente se organice". La Piedrita intentó rescatar espacios tomados por narcotraficantes, a través de la organización de fiestas populares y la limpieza de espacios públicos para el uso comunitario. En homenaje al Che Guevara, el grupo organizó una brigada conocida como Ernesto Guevara de la Serna. La brigada pintó murales en el barrio que conmemoraban a los mártires a manos de delincuentes o de las fuerzas de seguridad, para crear conciencia, llamar la atención sobre los problemas y ayudar a formular reclamos. Los murales se convirtieron en una herramienta importante de la organización. Uno de los principales muralistas del grupo, Nelson Santana, dijo que, "si mataban a uno de nuestros compañeros o si queríamos protestar por algo con un compañero de otro sector, íbamos y pintábamos un mural". Al mismo tiempo, como lo describe Velasco, La Piedrita tenía una presencia armada en respuesta a la violencia policial, basándose en el repertorio de los grupos de los 60 como las Unidades Tácticas de Combate. Según Velasco, el

7 Holston (2008) ver capítulo 7.

caso de La Piedrita ayuda a demostrar las formas en que la acción directa y el trabajo comunitario se sintetizaron en la parroquia.[8] En este período, hubo una convergencia de las tácticas radicales de los movimientos guerrilleros de los 60 con la acción colectiva local de los 70, que encontró su eventual expresión en la formación, por Juan Contreras y otros en 1993, de la organización militante, de cuadros: la Coordinadora Simón Bolívar.

MOVIMIENTOS SOCIALES URBANOS CONTEMPORÁNEOS

Una de las principales formas de movimiento social contemporáneo en Venezuela, y que ha unido a distintos movimientos sociales en el país, es la de los medios de comunicación comunitarios. De ahora en más, voy a hablar sobre las experiencias de los medios comunitarios y las que hacen referencia a los diversos movimientos sociales urbanos que han utilizado los medios comunitarios como un medio de creación de redes y la construcción de sus organizaciones.

El surgimiento de los medios comunitarios en Venezuela ocurrió después de 2002. Mientras que en 2002 había 13 estaciones comunitarias de radio y televisión con licencia a nivel nacional, a partir de junio de 2007 eran 193. Además de estas 193 estaciones legalmente reconocidas y financiadas, han surgido más de 300 estaciones comunitarias alternativas sin registrar. Asimismo, hay cerca de 100 periódicos comunitarios. Estos son editados y operados por una serie de grupos locales, en el Amazonas al sur de Venezuela, en la región andina, en la costa al norte del país y los barrios en los principales centros urbanos.

El auge de los movimientos sociales organizados a través de las redes de los medios de comunicación comunitarios se produjo después del golpe conducido por la oposición contra Chávez en 2002. Una de las razones podría ser el deseo de los sectores populares de tener control sobre los medios de comunicación tras el apagón mediático orquestado por la oposición durante el golpe de Estado. Muchos señalaron que los eventos del golpe fueron el incentivo que los llevó a la formación de sus propias estaciones de radio. Rafael Hernández fue uno de los fundadores del movimiento Macarao y su Gente, que surgió durante los 80 en la famosa parroquia de Macarao. Aunque el movimiento se había disuelto a mediados de los 90 después del golpe de Estado, Rafael junto a algunos otros formaron un colectivo radial y comenzaron a trabajar para emitir su radio al público.

La combinación de la nueva legislación, el aumento de fondos estatales disponibles para las emisoras comunitarias de radio y

8 Velasco (2011: 157-185).

televisión y la determinación de los sectores populares para tener acceso a sus propios medios de comunicación, tras el golpe de Estado, contribuyó al crecimiento de los medios de comunicación comunitarios y alternativos. Ciertas estaciones de radio con historia y trayectoria de larga data, como Radio Negro Primero y Radio Perola, sirven como núcleo para la multiplicación de emisoras radiales. Un trabajador de Radio Negro Primero describió cómo, una vez que recibieron su autorización, duplicaron su aplicación para otros grupos: "el proyecto detallado que presentamos al gobierno para obtener la autorización fue copiado por veinte grupos diferentes, copiaron el mismo proyecto y pusieron su firma, solo cambiaron el nombre del barrio".[9] La asistencia legal, la tecnología y las habilidades técnicas fueron pasando de una radio colectiva a otra, permitiendo la creación rápida de estaciones de radio en pleno funcionamiento. Los activistas de los medios fueron de zonas urbanas a zonas rurales, llevando equipamiento y demostrando las técnicas básicas de transmisión radial. La idea prendió y, al poco tiempo, germinaron radios de baja potencia en las ciudades y las zonas rurales de Venezuela.

Los movimientos sociales urbanos se basan en el entorno, la localidad y la identidad cultural en la creación de lenguajes alternativos de resistencia y oposición a los discursos de los medios de comunicación privados. Los impulsores de los medios de comunicación comunitarios han intentado radicar sus operaciones en el barrio. Las redes de medios comunitarios se basan en barrios locales –por ejemplo, Radio Perola es parte de la comunidad de Caricuao, Radio Macarao en la parroquia Macarao, Radio Al son del 23 en la parroquia 23 de Enero, Catia TV en la parroquia de la Catedral y Radio Negro Primero en Pinto Salinas. Estas estaciones forman parte de la vida social y cultural del barrio, son utilizadas por los movimientos sociales organizados y, a menudo, son sustentadas por el barrio.

Las interconexiones entre lugar, cultura e identidad son evidentes en los nombres de las estaciones de radio. La estación de Radio Negro Primero toma su nombre del barrio Negro Primero, donde se ubica la parroquia, y de un héroe mítico. Según Madera, un activista medios masivos, una parte del proyecto de radios comunitarias está reclamando por estos héroes locales que han sido eclipsados por la historia oficial: "todo el mundo sabe quién fue Bolívar o Francisco de Miranda, conocen a los grandes líderes, pero Negro Primero fue un sargento, un cuadro de nivel medio [...]. Estamos reivindicando a los

9 Todas las entrevistas y observaciones fueron realizadas por el autor durante 10 meses de investigación de campo en Caracas, entre enero de 2004 y enero de 2007.

de abajo, al ochenta por ciento que es segregado por la historia oficial, desde el negro Sambo Andresote a Alí de España". Otras estaciones también se basan en las narrativas de los jefes y anti-héroes míticos, como describen a sus propios proyectos. Ángel, de Radio Tiuna, señaló que la estación toma el nombre de un jefe indígena mítico porque "Tiuna es uno de los jefes de aquí, de Venezuela. Cuando llegaron los españoles lucharon con Tiuna, con Guaicaipuro, todos jefes que estaban aquí, que son originarios de este país". Carlos Carles de Radio Perola incorpora los anti-héroes de la historia venezolana a la figura popular de Bolívar. En el programa Tomando Perola, Carlos describe a Bolívar: "Simón Bolívar no fue Bolívar. Simón Bolívar también fue Páez, también fue Zamora, también fue Boves, también fue Piar". Carlos se refiere a esta mezcla de caudillos célebres, radicales, populistas y anti-héroes, algunos de los cuales fueron eliminados de los relatos históricos oficiales, solo para ser apropiados y reciclados por la tradición oral popular.

Los productores de los medios comunitarios reafirman las identidades indígenas y negras como una forma de posicionarse en relaciones de clase y marginalidad más amplias. Carlos identifica a *el pueblo* como descendiente de los jefes indígenas: "somos los hijos de Guaicaipuro, aquellos que gritaban en los últimos momentos de sus vidas, "Vengan, españoles, y vean cómo muere el último hombre libre de esta tierra'". Para Carlos, el pueblo es una personificación de sus luchas contra el colonizador: "Somos hijos de la resistencia indígena, la resistencia indígena caribeña. Casi aniquilaron a nuestra población, pero no vamos a aceptar que el invasor, el colonizador, pueda acabar con nuestra dignidad y nuestro territorio". Carlos invoca el espíritu de la resistencia indígena, no como una reliquia histórica pasada sino como un medio para recrear un sentido de acción colectiva. En términos más generales, lo que está ocurriendo es un replanteo del pueblo desde los cimientos virtuosos de la nación mestiza, al pueblo como una mayoría marginada y excluida que busca reconocimiento y participación legítima en la riqueza del país.

La construcción de esta memoria histórica situada forma parte del proyecto para crear un sentido de comunidad y pasado común y, además, para recuperar espacios públicos que han sido privatizados o abandonados en las últimas décadas. Como Freddy Hurtado menciona en su programa en Radio Perola, la parroquia de Caricuao no tiene Casa de la Cultura, y el centro de deportivo local fue privatizado. Los espacios que antes eran centros de la vida comunitaria, poco a poco fueron vendidos al sector privado por políticos locales u ocupados por bandas mafiosas, sacándoselos de las manos a la comunidad. Como resultado, el espacio público se ha militarizado aún más, con

un aumento de la presencia policial represiva en los barrios. Parte del proyecto de recuperación de estos espacios no solo se enfrenta a narcotraficantes o trabaja con los jóvenes para brindarles empleo y dirección, sino que además desmilitariza los barrios. Como dice Carlos en Tomando Perola: "no tenemos que militarizar nuestros barrios o nuestras comunidades, antes bien, tenemos que llenarlas de felicidad, de color, con experiencias colectivas y experiencias importantes". Los activistas de los medios de comunicación promueven modelos comunitarios de prevención de la violencia, en contraste con el modelo de ley punitivo. Este es un paso crucial hacia la apertura de espacios para una mayor participación y una renovada vida cultural.

Los productores de los medios de comunicación barriales hacen apelaciones a lo local –se ocupan de temas locales, tratan de integrar su programación a la vida del barrio, y resaltan la historia local. El espacio local es de vital importancia para definir las nuevas formas de colectividad. Sin embargo, es importante tener conciencia de las maneras en que las formas locales están integradas y son producidas por fuerzas globales más amplias. La mayoría de las radios comunitarias y periódicos tienen páginas web, donde mantienen blogs, emiten en vivo sus programas y se vinculan con audiencias y públicos más allá de su vecindad inmediata. Como otros movimientos sociales locales que, según dice Arturo Escobar (2001), "emulan discursos de identidad metropolitanos", los activistas de medios de comunicación comunitarios recurren a articulaciones y narrativas transnacionales. Además, los activistas de los medios reciben apoyo internacional y participan en foros e intercambios globales. Pero al mismo tiempo, la defensa del lugar sirve como un recordatorio constante de las relaciones de poder que trazan las configuraciones de lo que Dirlik ha llamado "*glocalidad*". Es a través de la reafirmación de la conciencia y la memoria situada, del lugar, que se pueden impugnar las demandas corporativas y privadas.

El debate crítico y la deliberación tienen un rol importante en el funcionamiento de los movimientos de los medios de comunicación comunitarios. Los medios de comunicación comunitarios se han convertido en un recurso central a partir del cual los activistas barriales entablan diálogos sobre los problemas que enfrentan en su comunidad y formulan estrategias colectivas. El activista boliviano Oscar Olivera dice que en la era contemporánea la deliberación se ha desplazado de las asambleas de los sindicatos y partidos políticos al barrio como el espacio político de la clase trabajadora: "la deliberación –que para nosotros comprende expresar opinión, debatir, decidir y poner en práctica– ahora se produce en el nuevo mundo del

trabajo que ha creado el *modelo*[10], el neoliberalismo" (Olivera, 2004). La estación de radio local es utilizada por diversos grupos para discutir ideas y difundir sus actividades, incluyendo los comités de territorio, de salud y los comedores y merenderos populares. Los productores de programas de radio, con frecuencia, son miembros de estos diferentes comités e informan sobre sus progresos y logros. Aunque, a menudo, las misiones y comités han sido diseñadas y recibieron apoyo del gobierno de Chávez, el grado de funcionamiento democrático depende de la integración de estos programas a las estructuras de organización, como las asambleas comunitarias y las radios.

Las asambleas han sido parte integral de la formación de varios periódicos, radios o televisiones comunitarios. Sucre en Comunidad se ha originado en un periódico conocido como *La Esquina Caliente*, que fue creado por los participantes de las asambleas populares que se reunían regularmente en la Plaza Bolívar. Radio Rebelde en Catia surgió de una asamblea convocada por los líderes de la comunidad. Las asambleas siguen siendo importantes en el funcionamiento diario de muchas estaciones de radio comunitarias. El espacio de las estaciones de radio también se puede convertir en asamblea y salas de reuniones. Radio Negro Primero tiene una gran sala, desde la que se puede transmitir y fomentar debates y discusiones entre los miembros del barrio durante la programación regular.

Las redes de medios comunitarios varían en cuanto a los términos de su democracia interna, estructuras de decisión y participación. La emisora Al Son del 23 adhiere más a un estilo de toma de decisiones centralizadas. Juan Contreras, el Presidente de la CSB, es el Director General de la estación de radio y tiene la decisión final respecto a la programación y los contenidos. Uno de los operadores de la radio describe el proceso: "Si alguien se acerca a nosotros y tiene un proyecto bien organizado, lo estudiaremos y, luego, Juan Contreras como Director General toma la decisión de aceptarlo, o no". Este estilo de toma de decisiones se ajusta al estilo general de la CSB, una organización de cuadros con un fuerte liderazgo directivo. Aunque hay espacio para la discusión y el debate en las reuniones y en el aire, los parámetros muchas veces están claramente definidos por la directiva.

Otras estaciones como Radio Negro Primero, Radio Perola y Radio Macarao, funcionan a través de un proceso permanente de asambleas, reuniones y consultas. En Radio Negro Primero, el proceso de toma de decisiones es bastante difuso y fluido. Hay un comité

10 [N. de la T.] En español en el original.

que se compone de todos aquellos que participan activamente en el funcionamiento de la radio y se reúnen dos veces por semana, ya sea temprano en la mañana antes de que todos se disgreguen para hacer su trabajo del día o por la noche cuando están de vuelta en la estación. Hay reuniones especiales del comité para discutir el presupuesto, realizar el balance del año anterior y proyectar el presupuesto para el año siguiente. Si surge alguna controversia seria entre la estación de radio y la comunidad, o respecto a algo que se dijo en el aire, entonces el comité se reúne para discutir la cuestión y decidir qué hacer. Más que una estructura fija, son lo que Fernando Barret refiere como "una costumbre, un hábito, una cultura de convocar asambleas para discutir las cosas [...] nuestras decisiones son colectivas, habladas y discutidas metódicamente". La estructura flexible les ayuda a responder rápidamente a los acontecimientos. Por ejemplo, un día que visitaba la estación, los activistas estaban tratando de decidir si responder a los buhoneros (vendedores ambulantes) que se manifestaban en Sabana Grande por la reubicación de sus puestos, después de que éstos fueran clausurados por el alcalde chavista. Se convocó a una asamblea en la mañana, y se decidió que el tema era importante y que no sería cubierto por la prensa oficial, y por lo tanto enviaron al director de la emisora a cubrir los eventos para la radio.

Radio Perola también tiene una estructura fluida y flexible. La toma de decisiones se realiza a través de la asamblea popular, que es convocada regularmente por el equipo de coordinación. Hay pequeñas asambleas que constan de 15 a 20 personas y asambleas más grandes de 50 a 70 personas. Carlos describe el proceso de toma de decisiones como una "asamblea permanente" donde "llegamos a acuerdos, también decimos cosas muy críticas a veces, pero es necesario para organizarnos". Ellos van a discutir sus planes de trabajo, la división de tareas, la programación y el funcionamiento cotidiano de la estación. Como Fernando, Carlos ve este proceso de toma de decisiones en la asamblea como un hábito que es inculcado en el tiempo: "es una práctica, en la que nadie instruye a nadie ni nadie aprende solo, los seres humanos aprenden de forma colectiva y este proceso de aprendizaje colectivo es también un proceso de liberación". Las asambleas no son vistas meramente como foros de toma de decisiones, sino como esferas de diálogo que ayudan a construir colectivamente el análisis político y la estrategia.

Los esfuerzos realizados por algunas estaciones de radio comunitarias para establecer mecanismos fluidos de deliberación, procesos flexibles que pueden responder rápidamente a los acontecimientos y una cultura o hábito de toma de decisiones a través de

la asamblea han fortalecido la democracia interna de esas estaciones. Sin embargo, a veces la falta de una estructura formalizada puede llevar a la aparición de un liderazgo informal *de facto*. La ausencia de equipos de trabajo formalmente estructurados y explícitos puede fomentar la aparición de camarillas y concentrar el poder en unos pocos líderes. Los Directores Generales de las estaciones de radio son líderes varones, o parejas, que tienen facultades para orientar y dirigir la radio.[11] Muchos de estos líderes tiene un programa diario o semanal, como el programa matutino diario de Juan Contreras; el programa diario Tomando Perola de Carlos Carles; y, el programa semanal La Revista de la Mañana de Rafael Fernández, que establece la agenda de la radio. Se supone que estos líderes varones proporcionan una orientación definitiva para el colectivo, una hipótesis que es parte de la amplia cultura política del liderazgo centralizado.

Al participar en asambleas y grupos de trabajo, los residentes aprenden las habilidades de la deliberación y la toma de decisiones colectiva. Esto implica escuchar a los otros y respetar la opinión de los demás, incluso cuando es diferente a la propia, y aprender a perder cuando uno es superado en una votación por otros miembros de la asamblea. En principio, la mayoría de las estaciones de radio adhieren a la noción de que la comunicación debe ser libre, que significa darle acceso a una pluralidad de voces a salir en el aire. Radio Macarao permite participar en la estación a todos los residentes del barrio, independientemente de su afiliación política. Como destacó Rafael, hay personas que intervienen en el funcionamiento diario de la estación que firmaron contra Chávez en el referéndum, o no se identifican con el chavismo. Y hay quienes, como Rafael, que respalda el cambio actual asociado a Chávez, pero que no se consideran chavistas. Esta pluralidad no es la norma, y los miembros de Radio Macarao han sido objeto de críticas por eso, e incluso, han sido acusados de ser *escuálidos*.[12] Para Rafael, esto es parte de la lucha contra los modos unilaterales de pensamiento: "no puede haber solo una manera de pensar, porque esto va en contra de los principios que me constituyen como comunicador [...]. El diálogo es confrontación, debate y crecimiento colectivo. Si estamos todos de acuerdo, eh, no tendría sentido ¿no es cierto?" Escuchar, debatir con argumentos y respeto son aspectos cruciales de la toma de decisión colectiva y la producción comunitaria de los medios de comunicación.

---

11 Curiosamente, en su mayoría se trata de un fenómeno de Caracas, ya que fuera de Caracas hay emisoras radiales que son dirigidas por mujeres.

12 Término empleado por Chávez para referirse a los simpatizantes de la oposición.

CONCLUSIÓN

Los líderes del movimiento social urbano contemporáneo se ubican en historias de insurgencia guerrillera, acción colectiva local y resistencia cultural en un período de varias décadas. Juan Contreras señaló que "venimos de toda esta lucha, que ha producido cinco generaciones en este barrio que han pensado en transformar el país: las generaciones de los años 60, 70, 80 y 90, y la generación de los primeros cuatro años del siglo XXI. Eso es, cinco generaciones que han pensado el cambio por diferentes vías: la vía electoral, la vía pacífica y el camino de las armas". Durante este período, también surgió una dinámica de relaciones patrón-cliente entre el Estado y la sociedad, junto a un Estado de bienestar redistributivo como otro camino mediante el cual los habitantes del barrio participan en el sistema político. La historia de la organización popular en los barrios ha sido una interrelación entre la acción independiente y los vínculos con el Estado, y la elaboración de estrategias creativas dentro, fuera y contra el sistema político.

Las nuevas formas de protagonismo en la Venezuela contemporánea han producido una serie de conflictos –respecto a las representaciones culturales, la propiedad y el control de los medios de comunicación y sobre el acceso al Estado. Los movimientos sociales han sido capaces de reforzar su presencia autónoma mediante la construcción de una tupida red de asambleas, de colectivos de medios de comunicación, de agrupaciones culturales y de comités que están inmersos en la vida cotidiana y la memoria histórica. En medio de las corrientes de pensamiento plurales y contestatarias que han surgido del proceso de cambio social contemporáneo, los colectivos de los medios comunitarios han tratado de crear un polo alternativo basado en la creatividad, en la vida y el trabajo cotidianos, y en los cultos subterráneos de la historia popular.

BIBLIOGRAFÍA

Álvarez, S.; Dagnino, E. y Escobar, A. 1998 'Introduction: The cultural and the political in Latin American social movements' en Álvarez, S.; Dagnino, E. y Escobar, A. (eds.) *Cultures of politics/politics of cultures: Re-visioning Latin American social movements* (Boulder: Westview Press) pp. 1-32.

Buxton, J. 2003 'Economic policy and the rise of Hugo Chávez' en Ellner, S. y Hellinger, D. (eds.) *Venezuelan politics in the Chávez Era: Class, polarization, and conflict* (Boulder: Lynne Rienner Publishers) pp. 113-130.

Contreras, J. 2000 "La Coordinadora Cultural Simón Bolívar: Una Experiencia de Construcción del Poder Local en la Parroquia '23 de Enero'" Tesis BA, presentada en la Escuela del Trabajo Social, Universidad Central de Venezuela, pp. 54-56.

Coronil, F. 1997 *The magical state: Nature, money, and modernity in Venezuela* (Chicago: University of Chicago Press) p. 141.

Davis, M. 2006 *Planet of slums* (Londres: Verso) p. 178.

Ellner, S. 1999 'Obstacles to the consolidation of the Venezuelan neighborhood movement: National and Local Cleavages' en *Journal of Latin American Studies*, *31*: 75-97.

Escobar, A. 2001 'Place, Economy, and Culture in a Post-Development Era' en Prazniak, R. y Dirlik, A. (eds.) *Places and politics in a Age of Globalization* (Boulder: Rowman and Littlefield Publishers) pp. 193-217.

Grohmann, M. 1996 *Macarao y su Gente: Movimiento Popular y Autogestión en los Barrios de Caracas* (Caracas: Nueva Sociedad) p. 41.

Holston, J. 2008 *Insurgent citizenship: Disjunctions of democracy and modernity in Brazil* (Oxford: Princeton University Press).

López Maya, M.; Smilde, D. y Stephany, K. 1999 *Protesta y Cultura en Venezuela: Los Marcos de Acción Colectiva en 1999* (Caracas: CENDES).

Olivera, O. 2004 *¡Cochabamba! Water War in Bolivia* (Cambridge: South End Press) p. 130.

Rollón, R. y Luisa, M. 1995 *De las Protestas a Las Propuestas: Identidad, Acción y Relevancia Política del Movimiento Vecinal en Venezuela* (Caracas: Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal) p. 97.

Sassen, S. 1998 'Whose city is it? Globalization and the formation of new claims' en Sassen, S. (ed.) *Globalization and its discontents* (Nueva York: The New Press).

Smith, N. y Low, S. 2006 'Introduction: The imperative of public space' en Low, S. y Smith, N. (eds.) *The politics of public space* (Londres: Routledge) pp. 1-16.

Stephen, L. 1997 *Women and social movements in Latin America: Power from below* (Austin: University of Texas Press).

Velasco, A. 2011 'We are still rebels: The challenge of popular history in Bolviarian Venezuela' en Smilde, D. y Hellinger, D. C. (eds.) *Venezuela's Bolivarian democracy: Participation, Politics and Culture under Chávez* (Durham: Duke University Press) pp. 157-185.

CÓMO CITAR ESTA PUBLICACIÓN:
Fernandes, Sujatha. 2017. "Movimientos sociales urbanos en Venezuela" Pp. 343-360 en Paul Almeida y Allen Cordero Ulate, Eds., *Movimientos Sociales en América Latina: Perspectivas, Tendencias y Casos*. Buenos Aires: CLACSO.

15

María José Álvarez Rivadulla*

OCUPACIONES DE TIERRAS Y POLÍTICA EN MONTEVIDEO A FIN DE SIGLO

Las últimas décadas del siglo XX combinaron dos condiciones en toda América Latina que desencadenaron la movilización: reformas neoliberales y democratización (Johnston y Almeida, 2006). Por lo tanto, presenciamos el florecimiento de los movimientos de derechos indígenas en varios países, mayor actividad del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Brasil, la proliferación de ONG y otras organizaciones de la sociedad civil, el surgimiento del movimiento piquetero de desocupados en Argentina (ver cap. 9, en este volumen), y muchas otras formas similares de protestas contra el ajuste y la privatización, especialmente entre las clases populares (Walton y Ragin, 1990).

Uruguay no fue la excepción. El fin de la dictadura militar fue impulsado y celebrado por una ola de movilización y el renacimiento de la sociedad civil (Filgueira, 1985). El movimiento obrero, el movimiento de cooperativas de vivienda, el movimiento de derechos humanos y el movimiento estudiantil promovieron la iniciativa, pero también surgieron una miríada de pequeñas formas de acción

* Programa de Sociología, Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Colombia.

colectiva como comedores populares y las asociaciones barriales. La mayor parte de esta movilización se disipó una vez que los partidos políticos recuperaron su papel tradicional de canalización y cooptación de las demandas de la sociedad civil (Canel, 1992). Sin embargo, pronto la oposición a la reducción del Estado desencadenó diversas formas de acción colectiva, especialmente entre las clases media y obrera que habían disfrutado de los beneficios del Estado de bienestar uruguayo, precoz y relativamente robusto. Un hito de esa lucha fue el referéndum contra la privatización de 1992 (Moreira, 2011). Otro fue la campaña exitosa contra privatización del agua, que terminó con una enmienda constitucional votada popularmente durante las elecciones nacionales de 2004 (Santos et al., 2006). Fue exactamente el día que el Frente Amplio, una coalición de partidos de izquierda, ganó el gobierno nacional al quebrar los 175 años de predominio electoral de los partidos Colorado y Blanco tradicionales. Esta victoria también se puede interpretar en base a la constante oposición de este partido a las reformas neoliberales, en un contexto de profunda crisis económica, aunque combinado con moderación programática (Luna, 2007).[1]

En el ínterin, estaba sucediendo una revolución urbana silenciosa. Aunque los ocupantes informales de Montevideo no protestaron contra la política económica, claramente fueron parte de sus consecuencias y, como veremos, algunos de ellos conllevaron acción colectiva y contenciosa. Durante la década del 90, las ocupaciones de Montevideo sufrieron un cambio cuantitativo y cualitativo. Por un lado, alcanzaron su pico máximo en cantidad, y por el otro, se hicieron cada vez más planificadas. Las condiciones estructurales, como la desindustrialización persistente, la pobreza, la reducción del Estado, la caída del salario real, y quizás aún más directamente, el aumento de los precios de alquiler de la vivienda están, sin duda, detrás de estos cambios (Álvarez Rivadulla, 2000; Amarante y Caffera, 2003; Kaztman et al., 2005). Sin embargo, el cuadro queda incompleto si no examinamos la mediación política entre las personas con necesidad de vivienda y la toma de tierras. Esta ola de ocupación de tierras fue formada tanto por la democratización, como por los cambios económicos.

---

1 Para más información sobre los movimientos sociales uruguayos, ver, por ejemplo: Bucheli et al. (2005) sobre la movilización por los derechos humanos contra los crímenes cometidos por la dictadura militar; Midaglia (1992) también sobre las primeras etapas del movimiento de los derechos humanos y respecto al movimiento cooperativo de vivienda; Mirza (2006) en el movimiento cooperativo de vivienda y el movimiento sindical en perspectiva comparada; todos los artículos en Filgueira (1985) sobre movimientos de género, estudiantiles, sindicales, barriales y rurales durante la transición democrática; Moreira (2011) para una perspectiva actualizada sobre la relación reciente de los movimientos sociales con el gobierno de izquierda.

Además del ya mencionado efecto general de la apertura política en todos los tipos de movilización, sostengo que la democratización desencadenó la invasión de tierras, en particular las ocupaciones de tierra planeadas a través de, al menos, dos oportunidades políticas específicas: (1) la competencia electoral por los sectores pobres urbanos y (2) la política de descentralización implementada por la coalición de izquierda después de asumir el gobierno municipal en 1990. Así, además de disminuir la represión, y por lo tanto aumentar la libertad de organización, la democratización trajo al menos otras dos oportunidades políticas importantes que, en general, se mencionan en la literatura sobre el proceso político: aliados influyentes y acceso institucional (Almeida, 2010; McAdam et al., 1996). Mientras que la competencia electoral dio a los ocupantes aliados influyentes a través de redes políticas con diferentes partidos políticos, la descentralización aumentó su acceso institucional al gobierno municipal. Sin embargo, el efecto de estas oportunidades en los ocupantes no fue homogéneo. La variación dependió de las redes sociales y otros recursos. Así, los líderes de los asentamientos planificados, que por lo general tenían experiencia por participar en otras formas de organización colectiva, como los sindicatos, el movimiento de cooperativas de vivienda o los partidos políticos, estaban en mejores condiciones para aprovechar estas dos oportunidades y transferirlas a la organización barrial.

Parece particularmente relevante observar las oportunidades políticas y las ocupaciones en América Latina, donde la relación entre los asentamientos con el Estado y la política ha recibido mucha más atención que en otros lugares del mundo, en parte porque esta relación ha sido mucho más fuerte que en cualquier otro lugar (Castells, 1983; Collier, 1976; Cornelius, 1974; Dietz, 1998; Eckstein, 1977; Gilbert, 1994; Portes y Walton, 1976; Stokes, 1991, 1995). Los investigadores de Medio Oriente, por ejemplo, han señalado cómo los ocupantes latinoamericanos se relacionan con el Estado de maneras sin precedentes, considerando su región donde la despolitización y la invisibilidad son precisamente la base de la supervivencia de los ocupantes (Alsayyad, 1993; Alsayyad y Roy, 2003; Bayat, 2004).[2]

---

2 Curiosamente, en los 80 y principios de los 90, cuando muchos países de la región estaban en proceso de re democratización hubo una oleada de estudios sobre las ocupaciones, que las interpretaron desde las lentes teóricas de los nuevos movimientos sociales. Estos estudios se centraron en las identidades y capacidades autónomas (del Estado y la política) de los ocupantes y una miríada de otros movimientos sociales emergentes, así como sus formas horizontales de organización de base (Caldeira 1990; Escobar y Álvarez, 1992; Evers, 1985; Holston, 1991; Oxhorn, 1995; Touraine, 1987). Estos estudios han recibido críticas recientes por exagerar la autonomía de los movimientos sociales a la luz de la centralidad de la política formal

Aunque se basa en la teoría del proceso político, este capítulo reconoce la importancia enorme de los marcos culturales (McAdam et al., 1996). Recién cuando las ocupaciones llegaron a ser una alternativa viable para los montevideanos con movilidad descendente estructural, las invasiones de tierras entraron en su repertorio de acción colectiva (Tilly, 1978). Las ocupaciones planeadas se convirtieron en una estrategia para resistir la exclusión de los pobres urbanos "seducidos y abandonados" –aquellos que habían incorporado las expectativas de una ciudadanía plena y trabajos estables– que son expulsados a la periferia de la ciudad y del mercado de trabajo (Kaztman, 2001). Es por eso, sin embargo, que es necesario resignificar las ocupaciones (Álvarez Rivadulla, 2012b). Las invasiones organizadas implicaron una lucha espacial y simbólica, en la que sus impulsores debían distinguirse de los más pobres, aquellos que invadían por goteo y estaban asociados con hurgar basura y con condiciones de vida muy precarias. El grado en que esta lucha tuvo éxito, en la mayoría de las invasiones planificadas, es dudoso. Solo unas pocas llegaron a ser un "barrio", como ellos lo enmarcaban. Sin embargo, como se verá en la conclusión, contra las esperanzas de los ocupantes conspiraron muchas condiciones más allá de su alcance, como el aumento de la pobreza a principios de los 2000 y la crisis económica y social.

Este capítulo se basa en el trabajo de campo realizado en Uruguay durante los años 1998-1999, 2006 y 2007, y en observaciones más recientes. Es parte de un proyecto de métodos múltiples que combina el análisis estadístico de eventos de ocupación con datos cualitativos, que incluye estudios de caso de algunos asentamientos. Aquí recurro a ambos: a datos cuantitativos sobre el número y los tipos de invasiones de tierras y a entrevistas e historias del barrio. En la primera sección, presento una breve historia de la ocupación de tierras en Montevideo, para desarrollar más adelante las dos oportunidades que activaron y delinearon las invasiones de tierras en los 90: la competencia electoral y la descentralización. La siguiente sección explica cómo los diferentes recursos de los ocupantes incidieron en su habilidad para aprovechar esas oportunidades. En la conclusión, describo la disminución de las ocupaciones en la ciudad y presento algunas hipótesis acerca de las razones subyacentes a esa merma, que también se basan en la teoría del proceso político de la movilización.

---

recuperada, una vez que los procesos de democratización se consolidaron (Davis, 1999; Roberts, 1997).

EL CASO

En Montevideo, la explosión de las ocupaciones tuvo lugar más tarde que en otras metrópolis de la región. Aunque en Montevideo ya existían algunas invasiones de tierras denominadas cantegriles, antes de que el auge de las ocupaciones alcanzara su pico máximo en los 90, la capital uruguaya se desarrolló de manera diferente que otras ciudades de América Latina. Fue capaz de absorber la mayoría de los migrantes rurales que llegaron a la ciudad durante la industrialización, fomentada por el Estado en la ciudad formal. A pesar de que ya empezaba a mostrar signos de desigualdad socioeconómica urbana en los 80 (Portes, 1989), Montevideo era más igualitaria que otras ciudades del continente, tanto en el plano económico como en el espacial.

Incluso después de que el régimen militar llevara a cabo una dura política de desalojos y demoliciones en el centro de la ciudad, donde vivían muchos pobres, no había ningún movimiento masivo de asentamientos en las afueras de la ciudad. En lugar de tomar tierras, muchos pobres urbanos de Montevideo gravitaron en torno a una estrategia muy conocida para lidiar con el aumento de los problemas de vivienda: el hacinamiento en casas de familiares (Benton, 1986). La ola de invasiones de tierras hacia el final del siglo se convierte, por lo tanto, en un interrogante sugestivo a explicar.

Un viajero que no ha visitado Montevideo en los últimos 20 años encontrará sorprendente el crecimiento de la informalidad urbana (ver Gráfica 15.1). La ciudad capital de un país que alguna vez se caracterizó por ser igualitario y relativamente acomodado, en comparación con el resto de América Latina, hoy está mucho más cerca del tipo ideal de las metrópolis fragmentadas latinoamericanas. Entre 1984 y 1994, se triplicó el número de viviendas en los asentamientos (INTEC, 1995). La población que vive en asentamientos precarios creció a casi 145 mil en una ciudad de menos de un millón y medio de habitantes (INE-PIAI, 2006). Además, el número de asentamientos aumentó a más de 400. Considerando que la ciudad había tenido una población estancada por décadas, estas cifras se vuelven más desconcertantes. La ciudad informal ha crecido sin aumento poblacional. Al contrario que la mayoría de los ocupantes latinoamericanos, estos no eran migrantes rurales-urbanos, principalmente. En su mayoría habían sido previamente habitantes urbanos expulsados del centro, que buscaban su "derecho a la ciudad" (Harvey, 2008) al invadir terrenos en la periferia de Montevideo.

Hasta finales de los 80, las invasiones de tierras en Montevideo fueron eventos raros y se produjeron principalmente por goteo, es decir, con una familia que llega en un momento y sin planificación.

Su nombre popular, *cantegriles*,[3] estaba asociado con la migración rural-urbana y la pobreza extrema.[4] Sin un sistema de alcantarillado, agua potable o cualquier otro servicio, las casas fueron construidas por los residentes con desechos de madera prensada, chapas corrugadas, láminas de plástico, cartón y otros materiales. Su paisaje urbano se veía muy hacinado, sin calles o lugares públicos. A menudo, se podían ver y oler montones de basura, caballos y carros de tracción a sangre, porque algunos de los habitantes trabajaban recolectando basura en la ciudad, como cartón y otros materiales reciclables que luego se clasifican y venden (Baudrón, 1979; Bon Espasandín, 1963; Mazzei y Veiga, 1985).

La movilización no estuvo ausente en los cantegriles. Algunos tenían una participación activa en las comunidades cristianas de base. Como en Chile (Schneider, 1995) o Argentina (Prévôt Schapira, 1999), la Iglesia Católica tuvo un papel importante en las organizaciones populares durante el régimen militar en Uruguay (Filgueira, 1985). Por otra parte, hacia el final de la dictadura, y como reacción hacia una serie de amenazas de desalojo a un movimiento de ocupantes, de los más pobres, surgió un nuevo movimiento con algunos desalojados de los edificios y algunas parroquias y ONG (Rodé et al., 1985). Fue apodado MOVIDE, acrónimo de "movimiento a favor de una vida decente". Llegó a ser tan importante durante la transición, que fue uno de los movimientos invitados a participar en las consultas multipartidarias de 1984-1985, conocidas como Concertación Nacional Programática (CONAPRO). Pero esa fama no duró mucho. Como se mencionó anteriormente, muchas de estas experiencias de movilización durante la transición democrática perdieron fuerza o, incluso, se dispersaron una vez que los partidos políticos recuperaron su centralidad.

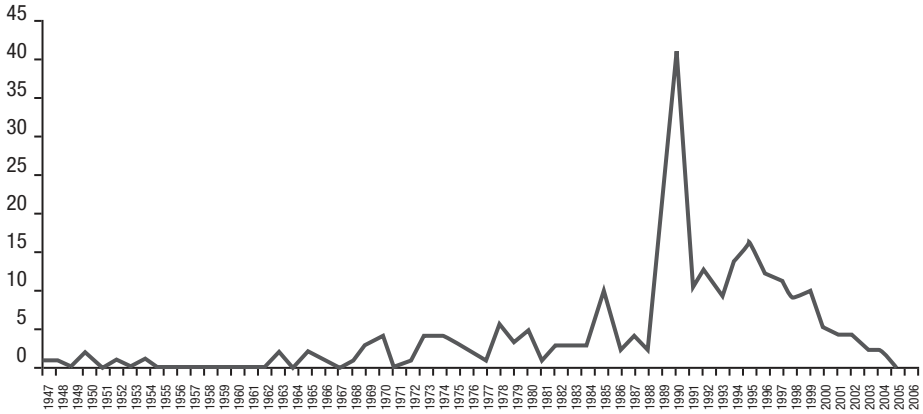
La mayoría de estos cantegriles todavía están en la ciudad. Y hay otros nuevos similares a esos. De hecho, la acreción o goteo es el principal tipo de invasión de tierra. Sin embargo, después de la democratización y, fundamentalmente entre finales de los 80 y principios de los 90, hubo un cambio en la cantidad y el tipo de invasiones de

---

3 Estas primeras invasiones fueron apodados cantegriles, de forma irónica. En Punta del Este, el balneario más rico de la costa atlántica uruguaya y un punto de referencia para la elite y el jet-set regional, hay un club muy exclusivo llamado Cantegril Country Club, construido en 1947. Quién comenzó a usar ese nombre sigue siendo desconocido, pero algunos lo ven como un signo de resistencia popular y de imaginación (Bon Espasandín, 1963).

4 Sin embargo, aunque algunos provenían de las zonas rurales, la mayoría de ellos procedían de las ciudades o pueblos del "interior" del país, es decir, de lugares fuera de la capital (Baudrón, 1979).

Gráfica 15.1
Cantidad de ocupaciones por año. Montevideo, 1947-2006



tierras de los pobres urbanos. No solo hubo un auge de ellas, sino que las invasiones de la tierras planeadas se volvieron el tipo más frecuente (ver Gráfica 15.2). Las ocupaciones planificadas comenzaron como una acción colectiva organizada. Un grupo tomaba un terreno baldío después de conocer su situación jurídica y lo comenzaba a dividir en parcelas, delimitando las calles y, a veces, los espacios comunes tales como una plaza o un centro comunitario y a negociar con las autoridades, primero para poder quedarse y, luego, para obtener servicios públicos y, eventualmente, la legalización de títulos de propiedad de tierras. A veces, después de resistir el desalojo policial, especialmente en parcelas privadas, comenzaban a negociar de inmediato con las autoridades presentando una lista de residentes y justificando su derecho a permanecer por "necesidad".[5] Los residentes continuaron

5 La ola de invasiones de tierras planeadas que se inició con el pico de 1989-1990 se encontró con una legislación que dificultaba que los propietarios de las tierras desalojaran a los ocupantes y con una escasa vigilancia en los terrenos baldíos. Esto cambió lentamente, primero en la práctica y, más recientemente, de manera formal. En primer lugar, los ocupantes podían argumentar el "estado de necesidad", una figura legal en el Código Penal de Uruguay que puede eximir de responsabilidad por la comisión de ciertos delitos. El desalojo policial inmediato podía ocurrir solo durante las primeras 48 horas de la ocupación, y por eso muchas invasiones planeadas ocurrieron el viernes o en vísperas de feriados. Además, el Código Civil uruguayo establece que después de un año de ocupar pacíficamente la propiedad se tienen derechos de posesión. Una reforma de 2007 al Código Penal endureció las condiciones legales para los ocupantes. La nueva Ley no solo hace que sea más

construyendo sus propias casas, pero utilizando materiales más sólidos, como ladrillos o algún tipo de cemento. Para un foráneo, algunos de estos asentamientos son indistinguibles de un barrio pobre pero formal. La única diferencia es la propiedad del terreno. Aún hay un tercer tipo, la minoría de los casos, que se hizo más común hacia el final del siglo. Estos asentamientos comenzaron como la acción individual de un emprendedor, que podría haber tenido algunos contactos políticos, que subdividió ilegalmente un terreno y lo vendió a personas de bajos recursos. En otras ciudades se las denomina subdivisiones piratas.[6]

Algunas de estas ocupaciones planificadas tuvieron una intención utópica, al menos al inicio. Sus primeros residentes querían algo más que resolver sus necesidades básicas de vivienda. Querían formar una organización social de base, horizontal, sin representantes. Los líderes de estos grupos pertenecían a las fracciones más radicales de la izquierda y veían en las ocupaciones planificadas una forma de redistribución de la tierra *sui generis* y una crítica a las políticas estatales de vivienda. De todas las ocupaciones son las que más se ajustan a la definición de un movimiento social, con objetivos comunes orientados al cambio social y en oposición a las autoridades y con identidad de sus miembros en torno a ellos. Otras, aunque menos utópicas, también se organizaron para la ocupación de tierras y el mejoramiento del barrio en varios niveles. Como en el resto de la región, la ocupación de tierras en Uruguay es la manifestación más vital de acción política de los pobres urbanos (Portes y Walton, 1976).

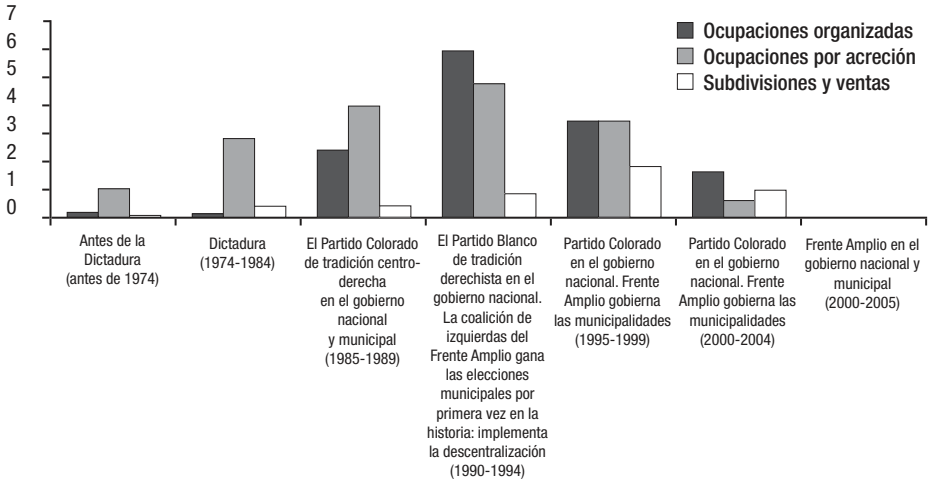
Los cambios económicos de Uruguay están, sin duda, detrás de la explosión de las invasiones de tierras a finales de los 80 y en los 90. La desindustrialización, la reducción del Estado y el aumento de las diferencias salariales por capacitación traídas por la creciente liberalización económica han limitado la cantidad de empleos protegidos, estables y con salario digno disponibles, especialmente para aquellos

---

fácil denunciar los casos de usurpación de propiedad sino que, además, amplía lo que se considera usurpación. Mientras que antes solo un juez podía denunciar la usurpación en las primeras 48 horas de su evento, ahora puede hacerlo cualquier testigo, en cualquier momento. Asimismo, mientras que antes solo las invasiones clandestinas o violentas se consideraban casos de usurpación, ahora cualquier invasión de la propiedad, incluso si se produce durante el día y sin ningún tipo de uso de fuerza, se considera usurpación de la propiedad de otra persona y, por lo tanto, un delito. Esta nueva ley, originalmente prevista para las invasiones de casas en el prestigioso balneario de Punta del Este, en la práctica también ha afectado a las invasiones de tierras. Los costos por invadir han aumentado.

6 De las que pude recabar información, el 57% de las invasiones de tierras fueron por goteo, 33% fueron planificadas y 11% fueron por subdivisión y venta fraudulenta de terrenos.

Gráfica 15.2
Promedio de ocupaciones anuales según tipo de ocupación
y período político. Montevideo, 1947-2006



con bajos niveles educativos (Álvarez Rivadulla, 2000; Cecilio, 1997; INTEC, 1995; Kaztman et al., 2004). Factores más específicos asociados a la vivienda, tales como la escasez y falta de eficacia de las políticas de vivienda y las políticas urbanas en general, las fallas en el mercado de tierras, los precios de los alquileres por las nubes, las excesivas garantías necesarias para alquilar algo en Uruguay y la falta de coordinación de los programas de escrituración de tierras, también fueron subyacentes a la ola de las nuevas invasiones de tierras (Amarante y Caffera, 2003; Cecilio et al., 1999; Nahoum, 2002; *Semanario Voces,* 2011; Viana et al., 2006; Villamide, s/d).

Sin embargo, estas explicaciones económicas y políticas dejan algunas variables sin dilucidar. ¿Por qué las ocupaciones tuvieron un auge cerca de 1989-1990 y no en otras ocasiones, con niveles de pobreza, desempleo y problemas de vivienda similares o mayores? ¿Por qué hubo otro auge (menor) alrededor de 1994-1995? Según Tarrow (1989: 13), "lo que necesitamos explicar no es por qué la gente periódicamente pide, hace huelga, se manifiesta, hace motines, saquea y quema sino más bien por qué tantos lo hacen en momentos particulares de la historia, y si existe alguna secuencia lógica en sus acciones". Necesitamos una teoría interactiva de cómo los reclamos interactúan con las oportunidades políticas específicas en momentos particulares para comprender mejor las ocupaciones. En la siguiente sección desarrollo

cómo la democratización, en un contexto de creciente desigualdad, transformó la cantidad y el tipo de invasiones de tierras.

COMPETENCIA ELECTORAL COMO OPORTUNIDAD POLÍTICA

Durante el trabajo de campo, una de las características más recurrentes en las historias de los ocupantes, particularmente las de los más organizados, era el contacto cercano con cuadros de diferentes partidos políticos y sus facciones. Por lo general, era a través de ellos que lograban obtener información acerca de qué terreno ocupar, los servicios como agua y electricidad o ayuda para construir y mantener los caminos de la grava. Aunque, por cierto, no es la única estrategia para el mejoramiento de barrio (combinaron las redes políticas con la petición directa y la autogestión y, muy raramente, con bloqueos, como cortes de ruta y sentadas en las dependencias públicas), el uso de los lazos políticos parecía ser la vía más rápida y exitosa para lograr objetivos. Esto no fue particularmente sorprendente, teniendo en cuenta tanto el cuerpo de la literatura que documenta el papel del clientelismo entre los ocupantes en América Latina,[7] como el que documenta el clientelismo del Uruguay como una institución arraigada que se ha vinculado históricamente a la sociedad civil y a un Estado de bienestar relativamente generoso (Luna, 2006; Panizza y Pérez Piera, 1988; Rama, 1971).

Lo que me sorprendió fue la variedad de redes que podría tener un asentamiento y cómo las redes se habían multiplicado durante un período determinado, desde mediados de los 80 hasta principios de los 2000. Aquellos fueron años de gran competencia electoral, en particular por los votos de los pobres urbanos. La izquierda comenzó poco a poco a ganar los votos de las zonas populares de Montevideo, históricamente, un bastión de las facciones más populistas del ala derecha tradicional del Partido Colorado (Luna, 2006, 2007; Mieres, 1988, 1994; Moreira, 2005). Los asentamientos precarios como espacios de pobreza localizada se hicieron particularmente relevantes para las campañas. Además, los productos y servicios que los ocupantes necesitaban estaban entre los pocos que el Estado contraído y reformado todavía podía otorgar, a diferencia de las pensiones y los trabajos que circulaban por las redes políticas del pasado (Filgueira et al., 2003; Luna, 2006).

Para muchos políticos del Frente Amplio, esto no fue fácil. Debían acercarse a un nuevo tipo de dirigente popular local al que no estaban acostumbrados, debido a la base electoral tradicional de clases media

7 Ver, por ejemplo: Auyero (2000); Burgwal (1995); Cornelius (1977); Gay (1994); Gilbert (1994); Merklen (1997); Portes y Walton (1976); Stokes (1991).

y trabajadora del partido. Estos dirigentes tenían "otros códigos" que a la "izquierda sectaria" le llevó un tiempo entender, como me comentó un puntero de una facción socialista que ayudó activamente en varias invasiones de tierras. Mientras que en la campaña electoral de 1984, la izquierda no pudo entrar a un asentamiento de ocupantes, como lo recuerda un asesor de campaña del Frente Amplio, 10 años más tarde en la campaña de 1994 (y después de que la izquierda había gobernado la ciudad durante 4 años) "todo explotó. Entrabas y era como una deificación. Recuerdo una imagen en el asentamiento Tres Ombúes: Arana [dos veces Alcalde y más tarde ministro de Vivienda] y Astori [ministro de Economía y actual vicepresidente] en un carro cartonero, y la gente tratándolos como si fueran las reinas de Carnaval [...] era increíble. Y fueron seguidos por un gran desfile. Increíble, ese fue sin duda un punto de viraje que continúa hasta hoy".

Más allá de las campañas, la competencia electoral continuaba desde las oficinas de gobierno. Tradicionalmente, los partidos Blanco y Colorado tenían un pacto de coparticipación que garantizaba que cuando alguno de ellos ganaba, el otro mantendría algunas posiciones en la administración. Así, por ejemplo durante la presidencia colorada de Sanguinetti entre 1995 y 1999, dos organismos relevantes para los ocupantes, el Ministerio de Vivienda y la presidencia del ente encargado del agua (OSE), estuvieron en manos del Partido Blanco. Como se mencionó anteriormente, al mismo tiempo y desde las elecciones de 1989, el gobierno municipal era regido por el Frente Amplio. Así, los tres principales partidos tenían alguna oficina relevante para los ocupantes.

Muchos dirigentes de los ocupantes utilizaron hábilmente este contexto favorable, gestionando con diferentes redes políticas al mismo tiempo (Álvarez Rivadulla, 2012a). Lo hicieron de distintas maneras. Algunos cambiaron de partido, del Colorado al Frente Amplio, cuando este último ganó el gobierno municipal. Otros trabajaron con una división de tareas con los miembros de la asociación barrial. Mientras que un dirigente, militante de izquierda, pedía ayuda al gobierno municipal, otro garantizaba el acceso al agua a través de contactos con el Partido Blanco mediante sus propias redes políticas. Una estrategia recurrente era declarar "acá, somos apolíticos", que quería decir que eran híper políticos, como lo aclara otra frase también recurrente "le abrimos las puertas a todo el mundo".

Por lo tanto, la competencia electoral constituye una oportunidad política que aumenta la posibilidad de agencia para los ocupantes. Al contrario de la representación del clientelismo como sinónimo de manipulación y pasividad, muchos investigadores han demostrado cómo las redes políticas de los pobres, incluyendo al clientelismo,

dejan espacio para la agencia (Burgwal, 1995; Gay, 1994; Walton, 1998) y, aún más, para la movilización (Auyero et al., 2009). Sostengo que en contextos de competencia electoral ese espacio para la agencia y la movilización es aún mayor.

Como en Chile antes de la dictadura, cuando las diferentes facciones de la izquierda estaban luchando para ganar votos de los pobladores (Handelman, 1975; Hipsher, 1998; Özler, 2003; Schneider, 1995), las invasiones de tierras en general, y en particular las invasiones planeadas, alcanzaron su punto máximo en Montevideo. El Frente Amplio amplió y agudizó la competencia electoral, y eso benefició a los ocupantes dándoles más aliados en la elite. Nadie quería decirles que no a los votantes potenciales. El crecimiento de la izquierda en la ciudad, y su consolidación en el gobierno municipal, potenció los incentivos de todos los actores políticos para respaldar ocupaciones. Como se menciona en la conclusión, recién cuando la izquierda se consolida en la ciudad y a nivel nacional, y disminuye la competencia electoral, también merma la tolerancia con las nuevas invasiones de tierras.

LA DESCENTRALIZACIÓN COMO OPORTUNIDAD POLÍTICA

Siguiendo las tendencias más generalizadas de América Latina, Montevideo entró en la década del 90 con la izquierda en el gobierno de la ciudad y un proceso de descentralización municipal (Canel, 2010; Chávez y Goldfrank, 2004; Goldfrank, 2002; Myers y Dietz, 2002; Veneziano Esperón, 2005). Según la plataforma electoral que llevó al Frente Amplio al gobierno de la ciudad, la descentralización tuvo como objetivos acercar el gobierno a los ciudadanos, especialmente a los ciudadanos más pobres, y que fuera más responsable y eficiente. De modo semejante a los nuevos discursos sobre el desarrollo, este programa de descentralización tenía mucha fe en la participación de la sociedad civil y su poder transformador. Consistió en dividir la ciudad en 18 zonas, cada una con su gobierno barrial local (llamados Centros Comunales Zonales, CCZ). El proyecto original fue resistido por la oposición y, al final, la descentralización terminó siendo más administrativa que política o financiera y, por lo tanto, mucho menos ambiciosa que la famosa experiencia de Porto Alegre con la elaboración de presupuestos participativos (Baiocchi, 2005). Aún así, cada CCZ tenía un consejo ejecutivo y un consejo local que le realizaban sugerencias al Alcalde sobre temas importantes, como las prioridades de gasto en la zona y sobre algunas decisiones administrativas como la asignación zonal de recursos menores.[8]

---

8 Más recientemente, en 2009, y de acuerdo con la legislación nacional, la estructura de la descentralización se volvió más compleja. Además de los CCZ se crearon ocho

Los resultados de la descentralización no están escritos en piedra. Algunos enfatizan cómo su diseño institucional negociado "no pudo impulsar la participación cívica entre los residentes de la ciudad porque los canales de participación no convencieron a los ciudadanos medios de que su entrada en los foros públicos tendría un impacto significativo en las decisiones gubernamentales" (Goldfrank, 2002: 51). Otros, por el contrario, subrayan los efectos positivos la participación, en particular el cambio de las relaciones clientelistas tradicionales con el gobierno municipal por unas más transparentes (Canel, 2010; Veneziano Esperón, 2005). Algunos, a su vez, ponen de relieve cómo la descentralización sirvió electoralmente al Frente Amplio, al permitirle entrar en las zonas pobres de la ciudad y por el aumento de su credibilidad como partido de gobierno y no solo como un partido de oposición (Luna, 2007). La mayoría de los analistas, sin embargo, subrayan que el papel de la descentralización fue acercar el gobierno de la ciudad a los ciudadanos.

Esta estructura institucional de apertura fue particularmente relevante para los ocupantes. Cuando se les preguntó acerca de la persona o institución que más los ayudó, muchos de los líderes de las invasiones planificadas mencionaron el CCZ o la Junta Local. A menudo, el CCZ fue el primer actor social al que llamaron una vez que ocuparon. Para un jefe de la Secretaria de la Junta Local del barrio La Teja, lo que distinguió a las invasiones de tierras de los 80 fue su voluntad de legalizar y garantizar la titulación de terrenos, así como su actitud negociadora. Veían al Estado, y en particular al gobierno local, como un aliado.

> [Las invasiones de tierras durante los 90] eran como la novela de García Márquez, "una muerte anunciada". Normalmente, se sabía que iba a haber una invasión y normalmente se sabía más o menos dónde. Había una actitud negociadora desde el principio. –Bueno, ocupamos acá, pero llamamos a la Junta para que vengan y legitimen la invasión de tierras, dijimos que somos todos trabajadores de x lugar y queremos negociar para obtener este terreno o, si éste no está disponible, entonces podemos ver cuál está disponible. La actitud era ocupar para acelerar los tiempos burocráticos, más que nada.

Muchos ocupantes informales, especialmente aquellos que se establecieron en tierras de propiedad municipal, se incorporaron rápida-

---

municipios, cada uno con autoridades locales electas incluyendo el Alcalde. Queda por verse cómo este proceso está alterando la política local y, particularmente, la de los ocupantes.

mente a los mecanismos participativos propuestos, como concejales o miembros de los comités locales de salud o tierra. A través de esa participación, obtuvieron un acceso más rápido a la información y servicios para su barrio. Pero ese proceso no fue fácil. Como lo describe vívidamente Canel (2010), los primeros residentes de las zonas pobres de la ciudad no siempre estaban contentos de tener a los ocupantes en sus barrios y en los consejos municipales. Los percibían como una invasión, como una amenaza a su cultura de trabajo, cohesiva y militante, como personas con valores y tradiciones diferentes que ni siquiera pagan impuestos, lo que consideran que es injusto. Al mismo tiempo, los gobiernos locales nunca podrían satisfacer las múltiples demandas basadas en las necesidades acuciantes de un creciente número de ocupantes. Esto fue frustrante para los ocupantes y desalentó su participación.

La descentralización constituyó un tipo particular de apertura institucional, que promovía la movilización a nivel barrial. El proyecto de descentralización del Frente Amplio incluía una rama pedagógica, encarnada por un ejército de trabajadores sociales, que apuntaba a generar más decisiones locales participativas. Elegir representantes, celebrar reuniones frecuentes, elaborar actas, escuchar a la población y priorizar las necesidades teniendo en cuenta otras comunidades igualmente necesitadas eran parte de la experiencia de aprendizaje. Aunque algunos dirigentes de los ocupantes de asentamientos planificados tenían experiencia de participación previa en sindicatos, asociaciones barriales, el movimiento cooperativo de vivienda o en otros tipos de acción colectiva, para muchos ocupantes la participación en sus asociaciones barriales, consejos o comités locales era su primera vez en política. La descentralización fue, para ellos, una escuela de participación política de bases –y las ocupaciones, en general, una experiencia de politización.[9]

A través de la interacción con otras instituciones, los ocupantes aprendieron sobre la conveniencia de la organización formal y colectiva a nivel barrial. Según plantea un líder de los ocupantes:

---

9 El impacto de la descentralización sobre la democratización de las asociaciones barriales no se limitaba a los asentamientos. En su censo de las asociaciones barriales de Montevideo, un año después de haberse implementado la descentralización, González considera que en comparación con su censo anterior, realizado durante la administración Colorada de la ciudad después de la democratización (González, 1989), "hubo un mayor porcentaje de asociaciones que celebraron reuniones periódicas, que eligieron a sus dirigentes, que concertaron reuniones en espacios públicos, que solicitaron estatus legal y que tuvieron contacto frecuente con otras organizaciones de la zona" (Goldfrank 2002: 71-72).

> Tener "personería jurídica" nos permite firmar acuerdos con INAME (Instituto Nacional para la Niñez) para crear una Guardería. Además, también se puede obtener ayuda del INDA (Instituto Nacional de Nutrición). Podemos firmar contratos y firmar todo [...]. Incluso se pueden organizar festivales. Porque todas las instituciones requieren que tengamos "personería jurídica". Además, le da una imagen mucho más seria al barrio. Al tenerla, representamos al barrio de una manera diferente.

Estar organizado significaba, para muchos funcionarios del Estado, un asentamiento digno y disciplinado. En una entrevista en 1998, el primer director del programa de gobierno para la escrituración y modernización en los barrios informales, principalmente financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), me dijo:

> Tenemos un lema implícito: "vamos a ayudar a aquellos que quieren ser ayudados". [...] La cantidad de gente que pide ayuda es tan grande, que no podemos empezar a buscar más demandas [...]. Para que un proyecto sea sostenible es necesario contar con la voluntad de la población, y Usted sabe que hay grandes conflictos dentro de los asentamientos. En uno de ellos había un espacio vacío para construir un edificio común para reuniones, etc., y una persona lo tomó y construyó un almacén. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede ser que les decimos "les vamos a pavimentar las calles, les vamos a dar esto y aquello" y todavía hay quienes que se resisten o no cooperan?

Las instituciones requieren un nivel de organización que es difícil de alcanzar en un barrio de "extraños" (Roberts, 1973). Lo que a este burócrata le parece increíble es la situación más común en los asentamientos: problemas de organización y cumplimiento de las normas colectivas entre una población de recién llegados que, con frecuencia, también rota. La frase más repetida entre los dirigentes es "la gente no participa", que se corresponde con la desconfianza de los que no son líderes, la apatía o la mera falta de tiempo. Así, a los ocupantes, varias agencias les dieron un mensaje consistente acerca de los beneficios de la participación disciplinada a nivel local que se ajusta al cambio del discurso sobre el desarrollo, extendido en todo el mundo, donde se pasa del Estado a la sociedad civil como agente de desarrollo (Hyden, 1997).

Sin embargo, como Roberts y Portes (2006) señalan en su análisis de la participación urbana en América Latina de *fin de siècle*, la descentralización puede ser una espada de doble filo, en el sentido que al estimular la participación local puede obstaculizar la ampliación, que lleva las luchas urbanas a niveles territoriales más amplios

mediante la coordinación con los demás. En Montevideo, nunca hubo un movimiento de ocupantes informales que abarcara toda la ciudad. La mayoría de las organizaciones se han visto limitadas en el nivel de asentamiento, con algunas excepciones interesantes. Al menos en tres casos hubo coordinación entre los diferentes asentamientos dentro de las zonas descentralizadas.[10]

Finalmente, es importante mencionar que las oportunidades de descentralización abiertas a los ocupantes variaron a través de la ciudad. En su cuidadoso estudio de la descentralización de Montevideo Canel (2010) muestra cómo las experiencias locales de descentralización fueron muy diferentes dependiendo de la cultura asociativa de cada una de las 18 zonas, del impacto de las condiciones socioeconómicas en las disposiciones de la población a organizarse y participar en iniciativas comunitarias y en la capacidad individual de los funcionarios locales para fomentar las relaciones de confianza y cooperación con los activistas de la comunidad. Al observar la distribución espacial de los asentamientos precarios en Montevideo, comenzamos a ver un patrón no aleatorio. Las invasiones de tierras planificadas se agrupan en los barrios desindustrializados de la zona oeste de la ciudad que históricamente fueron de clase trabajadora, mientras que en el noreste, tradicionalmente más pobre, en su mayoría hay invasiones por acreción o goteo. Mientras el gobierno local en el barrio El Cerro tuvo que negociar con muchas invasiones organizadas, el gobierno local de la zona 11 tuvo que asistir a un número creciente de ocupantes por acreción con necesidades acuciantes.

Una zona de la ciudad cada vez más carenciada, tradicionalmente de clase trabajadora, me sorprendió por su capacidad para cuidar los terrenos de uso público, por sus pocas invasiones de tierras y por su experiencia en generar cooperativas como una alternativa para las personas con necesidades de vivienda. Cuando un grupo de jóvenes vecinos de Brandi, uno de los barrios de la zona 13, invadieron el campo de fútbol del barrio y comenzaron a parcelar y levantar carpas, los vecinos reaccionaron rápidamente. Llamaron a las autoridades locales que, a pesar de que era un fin de semana, actuaron

10 Por ejemplo: la Comisión de Tierras en el CCZ 17, la Coordinadora de Asentamientos en el CCZ 9, la Coordinadora de Asentamientos en el CCZ 12. Entrevisté a miembros de estas tres organizaciones "sombrilla" de ocupantes. En el momento de mi trabajo de campo, ninguno de ellos estaba activamente reunido. Todos los entrevistados explicaron lo difícil que es coordinar las acciones. En general, la coordinación de esfuerzos se ha organizado desde arriba, desde el gobierno municipal. Para ser justos, sin embargo, en el caso del CCZ 17 (barrio El Cerro), el comité precedió la descentralización.

con suficiente rapidez para desalojarlos en menos de 48 horas. Un ex concejal recuerda este evento con orgullo. La mediación del consejo de la ciudad evitó la invasión y un desalojo violento.[11] No sorprende que esta región, la zona del barrio Peñarol y sus alrededores, sea una de las que mejor se adaptaron a la descentralización, según Canel (2010). Sostiene que las asociaciones locales tenían más experiencia en negociar con el Estado a través de diferentes redes políticas y en la resolución de conflictos, que las de otras zonas de la ciudad.

VARIACIÓN SEGÚN EL BARRIO Y LOS RECURSOS DEL LÍDER

Las dos oportunidades políticas que he mencionado, el aumento de la competencia electoral por los pobres urbanos y el novedoso programa de descentralización, no tuvieron el mismo efecto en todos los ocupantes. Aquellos con más redes políticas así como de otros recursos como cultura organizativa, líderes pragmáticos o menos pobreza relativa fueron más capaces de aprovechar esas oportunidades y transformarlas en bienes colectivos para sus barrios. Lo hicieron utilizando hábilmente una variedad de estrategias, la mayoría de ellas para llegar al Estado y otras para organizarse internamente.

Muchos han enfatizado el papel de la dinámica organizacional en la acción colectiva, pero la perspectiva que me parece más útil es la del modelo de proceso político, ya que dialoga con factores políticos contextuales más amplios (McAdam, 1982; McAdam et al., 1996; Tilly, 1978). Otros académicos han descrito estrategias diferenciales y tipos de organización para los ocupantes informales en la misma ciudad y tiempo. Gay (1994) y Stokes (1995), por ejemplo, dividen a los ocupantes de Río de Janeiro y Lima en clientelistas y rebeldes, respectivamente. Recientemente, Dosh (2010) nos muestra, mediante la comparación de los asentamientos precarios en la ciudad de Lima y Quito, cómo algunas organizaciones barriales cambian de estrategias a lo largo de sus vidas, ajustándose a los diferentes contextos eligiendo entre las estrategias conformistas, militantes, autogestivas o clandestinas para obtener servicios barriales, mientras que otros se quedan atados solo a una de ellas. Sostiene que las organizaciones comunitarias que son más flexibles, generalmente, son las más exitosas. Este hallazgo resuena con lo que encontré en Montevideo. Sin embargo, necesitamos agregar una posibilidad más, que es el uso marginal de estrategias colectivas para obtener servicios barriales, que es el caso de muchas invasiones por acreción.

---

11 Entrevista a Delia Rodríguez, concejal del Partido Socialista de 2000 a 2005 y luego subdirectora del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI).

Aunque, como mencioné con anterioridad, las invasiones por acreción fueron las formas típicas antes y durante la dictadura, mientras que las invasiones planeadas fueron los casos típicos de la formación de asentamientos después de la apertura democrática, las invasiones por acreción siguieron creciendo en los períodos de intensa competencia electoral y de descentralización. Este interrogante solo se puede resolver observando los recursos diferenciales que tienen estos asentamientos. Por ejemplo, cerca de 1990 comenzaron dos asentamientos muy distintos, al oeste de la ciudad. Uno, Victoria Nuevo, fue una invasión por acreción que comenzó a crecer en las inmediaciones de viejos cantegriles. Situado junto a un riachuelo contaminado, montones de basura rodeaban las viviendas muy precarias. Cuando le pregunté a una funcionaria local acerca de este barrio, tardó un rato largo en identificarlo. Aún cuando estaban en una parcela de propiedad municipal, estos ocupantes no tenían historiales de relaciones con el gobierno local. No tenían una organización barrial o representantes en el consejo local. En gran parte, permanecieron invisibles.

La otra invasión, Nuevo Amanecer, tuvo una historia muy diferente. Un grupo de gente que ya se conocía por su militancia sindical y que no podía solventar más su costo de vida en la ciudad comenzó la organización. A través de las redes políticas con concejales de la ciudad se enteraron de la existencia de un terreno estatal que podían ocupar en el barrio El Cerro, siempre y cuando lo hicieran de forma organizada, según fueron advertidos por los concejales. Lo ocuparon solo después de tener todo planeado. Iban a funcionar como una cooperativa (algunos tenían experiencia en el movimiento cooperativo de vivienda). En lugar de que cada uno se preocupara solo de su propia casa, iban a hacer algunas tareas de manera colectiva. No recibieron ninguna amenaza de desalojo y rápidamente comenzaron a hacer lo que Luis, uno de los fundadores y líder de la asociación barrial, describe como el "verdadero trabajo". A través de peticiones directas, recibieron agua y electricidad. También aseguraron los materiales de construcción de la administración municipal izquierdista recientemente inaugurada. Luis comenzó a participar en el nuevo programa de descentralización como concejal. Sin embargo, los contactos de Luis no fueron suficientes para asfaltar calles. Necesitaban contactos con el gobierno nacional. Otro vecino, del Partido Colorado, que trabajaba codo a codo con Luis, trajo al barrio al Ministro de Transporte y él les construyó los caminos. A través de redes políticas y gestión lograron cambiar su parcela de rural a potencialmente urbanizable, que luego ingresó al programa de regularización. Nuevo Amanecer, a continuación, se convirtió en el primer asentamiento legalizado en la ciudad.

Aunque Victoria Nuevo y Nuevo Amanecer surgieron al mismo tiempo, este último estaba mucho más dotado para aprovechar las oportunidades de competencia electoral y descentralización. Con residentes en una mejor situación relativa, con experiencia de otros movimientos sociales y partidos políticos fueron capaces de utilizar hábilmente varias redes políticas a su favor, así como los incipientes espacios de participación descentralizados. Sin embargo, como ya se ha mencionado, también utilizaron otras estrategias desde la autogestión a la petición directa al Estado y el cabildeo. Su éxito residió en esta ecléctica combinación de estrategias.

La variación en la capacidad para aprovechar las oportunidades políticas no solo se produce entre la acreción y las invasiones planificadas. Las invasiones planificadas también variaron según sus recursos y su espectro de estrategias. Las organizaciones más militantes, por ejemplo, que no quisieron establecer redes con los partidos tradicionales, fueron menos capaces de aprovechar las oportunidades de competencia electoral en un contexto de gobierno dividido. De hecho, aquellos que únicamente tenían conexiones con un solo partido político de cualquier color no tuvieron tanto éxito como los más flexibles.

Centrarse en los recursos y estrategias da más espacio para la agencia que centrarse exclusivamente en las oportunidades. Como plantea Gay (1994: 1) al describir a los ocupantes en Río de Janeiro:

> Los pobres urbanos de América Latina, a menudo, se describen como víctimas inocentes de regímenes represivos y excluyentes. Sin dudas, son víctimas; pero, inocentes, no son. De hecho, hay evidencia creciente de una variedad de contextos de que los pobres urbanos han sido participantes activos, organizados y agresivos en el proceso político y que las organizaciones populares, en particular, han tenido un impacto significativo en la relación entre los pobres urbanos y las elites políticas.

Dado que esta descripción se ajusta a muchos de mis entrevistados es importante considerar cómo varía la capacidad de agencia en diferentes contextos institucionales, con el tiempo y según los recursos del barrio, como se ilustró en esta sección.

EL FINAL DEL CICLO Y ALGUNAS OBSERVACIONES FINALES

El nuevo siglo encontró a Uruguay envuelto en su peor crisis socioeconómica. El período de recesión que se inició en 1999, encarnado por la crisis bancaria de 2002, añadió una nueva capa a las tendencias de largo plazo de empobrecimiento y precarización. Si el período de crecimiento desigual que caracteriza los 90 había damnificado a los pobres, este nuevo período recesivo fue aún más perjudicial. La po-

breza y el desempleo se elevaron a niveles sin precedentes y los ingresos de los hogares se redujeron considerablemente (Amarante y Arim, 2004).[12] El hambre y la desesperación inundaron la ciudad.

Ninguna ola de invasiones de tierras acompañó o siguió a esta crisis. Aunque algunos asentamientos recibieron nuevas familias durante estos años, tornándose más densos y más precarios, invadir tierras no fue una estrategia masiva utilizada por los afectados por la crisis, al menos en la ciudad.[13] En los asentamientos existentes se produjeron otras formas de movilización, como la organización de comedores populares y merenderos como ya había en otros barrios humildes (Falero, 2004). Según se muestra en las Gráficas 15.1 y 15.2, la cantidad anual de invasiones de tierras sigue siendo alta durante la primera administración de la ciudad del Frente Amplio (1990-1994), tiene un nuevo pico cerca de las elecciones de 1994 y al año siguiente, y comienza a decaer. No obstante el hecho de que las olas de movilización de todo tipo no duran para siempre y tienden a tener forma de U invertida (Tarrow, 1998; Tarrow, 1999), o el hecho de que los precios de los alquileres habían ido bajado y estaban particularmente bajos en el momento de la crisis (*Semanario Voces*, 2011), hay una rica historia para explicar esta paradoja.

Como sugiere la teoría del proceso político, para invadir se necesita más que demandas y más aún para hacerlo de manera organizada. Los cambios en el clima político e institucional fueron subyacentes a la disminución de las nuevas invasiones de tierras. En las elecciones de 1994, después de su primer periodo de gobierno de la ciudad, el Frente Amplio experimentó su mayor incremento entre los votantes de los estratos más bajos (Luna, 2007). En las elecciones de 1999, la izquierda había ganado el voto de la clase baja en la ciudad,

---

12 La pobreza alcanzó a 40,9% de los hogares uruguayos, casi duplicando los porcentajes de los años 90 (Arim y Vigorito, 2007).

13 De acuerdo a la evidencia anecdótica, los asentamientos crecieron en el área metropolitana en los años de la crisis (a lo largo del norte de la Costa de Oro, por ejemplo). Sin embargo, no hay información disponible acerca de las fechas del asentamiento de esos barrios. Considerando solo a Montevideo, según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas, en 1998 ya había 120 mil personas viviendo en asentamientos (INE, 1998). Ese número había aumentado a 133,546 en 2004 (según el censo de 2004 del INE) y a 144.707 en 2006 (INE-PIAI, 2006). Aunque estas estimaciones no son estrictamente comparables, el número de personas que viven en asentamientos parece ir menguando desde entonces. Según una estimación de 2008 la cantidad fue de 130 mil (Menéndez, 2008) y, la más reciente, indica que 112.101 personas viven en asentamientos (PMB-PIAI, 2013). Esta última estimación, además, informa sobre una disminución en la cantidad de barrios precarios, debido al programa de mejoras y regularización, sumado a la ausencia de ocupaciones de tierras.

para finalmente ganar el gobierno nacional en 2004 y ser reelegida en las elecciones de 2008. Por otro lado, los gobiernos locales descentralizados comenzaron a ser menos flexibles con las nuevas invasiones de tierras.[14] Esta nueva actitud generalizada podía provenir de la influencia del poder adquirido con las victorias electorales, pero también de la experiencia adquirida en el gobierno de la ciudad y la conciencia de que las invasiones generan nuevas demandas y problemas a resolver. Lo mismo ocurrió con el gobierno nacional, que en 2011 se opuso oficialmente a una invasión de tierra organizada que terminó con un masivo desalojo de 270 familias (cubierto por los medios de comunicación). "La ocupación no es el mecanismo para demandar viviendas", dijo el Secretario de Vivienda a uno de los diarios nacionales.[15] Para los ocupantes, el contexto político había cambiado.

Recientemente, también cambiaron las demandas. Mientras que el Norte Global lucha para recuperarse de la crisis financiera global y sus efectos, América Latina está experimentando un crecimiento económico. Uruguay y Montevideo redujeron significativamente sus índices de pobreza. Un programa de actualización y escrituración, finalmente, está en marcha regularizando y mejorando las condiciones de vida en varios asentamientos.[16] La participación sindical se recuperó con el regreso de los consejos de salarios. Sin embargo, la ciudad y la sociedad han cambiado. Las rupturas perdurables son evidentes en el aumento de la delincuencia y el miedo. La exclusión social profunda no es fácil de superar, incluso en tiempos de recuperación económica.

---

14 El caso de la invasión planeada de El Cambio lo ilustra. Esta invasión ocurrió en octubre de 2004, justo antes de las elecciones que llevaron a la coalición de izquierda al gobierno nacional por primera vez en la historia uruguaya. De hecho, la invasión fue denominada El Cambio por el eslogan de campaña electoral del Frente Amplio de ese año. Ubicado en una de las zonas de la ciudad con mayor cantidad de ocupaciones, El Cerro, con una tradición de organización de la clase trabajadora y con un gobierno local permisivo, El Cambio no fue desalojado inmediatamente. Pero, al contrario de lo que había sucedido en otras ocupaciones, luego de un período de duda y de cambio de autoridades por parte del gobierno local, esta vez la nueva Junta Local decidió oponerse a esa invasión. Incluso, escribió una declaración oponiéndose a cualquier nueva ocupación en la zona.

15 "La ocupación no es el mecanismo para exigir vivienda" en *El Observador*, 19 de enero de 2011.

16 El PIAI, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el gobierno uruguayo, es similar a otros programas de la región como el de la famosa Favela-Bairro en Brasil. Si bien está presente en Uruguay desde 1998 ha sido particularmente activo en Montevideo desde que el Frente Amplio tiene el gobierno nacional. Antes, dado que los gobiernos nacional y municipal estaban administrados por partidos opuestos, el programa estaba estancado en la ciudad y era más activo en otras partes del país.

Y un grupo de montevideanos que vive en ciertos asentamientos sigue siendo profundamente marginado.

El sueño de pertenecer a la ciudad y convertirse en un barrio más, que había inspirado muchas invasiones de tierras planeadas pudo ser alcanzado por algunos, aquellos que tuvieron éxito en llegar al Estado y, al mismo tiempo, fueron capaces de controlar las normas y la población que vivía dentro de sus fronteras. Pero para muchos otros esa fue una tarea imposible. "La organización de los extraños" (Roberts, 1973) es muy difícil, particularmente en contextos de extremas necesidades y nuevos problemas (como la aparición del consumo de drogas y la trata de personas). Algunos asentamientos, principalmente pero no solo los que se formaron por acreción, hoy son considerados "zonas rojas" y temidos por la población en general.

En todos los asentamientos, las redes informales del barrio todavía suelen ser la base de los nuevos tipos de movilización, desde cortar una ruta para protestar por cuestiones como no haber clasificado para el programa de transferencias condicionadas, o no tener construida la escuela que la comunidad ha estado pidiendo durante al menos 10 años, a organizar comedores populares o llenar un ómnibus para ir a votar el día de las elecciones. Incluso bajo las condiciones más duras, la movilización aparece como una de las estrategias que los pueblos utilizan para sobrevivir, junto con estrategias personales y familiares o redes políticas, por mencionar solo algunas. Otra vez, recordando el consejo de Tarrow (1999), entender el momento en que la movilización se convierte en una estrategia frecuente puede ser revelador tanto del contexto político más amplio que generalmente afecta a la acción colectiva como de las razones por las que los pueblos decidieron utilizarla como estrategia.

Pensando comparativamente, la prevalencia de los ocupantes depende en gran medida de las presiones de la población, el mercado de vivienda y el mercado de trabajo. Pero como he mostrado en este capítulo, también depende de la relación entre las clases populares y el Estado. Esta relación incluye la política electoral y la política de vivienda, así como otras acciones más específicas hacia los que ocupan. Las agencias estatales pueden ayudar, alentar, tolerar, ignorar, hostigar o reprimir los asentamientos. Con más frecuencia, sin embargo, sus actos pertenecen a una zona gris que incluye un poco de tolerancia, cierta represión, alguna cooptación y algo de ayuda. Además, y para añadir una capa más de complejidad, el Estado no es monolítico. Las diferentes agencias estatales pueden perseguir diferentes políticas o acciones específicas y esas políticas pueden cambiar con el tiempo. A su vez, las acciones estatales tienden a depender de la forma en que se organizan los ocupantes y del interés que tienen

las elites en los ocupantes como apoyo político. En otras palabras, las malas condiciones económicas son necesarias pero no suficientes para la existencia o el predominio de los asentamientos precarios en una ciudad. Las condiciones económicas, a menudo, interactúan con factores políticos que desencadenan las ocupaciones y que demarcan cómo suceden. La prolífica literatura sobre los movimientos sociales, la política contenciosa y la acción colectiva, en general, nos brindan lentes teóricas interesantes para entender las ocupaciones. Aún cuando las organizaciones de ocupantes informales no siempre se ajustan exactamente a nuestras definiciones de qué es un movimiento social, esta literatura ilumina aspectos de la agencia y la estrategia de los ocupantes, y de cómo se relacionan con su contexto, que permanecerían velados si solo nos centramos en los aspectos –no menos reales y definitivamente preocupantes– de privación y exclusión.

BIBLIOGRAFÍA

Almeida, P. 2010 'Social movement partyism: Collective action and oppositional political parties' en Van Dyke, N. y McCammon, H. J. (eds.) *Strategic alliances: Coalition building and social movements* (Minneapolis: University of Minnesota Press).

Alsayyad, N. 1993 'Squatting and culture: A comparative analysis of informal developments in Latin America and the Middle East' en *Habitat International*, 171: 33-44.

Alsayyad, N. y Roy, A. 2003 'Prologue/dialogue. Urban informality: Crossing borders' en Alsayyad, N. y Roy, A. (eds.) *Urban informality. Transnational perspectives from the Middle East, Latin América, and South Asia* (Lanham/Londres: Lexington).

Álvarez-Rivadulla, M. J. 2000 "Asentamientos irregulares montevideanos: la desafiliación resistida. Documento" (Montevideo: Universidad Católica del Uruguay) IPES Working Paper 4. En <http://www.ucu.edu.uy/sites/default/files/facultad/dcsp/asentamientos_irregulares.pdf.> acceso 8 de mayo de 2015.

Álvarez-Rivadulla, M. J. 2012a 'Clientelism or something else? Squatter's politics in Montevideo' en *Latin American Politics & Society*, 54: 37-63.

Álvarez-Rivadulla, M. J. 2012b 'The weakness of symbolic boundaries: Resisting exclusion among Montevideo's squatters', Presentado en *XXX International Congress of the Latin American Studies Association*, San Francisco.

Amarante, V. y Caffera, M. 2003 "Los factores determinantes de la formación de asentamientos irregulares. Un análisis

económico" en *Revista de la Facultad de Ciencias Empresariales y Economía, Universidad de Montevideo*, 2: 61-95.

Amarante, V. y Arim, R. 2004 "El mercado laboral: cambios estructurales y el impacto de la crisis, 1986- 2002" en OIT (ed.) *Uruguay. Empleo y Protección Social. De la crisis al crecimiento* (Santiago de Chile: Oficina Subregional de la OIT para el Cono Sur de América Latina).

Arim, R. y Vigorito, A. 2007 *Un análisis multidimensional de la pobreza en Uruguay. 1991-2005* (Working paper DT 10/06 Montevideo: Instituto de Economía, Universidad de la República en <http://www.iecon.ccee.edu.uy/dt-10-06-un-analisis-multidimensional-de-la-pobreza-en-uruguay-1991-2005/publicacion/116/es/> acceso 8 de mayo de 2015.

Auyero, J. 2000 *Poor people's politics. Peronist survival networks & the legacy of Evita* (Durham: Duke University Press).

Auyero, J.; Lapegna, P. y Poma, F. P. 2009 'Patronage politics and contentious collective action: A recursive relationship' en *Latin American Politics and Society*, 51: 1-31.

Baiocchi, G. 2005 *Militants and citizens: The politics of participatory democracy in Porto Alegre* (Stanford: Stanford University Press).

Baudrón, S. 1979 *Estudio Socioeconómico de algunos barrios marginales de Montevideo* (Montevideo: Fundación de cultura Universitaria Ciedur).

Bayat, A. 2004 'Globalization and the politics of the informals in the global South' en Roy, A. y Alsayyad, N. (eds.) *Urban informality. transnational perspectives from the Middle East, Latin America, and South Asia* (Lanham: Lexington Books).

Benton, L. A. 1986 'Reshaping the Urban Core: The politics of housing in authoritarian Uruguay' en *Latin American Research Review*, 212: 33-52.

Bon Espasandín, M. 1963 *Cantegriles* (Montevideo: Tupac Amaru).

Bucheli, G. et al. 2005 *Vivos los llevaron: Historia de la lucha de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, 1976-2005* (Montevideo: Ediciones Trilce).

Burgwal, G. 1995 *Struggle of the poor: Neighborhood organization and clientelist practice in a quito squatter settlement* (Amsterdam: CEDLA).

Caldeira, T. 1990 Women, daily life and politics. In E. Jelin (ed.), *Women and social change in Latin America* (Londres: Zed Books).

Canel, E. 1992 'Democratization and the Decline of Urban Social Movements in Uruguay: A Political Institutional Account' en Escobar, A. y Álvarez, S. E. (ed.) *The Making of Social Movements in Latin America* (Boulder: Westnew Press).

Canel, E. 2010 *Barrio democracy in Latin America. Participatory decentralization and community activism in Montevideo* (University Park: The Pennsylvania University Press).

Castells, M. 1983 *The City and the grassroots* (Berkeley: University of California Press).

Cecilio, M. 1997 "Relevamiento de Asentamientos Irregulares de Montevideo" en *Asentamientos Irregulares* (Montevideo: Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente - Comisión para la normalización de asentamientos irregulares).

Cecilio, M. et al 1999 *La gestión urbana en la generación de los tejidos residenciales de la periferia de Montevideo: Aéreas ocupadas por los sectores de población de bajos y medios ingresos* (Montevideo: Universidad de la República - Facultad de Arquitectura).

Chávez, D. y Goldfrank, B. 1004 *La izquierda en la ciudad. Participación en los gobiernos locales de América Latina* (Amsterdam: Transnational Institute).

Collier, D. 1976 *Squatters and oligarchs. Authoritarian rule and policy change in Perú* (Baltimore: John Hopkins University Press).

Cornelius, W. A. 1974 'Urbanization and Political Demand Making: Political Participation Among the Migrant Poor in Latin American Cities' en *The American Political Science Review*, *68*(3): 1.125-1.146.

Cornelius, W. A. 1977 'Leaders, followers, and official patrons in urban Mexico' en Schmidt, S. W. et al. (eds.) *Friends, followers, and factions. A reader in political clientelism* (Berkeley: University of California Press).

Davis, D. E. 1999 'The power of distance: Re-Theorizing social movements in Latin America' en *Theory and Society*, 28: 585-638.

Dietz, H. A. 1998 *Urban poverty, political participation and the State. Lima, 1970-1990* (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press).

Dosh, P. 2010 *Demanding the land: Urban popular movements in Peru and Ecuador, 1990-2005. Vol. Ph.D.* (State College: Pennsylvania University Press).

Eckstein, S. 1977 *The poverty of revolution: The state and the urban poor in Mexico* (Princeton: Princeton University Press).

Escobar, A. y Alvarez, S. E. 1992 *The making of social movements in Latin America: Identity, strategy, and democracy* (Boulder: Westview Press).

Evers, T. 1985 'Identity: The hidden side of new social movements in Latin America' en Slater, D. (ed.) *New social movements and the state in Latin America* (Amsterdam: CEDLA).

Falero, A. 2004 "Sociedad civil y construcción de nueva subjetividad social en Uruguay: condicionamientos, conflictos, desafíos" en Seoane, J. (ed.) *Movimientos sociales y conflicto en América Latina* (Buenos Aires: CLACSO).

Feldman, D. y García, A. (entrevistadores) y Villamide, J. (entrevistado) 2011 "No creció el número de asentamientos sino la cantidad de personas que vive en ellos" en *Semanario Voces*, 28 de marzo. En <http://www.voces.com.uy/entrevistas-1/juliovillamide%E2%80%9Cnocrecioelnumerodeasentamientossinolacantidaddepersonasquevivenenellos%E2%80%9D>.

Filgueira, C. 1985 "Movimientos Sociales en la restauración del orden democrático: Uruguay, 1985" en Filgueira, C. (ed.) *Movimientos Sociales en el Uruguay de Hoy* (Montevideo: CLACSO/CIESU/Ediciones de la Banda Oriental).

Filgueira, F. et al. 2003 "Los dos ciclos del Estado uruguayo en el siglo XX" en I. d. C. Política (ed.) *El Uruguay del siglo XX. La Política* (Montevideo: Banda Oriental).

Gay, R. 1994 *Popular organization and democracy in Rio de Janeiro. A tale of two favelas*. (Philadelphia: Temple University Press).

Gilbert, A. 1994 *The Latin American city* (Londres: The Latin America Bureau).

Goldfrank, B. 2002 'The fragile flower of local democracy: A case study of decentralization/participation in Montevideo' en *Politics and Society*, 30: 51-83.

González, M. 1989 *Las comisiones vecinales en el departamento de Montevideo: Elementos para su discusión a partir de los resultados de una encuesta* (Montevideo: CIESU).

Handelman, H. 1975 'The political mobilization of urban squatter settlements. Santiago's recent experience and its implications for urban research' en *Latin American Research Review*, 10: 35-72.

Harvey, D. 2008 'The right to the city' en *New Left Review*, 53: 23-40.

Hipsher, P. L. 1998 'Democratic transitions and social movement outcomes: The chilean shantytown dweller's movement in comparative perspective' en Giugni, M. G.; McAdam, D. y Tilly,

C. (eds.) *From contention to democracy* (Boston: Rowman & Littlefield).

Holston, J. 1991 'Autoconstruction in working-class Brasil' en *Cultural Anthropology*, 6: 447-465.

Hyden, G. 1997 'Civil society, social capital, and development: Dissection of a complex discourse' en *Studies in Comparative International Development*, 32: 3-30.

INE-PIAI 2006 "Relevamiento de Asentamientos 2006" (Montevideo: INE-PIAI).

INE 1998 *Relevamiento de Asentimientos Irregulares* (Montevideo: INE). En <http://www.ine.gub.uy/piai3/presentacion.pdf.>.

INTEC 1995 *Relevamiento de Asentimientos Irregulares de Montevideo* (Montevideo: INTEC).

Johnston, H. y Almeida, P. 2006 *Latin American social movements: Globalization, democratization, and transnational networks* (Lanham: Rowman & Littlefield).

Kaztman, R. 2001 "Seducidos y abandonados: El asilamiento social de los pobres urbanos" en *Revista de la CEPAL* (Santiago de Chile) 75: 171-189.

Kaztman, R. et al. 2004 *La ciudad fragmentada: mercado, territorio y marginalidad en Montevideo* (Austin: PRC-University of Texas) CSUIM Working Paper # 02-UR01. En <http://www.redligare.org/IMG/pdf/montevideo_ciudad_fragmentada.pdf> acceso 15 de mayo de 2015.

Kaztman, R.; Filgueira, F. y Errandonea, F. 2005 "La ciudad fragmentada. Respuesta de los sectores populares urbanos a las transformaciones del mercado y el territorio en Montevideo" en Portes, A.; Roberts, B. y Grimson, A. (eds.) *Ciudades Latinoamericanas. Un Análisis Comparativo en el Umbral del Nuevo Siglo* (Buenos Aires: Prometeo).

Luna, J. P. 2006 *Programmatic and non-programmatic voter linkages in two institutionalized party systems: Chile and Uruguay in comparative perspective* (Chapel Hill: Political Science).

Luna, J. P. 2007 'Frente Amplio and the Crafting of a Social Democratic Alternative in Uruguay' en *Latin American Politics & Society*, *49*(4): 1-30.

Mazzei, E. y Veiga, D. 1985 *Pobreza Urbana en Montevideo. Nueva encuesta en "cantegriles" 1984* (Montevideo: CIESU-Banda Oriental).

McAdam, D. 1982 *Political process and the development of black insurgency, 1930-1970* (Chicago: University of Chicago Press).

McAdam, D.; McCarthy, J. y Zald, M. N. 1996 *Comparative perspectives on social movements: Political opportunities, mobilizing structures and cultural framings* (Nueva York: Cambridge University Press).

Menéndez, F. J. 2008 "Condiciones de vida en Montevideo, 2do semestre 2008" en *Documentos Temáticos, Vol. 1* (Montevideo: INE).

Merklen, D. 1997 "Organización comunitaria y práctica política. Las ocupaciones de tierras en el conurbano de Buenos Aires" en *Nueva Sociedad,* 149: 162-177.

Midaglia, C. 1992 *Las formas de acción colectiva en Uruguay* (Montevideo: CIESU)

Mieres, P. 1988 *Cómo votan los uruguayos* (Montevideo: CLAEH y Banda Oriental).

Mieres, P. 1994 *Desobediencia y Lealtad. El voto en el Uruguay de fin de Siglo* (Montevideo: Fin de Siglo).

Mirza, C. A. 2006 *Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina: la construcción de nuevas democracias* (Buenos Aires: CLACSO).

Moreira, C. 2005 "El voto moderno y el voto clasista revisado: Explicando el desempeño electoral de la izquierda en las elecciones de 2004 en Uruguay" en Buquet, D. (ed.) *Las Claves del Cambio* (Montevideo: Banda Oriental - Instituto de Ciencia Política).

Moreira, C. 2011 "Movimientos populares y luchas sociales en Uruguay" en Mondonesi, M. y Rebón, J. N. (eds.) *Una década en movimiento: luchas populares en América Latina en el amanecer del siglo XXI* (Buenos Aires: CLACSO/Prometeo).

Myers, D. J. y Henry, A. D. 2002 *Capital city politics in Latin America* (Boulder: Lynne Rienner).

Nahoum, B. 2002 "Los asentamientos irregulares, entre prevenir y curar", Presentado en las *Primeras jornadas uruguayas de asentamientos informales*, Montevideo.

Oxhorn, P. 1995 *Organizing civil society. The popular sectors and the struggle for democracy in Chile* (University Park: The Pennsylvania State University Press).

Özler, S. I. 2003 *Squatters stand up: Political institutions and demand making in the developing world* (Los Angeles: Political Science, University of California).

Panizza, F. y Adolfo, P. P. 1988 *Estado Y Sociedad* (Montevideo: FESUR).

Programa de Mejoramiento de Barrios - Unidad de Evaluación y Monitoreo 2013 *Informe Técnico: Relevamiento de Asentamientos Irregulares. Primeros Resultados de Población y Viviendas a partir del Censo 2011* en <http://pmb.mvotma.gub.uy/sites/default/ files/ informe_asentamientos_censo_2011_19-10-2012.pdf>.

Portes, A. y Walton, J. 1976 *Urban Latin America* (Austin: University of Texas Press).

Portes, A. 1989 'Latin American urbanization during the years of the crisis' en *Latin American Research Review*, 243: 7-44.

Prévôt Schapira, M. F. 1999 'From Utopia to pragmatism: The heritage of basismo in local government in the greater Buenos aires region' en *Bulletin of Latin American Research*, 18: 227-239.

Rama, G. 1971 *El Club Político* (Montevideo: ARCA).

Roberts, B. R. 1973 *Organizing strangers. Poor families in Guatemala City* (Austin: University of Texas).

Robinson, W. I. 1997 Review: 'Beyond romanticism: Social movements and the study of political change in Latin America' en *Latin American Research Review*, 32: 137-151.

Roberts, B. R. y Portes, A. 2006 'Coping with the Free Market City: Collective Action in Six Latin American Cities at the End of the Twentieth Century' en *Latin American Research Review,* 412: 57-83.

Rodé, P.; Marsiglia, J. y Piedracueva, E. 1985 "Experiencias recientes de movilización urbana en las áreas de la salud, nutrición y organización barrial" en Filgueira, C. H. (ed.) *Movimientos sociales en el Uruguay de hoy* (Montevideo: CLACSO/CIESU/ Ediciones de la Banda Oriental).

Santos, C. et al. 2006 *Aguas en movimiento: La resistencia a la privatización del agua en Uruguay* (Montevideo: Ediciones de la Canilla).

Schneider, C. L. 1995 *Shantytown protest in pinochet's Chile* (Philadelphia: Temple University Press).

Stokes, S. 1991 'Politics and Latin America's urban poor: Reflections from a Lima shantytown' en *Latin American Research Review*, 26: 75-101.

Stokes, S. C. 1995 *Cultures in conflict: Social movements and the state in Peru* (Berkeley: University of California Press).

Tarrow, S. 1989 *Democracy and disorder* (Oxford: Clarendon).

Tarrow, S. 1998 *Power in movement* (Cambridge: Cambridge University Press).

Tarrow, S. 1999 'Studying contentious politics: From event-ful history to cycles of collective action' en Koopmans, R.; Rucht,

D. y Neidhardt, F. (eds.) *Acts of dissent* (Maryland: Rowman & Littlefield).

Tilly, C. 1978 *From mobilization to revolution* (Reading: Addison-Wesley).

Touraine, A. 1987 *Actores Sociales y Sistemas Políticos en América Latina* (Santiago: PREALC/OIT).

Veneziano Esperón, A. 2005 *Reflexiones sobre una reforma orientada al ciudadano. La descentralización participativa de Montevideo* (Madrid: INAP).

Viana, I.; Zuccolini, S. y Casanova, R. 2006 *Mercado de suelo urbano formal-informal* (Montevideo: Lincoln Institute of Land Policy - Instituto del Suelo Urbano).

Villamide, J. s/d "Crecimiento Imparable" en *Revista Propiedades*, 183: 3-5.

Walton, J. 1998 'Urban conflict and social movements in poor countries: Theory and evidence of collective action' en *International Journal of Urban and Regional Research*, 22: 460-481.

Walton, J. y Ragin, C. 1990 'Global and national sources of political protest: Third World responses to the debt crisis' en *American Sociological Review*, 55: 876-890.

CÓMO CITAR ESTA PUBLICACIÓN:
Álvarez-Rivadulla, María José. 2017. "Ocupaciones de tierras y política en Montevideo a fin de siglo" Pp. 361-390 en Paul Almeida y Allen Cordero Ulate, Eds., *Movimientos Sociales en América Latina: Perspectivas, Tendencias y Casos*. Buenos Aires: CLACSO.

PARTE V :
CONFLICTOS AMBIENTALES

16

Jean Foyer* y David Dumoulin Kervran**

¿AMBIENTALISMO DE LAS ONG *VERSUS* AMBIENTALISMO DE LOS POBRES?

A principios de los 90, enganchados en la nueva ola de movilización que siguió a la democratización de América Latina, todos los países de la región parecían experimentar algún tipo de movimiento ambiental y la creación de agencias nacionales de medio ambiente (García-Guadilla y Blauert, 1994; Hochsteler y Mumme, 1998; Alfie Cohen, 2005a). La lucha ambiental, junto con las luchas por los derechos indígenas y los derechos de las mujeres, a menudo ha sido llamada "nuevo movimiento social (NMS)", que se distingue de los movimientos sociales anteriores por el estatus social más alto de sus miembros, por sus causas pos materialistas, basadas en la identidad y por la poca prioridad que le dieron a la acción directa realizada por medios extra institucionales (Melucci, 1999). Mientras que esta etiqueta de "NMS" tuvo todas las oportunidades para resaltar la aparición de nuevas formas de acción colectiva, también destacó la dimensión elitista[1] de las mo-

* Institut des Sciences de la Communication, CNRS-Sorbonne Université-UPMC, París, Francia.

** Institut des Hautes Etudes de l'Amérique Latine (IHEAL) - CREDA, Université Sorbonne Nouvelle, París, Francia.

1 Este elitismo fue reforzado por el rol específico desempeñado por académicos y por la "política de información": el uso de datos científicos fue excepcionalmente intenso en las movilizaciones ambientales.

vilizaciones ambientales y el papel conferido a las ONG. Por lo tanto, en México, la existencia de un movimiento social ambiental nacional parecía autoevidente para los escasos investigadores que lo adoptaron como tema específico (Simonian, 1999; Diez, 2008; Velázquez García, 2010; Durand et al., 2012) y su atención siguió centrada en las ONG. De hecho, aún hoy, la existencia y demarcaciones de este "movimiento social" siguen siendo muy controversiales entre sus grupos de interés, y cada investigador/a del medio ambiente debe indagar sobre sus propias definiciones.

Esta amplia dicotomía, entre los NMS más elitistas y las movilizaciones de base más populares, está arraigada en los dos marcos sociológicos principales que se utilizan actualmente en el análisis de la movilización ambiental en América Latina. Por un lado, muchas publicaciones enfatizan el papel de las ONG y coaliciones transnacionales, muy cercano al discurso de los actores más visibles (Kurzinger et al. 1991; Torres, 1997; Umlas, 1998; Hogenboom, 1998; Alfie Cohen, 2005b; Pacheco-Vega, 2005). Por otro lado, se otorga un papel más significativo a las organizaciones de base de las poblaciones marginadas y a las estrategias de confrontación, a través de marcos analíticos como el "ecologismo de los pobres" de Martínez Alier (2002), o el "movimiento de justicia ambiental" (Carruthers, 2008; Leff, 2001; Verduzco, 2002). Este último enfoque hace hincapié en los conflictos ambientales y en los movimientos indígenas y/o campesinos locales que se oponen a los proyectos de construcción de infraestructura (hidráulicos, mineros, nucleares, petroleros, turísticos, etcétera).

Sin embargo, esta vasta oposición entre los programas de investigación sobre las actividades de las ONG, por un lado, y las movilizaciones populares, por el otro, fue superado ampliamente durante los 90 (Clarke, 1995). Surgió una convergencia entre el estudio de la internacionalización de los movimientos sociales (Smith et al., 1998) y el papel de las ONG en las "redes activistas transnacionales" (Keck y Sikkink, 1998). Este nuevo marco analítico, que abarca tanto los movimientos sociales como las ONG, estableció una tipología evolutiva: la formación de coaliciones de articulación de actores heterogéneos a través de campañas constituyó un terreno intermedio entre una mera red de intercambio de información, por un lado, y la existencia de genuinos movimientos sociales transnacionales basados en identidad y estrategia compartidas, por el otro (Tarrow, 2005; Bandy y Smith, 2005).

En este capítulo, entonces, se basa en el análisis de las movilizaciones que se han centrado en la pluralidad de redes entre organizaciones (Diani y McAdam, 2003), un enfoque que solo se ha

aplicado a determinados aspectos del movimiento mexicano (Pacheco-Vega y Obdulia, 2003; Velázquez García, 2008). A diferencia del análisis un tanto idealizado de los movimientos sociales enfocado exclusivamente en las movilizaciones populares de base, un enfoque centrado en las coaliciones puede mostrar que los diferentes actores movilizados están conectados entre sí tanto por la complementariedad y la división del trabajo, como por un conjunto compartido de valores comunes (Pacheco-Vega y Obdulia, 2003). El ambientalismo se caracteriza, con frecuencia, por la heterogeneidad "transclasista" de los participantes y, por lo tanto, la construcción de coaliciones es la forma más usual para ampliar la movilización. Este es el nexo *distintivo* entre las organizaciones "elitistas" y "populares", así como las dos trayectorias históricas distintas de alianzas, que nos permiten dividir empíricamente en dos componentes lo que podríamos llamar "ambientalismo social mexicano".[2] En cambio, no vamos a tratar aquí con otro campo organizacional, el "conservacionismo", que reúne a las (numerosas) organizaciones que solo trabajan en la gestión de áreas protegidas (Dumoulin, 2003, 2007). No porque demos por sentado que las demandas de muchos conservacionistas sean apolíticas, sino porque sus actividades se centran demasiado en la "gestión de proyectos" para encajar en alguna definición de movimiento social.

Este estudio se basa en varios períodos de trabajo de campo realizado por los autores en México entre los años 2000 y 2012.[3] Se fundamenta en más de 100 entrevistas con participantes de las organizaciones mencionadas, así como en períodos seleccionados de observación participante. Cada una de las dos partes del capítulo, entonces, explora la construcción de un "campo organizacional" basado en coaliciones entre las poblaciones locales, las élites urbanas y las organizaciones internacionales: llamamos a la primera parte "desarrollo comunitario sustentable" y la segunda "resistencia ambiental"; en la conclusión, vamos a volver a revisitar las principales ventajas de nuestra manera de construir el objeto "movimiento social ambientalista".

---

2 El término "ambientalismo social" no es comúnmente utilizado por los miembros de las organizaciones analizadas aquí. Esta categoría de análisis fue utilizada por González Martínez (1992) por primera vez.

3 Estos períodos de trabajo de campo tuvieron duraciones muy diferentes: de 2 años (durante la preparación de la tesis doctoral de cada uno de los autores) a numerosos periodos de 1 mes, durante la última década, dedicados a diferentes proyectos de investigación con temáticas relacionadas.

I. LAS REDES DEL DESARROLLO COMUNITARIO SUSTENTABLE: DESDE LAS BASES AL ESTADO Y LAS ENTIDADES DE FINANCIACIÓN

A. EL ORIGEN DE LAS ALIANZAS ENTRE LAS ONG Y LAS COMUNIDADES RURALES

El primer paso en el establecimiento del campo gravitó en grupos urbanos, que a menudo se organizaban en grupos de la sociedad civil al forjar alianzas con las comunidades locales. En la segunda mitad de los años 70 y durante los 80, en México surgió una corriente ambientalista que estaba profundamente arraigada en el sector rural, y cuyas actividades principales se basaron más en la búsqueda del desarrollo comunitario alternativo que en la conservación de la naturaleza, que la distingue claramente de los conservacionistas tradicionales (Carruthers, 1996). En 1970, varios grupos de estudiantes decidieron tomar en serio la crisis ambiental y buscar alternativas en las zonas rurales. Reconocieron la influencia de diferentes escuelas de pensamiento, en general procedentes del marxismo y las repercusiones de la represión de 1968 en la academia, pero también de pensadores como Ignacy Sachs e Ivan Illich (que dirigió el Centro Intercultural de Documentación en México, entre 1961 y 1976). Otra figura inspiradora fue la del ingeniero agrónomo mexicano Efraím Hernández Xolocotzi, quien abogó por una "ciencia de huarache"[4] (o ciencia en sandalias), es decir, una ciencia basada en el trabajo de campo, en contacto directo con la población rural y que incluye el reconocimiento de saberes y prácticas ancestrales. Después de crear los primeros centros autónomos de investigación ecológica,[5] varios grupos personificaron el crecimiento de un movimiento orientado hacia el desarrollo comunitario sustentable.

Los miembros fundadores del Grupo de Estudios Ambientales (GEA), primero experimentaron durante varios años con nuevos programas de investigación, capacitando a las poblaciones locales y orquestando proyectos de desarrollo a nivel comunitario (forestales, del cultivo tradicional de maíz, etc.), antes de establecer formalmente su ONG en 1977 e implementar los proyectos alternativos en las comunidades rurales marginadas en varias regiones (Xalapa, Puebla, Guerrero, etcétera). Un segundo gran grupo estaba conformado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México

---

4 [N. de las T.] En español en el original.

5 Junto con el Centro de Ecodesarrollo, creado en 1972, y el Instituto de Ecología (1974), encontramos el Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos (INIREB), que encarnó el movimiento de "ambientalismo social" (1975-1988). Los tres seguían siendo muy dependientes del Estado mexicano.

(UNAM), esencialmente biólogos, reunidos en torno del etnobotánico Víctor Manuel Toledo y la bióloga Julia Carabias, que estaban desplegando la oposición de izquierda al Partido Revolucionario Institucional (PRI).[6] Gracias al éxito del primer experimento local de uno de los modelos de desarrollo alternativo, su grupo cambió la escala de los proyectos a través del Programa de Aprovechamiento Integral de Recursos Naturales (PAIR), que se extendió por las distintas regiones del país (Michoacán, Oaxaca y Durango) (Carabias et al., 1994; Toledo, 1983). Un tercer grupo de académicos activistas participó, durante la segunda mitad de los 80, en el movimiento de las comunidades de la Sierra de Juárez del estado de Oaxaca para recuperar sus derechos territoriales sobre los bosques de las concesiones a empresas paraestatales. Fundaron la organización de Estudios Rurales y Asesoría (ERA). Esta primera movilización fue parte del nacimiento de uno de los movimientos más interesantes de la silvicultura comunitaria, cuando una organización local, la Unión Zapoteca-Chinanteca (UZACHI), fue entrenada en el uso sustentable de los recursos del bosque. De esta manera, los dos grandes sectores –la silvicultura comunitaria (Barton Bray y Merino Pérez, 2004) y la producción de café orgánico[7] (Ejea y Hernández, 1991)– forjaron intensas relaciones entre los partidarios de las ONG y las organizaciones comunitarias, transformando los modos de desarrollo y los sistemas políticos locales por igual. La lucha por el control de los recursos naturales y la tierra –ya sea contra el Estado o contra los jefes locales– y los procesos de organización de las comunidades en sindicatos o cooperativas fueron fundamentales en esta primera fase.

Así, el movimiento ambiental sirvió como un punto de unión entre una elite urbana altamente politizada, proveniente del mundo académico o religioso, por un lado, y las comunidades locales que participaban en las luchas, por el otro. Esta alianza llevó, algunas veces, a relaciones de largo plazo entre las comunidades. La idea de

---

6 El Partido Socialista Unificado de México (PSUM) surgió de la fusión entre el Partido Comunista mexicano y varias corrientes de la izquierda mexicana. Ganó las elecciones municipales en la ciudad de Alcozauca, en el estado de Guerrero a finales de los 70. Esta victoria le dio al grupo la oportunidad de pasar de la reflexión a la acción política e implementar un proyecto experimental, que fue visto como una experiencia pionera del desarrollo sustentable en la región (principalmente, diagnóstico ambiental y un plan de gestión municipal).

7 Los ejemplos más representativos de esta ola de exportación orientada alrededor de las cooperativas de café orgánico fueron la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI) y los Indígenas de la Sierra Madre de Motozintla (ISMAM). En estas organizaciones, los miembros de los grupos del tipo teología de la liberación fueron más influyentes que los miembros de la academia.

que existía un movimiento indígena ambientalista que estaba anclado localmente en torno a las prácticas tradicionales (agua, suelo y manejo forestal) o en modos de producción alternativos (de café, miel, vainilla y así sucesivamente) fue desplegada por el movimiento de intelectuales, entre ellos Víctor Manuel Toledo, que llegó a evocar la idea seductora de "zapatistas verdes" (Toledo, 1992, 2000).

B. INSTITUCIONALIZACIÓN Y RELACIONES CON EL ESTADO

A principios de los 90, tras la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992, emergió una segunda generación de organizaciones alrededor del tema de desarrollo rural sustentable. Estas incluyeron, por citar solo algunos ejemplos destacados: el Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada (GIRA), que operaba dentro de las comunidades indígenas de Michoacán; el Proyecto Sierra de Santa Marta (PSSM), en el sur del estado de Veracruz; y el Grupo GAIA, en la costa de Oaxaca. También se realizó un esfuerzo de coordinación a nivel nacional, a través del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), que se formó a mediados de los 90 para tratar de capitalizar las diferentes experiencias locales y promover la silvicultura comunitaria a nivel nacional, especialmente con las autoridades públicas.

Para entender el rápido desarrollo de las ONG ambientales mexicanas, debemos situarlo en el contexto nacional más amplio del proceso de democratización del sistema mexicano, que dejó espacio para ciertas experiencias fuera de corporativismo oficial (Mollard y López, 2006). Sin embargo, en un Estado nación que había sido controlado por el PRI durante casi 70 años,[8] y un partido que se basaba en el corporativismo y el clientelismo, la cuestión de si forjar o no una relación con las instituciones oficiales planteó un dilema fundamental a todos los movimientos sociales mexicanos. El dilema estaba entre mantener la independencia a riesgo de quedar fuera de toda influencia institucional y recursos,[9] o mantener el acceso a puestos de trabajo y beneficios (financieros u otros) a un riesgo aún mayor, el de legitimar un sistema establecido por el PRI y padecer bajo sus muchas limitaciones.

---

8 El PRI controló México desde el final de la Revolución en los años 20 hasta el año 2000. Después de una transición de 12 años dominada por la presidencia del derechista Partido de Acción Nacional (PAN), el PRI volvió al poder en 2012, a nivel nacional y en muchos estados.

9 De hecho, un estudio de 1991 (Kurzinger, 1991) mostró que el 75% de las organizaciones consideradas tenía alguna relación con el Estado y que el 30% recibió financiamiento estatal.

Desde mediados de los 90, el grupo que se había formado alrededor de Julia Carabias y que conformaba PAIR tomó la decisión de institucionalizarse porque cuando Ernesto Zedillo llegó al poder, en 1994, se presentó la oportunidad de crear el primer Ministerio de Medio Ambiente mexicano, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).[10] Esta oportunidad también tuvo un correlato con el reverdecimiento del Gobierno mexicano a finales de los 80 en respuesta a la presión externa (las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, TLCAN; la entrada en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE) y la presión interna, incluyendo la canalización de muchos movimientos ambientales y su aparición durante ese momento como fuerza disidente (ver Parte II).

Por lo tanto, la integración de todo el equipo de Carabias al Estado también puede ser leída como parte de la gran tradición mexicana de cooptación de los movimientos sociales. Después de apropiarse del concepto de desarrollo sustentable, este equipo desempeñó seis años de ardua labor para consolidar el marco institucional y jurídico ambientalista oficial mexicano, para capacitar al personal administrativo en temas ambientales y para aumentar y fortalecer la supervisión de las áreas naturales protegidas, al tiempo que se tenían en consideración las actividades humanas.[11]

A pesar de las críticas extremadamente virulentas contra Carabias de parte de diversos movimientos sociales, desde su abordaje que se consideró excesivamente conservacionista a sus posturas contra el movimiento neozapatista en Chiapas, el sexenio de Julia Carabias al mando del Ministerio tuvo logros cuantitativos y cualitativos sin precedentes respecto del abordaje de las principales cuestiones ambientales en México. Este pasaje de las ONG a las instituciones y del ámbito local al nacional, a menudo implica un riesgo peligroso. Si los presupuestos que se manejan y los instrumentos implementados no tienen parangón con los de la sociedad civil, sus medios son insignificantes en comparación con otras políticas públicas, como las agropecuarias, y más estructurales y depredadores a nivel ambiental. Un miembro de GEA explicó las dificultades de traducir las iniciativas civiles en políticas públicas, de esta forma: "Si no entras

10 La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca que, habiéndose reducido del Sector Pesquero a finales de los 60, con J. Carabias al frente del Ministerio, se convirtió en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Ver Stearns y Almeida (2004), para los mutuos beneficios edificantes de las coaliciones de los movimientos sociales con las instituciones del Estado.

11 Julia Carabias, entrevista personal, 14 de octubre de 2004.

en él, si no negocias, te marginan, y es importante posicionarse políticamente, incluso cuando podamos no estar vinculados a ningún poder del Estado o Partido".[12]

Otras organizaciones de campo que optaron por no asociarse con las autoridades estatales mantuvieron una sutil posición contra el Estado: más allá de algún discurso crítico que podría implicar un mayor rechazo del Estado corporativo, parece haber sido aceptada cierta flexibilidad por medio de las colaboraciones con las instituciones ambientales. A criterio de los cambios de personal en las oficinas centrales de la SEMARNAT, así como en los diferentes estados, las relaciones con los miembros de las agencias de gobierno, los nuevos programas y las oportunidades de financiamiento, eventualmente abrieron grietas y "ventanas de oportunidad" a los miembros del movimiento para el desarrollo comunitario sustentable. En relación a las instituciones nacionales e internacionales, pareció prevalecer algún grado de pragmatismo.

C. LAS CONEXIONES DE LA GLOBALIZACIÓN: EL FINANCIAMIENTO Y LA PROFESIONALIZACIÓN

Al desempeñar un papel acaso marginal aunque sin dudas pionero, las organizaciones del ambientalismo social estaban bien posicionadas para recibir, a partir de 1992, el flujo del financiamiento internacional para cuestiones de desarrollo y biodiversidad sustentables.[13] Hay que destacar cierto grado de similitud en los canales de asociación y financiación internacionales, pues ilustra la existencia de las mismas redes transnacionales (la Fundación Ford, las agencias de cooperación del norte de Europa y el Banco Mundial),[14] muy dis-

---

12 [N. de las T.] De la traducción original al inglés de L. Kraftowitz.

13 Durante los años 80, la mayoría de estas organizaciones se autofinanciaba; muy raramente estaban financiadas con fondos públicos.

14 La más visible es la Fundación Ford (junto a las fundaciones Rockefeller, McArthur y la alemana Friedrich Ebert) que casi siempre estaba presente apoyando a estas organizaciones, al menos hasta fines de los 90. Además, Oxfam Novib (la organización holandesa de cooperación internacional para el desarrollo) así como las organizaciones religiosas alemanas Misereor y Brot für die Welt (Pan para el Mundo), y las agencias de cooperación del norte de Europa (Escandinavia y Alemania, pero también el Reino Unido a través de DFID y el Departamento para el Desarrollo Internacional). El fondo administrado por el Banco Mundial, General Environmental Facility (GEF), también fue una fuente de financiación importante permitiendo a estos actores consolidar o crear nuevas organizaciones. Con respecto a las múltiples relaciones existentes entre estas ONG y el Banco Mundial ver, por ejemplo, Deborah A. Bräutigam y Monique Segarra (2007).

tintos de los de la resistencia ambiental. Sin embargo, nos podemos preguntar si la dependencia estructural vis a vis los donantes institucionales internacionales (así como los fondos nacionales, tales como los distribuidos por el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza) no ayudó a socavar los aspectos alternativos y activistas de las organizaciones de desarrollo comunitario, transformándolas en proveedoras de servicios y operadoras técnicas locales.

Desde esta perspectiva, el ejemplo de PSSM es significativo. La organización finalmente demostró una estrecha relación con las diferentes instituciones de la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, ya sea a través de la participación en su diseño ecológico, la programación, los órganos de gobierno y la gestión de algunos de sus programas; lo que nos lleva legítimamente a suponer si no se convirtió en una parte del sistema oficial. En un contexto ambiental nacional e internacional donde se han institucionalizado las cuestiones ambientales, la elección de los temas a trabajar, en parte, está determinada por las oportunidades de financiación. Luisa Paré, la fundadora de la organización y activista ambiental por más de 20 años, expuso el siguiente análisis:

> Pasamos de una época de activismo con un fuerte compromiso político por parte de quienes vivieron y trabajaron en las comunidades, a tener hoy una actitud más profesional, donde las personas están realmente tratando de cambiar las cosas y de priorizar los aspectos técnicos de su trabajo. No estoy juzgando, simplemente estoy diciendo que estos son otros tiempos y otras formas de acción.[15]

Por tanto, la llegada de fondos extranjeros permitió cierto grado de profesionalización organizacional, así como la adopción de líneas de trabajo que, aunque seguían relacionadas con la promoción de proyectos de desarrollo local, estuvieron cada vez más institucionalizadas y restringidas al desarrollo sustentable. En la década de los 90 y 2000, el desarrollo comunitario estaba cada vez más inserto en redes gestionadas y en el financiamiento institucional nacional e internacional. En gran parte, la alternativa social y productiva que podría haber representado el desarrollo rural sustentable fue estandarizado amplia y gradualmente a medida que el desarrollo sustentable llegó a dominar las políticas nacionales e internacionales (Leonard y Foyer, 2011) (ver Cuadro 16.1).

15 Entrevista personal, 3 de octubre de 2008.

Cuadro 16.1
La construcción de un "campo organizacional" denso para el "desarrollo comunitario sustentable"

	Escala de las movilizaciones de redes sociales	Tipos de vínculos y coaliciones	Ejemplos
A	Conexiones entre ONG y comunidades locales	Vínculos de apoyo técnico de largo plazo; respaldo político, financiero y representativo	Relaciones entre CCMSS y las comunidades de la selva en Sierra Norte de Oaxaca
B	Conexiones entre ONG, organizaciones locales y distintos áreas de gobierno	Nueva relación desde 1994; influencia mutua e interdependencia financiera. Viejas redes sociales entre nuevas entidades ambientales, ONG, etcétera	Las relaciones con los gestores del programa PRODERS en los estados, y los del FMCN en México D.F.
C	Conexiones transescalares con donantes internacionales	Dependencia financiera, legitimidad reciproca	Relaciones con el Banco Mundial, el PNUD, las Fundaciones Ford o Friedrich Ebert.

II. RESISTENCIA AMBIENTAL: DE LAS COALICIONES CONTRA LOS PROYECTOS LOCALES A LAS COALICIONES CONTRA EL ORDEN NEOLIBERAL

A. COALICIONES DE RESISTENCIA A LOS MEGAPROYECTOS Y COORDINACIÓN NACIONAL

Algunas campañas de resistencia contra el desarrollo de megaproyectos, en paralelo y a veces transversales a los campos organizacionales de desarrollo comunitario, también crearon sinergia entre algunas elites urbanas y organizaciones de base locales. Entre finales de los 70 y principios de los 80, cuando los ecologistas todavía eran poco frecuentes, dos coaliciones dieron visibilidad a un incipiente movimiento ambiental mexicano que confrontó al Estado: (1) la lucha contra los planes de deforestación y (2) la reubicación de los Chinantecos de Uxpanapa (Veracruz 1973-1975). El surgimiento de las movilizaciones contra la perforación petrolífera y la contaminación masiva del gigante petrolero nacional de PEMEX estuvo aún más conectado con las organizaciones populistas, especialmente el Pacto Ribereño de 1976 en el estado de Tabasco (Velázquez Guzmán, 1982).

La movilización antinuclear de 1987, la Coordinadora Nacional contra Laguna Verde (CONCLAVE), reunió a grandes sectores de la población: organizaciones de agricultores y pescadores, ONG, intelectuales, grupos de madres y hasta la Iglesia Católica (García-Gorena, 1999; Payá Porres, 1994). Esta movilización experimentó episodios

de confrontación radical (corte de calles, etc.) y es considerada como la fundadora del movimiento. Los años 90 fueron un teatro de operaciones para grandes protestas cuyos éxitos ilustran la capacidad de las ONG para participar directamente en el trabajo político con las "organizaciones de base" en las regiones marginadas y el papel central que podrían desempeñar en la movilización de las coaliciones desde un encuadre ambientalista (Verduzco, 2002). Esto fue cierto, especialmente, para las movilizaciones contra los proyectos de represas (en Guerrero contra "Altos Balsas", a partir de 1990), contra el proyecto de carretera en la región de los Chimalapas en 1991 (Umlas, 1998) y contra de la construcción de una fábrica de sal en la laguna San Ignacio en Baja California (1995-2000) (Castro-Soto, 2005; Velásquez García, 2010).

En algunos casos, como con la famosa victoria contra el proyecto del complejo turístico de Tepoztlán (1994-1995), las organizaciones campesinas condujeron luchas donde el medioambiente fue solo un elemento entre otros. Por el contrario, algunas coaliciones tuvieron objetivos más "naturalistas" y limitados, ligados a varias ONG en el ámbito nacional, como la demanda de responsabilidad por el sacrificio de las aves migratorias en la represa Silva en 1994-1995. Estas diversas experiencias conectaron a un número creciente de organizaciones locales dispersas en varios estados en una coalición *ad hoc* junto con las ONG que participaban en el escenario nacional, y los muchos éxitos contribuyeron a crear recuerdos y lazos sociales compartidos. Sin embargo, casi no hubo una coordinación general entre estos "eventos de protesta", excepto a través de las redes sociales informales preexistentes.

Desde 1985 hasta 1994, numerosos grupos de ecología política urbana en un estado de rápido crecimiento intentaron organizar un movimiento nacional, para crear una identidad común bajo la consigna de "política contenciosa". Varias iniciativas reunieron a diversas coaliciones, aunque sin poder unificarlas. Los encuentros nacionales de los grupos ecologistas, los intentos de unificar el movimiento ambiental en la Federación Conservacionista Mexicana (FECOMEX) en 1985, el mismo año en que el gran terremoto catalizó la sinergia organizacional intersectorial y que, además, generó el "Pacto de Grupos Ecologistas" (PGE, establecido entre 50 organizaciones que compartían una agenda nacional) fueron todos intentos de coordinar organizadamente un movimiento nacional. Las negociaciones de la ONU en la Conferencia de Río 92 generaron la creación de FOROMEX, que reúne a más de 100 organizaciones en torno a una agenda común (Diez, 2008: 86). El principal punto de inflexión fue, probablemente, cuando se formaron coaliciones alrededor del TLCAN entre 1990 y

1994. De hecho, estas iniciativas requieren que los grupos desarrollen una agenda común contra un enemigo común, y la ventana de oportunidad les dio un nuevo nivel de visibilidad e influencia en el Estado de México (Torres, 1997; Hogenboom, 1998; Gallardo, 1999).

Todas estas alianzas permitieron el *surgimiento gradual* de coaliciones y de una agenda multisectorial compartida[16] en una nueva escala transnacional, que marcaron las protestas que siguieron. Pero la institucionalización de la causa ambiental también dividió y desestabilizó estas coaliciones, que ahora contienen una membresía muy diversa, con posiciones ideológicas muy arraigadas y sensibles que favorecen diferentes estrategias (Hogenboom, 1998; Hogenboom et al., 2003).

B. TRANSNACIONALIZACIÓN DE LAS REDES Y RESISTENCIA ANTINEOLIBERAL

Desde finales de los 90, la red de resistencia ambiental creció al estructurarse alrededor de temas antineoliberales a nivel nacional e internacional. Se acercó más a las movilizaciones campesinas e indígenas, especialmente las organizaciones cuya tarea es defender la agenda nacional, actores cercanos al neozapatismo y el movimiento antiglobalización. Así, a nivel nacional, se fue formando en México una organización importante que produciría conocimientos técnicos y políticos sobre temas ambientales en las zonas rurales. El Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM), inicialmente, fue concebido como un foro de reflexión (*think tank*) para generar ideas políticas para la federación campesina, la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), miembro de La Vía Campesina. El discurso de CECCAM, que cubría la silvicultura, la agroecología y la biotecnología, destacó la penetración gradual de las cuestiones ambientales en el mundo de las organizaciones rurales. Organizaciones como CECCAM, que tenían una perspectiva nacional, exhibieron cierta maduración social ambientalista, a medio camino entre la experiencia técnica y el activismo de RRPP, una posición que los acercó más a las organizaciones de expertos activistas y a las redes transnacionales de activismo.[17]

---

16 Sin embargo, tenemos que considerar que este programa estaba fuertemente influenciado por la agenda internacional, mucho más que por algunas características específicas de México (*cf.* Alfie Cohen, 1995).

17 Vale la pena recordar el levantamiento de uno de los primeros movimientos campesinos, que desde 1997 se autoidentificaron claramente como ecologistas. Sucedió en la Costa Grande del estado de Guerrero; Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron sus dos líderes. Estuvieron presos desde 1999 hasta 2001, y luego

Las organizaciones que se establecieron en Chiapas, como Maderas del Pueblo del Sureste y CIEPAC (Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria) denunciaron varias iniciativas ambientales del Gobierno mexicano, como la reubicación de las poblaciones locales fuera de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, sus proyectos de bioprospección como el ICBG-Maya (Dumoulin Kervan y Foyer, 2004), lujosos proyectos de ecoturismo e iniciativas como el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), que fue considerado como la parte ambiental de la iniciativa regional Puebla-Panamá. Inscribiéndose en el enfoque autonomista del zapatismo, en ruptura directa con el Gobierno, estas organizaciones se alejaron de las actividades de desarrollo comunitario y avanzaron con campañas de denuncia contra el ecologismo oficial al que consideraban demasiado conservacionista, si no al servicio de los intereses de las corporaciones multinacionales.

La segunda mitad de los 90 y principios de los 2000 se correspondió con la llegada de actores transnacionales que influyeron en el paisaje ya denso del ecologismo social mexicano. Catherine Marielle de la GEA resumió lo que considera es una nueva fase:

> La llegada de Greenpeace y el Grupo ETC es mucho más reciente. A diferencia de estas organizaciones, no tenemos tiempo para trabajar en la visibilidad, verdaderamente, como lo hace Greenpeace, como una estrategia de recaudación de fondos. Esta es una fase muy distinta, y muy nueva, con sus propias características correspondientes a la globalización. Estas organizaciones llegaron después de Río 92. *"Antes, nuestro trabajo estaba mucho más situado en el plano nacional, mientras que ahora estamos participando en redes internacionales"*.[18]

Aunque Greenpeace había estado presente en México desde 1993, con las campañas contra la contaminación del aire en la ciudad de México, contra la central nuclear de Laguna Verde y con campañas denunciando la importación de residuos tóxicos, no fue sino hasta 1998 que decidió iniciar en México una campaña de "ingeniería genética". México fue considerado como un área estratégica en este tema, debido a su biodiversidad agrícola y el riesgo planteado por las importaciones de Estados Unidos[19] En 1999, Silvia Ribeiro, representante

---

fueron obligados a exiliarse. En el año 2000 ganaron el prestigioso Premio Ambiental Goldman por su trabajo.

18 Entrevista personal, 22 de enero de 2006. [N. de las T.] De la traducción original al inglés de L. Kraftowitz.

19 Uno de los objetivos era el de supervisar y fortalecer tanto como fuera posible la

de RAFI (Rural Advancement Foundation International, que en 2001 cambió el nombre por ETC Group) y con experiencia en el periodismo de defensa de derechos, llegó a México desde Uruguay. A pesar de sus restricciones organizativas, Greenpeace y ETC Group desempeñaron un papel central en iniciar y orquestar las campañas contra la bioprospección y el maíz transgénico. Significativamente, introdujeron en México algunos de los principales métodos comunicativos y se convirtieron en puntos nodales en la formación de una incipiente red de oposición.

Prontamente crearon alianzas con las organizaciones ambientales y campesinas mexicanas. De esta manera, Greenpeace se vinculó con GEA y ANEC (otro gremio de La Vía Campesina) para fundar el movimiento "Sin Maíz, No hay País", mientras que ETC Group se acercó a CECCAM y UNORCA y formó la Red en Defensa del Maíz. En líneas generales, la llegada de estas organizaciones internacionales en el contexto de la globalización parece haber "traccionado" a una sección de actores del ecologismo social mexicano del ámbito local al global, y de problemas concretos arraigados en las comunidades locales a problemas más estructurales definidos en términos de política nacional e internacional. Por lo tanto, la confluencia de las movilizaciones ambientales en coaliciones multisectoriales representa el gran desafío de este nuevo período. Las movilizaciones durante la Cumbre de la OMC en Cancún en 2003 enfatizaron las divisiones y los riesgos del anhelo de algunas ONG de redes de coordinación adecuadas. Con este cambio en la escala de percepciones, una parte del ecologismo mexicano se sumó a la reconfiguración ideológica representada por la oposición a la globalización neoliberal.[20] Es importante destacar que algunos personajes claves de este movimiento fueron incorporados al nuevo Ministerio de Medio Ambiente a cargo de Lichtinger en 2001, después de que el PRI fuera derrotado. Sin embargo, lejos de cumplir las expectativas, el Ministerio fue incapaz de impulsar una mayor justicia ambiental y, en cambio, perdió poder político.

En paralelo, en la década de 2000 también continuaron las movilizaciones contra los megaproyectos, marcadas por este carácter

---

moratoria del maíz transgénico, que había sido declarada por el gobierno mexicano en ese momento (Gustavo Ampugnani, entrevista personal, 23 de enero de 2006), otro era impedir la autorización de maíz transgénico mexicano, en particular a través de activismo y medidas legales.

20 Se puede observar esta reconfiguración ideológica a través de la denuncia sistemática del acuerdo comercial del TLCAN y por el fuerte apoyo dado al movimiento neozapatista, que constituye un punto de referencia principal del movimiento altermundialista.

nuevo y radical de las organizaciones campesinas e indígenas, que ahora se integraron al debate medioambiental con un discurso político cada vez más estructurado en los ámbitos rurales y nacionales. Mientras algunas luchas violentas –como las movilizaciones contra el aeropuerto en San Salvador Atenco en 2001-2002 (Davis y Rosan, 2004) y contra la represa "La Parota" en el estado de Guerrero en 2003-2012 (Castro-Soto, 2005)– fueron exitosas, sobre todo fue una época donde los proyectos mineros a gran escala avanzaron muy rápido en vastas secciones del territorio nacional. Así, el dinamismo de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), que nació en 2008 de coaliciones y "caravanas" previas, ilustra la gravedad de las condiciones locales y el intento de una lucha ambiental unificada contra las políticas neoliberales (ver Cuadro 16.2).

Cuadro 16.2
Las cuatro vías para movilizar un repertorio de oposición radical en una amplia base social: de la acción colectiva minimalista transformadora a un fuerte movimiento social

	Intensificación de redes de movilización social	Ejemplos
A	Acción colectiva basada en una conexión local - nacional	Consejo Mexicano para la Silvicultura Sustentable (CMSS) y asociados
B	Coalición de numerosas organizaciones ambientales nacionales	Red Nacional de Derecho a la Información Ambiental (RNDIA) en 2001*, Presa Silva, Foromex
C	Coaliciones amplias que conectan ONG nacionales y transnacionales con una fuerte movilización local contra grandes proyectos de desarrollo	Laguna Verde (1987-1988), Tepoztlán (1995-1996), San Salvador Atenco (2002), Presa La Parota (2003-2012)
D	Grandes coaliciones multisectoriales en las cuales las organizaciones ambientales son sólo un componente de una movilización social más amplia	Tepoztlán, "Sin Maïs no hay Païs", campañas, foros sociales.

Ref.: a. "Su creación se dio en el marco del *II Encuentro Nacional de Ecologistas*, donde participaron 50 organizaciones de 26 estados del país" (Ver: Velázquez, 2005).

CONCLUSIÓN

En el caso de México, la oposición entre un "ambientalismo de los pobres" con movimientos populares y comunidades locales movilizadas como base, por un lado, y una red de ONG transnacionales, por otro lado, no refleja la complejidad de los diferentes componentes del movimiento social ambiental. Basados en el análisis de estas diferentes organizaciones y sus trayectorias de más de 30 años, en este capítulo

sostenemos que este movimiento se compone de dos "campos organizacionales" distintos. Cada uno se desarrolló a partir de una coalición diferente entre ONG y organizaciones locales, que luego formó parte de redes nacionales, internacionales o transnacionales más amplias. En estos dos campos, podemos identificar este tipo de "transclasismo", una característica típica de los movimientos ambientales, así como una extensión de las coaliciones de lo local a lo transnacional. Más allá de las estigmatizaciones agraviantes recíprocas de "elitismo" y "populismo", el mejor criterio para diferenciar estas dos formas de articulación entre organizaciones locales, regionales, nacionales y transnacionales debe ser el repertorio de acción colectiva. De hecho, las coaliciones de desarrollo comunitario sustentable son más "reformistas" y se centran en la construcción de alternativas para los más pobres, mientras que los movimientos de resistencia ambiental ponen en primer plano la "política contenciosa" en nombre de los dominados.[21] Estos dos métodos de agregación no solo definen dos lados del movimiento social ambiental mexicano, sino que además coinciden con dos definiciones académicas distintas de "movimiento social".[22]

Aunque "el desarrollo comunitario sustentable" parece encajar bastante bien con el diagnóstico de la oenegeización y tecnificación, el análisis histórico de este tipo particular de movilización demuestra que no se lo puede reducir a un proceso de este tipo. En términos generales, la tendencia hacia la "oenegeización" de los movimientos sociales por medio de la institucionalización no es unilateral (Alvarez, 1999; Diez, 2008). Algunas viejas organizaciones formales, de hecho, estaban desde antes de las movilizaciones más grandes y algunos ciclos de repolitización se han producido después de la tendencia a la institucionalización. Por otro lado, Alvarez (1999) identificó con precisión la "doble identidad" de los líderes que, a pesar de la institucionalización conservaron redes y repertorios mixtas entre las ONG y la dinámica del movimiento social (Velásquez, 2005). En primer lugar, este campo sin duda encuentra su origen en las movilizaciones colectivas, con una dimensión abiertamente política. De hecho, la oposición directa al Estado y la participación de la comunidad desempeñaron un papel crucial; y, hoy día, una parte importante de estas organizaciones todavía mantiene estrechos vínculos con el campo de la "resistencia ambiental". Por otra parte, las relaciones poderosas

21 Esta polaridad se aproxima a la propuesta por Pleyers (2010) en su análisis en profundidad del movimiento alter-mundialista: entre la experimentación y la experiencia alternativa.

22 Se puede citar a Touraine (1981) como ejemplo de la primera y a Tarrow (1998) de la segunda.

que conectan a las ONG del desarrollo comunitario sustentable con las organizaciones locales en las regiones marginadas, que actualmente están más "profesionalizadas" siempre han tenido y mantienen un papel clave. En algunos casos, esto ha dado lugar a procesos de organización, autonomía y empoderamiento a largo plazo, y ha permitido la adopción de nuevas prácticas productivas (silvicultura comunitaria, cultivo de café orgánico, comercio justo...), que luego transformaron las relaciones políticas que tenían estas comunidades con actores externos. Por supuesto, la institucionalización de este componente es percibida, a veces, como la muerte de un movimiento ambiental que se basa en una política contenciosa. Pero, por otro lado, esta dinámica también puede ser vista como la mejor manera de ganar influencia sobre las instituciones y metanormas que regulan la relación que la sociedad mexicana tiene con su entorno. Esta producción de símbolos, información y leyes desempeña un papel de liderazgo en la transformación del modelo desarrollista (Azuela, 2006).

Si nos fijamos en sus estrategias de confrontación directa desplegadas por medios extra institucionales, así como en su discurso antisistema, más crítico y radical contra el Estado, el neoliberalismo y las empresas transnacionales, el campo de la "resistencia ambiental" parece encajar a la perfección en la definición más clásica de movimientos sociales. Sin embargo, en esta ocasión las cosas son más complejas, pues observamos fenómenos de institucionalización en algunas redes altermundistas y que algunas de estas afirmaciones universales a veces pueden ser consideradas elitistas, como cuando los temas más candentes de la agenda están más cerca de los reclamos de la población de alto nivel educativo, urbana y de "vanguardia" que de los reclamos indígenas o campesinos. Tanto la estructura de oportunidades políticas como la forma de las movilizaciones han experimentado una importante transformación desde 1990. Hay que destacar una doble tendencia: la transnacionalización de la mayoría de las redes y agendas, y al mismo tiempo, un retorno hacia las luchas políticas locales (Velázquez García, 2010; Pleyers, 2011). Las organizaciones ambientales de raigambre local han florecido en la última década, pero dado que carecen de visibilidad y que no buscan grandes acciones, el análisis en profundidad emergente de algunas de estas redes locales posee un gran valor (Velázquez, 2009, Lutz Ley y Salazar Adams, 2011).

Por último ¿quiénes son los verdaderos ambientalistas? ¿Aquellos que están construyendo alternativas de desarrollo con las comunidades marginadas, o los que participan en las luchas contra las manifestaciones más agresivas de un modelo destructivo? Esta polémica, que inquieta a los activistas y analistas por igual, es realmente inútil.

Estos dos componentes se oponen al orden social dominante y constituyen las dos caras de lo que verdaderamente debe ser llamado "ambientalismo social mexicano".

BIBLIOGRAFÍA

Alfie Cohen, M. 1995 "La realidad del movimiento ecologista en México" en *Desarrollo Sustentable*, N° 70: 14-18, julio-agosto.

Alfie Cohen, M. 2005a *Democracia y desafío medioambiental en México. Retos, riesgos y opciones en la nueva era de la globalización* (México-Barcelona: Pomares / UAM-A).

Alfie Cohen, M. 2005b "Auge y caída de las ONG ambientalistas" en *Memorias* (México: UAM-A).

Alvarez, S. 1999 'Advocating Feminism: The Latin American feminist NGO boom' en *International Feminist, Journal of Politics*, *1*(2): 181-209.

Azuela, A. 2006 *Visionarios y pragmáticos. Una aproximación sociológica al derecho ambiental* (México: UNAM-IIS / Fontamara).

Bandy, J. y Smith, J. (ed.). 2005 *Coalitions across borders. Transnational protest and the neoliberal order* (Lanham: Rowman & Littlefield).

Barton Bray, D. y Merino Pérez, L. 2004 *La experiencia de las comunidades forestales en México* (México: INE-SEMARNAT).

Carabias, J.; Provencio, E. y Toledo, C. 1994 *Manejo de recursos naturales y pobreza rural* (México: Fondo de Cultura Económica / UNAM).

Carruthers, D. V. 1996 'Indigenous ecology and the politics of linkage in Mexican social movements' en *Third World Quaterly*, *17*(5): 1.007-1.028.

Carruthers, D. V. 2008 *Environmental justice in Latin America: Problems, promise, and practice* (Cambridge: MIT Press).

Castro Soto, G. 2005 "México: presa La Parota. Historia de un fraude" en *Biodiversidad en América Latina*, 13 de octubre. En <www.biodiversidadla.org/content/view/full/19456> acceso 15 de julio de 2013.

Clarke, G. 1995 'Non-Governmental Organizations (NGO) and politics in the developing world' en *Political Studies*, *46*: 36-52.

Davis, D. y Rosan, C. 2004. 'Social movements in the Mexico City airport controversy: Globalization, democracy and the power of distance' en *Mobilization*, *9*(3): 279-293.

Diani, M. y McAdam, D. (eds.). 2003 *Social movements and networks* (Oxford University Press).

Diez, J. 2008 'The rise and fall of Mexico's Green Movement' en *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, *85*: 81-99.

Dumoulin, D. 2003 'Local knowledge in the hands of transnational NGO networks: A Mexican viewpoint' en *International Journal of Social Sciences*, *178*: 593-605.

Dumoulin Kervan, D. 2007 "Las políticas de las ANP (Areas Naturales Protegidas) como laboratorio para los esquemas público-privado. Una interpretación a partir del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza" en Van Vliet, G. y Fontaine, G. (dir.) *Viajes en los terruños de la gobernabilidad en las políticas ambientales en América Latina* (Quito, FLACSO-Ecuador) pp. 57-78.

Dumoulin Kervan, D. y Foyer, J. 2004 "ONG transnationales et experts dans le débat démocratique: bioprospection et savoirs indigènes au Mexique" en *Problèmes d'Amérique latine*, *54*: 95-122.

Figueroa, F. y Guzmán, M. (eds.). 2012 *La naturaleza en contexto. Hacia una ecología política mexicana* (México D. F.: UMAN-CRIM / El Colegio de San Luis A.C.).

Ejea, G. y Hernández, L. (eds.). 1991 *Cafetaleros: la construcción de la autonomía* (México D. F.: CNOC / Servicio de Apoyo Local).

Gallardo, S. C. 1999 *Acción Colectiva y Diplomacia Social: Movimientos Ambientalistas frente al Tratado de Libre Comercio de América del Norte* (México: El Colegio de México) Tesis doctoral.

García-Gorena, V. 1999 *Mothers and the Mexican AntiNuclear Power Movement* (Tucson: University of Arizona Press).

González Martínez, A. 1992 'Socio-ecological struggles in Mexico: The prospects' en *International Journal of Sociology and Social Policy*, *12*(4-7): 113-128.

Garcia-Guadilla, M. P. y Blauert, J. (eds.) 1994 *Retos para el desarrollo y la democracia: movimientos ambientales en América Latina y Europa* (Caracas: Editorial Nueva Sociedad).

Hochsteler, K. y Mumme, S. P. 1998 'Environmental movements and democracy in Latin América' en Kelly, P. (ed.) *Assessing democracy in Latin America* (Boulder: Westview Press).

Hogenboom, B. 1998 *Mexico and the NAFTA environment debate: The transnational politics of economic integration* (Amsterdam: International Books).

Hogenboom, B.; Alfie Cohen, M. y Antal, E. 2003 'Crossborder Activism and Its Limits: Mexican Environmental

Organizations and the United States' en *Cuadernos del CEDLA*, N° 13: 100.

Keck, M. y Sikkink, K. 1998 *Activists beyond borders: Advocacy networks in international politics* (Ithaca: Cornell University Press).

Kurzinger, E. et al. 1991 *Política ambiental en México. El papel de las organizaciones no gubernamentales* (México: Fundación F. Ebert-Instituto Alemán de Desarrollo).

Leff, E. (ed.) 2001 *Justicia ambiental: Construcción y defensa de los nuevos derechos ambientales, culturales, y colectivos en América Latina* (México D. F.: PNUMA).

Léonard, E. y Foyer, J. 2011 *De la integración nacional al desarrollo sustentable. Trayectoria nacional y producción local de la política rural en México* (México: CEDRSSA / IRD) p. 466.

Lutz Ley, A. N. y Salazar Adams, A. 2011 "Medio ambiente y organizaciones de la sociedad civil: análisis de las redes civiles ambientalistas en Hermosillo, Sonora" en *Región y sociedad*, *23*(51): 5-41 [ISSN: 1870-3925; en internet].

Martínez Alier, J. 2002 *The environmentalism of the poor: A study of ecological conflicts and valuation* (Cheltenham: Edward Elgar).

Melucci, A. 1999 *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia* (México: El Colegio de México).

Mollard, E. y Lopez, E. 2006 "L'instrumentalisation des ONG au Mexique en situation indienne et non indienne" en *Autrepart*, *37*: 129-146.

Pacheco-Vega, R. 2005 'Democracy by proxy: Environmental NGOs and policy change in Mexico' en Romero, A. y West, S. (eds.) *Environmental issues in Latin America and the Caribbean* (Dordrecht: Springer).

Pacheco-Vega, R. y Obdulia, V. L. 2003 "Cooperación internacional para la protección ambiental: la formación de coaliciones en perspectiva" en *Foro Internacional*, *43*(2): 403-428.

Payá Porres, V. A. 1994 *Laguna Verde: la violencia de la modernización. Actores y movimiento social* (México, D. F.: Instituto Mora).

Petras, J. 1997 'NGOs and Imperialism' en *Monthly Review*, *49*(7): 10-27.

Pleyers, G. 2010 *Alter-Globalization becoming actors in a global age* (Cambridge: Polity Press) Prefacio de A. Touraine.

Pleyers, G. 2011 "Le réinvestissement de l'espace local par les mouvements mexicains: refuge après les impasses politiques

ou creuset d'une nouvelle culture politique?" en *Cahiers des Amériques latines*, *66*: 39-56.

Pleyers, G.; Mestries, F. y Zermeño, S. (coord.) 2009 *Los movimientos sociales. De lo local a lo global* (Barcelona / México: Anthropos).

Simonian, L. 1999 *La defensa de la tierra del jaguar: una historia de la conservación en México* (México: CONABIO / INE-SEMARNAP).

Smith, J.; Chatfield, Ch. y Pagnucco, R. (comps.) 1998 *Transnational social movements and Global politics: solidarity beyond the state* (Syracuse: Syracuse University Press).

Stearns, L. B. y Almeida, P. 2004 'The formation of state actor-social movement coalitions and favorable policy outcomes' en *Social Problems*, *51*(4): 478-504.

Tarrow, S. 1998 *Power in movement: Social movements and contentious politics* (Cambridge: Cambridge University Press) 2° edición.

Tarrow, S. 2005 *The new transnational activism* (Nueva York: Cambridge University Press).

Toledo, V. M. 1983 "La otra guerra florida" en *Nexos*, *6*. 15-24 septiembre.

Toledo, V. M. 1992 "Utopía y naturaleza: El nuevo movimiento ecológico de los campesinos e indígenas de América Latina" en *Nueva Sociedad*, *122*: 72-85.

Toledo, V.M. 2000 *La paz en Chiapas. Ecología, luchas indígenas y modernidad alternativa* (México D. F.: Ediciones Quinto Sol).

Torres, B. 1997 'Transnational environmental NGOs: Linkages and impact on policy' en MacDonald, G. J.; Nielson, D. L. y Stern, M. A. (eds.) *Latin America's environmental policy in international perspective* (Boulder: Westview).

Touraine, A. 1981 *The voice and the eye: An analysis of social movements* (Cambridge: Cambridge University Press).

Umlas, E. 1998 'Environmental networking in Mexico: The Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas' en *Latin American Research Review*, *33*(3): 161-189.

Velázquez García, M. A. 2010 "Los movimientos ambientales en México" en Bizberg, I. y Zapata, F. (eds.) *Los Movimientos Sociales* (México: El Colegio de México) pp. 275-328.

Velázquez, M. A. 2005 "Relaciones entre organizaciones y movimientos sociales. Redes y oportunidades políticas: los casos de la Red Nacional de Acción Ecologista (Argentina)

y la Red Nacional de Derecho a la Información Ambiental (México)" en *Región y Sociedad*, *XVII*(33): 33-70.

Velázquez, M. 2008 "La construcción de un movimiento ambiental en México. El club de golf en Tepoztlán, Morelos" en *Región y Sociedad*, *XX*(43): 61-96.

Velázquez, M. A. 2009 *Las luchas verdes. Los movimientos ambientalistas de Tepoztlán, Morelos y el Cytrar en Hermosillo* (Hermosillo: El Colegio de Sonora).

Velázquez Guzmán, M. G. 1982 "Afectaciones petroleras en Tabasco: el movimiento del Pacto Ribereño" en *Revista Mexicana de Sociología*, *44*(1): 167-187.

Verduzco Chávez, B. 2002 *Conflictos ambientales. La internacionalización de la defensa de las comunidades contra instalaciones contaminantes* (México: Universidad de Guadalajara).

LISTADO DE SIGLAS

ANAA	Asamblea Nacional de Afectados Ambientales
CCMSS	Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible
CECCAM	Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano. Maderas del Pueblo del Sureste
CIEPAC	Centro de Investigaciones Económicas y Políticas Acción Comunitaria
CONCLAVE	Coordinadora Nacional Contra Laguna Verde
ERA	Estudios Rurales y Asesoría
FECOMEX	Federación Conservacionista Mexicana
GIRA	Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada
PAIR	Programa de Aprovechamiento Integral de Recursos Naturales
PSSM	Proyecto Sierra de Santa Marta
RAFI	Rural Advancement Foundation International, luego nombrada ETC Group, en 2001.

CÓMO CITAR ESTA PUBLICACIÓN:
Foyer, Jean and David Dumoulin Kervran. 2017. "¿Ambientalismo de las ONG versus ambientalismo de los pobres?" Pp. 393-414 en Paul Almeida y Allen Cordero Ulate, Eds., *Movimientos Sociales en América Latina: Perspectivas, Tendencias y Casos*. Buenos Aires: CLACSO.

17

Rafael Cartagena Cruz*

CONFLICTOS AMBIENTALES Y MOVIMIENTOS SOCIALES EN EL SALVADOR DE POSGUERRA

El Salvador es la nación centroamericana más pequeña y más densamente poblada, y a diferencia de Brasil o Indonesia donde las luchas locales contra las industrias extractivas tienen influencia en las noticias mundiales y hasta en el cine, carece de vastos recursos naturales. Sin embargo las luchas ecológicas y contra la contaminación en El Salvador, posteriores a la guerra civil, son relevantes para los estudios ambientales. Desde los años 50, el país ha sido considerado uno de los más deforestados de América Latina y el Caribe. Aunque las estimaciones de la extensión de sus bosques varían dependiendo de qué categorías de cobertura arbórea se usen (Hecht y Saatchi, 2007; FAO, 2010), los paisajes presentan niveles prominentes de antropización debido a los procesos agrarios y de urbanización a largo plazo.[1] Por otra parte, los salvadoreños se están recuperando de una devastadora guerra civil (1980-1992), y la transición hacia la democracia coincidió

* Universidad Centroamericana - José Simeón Cañas (UCA), San Salvador, El Salvador.

1 En una evaluación de la cobertura de la tierra del año 2010, la agricultura y los pastizales cubrían el 74% del territorio, incluyendo el café cultivado bajo cubierta arbórea (10%). Los usos de tierras urbanas representaban el 4% (MARN, 2013).

con la aplicación estricta de las directrices del Consenso de Washington, tales como la privatización de los servicios públicos y el fomento a los incentivos a la inversión extranjera (Almeida, 2008; Wade, 2008). Estos factores han dado forma a las inquietudes y la circunscripción del movimiento ambiental salvadoreño.

En este ensayo se caracterizan las luchas ambientales en El Salvador desde 1992 a 2014 y se discute qué tipo de ambientalismo ha surgido a partir de ellas.[2] El capítulo comienza con un breve recuento de los cambios políticos y sociales más significativos de las últimas décadas de la historia salvadoreña. En segundo lugar, el ensayo presenta un panorama de los conflictos ambientales pos guerra civil, describe las cuestiones en juego y los grupos que participan en las movilizaciones. En tercer lugar, se analiza de qué forma los conflictos ambientales locales han sido el "caldo de cultivo" del ambientalismo salvadoreño. Por último, en la conclusión se sostiene que el ambientalismo en El Salvador es producto de las luchas y los discursos por la justicia social y ambiental.

CONTEXTO HISTÓRICO Y POLÍTICO

El ambientalismo salvadoreño, cuando surgió a mediados del siglo XX, era esencialmente elitista. Por ejemplo, Amigos de la Tierra[3] era una asociación amateur conocida que se jactaba de tener entre su junta de directores a algunos de los mayores plantadores de café del país y al propietario de uno de los principales diarios, que en los años 50 publicaba semanalmente una "*Página conservacionista*" que abordaba tópicos ambientalistas desde una postura neomalthusiana (*El Diario de Hoy*, 1955a, 1955b). A principios de los años 70, algunos de sus miembros y otros hombres de negocios apoyaron financiera y políticamente un programa conservacionista que se filtró en los planes oficiales para un "Sistema de Parques Nacionales y Reservas Biológicas" (Cartagena, 2012).[4] Pero los 70 fueron una década de intensas

2 Las investigación académica previa sobre este tópico es escasa (Navarro et al., 2007; Cartagena, 2008, 2009a, 2009b; Valencia, 2012). Por lo tanto, el estudio se basó en fuentes tales como reportes de los medios de comunicación e informes de ONG. La metodología incluyó investigación de archivo, entrevistas, estudios de caso y síntesis de casos cruzados o síntesis comparadas. La base de los datos se recopiló de Cartagena (2009a), pero en este documento se actualizaron esos análisis para incluir los desarrollos de 2009 a principios de 2014.

3 No está relacionado con la red internacional homónima. Amigos de la Tierra fue fundado en 1946, y cuatro décadas más tarde, en 1987, fue miembro fundador de la Unión Ecológica Salvadoreña (UNES), que en los años 90 se convirtió en una de las organizaciones más representativas (*La Prensa Gráfica*, 1987).

4 Los planes no se implementaron en ese momento, como se refleja en la declaración

luchas sociales protagonizadas por sindicatos, estudiantes y organizaciones campesinas, que se unieron en grandes coaliciones multisectoriales vinculadas a las organizaciones revolucionarias emergentes. En 1980, cuando el régimen militar que había servido a las elites económicas locales por más de 40 años entró en crisis, estalló una guerra civil (Almeida, 2008).

Tras los Acuerdos de Paz de 1992, la esfera pública se abrió a los sectores históricamente excluidos. Hubo un importante aumento en los conflictos, relacionados con las decisiones políticas y de inversión que pusieron en peligro el bienestar y los recursos naturales de las comunidades, impulsados por los grupos de base y acompañados por un gran número de ONG. Entretanto, se debelitó la capacidad de movilización de los sindicatos, los campesinos y las organizaciones estudiantiles, junto con el protagonismo de sus reivindicaciones tradicionales. Estos cambios son más evidentes en el campo, donde los habitantes de las zonas rurales comenzaron a oponerse a la ampliación de infraestructura, a las instalaciones de gestión de residuos o a las exploraciones mineras. Simultáneamente, fueron raleando las luchas por salarios agrícolas. Asimismo, a mediados de los 90 se disiparon las movilizaciones a favor de la reforma de tierras, cuando finalizó la distribución de parcelas establecida en los Acuerdos de Paz.

En el ínterin, de las elecciones generales de 1994 surgió un sistema de dos partidos. La organización ex revolucionaria de izquierdas, el Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional (FMLN), se convirtió en el principal partido de oposición a la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que gobernó de 1989 a 2009 con una agenda pro-empresarial. Los conflictos ambientales a menudo reprodujeron esta polarización, a la que los activistas reaccionaron. Como dijo uno de los principales representantes del ambientalismo salvadoreño:

> Empezamos promoviendo talleres para ensamblar bicicletas y nos hemos encontrado la mayor parte del tiempo discutiendo en la Asamblea Nacional con los grupos conservadores de derecha, que no quieren que cambie la situación (Ricardo Navarro, presidente del Centro de Tecnología Apropiada, de una entrevista inédita; citado en Cartagena, 2009a).

Las elecciones generales de 2009 trajeron un cambio histórico. La alianza de centroizquierda encabezada por el FMLN asumió el Poder Ejecutivo del Gobierno, con Mauricio Funes como Presidente (2009-

---

tardía del primer Parque Nacional de 1987, pero impulsaron la protección de los principales bosques que hoy componen el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

2014). Al elegir a los directivos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Funes nombró a profesionales que se habían desempeñado en ONG de desarrollo sostenible. Esto dio lugar a algunos cambios en la aproximación del gobierno a los conflictos ambientales y las movilizaciones.

CONFLICTOS AMBIENTALES DE 1992 A 2014

Algunas luchas para proteger los ecosistemas o el medio ambiente pueden incluir demandas de justicia social u objetivos económicos; mientras que los discursos y valores ambientales pueden aparecer en las luchas (económicas) por el acceso y el control de los recursos (Van den Hombergh, 2004). Así, los conflictos ambientales comprenden las movilizaciones que fomentan los valores ambientales, así como los "conflictos por los recursos", es decir, las luchas encaminadas a asegurar los recursos naturales básicos para las economías locales. La tercera sección de este capítulo aborda en detalle los vínculos entre los conflictos y la identidad ambientalista.

Esta sección se basa en el análisis de 65 conflictos ambientales, que tuvieron lugar entre 1992 y principios de 2013, los cuales se enumeran en los Cuadros 17.1 y 17.2. Algunas aclaraciones dilucidan el alcance de esta muestra. En primer lugar, los conflictos que no devinieron en debates públicos y acción colectiva no se incluyeron en este estudio. Por lo tanto, el siguiente análisis se compone de los casos que suscitaron decisiones de las autoridades nacionales o locales, como resultado de denuncias en los medios de comunicación, de peticiones públicas, manifestaciones o protestas en las calles.[5] En segundo lugar, la lista se centra en los conflictos desencadenados por amenazas o riesgos a los recursos o ecosistemas localizados, ya que el objetivo de esta sección es señalar las consideraciones locales que subyacen a la movilización ambiental. Por lo tanto, la mayoría de los conflictos desafió las decisiones o intervenciones que tenían impactos locales. En 48 de los 65 casos, solo un municipio[6] estuvo afectado por riesgos

5 La muestra es una selección de una lista más extensa de casos identificados en boletines, informes, notas, periódicos y otros documentos registrados en los archivos y repositorios de las ONG ambientales, así como de entrevistas personales a los activistas (Cartagena, 2009a). Por lo tanto, la muestra puede subestimar la ocurrencia de conflictos de poco interés para los medios de comunicación y grupos ambientalistas.

6 El país se divide en 262 municipios, cada uno administrado por un alcalde y un Concejo municipal, que son elegidos cada 3 años. De forma proactiva o reactiva, se enfrentan a las cuestiones ambientales, pues tienen que proveer el servicio de recolección y gestión de residuos, los permisos de construcción y otros servicios pertinentes. Hay una división intermedia en 14 departamentos, aunque los gobernadores designados tienen una influencia limitada en asuntos ambientales.

o impactos directos. El aumento en la escala de la intervención se correlaciona con la incertidumbre acerca del número de municipios involucrados. La mayoría de los casos no parece llegar a más de cinco municipios vecinos. En los casos restantes, el grado de los impactos es discutible.

Cuadro 17.1

Conflictos ambientales desde la Posguerra hasta el año 2011, El Salvador

Caso	Descripción	Años
1	Incineración de basura: Propuesta para instalar una incineradora de llantas en el puerto de La Unión	1993
2	Derechos hídricos: Propuesta para la explotación de acuíferos en Nahulingo para suministro de agua en Sonsonate	1993-1994
3	Generación de electricidad: Construcción de planta con maquinaria diesel en los suburbios de San Salvador	1995-1998
4	Derechos hídricos: Propuesta para la explotación de ríos y aguadas en Izalco para suministro de agua en Sonsonate	1995
5	Derechos hídricos: Expansión del sistema de agua en Panchimalco	1995
6	Derechos hídricos: Expansión del sistema de agua en la municipalidad de San Ramón, Cuscatlán	1996
7	Incineración de basura: Propuesta de basural en el área metropolitana de San Salvador	1995-1997
8	Derechos hídricos: Conflicto sobre los derechos comunales de la gestión del servicio público de agua en la zona rural de Tacuba	1995-1997
9	Contaminación del río y erosión de suelos: Extracción de materiales del Río Jiboa, El Rosario, La Paz	1995-1997
10	Derechos hídricos: Conflicto sobre los derechos comunales de la gestión del servicio público de agua en la zona rural de Ataco	1996
11	Derechos hídricos: Instalación de fábrica embotelladora de agua y refrescos en Nejapa	1996-1997
12	Propuesta de relleno sanitario para el área metropolitana de San Salvador	1996-1997
13	Energía: Instalación de contenedores de gas propano en el puerto de La Unión	1997
14	Derechos de propiedad y deforestación: Lucha para evitar la subdivisión de la quinta El Espino, San Salvador	1991-1998
15	Falta de agua potable atribuida al agronegocio en la zona rural de San Martín	1998
16	Contaminación del río: Desechos de la cafetalera vertidos en la zona rural de Sonsonate, Santa Ana y Ahuachapán	90
17	Contaminación del río y erosión de suelos: Extracción de materiales pedregosos del Río Angue, Metapán	1995-2000

Caso	Descripción	Años
18	Desechos tóxicos: Entierro ilegal de agroquímicos en la zona rural de Suchitoto	1998-2000
19	Desechos tóxicos: Almacenamiento de agroquímicos en un depósito en la zona rural de Cuisnahuat	1998-2000
20	Obstrucción del curso de agua: Esparcido de escombros en la quebrada El Garrobo, San Salvador	90-2000
21	Basural a cielo abierto en Santa Cruz Michapa	90-2000
22	Inundaciones: Luchas por medidas preventivas para el área metropolitana de San Salvador	90-2000
23	Construcción de basural en el Distrito Ojos de Agua, Cojutepeque	2001
24	Polución ambiental: Cenizas de la zafra en San Miguel se esparcen sobre el campus universitario	2000-2002
25	Propuesta de sistema cloacal municipal en Apaneca	2002
26	Desechos tóxicos: Vertido de químicos de la planta de gas propano en El Tobalón, La Paz	principios de 2000
27	Contaminación del río y hedor causados por una granja porcina en San Julián, Sonsonate	2004-2005
28	Falta de agua potable en área suburbana residencial Los Chorros, Lourdes	2005
29	Falta de agua potable en Colonia Montelimar, Olocuilta	2004-2006
30	Construcción de una ruta en los suburbios de Usulután	2005-2006
31	Derechos hídricos: Propuesta de explotación de aguadas en la zona rural de Ishuatán, para proveer agua a Cuisnahuat, Sonsonate	2005-2006
32	Derechos hídricos: Expansión del sistema de agua en Colonia Buena Vista, Ahuachapán	2005-2006
33	Construcción de relleno sanitario: defectos de diseño y la contaminación en basural en la zona rural El Carmen, La Unión	2006
34	Derechos de propiedad: Conflictos sobre la propiedad de terrenos en el lugar afectado por el terremoto de 2001, Santa Tecla	2001-2007
35	Construcción del basural Anillo Periférico en el área metropolitana	2002-2007
36	Exploraciones mineras de oro en municipalidades al este del departamento de Chalatenango	2005-2007
37	Propuesta de relleno sanitario en San Isidro, Cabañas	2005-2007
38	Daños al coralífero en la playa Los Cóbanos por expansión del complejo balneario, en Acajutla	2007
39	Propuesta de relleno sanitario en Cutumay Camones, Distrito de Santa Ana	2007
40	Desechos tóxicos: Derrame de agroquímicos en un depósito abandonado, San Miguel	1999-2011

Caso	Descripción	Años
41	Derechos de propiedad: Litigio legal sobre la tierra en el asentamiento rural Santa Marta, Cabañas.	1998-2011

Ref.: Las fechas se refieren a un período de tiempo en el cual fue posible documentar reclamos, peticiones, protestas u otras acciones colectivas públicas

Cuadro 17.2
Conflictos ambientales en curso circa 2012, El Salvador

Caso	Descripción	Años
42	Inundaciones causadas por la represa 15 de Septiembre: Luchas por compensación y medidas preventivas	90
43	Falta de agua potable en 6 municipalidades del área metropolitana de San Salvador	90
44	Conservación: Desafíos comunales a las restricciones en Parque Nacional El Imposible	90
45	Deforestación de Cordillera del Bálsamo: Provocado por la expansión urbana en el área metropolitana	1994
46	Derechos de propiedad en playa: Propuesta de urbanización balnearia en Garita Palmera, Ahuachapán	1995
47	Represa hidroeléctrica El Cimarrón: Propuesta para sacar agua del Río Lempa, Chalatenango	1997
48	Deforestación de la cafetalera El Espino: Proyectos inmobiliarios y construcción de autopista	1999
49	Represa hidroeléctrica El Chaparral: Propuesta para crear una represa en el Río Torola, San Miguel	2000
50	Derechos de propiedad: Regularización de los asentamientos urbanos precarios a los costados de las vías del tren en Santa Ana	2001
51	Construcción y gestión de relleno sanitario en Salinas de Ayacachapa, Sonsonate	2002
52	Derechos de propiedad: Regularización de los asentamientos urbanos precarios a los costados de las vías del tren en San Salvador	2003
53	Energía geotermal: Contaminación atribuida a la planta geoterma en Berlín, Usulután	2004
54	Exploraciones mineras de oro en municipalidades al este del departamento de Cabañas	2005
55	Desechos tóxicos: Contaminación por plomo provenient de una fábrica de baterías para autos en San Juan Opico	2005
56	Derechos de propiedad: Propuesta para reubicación de asentamientos urbanos precarios en Antiguo Cuscatlán	2006
57	Derechos hídricos: Crisis del servicio público municipal de agua de la zona rural de Tacuba	2006

Caso	Descripción	Años
58	Plantas de energía: Propuesta para construir usinas energéticas a carbón o gas natural en el puerto de La Unión	2007
59	Mina San Sebastián: Contaminación por mina abandonada, zona rural de Santa Rosa de Lima	2008
60	Caña de azúcar: Contaminación de aire y aguadas en los departamentos de La Paz y Usulután	2008
61	Conservación: habitantes locales demandan permisos para criaderos de camarón en los Manglares de Jiquilisco	2010
62	Construcción de relleno sanitario en Las Chinamas, periferia de Ahuachapán	2010
63	Construcción de relleno sanitario en el Distrito El Zompopo, zona rural de Texistepeque	2011
64	Rediseño de relleno sanitario en el Distrito Melara, zona rural de La Libertad	2011
65	Deforestación en Mejicanos por la construcción de Centro Comercial	2011

Ref.: Las fechas se refieren al inicio de los reclamos, peticiones, protestas y otras acciones colectivas públicas. Aunque en algunos casos se han ido desvaneciendo, las preocupaciones entre los habitantes locales continúan.

El movimiento ambiental salvadoreño refleja la atomización de los conflictos ambientales. La mayoría de las luchas han sido impulsadas por grupos de base rurales o urbanos, en alianza con las ONG profesionales que abordan cuestiones de medio ambiente, desarrollo o derechos humanos. Estos aliados han proporcionado asesoramiento jurídico, conocimiento, contactos con los medios de comunicación y recursos financieros y logísticos (Almeida y Stearns, 1998). Sin embargo, las organizaciones ambientales salvadoreñas carecen de una base social articulada a nivel nacional o de un gran número de activistas y simpatizantes que se movilicen en solidaridad con las luchas locales.

Las ONG ambientales han abordado esta escasez canalizando financiamientos para forjar coaliciones regionales o nacionales entre los grupos de base; pero esas redes tienen una tendencia a ser de corta duración. Por ejemplo, en la Red de Ambientalistas en Acción participaron las comunidades rurales de las regiones centrales y occidentales; estuvo activa a mediados de la primera década de los 2000, pero luego se desactivó. La Asociación de Comunidades Afectadas por el Anillo Periférico y Bypass y el Movimiento Nacional Anti-Represas tuvieron un destino similar a principios y mediados de la primera década de los 2000, respectivamente. Las únicas redes

que siguen activas 5 años después de su lanzamiento son: la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica (conocida como Mesa Nacional) y el Foro Nacional para la Defensa, Derecho y Sustentabilidad del Agua. Estas redes sobreviven gracias a la tenaz participación de las ONG profesionales.

FACTORES DESENCADENANTES DE LA PREOCUPACIÓN DE LOS CIUDADANOS

Desde los años 80, vastas transformaciones nacionales reformularon las prioridades de inversión, que a su vez causaron la mayoría de las decisiones, acciones y propuestas que encendieron las luchas ambientales. Entre esas transformaciones hay una participación decreciente de la agricultura en el PIB y en la expansión de las exportaciones, la urbanización y la infraestructura (Cartagena, 2009a). El Cuadro 17.3 muestra la frecuencia de los proyectos y las actividades económicas que desencadenaron los 65 conflictos examinados. Como era de esperar, debido a la mengua en la agricultura, las actividades agrícolas (casos # 15, 60), la agroindustria (# 16, 24) y la cría de animales (# 27) rara vez llevaron a conflictos o lo hicieron indirectamente, como se muestra en el ejemplo de la disposición peligrosa de los plaguicidas no utilizados (# 18, 19, 40). También era previsible, debido a la extensión limitada de las áreas de conservación protegidas oficialmente,[7] que las restricciones impuestas a los habitantes locales rara vez desencadenaran una oposición notable (# 44, 61).[8]

Cuadro 17.3
Conflictos ambientales provocados por actividades económicas y proyectos controversiales, El Salvador (1992-2012)

Tipo de proyecto / actividad económica	Cantidad	% (n = 65)
Conservación de aéreas naturales (restricciones a los habitantes locales)	2	3.1
Sistemas públicos de agua	12	18.5
Planes de expansión de los sistemas de agua	7	10.8
Falta / fallo del servicio público	5	7.7

7 A finales de 2007, representaban el 0,5% del país (Cartagena, 2009a).

8 Los conflictos de baja intensidad pública fueron omitidos, aunque todas las áreas protegidas enfrentan situaciones de caza, extracción de leña, cultivos y asentamientos humanos. Por ejemplo, se excluyó de la muestra al Parque Nacional Montecristo, pero los conflictos están latentes. Más de 100 familias habitan el parque sin títulos de tenencia (Cartagena, 2012).

Tipo de proyecto / actividad económica	Cantidad	% (n = 65)
Recolección y eliminación de residuos pos consumo	11	16.9
Rellenos sanitarios / basurales municipales	10	15.4
Sistema de red cloacal municipal	1	1.5
Expansión urbana y temas territoriales urbanos	12	18.5
Asentamientos urbanos precarios / peligro de desalojo	3	4.6
Urbanización y construcción	7	10.8
Construcción de caminos	2	3.1
Generación y distribución de energía	10	15.4
Hidroeléctrica y geotermal	4	6.2
Generación Termal (diesel, carbón, gas)	2	3.1
Incineración de residuos (residuos municipales, llantas)	2	3.1
Reservas y distribución gas de propano	2	3.1
Agricultura y asentamientos rurales	7	10.8
Temas de tenencia de la tierra (agricultura y asentamientos)	1	1.5
Agricultura comercial	2	3.1
Granjas (cría de animales)	1	1.5
Vertido y depósito de agroquímicos	3	4.6
Minería y canteras	5	7.7
Exploración y minería (oro y plata)	3	4.6
Extracción de materiales no metálicos	2	3.1
Industria y agroindustria (excluyendo energía)	4	6.2
Agroindustria	2	3.1
Otras industrias	2	3.1
Turismo y/o ecoturismo	2	3.1
Hoteles y otras infraestructuras turísticas	1	1.5
Emprendimientos inmobiliarios en zonas costeras	1	1.5
Total	**65**	**100**

Ref.: (a) Se excluye la incineración de residuos para la generación de energía.

Las luchas rechazaron principalmente cuatro tipos de proyectos o situaciones: (a) la expansión o falla de los sistemas públicos de agua potable; (b) la expansión urbana y los problemas de loteo urbano; (c) generación y distribución de energía; y (d) recolección y disposición de residuos posconsumo.

SISTEMAS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE

El funcionamiento de los servicios públicos de agua potable ha sido una de las principales causas de conflictos, que se dividen en tres tipos. Primero, el rechazo de los proyectos que pretendían usar una fuente que ya estaba prestando servicios a una comunidad, con el fin de suministrar agua a otros asentamientos. Los ciudadanos temían que el nuevo proyecto podría agotar el recurso (# 2, 4, 5, 6, 31, 32). Segundo, las comunidades rurales reaccionaron contra un servicio precario e intentaron tomar la gestión del suministro de agua local, incluso por la fuerza (# 8, 10, 57). Tercero, las protestas en demanda de soluciones por la escasez de agua en las zonas urbanas, que llegaron a durar varias semanas durante la estación seca (# 15, 28, 29, 43).

EXPANSIÓN URBANA Y PROBLEMAS CON LAS TIERRAS URBANAS

Se registraron 10 casos de conflictos por tenencia o por cambio en el uso de parcelas en zonas urbanas en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y dos casos más en las ciudades del interior.[9] Los conflictos por la tenencia de la tierra evolucionaron en torno a los asentamientos informales en terrenos públicos (# 30, 50), los asentamientos de colonos[10] de larga data en fincas de café privadas transformadas para uso urbano (# 14, 56) y el parque conmemorativo –e impugnado– para las víctimas del terremoto de enero de 2001 (# 34). La deforestación fue un detonador importante del conflicto en 4 casos, que implicaron la eliminación de las fincas cafetaleras[11] con cultivos bajo sombra (# 14, 45, 48) y la poda indiscriminada de árboles en los microcentros urbanos (# 65). En San Salvador, dos de los conflictos se ocasionaron por los riesgos de inundación: uno, relacionado con el cambio en el uso de la tierra (# 22), y otro, por la eliminación indiscriminada y riesgosa de escombros (# 20). Finalmente, la expansión/construcción de carreteras representa dos casos (# 30, 35). Cabe destacar que los conflictos tienen lugar tanto en tierras privadas como públicas (estatales y municipales).

---

9 Este conteo excluye al caso # 46, causado por intereses turísticos e inmobiliarios en una comunidad rural de la costa.

10 Trabajo agrario precario realizado en los latifundios, que incluye el derecho a cultivar una pequeña parcela para la propia subsistencia. Los descendientes de los colonos todavía viven en propiedades que se convirtieron en terrenos urbanos o parques nacionales.

11 Los cafetales cultivados bajo la sombra de grandes árboles son valorados como parte de los bosques del país, porque tienen funciones estratégicas para la protección de la biodiversidad y mitigación del cambio climático (Hecht y Saatchi 2007).

GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

En los primeros años de posguerra, las organizaciones ambientales bloquearon con éxito dos propuestas de incineración de residuos (# 1, 7). También confrontaron, aunque no pudieron suspender, una planta operada con diesel (# 3) y un parque de almacenamiento de gas propano (# 13). Desde finales de los 90, las disputas por la energía incluyen las preocupaciones por la contaminación derivada de una planta geotérmica (# 53), nuevas propuestas para instalaciones térmicas (# 58) y de energía hidroeléctrica (# 42, 47, 49). Una represa hidroeléctrica de principios de los 80 se volvió una amenaza de desastre evidente (# 42). En este caso, el nivel del agua del embalse se acercó a los límites de seguridad, las descargas se produjeron sin suficiente tiempo de advertencia ni previsiones de evacuación, como durante el Huracán Mitch (1998). Como resultado, hubo víctimas humanas y grandes pérdidas de cultivos, ganado y viviendas en la cuenca baja del Río Lempa. Durante los 90, se diseñaron y construyeron dos represas (# 47, 49), a expensas del desplazamiento de la población y la desviación del río, respectivamente.

RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS POSCONSUMO

Casi una quinta parte de los conflictos relacionados con la contaminación o riesgos de contaminación son resultantes de problemas en la gestión de residuos provocados por los rellenos sanitarios, los vertederos o los sitios de incineración. La eliminación (municipal) de residuos comunes provocó diez conflictos. En dos conflictos, las comunidades recusaron a los municipios que desechaban basura en vertederos a cielo abierto (# 21, 23), prohibidos por la Ley de Medio Ambiente de 1998. Posteriormente, los gobiernos locales prefirieron la construcción de rellenos sanitarios, una opción rechazada por los ciudadanos. Surgieron siete casos de oposición pública, que resultaron en dos proyectos clausurados (# 37, 39) y uno cerrado por el MARN (# 33).

Los conflictos relacionados con la gestión de los residuos ascienden a casi un tercio del total de los casos y comprenden a: los servicios municipales, los servicios públicos de energía, la minería, la industria y la agroindustria, la agricultura y la construcción. El Cuadro 17.4 presenta cinco tipos de problemas de gestión de residuos (de actividades no económicas) que incluyen desechos comunes, especiales y peligrosos.

La disposición de residuos peligrosos llevó a seis casos (Cuadro 17.4), incluyendo cuatro hitos ejemplares de los avances en el cumplimiento de la ley y de la capacidad de resolución de problemas por parte de las instituciones del Estado. En 1998, una empresa comercial desechó decenas de bidones de agroquímicos, enterrándolos a campo

abierto en una comunidad rural (# 18). Cuando se descubrieron, los contenedores fueron llevados a un depósito en otro municipio, que derivó en un nuevo conflicto con su propia dinámica (# 19). En 1999, decenas de bidones con desechos de agroquímicos estaban almacenados en un depósito abandonado en la ciudad de San Miguel (# 40). Durante el año 2000, murieron tres personas luego de que fueran vertidos productos químicos industriales en los lados de una carretera (# 26). En 2007, el Ministerio de Salud cerró una fábrica de baterías para automotores después de que las muestras de sangre de los residentes cercanos revelaran altos niveles de plomo (# 55). Los cuatro casos fueron llevados a juicio, y aunque algunos sospechosos fueron declarados inocentes, la práctica de disposición de residuos tóxicos a campo abierto fue mayormente eliminada. Mientras tanto, el gobierno incrementó la mitigación apropiada. El MARN envió el primer grupo de contenedores tóxicos (# 18, 19) a los Países Bajos para su destrucción segura, en el año 2002. Luego, en 2010, pagó por la incineración del segundo grupo de contenedores (# 40) en una fábrica de cemento que operaba en el país. Ese mismo año, el MARN evaluó la presencia de partículas de plomo en los suelos y casas cerca de la antigua fábrica de baterías (# 55) y comenzó un programa de descontaminación, que continúa bajo monitoreo comunitario.

Cuadro 17.4

Conflictos ambientales provocados por la gestión de residuos, El Salvador (1992-2012)

Tipo de proyecto / actividad	Cantidad	% (n = 65)
Basurales / vertederos municipales	10	15,4
Propuestas de Incineración (desechos municipales, neumáticos)	2	3,1
Sistema cloacal municipal	1	1,5
Desechos peligrosos / tóxicos (químicos, metales pesados)	6	9,2
Eliminación de escombros, desechos de construcción	1	1,5
Total	**20**	**30,8**

Fuente: Elaboración propia.

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y RECURSOS NATURALES EN RIESGO

Los múltiples temas y argumentos planteados en los conflictos ambientales pueden ser clasificados según los tipos de funciones/servicios ecosistémicos dañados o amenazados en cada situación (Millennium Ecosystem Assessment, 2003). Sin embargo, los grupos de base salvadoreños rara vez expresan sus preocupaciones en ese tipo de vo-

cabulario académico, sino como daños o riesgos para bienes tangibles y recursos naturales (Cartagena, 2009a). El Cuadro 17.5 clasifica las preocupaciones ambientales articulando el lenguaje académico con el popular.

Cuadro 17.5
Recursos naturales en riesgo y servicios ecosistémicos asociados según las preocupaciones de los grupos de base movilizados, El Salvador (1992-2012)

Recursos y servicios ecosistémicos implicados	Cantidad	% (n = 65)
Funciones o provisión de servicios	48	74
Distribución de agua (provisión de servicios)	38	58
Cultivos / animales (provisión de servicios)	16	25
Pesca y piscicultura (provisión de servicios)	8	12
Regulación de funciones o servicios	37	57
Calidad del agua (regulación de servicios)	18	28
Calidad del aire (regulación de servicios)	14	22
Control de inundaciones (regulación de servicios)	7	11
Servicios de substratos	18	28
Tierra para asentamientos y agricultura (servicios de substratos)	18	28
Funciones del hábitat de flora y fauna	18	28
Ríos y lagos (hábitat de flora y fauna)	9	14
Bosques, montañas, arboledas (hábitat de flora y fauna)	9	14
Servicios culturales	12	19
Ríos (servicios culturales)	6	9
Bosques, montañas, arboledas (servicios culturales)	5	8
Recursos marítimos y costeros (servicios culturales)	3	5

Ref.: Clasificación de los servicios ecosistémicos basada en Millennium Ecosystem Assessment (2003) y Gómez-Baggethun y De Groot (2007).

Como se indica en el Cuadro 17.5, las tres cuartas partes de las luchas mostraron preocupaciones por los *servicios de suministro*, es decir, los bienes primarios proporcionados por los ecosistemas tales como fuentes de agua, cultivos, ganado y leña. Los ciudadanos también temen el impacto de la contaminación y la deforestación en cuestiones como la calidad del aire, calidad y disponibilidad del agua, las plagas y el clima local. Estas preocupaciones señalan los daños y riesgos de los *servicios reguladores*, esto es, el ciclo del agua, la purificación del

agua y del aire, la regulación del microclima o el control de plagas. El pueblo también impugnó las amenazas a los derechos a la tierra, resultantes de los conflictos por la tenencia o los desalojos provocados por los grandes proyectos de infraestructura, tales como carreteras, autopistas y represas. Estas situaciones comprometen a los *servicios de sustrato*, que son lugares adecuados para que las poblaciones establezcan asentamientos, cultivos y ganado.[12]

Las preocupaciones sobre los riesgos para la vida silvestre o ambientes naturales –es decir, los riesgos para los *servicios de hábitat*– se manifestaron en la lucha contra la deforestación, la contaminación de los ríos, o los daños a los arrecifes de coral. En menor proporción, grupos populares locales también se preocuparon por la pérdida de *servicios culturales*, esto es, beneficios derivados de los ecosistemas, tales como experiencias recreativas, espirituales o estéticas. Este tipo de conflictos, por lo general, involucra a los ríos y los recursos costeros. La cantidad total de conflictos relacionados con el agua –servicios de suministro, regulación, culturales y de hábitat–asciende a 44 (68%). Esta tendencia confirma graves fallas institucionales en la gestión del agua y una mayor conciencia pública acerca de los recursos hídricos limitados y contaminados del país.

Los ciudadanos también expresaron malestar acerca de los cambios en el entorno que no se ajustan a la clasificación de las preocupaciones sobre los recursos/sistemas del Cuadro 17.5. Se enumeran las condiciones que pueden afectar la calidad de las condiciones de vida, tales como el ruido, la contaminación y los olores, o la aparición de riesgos causados por nuevas infraestructuras o intervenciones. Los ejemplos incluyen: la esquina de un barrio transformada en intersección de carriles de alta velocidad (# 35), o un pueblo apacible donde la vida es perturbada por camiones que llevan basura a un vertedero (# 51). Al menos 17 conflictos (26%) muestran explícitamente este tipo de preocupación.

LOS ORÍGENES SOCIALES DE LAS MOVILIZACIONES POPULARES

Las características sociales de los grupos que participan en la acción colectiva reflejan su procedencia territorial, actividades económicas y fuentes de ingresos, género, etc. En la mayoría de los casos se relevaron los nombres de las ciudades o comunidades que emitieron reclamos, en consecuencia, fue posible determinar que la mayoría de los conflictos surgieron en comunidades o territorios rurales. Sin embargo, los registros disponibles –en informes de los medios de comunica-

12 Los servicios de sustrato no son considerados en Millennium Ecosystem Assessment (2003), pero sí en Gómez-Baggethun y De Groot (2007).

ción y ONG– proporcionaron escasa información acerca de la fuente de ingresos o los medios de subsistencia locales para evaluar las clases sociales. Los datos disponibles acerca de la participación de las mujeres fueron aún menos confiables.[13]

El Cuadro 17.6 resume las referencias de los orígenes geográficos de las movilizaciones (urbanas o rurales). Las poblaciones de los municipios rurales y de las periferias/distritos rurales (campesinos, ganaderos) participaron en el 71% de los conflictos, mientras que los habitantes urbanos de San Salvador y de los municipios urbanos participaron en un 40% de los casos (para consultar las definiciones, ver las notas del Cuadro 17.6).

Cuadro 17.6
Conflictos ambientales según territorio de residencia
de la población movilizada, El Salvador (1992-2012)

Tipo de territorio*	Cantidad	% (n = 65)
Área Metropolitana de San Salvador (AMSS)	16	25
Sectores urbanos populares	8	12
Sectores urbanos de clase media	6	9
Residentes de la periferia rural	7	11
Municipalidades urbanas (excepto AMSS)	13	20
Movilizaciones en las principales ciudades	10	15
Movilizaciones en los distritos rurales	5	8
Municipalidades rurales de alta densidad	15	23
Movilizaciones en las principales ciudades	8	12
Movilizaciones rurales	3	5
Sin data disponible de residencia u ocupación	4	6
Municipalidades rurales de baja densidad	19	29
Movilizaciones urbanas	18	28
Movilizaciones rurales	3	5
Activismo ambiental urbano sin movilizaciones locales o de base	2	3
Total	**65**	**100**

Ref.: * AMSS incluye 14 municipios, pero algunos conflictos involucraron a los municipios adyacentes.

13 Se registró a las mujeres solo en los casos de las líderes individuales (# 6, 8, 56) o cuando las organizaciones de mujeres participaron abiertamente en las movilizaciones (# 53, 54). Dicha información podría indicar un sub-registro, ya que durante los años de posguerra las mujeres de zonas rurales y urbanas han ejercido liderazgos y cargos públicos en sus comunidades (Herrera, 2008).

> Los municipios urbanos son definidos como aquellos donde el 50% o más de sus habitantes vive en zonas urbanas, según el Censo de 2007. El umbral entre la baja y alta densidad de los municipios rurales es definido en 150 habitantes por km2. Las movilizaciones rurales comprenden acciones de las personas que viven en los distritos (o cantones) fuera del casco urbano municipal principal, o de la población que depende de la agricultura de subsistencia, la pesca y la cría de animales. Las movilizaciones urbanas y de las ciudades principales incluyen acciones de las personas que viven en el principal casco urbano municipal.

En base a las preocupaciones manifiestas y las comunidades de origen, se infiere que los ciudadanos rurales y urbanos comprometidos no proceden de las clases media o alta. Antes bien, la mayoría de los participantes son pobres, tal como lo afirma un informante:

> La población que le da pelea, mayormente, es la población vulnerable, aquella [directamente] afectada... no hay clase media que constituya un movimiento [social]. Aquí, los que luchan contra el TLC, contra el Plan Puebla Panamá son los pobladores rurales, no los profesionales de las universidades; no hay movimiento de clase media (Cecilia Olivares, representante de la Unión Ecológica Salvadoreña, en una entrevista inédita citada en Cartagena, 2009a).

TIPOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES

Hay dos tipos principales de organizaciones de la sociedad civil que participan en los conflictos ambientales, que difieren en su alcance territorial, sus recursos y su relación con las partes interesadas. En primer lugar, hay grupos que representan a las comunidades locales o territorios con un interés directo en el resultado del conflicto (tipo I); en segundo lugar, están aquellos que se unen a la lucha por su alcance o su misión explícita, es decir, las organizaciones con sede en la ciudad Capital (tipo II).

El primer tipo se puede subdividir en dos subtipos. Por un lado, las organizaciones de base o civiles que representan a las comunidades pequeñas, como las asociaciones de desarrollo comunitario (ADESCO), pequeñas cooperativas o comités *ad hoc* organizados para coordinar la acción colectiva (tipo I-a). Por otro lado, las organizaciones e instituciones que promueven los intereses locales pero que no se limitan al ámbito de la pequeña comunidad. Por lo general tienen algunos empleados asalariados y, a veces, tienen una especialización temática derivada de su misión. Son ejemplos, los gobiernos municipales y las ONG con arraigo local (tipo I-b). El cuadro 17.7 resume la frecuencia de participación de los tres tipos.

Las organizaciones de tipo I-a participaron en casi todos los casos (59 de 65), y las organizaciones de tipo I-b adhirieron a la mitad de los casos, que es menos que la participación del tipo II. Este último tipo participó en el 77% de los (65) casos. Si solo se consideran los conflictos o luchas fuera del área metropolitana (49 casos), estas organizaciones con sede en la ciudad Capital actuaron en 34 casos, que es el 69% de esta sub-muestra. El Cuadro 17.7 revela dos hallazgos empíricos. En primer lugar, las pequeñas comunidades rurales y urbanas tienen un rol importante en los conflictos ambientales y los movimientos ambientalistas. En segundo lugar, la mayoría de las luchas han tomado la forma de coaliciones entre grupos de base locales y organizaciones con mayores recursos que actúan como aliados (para otros casos similares en Asia ver: Almeida y Stearns, 1998).

Cuadro 17.7
Conflictos ambientales según tipo de agrupación movilizada,
El Salvador (1992-2012)

	Cantidad	% (n = 65)
Tipo I-a: Organizaciones de Base (comunitarias / vecinales)	59	91
Tipo I-b: Otras organizaciones locales	30	46
Tipo II: Organizaciones extra-locales	50	77

Fuente: Elaboración propia.

Los principales aliados locales (tipo I-b) que respaldaron a las agrupaciones de base fueron los gobiernos municipales (23% de los conflictos); su apoyo generalmente incluye a los activistas locales y los dirigentes del partido político del alcalde[14] (Almeida, 2010). Los Partidos muestran diferentes patrones de participación, el FMLN respaldó 12 de los 15 casos con subscripción municipal. La última tendencia indica diferencias en la cultura política salvadoreña, ya que los seguidores de derecha por lo general rechazan las protestas sociales, mientras que los activistas de izquierda suelen abrazar las causas ambientales. Los otros aliados locales relevantes son grupos o representantes de la Iglesia Católica (11%).[15] Las organizaciones religiosas

14 Hasta 2012, el Partido ganador en las elecciones municipales mantuvo el puesto del alcalde y el 100% de los escaños en el Consejo. Por lo tanto, gobierno local y partido político se superponen por completo.

15 Los representantes de la Iglesia Católica se consideran aquí como actores locales en lugar de externos, puesto que los órganos diocesanos con participación en los

no católicas tienen un papel menos frecuente. Los principales aliados extra locales (tipo II) fueron las organizaciones ambientales con sede en la ciudad Capital, ya que aparecieron en el 63% del total de conflictos. Las ONG abocadas al desarrollo o los derechos humanos tuvieron una menor participación. Entretanto, en su desempeño como aliados los sindicatos y los estudiantes[16] representan solo uno y tres de los casos, respectivamente.

CAMBIOS GUBERNAMENTALES Y CONFLICTOS AMBIENTALES DESDE 2009

El Gobierno de centroizquierda que asumió en 2009 desarrolló una nueva posición en muchos de los conflictos ambientales. De los dos grandes proyectos hidroeléctricos heredados de la era ARENA, el nuevo gobierno ordenó rediseñar completamente el proyecto El Cimarrón (# 47), pero se negó a parar El Chaparral (# 49), puesto que la construcción estaba en marcha. En el primer caso, hasta principios de 2013 no hubo ninguna decisión definitiva. En El Chaparral, el movimiento popular cambió su objetivo principal: de detener el proyecto pasó a centrarse en una "negociación justa" (Valencia, 2012).[17]

En cuanto a las luchas contra la minería, los activistas esperaban que el Gobierno de Funes apoyara la prohibición definitiva de la minería metálica. En cambio, en 2012 el MARN propuso una ley en la Asamblea Nacional para suspender temporalmente los permisos de minería hasta que se mejoraran las capacidades nacionales para regular y controlar las actividades mineras. Mientras tanto, el FMLN dudó en apoyar su propio proyecto de ley para prohibir la minería metálica, propuesto en 2006. El MARN abordó otras situaciones conflictivas, en especial los mayores casos de contaminación (# 40, 59, 55, 60). Además, implementó un programa para apoyar a los municipios en la construcción de rellenos sanitarios con los nuevos estándares, que generaron oposición local (# 63, 64). A diferencia de las luchas previas a 2009, estas no fueron apoyadas por la mayoría de las organizaciones ecologistas más radicales de la posguerra, la Unión

---

conflictos reclutaron a sus miembros entre la población local. Incluso los obispos tienen raíces territoriales.

16 Los estudiantes universitarios apoyaron el caso de El Espino (# 14) y la campaña contra la minería (# 54, 59). También impulsaron la lucha contra la contaminación en San Miguel (# 24).

17 Después de que una fuerte tormenta mostrara los riesgos geológicos implicados, la construcción de El Chaparral se detuvo en mayo de 2010, y hasta mayo de 2015 no se había reanudado.

Ecológica Salvadoreña (UNES) o el Centro de Tecnología Apropiada (CESTA). Ambas ONG mantuvieron su postura crítica hacia algunas de las políticas gubernamentales, tales como la minería de oro y las represas hidroeléctricas, pero al mismo tiempo evitaron participar en movilizaciones conflictivas que pudieran sugerir que se estaban alineando con la oposición de derecha al Gobierno de Funes. Por lo tanto, el apoyo a las comunidades locales opuestas a los nuevos rellenos sanitarios vino de la Coordinadora Nacional de Medio Ambiente (CNMA), una organización muy poco conocida antes de 2010. La CNMA no está vinculada a las principales organizaciones ambientales o al FMLN, aunque cuenta con el apoyo de los diputados de ARENA (Morán, 2011). Por otra parte, algunos ambientalistas afirman que la CNMA recibe financiación de un monopolio privado, cuyos intereses comerciales se benefician al bloquear la construcción de rellenos sanitarios (Flores, 2011; Consejo Social, 2011).

DE LOS CONFLICTOS AMBIENTALES AL AMBIENTALISMO

Gran parte de las luchas ambientales en América Latina son llevadas a cabo por grupos e individuos que no se consideran ecologistas (Martínez-Alier, 1995; Folchi, 2001; Fontaine, 2003). En consecuencia, el enfoque de los *conflictos ambientales* que fundamenta el análisis anterior no presupone una identidad ecologista como motor para la acción colectiva. Sin embargo, al menos en El Salvador, estos conflictos han sido el "caldo de cultivo" de una suerte de nuevo movimiento social que podríamos llamar ambientalismo.

Este ambientalismo salvadoreño reciente parece ser un tipo híbrido, que reacciona tanto a los discursos ecologistas clásicos como a las cuestiones de justicia social. Obsérvese en el Cuadro 17.6 que los daños o riesgos para la regulación de los servicios ecosistémicos aparecen en 57% de los casos. Si se suman, las preocupaciones para regular los servicios ecosistémicos de hábitat o culturales representan 41 casos (63%); incluyendo contaminación, destrucción de bosques y otras áreas naturales. En estos temas resuena el ambientalismo arquetípico de los países industrializados de los años 60. Al mismo tiempo, 55 movilizaciones (85%) impugnaron las amenazas o los riesgos a los servicios ecosistémicos de sustrato o aprovisionamiento, es decir, los bienes y el sustento de la comunidad. Así, la distribución económica y la justicia social son sumamente relevantes, como en las representaciones del *ecologismo de los pobres* (Martínez-Alier, 1995, 2002) y el ecopopulismo (Szasz, 1994).

Ambos tipos de preocupaciones son evidentes en los conflictos por el agua. Así, las movilizaciones provocadas por la contaminación emiten un discurso acerca de la protección de las aguas. Otros es-

tallaron cuando los habitantes de las zonas rurales se enteraron de los planes para construir sistemas de agua utilizando fuentes locales, pero no para servir a las comunidades locales que carecen de acceso al agua, sino para "exportarla" a las ciudades o a otros municipios. En estos casos, los discursos manifestaron las problemáticas de justicia social y las preocupaciones acerca de la sobreexplotación de los recursos hídricos locales (casos # 2, 6, 31).

Sin embargo, los conflictos por el agua también demuestran que el vínculo, entre los conflictos ambientales y el ecologismo, no es directo. Por ejemplo, las protestas desencadenadas por la escasez de agua en las zonas urbanas no elaboraron un discurso acerca de las condiciones ecológicas que afectan el suministro de agua. De esta forma, para poder considerar a las luchas en torno a los recursos naturales como una expresión del ambientalismo, los valores subyacentes en las movilizaciones deben relacionarse con ideas como el uso sostenible de los recursos limitados o con nociones de interdependencia ser humano-naturaleza (Folchi, 2001). Con base en estos criterios, las únicas luchas ambientales en El Salvador desconectadas del ambientalismo serían las suscitadas exclusivamente por la escasez de agua, los problemas de tenencia de la tierra o las restricciones resultantes de la conservación de los ecosistemas. Incluso en estos casos, sin embargo, los actores comprometidos pueden no ser del todo ajenos a las ideas acerca del uso sostenible de los recursos.

PEQUEÑAS Y GRANDES COALICIONES AMBIENTALES

La mayoría de las luchas ambientales en El Salvador se desarrollan como coaliciones entre los grupos locales que por lo general no despliegan una identidad ambientalista explícita y los que sí lo hacen. Estos últimos pueden ser reconocidos por sus nombres y objetivos manifiestos, como sus dichos acerca de la protección de la naturaleza o sobre mitigar las causas antropogénicas de la degradación ambiental.[18]

Cuadro 17.8

Participación de organizaciones ambientalistas en conflictos ambientales, El Salvador (1992-2012)

	Cantidad	% (n = 65)
Total de casos con participación de organizaciones ambientales	**44**	**68**

18 Sin embargo, otros grupos pueden adherir a los valores de protección del medio ambiente y sostenibilidad, aunque no necesariamente definan su identidad o su misión en consecuencia.

	Cantidad	% (n = 65)
Organizaciones comunitarias de base	10	15
ONG ambientales locales	7	11
ONG ambientales de alcance nacional	41	63
Total de casos sin participación de organizaciones ambientales	**21**	**32**

Fuente: Elaboración propia.

En concordancia con el Cuadro 17.8, los grupos de base o comunitarios que se autodenominan ambientalistas[19] aparecen con poca frecuencia. Probablemente, las identidades sociales que unen o dan sentido a los ciudadanos locales en estas luchas sean más tradicionales: acaso se consideren a sí mismos como campesinos, comunidades, *los pobres o el pueblo*. Sin embargo, las organizaciones de base a menudo buscan aliados entre los ambientalistas. Como se muestra en el Cuadro 17.8, las organizaciones ambientales de la ciudad Capital adhirieron en dos tercios de los casos, y tienden a ser las mismas organizaciones. En 32 de los 44 casos con participación ambientalista, adhirieron UNES o CESTA.[20] Estas ONG representan una línea del movimiento de justicia social ambiental crítica del capitalismo, llamada *ecología contrahegemónica* (Gudynas, 1992) o *ecología crítica* (ver Cap. 18 en este volumen).

Curiosamente, un tercio de los conflictos prosperó sin la participación de organización ambiental alguna (21 de 65 casos). Muchos fueron provocados por fallas en los sistemas hídricos o por planes que causaron suspicacias ante la sobreexplotación de las fuentes de agua (# 6, 8, 10, 11, 15, 28, 29, 32, 43). Otros se desplegaron alrededor de los conflictos por la tenencia de la tierra (# 34, 41, 50, 52, 56), los riesgos de inundaciones (# 20, 22, 42), la contaminación (# 3, 19, 24) y las restricciones a los medios de vida causadas por las medidas de conservación (# 61). La mayoría fueron conflictos estrictamente locales en torno del *aprovisionamiento de los servicios ecosistémicos*. Por lo tanto, no todos los grupos de base ante una amenaza a su matriz de recursos naturales buscaron aliados entre los ambientalistas.[21] Por

19 Empleando nombres como: "grupo ecológico", "comité ambiental" o "comité de monitoreo ambiental".

20 Los casos enumerados se refieren a aquellos con un papel explícito en la coalición, pero tanto UNES como CESTA han realizado declaraciones públicas en un gran número de conflictos, incluyendo muchos que no figuran en la muestra.

21 Curiosamente, una ONG de desarrollo sostenible apoyó a las comunidades que

otro lado, la mayoría de los casos (en 61 de 65) da cuenta de la participación de entidades diferentes o anexas a las ambientalistas, lo que confirma que la identidad ecologista o ambiental declarada no es una precondición para la participación.

Por el contrario, los ambientalistas rara vez participan en las luchas si no están aliados a organizaciones de base. Organizaciones como UNES y CESTA parecen temer que las campañas que carecen de movilización local no tengan suficiente legitimidad y que las posibilidades de éxito sean bajas. Algunos activistas piensan que no deben participar en campañas "si las comunidades no se movilizan primero para defender sus propios recursos" (Raquel Cruz, representante del Centro de Tecnología Apropiada, de una entrevista inédita; citada en Cartagena, 2009a). En consecuencia, la muestra solo registra dos casos de activismo sin apoyo de las bases locales: contaminación causada por una mina de oro abandonada (# 59) y la deforestación de la finca El Espino después de 1998 (# 48). El primero puede ser explicado debido a que los pobladores locales ahora se dedican a minería manual,[22] mientras que el último será abordado en la siguiente sección.

DOS COALICIONES EMBLEMÁTICAS: "EL ESPINO" Y LAS MOVILIZACIONES CONTRA LA MINERÍA

Algunos conflictos son particularmente adecuados para incitar la convergencia del ambientalismo con otros movimientos sociales debido a la amplia gama de preocupaciones que generan. Las principales alianzas de este tipo, posteriores a la guerra civil, son la campaña de los años 90 para evitar la urbanización de la Finca El Espino (# 14) y la campaña en curso contra los proyectos de minería aurífera (# 36, 54, 59).

El Espino es la mayor plantación de café a la sombra adyacente a los principales bienes inmuebles metropolitanos.[23] La reforma agraria de 1980 tomó la propiedad y organizó a los trabajadores en la Cooperativa El Espino. Unos años más tarde, un Tribunal quitó parte de la propiedad de la Cooperativa y lo devolvió a los antiguos propietarios, que planearon urbanizarlo a un alto precio (Martínez, 2003). Las luchas para evitar el desguace de El Espino ocurrieron en

---

desafiaron las estrictas medidas de conservación en el Parque Nacional El Imposible (Martínez, 1997).

22 La falta de información en cuatro conflictos (# 3, 7, 11 y 38) no permite ni confirmar ni descartar la participación de las bases locales.

23 La finca se encuentra en los límites municipales de San Salvador, Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán.

dos etapas, con cambios de actores y objetivos, hasta el punto que se pueden considerar como dos conflictos diferentes (# 14 de 1991 a 1998 y # 48 desde 1999).

En la primera etapa, la decisión del Tribunal contra los derechos de tenencia de la Cooperativa fue políticamente impugnada. Por otra parte, los Acuerdos de Paz fortalecieron el Comité de Defensa del Espino, que amalgamó sindicatos, campesinos, federaciones de cooperativas, diversos grupos religiosos, ONG de derechos humanos, universidades, entidades políticas (incluyendo al FMLN), estudiantes y organizaciones ambientales. Para muchos miembros de la coalición, antes que las preocupaciones ambientales, el tema en cuestión era la confrontación de clase entre la Cooperativa y la elite tradicional. Sin embargo, los ambientalistas desplegaron un marco discursivo que aumentó la conciencia ambiental de la opinión pública (Martínez, 2003).

La segunda etapa comenzó en 1998, cuando la Junta Directiva de la Cooperativa llegó a un acuerdo con el Gobierno y los terratenientes, rompiendo la alianza. Después, los ambientalistas intentaron detener el desarrollo de las obras. Sin embargo, la construcción de centros comerciales exclusivos, edificios de apartamentos y casas en la ciudad continúa, con nefastas consecuencias metropolitanas, tales como aumento de los riesgos de inundaciones durante la estación lluviosa (# 22). Unos pocos activistas han realizado protestas o denuncias, sin mucho apoyo de la opinión pública, a excepción de publicaciones periodísticas. Mientras tanto, los municipios de San Salvador y Antiguo Cuscatlán conservan restos de las plantaciones de café como su Parque "Ecológico" conjunto. La Cooperativa también tiene su propio Parque "Ecológico", pero ha vendido al menos la mitad de las tierras que le quedaban a promotores inmobiliarios (Baires, 2010; Labrador, 2012).

La minería de oro impulsó la otra gran coalición en 2005. Se Inició en las luchas rurales de Chalatenango y Cabañas y se ha ampliado a escala nacional, con alcance y aliados trasnacionales. En el departamento norteño de Chalatenango hay un fuerte sentido de identidad territorial marcado por las experiencias compartidas durante la guerra y una larga trayectoria de organización territorial y campesina que antecede la guerra (Borgh, 2003). Por lo tanto, los ciudadanos y los gobiernos locales coherentemente rechazaron la exploración minera y, a finales de 2005, "expulsaron" a una empresa minera canadiense, mientras estaba en las primeras etapas exploratorias (Cartagena, 2009b). En contraste, en el departamento central de Cabañas la empresa Canadiense Pacific Rim había construido una base social de apoyo entre sus empleados, sus familias y los gobiernos locales. Esta región ostenta una cultura política conservadora y tradiciones clien-

telistas. Según un líder local del movimiento contra la minería, la mayoría de las comunidades en Cabañas "han sido bastante difíciles de organizar, no les gusta organizarse" (Francisco Pineda, Presidente del Comité Ambiental de Cabañas, de una entrevista inédita citada en Cartagena, 2009a). Los recuerdos de la guerra y la impunidad persistente podrían disuadir las acciones colectivas, debido que se teme que la protesta social sea el preludio de la violencia política:

> [...] Una compañera me decía [...] pues ella es una persona religiosa [...] que el sacerdote le aconsejó dejar de asistir a la reunión de hoy, que solo Dios podría arreglar las cosas, que tenga cuidado de no meterse en problemas debido a la Ley Antiterrorista[24] y que si íbamos a la marcha estaríamos en peligro. Ella no vino (Mujer de la Coalición de Mujeres de Cabañas, de una entrevista inédita citada en Cartagena, 2009a).

No obstante, el movimiento fortaleció su posición. En 2006, un grupo de ONG formaron la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica (Navarro et al., 2007). Hacia 2008, sus 13 miembros incluían a grupos católicos y a ONG de desarrollo y ambientales. En mayo de 2007, la Conferencia Episcopal –que reúne a obispos católicos del país condenó la explotación de la minería metálica. En 2008, más personas en Cabañas se opusieron a Pacific Rim cuando algunos pozos de agua se secaron a causa de las perforaciones exploratorias. Uno de los logros del movimiento fue exponer las debilidades de la evaluación de impacto ambiental presentada por la empresa canadiense. En consecuencia, el Ministerio de Medio Ambiente le negó el permiso necesario para iniciar las extracciones. La compañía suspendió las operaciones en junio de 2008 y presionó para obtener el permiso; con todo, el Presidente Antonio Saca se pronunció en contra del proyecto. A principios de 2009, Pacific Rim presentó una demanda legal contra el Estado salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Cartagena, 2009b).

Desde 2008, las acciones del movimiento viraron de una lucha centrada en Cabañas a una campaña nacional que enfrenta múltiples problemas, entre ellos el asesinato y hostigamiento de activistas. Entre junio de 2009 y 2011, fueron asesinados cuatro activistas de Cabañas. El sistema judicial salvadoreño enjuició y condenó a varios miembros de la mara local. Sin embargo, los líderes de la comunidad y las organizaciones criticaron el hecho de que los fiscales nunca bus-

24 El sacerdote parecía estar refiriéndose a la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, aprobada en 2006.

caron a los autores intelectuales. Los activistas también señalaron sobre "Grupos Armados Ilegales con Motivos Políticos" en un informe de 1994, que llegó a la conclusión de que las estructuras previas de los escuadrones de la muerte estaban vinculadas a la delincuencia común y al crimen organizado y que, en potencia, podrían ser parte de la violencia política (Mesa Nacional, 2012).

Al mismo tiempo, el movimiento contra la minería denunció la demanda legal internacional presentada por Pacific Rim y la renuencia de los legisladores y el Gobierno a emitir una ley que prohíba la minería metálica. Por otra parte, el movimiento comenzó a documentar los impactos de una antigua mina de oro abandonada en San Sebastián, donde los lugareños reanudaron las extracciones de forma manual (# 59). En 2011, el movimiento criticó los riesgos que plantea para El Salvador un nuevo proyecto de minería de oro en Guatemala, dada su ubicación en la cuenca binacional del Río Lempa. Recientemente, surgió una red de apoyo en algunas ciudades de los Estados Unidos y Canadá, vinculada al ambientalismo internacional y a las comunidades de inmigrantes salvadoreños en esos países (Stop El Salvador Mining, 2013).¿Qué tipo de movimiento ambiental surge de estas coaliciones? Los vínculos entre las luchas locales o los grupos de base son débiles o inexistentes; y las movilizaciones locales entran en una especie de estado latente, una vez que las amenazas (temidas) se han superado. Mientras tanto, organizaciones ambientales como UNES y CESTA continúan apoyando las luchas en otras comunidades, y le otorgan a estas alianzas un lenguaje para enmarcar y difundir sus reclamos y demandas. Pero este marco de referencia no se desarrolla en las identidades populares bajo el sello de "ambientalistas". Hasta los activistas más fogueados pueden dudar de considerarse ambientalistas (Valencia, 2012). Un representante de UNES reconoce esa limitación:

> Es ambicioso afirmar que en El Salvador existe un movimiento ambiental, pero dado que estos conceptos no tienen fronteras, creo que hay un creciente movimiento social que incluye entre sus demandas los problemas ambientales, los problemas de sostenibilidad (Ángel Ibarra, Presidente de la Unión Ecológica Salvadoreña. De una entrevista inédita citada en Argumedo et al., 2006).

Esta declaración hace eco del concepto de *socioambientalismo*; es decir, la influencia de la ecología en otros movimientos sociales (Viola, 1994). El ambientalismo salvadoreño ha surgido de ese tipo de influencia, activa en ambos sentidos. Hay grupos de la comunidad que reaccionan a los problemas ambientales locales, pero cuyas pre-

ocupaciones no se limitan solo al "medio ambiente". Los discursos y encuadres ambientalistas caracterizan a ciertas ONG, pero incluso estas parecen ser una rama especializada y enfocada en el medio ambiente de un movimiento social más amplio, como lo demuestra su vinculación a las organizaciones y redes sociales y políticas de largo plazo (Argumedo et al., 2006; Cartagena, 2009a; Valencia, 2012).

CONCLUSIONES: CONVERGENCIA DE LA CRÍTICA ECOLÓGICA Y LA CRÍTICA DISTRIBUTIVA

En contraste a la trayectoria de no confrontación del ambientalismo salvadoreño de antes de la guerra, su concreción de posguerra tuvo una base social, agenda, preocupaciones y repertorio de acción diferentes. El movimiento confrontó a los titulares del poder económico y político a través de la acción colectiva, y así, transformó las preocupaciones ambientales en debates políticos. Este ambientalismo renovado evolucionó a través de la participación en decenas de conflictos ambientales de alcance geográfico limitado; el resultado es un movimiento social no muy articulado. La mayoría de las luchas de protección ambiental se han llevado a cabo mediante alianzas limitadas entre grupos de base y ONG ambientales. En general, los actores locales conservan sus identidades sociales y locales, sin llegar a ser "ambientalistas" explícitos.

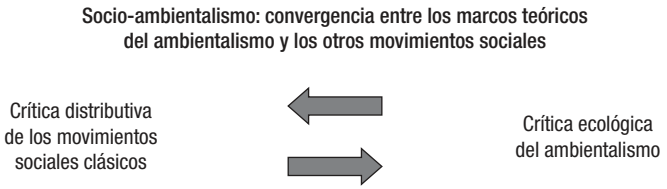
Cuando este movimiento estaba en ciernes, el país era gobernado por un partido pro-empresarial que rara vez se comprometía con las luchas ambientales. Como resultado, el movimiento ambiental se encontró a la izquierda del espectro político y su base social potencial se redujo a aquellos predispuestos a desafiar la estigmatización política por una causa aparentemente perdida; frenar los proyectos de inversión que amenazan el medio ambiente. Otra influencia en el ambientalismo de posguerra fue la geografía física y humana del país, que ya se caracterizaba por la alta densidad de población y por la reducción de la extensión de los bosques. Las dificultades de las condiciones ecológicas locales para la población rural que subsiste en un ecosistema deteriorado y los ingresos limitados de la clase media urbana alejaron a la mayoría de salvadoreños del conservacionismo romántico[25] y de los discursos verdes anticonsumistas que caracterizan el ambientalismo en otros lugares.

En su lugar, el movimiento ambientalista salvadoreño ha sido formado por un proceso *socioambiental* de doble vía (Viola, 1994),

25 Han surgido ONG especializadas en la conservación de la vida silvestre, pero están desvinculadas de las luchas populares (Cartagena, 2008).

como se revela en los discursos que vinculan las demandas sociales, como el derecho a la subsistencia, a los planteos políticos y económicos sobre los causantes de la contaminación, la deforestación, la escasez de agua, etcétera. Así, este movimiento social despliega una crítica a las injusticias distributivas a la usanza de los movimientos sociales "viejos" o "clásicos" (es decir, campesinos, revolucionarios, etc.) y una crítica ecológica expresada en el lenguaje del movimiento ambiental internacional (ver Gráfica 17.1).

Gráfica 17.1
Socioambientalismo



Fuente: Elaboración propia.

En resumen, los conflictos ambientales en El Salvador han influido no solo en la agenda política, sino también los marcos culturales de los movimientos sociales, pues han tendido un puente de valores e intereses entre un pequeño número de grupos ambientalistas y una esfera más amplia de entidades que trabajan en derechos humanos, justicia social y desarrollo local. El ambientalismo salvadoreño de posguerra es producto de esta convergencia.

BIBLIOGRAFÍA

Almeida, P. D. 2008 *Waves of protest: Popular struggle in El Salvador, 1925-2005* (Minneapolis: University of Minnesota Press).

Almeida, P. D. 2010 'Social movement partyism: Collective action and political parties' en Van Dyke, N. y McCammon, H. (eds.) *Strategic alliances: New studies of social movement coalitions* (Minneapolis: University of Minnesota Press) pp. 170-196.

Almeida, P. D. y Stearns, L. B. 1998 'Political opportunities and local grassroots environmental movements: The case of minamata' en *Social Problems*, *45*(1): 37-60.

Argumedo, N. O. et al. 2006 "Reconstrucción conceptual y tipológica de los nuevos movimientos sociales en El Salvador, 1998-2006", Tesis de Grado, Licenciatura en Sociología, Facultad de Ciencias y Humanidades, Universidad de El Salvador.

Baires, R. 2010 "Lotificadoras y constructoras entre los nuevos dueños de El Espino", 29 de agosto. En <http://www.elfaro.net/es/201009/noticias/2353/> acceso 30 de abril de 2013.

Cartagena, R. E. 2008 "Organizaciones y tendencias del ambientalismo en El Salvador" en *Estudios Centroamericanos ECA*, *711-712*: 33-57.

Cartagena, R. E. 2009a "Metabolismo socio-natural y conflictos ambientales en Costa Rica y El Salvador, 1992-2006", Tesis Doctoral, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Costa Rica. En <http://hdl.handle.net/10469/1584> acceso 30 de abril de 2013.

Cartagena, R. E. 2009b "Orígenes del movimiento de oposición a la minería metálica en El Salvador" en *Estudios Centroamericanos ECA*, *722*: 497-524.

Cartagena, R. E. 2012 *El Parque Nacional Montecristo. Historia social del bosque de Montecristo y opciones para su manejo incluyente* (San Salvador: PRISMA). En <http://www.prisma.org.sv/uploads/media/Montecristo_historia_social_del_bosque.pdf> acceso 30 de abril de 2013.

Consejo Social por el Medio Ambiente 2011 "La verdad sobre una coordinadora con chequera ajena" en *El Diario de Hoy*, 24 de agosto, p. 30.

El Diario de Hoy 1955a "Nueva Junta Directiva de Amigos de la Tierra" en *El Diario de Hoy*, 1 de septiembre, p. 2.

El Diario de Hoy 1955b "Pagina Conservacionista" en *El Diario de Hoy*, 4 de septiembre, p. 20.

Flores, R. 2011 "Presidente del CESTA pide replantear el manejo de desechos sólidos en el país" en *Diario Co-Latino*. 6 de septiembre. En <http://www.diariocolatino.com/es/20110906/ nacionales/96230/Presidente-del-CESTA-pide-replantear-el-manejo-de-desechos-sólidos-en-el-país.htm> acceso 30 de abril de 2013.

Folchi, D. M. 2001 "Conflictos de contenido ambiental y ecologismo de los pobres: no siempre pobres, ni siempre ecologistas" en *Ecología Política*, *22*: 79-100.

Fontaine, G. 2003 *El precio del petróleo. Conflictos socio-ambientales y gobernabilidad en la Región Amazónica* (Quito: FLACSO).

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 2010 'Global forest resources assessment 2010' (Roma: FAO) Forestry paper N° 163.

Gómez-Baggethun, E. y De Groot, R. 2007 "Capital natural y funciones de los ecosistemas: explorando las bases ecológicas de

la economía" en *Revista Ecosistemas*, *16*(3): 4-14. En <http://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/120/117> acceso 30 de abril de 2013.

Gudynas, E. 1992 "Los múltiples verdes del ambientalismo latinoamericano" en *Nueva Sociedad*, *122*: 104-112.

Hecht, S. y Saatchi, S. 2007 'Globalization and forest resurgence: Changes in forest cover in El Salvador' en *BioScience*, *57*(8): 663-672. En <http://www.aibs.org/bio-science-press-releases / resources/09-07.pdf> acceso 17 de marzo de 2013.

Herrera, M. B. et al. 2008 *Movimiento de Mujeres en El Salvador: Estrategias y miradas desde el feminismo* (San Salvador: FUNDE) pp. 1.995-2.006.

Labrador, G. 2012 "El Espino pierde otras 7 manzanas de tierra", 27 de agosto. En <http://www.elfaro.net/es/201208/noticias/9420> acceso 24 de junio de 2013.

La Prensa Gráfica 1987 "Agrupación protegerá los recursos naturales" en *La Prensa Gráfica*, p. 3.

Martínez, N. 1997 "¿Vida imposible en El Imposible?" en *Diario Co-Latino*, Suplemento Eco-Lógico, 9 de septiembre.

Martínez, N. 2003 *Anatomía de un crimen ambiental* (San Salvador: Ed. Molino de Viento).

Martínez-Alier, J. 1995 *De la economía ecológica al ecologismo popular* (Montevideo: Editorial Nordan-Comunidad).

Martínez-Alier, J. 2002 *The environmentalism of the poor: A study of ecological conflicts and valuation* (Cheltenham: Edwar Elgar Publishing).

Mesa Nacional frente a la Minería Metálica 2012 "La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica rechaza, por incompleta, la resolución emitida por asesinatos de ambientalistas en Cabañas" en *Diario Co-Latino*, 25 de abril, p. 23. En <http://www.stopesmining.org/j25/images/ pdf/campo_pagado_2012.pdf> acceso 30 de abril de 2013.

Millennium Ecosystem Assessment 2003 *Ecosystems and human well-being: A framework for assessment* (Washington: Island).

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) 2013 *Estrategia Nacional de Biodiversidad 2013* (San Salvador: MARN).

Morán, O. 2011 "Agricultores exigieron al Gobierno el cumplimiento de sus promesas" en <http://www.lapagina.com.sv/nacionales/54088/2011/07/19/Agricultoresexigieron-el-cumplimiento-de-sus-promesas-al-ejecutivo> acceso 30 de abril de 2013.

Navarro, A. C. et al. 2007 "Proceso y reconstrucción organizativa y prácticas del movimiento social contra la minería metálica en la franja norte de El Salvador (2005-2007)", Tesis de Grado, Licenciatura en Sociología, Facultad de Ciencias y Humanidades, Universidad de El Salvador, El Salvador.

Stop El Salvador Mining 2012 en <http://www.stopesmining.org/> acceso 17 de marzo de 2013.

Szasz, A. 1994 *Ecopopulism. Toxic waste and the movement for environmental justice* (Minneapolis: University of Minnesota Press).

Valencia, V. 2012 "Organizaciones del Movimiento Social por el Agua en El Salvador: el caso del Foro Nacional por la Defensa, Derecho y Sustentabilidad del Agua y el Movimiento Nacional Antirepresas", Presentado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Guatemala (mimeo).

Van den Hombergh, H. 2004 *No stone unturned. Building blocks of environmentalist power versus transnational industrial forestry in Costa Rica* (Amsterdam: Dutch University Press).

Van der Borgh, C. 2003 *Cooperación externa, gobierno local y reconstrucción posguerra. La experiencia de Chalatenango, El Salvador* (Amsterdam: Rozemberg Publishers / FLACSO-CLACS).

Viola, E. 1994 "El ambientalismo brasileño. De la denuncia y concientización a la institucionalización y el desarrollo sustentable" en *Nueva Sociedad*, *122*: 138-155.

Wade, C. J. 2008 'El Salvador: Contradictions of neoliberalism and building sustainable peace' en *International Journal of Peace Studies*, *13*(2): 15-32.

CÓMO CITAR ESTA PUBLICACIÓN:
Cartagena Cruz, Rafael E. 2017. "Conflictos ambientales y movimientos sociales en El Salvador de posguerra" Pp. 415-446 en Paul Almeida y Allen Cordero Ulate, Eds., *Movimientos Sociales en América Latina: Perspectivas, Tendencias y Casos*. Buenos Aires: CLACSO.

18

Allen Cordero Ulate*

BOSQUE, AGUA Y LUCHA: MOVIMIENTOS AMBIENTALISTAS EN COSTA RICA**

INTRODUCCIÓN (LUCHAS AMBIENTALES Y GLOBALIZACIÓN)

La riqueza de las luchas ambientales de Costa Rica puede ser entendida como otro capítulo en los esfuerzos de la resistencia popular contra el despliegue de la globalización en América Central. Como argumento a continuación, el movimiento social moderno de Costa Rica se inició en 1970 con la campaña contra Aluminum Company of America (ALCOA). Esta campaña proto-ambiental fue, en parte, responsable del movimiento estudiantil recién creado. La campaña ALCOA fue el resultado de la combinación de la responsabilidad política respecto a la soberanía nacional, por un lado, y la defensa del medio ambiente, por el otro. De esta manera, este nuevo movimiento social se estructuró como una lucha contra los deseos expansionistas de una corporación transnacional de bauxita; y así, signó la inauguración de lo que décadas después se convertiría en la lucha contra la globalización o el neoliberalismo.

Décadas más tarde, los años 90 marcaron el comienzo de las nuevas rondas de luchas ambientales en Costa Rica. Estos conflictos

* Escuela de Sociología, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.

** Este texto es una versión resumida y actualizada del ensayo publicado con el mismo título como un capítulo del libro: Hurtado, Margarita y Lungo, Irene (comp.) 2007 Aproximaciones al movimiento ambiental en Centroamérica (Guatemala: FLACSO).

fueron más duraderos y de largo plazo. Las campañas contra *Stone Container* en 1993 y 1994[1] y contra la minería a cielo abierto (en San Carlos de 1994 a 1998 y en Miramar de 1996 a 1999) dieron lugar a movilizaciones muy importantes y a precedentes significativos en la historia del movimiento ambiental costarricense. Detrás de estas campañas organizadas había un movimiento social emergente, que era menos organizado y más local, pero con un alcance y profundidad sin precedentes en la sociedad costarricense.. En cierto modo, estas nuevas luchas ambientales fueron una extensión de la primera campaña socioambiental representada por las movilizaciones contra ALCOA, porque también fueron movimientos de resistencia contra las empresas transnacionales y estuvieron en clara oposición a las formas de extracción de recursos y expansión del capital internacional. Sin embargo, en los 90, los activistas usaron un encuadre ambiental más explícito en sus actividades de organización que en las luchas anteriores.

Las tendencias experimentadas en los años 90 también alcanzaron un nuevo clímax con las luchas contra lo que llegó a ser conocido como "Combo del ICE"[2] en marzo y abril de 2000, la lucha social más importante desde la librada contra ALCOA (Almeida, 2014). Aunque la motivación principal detrás del "Combo ICE" no fue ambiental, sino más bien el rechazo a la privatización inminente de esta institución, había un componente ambiental representado por las preocupaciones sobre el impacto ambiental negativo que sería el resultado de la privatización de los servicios de electricidad. Recientemente, las luchas contra la privatización fueron retomadas en la oposición a largo plazo al Tratado de Libre Comercio - Centroamérica (TLC) durante los años 2000. En este caso, la relación entre ambientalismo y resistencia al neoliberalismo fue más evidente.

El presente capítulo se centra en el período más reciente, es decir, la etapa pos Combo/ICE después del año 2000. Comienzo con la afirmación de que la lucha del Combo/ICE inauguró una nueva etapa de los movimientos sociales en Costa Rica, y como tal, tuvo un impacto importante en la lucha social en temas ambientales posteriores. Brevemente, se puede decir que hay dos ejes principales en las luchas am-

---

1 Es la campaña de largo alcance impulsada por la Asociación Ecologista Costarricense que se opuso a un plan para sembrar e industrializar melina (*Gmelina sp*), la materia prima para hacer papel, en la península de Osa, la zona del Pacífico Sur del país.

2 ICE: Instituto Costarricense de Electricidad, fundado en 1949, es una de las instituciones emblemáticas del Estado desarrollista costarricense. El "Combo del ICE" se refiere a un paquete legislativo que pretendía la apertura y la privatización gradual del ICE.

bientales costarricenses. En primer lugar, está la lucha por la tierra o los recursos naturales, representada por la silvicultura y la minería. El ambientalismo costarricense ha sido muy receloso acerca de las prácticas de extracción modernas e industriales, especialmente las de las empresas transnacionales, que implican alteraciones del suelo y del subsuelo así como cambios en la composición y agotamiento de los bosques. El otro eje se refiere a la utilización del agua, que se manifiesta en campañas masivas, como los plebiscitos locales contra las represas. A nivel local y municipal, el afán de proteger y defender las fuentes de agua potable comunitarias ha experimentado un crecimiento notable. Es por eso que este capítulo se titula "Bosque, agua y lucha: movimientos ambientales en Costa Rica". El "*bosque*" es un símbolo de la vida y de la abundancia de la tierra y el "*agua*" representa un recurso indispensable de la vida. Agrego "*lucha*", como el concepto que resume nuestro interés principal: los *movimientos* ambientales en Costa Rica.

EL MOVIMIENTO AMBIENTAL COSTARRICENSE: ESTRUCTURA Y ACCIÓN

¿Qué es un movimiento social? Esta pregunta no tiene una respuesta sencilla. Un enfoque reduccionista identificaría movimientos con estructuras, viéndolos como organizaciones formales o institucionalizadas con el objetivo de hacer demandas o reclamos. En contraposición, hay otra perspectiva que enfatiza en las acciones sociales colectivas que concretaría aspiraciones de diverso tipo. La perspectiva defendida en este capítulo intenta combinar los conceptos de estructura y acción. Por un lado, creemos en la existencia de estructuras de movilización es un indicativo de continuidad o permanencia del movimiento social, pero, por otro lado, buscamos relacionar esas estructuras con acciones colectivas específicas. El relacionamiento de las estructuras de movilización con determinadas acciones colectivas está determinado, en gran medida, por las capas más profundas de la realidad social y cultural. Es decir, no existe un encuentro permanente entre estructuras y acciones sino que unas y otras pueden mostrarse separadas. Los grandes momentos de los movimientos sociales es cuando las estructuras se encuentran con sus acciones. Igualmente, el movimiento social de base puede generar nuevas estructuras organizativas, porque las preexistentes no funcionan o no se ajustan a las nuevas realidades profundas del movimiento. Además, dentro de un movimiento social, hay una lucha constante por la dirección político-ideológica, de tal manera que las hegemonías internas del movimiento suelen ser cambiantes, en respuesta a las múltiples señales contextuales o a los procesos internos del movimiento.

Todo movimiento social tiene un origen histórico, una continuidad dada que no suele ser uniforme, sino que más bien enfrenta vicisitudes. Los movimientos sociales son iniciativas que crecen desde la base de la sociedad o de los grupos sociales. En otras palabras, los movimientos sociales existen independientemente del Estado, y a veces se oponen a las políticas de Estado o tratan de influir en la orientación de las políticas y los recursos materiales o simbólicos que pudieran resultar de su aplicación. Por otro lado, hay organizaciones sociales que juegan un papel intermedio. Aún cuando hayan sido directa o indirectamente promovidos por el Estado, los participantes son trabajadores y voluntarios no gubernamentales que no reciben pagos o beneficios fiscales por su función social. A veces, los mecanismos de integración en estos tipos de organizaciones pueden recurrir a convocatorias abiertas o amplias y apelar a la sociedad civil por apoyo.

Siguiendo el esquema anterior, ahora nos centraremos en contextualizar las estructuras del movimiento ambiental. Priorizaremos las estructuras que han surgido como iniciativas de base o las que no dependen del Estado. A continuación, identificaremos algunas tipologías para entender la heterogeneidad relativa de los movimientos ambientalistas costarricenses.

TIPOLOGÍA DEL AMBIENTALISMO COSTARRICENSE

Desarrollar una tipología de los movimientos ambientales contribuye a comprender su diversidad, y cómo las múltiples perspectivas se traducen en discursos político-organizativos diferenciados cuando se trata con iniciativas o luchas relacionadas con el medio ambiente. En la literatura ambiental costarricense, hay algunos esfuerzos previos para intentar definir las tipologías organizacionales o ideológicas. Uno de estos esfuerzos es el de Fallas (1992), que favorece un criterio organizacional o institucional combinado con categorías ideológicas. Por lo tanto, se puede decir que estamos ante una tipología institucional ideológica. Por otro lado, Fernández González (2003) realiza un ejercicio tipológico del estudio de tres luchas ambientales locales vinculadas con instancias de gestión ambiental.

En cuanto a Fallas (1992), su tipología abarca cuatro tendencias: 1) conservacionismo de Estado; 2) conservacionismo reactivo; 3) conservacionismo desarrollista; y 4) ecologismo. El conservacionismo de Estado, evidentemente, es el que proviene de instituciones oficiales. El conservacionismo reactivo está orquestado por las ONG que tienen incidencia local. El conservacionismo desarrollista proviene de organismos internacionales. Finalmente, la madurez de los "ambientalismos" se expresa como perspectiva ecologista. Esta tenden-

cia intenta comprender los problemas ecológicos relacionándolos con un orden social desigual e injusto que hace un uso irracional de los recursos naturales. La idea de una mejora real en el medio ambiente está profundamente vinculada con un cambio profundo en el orden social y político. Fallas abrazaba esta última categoría, convirtiéndose en uno de sus miembros fundadores.[3] Los casos estudiados por Fernández-González (2003) incluyen tres procesos locales de lucha o gestión ambiental. El primero de ellos tomó la forma de una batalla contra una poderosa empresa transnacional, *Stone Container*, que desde 1993 intentó desarrollar un megaproyecto para la producción y comercialización de gmelina (*Gmelina sp*), la materia prima para producir papel. El autor define a los participantes en estas luchas como "ecosocialistas". Del conflicto participaron varias organizaciones locales etiquetadas de comunales –organizaciones territoriales locales que se encuentran en el sur de Costa Rica. El segundo caso fue la optimización del medio ambiente en la región del Caribe productora de banano, que surgió a partir de numerosos esfuerzos de presión social durante 1992-1993. Se cree que su fuerza motriz fue el catolicismo social que trabajaba junto al ex sindicato de trabajadores bananeros. El tercer conflicto, la lucha para proteger el acceso al agua en el Golfo de Papagayo (provincia de Guanacaste) es también un ejemplo de catolicismo social, en este caso combinado con la tendencia "comunal".

NUEVA TIPOLOGÍA DEL AMBIENTALISMO COSTARRICENSE

Este estudio retoma los esfuerzos de Fallas (1992) y Fernández-González (2003) mientras que, al mismo tiempo, propone una nueva tipología del ambientalismo costarricense. En la propuesta delineada en los párrafos siguientes, el Estado no se tendrá en cuenta como agente medioambiental. Obviamente, el Estado costarricense ha desarrollado varias iniciativas ambientales, pero aquí el foco se concentra en una perspectiva del movimiento social, y el Estado no es un movimiento social. Las que serán consideradas como una tendencia importante en el ambientalismo costarricense son las estructuras de participación social que, provenientes del Estado, tienen éxito en reunir grupos comunitarios o de base. Por lo tanto, se trata de una

3 Otro autor, Eduardo Mora, está parcialmente de acuerdo con la tipología de Fallas. Mora clasifica a los "ambientalistas costarricenses" en tres categorías. Uno se centra en conciliar el actual modelo de desarrollo, tras ligeras modificaciones, con la recuperación del equilibrio natural. Los conservacionistas "puros" se centran en la conservación sin relacionarla con el orden sociopolítico actual. La última busca un cambio sociopolítico como un proceso esencial para fomentar una relación distinta entre la sociedad y la naturaleza (Mora, 1998: 130).

tipología de las estructuras que serán retomadas más adelante para desarrollar una cartografía general de las acciones colectivas que corresponden a cada estructura. Específicamente, nuestro objetivo es una tipología de los cinco tipos principales de organización que parecen caracterizar el ambientalismo costarricense organizado. Los criterios principales para trazar un marco ideológico-político específico se refieren a cómo cada una de las partes define la relación entre naturaleza y sociedad, y lo que cada una propone para resolver ese dilema. Obviamente, de cada concepto surgen prácticas diferenciadas respecto al medio ambiente, así como al activismo social y político.

AMBIENTALISMO CONSERVACIONISTA

El ambientalismo conservacionista pone énfasis en la protección de la naturaleza. El deterioro ambiental se atribuye al crecimiento demográfico y la expansión económica, pero no elabora un discurso contra el desarrollo económico como crítica de la expansión capitalista. En algunos casos, tiene una postura política neutral o presuntamente apolítica. En sus orígenes, este ambientalismo conservacionista condenaba prácticamente cualquier actividad humana que hacía uso de los recursos naturales, pero desde los años 90 ha incorporado en su discurso un uso controlado de los recursos naturales por parte de las comunidades nativas y los campesinos (por ejemplo, en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992). Un rasgo clave de sus campañas y propuestas se centra en la compra de tierras con fines de conservación.

ECOLOGÍA CRÍTICA

Los orígenes de la ecología crítica residen en las posiciones de izquierda y el socialismo. Sin embargo, sería un poco exagerado calificar esta tendencia de ecosocialismo, dado que el discurso socialista ha sido abandonado por varios movimientos sociales y ambientales como consecuencia de la crisis del socialismo "histórico". La ecología crítica más bien favorece un discurso crítico del capitalismo, es decir, de sus modelos de acumulación, que son responsables de la destrucción de los ecosistemas a fin de aumentar las ganancias (O'Connor, 1997). En algunos casos, la ecología crítica ha encontrado inspiración en las sociedades indígenas precolombinas, que pujaban por una relación armoniosa con la naturaleza.[4] Una subtendencia de este tipo

4 En un artículo que podría ser considerado como fundacional del ecologismo crítico costarricense, el reconocido líder Oscar Fallas sostiene que la destrucción ambiental de Costa Rica se remonta a la llegada de los españoles en 1492 (Fallas, 1992: 9-17).

de ecología es el ecoanarquismo, que, considera que ningún Estado puede resolver los problemas ecológicos y sociales, y en consecuencia propone como solución la desaparición del Estado. Desde esta perspectiva, sus adherentes reivindican la vida comunitaria indígena y rural, que no se expresa por las grandes civilizaciones históricas, ya sean indígenas o no, sino en pequeñas comunidades sin Estado o en las comunidades donde el poder político está diluido. Algunos de los discursos defendidos por estos subtipos de ecología crítica tienden a superponerse.

AMBIENTALISMO DE ORIGEN ESTATAL

Esta modalidad tiene en cuenta la participación civil en los asuntos ambientales y de vigilancia, originalmente diseñados y formalizados por el Estado. Este modelo de acción ambiental resultó importante en la legitimación nacional e internacional en torno a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992. Durante el mandato del Presidente costarricense José María Figueres Olsen (1994-1998), algunas de las recomendaciones que surgieron en esta Conferencia fueron retomadas y dieron lugar al marco conceptual para la formulación del "desarrollo sostenible" en Costa Rica, que aboga por la participación de la sociedad civil en materia de medio ambiente. Desde el punto de vista de las consideraciones prácticas de esta orientación, la acción social ambiental está dirigida por las instituciones gubernamentales.

Cuadro 18.1

Organizaciones ambientalistas costarricenses por tipología

Tipo	Organizaciones
Conservacionismo ambiental	Asociación Conservacionista Monteverde, Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS); Asociación Protectora de Árboles (ARBOFILIA); Centro Científico Tropical (CCT); Centro de Capacitación para el Desarrollo (CECADE); Centro de Derecho Ambiental y de Recursos Naturales (CEDARENA); Justicia para la Naturaleza (JPN); Red Costarricense de Reservas Naturales; Asociación de Voluntarios de Investigación y Desarrollo Ambiental (VIDA); Fundación Arqueológica de los Sitios de Moravia (FALSM)
Ecología crítica	Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON); Comunidades Ecológicas la Ceiba (COECO Ceiba); Oilwatch, Asociación de Ecología Social(AES)
Ambientalismo estatal	Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales (COVIRENA); Comisiones Ambientales de las Municipalidades
Organizaciones indígenas y agrarias vinculadas con el medioambiente	Asociación Coordinadora Indígena Campesina de Agroforestería Comunitaria (ACICAFOC); Mesa Campesina; Mesa Indígena; Comité Cívico de Cañas

Tipo	Organizaciones
Ambientalismo comunitario	Asociación para el Bienestar Ambiental del Sarapiquí, (ABAS); Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ); Asociación Ramonense para la Protección del Ambiente (ARCA); Asociación Ecológica Paquera, Lepanto, Cóbano (ASEPALECO); Cerro Las Vueltas; Asociación de Proyectos Alternativos para el Desarrollo Social (PROAL); Asociación Ambientalista Shurakma; Asociación Desamparedeña para el Desarrollo Sustentable (ADES); Asociación Ecologista de Guatuso y Patarrá, Confraternidad Guanacasteca; Fundación Madre Selva.

Fuente: Elaboración propia.

ORGANIZACIONES CAMPESINAS E INDÍGENAS ORIENTADAS AL MEDIO AMBIENTE

Las organizaciones campesinas e indígenas orientadas al medio ambiente tienen como principal actividad los reclamos socioeconómicos y culturales de las poblaciones rurales y nativas, pero que en los últimos años han incorporado demandas ambientales, tanto para la conservación como para el control del acceso a los recursos naturales por parte de sectores indígenas y campesinos. Algunas de estas organizaciones a menudo abogan por cuestiones sociales y ambientales.

AMBIENTALISMO COMUNITARIO

Este ambientalismo tiene una base social comunal. Esta base puede estar situada en comunidades indígenas, urbanas, semiurbanas y rurales y/o agrarias. Las acciones de los adherentes al ambientalismo comunitario están motivadas por los problemas ambientales locales, pero su discurso y sus actividades están relativamente libres de consideraciones ideológicas. No obstante, el tipo de acciones socioambientales que llevan a cabo por lo general implican cierta justificación "ideológico-ambiental", aunque estos fundamentos ideológicos no son estructuras conceptuales consolidadas como es el caso de los cuatro tipos de ambientalismo descritos con antelación. Dada esta tipología, queremos caracterizar una muestra de las principales organizaciones ambientales costarricenses (ver Cuadro 18.1). Uno de los criterios para seleccionar estas organizaciones ha sido su afiliación a la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (conocida como FECON), en la instancia de tercer grado más reconocida, al menos en el momento que se realizó esta investigación, con respecto a la conservación o a las iniciativas y las luchas ambientales. De hecho, no hay otra federación de organizaciones con esta relevancia en el movimiento ambiental costarricense. El segundo criterio se basa en mi conocimiento personal, es decir, las orga-

nizaciones que sé que se ocupan del medio ambiente por trabajos de campo anteriores.

Con esta tipología, estamos bien situados para proporcionar un mapeo general de eventos, acciones y luchas ambientales en Costa Rica.

LUCHAS Y EXPRESIONES AMBIENTALES

MARCO HISTÓRICO DE LAS LUCHAS AMBIENTALES DE COSTA RICA

Los estudios ambientales que tienen un enfoque de "participación popular" han tratado de relacionar estrechamente las diferentes etapas de desarrollo económico-social del país con los métodos de producción específicos utilizados en la explotación de la naturaleza. Es decir, un determinado tipo de producción económica se ha relacionado con una cierta forma de uso de la naturaleza. Por consiguiente, a su vez, las luchas ambientales están directamente relacionadas, con esas fases del llamado desarrollo económico y social. Es decir, las expresiones sociopolíticas han sido el resultado de cada etapa de producción económica, ya sea como propuestas conservacionistas en el campo de la "gestión sostenible", o como denuncias y oposición radical. Los estudios de Fournier (1991) y Fallas (1992) han desarrollado marcos cronológicos socioeconómicos, cada uno relacionado con las luchas o los procesos ambientales específicos. En el caso de Fournier (1991), su marco describe cinco etapas: pre Colonial; Colonial hasta 1845, 1845-1927, 1927-1957; y desde 1957 hasta el presente (el estudio abarca hasta 1991). En cuanto al medio ambiente, para Fournier, a medida que Costa Rica evolucionaba históricamente las condiciones ambientales se deterioraban progresivamente. El principal indicador expuesto por el autor es la tasa de deforestación. En 1903 la deforestación fue del 13,5% del territorio nacional, pero en 1984 abarcó el 67,8% del terreno y continúa aumentando hasta hoy. Fournier (1991) sostiene que los orígenes del movimiento conservacionista se encuentran en las propias comunidades indígenas, que, según dice, vivían en la abundancia y en una relación armónica con la naturaleza.

Fournier considera que la creación de legislaciones ambientales surge temprano en historia de la nación. Desde el comienzo de la República, se aprobaron algunas leyes reguladoras, como la veda de la caza de ciervos que data de 1845. El desarrollo sistemático de leyes relacionadas con el medio ambiente resultó ser una característica constante en la historia legal costarricense que se intensificó a finales del siglo XX (1957-1991), cuando el desarrollo de la legislación se volvió prolífico. Asimismo, se dio importancia a las instituciones educativas, que durante varias décadas han desempeñado un papel significativo

en reeducar a las nuevas generaciones sobre recursos naturales y medio ambiente.

Algunas de las instituciones educativas que el autor destaca son: la Escuela Nacional de Agricultura, fundada en 1926, y la Universidad de Costa Rica, fundada en 1940, que con el tiempo transformó a la Escuela Nacional de Agricultura en su Facultad de Agronomía. La última institución educativa creada fue la Escuela de Estudios Generales en la Universidad de Costa Rica (1957). Fue un hito educativo porque se convirtió en un espacio influyente, donde las nuevas generaciones de jóvenes eran educadas en valores humanísticos renovados en el campo sociocultural y conservacionismo en el campo ambiental. Por lo tanto, el marco cronológico de Fournier en cierta forma está determinado por estos avances institucionales. Específicamente, la fundación histórica de cada una de estas instituciones educativas, a las que considera fundamental en la educación "ambiental" de varias generaciones costarricenses.

Se puede decir que la concepción de Fournier del "movimiento de conservación costarricense" está estrechamente relacionada con el "progresismo" del Estado, especialmente en lo que respecta a su capacidad reguladora. También está muy relacionada con la labor de las instituciones educativas, en especial la Universidad de Costa Rica. El marco ofrece una concepción muy amplia del movimiento ambiental, y lo relaciona estrechamente a la actividad institucional. Se puede decir que, para este autor, el movimiento se expresa a través del Estado. En la enumeración de Fournier, los movimientos sociales autónomos no son muy visibles.

Fallas (1992), como Fournier, ubica al conservacionismo y al ecologismo en las culturas indígenas. Pero sus enfoques difieren. En primer lugar, para Fallas, el desastre ecológico comienza en 1492 con la conquista española de América. El marco cronológico de este autor también es diferente. Para Fallas, hay una primera etapa que comienza con la colonización y termina con la constitución de la República. El autor denomina a esta etapa "del ecologismo indígena al caos ambiental". La segunda etapa se denomina hegemonía liberal y va desde 1821 hasta 1930. La tercera etapa se relaciona con el auge del nuevo modelo y abarca de 1948 a 1978. La última etapa refiere a la intensificación del modelo de exportación (actualmente denominada etapa de la globalización). El paso del tiempo y los nuevos modelos de producción económica se han traducido en una explotación mayor y más intensa de la naturaleza. Esta sobreexplotación de la naturaleza se ha desarrollado al mismo ritmo que la sobreexplotación del trabajo humano. Así, el modo de producción es el que determina el modelo de explotación de la naturaleza.

Fallas es pionero al considerar que los movimientos sociales juegan un papel central en la evolución de la conciencia ambiental. Destaca los procesos del movimiento social a través del desarrollo de actividades relacionadas con el medio ambiente. Según Fallas, la ciudadanía ambiental se creó a sí misma. De las clases medias y trabajadoras que surgiría la principal fuerza sociopolítica relacionada con la conservación. Para este autor, en el año 1970 con las luchas contra ALCOA[5] se inició un período de incremento de las luchas sociales (no solo de naturaleza ambiental), en las que estuvo presente una corriente conservacionista en muchas actividades socioambientales. Además, a principios de 1983, hubo un nuevo recrudecimiento de las luchas ambientales en los espacios locales, que resultó en la expansión y profundización del movimiento.

LUCHAS Y EVENTOS AMBIENTALES DURANTE 1970-2000

Parece apropiado ubicar el comienzo del movimiento ambientalista costarricense moderno en la lucha contra ALCOA en 1970. La literatura existente sugiere que antes de 1970 hubo antecedentes legislativos y educativos que ya mostraban cierta preocupación por la protección del medio ambiente. Pero es en la lucha contra ALCOA que un movimiento social de amplio alcance abrazó la causa ambiental. Este movimiento era independiente del Estado; incluso estaba contra él. Los participantes se opusieron con vehemencia a un contrato que fue considerado perjudicial para la soberanía del país y el medio ambiente, esto es la explotación de a bauxita en la región de Pérez Zeledón. No ha habido ningún registro sistemático de las luchas ambientales desde 1970. Para nuestros propósitos, se utilizan fuentes secundarias para intentar hacer una lista de las luchas más significativas desde ese año. Es importante tener en cuenta que los datos recogidos se centran en las luchas más relevantes, es decir, aquellas que han sido documentadas, principalmente por la prensa escrita.

Hubo algunas luchas locales que tuvieron repercusión nacional. Estas expresiones locales pueden dividirse en dos etapas principales de las luchas socioambientales. La primera es el caso de ALCOA. La

5 ALCOA era una empresa transnacional de aluminio (Aluminum Company of America). En abril de 1970 comenzó una fuerte oposición civil a ALCOA. Esto implicó la enérgica participación de los movimientos estudiantiles, especialmente de la Universidad de Costa Rica, apoyados por miles de estudiantes secundarios. Los argumentos contra ALCOA ya incluían cuestiones medioambientales, combinadas con asuntos políticos, ejemplificadas por la crítica al daño inminente a la soberanía política. Alvarado (2001) ofrece una descripción muy vívida de los acontecimientos. Para una perspectiva contracultural, el artículo "Alcoa, los artificios de la calle o de cuán densa puede ser la irrealidad" de Jiménez (2000) es muy útil.

segunda comprende la lucha conocida como "Combo ICE" (Instituto Costarricense de Electricidad). El "Combo ICE" tuvo lugar entre marzo y abril de 2000 y fue una gran lucha social contra un paquete de leyes que aspiraba a implementar la "apertura" (privatización gradual) del ICE (telecomunicaciones y energía eléctrica). La principal preocupación de esta lucha fue evitar la privatización de la institución, pero está claro que hubo preocupaciones y demandas ambientales subyacentes. Si la ley hubiera sido aprobada, habría dado lugar a más iniciativas privadas para la generación de electricidad, que finalmente se habrían traducido en un interés generalizado en la construcción de represas privadas. Tal tensión se mantiene hasta el presente; marzo del 2017.

Entre estas dos grandes luchas sociales históricas (ambas con un fuerte componente ambiental), hubo otros conflictos ambientales, también fuertes y masivos, que tuvieron un enfoque local pero al mismo tiempo con impacto nacional. En los años 70 hubo al menos cinco grandes conflictos ambientales locales. Tal vez, los conflictos más importantes fueron las luchas contra el oleoducto impulsadas por ASCONA (Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza) en 1974. Posteriormente, en 1983, hubo otro episodio importante de oposición al oleoducto. En esta renovada ronda de movilización ambiental se formó un Comité, denominado Comité Nacional de Lucha contra el Oleoducto.

Según Fallas (1992), a partir de 1983 hubo un crecimiento en los movimientos sociales ambientales. Es un momento decisivo para estos movimientos. Como sostiene Fallas (1992: 87): "No es sino hasta finales de los años 80 que podemos, realmente, hablar de luchas ecológicas y conservacionistas como un nuevo movimiento social". En los años 90 hubo varias luchas ambientales locales masivas y nuevas campañas que tuvieron relevancia nacional. Este sería el comienzo de amplias coaliciones sociopolíticas que se movilizaron en campañas de largo plazo. Hay varios ejemplos de tales casos (Horton, 2007). A principios de los 90, específicamente durante 1993 y 1994, fue la campaña contra *Stone Container* (un proyecto que buscaba cultivar y producir 24 mil acres de gmelina en la parte sur del país[6]). A mediados de los 90, específicamente durante 1994-1998, tuvo lugar otra

6 Según Baldotano y Rojas, esta campaña tuvo dos grandes logros: "Evitó el enclave, porque estaba claro que no tuvo suficiente planificación, que no se basaba en la realidad y que estaba lejos de las perspectivas sociales locales, y que tendría efectos negativos en las comunidades locales y el medio ambiente". Además, esta campaña facilitó y atrajo la atención de diferentes sectores sociales, que empezaron a reflexionar sobre los modelos de desarrollo, la sustentabilidad y el derecho de las comunidades a planificar y controlar sus recursos y definir su futuro (Baldotano y Rojas, 2005: 11).

campaña notable: la lucha contra la minería a cielo abierto. Las campañas contra la minería fueron una batalla constante y creciente, que aunaron muchos esfuerzos sociopolíticos contra la exploración y la explotación aurífera en las ciudades de Cutris y Pocosol en San Carlos, y que continuaron hasta finales de los años 2000.[7] El problema de la potencial explotación minera dio lugar a otra campaña importante en Bellavista de Miramar, en la provincia de Puntarenas. Por último, hubo una campaña en defensa de los bosques en la península de Osa.[8] En suma, el estilo de coalición de las campañas, su trascendencia nacional en la opinión pública más allá de la cobertura de los medios de comunicaciones locales,[9] el crecimiento de la organización coordinada a nivel nacional y la unificación serían las características que se observarían en las nuevas campañas ambientales a principios del siglo XXI. El Cuadro 18.1 traza la trayectoria del movimiento ambiental entre 1970 y 2000.

En resumen, entre 1970 y 2000 hubo dos grandes luchas que tuvieron un componente ambiental, más pronunciado estos son; el caso de la lucha contra ALCOA y el llamado Combo del ICE. Entre estos dos hitos hubo importantes luchas locales que tuvieron impacto nacional. Por su parte debe destacarse que a partir de mediados de los 80, hubo una generalización y expansión del movimiento ambiental hacia espacios locales (esto no ha sido sistemática o totalmente documentado). A partir de los 90 hubo campañas ambientales más duraderas (entre 2 y 4 años) en las que se reunieron diversas coaliciones socio-ideológicas.

¿QUÉ HA SUCEDIDO DESPUÉS DEL *COMBO*?

El objetivo principal de este capítulo es ofrecer una visión actualizada del movimiento ambiental costarricense, tomando como punto de partida de la lucha contra la privatización del ICE. Esta lucha social ha tenido mayor impacto y duración que cualquier otra campaña de protesta en las últimas tres décadas, hasta la campaña contra el TLC

---

7 El análisis de esta campaña ambiental fue brillantemente descrito y analizado en la tesis de licenciatura de Rafael Cartagena Cruz en su obra "El público vs Placer Dome. Comunicación y Conflicto Ambiental en el Espacio Público. Tesis de Comunicación con énfasis en Relaciones Públicas", Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 2000. Las otras fuentes son Isla (2002) y Torres (2000b).

8 Esta campaña se describirá con más detalle en la siguiente sección dado que, cronológicamente, se ubica en el ámbito de análisis de este trabajo de investigación: el año 2000.

9 Un ejemplo de este tipo de participación comunitaria es la lucha por El Molino en la ciudad de Guápiles, contra la contaminación del río El Molino causada por una empresa llamada MUNDIMAR.

en 2007 (Almeida, 2014).[10] La campaña del ICE es especialmente relevante porque, como se mencionó anteriormente, también incorporó demandas ambientales. Para ofrecer esta información actualizada, tomamos la tipología organizacional que se presentó en el Cuadro 18.1. Para cada tipo de organización identificamos, como mínimo, dos informantes clave a entrevistar.

En el Apéndice 1 (Cuadro 18.2, se proporciona una lista con los nombres y roles de los sujetos. En ese caso, el objetivo principal de las entrevistas fue obtener relatos detallados de los eventos, acciones y movimientos ambientales más significativos que tuvieron lugar entre 2000 y 2005, y que forman las perspectivas de los líderes activistas ambientalistas. Lo que sigue son los resultados de estas entrevistas. En el caso de los entrevistados que se identifican como conservacionistas, la primera campaña a largo plazo mencionada implica la defensa de los bosques de la península de Osa. Esta campaña se puede poner a la par de las otras tres de los años 90 mencionadas con anterioridad (*Stone Container* y los dos casos contra la minería a cielo abierto en San Carlos). Por lo tanto, se realizaron cuatro campañas a largo plazo en una década. En el caso de ARBOFILIA, los participantes mencionaron una política forestal alternativa, una propuesta diseñada para regenerar el suelo. En el caso del Centro Científico Tropical (CCT), los entrevistados mencionaron un proceso de cabildeo para que los derechos ambientales se incorporen en la Constitución del país.

El entrevistado de FECON, Isaac Rojas, prefirió dar su versión basándose en cinco luchas principales:

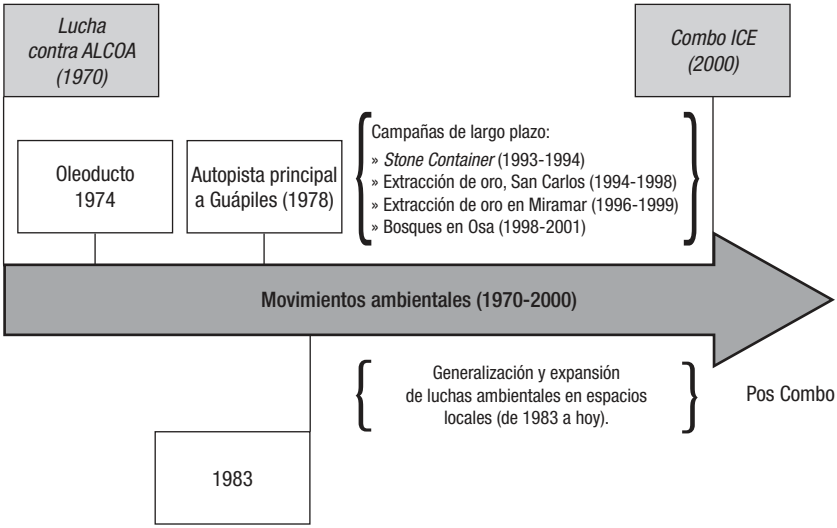
» *La lucha por la energía*
» *La lucha por el agua*
» *Luchas relacionadas con la gestión turística*
» *La lucha en favor de los bosques*
» *La lucha contra el TLC*

En relación a la electricidad/energía, Rojas primero mencionó las luchas contra las políticas, las represas y los proyectos de cogeneración eléctrica. En términos generales, este líder ambientalista cuestionó el modelo de producción de energía (entrevista, 20 de enero de 2006).

Uno de los casos más conocidos y mejor documentados es el del conflicto por la represa del Río Pacuare, en la provincia de Cartago (al sudeste de la zona montañosa central de Costa Rica). Durán

10 En la lucha contra el TLC, que culminó con el referendo de octubre del 2007, el movimiento ambientalista tuvo una participación muy destacada, mostrando características similares a la lucha contra el combo del ICE.

Gráfica 18.1
Trayectoria del movimiento ambiental costarricense, 1970-2000



Fuente: Elaboración propia.

y Guido (2002) informan que, aparte de las inundaciones de tierras también causarían "la falta de comunicación y aislamiento de las comunidades indígenas que dependen de la venta y el intercambio de sus productos agrícolas para su supervivencia". Sin embargo, el proyecto de construcción de esa represa fue eliminado por un plebiscito que tuvo lugar en Turrialba, el 28 de agosto de 2005. El plebiscito fue organizado por el municipio local y, además, descartó la posibilidad de otros proyectos hidroeléctricos en el Río Pacuare. El plebiscito reveló un 96% en rechazo a la construcción de la represa. Su lema hacía referencia a preservar el río como un santuario natural.

El uso de plebiscitos ha sido un mecanismo de presión constante para hacer frente a las cuestiones ambientales, en especial contra la construcción de represas. Un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) informa que durante el período 1998-2001 hubo cuatro plebiscitos, dos de los cuales tienen que ver con cuestiones ambientales. En el caso de Guácimo, que tuvo lugar el 28 de octubre de 2001, el resultado respaldó al municipio para prohibir las actividades lucrativas de la explotación de las áreas del acuífero. La participación civil en el referéndum fue del 27% de los votantes registrados; un total de 17.288. El 97,3% votó en contra de la

concesión de permisos para las actividades de toda empresa privada alrededor del acuífero (el 2,3% votó a favor y el 0,4% anuló su voto" (PNUD, 2002). La estructura organizacional de oposición local era muy amplia. Entre los participantes que organizaron el referéndum estaban: la organización "Agua" de Guácimo, la comunidad de Jiménez, el Foro Emaús, el Consejo Nacional de Trabajadores Bananeros (CONATRAB) y la Municipalidad de Pococí. No hubo un liderazgo unificado, sino que fue un "proceso participativo" descentralizado.[11]

En Sarapiquí se llevó a cabo otro plebiscito, el 24 de septiembre de 2000. En este caso el electorado estaba formado por 17.432 ciudadanos locales y se presentó a votar el 13% del padrón. Este plebiscito tenía como objetivo proteger la cuenca del río Sarapiquí y declararlo patrimonio histórico natural (Salas, 2000). Esta iniciativa surgió de la comunidad y de diferentes organizaciones como respuesta a los daños causados a la cuenca del Sarapiquí por el "uso" de la hidroeléctrica (Salas, 2000).

El caso presentado por la Asociación de Ecología Social (AES), que aquí ha sido clasificado aquí como de la corriente de ecología crítica. La cuestión más importante durante este período fue la explotación de petróleo, que derivó en el desarrollo de una campaña entre 2000 y 2003. Esta fue la quinta campaña ambiental en esa década. Como en el caso de muchas de las campañas anteriores, dio lugar a una importante agrupación sociopolítica entre las comunidades, empresarios (especialmente los de turismo), organizaciones ecologistas, organizaciones comunitarias locales, los municipios y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). A finales de 1999, los líderes de la comunidad indígena en Talamanca convocaron a una reunión local para formar una red para oponerse a la decisión del Gobierno de aprobar la explotación de petróleo en el Caribe costarricense. A esta reunión asistieron 37 organizaciones nacionales y comunitarias y representantes locales de varias instituciones públicas (PNUD, 2002: 248). Este encuentro público dio lugar a la creación de la Coordinadora Antipetrolera de Talamanca (Acción de Lucha Antipetrolera, ADELA). En septiembre de 2000, la Corte Constitucional declaró la nulidad de la primera concesión basándose en la falta de consulta previa a las comunidades indígenas locales. La Comisión Técnica de la SETENA, en una decisión de finales de 2001, recomendó la aprobación de un estudio de impacto ambiental (EIA). A principios de 2002, ADELA buscó denodadamente más criterios técnicos para refutar la decisión. En febrero de 2002, el plenario de la Junta de la SETENA

11 Información proporcionada por Orlando Barrantes, Secretario General de CONATRAB, una de las organizaciones participantes.

rechazó por unanimidad el EIA para el proyecto de explotación de petróleo. En abril, la Municipalidad de Talamanca declaró una moratoria sobre el petróleo en esta ciudad. El MINAE inició el proceso administrativo para rescindir el contrato ya que no fue presentado ningún EIA nuevo (PNUD, 2005).

Por otro lado, los entrevistados del "ambientalismo de origen estatal" mencionaron otros tipos de actividades, diferentes de las luchas y campañas. El entrevistado de FUPROVIRENA, Guillermo Esquivel, mencionó dos casos de gestión ambiental local. Primero, el interés cada vez mayor de los municipios en proteger sus cuencas locales. Segundo, hubo un caso en que los agricultores se interesaron mucho por las cuestiones del mejoramiento ambiental. Estos agricultores residían en las inmediaciones del Parque Nacional Braulio Carrillo, entre las provincias de San José y Limón. Con respecto a las comisiones ambientales municipales, María Elena Saborío destacó la celebración del día y la semana del medio ambiente. El municipio organizó un concurso de pintura infantil para crear conciencia en la comunidad sobe las cuestiones ambientales (Municipalidad de Vázquez de Coronado, ubicada a 10 km al noroeste del centro de San José).

Las organizaciones agrícolas e indígenas que trabajan en temas ambientales hicieron *lobby*, con respecto a las políticas y la gestión de recursos, para consultar a las organizaciones creadas en virtud de la legislación ambiental vigente. Acerca de la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana (ACICAFOC), su director, Alberto Chinchilla, enfatizó el proceso de negociación para la legislación de la agricultura orgánica y en cómo favorecer a las comunidades indígenas para obtener pagos por servicios ambientales mediante la implementación de prácticas de agricultura sostenible. La Mesa Campesina participó en organizaciones tales como el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) y la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad. Según Hilda Mora, Presidenta de esa organización, la representación en aquellas organizaciones les permitió tener parte en las políticas, y asistió a la Mesa Campesina para acceder a recursos económicos, como el pago por servicios ambientales.

En cuanto a la ecología comunitaria, el representante de la Confraternidad Guanacasteca mencionó un evento que ha tenido trascendencia nacional: la lucha por el acceso al agua en las comunidades costeras que rodean el Golfo de Papagayo, donde los grandes *resorts* con campos de golf necesitan cantidades de agua extraordinarias y son una amenaza para las comunidades locales y sus suministros de agua potable necesaria para su subsistencia (como el caso de la comunidad de Sardinal en 2008). Otro ejemplo es la lucha para conser-

var el acceso público a las playas. Este derecho ha sido amenazado por los *resorts* y complejos turísticos a gran escala que prohíben la entrada de la población local a la playa que circunda sus propiedades. Con respecto al acceso a las playas en 2004 hubo una nueva controversia, cuando varias organizaciones sociales y ambientales enfrentaron a las autoridades del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) que prohibieron acampar en las playas. Entonces, dos organizaciones (la Asociación Confraternidad Guanacasteca y la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente) declararon públicamente que el ICT "estaba discriminando a los turistas locales de Costa Rica, quienes acampan y no pagan por alojamiento, y a aquellos que no compran cosas, que no pagan" (*La Prensa*, Panamá, 2004, consultado el 02,11,2005).

Más recientemente, en 2006-2014, sobresalen tres grandes luchas ambientales con resultados relativamente exitosos, que han participado en conflictos contra los megaproyectos promovidos por el Estado y las elites económicas neoliberales. Cada lucha tuvo dinámicas y estrategias de organización particulares. Por ahora, sin embargo, estas son victorias a corto plazo ya que estos proyectos pueden volver en otra forma en el futuro. Estos nuevos conflictos ambientales incluyen: la lucha por la defensa del agua en la comunidad de Sardinal; la lucha colectiva contra la minería a cielo abierto en Crucitas en el norte del país; y la lucha contra el proyecto de la represa hidroeléctrica Diquís.

La lucha de la pequeña comunidad de Sardinal, Guanacaste tuvo lugar entre 2008 y 2010. Un consorcio de inversores de turismo en una localidad cercana, la famosa zona turística de Playas del Coco, intentó encauzar el agua desde la comunidad trabajadora de Sardinal al complejo turístico, sito a 8 km camino abajo. La comunidad de Sardinal resistió la incursión y recibió el apoyo de los sindicatos del sector público (la Asociación Nacional de Empleados Públicos, ANEP), de las agrupaciones estudiantiles y de los ambientalistas. En mayo de 2010, el Tribunal Constitucional ordenó el cese de la construcción de infraestructura para extraer suministro de agua de las capas subterráneas de la comunidad. El pueblo de Sardinal celebró el fallo como un gran triunfo (Cordero, 2010: 177). [12]

Otra gran lucha ambiental irrumpió a causa de la minería a cielo abierto en una zona llamada Crucitas en Cutris, provincia de San Carlos. El movimiento estaba compuesto, en gran parte, por organizaciones estudiantiles y del medio ambiente. La batalla tuvo lugar

12 Hay un excelente estudio de esta lucha. Se trata de la tesis de licenciatura en Sociología, de José Arturo Silva Lucas. "El Movimiento Social por el Agua en Sardinal de Guanacaste" Tesis, UCR, 2016

entre 2008 y 2013. En 2011, la legislatura costarricense y el poder constitucional de la Corte Suprema de Justicia reformaron las leyes de minería y se prohibió la minería a cielo abierto. La empresa canadiense que invirtió en la mina (Industrias Infinito) continúa buscando una indemnización por la vía legal de $1,2 millardos presuntamente perdidos por haber sido suspendidas las obras de exploración de la mina. El movimiento percibió las acciones del Estado contra la mina de oro de Crucitas como una gran victoria ambiental (Chacón, 2013).

El movimiento contra el proyecto hidroeléctrico de la represa del Diquís es una de las campañas de mayor duración sostenidas en Costa Rica en los últimos años, desde 2003 hasta el presente; abril del 2017. El movimiento está liderado por la comunidad indígena de Térraba en el cantón de Buenos Aires en la provincia de Puntarenas. Este megaproyecto se fijó con un estimado de $2 mil millones ($250 millones ya invertidos) y está gestionado desde el año 2005 por el ICE. Una campaña liderada por los indígenas de Térraba en coalición con los ambientalistas y los estudiantes llevó al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, donde se ejerció la suficiente presión al Estado costarricense para suspender las operaciones del proyecto desde 2011. Aunque la maquinaria pesada usada en los intentos de represar el Río Térraba ha sido desmantelada por el ICE, la lucha aún no ha terminado. Un futuro gobierno puede intentar reiniciar la construcción de la central hidroeléctrica (para un estudio detallado de este caso, ver: Cordero Ulate, 2015).

LAS PREOCUPACIONES DE LOS INDÍGENAS Y SU RELACIÓN CON LA CONSERVACIÓN

Los datos disponibles sobre el tamaño de la población indígena en Costa Rica no son homogéneos. Mesa Indígena, una organización indígena nacional, registra ocho pueblos indígenas diferentes en Costa Rica, con un total de 39.264 personas (Mesa Indígena, 2000). Por otro lado, Tenorio (2002) releva una población indígena de 63.876, que significaría el 1,7% de la población total. En algunas provincias, el porcentaje es mayor. El más alto es Limón con 7,4%, seguido de Puntarenas con 7,3% (Tenorio, 2002: 9).

Las diferentes etnias indígenas locales incluyen a: bruncas, teribes, malekus, huetares, chorotegas, guaymies, bribris y cabécares. Cada una, a su vez, está dividida en territorios locales, lugares geográficos donde se viven las poblaciones indígenas, así como, obviamente se asientan sus cultivos y sus áreas de reserva natural, generalmente montañas. Algunos de estos territorios están reconocidos legalmente por una legislación especial, mientras que otros no están reconocidos legalmente, pero son considerados territorios indígenas

ya que, históricamente, las poblaciones indígenas se han concentrado allí. La extensión de los territorios indígenas comprende casi 325 mil hectáreas, un porcentaje relativamente alto si consideramos que esto significaría alrededor de 8,3 hectáreas hectáreas por persona y unas 41,4 hectáreas por familia, donde una familia promedio tiene cinco miembros. Sin embargo, en la realidad, los territorios están lejos de ser controlados por estas poblaciones. Algunos territorios están ocupados solo simbólicamente por los pueblos indígenas. Este es el caso de Guatuso, Quitirrisí y Zapatón (con solo una cuarta parte del territorio se ancuentra en posesión efectiva por parte de los pueblos indígenas). Boruca, Rey Curré, Térraba y Ujarrás poseen solo un tercio de sus respectivos territorios. Para Conte Burica, Coto Brus, Guaymí de Osa, Abrojo de Montezuma, Talamanca Bribri, Kekoldi, Talamanca Cabécar, Nairi Awari la propiedad está cerca de los dos tercios, que parece ser la proporción más común de territorio bajo control indígena.

El mayor problema que la población indígena enfrenta es la propiedad de la tierra. La tierra es la base de la supervivencia material de los pueblos originarios y, además, es la base material de su identidad cultural. A pesar de todas las leyes y decretos oficiales que estipulan que los territorios indígenas no pueden ser legalmente vendidas o transferidas a los no indígenas, dicha situación se encuentra muy lejos de la realidad. Los trabajadores agrícolas blancos o mestizos venden sus tierras porque son pobres. Luego migran a territorios indígenas. En las zonas turísticas que rodean a las comunidades indígenas, los agricultores que están cerca de la costa venden su tierra y pronto se encuentran sin tierra y sin dinero, así que tienen que migrar a las comunidades indígenas o hacia reservas naturales. Los proyectos de desarrollo, más exactamente extractivistas localizados en las inmediaciones de los territorios indígenas también se han traducido en conflictos sociales. En Talamanca, las comunidades indígenas participaron en la lucha contra la explotación de petróleo a través de la organización ADELA, y que expresó una campaña de lucha organizada durante 2000-2003 para rechazar la exploración y la explotación petrolera mencionadas anteriormente.[13]

Por otro lado, dada la creciente participación de las comunidades indígenas en el mercado nacional, ha habido un proceso de diferenciación social al interior de las propias comunidades. Las actividades

13 En otros países, como es el caso de Tela en Honduras, la expansión hotelera dio lugar a conflictos con la población garífuna. Combarieron contra un estilo de desarrollo turístico basado en el enclave, y además, por el modo en que los hoteles *resort* gestionan la basura que producen (Alvarado, 2008).

productivas rentables, o relativamente rentables, hacen que algunos pobladores indígenas adopten técnicas de producción foráneas con el fin de aumentar la productividad. Cuando estas actividades tienen éxito, acumulan algo de dinero que luego invierten en comprar tierras a los miembros menos afortunados de la comunidad. En esos casos, la operación es legal pues sí está permitido el comercio de tierras dentro de los pueblos indígenas. Este proceso resulta en la concentración de tierra dentro de la propia comunidad. Con respecto a los casos del Valle de Talamanca, Borge y Castillo (1997: 204) definen la propiedad de la tierra como un problema grave. En un estudio más reciente, Berger (2000) describe con detalle el proceso de venta de tierra en cada territorio indígena.

Las tierras indígenas son muy importantes para la conservación de la biodiversidad. A pesar de su explotación relativa (en algunos casos) por los modernos sistemas productivos, todavía quedan actividades productivas y culturales tradicionales que ponen más énfasis en la preservación de los ecosistemas. Como ya he mencionado en otra parte, en Talamanca hay una relación entre las mujeres indígenas y la biodiversidad: "hay sistemas productivos en Talamanca que de alguna manera representan un equilibrio entre mercado y cultura. Entre ellos, están lo que aquí hemos llamado 'la finca talamanqueña'. Por supuesto, cuanto mayor es la demanda el mercado, mayor es el riesgo de que estas fincas se concentren en uno o más productos rentables, como ha ocurrido en otras comunidades" (Cordero, 2002: 363). Las cuestiones ambientales, para las comunidades indígenas, hacen referencia a sus derechos a preservar sus propios territorios y recuperar los perdidos. Por otra parte, debido a sus prácticas culturales algunas comunidades indígenas quieren explotar los productos forestales en áreas protegidas, lo que causa problemas entre las autoridades ambientales y las comunidades.

Desde el 2011 hasta el presente, 2017, se asiste a una lucha social muy fuerte por parte de algunas comunidades indígenas, especialmente, Salitre, Térraba y Cabagra, por recuperar sus propias tierras que debido a los procesos antes descritos les habían sido usurpadas por parte de colonizadores blancos y mestizos. Este es uno de los movimientos sociales más significativos en la Costa Rica actual.

CONCLUSIÓN

Al ofrecer una visión general del desarrollo del movimiento ambientalista costarricense, el contexto económico y político es fundamental para comprender la evolución del movimiento. Aquí, el contexto está definido por la expansión de la globalización. Aunque la expansión de la globalización está provocando conflictos sociales y luchas

en muchos países, no hay ningún indicativo de que este proceso se esté revirtiendo. A pesar de la diversidad global de movimientos de resistencia ante la globalización, ésta persiste en su marcha. El proceso de la circulación internacional de mercancías continúa propagándose en un sistema de transnacionalización capitalista (Robinson, 2014), donde hasta los recursos naturales son organizados en la forma de circulación internacional de mercancías de origen natural. El TLC es el ejemplo más reciente de esta tendencia de liberalización internacional. Aparentemente las nuevas políticas proteccionistas de la administración Trump frenará el proceso de transnacionalización. Pero en un caso pequeño como es el costarricense, las consecuencias de estas nuevas políticas todavía no son todavía visibles. Comprender el contexto político-económico es importante para evaluar la situación y las perspectivas del movimiento ambientalista costarricense, ya que algunas de las luchas sociales más relevantes y recientes que tuvieron un componente ambiental fueron las luchas contra los ciertos impactos por parte de los procesos de globalización. Los tres conflictos sociales más importantes que tuvieron un signo ambiental, ALCOA en 1970, el llamado Combo ICE en el año 2000, y la lucha contra el TLC en todo el período 2004-2007 se centraron en los procesos de transnacionalización económica. En el primero, el intento de explotar la minería de bauxita en el Valle General por parte de una empresa transnacional de aluminio; en el segundo, el proceso de privatización de los servicios de electricidad significaba, ambientalmente hablando, el detrimento de los controles ambientales bajo la égida de los modelos de generación de electricidad privados. Y, la culminación de todo esto fue el propio TLC que significaba suavizar los controles ambientales y sobre todo facilitar la comercialización de los recursos naturales.

Entre estas grandes oleadas de lucha socio-ambiental hubo algunos procesos que también refieren a la circulación internacional de bienes y recursos naturales. Algunas de las luchas más relevantes son:

» Contra *Stone Container* (1993-1994)
» Contra la explotación minera de oro a cielo abierto en San Carlos (1994-1998)
» Contra la explotación minera de oro a cielo abierto en Miramar (1996-1999)
» Contra la explotación petrolera en Talamanca Caribe (2000-2003).

Por lo tanto, entre y después de grandes movimientos defensivos hubo otros tantos que parecen ser recreaciones de los más importantes En las tres grandes batallas de ALCOA, el Combo/ICE y la lucha contra

el TLC, la participación popular generalizada fue impresionante; e incluso tuvo repercusiones políticas. En las campañas mencionadas anteriormente, la participación fue más localizada y específica, pero esto ha sido compensado por su duración y su flexibilidad estratégica; por lo tanto, han sido etiquetadas como "campañas a largo plazo". Tanto en las luchas más grandes como en las campañas a largo plazo, los movimientos sociales han sido los ganadores; excepto en lo que se refiere al TLC, que como se sabe el referendo del 7 de octubre del 2007 fue ganado por los partidarios del "sí al TLC" por un estrecho margen y echando mano a todo tipo de miedos y presiones "democráticas", tales como amenazas de pérdida de empleos, presupuestos municipales, etc.. ALCOA no comenzó su explotación, *Stone* interrumpió su proyecto, uno de los proyectos de minería a cielo abierto no prosperó (San Carlos), la liberalización del ICE no fue aprobada[14], y las explotaciones petroleras no tuvieron lugar.[15] Pero, como afirmó el líder ambiental Isaac Rojas, los logros no son definitivos o de largo plazo. Los intereses parecen tener un comportamiento cíclico, que obliga a los movimientos sociales a empezar a trabajar juntos. Si tomamos en cuenta los esfuerzos de liberalización económica y las experiencias anteriores, entonces es probable que en los próximos años haya más conflictos, luchas y situaciones inestables y contradictorias constantes.

Otro tema que ha estado presente desde el período 1970-2000, pero que se ha vuelto más relevante a partir del año 2000, consiste en las luchas y actividades contra la construcción de represas hidroeléctricas. La participación local ha sido extensa y masiva, y se ha traducido en plebiscitos que favorecieron a los sectores en lucha. Esto refleja la tendencia del deseo de las poblaciones locales de controlar ampliamente los recursos naturales en sus territorios. Como parte de este fenómeno, la lucha por la protección y el control de los suministros locales de agua potable también se destaca. El llamado empoderamiento local a veces se opone a las políticas nacionales, como en el caso de la planificación hidroeléctrica. Más comunidades han mostrado interés en el control de sus propias fuentes de abastecimiento de agua potable. La Gráfica 18.2 ilustra el movimiento ambiental en el contexto político-económico cambiante de 1970 a 2005.

---

14 No obstante, la liberación paulatina del ICE sí fue aprobada en el marco del TLC. Los efectos de esta liberación ya son muy visibles en el 2017 con la proliferación de compañías telefónicas y una competencia feroz a la que se ve sometida la estatal ICE.

15 En el caso de la explotación minera en Puntarenas, está actualmente en efecto. La empresa minera ha desarrollado una campaña de relaciones públicas importante para frenar el descontento de la comunidad.

Como se expresó antes la lucha contra el proyecto Diquis en el río Térraba enfrentado valerosamente hasta el día de hoy por la comunidad indígena aledaña a este río es una de las luchas más sobresalientes en el contexto actual.

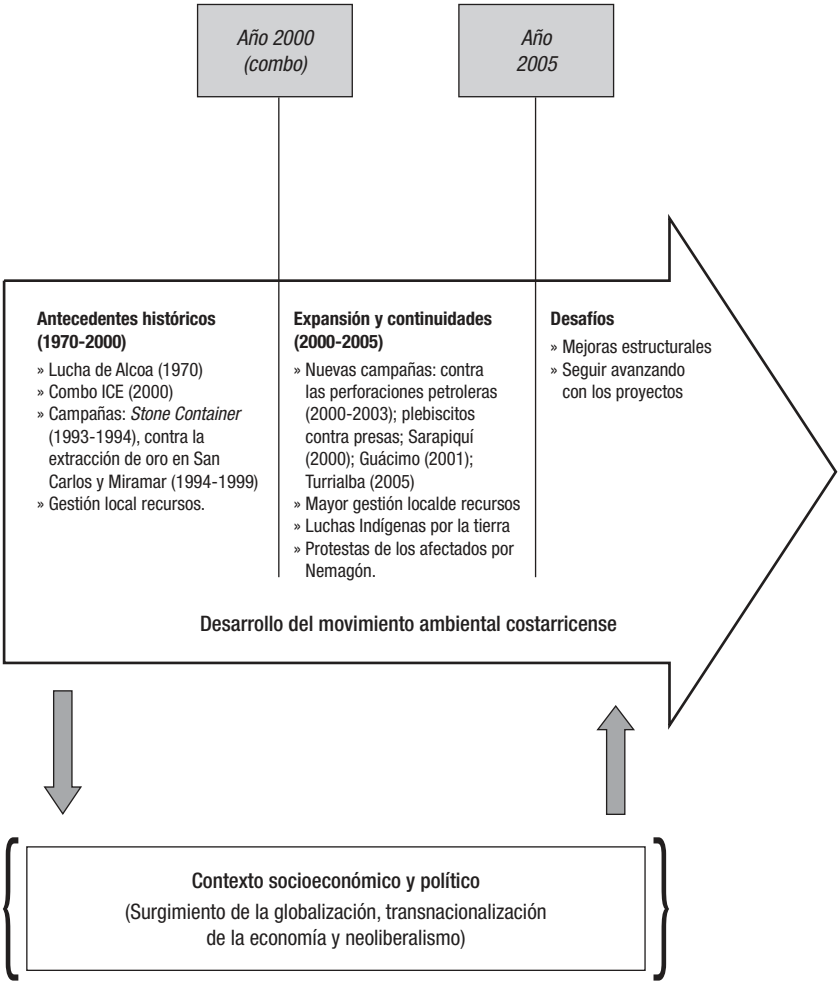
En otras palabras, si bien los resultados del referendo del 2007 fueron adversos para el movimiento popular, esto no parece haber frenado del todo, la emergencia de nuevas luchas socio-ambientales, en la forma de campañas de larga duración, como lo es justamente la del Diquis, la de Crucitas, la de Sardinal, entre otras.

En un sentido más amplio, la participación local se ha movido hacia la vigilancia, como es el caso de COVIRENA. Otros grupos se han movido hacia la gestión ambiental, la regeneración y las formas innovadoras para proteger los ecosistemas. Los otros campos explorados por las organizaciones ambientales son: la agricultura orgánica, la regeneración del bosque (mediante el uso de técnicas indígenas, como la silvicultura sostenible), la educación ambiental o las multifacéticas luchas contra la contaminación. Se podría decir que estos esfuerzos de participación popular son la base más amplia del movimiento ambiental. También lo es el movimiento indígena, debido a que su lucha por la tierra y sus tradiciones coincide parcialmente con los movimientos ambientales. Ya que en este caso, el acceso a los recursos naturales como los bosques implica protección. Asimismo, la participación de las comunidades indígenas ha sido importante en las campañas contra varias represas y contra las iniciativas de exploración petrolera. En el 2017 varias comunidades indígenas se encuentran en pie de lucha por la recuperación de sus propias tierras. Sobresale al respecto el caso de Salitre.

La contaminación ha sido menos relevante en las luchas ambientales, pero hubo algunas luchas locales contra la contaminación fluvial. La basura también ha sido importante en las luchas durante las últimas décadas, especialmente en el caso del vertedero de Río Azul. En cuanto a pesticidas, los afectados por el Nemagón llevaron a la construcción organizativa dede CONATRAB y se han convertido en un movimiento enérgico que ha condenado las prácticas agrícolas de las productoras transnacionales de banano. También han solicitado compensación e indemnización para los afectados.

Por lo que hemos visto hasta ahora es evidente que, en efecto, hay un movimiento ambientalista costarricense. Hay diferentes ideologías ambientalistas y al respecto se propuso una tipología compuesta por cinco tipos de perspectivas diferenciadas... También, utilizando el marco teórico de este estudio, se puede decir que si bien hubo actividades y luchas ambientales significativas al mismo tiempo el movimiento ambiental carece de un proyecto unificador; y si lo hay,

Gráfica 18.2
Panorama general del movimiento ambiental costarricense



está fragmentado, en otras palabras, no hay una visión compartida. El movimiento carece de la fuerza para hacer propuestas a nivel macro-social y macro-político. El proyecto ambientalista es complejo puesto que no es solo ambiental sino también socio político. Es hablar de una sociedad diferente.

Además, es necesario describir las características de este movimiento. No es un movimiento permanente; más bien es discontinuo. Al mismo tiempo se analizó la existencia de lo que llamamos campañas de larga duración, que se desarrollan a partir de problemas locales pero que al desplegarse socio-políticamente adquieren impacto nacional. Estas campañas se han colocado intermediando entre las grandes oleadas de carácter más significativo: ALCOA en los 70, "Combo del ICE" a principios del 2000 y lucha contra el TLC en el 2007.

Otra característica a resaltar es lo que desde la perspectiva de Touraine podría denominarse movimiento social de fundamentación cultural pues las propuestas de nuevos relacionamientos sociales con la naturaleza, es también un asunto de cambio cultural. Touraine, 1999).

Por otra parte, algunas de sus demandas y logros están en contra de la forma actual de desarrollo capitalista: la globalización neoliberal. En ese sentido la lectura del movimiento ambientalista puede ser marxista o neomarxista, De hecho este es el intento que hemos realizado al proponer una interpretación del desarrollo de dos luchas específicas, la de los afectados por el uso de agroquímicos (nemagón) en las plantaciones bananeras (Cordero Ulate A, 2009) y el trabajo antes indicado sobre la lucha contra el proyecto Diquís (Cordero Ulate A, 2015). La participación es mayormente popular, y sin este componente las campañas medioambientales no habrían sido tan eficaces. Definir al movimiento ambiental como poseedor de una base social sólida y posibilitar que esa base se apropie de la lucha parece ofrecer los principales desafíos que enfrenta la fase actual de la lucha ecológica en Costa Rica.

APÉNDICE 1

Cuadro 18.2
Entrevistados y organización o institución

Nombre	Institución u organización
Luis Diego Marín	Presidente de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS)
Miguel Soto	Presidente de la Asociación Protectora de Arboles Arbofilia (ARBOFILIA)
Alfonso Mata	Vicepresidente de la Centro Científico Tropical (CCT)
Isaac Rojas	Presidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)
Mauricio Álvarez	Presidente de la Asociación de Ecología Social(AES)
Guillermo Esquivel	Vicepresidente de la Fundación Vigilancia de los Recursos Naturales (FUPROVIRENA)

Nombre	Institución u organización
María Elena Saborío	Concejala de Coronado y miembro de su Comité Ambiental
Alberto Chinchilla	Director Ejecutivo de la Asociación Coordinadora Indígena Campesina de Agroforestería Comunitaria (ACICAFOC)
Hilda Mora	Presidenta de la Mesa Campesina
Gadi Amit	Ex Presidente de la Asociación Confraternidad Guanacasteca
Norma Boyd	Secretaria de la Junta de Directores de la Asociación Ecológica Paquera, Lepanto, Cóbano (ASEPALECO)

Fuente: Elaboración propia.

BIBLIOGRAFÍA

Almeida, P. 2014 *Mobilizing democracy: Globalization and citizen protest* (Johns Hopkins University Press Baltimore).

Alvarado, R. 2001 "Las Jornadas de Alcoa" en *Revista Herencia* (San José, Costa Rica) Vol. 12 N° 1-2; Vol. 13, ed. 1.

Alvarado, R. 2008 'Wasted Resources Governance Model for the region of Tela, Honduras', Ponencia (en formato Power Point) presentada en *XLV Colloque de l' Association de science régionale de langue Française*, Rimouski, Québec, Canadá.

Baltodano, J. y Rojas, I. 2005 "10 años de ecologismo tico: soñando y empujando" en *Ambientico Revista Mensual sobre la actualidad ambiental*, N° 136: 11-12, enero.

Berger, G. (coord.) 2000 "Perfil de los pueblos indígenas de Costa Rica. Informe final" (San José, Costa Rica: Documento).

Borge, C. y Castillo, R. 1997 *Cultura y conservación en la Talamanca Indígena* (San José: EUNED).

Chacón, V. 2013 "Fantasma de Crucitas aún ronda Costa Rica" en <http://www.movimientom4.org/2013/02/fantasma-de-crucitas-aun-ronda-costa-rica/> Acceso 13 de octubre de 2005.

Cordero, A. 2002 "Mujeres Talamanqueñas y Biodiversidad" en Dary, C. (coord.) *Género y Biodiversidad en comunidades indígenas de Centroamérica* (Guatemala: FLACSO-Guatemala).

Cordero Ulate, A. 2010 "Allá en Playas del Coco, donde el turismo no fue amor de temporada" en *Revista Intersedes* (UCR) Vol. XI, N° 22. Cordero Ulate A, 2009: "Nuevas desigualdades; nuevas resistencias. El caso de los ex – trabajadores bananeros costarricenses afectados por los agroquímicos" En: *Revista Centroamericana de Ciencias Sociales*, Vol. VI, No 2, San José, Costa Rica.

Cordero Ulate, A. 2015 "El movimiento social indígena en Térraba, Costa Rica: la lucha contra el Proyecto Diquís", En: Revista de Estudos AntiUtilitaristas e PosColoniais, *REALIS*, v.5, n. 02, Jul-Dez. 2015 – ISSN 2179-7501, Brasil. En: http://www.revista-realis.org/

Durán, O. y Guido, E. 2002 "Asesinato del río Pacuare en ciernes" en *Ambientico Revista Mensual sobre la actualidad ambiental* N° 111, diciembre.

Fallas, O. 1992 *Modelos de Desarrollo y Crisis Ambiental en Costa Rica* (San José: Asociación Ecologista Costarricense).

Fernández-González, A. 2003 "Evolución reciente del *environmentalism* en Costa Rica", Ponencia presentada en el marco del la *VI Conferencia Regional ISTRLAC*, San José, Costa Rica.

Fournier, L. 1991 *Desarrollo y Perspectivas del Movimiento Conservacionista Costarricense* (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica).

Horton, L. 2007 *Grassroots struggles for sustainability in Central America* (Boulder: University of Colorado Press).

Isla, A. 2002 "Forcejeo para mantener el agua limpia y el sustento diario: la minería canadiense en Costa Rica en la era del desarrollo sustentable/globalización" en *Revista de Ciencias Sociales* (San José: Universidad de Costa Rica) Año/Vol. III, N° 097: 137-147.

Jiménez, J. 2000 "Alcoa, los artificios de la calle o de cuán densa puede ser la irrealidad" en *Revista Herencia* (San José, Costa Rica) Vol. 11, N° 2; Vol. 12 N° 1 y 2.

La Prensa 2004 Polémica por acampar en playas de Costa Rica" en *La Prensa* (Panamá), 3 de abril. En <http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2004/04/03/hoy/negocios/1606327.html>.

Mesa Nacional Indígena 2000 "Atlas Indígena. Vulnerabilidad de los pueblos Indígenas en Costa Rica ante los fenómenos Naturales" (San José, Costa Rica: Documento).

Mora, E. 1998 *Naturaleza, quéherida mía* (Heredia: Ambientico Ediciones).

O'Connor, J. 1997 *Natural causes: Essays in ecological Marxism* (Nueva York: Guilford).

PNUD 2002 "Acciones colectivas de la sociedad civil hacia el fortalecimiento de la democracia 2001" en *Octavo Informe sobre el Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible sobre Democracia Local en el 2001*. En <http://www.estadonacion.

or.cr/info2002/nacion8/Po-fortalecimiento/Informe%20final%20acciones%20colectivas.pdf> acceso 22 de octubre de 2005.

PNUD 2005 *Informe sobre Desarrollo Humano 2005* (Madrid: Mundi Prensa Libros).

Robinson, W. 2014 *Global capitalism and the crisis of humanity* (Cambridge: Cambridge University Press).

Salas, B. 2000 "Plebiscito en Sarapiquí. Votantes aprobaron conservación del río" en *Boletín Remueve Recuperado*. En <http://semueve.netfirms.com/reportajes/plebiscito_sarapiqui.htm> acceso 18 de octubre de 2005.

Silva Lucas, A. 2016 "El Movimiento Social por el Agua en Sardinal de Guanacaste" Tesis, UCR, 2016

Taylor, V. 1989 'Social movement continuity: The women's movement in abeyance' en *American Sociological Review*, *54*(5):761-775.

Tenorio, L. 2002 "Situación de tenencia de la tierra en los territorios indígenas de Costa Rica" (San José, Costa Rica: Documento).

Torres, S. 2000a "Descripción del Proyecto Minero Bellavista, Montes de Oro, Puntarenas, Costa Rica" en *Frente Nacional de Oposición a la Minería de Oro a Cielo Abierto*. En <http://semueve.netfirms.com/arch_minas/mineria_links.htm> acceso 21 de octubre de 2005.

Torres, S. 2000b "Seguimiento de los expedientes del Proyecto Crucitas, San Carlos, Costa Rica. Actualizado al 28 de abril del 2000" en *Frente Nacional de Oposición a la Minería de Oro a Cielo Abierto*. En <http://semueve.netfirms.com/arch_minas/mineria_links.htm> acceso 21 de octubre de 2005.

Touraine, A. 1999 *¿Cómo salir del liberalismo?* (Barcelona: Paidós).

CÓMO CITAR ESTA PUBLICACIÓN:
Cordero Ulate, Allen. 2017. "Bosque, agua y lucha: Movimientos ambientalistas en Costa Rica" Pp. 447- 476 en Paul Almeida y Allen Cordero Ulate, Eds., *Movimientos Sociales en América Latina: Perspectivas, Tendencias y Casos*. Buenos Aires: CLACSO.

PARTE VI:
ESTUDIOS DE CASO POR PAÍSES

19

Moisés Arce*

PROTESTA Y MOVIMIENTOS SOCIALES EN PERÚ

En diciembre de 2008, un artículo de la revista *The Economist* caracterizó el ciclo actual de movilizaciones sociales en el Perú como "la política de las protestas que no cesan" (*The Economist,* 2008). Este ciclo de protestas colectivas, que empezó en el año 2000, ha despertado el interés de muchos investigadores dentro y fuera del país (por ejemplo, Arce, 2008; Bravo, 2009; Caballero y Cabrera, 2008; Meléndez y León, 2009; Pizarro et al., 2004; Tanaka y Vera, 2008; Tejada, 2009). Las protestas regionales como el "Arequipazo" de 2002 en la ciudad sureña de Arequipa en contra de la privatización de las compañías eléctricas de la ciudad, y el "Baguazo" de 2009 en la provincia norteña de Bagua en contra de la apertura de la región amazónica al desarrollo privado han tenido consecuencias en todo el país y resultaron en un cambio de políticas a favor a las demandas de los grupos damnificados. Junto a estas movilizaciones regionales también hay una gran diversidad de protestas contra las actividades extractivas, en particular las mineras, y protestas contra las autoridades electas y los resultados electorales. En su mayoría, estas protestas están espar-

* University of Missouri, Columbia, EEUU.

cidas geográficamente en todo el país y se centran en las demandas específicas de las poblaciones damnificadas.

El estudio de las protestas políticas forma parte de la amplia literatura de las ciencias sociales que examina otras formas de acción de masas, como las revoluciones y rebeliones. Recientemente, la clase de eventos que ocurre en las revoluciones, los movimientos sociales y las protestas han sido redefinidos simplemente como diferentes formas de "política contenciosa" (McAdam et al., 2001). Goldstone (1998) también ha redefinido el espectro de las movilizaciones sociales según su escala y extensión; esta escala pasa de las protestas a los movimientos sociales y a las revoluciones, donde las revoluciones representan el valor extremo de esta escala. Dado que las posibilidades de los desenlaces revolucionarios han menguado (con excepción, tal vez, de la Primavera Árabe de 2011) los investigadores de las políticas contenciosas se han enfocado en el análisis de las formas de resistencia cotidiana (Fox y Starn, 1997; Hellman, 1997), y en las nuevas formas de movilización que han surgido en el contexto de globalización y liberalización económica (Almeida, 2010). Este capítulo se centra en estas nuevas formas de acción colectiva y menos en los movimientos sociales, aunque se hará referencia a ambos cuando sea necesario.

En la primera parte de este capítulo reviso la literatura sobre política contenciosa con el objeto de entender mejor los factores que explican las protestas sociales. La segunda parte presenta y describe una nueva fuente de datos sobre la protesta en Perú. Como se explicará posteriormente, esta es la fuente de datos con mayor cobertura temporal y espacial sobre las protestas sociales que existe en el país. Utilizando esta base, concluyo este capítulo revisitando algunas de las explicaciones comunes que se han formulado sobre la efectiva ola de protestas en el Perú actual. El análisis revela la importancia de las condiciones políticas por sobre otros factores explicativos.

INTRODUCCIÓN

La agitación social y política que surgió en el Norte Global durante los años 60 y 70, generó dos grandes escuelas de pensamiento sobre el estudio de los movimientos sociales: la estadounidense y la europea. La escuela estadounidense, que por lo general es menos conocida en el Perú, entiende a los movimientos sociales desde la perspectiva del problema de la acción colectiva según lo planteado por la teoría de la elección racional (por ejemplo: Olson, 1965; Cohen, 1985). Siguiendo el cálculo estratégico que realizan los individuos racionales, considerando sus propios intereses (Olson, 1965), la decisión individual de participar en acciones colectivas representaba un gran obstáculo para explicar el surgimiento de los movimientos sociales. Este con-

junto de trabajos, también conocidos como teoría de la "movilización de recursos", prioriza el estudio de recursos, formales e informales, que posibilitan la coordinación social de la acción colectiva. La participación individual en un movimiento de protesta es vista como una acción estratégica, y sus acciones representan una alternativa a las formas más convencionales de participación política.

En contraste con la escuela estadounidense, los investigadores europeos dieron mayor importancia al análisis estructural de clase y de las identidades colectivas. Como escribe Touraine (1977: 312) "el análisis entero empieza con las relaciones sociales, y no con los actores" de manera tal que "la identidad del actor no puede ser definida independientemente del conflicto real con el enemigo o del reconocimiento del objetivo de la lucha" (Touraine, 1988: 49). Touraine distingue a los movimientos sociales de los años 60 y 70 como líneas de conflicto que caracterizaron la identidad colectiva de una sociedad postindustrial. Touraine argumentaba que cada sociedad tiene un conflicto central; sin embargo, otros autores lograron reconocer la pluralidad de conflictos dentro de una sociedad (por ejemplo, Melucci, 1989).[1]

En el contexto peruano, y como es sabido, la escuela europea ha tenido mayor recepción (por ejemplo: Lynch, 1990; Parodi, 1986; Ballón y Castillo, 1986; Adrianzén y Ballón, 1992). Parodi, por ejemplo, examina la desmovilización del sindicalismo industrial en Perú en las postrimerías del segundo gobierno de Belaúnde; mientras que Pezo et al. (1978) analizan la militancia en los sindicatos de maestros. En ambos casos, la identidad de clase jugó un rol importante en la movilización de estos sectores, aun cuando esa identidad no estaba necesariamente atada a la concepción marxista de conciencia de clase (ver Parodi, 1986).[2]

A pesar de que existen algunos estudios que tratan de combinar las contribuciones de las escuelas estadounidense y europea (por ejemplo: Cohen, 1985; Munck, 1995), la literatura sobre política contenciosa continúa fragmentada. En general, la pregunta de investigación justifica por qué un análisis sigue las contribuciones de una escuela y no de otra. Sobre este punto, Kitschelt (1986: 58) acota que el estudio de los movimientos sociales sobre la base de estas escuelas no es necesariamente inconsistente. En cambio, el énfasis en las estrategias es más útil para explicar la variación y el impacto de los

1 La literatura estadunidense, por lo general, rechaza la orientación hacia la identidad colectiva dado que el valor explicativo de este concepto "es evasivo" y "difícil de evaluar" (Elster, 1989: 468).

2 Para consultar la traducción al inglés de este libro, ver Parodi (2000).

movimientos sociales. En este capítulo, se optó por las contribuciones de la escuela estadounidense para explicar la variación temporal y espacial de las protestas sociales en Perú. Estas contribuciones se pueden resumir en base a los tres marcos analíticos siguientes.

OPORTUNIDADES POLÍTICAS, ESTRUCTURAS DE MOVILIZACIÓN Y MARCOS INTERPRETATIVOS

En la literatura de movimientos sociales hay tres marcos analíticos para el estudio de las movilizaciones: oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales. McAdam et al. (1996) señalan que estos tres enfoques analíticos son la mejor manera para estudiar cómo surgen y se desarrollan los movimientos sociales.[3] Estos autores sugieren que los movimientos sociales se originan como consecuencia de los cambios sociales que transforman el orden político existente, haciéndolo más accesible a las demandas del movimiento social. Cuando los movimientos sociales perciben esta apertura a sus demandas, estos cambios en las condiciones políticas se convierten, entonces, en oportunidades. Sin embargo, para que un movimiento social sea exitoso, los participantes del movimiento deben tener capacidad de organización y recursos disponibles para su causa. Finalmente, no es suficiente que estos actores sociales se sientan disminuidos, aun en el caso de estar convencidos de las ventajas de la acción colectiva *vis a vis* otras estrategias posibles. Estos actores deben desarrollar un marco interpretativo cultural para formular sus demandas, marco que debe ir más allá de los intereses específicos de los partidarios de un movimiento. Solo de esta manera el movimiento social podrá sobrevivir, atrayendo nuevos seguidores o partidarios, y luego triunfar políticamente. Resumiendo, estos tres enfoques analíticos son muy útiles para entender el origen y evolución de los movimientos sociales.

Las oportunidades políticas, según la literatura sobre políticas contenciosas, son las estructuras institucionales o las relaciones de poder informales dentro de un sistema político (por ejemplo: Eisinger, 1973; Brockett, 1991; Tarrow, 1998). Aunque hay consenso sobre la definición de las estructuras de oportunidades políticas, varios autores han examinado diferentes aspectos de estas estructuras institucionales o relaciones de poder informales. Siguiendo a McAdam (1996) y en un esfuerzo por organizar esta literatura, las cuatro dimensiones más importantes de estas oportunidades políticas son: a) la apertura relativa del sistema político institucionalizado; b) la estabilidad o

3 Para consultar la traducción al español de este libro, ver McAdam et al. (1999).

inestabilidad de las alianzas entre las élites; c) la presencia o ausencia de aliados entre las élites; y d) la capacidad y propensión del Estado a la represión.[4]

McAdam (1996) también ha observado que la pregunta de investigación perfila la importancia de unas de estas dimensiones respecto de otras. Por ejemplo, para estudiar la variación temporal y espacial de las protestas sociales, las dimensiones formales de las oportunidades políticas como la apertura relativa del sistema político y la capacidad y propensión del Estado a la represión serían las dimensiones más útiles a tener en cuenta (por ejemplo: McAdam, 1982; Tarrow, 1989). Por el contrario, las dimensiones informales de las oportunidades políticas como la estabilidad o inestabilidad de las alianzas entre las élites y la presencia o ausencia de aliados entre las élites tendrían mayor peso analítico, si la pregunta de investigación se enfoca en los resultados que estos movimientos sociales intentan obtener (por ejemplo: Banaszak, 1996; Giugni et al., 1998).

Una de las grandes contribuciones del enfoque sobre las estructura de las oportunidades políticas ha sido ayudarnos a entender cómo surgen y crecen los movimientos en presencia de condiciones políticas favorables (por ejemplo: Piven y Cloward, 1979). Dicho rápidamente, los sistemas políticos pluralistas son más abiertos y flexibles, y así, permiten que los movimientos acumulen poder y, posiblemente, alteren el orden político. Por consiguiente, las demandas de los movimientos sociales tienen una mayor probabilidad de éxito en presencia de un sistema político democrático y abierto. En América Latina, por ejemplo, la formación y la expansión de los movimientos indígenas han sido explicadas en términos de apertura política y de cambios en estructura de las oportunidades políticas (por ejemplo: Yashar, 1999; Van Cott, 2001). Por el contrario, la capacidad y la propensión del Estado a la represión debilita a los movimientos sociales, haciendo más difícil su supervivencia o su éxito político (por ejemplo, Della Porta, 1995). Otros autores han indicado que cuando las acciones de protesta de los movimientos sociales son violentas, usualmente, esas acciones invitan a una respuesta represiva de parte del Estado (por ejemplo: Moore, 2000). En otras palabras, la respuesta del Estado se suele ajustar a la naturaleza, violenta o no, de las primeras acciones de protesta de los movimientos sociales.

Por otro lado, el enfoque de las estructuras de la movilización indica que las redes sociales preexistentes proclives a la movilización

4 Meyer (2004) propone una revisión de de la literatura sobre oportunidades políticas. Para una crítica de este concepto –especialmente sobre su uso expansivo–, ver Goodwin y Jasper (2004).

son fundamentales para la organización y supervivencia de los movimientos sociales. Estas movilizaciones ayudan a fortalecer al movimiento, garantizando su permanencia y su posible éxito futuro. Varios autores subrayan la importancia de movilizar recursos humanos y económicos (por ejemplo: McCarthy Zald, 1997; Piven y Cloward, 1979; Cress y Snow, 2000). Asimismo, cuando se trata de grupos marginados que carecen de poder político, la colaboración de actores externos y otras organizaciones preexistentes son necesarias para una acción colectiva exitosa (por ejemplo: Jenkins y Perrow, 1977; Tilly, 1978). En el caso de algunas de las protestas anti mineras en el norte de Perú, por ejemplo, la participación de Oxfam y otras ONG ha sido primordial para la coordinación de la acción colectiva entre las comunidades ultrajadas y afectadas por la extracción de recursos minerales (Arce, 2008: 52-55; 2014).[5]

También cabe destacar que varios de los trabajos que se enfocan en los "recursos de la movilización" como concepto analítico central rechazan el énfasis dado a los reclamos para explicar la acción colectiva. La teoría de la "privación relativa" (Gurr, 1970; Davies, 1962) señala que la discrepancia entre las expectativas y las posibilidades de satisfacerlas genera ansiedad, frustración y furia, y esos sentimientos de indignación, por el contrario, pueden conducir a conductas violentas. Aunque ya está en desuso (Della Porta y Diani, 2006: 250; Brockett, 2005: 49), este enfoque tal vez sea uno de los marcos que más destacan la importancia del individuo como actor central en acciones.[6]

Finalmente, los marcos interpretativos culturales son construcciones sociales que actúan como filtros o "memos" para interpretar la realidad social existente. Estos filtros ayudan a los individuos a seleccionar elementos de su ambiente tanto presente como pasado (por ejemplo: Snow y Benford, 1988). La literatura también señala la necesidad de sincronizar el discurso del movimiento social con el sentimiento de la población en general. Si esta sincronización se produce, es más fácil que el movimiento social gane un gran número de simpatizantes y adherentes. Siguiendo a Zald (1996), la estrategia de desarrollar un marco cultural interpretativo efectivo demanda esfuerzos concretos para formular una visión colectiva de la realidad. Esta visión colectiva ayuda a legitimar y alentar la acción colectiva. En este sentido, algunos marcos interpretativos son más exitosos que otros para coordinar la acción colectiva o respaldar las causas

5 Respecto a las protestas contra de la extracción de recursos minerales, ver: Arce (2014); Scurrah (2008); Bebbington (2007); De Echave (2009), entre otros.

6 Brush (1996) ofrece una revisión de la teoría de la "privación relativa".

del movimiento social. Por ejemplo, los marcos interpretativos que logran vincular al movimiento social con temas de injusticia tienen mayores probabilidades de éxito, ergo, son más aceptados por la población en su conjunto.[7]

PROTESTAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES EN PERÚ

Habiendo revisado brevemente los tres enfoques analíticos principales de la literatura sobre política contenciosa –oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales– cabe hacer una aclaración con respecto a la naturaleza de las actividades de protestas en el Perú contemporáneo. Como varios autores han notado, y teniendo en cuenta la fragmentación de organizaciones sociales tradicionales como los partidos políticos y los sindicatos, la mayoría de las últimas protestas en el país son espontáneas y tienen demandas precisas. Por lo general, carecen de recursos de movilización en forma de organizaciones o redes. En efecto, muchos de los llamados Frentes Regionales o Frentes de Defensa que se forman alrededor de una protesta, simplemente se dispersan tan pronto las demandas de los manifestantes son resueltas o la política del gobierno cambia (Arce, 2008). El carácter efímero de estas protestas no puede reconciliarse fácilmente con los grandes objetivos de cambio o transformación social típicos de los movimientos sociales, como los movimientos indígenas, ecológicos o de derechos humanos. Sobre este punto, Touraine (1989) diría que no toda forma de protesta es sinónimo de un movimiento social, puesto que los movimientos sociales requieren una expresión organizativa o ideológica claramente definida.

Esta dicotomía entre movimientos sociales y protestas también se observa en otros estudios de América Latina. Por ejemplo, la transición democrática a fines de los 70 y principios de los 80 enfatizó el estudio de los movimientos sociales (por ejemplo: Ballón y Barrig, 1986). Estos movimientos sostenían estructuras internas democráticas y participativas, y su acción colectiva se orientaba hacia el cambio social. En contraste, la noción de protesta resalta el carácter fragmentario de la acción colectiva contemporánea, y toma en cuenta la segmentación geográfica así como la diversidad de demandas y expresiones en torno de las actividades de protesta. Dicho de otra forma, resalta el propósito político concreto y cortoplacista de las movilizaciones. En el caso del Perú, autores como Toche (2003: 136) consideran la

7 Degregori (1993, 1998) y Pajuelo (2009) representan ejemplos de este enfoque analítico para el caso peruano.

actual ola de protestas como un amplio movimiento social "agotado en la demanda inmediatista". Toche (2003: 136) además añade que estos movimientos de protesta "se han desarrollado un poco distantes de la política" en particular del tipo de instituciones, como los partidos políticos, que son característicos de una democracia representativa. Otros autores, como Pajuelo (2004) siguiendo a Touraine (1989), discrepan sobre equiparar la actual ola de protestas con la noción de movimientos sociales.

En este capítulo utilizo la terminología de movilización como término genérico que refiere tanto a los conflictos como a las protestas sociales. El término conflicto proviene de la Defensoría del Pueblo peruana y enfatiza en el tipo de lucha social (por ejemplo: conflictos ambientales, conflictos por asuntos del gobierno local, conflictos por cultivos ilegales), mientras que la terminología de protestas se enfoca más en el tipo de acción de protesta (por ejemplo: marchas, cortes de ruta, sentadas, tomas de inmuebles o de tierras). Así, un conflicto social, siguiendo la nomenclatura de la Defensoría del Pueblo, puede incluir varios tipos de acciones de protesta, lo cual resultaría en una cantidad menor de conflictos en comparación a la cantidad total de protestas. En último caso, y más allá de redefinir lo que se entiende por conflicto o protesta, es más importante explicar la variación sistemática espacial y temporal de estos eventos. Como se expondrá luego, explico la variación temporal de esas movilizaciones en relación a las dimensiones formales de las oportunidades políticas, en particular el relativo grado de apertura del sistema político.

LAS FUENTES DE LAS CIFRAS DE LA MOVILIZACIÓN EN PERÚ

En gran parte de la bibliografía donde se estudian los movimientos en Perú se utilizan los datos de la Defensoría del Pueblo como fuente primaria para estudiar la variación de los conflictos sociales (por ejemplo: Bravo, 2009; Caballero y Cabrera, 2008; Meléndez y León, 2009; Tanaka y Vera, 2008). Sin embargo, hay otras dos fuentes de información sobre las protestas en Perú. Una es la del Ministerio del Interior (MININTER) y la otra es la Base de Protestas Sociales del Perú (de aquí en más, Base de Protestas) compilada por el autor de este capítulo.[8] Como se detalla a continuación, tanto las cifras del MININTER como las de la Base de Protestas registran el hecho de protesta en sí; mientras que las cifras de la Defensoría del Pueblo agrupan los eventos basándose en un tipo de conflicto particular (por ejemplo: un

8 La construcción de esta base de datos contó con la financiación del Research Board y del Research Council Grants de la Universidad de Missouri en Estados Unidos.

conflicto ambiental con varias acciones de protesta, como marchas, cortes de ruta y sentadas). Concisamente, a continuación, presento una reseña sobre estas tres fuentes de datos.

De cobertura nacional, estas tres bases de datos proveen información sobre numerosas variables, como tipo de demandas (o reclamos); lugar, día y hora del evento de protesta; y ubicación geográfica. Sin embargo, dos de las limitaciones de las cifras del MININTER son la discontinuidad y el acceso a los datos. Tampoco hay mucha información disponible que explique cómo se recolectaron las cifras (aunque seguramente se presume que provienen de reportes policiales) o, en general, una explicación de los distintos tipos de acciones protesta.[9] Por ejemplo, en la página web del MININTER se pueden encontrar las cifras de los años 2006, 2007 (hasta setiembre), 2008 y 2009 (solamente para el mes de febrero). Las cifras para otros años, aunque sí existen, no son de fácil acceso.

En comparación con los datos del MININTER, como es ampliamente reconocido, las cifras de la Defensoría del Pueblo son muy accesibles y, al mismo tiempo, proveen información muy detallada sobre la evolución de los conflictos. La cobertura temporal de las series, que empieza en el mes de abril de 2004, acaso sea la limitación más grande de esta fuente de datos. Tampoco es posible proyectar esas cifras para años anteriores, pues el tipo de luchas sociales descritas para el periodo actual es muy diferente, en comparación, al tipo de luchas sociales de décadas anteriores. Además, el sesgo de orden y la supuesta motivación de "prevenir" los conflictos (la división administrativa que recolecta estas cifras se llama Unidad para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo) tal vez no sean los ideales desde el punto de vista de la investigación en ciencias sociales.

Específicamente, el tema del orden está entrelazado con la noción de estabilidad política que puede ser considerada como la meta política que buscan los cuadros técnicos del gobierno que, por lo tanto, se puede desviar de la movilización libre e independiente de la sociedad civil. Dicho llanamente, hay pocos proyectos de investigación que equiparen la presencia de las protestas con la necesidad de orden o estabilidad política. Por ejemplo, al explicar el resurgimiento de la izquierda en América Latina en años recientes, Cleary (2006: 41) escribe que "la política de protestas, incluyendo las huelgas, manifestaciones y corte de rutas [...] es vista como una forma legítima

9 Los tipos de eventos de protesta incluyen: movilizaciones, huelga general, cortes de ruta, paros laborales, ocupación de tierras, enfrentamiento, huelga de hambre, quema de llantas y plantones, entre otros.

de desobediencia civil en un sistema democrático, y no una afrenta directa al sistema mismo". En línea con las observaciones de Cleary, la encuesta de Latinobarómetro de 2009 registró que un 92% de los latinoamericanos consultados consideraron las movilizaciones como parte de la democracia, un incremento del 29% respecto del 63% registrado en 2008 (Latinobarómetro, 2009). Citando a Tarrow (1989: 347) "desorden y democracia no son antagónicos".

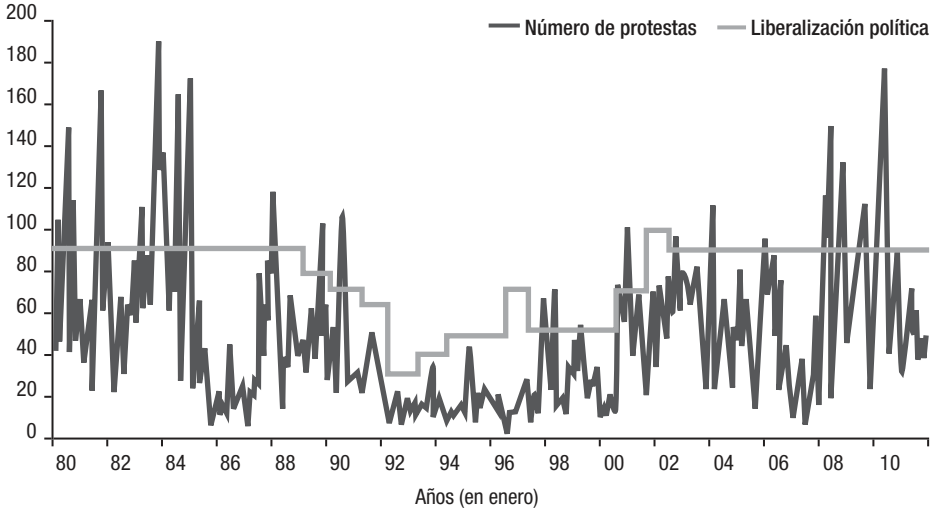
La Base de Protestas es más completa respecto a la cobertura espacial y temporal (ver Gráfica 19.1). Se registran 31 años de actividad contenciosa, desde enero de 1980 hasta diciembre 2010, que abarcan seis presidencias diferentes: Fernando Belaúnde (1980-1985), Alan García (1985-1990), Alberto Fujimori (1990-2000), Valentín Paniagua (2000-2001), Alejandro Toledo (2001-2006), y Alan García (2006-2011). Los datos provienen de la prensa local y se utilizan los tres periódicos de mayor circulación del país: *El Comercio*, *El Expreso* y *La República*. Se registraron 17.035 acciones de protesta según fecha (día, mes, año) y lugar (distrito, provincia y departamento o región) en seis categorías principales: tipo de protesta, tipo de actores, tipo de demanda/s, objetivo de la protesta, nivel de violencia y ubicación geográfica del evento de protesta.[10]

Antes de describir algunas de estas categorías, debe hacerse una salvedad respecto de las ventajas y desventajas del empleo de la prensa para registrar eventos de protesta. En general, los diarios tienden a ampliar la cobertura de los eventos de protesta cuando la cantidad de protestas es alta, y por el contrario, tienden a sub registrarlos cuando la cantidad es baja. Asimismo, la proximidad geográfica del diario al lugar en donde se produce el evento de protesta tiende a inflar el reporte de algunas protestas respecto de otras. Incluso, el reporte de las acciones de protesta puede estar sesgado por la orientación ideológica o la "política cultural" del diario (ver Barranco y Wisler, 1999). Aparte de estas cuestiones generales, el período de Fujimori plantea desafíos adicionales para el caso peruano. Específicamente, Conaghan (2005) y otros describen cómo el régimen de Fujimori (a través de Vladimiro Montesinos) utilizó sobornos a complotar con los medios de comunicación impresos locales, alardeando sobre el desempeño del régimen mientras menospreciaban a la oposición. En consecuencia, la asfixia de la libertad de prensa bajo Fujimori puede haber afectado el informe de algunos eventos de protesta, particularmente a finales de los 90 (ver, también: McMillan y Zoido, 2004).

---

10 Las cifras de esta base de datos se empezaron a registrar a partir de 2004. Garay y Tanaka (2009) proporcionan una reproducción parcial de estos datos para los años 1995-2006. Para una descripción completa de la base de datos, ver Arce (2014).

Gráfica 19.1
Actividad contenciosa y liberalización política en Perú, 1980-2010



Fuentes y Notas: La actividad contenciosa es la suma de todos los tipos de actividad de protesta registrados en la Base de Protestas Sociales del Perú. Las mediciones de la liberalización política fueron relevadas de Freedom House. Representa la suma de los índices de "derechos políticos" y "libertades civiles" en una escala 1 a 7, en la que los valores más bajos representan mayores libertades; y registra un rango teórico de 2 a 14 para el índice combinado. En la muestra, el índice combinado de Freedom House tiene una escala de 4 a 11. Yo aparté estos valores y agregué 14 para crear una nueva escala de 30 a 100, donde los valores más altos indican mayor democracia.

La Base de Protestas aborda algunas de las desventajas de la utilización de los medios de comunicación impresos para el registro de eventos de protesta, utilizando periódicos con diferentes perspectivas ideológicas o "políticas culturales". Por ejemplo, *La República* surgió como el principal diario de la oposición durante el período de Fujimori. *El Comercio*, *El Expreso* y *La República* también tienen alcance nacional, y anteceden a los ciclos of protesta documentados en este capítulo. *El Comercio*, *El Expreso* y *La República* fueron fundados en 1839, 1961 y 1981, respectivamente. De esta manera, la Base de Protestas corrige la superposición o desinformación potenciales de eventos de protesta como resultado de la proximidad geográfica o de los ciclos de actividad contenciosa en sí.

Como ejercicio comparativo utilizando estas tres frentes de datos, se exhiben las cifras desagregadas a nivel departamental para el año 2006. Al observar el Cuadro 19.1, es obvio que las cifras del MININTER registran la mayor cantidad de eventos de protestas (858 protestas) y Lima concentra la mayor cantidad de movilizaciones

(alrededor del 15%). Según la Base de Protestas, Lima también es el epicentro de las protestas de todo el país (39%), doblando con creces el porcentaje de las cifras del MININTER para Lima. En contraste, las cifras de la Defensoría del Pueblo ubican a San Martín, Loreto, y Cajamarca, seguidos por Puno al sur del Perú, como las regiones con mayor recurrencia de conflictos. Respecto a las zonas geográficas –y excluyendo las cifras para Lima– vale notar que estas tres fuentes de datos coinciden que, en 2006, la región sureña del país fue el área geográfica con la mayor cantidad de movilizaciones.

Cuadro 19.1
Comparación de cifras para las movilizaciones de 2006

	MININTER	Defensoría del Pueblo	Base de Protestas
Total	**858**	**96**	**226**
Norte			
Tumbes	4	0	5
Piura	25	3	9
Lambayeque	45	4	11
Cajamarca	48	8	5
La Libertad	22	7	9
Ancash	34	3	7
Centro			
Pasco	9	3	2
Junín	34	4	11
Huancavelica	42	5	6
Ica	29	2	8
Lima y Callao	135	2	88
Huánuco	11	5	2
Sur			
Arequipa	88	3	19
Moquegua	45	2	5
Tacna	38	2	4
Ayacucho	24	7	5
Apurímac	17	2	1
Cusco	21	6	8
Puno	42	8	8
Este			
Amazonas	16	1	6

San Martín	50	9	2
Loreto	44	9	5
Ucayali	18	1	0
Madre de Dios	17	0	0

Fuente: Ministerio del Interior (MININTER), Perú.

Asimismo, cabe destacar que las cifras para las movilizaciones del MININTER y de la Defensoría del Pueblo discrepan mucho y son difíciles de conciliar, aun cuando ambas son entidades gubernamentales del mismo Estado. Como indiqué anteriormente, no hay mucha información disponible sobre cómo se colectan los datos del MININTER. Algo similar sucede también con la clasificación de conflictos que propone la Defensoría del Pueblo. Específicamente, la Defensoría del Pueblo clasifica los conflictos como "activos", "latentes", "reactivados" y "resueltos". Además, los conflictos definidos como "activos" están sub categorizados entre aquellos en los que "hay diálogo" y otros en los que "no hay diálogo". Sin embargo, no queda muy claro en qué punto un conflicto pasa de un estado a otro, qué eventos constituyen la presencia o ausencia de diálogo ni cómo el diálogo, en general, incide en la clasificación de las otras tipologías de conflictos. En el futuro, los investigadores deben ser conscientes de las limitaciones de estas fuentes de datos, y ajustar sus conclusiones en base a qué define a una movilización y cómo está medida.

LAS LIMITACIONES DE LAS EXPLICACIONES EMPLEADAS USUALMENTE SOBRE LAS TENDENCIAS DE LA PROTESTA EN PERÚ

Se pueden observar dos grandes ciclos de protesta desde la transición a la democracia del Perú en 1980: uno de principio a mediados de la década del 80, y el otro, de mediados a fines de la primera década de 2000 (ver Gráfica 19.1). Estos dos ciclos surgieron en condiciones sociopolíticas y económicas marcadamente diferentes. Los 80 fueron un período de declive económico y creciente violencia política. La primera década del 2000, por el contrario, fue un período de expansión económica que tuvo lugar en un contexto de pacificación general (Arce, 2005). El nivel de liberalización política fue comparativamente similar entre los años 80 y 2000, y también mayor que la de los años 90 –la década de Fujimori.[11] En esta sección final del capítulo, reviso dos de los argumentos habitualmente utilizados que se han formulado para explicar las tendencias de la protesta en Perú. Estas explica-

11 En línea con Yashar (1999: 31), defino la liberalización política como "mayores libertades de asociación, expresión y de prensa".

ciones incluyen el estado de la economía y la presencia de la violencia política.

Considerando la economía, la sabiduría convencional sugiere que las condiciones de crisis predisponen a los sectores populares y las clases medias a movilizarse (Silva, 2009). El primer ciclo de protesta de los años 80 es consistente con este argumento. Los últimos años de los 80 fueron un período de dificultad económica y las movilizaciones siguieron en gran medida las "malas noticias" de la economía, por ejemplo: elevados precios al consumidor debido a la inflación, escasez de alimentos y mala prestación de servicios públicos básicos. El segundo ciclo de protesta en los 2000, sin embargo, desafía la sabiduría convencional según la cual el mediocre desempeño económico se asocia a mayores niveles de movilizaciones. En los años 2000, la economía peruana se recuperó y se convirtió en una vitrina de la administración económica. Estas movilizaciones remolcan la "buena noticia" de la expansión económica y la mejora del rendimiento, por ejemplo: salarios más altos, más beneficios y mejor prestación de servicios sociales.[12] El presidente García (2006-2011) caracterizó estas protestas como movilizaciones "originadas por la abundancia" de recursos naturales (citado en Meléndez y León, 2009: 606). En general, el hallazgo de que las protestas están vinculadas al estado de la economía cuando está mal (los 1980) o bien (los 2000) sugiere que las condiciones económicas nacionales no suelen ser buenos factores predictores de las tendencias de la movilización y desmovilización en el país.[13] Al menos, la evidencia sugiere que la relación entre el estado de la economía y la protesta es más compleja de lo que parece. Por esta razón, es imprescindible especificar las fuentes de los reclamos vinculados al estado de la economía, especialmente a nivel sub nacional.

En cuanto al argumento de la violencia política varios académicos han planteado que, para los grupos sociales, la guerra insurgente del país hizo difícil la construcción de capacidades organizativas y de coaliciones, que han sido cruciales en la resistencia a las políticas de liberalización económica en otros lugares (Arellano-Yanguas, 2008; Silva, 2009). Sendero Luminoso, en particular, marcó y asesinó a varios líderes de organizaciones de base porque consideraba que respaldaban al aparato político existente en lugar de a la insurgencia. En esa misma línea, un conjunto de argumentos asocia la

12 La distinción entre "buenas" y "malas" noticias es de Almeida (2010).

13 Los estudios entre países muestran que los indicadores económicos, tales como PIB per cápita y crecimiento del PIB, no son buenos predictores de movilizaciones.

represión estatal resultante de la violencia política con la retracción de las movilizaciones. En breve, si la violencia política sofoca las movilizaciones debido a muertes o actividades represivas, se podrían esperar niveles más bajos de movilización cuando la violencia es generalmente alta. Sin embargo, como muestra el Cuadro 19.2, tanto la violencia como las protestas coexistieron durante los 80, por lo tanto no es claro *prima facie* que la violencia política haga improbable la presencia de movilizaciones contra el gobierno. La información sobre violencia política proviene de la Comisión Nacional de la Verdad (renombrada Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación durante la presidencia de Toledo) y cubre el período de la guerra de la insurgencia del país empezando en 1980 y llegando hasta el 2000. Además, los argumentos sobre la represión estatal se centran sobre todo en Fujimori, debido su uso extensivo de inteligencia militar y represión selectiva para detener la guerra insurgente del país. Sin embargo, según el índice de derechos a la integridad física (Cingranelli y Richards, 2010), que es un indicador compuesto de medición de torturas, ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos políticos y desapariciones forzadas, el peor período de violaciones a los derechos humanos en Perú fue a fines de los años 80 bajo el primer gobierno de García, y no los años 90 bajo el gobierno de Fujimori. Para resumir, el argumento de que la violencia política desalienta la actividad de protesta no es del todo convincente, debido a que los altos niveles de violencia política y de protesta se superponen considerablemente durante los años 80.

Cuadro 19.2
Indicadores promedio por década en Perú

Indicadores	1980-1989	1990-1999	2000-2010
Economía			
Crecimiento PIB (%)	0,65	3,24	5,46
Crecimiento PIB per cápita	-3,2	2,1	4,4
Inflación	528	794	2
Violencia política			
Muertes por Sendero Luminoso	785	428	–
Muertes por Inst. Militares	515	192	–
Desapariciones	233	94	–
Torturas	360	258	–

Indicadores	1980-1989	1990-1999	2000-2010
Ejecuciones extrajudiciales	1.431	745	–
Actividades contenciosas			
Huelgas	267	38	64
Protestas	99	118	294

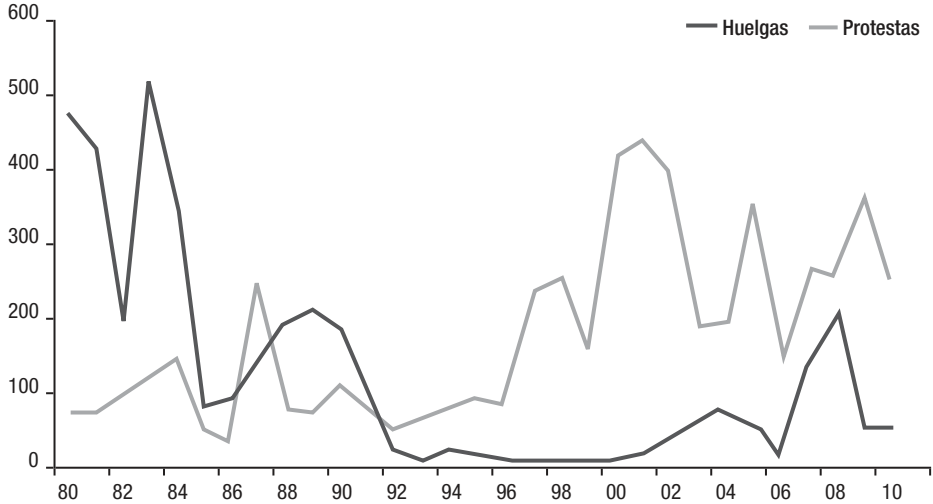
Fuentes: Los indicadores económicos fueron tomados del Banco Central de Reserva del Perú. Los indicadores de violencia política fueron tomados de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003). Los indicadores promedio de violencia política para el periodo 1990-1999 también incluyen al año 2000. Los datos sobre actividad contenciosa fueron tomados de la Base de Protestas Sociales del Perú. Las protestas incluyen movilizaciones, cortes de ruta, sentadas y tomas.

En conclusión, el horizonte de tiempo más largo registrado por la base de datos de acciones de protesta peruanas presenta dos grandes ciclos de protesta, y estos ciclos ponen en duda la relevancia de las dos explicaciones comúnmente utilizadas respecto de las tendencias de la protesta en el país, dado que los argumentos sobre el estado de la economía y la presencia de la violencia política se validan en algunos períodos y en otros no. Estos resultados reafirman la necesidad de mirar más allá de los factores contextuales a corto plazo, que pueden ser indicadores engañosos de las causas de la actividad de protesta a largo plazo.

DEMOCRACIA COMO OPORTUNIDAD

En otros lugares he sostenido que el contexto político más amplio en el que surgen las protestas proporciona una mejor explicación para la incidencia de la contención popular (por ejemplo: Arce, 2008; Arce y Bellinger, 2007; Bellinger y Arce, 2011). Los estudiosos de los movimientos sociales, de hecho, durante mucho tiempo han argumentado que en ausencia de un entorno político que afecte los incentivos para que las personas emprendan una acción colectiva (Tarrow, 1998), aquellos con reclamos intensos solo pueden representar desafíos mínimos para los regímenes existentes. En este capítulo, destaco las oportunidades políticas de todo el sistema propiciadas por la democratización que son favorables para la movilización popular. En comparación con los regímenes no democráticos, las democracias fomentan la movilización colectiva al minimizar la represión (Francisco, 2009), fomentar la vida asociativa y la apertura de canales de participación popular (Johnston y Almeida, 2006). Hay otro corpus literario que describe a las democracias como "sociedades de movimiento" (Meyer y Tarrow, 1998), donde la protesta política es aceptada e, incluso, fomentada como una "parte normal de la política" (Goldstone, 2004: 348). La conceptualización de "democracia como

Gráfica 19.2
Huelgas y protestas en Perú, 1980-2010



Fuentes: Los datos sobre huelgas y protestas fueron tomados de la Base de Protestas Sociales del Perú. Las protestas incluyen movilizaciones, cortes de ruta, sentadas y tomas.

oportunidad" ayuda a explicar la variación de la protesta a través de los países y a lo largo del tiempo (Arce y Bellinger, 2007), mostrando que la oportunidad política para las protestas, en general, es mayor en las democracias en comparación con los regímenes no democráticos (similar a Tilly y Tarrow, 2006: 66).

Este enfoque de oportunidad política también puede ayudarnos a entender las tendencias nacionales en Perú. La Gráfica 19.1 muestra que el nivel de democracia del país está estrechamente ligado a las dos oleadas diferentes de contención popular mencionadas anteriormente. De hecho, desde la transición democrática del país a mediados de los años 80, el nivel de la democracia de Perú se ha aproximado a una curva en forma de N: mayor en los 80, menor en los 90 y de nuevo alto en los años 2000. Haciéndose eco de esta observación, las calificaciones de Freedom House para derechos políticos y libertades civiles clasifican al Perú como: "libre" en los 80, "parcialmente libre" en los 90 y "libre" en los años 2000.[14] Con respecto a las movilizacio-

14 Freedom House clasifica los regímenes como "libre", "parcialmente libre" y "no libre", usando el promedio de los índices de sus libertades civiles y sus derechos políticos en una escala de 1 a 7, donde los valores más altos indican menos libertad.

nes, de nuevo su nivel también fue mayor durante los períodos "libre" de los 80 y 2000, en comparación con el período "parcialmente libre" de los 90. La información ratifica la idea general de que la democracia proporciona un ambiente favorable para llevar a cabo acciones colectivas que producen distintas oleadas y modos de contención popular. En términos generales, en los 80, los sindicatos tradicionales lideraron movilizaciones populares empleando huelgas. En los años 2000 nuevos actores, como los Frentes Regionales y los Frentes de Defensa, lideraron movimientos de protesta mediante movilizaciones, cortes de ruta, sentadas y tomas. El actual ciclo de protesta de Perú (de mediados a fines de la primera década del 2000), que es el principal enfoque de este capítulo, se ha desplegado bajo un contexto de mayor liberalización política, con una prensa más libre y más animada tras el fin del régimen de Fujimori y la apertura de nuevas salidas para la representación política con la elección de los gobiernos regionales en el nivel sub nacional. En general, la Gráfica 19.1 destaca la importancia de las condiciones políticas, más que de las económicas, para ofrecer una mejor explicación del surgimiento de la actividad contenciosa.

Algunas observaciones adicionales, con respecto a la literatura sobre el resurgimiento de la contención en respuesta a la liberalización económica, se pueden extraer del conjunto de datos. En primer lugar, las investigaciones que enfatizan los efectos desmovilizadores de la liberalización económica esperan un descenso generalizado en las movilizaciones a medida que avancen las reformas del mercado. Por ejemplo, Kurtz (2004) argumenta que las reformas del mercado destruyen la capacidad de organización de la resistencia social, especialmente por medio de sus efectos sobre la mano de obra. Del mismo modo, Oxhorn (2006) sugiere que el neoliberalismo transforma a la ciudadanía en una clase relativamente vana de consumo, terminando los conflictos en materia de distribución, o lo que Colburn (2002) caracteriza como el "fin de la política". La Gráfica 19.2 compara las huelgas peruanas a nivel nacional con las protestas para el período de esta investigación. En paralelo a las tendencias en otros países de América Latina, la Gráfica revela la base cambiante de las movilizaciones contra el gobierno después de la transición del Perú a una economía de mercado. Esta Gráfica expone el efecto paradójico de la liberalización económica: muestra la disminución de la influencia política del trabajo organizado, lo cual dio lugar a nuevos actores y otras formas de resistencia popular (similar Arce, 2008: 42; Arce, 2014).

Los regímenes que tienen una valuación media de 2,5 o menos se consideran "libres", los regímenes con valores promedio entre 3 y 5 se consideran "parcialmente libres", y los regímenes con valores de 5,5 o más se consideran "no libres" .

La disminución en el activismo laboral también se puede ver al comparar la cantidad de trabajadores que participa en huelgas. En promedio, la cantidad de trabajadores participantes en huelgas fue de 508.840 durante los 80, disminuyendo bruscamente a 81.107 durante los 90 y, aún más, a 3.813 durante la primera década del 2000.[15] La fuerte caída en el nivel de huelgas y de trabajadores que participan en huelgas sugiere que los sindicatos verticales de alcance nacional, como la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP) y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP), entre otros, ya no definen los desenlaces nacionales después del arribo de la liberalización económica. Sin embargo, han surgido otros actores con mayor autonomía de las instituciones estatales y partidarias. Por ejemplo, la base de datos demuestra que, del tipo de actores implicados en actos de protesta durante el período 1980-2010, los Frentes Regionales y los Frentes de Defensa fueron los segundos más frecuentes. Estos frentes son la clase de organizaciones típicas que surgieron a raíz de las movilizaciones contra las actividades extractivas. Con pocas excepciones, la mayoría de estas organizaciones no se nuclea en confederaciones nacionales ni desarrolla vínculos con los partidos políticos como parte de una alternativa programática al neoliberalismo, aún así su participación en eventos de protesta aumentó de forma sostenida durante la primera década del 2000. Sus repertorios de protesta, que incluyen movilizaciones, cortes de ruta, sentadas y tomas, afectaron los resultados nacionales y resumen muy bien los efectos de la repolitización de la liberalización económica (Arce, 2014).

En segundo lugar, las investigaciones que se basan en los efectos desmovilizadores de la liberalización económica también sugieren que la exposición a la competencia mundial produce un estado de pos globalización "impotente" con capacidades limitadas, particularmente en las áreas de políticas monetarias y fiscales, y como tal, esa literatura ha sostenido que el Estado ya no representa un objetivo digno de movilización popular (Kurtz, 2004: 271). Por el contrario, la Base de Protestas muestra que el Estado sigue siendo el principal objetivo de la contención ya que un 29,4% de las movilizaciones se dirigen a los Ministerios del Poder Ejecutivo del gobierno, lo cual es consistente con lo planteado por Silva (2009: 28). Después de los Ministerios, el Gobierno central es el segundo tipo más común de institución, como

15 En promedio, la cantidad de trabajadores involucrados en huelgas fue 470.325, durante los 70. Estas cifras fueron tomadas del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

objetivo de demandas (25,7%). Como podía esperarse, la clase de demandas dirigidas al gobierno nacional incluyó peticiones laborales. En conjunto, esto implica que los sujetos populares dirigieron sus demandas al Estado en un esfuerzo por buscar alguna forma de protección o compensación a causa de las fuerzas del mercado, incluso cuando las políticas de liberalización económicas lograron quitar al Estado de las actividades económicas.

CONCLUSIÓN

Las protestas a gran escala se han vuelto cada vez más comunes en América Latina, y Perú ha tenido más que un buen papel en su participación en las movilizaciones. Sin embargo, a diferencia de las huelgas nacionales lideradas por los principales sindicatos durante los 80 y principios de los 90, la mayor parte de las movilizaciones en el período actual se localiza y se centra grandemente en los reclamos específicos de los grupos afectados. También han surgido nuevos actores en respuesta a la globalización y liberalización económica. En el caso peruano, tanto el estado de la economía como la presencia de la violencia política han sido invocadas para explicar las tendencias de la protesta en el país. Estas explicaciones, como he demostrado en este capítulo, ponen mucho énfasis en los factores contextuales específicos de corto plazo para determinados periodos. La larga línea de tiempo proporcionada por la Base de Protestas, en cambio, revela dos grandes ciclos de protesta que, juntos, destacan la importancia de las condiciones políticas (lo que denominé "la democracia como oportunidad") con respecto a otros factores explicativos.

Las futuras investigaciones deben tener en cuenta las ventajas y desventajas que ofrecen las tres fuentes de datos reportadas en este capítulo, puesto que estas fuentes pueden ayudar a responder ciertas preguntas de investigación y otras no. Las cifras de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, proporcionan información muy detallada sobre la evolución de los conflictos, que pueden ayudar a identificar los tipos de recursos humanos y financieros que se consideran críticos para el éxito de los movimientos de protesta. Por el contrario, la Base de Protestas puede ayudar a explicar la variación de las tendencias de la protesta en el tiempo. También nos puede ayudar a entender la variación sub nacional o local de las movilizaciones, un tema de creciente interés académico (ver, por ejemplo: Almeida, 2012; Arce y Mangonnet, 2013).

Finalmente, muchos de los estudios que han examinado el tema de los movimientos de protesta en el Perú han insistido en la necesidad de la estabilidad política o el orden. Probablemente, algunos de esos trabajos contemplaron cómo las movilizaciones en las calles

forzaron las renuncias de presidentes en los países vecinos, como Bolivia y Ecuador. Otras investigaciones han enfatizado en la necesidad de mantener la reputación financiera del país en una época de orden económico global, incluyendo al TLC entre EEUU y Perú, y por lo tanto consideraron a las movilizaciones como incompatibles respecto de esos fines. Sin embargo, vale recordar que el orden político no necesariamente es siempre la dimensión más importante en una democracia. Y como nos recuerda Goldstone (2004) "la política democrática –aunque imperfecta– debería propiciar la actividad política colectiva, en lugar de hacerla obsoleta".

BIBLIOGRAFÍA

Adrianzén, A. y Ballón, E. 1992 *Lo popular en América Latina: ¿Una visión en crisis?* (Lima: DESCO).

Almeida, P. 2010 'Globalization and collective action' en Leich, K. y Jenkins, J. (eds.) *Handbook of politics: State and society in global perspective* (Nueva York: Springer) pp. 305-326.

Almeida, P. 2012 'Subnational opposition to globalization' en *Social Forces, 90*(4): 1.051-1.072.

Arce, M. 2005 *Market reform in society: Post-crisis Politics and economic change in authoritarian Peru* (University Park: Pennsylvania University Press) [Edición en español: *El Fujimorismo y la reforma del mercado en la sociedad* (Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2010)].

Arce, M. 2008 'The repoliticization of collective action after neoliberalism in Peru' en *Latin American Politics and Society*, *50*(3): 37-62.

Arce, M. y Bellinger, P. T. Jr. 2007 'Low-intensity democracy revisited: The effects of economic liberalization on political activity in Latin América' en *World Politics*, *60*(1): 97-121.

Arce, M. y Mangonnet, J. 2013 'Competitiveness, Partisanship and Subnational Protest in Argentina' en *Comparative Political Studies*, *46*(8): 895-919.

Arce, M. 2014 *Resource Extraction and Protest in Peru* (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press).

Arellano-Yanguas, J. 2008 *A thoroughly modern resource curse? The new natural resource policy agenda and the mining revival in Peru* (Brighton: University of Sussex, Institute of Development Studies) Working Paper 300.

Ballón, E. E. y Barrig, E. M. 1986 *Movimientos sociales y democracia: La fundación de un nuevo orden* (Lima: DESCO).

Ballón, E. E. y Castillo, M. O. 1986 *Movimientos sociales y crisis: El caso peruano* (Lima: DESCO).

Banaszak, L. A. 1996 *Why movements succeed or fail: Opportunity, culture, and the struggle for woman suffrage* (Princeton: Princeton University Press).

Barranco, J. y Wisler D. 1999 'Validity and systematicity of newspaper data in event analysis' en *European Sociological Review*, *15*(3): 301-322.

Bebbington, A. (ed.) 2007 *Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas: Una ecología política de transformaciones territoriales* (Lima: Instituto de Estudios Peruanos).

Bellinger, P. T. y Arce, M. 2011 'Protest and democracy in Latin America's market era' en *Political Research Quarterly*, *64*(3): 688-704.

Bravo, F. 2009 'El Desempeño del estado y la conflictividad social' en *Coyuntura: Análisis Económico y Social de Actualidad*, *5*(24): 10-13.

Brockett, C. D. 1991 'The structure of political opportunities and peasant mobilization in Central America' en *Comparative Politics*, *23*: 253-274.

Brockett, C. D. 2005 *Political movements and violence in Central America* (Cambridge: Cambridge University Press).

Brush, S. G. 1996 'Dynamics of theory change in the social sciences: Relative deprivation and collec tive violence' en *Journal of Conflict Resolution*, *40*(4): 523-545.

Caballero, M. V. y Cabrera, E. T. 2008 "Conflictos sociales en el Perú, 2006-2008" en Medrano, E. T. (ed.) *Perú hoy: Por aquí compañeros, Aprismo y neoliberalismo* (Lima: DESCO).

Cingranelli, D. L. y Richards, D. L. 2010 'The Cingranelli and Richards (CIRI) human rights data project' en *Human Rights Quarterly*, *32*(2): 401-424.

Cleary, M. R. 2006 'Explaining the left's resurgence' en *Journal of Democracy*, *17*(4): 35-49.

Cohen, J. L. 1985 'Strategy or identity: New theoretical paradigms and cotemporary social movements' en *Social Research*, *52*(4): 663-716.

Colburn, F. D. 2002 *Latin America at the end of politics* (Princeton: Princeton University Press).

Comisión de la Verdad y Reconciliación 2003 *Informe Final* (Lima: Comisión de la Verdad y Reconciliación).

Conaghan, C. M. 2005 *Fujimori's Peru: Deception in the public sphere* (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press).

Cress, D. M. y Snow D. A. 2000 'The outcomes of homeless mobilization: The influence of organization, disruption, political mediation, and framing' en *American Journal of Sociology, 105*, 1.063-1.104.

Davies, J. C. 1962 'Toward a theory of revolution' en *American Sociological Review, 27*(1): 5-19.

De Echave, J. (comp.) 2009 *Minería y conflicto social* (Lima: Instituto de Estudios Peruanos).

Degregori, C. I. 1993 "Identidad étnica. Movimientos sociales y participación política en el Perú" en Adrianzén, A. (ed.) *Democracia, etnicidad y violencia política en los países andinos* (Lima: Instituto de Estudios Peruanos).

Degregori, C. I. 1998 'Movimientos étnicos, democracia y nación en Perú y Bolivia' en Dary, C. (ed.) *La construcción de la nación y la representación ciudadana en México, Guatemala, Perú, Ecuador y Bolivia* (Guatemala: FLACSO).

Della Porta, D. 1995 *Social movement, political violence, and the State* (Cambridge: Cambridge University Press).

Della Porta, D. y Diani, M. 2006 *Social movements: An introduction* (Oxford: Blackwell).

Eisinger, P. 1973 'The conditions of protest behavior in American cities' en *American Political Science Review, 67*: 11-28, marzo.

Elster, J. 1989 *The cement of society* (Nueva York: Cambridge University Press).

Fox, R. G. y Starn, O. 1997 'Introduction' en Fox, R. G. y Starn, O. (eds.) *Between resistance and revolution: Cultural politics and social protest* (Nueva Jersey: Rutgers University Press).

Francisco, R. A. 2009 *Dynamics of conflict* (Nueva York: Springer).

Garay, C. y Tanaka, M. 2009 "Las Protestas en el Perú entre 1995 y 2006" en Grompone, R. y Tanaka, M. (eds.) *Entre el crecimiento económico y la insatisfacción social: las protestas sociales en el Perú actual* (Lima: Instituto de Estudios Peruanos).

Giugni, M. G.; McAdam, D. y Tilly, C. (ed.) 1998 *From contention to democracy* (Lanham: Rowman & Littlefield).

Goldstone, J. A. 1998 'Social movements or revolutions? On the evolution and outcomes of collective action' en Giugni, M. G.; McAdam, D. y Tilly, C. (eds.) *From contention to democracy* (Lanham: Rowman & Littlefield).

Goldstone, J. 2004 'More social movements or fewer? Beyond political opportunity structures to relational fields' en *Theory and Society, 33*: 333-365.

Goodwin, J. y Jasper, J. M. (ed.) 2004 *Rethinking social movements: Structure, meaning, and emotion* (Lanham: Rowman & Littlefield).

Gurr, T. R. 1970. *Why men rebel* (Princeton: Princeton University Press).

Hellman, J. A. 1997 'Social movements: Revolution, reform and reaction' en *NACLA Report on the Americas*, *30*(6): 13-18.

Jenkins, J. C. y Perrow, C. 1977 'Insurgency of the powerless: Farm worker movements (1946-1976)' en *American Sociological Review*, *42*: 249-68.

Johnston, H. y Almeida, P. (eds.) 2006 *Latin American social movements: Globalization, democratization, and transnational networks* (Lanham: Rowman & Littlefield).

Kitschelt, H. P. 1986 'Political opportunity structures and political protest: Anti-nuclear movements in four democracies' en *British Journal of Political Science*, *16*(1): 57-86.

Kurtz, M. J. 2004 'The dilemmas of democracy in the open economy: Lessons from Latin America' en *World Politics*, *56*(2): 262-302.

Latinobarómetro 2009 *Latinobarómetro 2009* (Santiago de Chile: s/d).

Lynch, N. G. 1990 *Los jóvenes rojos de San Marcos: El radicalismo universitario de los setentas* (Lima: Zorro de Abajo Ediciones).

McAdam, D. 1982 *Political process and the development of black insurgency 1930-1970* (Chicago: The University of Chicago Press).

McAdam, D. 1996 'Conceptual origins, current problems and future directions' en McAdam, D.; McCarthy, J. D. y Zald, M. N. (eds.) *Comparative perspectives on social movements* (Cambridge: Cambridge University Press).

McAdam, D.; McCarthy, J. D. y Zald, M. N. (eds.) 1996 *Comparative perspectives on social movements* (Cambridge: Cambridge University Press).

McAdam, D.; McCarthy, J. D. y Zald, M. N. (eds.) 1999 *Movimientos sociales perspectivas comparadas: Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales* (Madrid: Istmo).

McAdam, D.; Tarrow, S. y Tilly, C. 2001 *Dynamics of contention* (Cambridge: Cambridge University Press).

McCarthy, J. D. y Zald, M. N. 1977 'Resource mobilization and social movements: A partial theory' en *American Journal of Sociology*, *82*: 1.212-1.241.

McMillan, J. y Zoido, P. 2004 'How to subvert democracy: Montesinos in Peru' en *Journal of Economic Perspectives*, *18*(4): 69-92.

Meléndez, C. y León C. 2009 "Perú 2008: El juego de ajedrez de la gobernabilidad en partidas simultáneas" en *Revista de Ciencia Política*, *29*(2): 591-609.

Melucci, A. 1989 *Nomads of the present: Social movements and individual needs in contemporary society* (Philadelphia: Temple University Press).

Meyer, D. S. 2004 'Protest and political opportunities' en *Annual Review of Political Science*, *30*, 125-145.

Meyer, D. S., y Tarrow, S. (eds.) 1998 *The social movement society* (Lanham: Rowman & Littlefield).

Moore, W. H. 2000 'The repression of dissent: A substitution model of government coercion' en *The Journal of Conflict Resolution*, *44*, 107-127.

Munck, G. L. 1995 "Algunos problemas conceptuales en el estudio de los movimientos sociales" en *Revista Mexicana de Sociología*, *57*(3): 17-40.

Olson, M. 1965 *The logic of collective action* (Cambridge: Cambridge University Press).

Oxhorn, P. 2006 'Neopluralism and the challenges for citizenship in Latin América' en Tulchin, J. S. y Ruthenberg, M. (eds.) *Citizenship in Latin America* (Boulder: Lynne Rienner Publishers) pp. 123-147.

Pajuelo, R. T. 2004 "Perú: Crisis política permanente y nuevas protestas sociales' en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 14: 51-68.

Pajuelo, R. 2009 "'No hay ley para nosotros…" Gobierno local, sociedad y conflicto en el altiplano: El caso llave" (Lima: Instituto de Estudios Peruanos).

Parodi, J. S. 1986 *"Ser obrero es algo relativo"…: Obreros, clasismo y política* (Lima: Instituto de Estudios Peruanos).

Parodi, J. 2000 *To be a worker: Identity and politics in Peru* (Chapel Hill: University of North Carolina Press).

Pezo del P., C.; Ballón, E. E. y Peirano, F. L. 1978 *El magisterio y sus luchas, 1885-1978* (Lima: DESCO).

Piven, F. F. y Cloward, R. A. 1979 *Poor people's movements* (Nueva York: Vintage).

Pizarro, R.; Trelles, L. y Toche, E. 2004 "'La protesta social durante el Toledismo" en Azpur, J. (ed.) *Perú hoy: Los mil días de Toledo* (Lima: DESCO).

Scurrah, M. 2008 *Defendiendo derechos y promoviendo cambios. El estado las empresas extractivas y las comunidades locales en el Perú* (Lima: Instituto de Estudios Peruanos).

Silva, E. 2009 *Challenging neoliberalism in Latin America* (Nueva York: Cambridge University Press).

Snow, D., y Benford R. 1988 Ideology, frame resonance, and participant mobilization' en *International Social Movement Research*, *1*: 197-217.

Tanaka, M., y Vera S. 2008 "El 'neodualismo' de la política peruana" en *Revista de Ciencia Política*, *28*(1): 347-365.

Tarrow, S. 1989 *Democracy and disorder: Protest and politics in Italy 1965-1975* (Oxford: Clarendon Press).

Tarrow, S. 1998 *Power in movement: Social movements and contentious politics* (Cambridge: Cambridge University Press).

Tejada, S. E. (ed.) 2009 *Movimientos sociales y democracia en el Perú de hoy: Reflexiones a propósito de la gesta de Arequipa* (Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín).

The Economist 2008 'To the barricades: The politics of non-stop protest', 4 de diciembre.

Tilly, C., y Tarrow, T. 2006 *Contentious politics* (Boulder: Paradigm Publishers).

Tilly, C. 1978 *From mobilization to revolution* (Reading: Addison-Wesley).

Toche, E. 2003 "Perú: una democracia sin rumbo" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 11: 135-144.

Touraine, A. 1977 *The self-reproduction of society* (Chicago: University of Chicago Press).

Touraine, A. 1988 *The return of the actor: Social theory in postindustrial society* (Minnesota: University of Minnesota Press).

Touraine, A. 1989 *América Latina: política y sociedad* (Madrid: Espasa Calpe).

Van Cott, D. L. (ed.) 1994 *Indigenous peoples and democracy in Latin America* (Nueva York: St. Martin's Press).

Yashar, D. J. 1999 'Democracy, indigenous movements, and the postliberal challenge in Latin América' en *World Politics*, *52*: 76-104.

Zald, M. N. 1996 'Culture, ideology, and strategic framing' en McAdam, D.; McCarthy, J. D. y Zald, M. N. (eds.) *Comparative perspectives on social movements* (Cambridge: Cambridge University Press).

CÓMO CITAR ESTA PUBLICACIÓN:
Arce, Moisés. 2017. "Protesta y movimientos sociales en Perú" Pp. 479-504 en Paul Almeida y Allen Cordero Ulate, Eds., *Movimientos Sociales en América Latina: Perspectivas, Tendencias y Casos*. Buenos Aires: CLACSO.

20

Marcela Velasco*

MOVIMIENTOS SOCIALES CONTENCIOSOS EN COLOMBIA, 1958-2014

En el sistema político contencioso de Colombia, las instituciones democráticas estables que sustentan las elecciones regulares y la participación ciudadana han perdurado a pesar de una guerra implacable contra el pueblo, el Estado y a infraestructura económica. Estos niveles de violencia, junto al fracaso en aliviar con eficacia las necesidades de una parte significativa de la población, han producido una crisis humanitaria sin precedentes. Los movimientos sociales se han formado en este contexto y reaccionan a él. Ellos confrontan la democratización incompleta y la marginación económica, al tiempo que exigen los derechos de distinta clases de personas. Colombia es cultural, regional y económicamente diversa, y es el tercer país más grande de América Latina, con 47 millones de habitantes. Es un país con una renta media-alta, con un nivel de pobreza del 37% en 2012 –que disminuyó del 50% en 2002– y una gran desigualdad en la distribución de la riqueza con un coeficiente de GINI de 0,54 –por debajo del 0,57 en 2002 (DNP, 2013).

Las protestas sociales en Colombia se han entendido como una reacción a la ausencia de representación política y a la centralización

* Colorado State University, Fort Collins, EEUU.

del poder (Santana, 1983; Leal, 1991), dejando al pueblo sin otra opción que organizarse y protestar para incidir en las políticas (Urrutia, 1969). Los movimientos sociales también están motivados por eventos internacionales como la Guerra Fría y la Revolución Cubana (Archila, 2003a), o por las relaciones económicas dependiente con los países capitalistas (Pécaut, 1973) que debilitan la economía colombiana e inspiran movimientos nacionalistas. Los movimientos también han respondido a las necesidades materiales extendidas, empeoradas por las contradicciones de clase y la concentración de la riqueza (Gilhodes, 1970; Zamosc, 1989), y por la generalización de las creencias colectivas de que algo es injusto e inmoral (Archila, 2003b).

Este capítulo se basa en trabajos publicados con anterioridad en los cuales, en general, he argumentado que la contención social resulta del hecho de que los ciudadanos han obtenido suficientes derechos y capacidades para organizarse, pero tienden a experimentar la pérdida de los beneficios adquiridos, mientras que el Estado ha desarrollado capacidades desiguales para implementar políticas, brindar seguridad y proteger los derechos humanos (Velasco, 2007, 2011). En este trabajo diferencio los movimientos sociales de Colombia de otras formas de política contestataria, los ciclos de protesta actuales como telón de fondo del cambio de régimen, y brindo una descripción amplia de los actores, motivos y tipos de acciones detrás de las luchas del movimiento social.

LA POLÍTICA CONTENCIOSA EN COLOMBIA

Los movimientos sociales constituyen un tipo de política contenciosa o de acciones públicas, colectivas como protestas o revoluciones. Individuos de distinta categoría, políticamente marginados y económicamente excluidos, así como grupos que buscan influir en las autoridades, recalan en mecanismos políticos disruptivos para cambiar las actitudes públicas sobre un tema o para transformar la política en general (McAdam et al., 2001). Además de los movimientos sociales, la contención en Colombia incluye acciones guerrilleras y paramilitares. Sin embargo, las guerrillas y los paramilitares son violentos, tratan de derrocar el régimen y/o desafiar los límites constitucionales (Almeida, 2008). En contraste, los movimientos sociales encarnan la lucha abierta y pacífica de los ciudadanos por el cambio social.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son la organización guerrillera más grande y antigua, cuyos orígenes se remontan a los grupos de autodefensa formados para proteger las vidas y las tierras de los campesinos de las milicias privadas financiadas por los terratenientes durante *La Violencia*, el período de

violencia política partidaria entre 1948 y 1958 (Bushnell, 1993). En 1964, las FARC habían surgido como una guerrilla comunista cuyos objetivos eran la reforma agraria y derrocar al régimen oligárquico. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) también aparecieron alrededor de esa época, mientras que el Movimiento 19 de Abril (M-19) se formó en los años 70. Surgieron en diferentes partes del país, representando diferencias programáticas e ideológicas, pero impulsaron abiertamente la combinación de todas las formas de lucha para lograr sus objetivos (Pizarro, 1992). Las guerrillas se financiaron a través de la extorsión y el secuestro de terratenientes regionales u otros grupos adinerados. A fines de los 80, luego de que el Gobierno aumentara las aperturas para la participación política, la mayoría de estos grupos perdió terreno como alternativa política a un régimen oligárquico y cerrado. El M-19 se desmovilizó y se convirtió en un partido político en los 90, mientras que el EPL y el ELN acaso se debilitaron militarmente. Las FARC se financiaron a través de secuestros, gravámenes al narcotráfico y el control de algunas economías locales.

En reacción a la expansión de las guerrillas, los paramilitares se establecieron en los años 80 para proteger a los terratenientes y, probablemente, para cubrir la incapacidad del Estado para contener la subversión (Romero, 2000). Los paramilitares utilizaron el terror para mantener en jaque a toda la población y reclamar –sin ningún tipo de límite constitucional– partes del territorio del país para el Estado o para las elites locales. Se puede catalogar a los paramilitares como actores contenciosos, debido a que no gozan del apoyo de todas las elites estatales, contravienen las políticas de Estado pluralistas o inclusivas y sus acciones son inconstitucionales. Durante los años 90, guerrilleros y paramilitares fueron responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

En comparación, los movimientos sociales, en general, realizan sus reclamos mediante acciones simbólicas, públicas, comunitarias y, casi siempre, no violentas (Archila, 2003a). Sin embargo, dependiendo del contexto, los movimientos sociales incitan la represión estatal al producir episodios de violencia. Aunque son de naturaleza contestataria, los movimientos sociales rechazan el uso deliberado y premeditado de la violencia para lograr sus objetivos y emplean canales institucionales formales de representación en combinación con mecanismos informales (por ejemplo, protestas) para hacer sus reclamos. Dado el contexto contestatario de Colombia, los movimientos sociales se tomaron muchas molestias en calificarse como ejemplos de luchas "sociales", "cívicas" o "civiles" para indicarles a sus detractores que no son parte de las guerrillas.

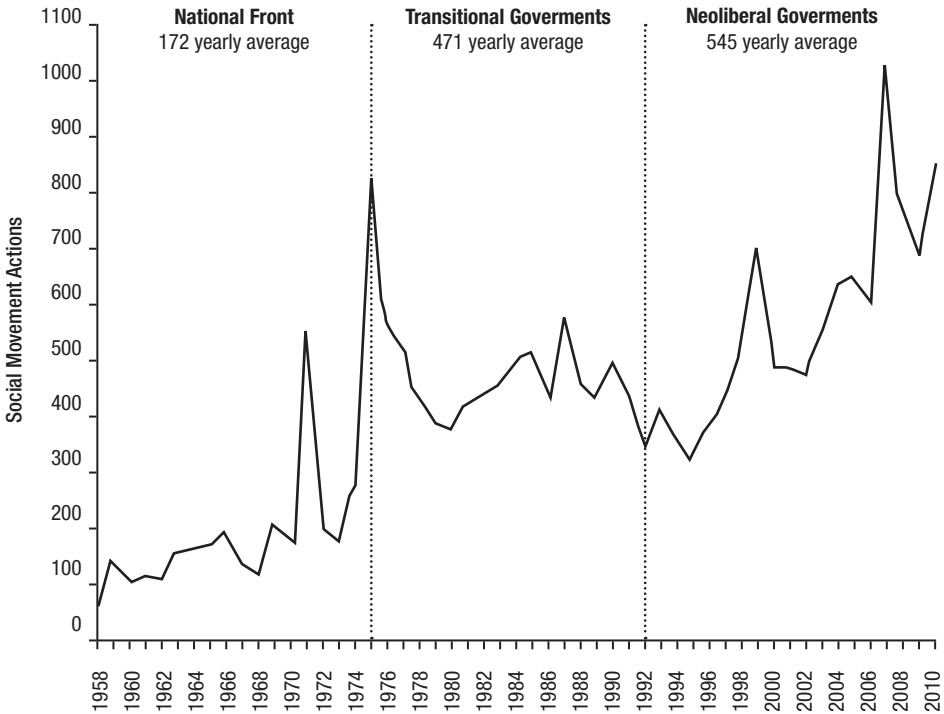
Las asociaciones de movimientos sociales suelen conectarse a la oposición política, organizada programática e ideológicamente en diversos partidos como: el Partido Comunista, el M-19, el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR) y la Alianza Social Indígena, entre otros (Archila, 2003b). A principios de los años 2000, la atomizada izquierda de Colombia fundó el Polo Democrático Alternativo para unificar a la oposición, organizar un bloque de votación en el Congreso y juntar votos (Gutiérrez, 2006). Como toda asociación de diferentes grupos políticos, el Polo trató de reunir a intelectuales, partidos de la oposición y a un amplio espectro de delegaciones de movimientos sociales. Aunque el Polo ha disfrutado del éxito electoral en algunas regiones y en Bogotá, el partido no ha sido capaz de superar una serie de divisiones sectarias, incluyendo las relativas a la relación entre la izquierda "democrática" y la "insurgente". La división más reciente del Polo dio lugar a una nueva corriente de izquierda conocida como Progresistas.

Dado el estado de la política en Colombia, la ambivalencia acerca de rechazar los conflictos armados como una manera de producir un cambio político no solo es criticada por la izquierda democrática, sino vista con recelo por la derecha violenta, que cree que la izquierda practica una "doble militancia" al respaldar tanto las facciones de izquierda armadas como las cívicas. Esta ambivalencia pone en peligro a todas las colectividades, como ocurrió con la Unión Patriótica (UP), un partido de izquierda formado en los 80, cuyas filas se engrosaron con algunos militantes de las FARC y, por lo tanto, fue atacado por los paramilitares que asesinaron a unos tres mil seguidores de UP (Delgado, 2008; Duque, 2012). Algunos partidos de derechas también han demostrado tener nexos con grupos paramilitares violentos y emplean la coerción para obligar a los electores a votar por sus candidatos favoritos. Además han sido responsables, como veremos a continuación, de perseguir y asesinar a los activistas de los movimientos sociales.

MOVIMIENTOS SOCIALES Y RÉGIMEN POLÍTICO (1958-2014)

Los movimientos sociales están contenidos por dinámicas políticas más amplias que afectan los recursos disponibles para organizar la acción colectiva (Jenkins, 1995). Esta sección considera los principales despliegues de la política colombiana entre 1958 y 2014 y los divide en tres regímenes políticos: el Frente Nacional (1958-1974), el Período de Transición (1975-1990) y el Periodo Neoliberal (1991-2014). Esta historia política tiene una gran relevancia en el análisis de los elementos determinantes de la contestación social. La Gráfica 20.1 resume las acciones del movimiento social contra los diferentes regímenes

Gráfica 20.1
Movimientos sociales y régimen político en Colombia (1958-2010)



Fuentes: Datos de la protesta, 1958-1975 (Archila, 2003b); 1975-2010 (CINEP, 2013).

políticos y demuestra que la contención ha seguido una tendencia creciente a lo largo del tiempo.

Durante el régimen poco democrático del Frente Nacional, las acciones contenciosas promediaron 172 por año, con la excepción de 1971, cuando se registraron 540 eventos como resultado de las ocupaciones de tierra generalizadas llevadas a cabo por los campesinos. Entre finales de los 60 y principios de los 70, la cantidad de protestas aumentó a medida que se extendía el descontento social por las restricciones a la democracia. El Frente llevó al poder una coalición de liberales y conservadores que representaba a los productores de café, los industriales y los terratenientes (Palacios, 2001) y excluyó a las instituciones políticas que favorecían los intereses de los grupos subalternos (Archila, 1995). Las elites del partido compartieron el Gobierno para conciliar la lucha interpartidaria que derivó en numero-

sas guerras civiles, impedir la organización independiente de la oposición y frenar las medidas económicas populistas (*cf*. Kline, 1995). No en vano, los cuatro principales grupos guerrilleros de Colombia se formaron durante este período.

Los Gobiernos del Frente Nacional usaron el Estado de sitio para reprimir la organización independiente de la sociedad civil (Archila, 2003b) y criminalizaron las huelgas en los sectores económicamente estratégicos de comunicaciones, seguridad social y petróleo (Londoño, 1989). Sin embargo, sancionaron medidas de modernización económica y permitieron la representación de campesinos y trabajadores en organizaciones corporativas controladas por el Gobierno, que luego servirían como plataformas para la asociación independiente. No obstante, las elites rurales conservadoras, descontentas, se opusieron particularmente a las reformas agrarias del liberal Alberto Lleras (1966-1970) y apoyaron al conservador Misael Pastrana (1970-1974), que desanidó la reforma agraria y aseguró el poder de las elites rurales sobre los campesinos (Silva, 1989). Esta contrarreforma explica el auge de las protestas en 1971, cuando las tomas campesinas de tierra alcanzaron su punto máximo.

Las protestas alcanzaron un promedio de 471 durante los Gobiernos de transición, cuando el Frente había terminado oficialmente pero muchas de sus instituciones seguían funcionando. Recién en 1986, se formaría un gobierno después de elecciones competitivas (Kline, 1995). Los Gobiernos de transición tendieron a aprobar reformas políticas que no lograron satisfacer las demandas populares, aunque generaron grandes expectativas. La escalada de 1975 coincide con el inicio de un nuevo Gobierno, que prometió reformas socioeconómicas y mayor participación política, pero no pudo cumplir. Este Gobierno se enfrentó a una ola de revuelta social sin precedentes, con la represión de los activistas, pero también aprobó reformas económicas beneficiosas. El liberal Julio César Turbay (1978-1982), seguidamente, redujo las protestas al aumentar la represión y promulgar el Estatuto de Seguridad de 1978, que incluía medidas severas para detener, interrogar y procesar a civiles sospechosos de subversión o narcotráfico pero que se usó para perseguir toda forma de oposición civil (Archila, 2003b). El conservador Belisario Betancur (1982-1986) permitió elecciones locales e inició las conversaciones de paz con los grupos guerrilleros, pero sus reformas se vieron limitadas por el magro desempeño económico y el aumento de la violencia. Las presiones internacionales, como las procedentes de las estrictas políticas antinarcóticos de los Estados Unidos, exacerbaron el problema. Al mismo tiempo, una ciudadanía politizada y cada vez más activa continuó presionando por el cambio social y la liberalización política.

Este período terminó con una sensación generalizada de crisis política, que la mayoría de los grupos políticos creía que solo podía abordarse mediante la redacción de una nueva Constitución. La Constitución de 1991 sustituyó el documento conservador de 1886, liberalizó la economía y democratizó la política. Fue negociada por los partidos tradicionales, junto con representantes de movimientos sociales y miembros de la oposición, en una Asamblea Constituyente. La Constitución garantizó un Estado Social en el marco del Estado de Derecho, que sigue los principios de una democracia económica y política al favorecer la participación de diferentes actores sociales (*cf.* Garay, 2002). Las protestas disminuyeron después de su ratificación en el corto plazo, pero los gobiernos posteriores experimentaron un mayor número de protestas que las administraciones anteriores.

Se cifraron grandes esperanzas en que la Constitución produciría un sistema político más inclusivo y democrático, pero esto fue, en parte, desalentado por las reformas de mercado que aumentaron la desigualdad (Garay, 2002) y el fracaso del Gobierno para atenuar los efectos del conflicto armado. En los 90, en general, los pueblos protestaron contra las medidas de austeridad neoliberal diseñadas bajo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional para racionalizar el gasto fiscal mediante el incremento de los impuestos indirectos, el recorte de los programas sociales, la privatización de las empresas de servicios públicos, el aumento de las tarifas por servicios públicos y la reducción de los presupuestos de las administraciones locales (Ahumada, 2000). Mientras tanto, las protestas contra la violencia, el desplazamiento y las violaciones de los derechos humanos continuaron sin cejar.

La contestación social llegó a su punto más alto durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), una administración que concentró poder y aumentó la represión. Uribe, elegido por los colombianos cansados de los abusos de la guerrilla, gozó de altos índices de aprobación y se esperaba que pacificara el país a cualquier costo. Modificó la Constitución para permitir su reelección, fusionó varios Ministerios y estuvo implicado en un enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia, el órgano encargado de investigar las relaciones entre el Gobierno, los miembros del Congreso y los grupos paramilitares, que ocasionó el arresto de 32 congresistas que forjaron alianzas e, incluso, planearon crímenes de lesa humanidad junto a las fuerzas paramilitares (Valencia, 2007).[1] Su Gobierno estuvo marcado por la corrupción de alto nivel así como por violaciones masivas a los derechos

1 "Corte pide investigar a funcionarios del Gobierno por intentar deslegitimarla" en *Elespectador.com*, 14 de agosto de 2008.

humanos para mostrar resultados en su guerra contra la insurgencia, que incluyeron las prácticas militares de matar civiles y procesarlos como guerrilleros o escenificar detenciones en masa de inocentes acusados de subversión (Pachón, 2009). Como resultado, aumentó la polarización, y también lo hicieron las protestas, que alcanzaron su punto máximo de 1.017 en 2007.

La gestión actual de Juan Manuel Santos (2010-presente) ha continuado con las políticas económicas neoliberales –se han firmado una serie de acuerdos bilaterales de libre comercio que han sido impugnados por los movimientos rurales y de trabajadores– y mantiene las políticas antisubversivas y de seguridad para debilitar a las FARC y contener a los grupos paramilitares remanentes. Actualmente, Santos está llevando a cabo diálogos bilaterales con un movimiento guerrillero debilitado, 10 años después del fracaso de las negociaciones de paz con las FARC del Presidente Andrés Pastrana (1998-2002). Aunque hay un amplio apoyo de los movimientos sociales para el final negociado de la guerra, las organizaciones indígenas y las víctimas de la violencia, entre otros, manifiestan su exclusión de la mesa de negociaciones (Restrepo y García, 2012). Por último, este Gobierno se ha enfrentado a la oposición de uno de los movimientos sociales ambientales más vociferantes, especialmente en cuestiones de agua y de minería en pequeña y gran escala (Delgado, 2012).

QUIÉNES PROTESTAN, CÓMO Y POR QUÉ

El Cuadro 20.1 presenta una instantánea de los actores sociales, las organizaciones, las acciones y los motivos detrás de los 18.397 eventos registrados en la Base de Datos de Lucha Social del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), la fuente de información más completa sobre los movimientos sociales de Colombia. Según estos datos, la mayor parte los reclamos del movimiento se centra en los derechos humanos básicos, las demandas materiales y denuncias contra las políticas o la ineficiencia del Gobierno, incluyendo la violación de los derechos civiles y políticos, el incumplimiento de los pactos o leyes en vigor, o de los acuerdos alcanzados durante las negociaciones anteriores (CINEP, 2013). Los trabajadores, los residentes urbanos, los campesinos y los estudiantes lideran el 80% de las protestas. Sin embargo están surgiendo otras identidades políticas vocales, como las mujeres y grupos étnicos, que han obtenido derechos pero siguen subyugados.

El movimiento de trabajadores fue el actor social contestatario más importante en los 70 (Pécaut, 1973; Moncayo y Rojas, 1978) y sigue siendo predominante, aún cuando está debilitado por la violencia y la merma en la sindicalización. En los 90, por ejemplo, era

Cuadro 20.1
Actores, organizaciones, acciones y motivos de las luchas sociales, Colombia (1975-2010)

Actores sociales	% del total	Organizaciones que convocan a la acción colectiva	% del total	Tipo of acciones	% del total	Motivos	% del total
Asalariados	27	Sindicatos	29	Marchas y movilizaciones	38	Derechos*	19
Residentes urbanos	23	s/d	27	Huelgas	31	Incumplimiento por parte del gobierno	17
Campesinos	16	Grupos civiles	12	Tomas de tierras	10	Políticas	16
Estudiantes	14	Estudiantiles	10	Cortes de rutas	9	Tierra / Vivienda	12
Víctimas de violencia	6	Autoridades	6	Tomas de entidades	7	Servicios públicos / Infraestructura	11
Trabajadores independientes	5	Víctimas de violencia	5	Revueltas y disturbios	4	Servicios sociales	7
Gremios	3	Gremios	3	Huelgas de hambre	0,4	Derechos laborales	7
Grupos étnicos	3	Campesinos	3	Resistencia civil	0,3	Autoridades Publicas	4
Mujeres y LGBT	1,5	Organizaciones étnicas	1,4			Solidaridad	3
Prisioneros	1	Paz y DD. HH.	1,3			Ambientales	2
		Mujeres y LGBT	1			Conmemoraciones	1,5
		Otros	1			Otros	1
		Congregaciones religiosas	0,5				

Fuente: CINEP (2013). Ref.: Porcentajes basados en los 18.397 eventos registrados.
a * La categoría de derechos incluye las demandas por la vida, la libertad, la integridad personal; los derechos políticos, económicos y sociales; los derechos étnicos y culturales; y, la adhesión al Derecho Internacional Humanitario, que es el marco que regula los conflictos armados.

una práctica común señalar a los sindicatos como los principales responsables de los problemas macroeconómicos. Tales acusaciones se incrementaban justo antes de que una empresa del Estado estuviera a punto de ser liquidada. Por ejemplo, el Presidente César Gaviria (1990-1994) aprovechó el hecho de que los miembros del sindicato eran minoría para pintarlos como parte de una elite protegida por las leyes y reglamentos laborales para desacreditar su oposición a las reformas neoliberales.[2]

2 "La oligarquía del overol" en *Semana*, 19 de mayo de 1992.

A medida que avanzaban las reformas neoliberales, se socavaron las bases del movimiento obrero. La reducción de los aranceles provocó la quiebra de al menos 25 mil fábricas (Valderrama, 1998), reduciendo la fuerza de trabajo industrial y la cantidad de trabajadores sindicalizados, que pasó del 16% de la población económicamente activa en 1980 a menos del 5% en 2010 (Vidal, 2012). La violencia ejercida por grupos de extrema derecha también ha socavado la sindicalización. Correa (2007) registró el asesinato de 2.245 dirigentes gremiales y activistas entre 1991 y 2006, mientras que la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (*International Confederation of Free Trade Unions*, ICFTU) halló que, entre 1999 y 2005, fueron asesinados un total de 1.174 miembros sindicales a nivel mundial y que el 73% de esos asesinatos ocurrieron en Colombia (Vidal, 2012).

Los sindicatos del sector estatal, principalmente en salud y educación, han conservado las capacidades para negociar las demandas laborales específicas del sector, mientras que las condiciones adversas para el ejercicio de los derechos laborales obligó a un cambio en el activismo (Archila, 2012). Los trabajadores, cada vez más, organizan protestas contra las violaciones de los derechos humanos y las reformas neoliberales, y se vincularon con grupos y activistas por fuera de la cartera laboral para movilizar sus reclamos. El activismo convencional –como las huelgas, las asambleas y los convenios colectivos para negociar cuestiones laborales específicas– declinó. Las condiciones adversas, además, impulsaron alianzas internacionales y esfuerzos de cabildeo, ayudando a posponer los acuerdos comerciales bilaterales con Estados Unidos y la Unión Europea, poniendo de relieve las condiciones deplorables de trabajo en Colombia (Delgado, 2007). Aunque las agrupaciones de trabajadores, en general, se oponen a los acuerdos comerciales que afectarán negativamente el empleo, los sindicatos plantearon los derechos laborales como un punto central de negociación en los tratados de comercio bilaterales. En alianza con otros grupos, los trabajadores reaccionaron contra los planes de desarrollo neoliberal de cada nuevo gobierno y, en particular, fueron críticos de las privatizaciones y los recortes implementados para reducir las transferencias fiscales usadas para financiar la educación municipal y los presupuestos de salud. Los activistas también se movilizaron contra las medidas plebiscitarias para cambiar la Constitución de 1991 para permitir la reelección del Presidente –especialmente, para permitir la reelección indefinida del Presidente Álvaro Uribe– y para profundizar las reformas de mercado. En suma, el movimiento de trabajadores está profundamente comprometido en las protestas contra las violaciones a los derechos

humanos y ha perdido terreno en su capacidad para la negociación colectiva.

Como consecuencia de la violencia hacia dirigentes y asociaciones, y de la contrarreforma agraria que forzó a los campesinos a abandonar sus tierras, la organización campesina ha menguado con el correr del tiempo (Corredor, 1990). Entre 2000 y 2008, unas 385 mil familias rurales abandonaron por la fuerza 5,5 millones de hectáreas, casi el 11% de las tierras cultivables de Colombia, perdiendo aproximadamente el 12% del PIB del país (CODHES, 2009). En total, más de 5 millones de personas dejaron sus tierras entre 1985 y el 2011, o el equivalente del 10% de la población actual de Colombia (CODHES, 2011). Asimismo, en un Informe de OXFAM de 2012 se advierte que los acuerdos de libre comercio firmados por el Gobierno exponen a los pequeños agricultores desamparados a la competencia con los productos subsidiados de Estados Unidos, provocando una caída estimativa del 16% de en sus ingresos promedio.[3]

Estas condiciones devastadoras en el campo explican la reciente escalada de las protestas campesinas. En 2013, la oleada de protestas culminó con un Paro Nacional Agrario que colocó las demandas rurales en el centro de la agenda del Gobierno. El año comenzó con una movilización nacional de productores de cafetaleros exigiendo subsidios para cubrir las pérdidas por una fuerte caída en los precios del café. Para calmar a los manifestantes, el Gobierno acordó algunos subsidios. En junio, los campesinos de la región del Catatumbo en el noreste Colombia bloquearon las carreteras y paralizaron todas las actividades económicas en protesta por las políticas represivas de erradicación de la coca del Gobierno nacional, la estigmatización de la población civil de la zona –tratada como simpatizantes de las FARC– y la falta de inversión social. En agosto, el Paro Nacional se inició en el Departamento de Boyacá y eventualmente movilizó a los pequeños agricultores en todo el país, unificando a las agrupaciones de base –incluyendo a las organizaciones indígenas– y a las organizaciones establecidas, como las de los productores de café, papa y leche, entre otros. El Paro ha obtenido un apoyo abrumador de los colombianos del sector urbano, fue acompañado por los mineros en pequeña escala, los camioneros, los estudiantes y los sindicatos de docentes. También produjo el escrutinio público de los efectos agregados de dos décadas de contrarreforma agraria violenta y reformas neoliberales del mercado. A partir de octubre de 2013 y después de negociaciones

3 Norby, M. y Fitzpatrick, B. 2013 'The Horrific Costs of the US-Colombia Free Trade Agreement' en *The Nation*, 31 de mayo.

con el Gobierno, el Paro ha terminado; aunque los críticos sostienen que los subsidios y otros beneficios prometidos no serán una solución duradera para los problemas estructurales del campo.[4]

Si bien no se registraron en las estadísticas, las protestas de los campesinos cocaleros merecen nuestra atención. Así como las demandas de los Estados Unidos para un control estricto de la producción de coca se intensificaron en los 90, también lo hizo la represión política en las regiones de cultivo de coca. Además aumentaron las fumigaciones aéreas con uso de glifosato dirigido a los cultivos de coca, aunque afectan también a cultivos legales, bosques y fuentes de agua. En 1996, más de 200 mil cocaleros se levantaron contra el Gobierno exigiendo el reconocimiento como ciudadanos, que no marginados del sistema (Ramírez, 2001), y continuaron manifestando contra la criminalización de su actividad económica durante los años 2000.

Una prueba de los altos niveles de violencia que afectan a la población civil es el resurgimiento de la categoría "víctimas de la violencia", que entre 1975 y 1995 era casi inexistente pues los analistas observan menos de 25 eventos. Pero después de 1996, CINEP registró más de mil eventos de movimiento social de estos grupos. Desplazados, víctimas de la violencia de Estado, y otras víctimas de violaciones de derechos humanos exigen, en gran medida, el derecho a un retorno seguro a sus tierras, compensación por la pérdida de propiedades, o un trato equitativo en las negociaciones de paz del Gobierno, como la Ley de Justicia y Paz de 2005, que negoció la disolución de los grupos paramilitares pero básicamente ignoró los intereses de sus víctimas (Sarmiento, 2008).

En el caso de los nuevos actores políticos, mujeres y lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros (LGBT) ameritan especial atención, a pesar de que sus acciones apenas se registran. Sus acciones han ampliado el significado de los derechos civiles y han impactado en las políticas públicas. En 2006, la Corte Constitucional legalizó el aborto cuando el embarazo es resultado de violación, en el caso de malformaciones, o cuando la salud de la madre está en riesgo, una rara victoria para el movimiento feminista. En febrero de 2007, la Corte falló a favor de una demanda presentada por la organización Colombia Diversa, una ONG que respalda el movimiento LGBT, y

---

4 Sandoval, H. 2013 "Manifestaciones atienden a modelo económico, entrevista a Mauricio Archila, investigador del CINEP" en *Elespectador.com*, 18 de agosto. En <http://www.elespectador.com/noticias/economia/manifestaciones-atienden-al-modelo-economico-articulo–440855>.

aprobó los derechos de propiedad de las parejas del mismo sexo que han convivido al menos durante 2 años.[5]

La información sobre las organizaciones que llaman a la acción colectiva (ver columnas 3 y 4 en el Cuadro 20.1) subraya una vez más el liderazgo de los sindicatos, pero también de los grupos cívicos y de los estudiantes que representaron un 29%, 12% y 10% de las protestas, respectivamente. La categoría de "estudiantes" incluye un 50% de estudiantes universitarios y un 42% de estudiantes secundarios, cuyas protestas objetan principalmente el deterioro de la calidad educativa (incluyendo la infraestructura y los servicios sociales) y, recientemente, la privatización de la educación superior y el aumento de la matrícula (CINEP, 2013).

Los grupos cívicos tienen una larga historia en Colombia y representan actores urbanos o territoriales con diversas identidades socioeconómicas y afiliaciones organizacionales. Estos actores son los que normalmente se asocian a los pueblos o barrios pobres, donde los servicios son deficientes o el Gobierno no ha podido desarrollar infraestructura comunitaria (Santana, 1983). Se caracterizan por el uso de huelgas civiles que paralizan casi todas las actividades socioeconómicas, como una forma pacífica de llamar la atención del Gobierno sobre algún problema comunal.

La categoría de "autoridades" incluye a los funcionarios departamentales y municipales que utilizan las protestas para oponerse a las acciones de los actores armados o a la presión del Gobierno central. Por ejemplo, en 2002, los alcaldes de 23 municipios en Antioquia protestaron contra las amenazas de muerte de la guerrilla de las FARC para obligarlos a dejar sus cargos, y contra el Gobierno por no ofrecer seguridad,[6] mientras que las autoridades en el sur de Colombia se unieron a la población en protesta por las políticas de erradicación de la coca que aumentaron la represión y la militarización.[7] Las protestas de las autoridades locales surgieron, en gran medida, a partir de la promulgación de las leyes de descentralización, en 1986, que pasaban las responsabilidades a las administraciones locales que, a menudo, carecían de la experiencia o los recursos necesarios para desempeñar nuevas funciones.

Las huelgas, las movilizaciones, las ocupaciones y los cortes de rutas representan el 88% de los tipos de actividades de protesta. En

---

5 Salazar, H. 2007 "Colombia: derechos a parejas gay" en *BBC.Mundo.com*, 8 de febrero.

6 Herrera, L. 2002 "Municipios, a la deriva y sin alcaldes" En *El Tiempo*, 23 de junio.

7 "Somos patriotas, pero no pendejos" en *El Tiempo*, 9 de julio de 2002.

comparación, la resistencia civil apenas se registra con un 0,3%, sin embargo, constituye la innovación más importante en la historia de la contestación de Colombia. En 2001, los habitantes de varios pueblos fundamentalmente indígenas en el Departamento del Cauca organizaron acciones pacíficas contra los grupos armados que operaban en su región, en un contexto de hostigamiento militar creciente a la población civil. Al mismo tiempo, las FARC habían aumentado los ataques en pueblos remotos, matando o secuestrando policías y usando armas no convencionales para destruir la infraestructura civil.

En el Cauca, las FARC históricamente se han negado a aceptar la autonomía de los pueblos indígenas y su principal organización, el Consejo Indígena Regional de Cauca, que respaldaba al movimiento social étnico más exitoso del país (Rodríguez et al., 2005). A partir de los años 80, las FARC se opusieron a los líderes indígenas y los asesinaron, lo que provocó la fundación temporal de un grupo de autodefensa indio, el Movimiento Manuel Quintín Lame, para proteger a los líderes y las reservas indígenas. Hartos de los ataques de las FARC, en los 90, los civiles indígenas de cuatro ciudades se unieron para detenerlos rodeando a la policía en un círculo humanitario para salvar sus vidas.[8] También le manifestaron al Gobierno que la presencia militar convertía a los pueblos y a la infraestructura civil en objetivos militares de las FARC. La resistencia civil se ha convertido en una estrategia que incluye una convocatoria de la autonomía territorial, o de territorios de paz, donde los pobladores en las zonas de alta conflictividad se han declarado neutrales vis a vis el conflicto (Bouvier, 2009).

CONCLUSIONES

Los movimientos sociales colombianos son un testimonio de la historia compleja de intransigencia, democratización incompleta y desigualdad económica del país. En primer lugar, muchos de los mecanismos participativos aprobados por la Constitución de 1991, ostensiblemente diseñados para reducir el conflicto, siguen ociosos como resultado de la incapacidad del Gobierno para poner en práctica o para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados. En segundo lugar, las prácticas intolerantes y violentas de narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares y algunas de las elites gubernamentales han contribuido aún más al deterioro de muchas instituciones y a la reducción de los derechos de los ciudadanos. Finalmente, ante la expansión de la inseguridad humana y económica, las políticas de

8 "Toribío salvó a sus policías" en *El Tiempo*, 13 de julio de 2002; Sierra, Á. 2005 "La guerra en el norte del Cauca" en *El Tiempo*, 10 de mayo.

desarrollo económico del Gobierno, que últimamente siguen los principios del libre mercado, se consideran contraproducentes pues sus resultados finales son la concentración de la riqueza y de la tierra. En cualquier caso, el activismo del movimiento social ha aumentado a medida que las oportunidades políticas para la participación mejoraron, aún cuando la represión y la violencia intentaron impedir la movilización popular.

En total, los movimientos sociales responden ampliamente a los efectos de un Estado que no ha podido impartir justicia, y que, en ocasiones, ha participado activamente en la violación de los derechos humanos básicos. En general, los movimientos defienden, ampliando y redefiniendo, los derechos civiles, políticos y sociales, así como los derechos comunales, que incluyen la igualdad de género, los derechos culturales de los indígenas y afrocolombianos, el bienestar ambiental, el trabajo digno y la tierra. De esta manera, los movimientos colombianos reflejan una cultura política pluralista que busca representación y, como tal, constituyen una piedra angular de la democracia.

BIBLIOGRAFÍA

Ahumada, C. 2000 "Una década en reversa" en Ahumada, C.; Caballero, A. y Castillo, C. (eds.) *¿Qué está pasando en Colombia? Anatomía de un país en crisis* (Bogotá: El Áncora Editores) pp. 15-48.

Almeida, P. 2008 *Waves of protest: Popular struggle in El Salvador, 1925-2005* (Minneapolis: University of Minnesota Press).

Archila, M. 1995 "Tendencias recientes de los movimientos sociales" en Leal, F. (ed.) *En busca de la estabilidad perdida. Actores políticos y sociales en los años noventa* (Bogotá: Tercer Mundo) pp. 251-301.

Archila, M. 2003a "Colombia 1975-2000: de crisis en crisis. Contexto" en Archila, M. et al. (eds.) *25 Años de luchas sociales en Colombia* (Bogotá: CINEP) pp. 13-43.

Archila, M. 2003b *Idas y venidas, vueltas y revueltas: Protestas sociales en Colombia 1958-1990* (Bogotá: CINEP).

Archila, M. 2012 "Luchas laborales y violencia contra el sindicalismo en Colombia, 2002-2010. ¿Otro daño 'colateral' de la Seguridad Democrática?" en *Controversia: Violencia Contra el Sindicalismo, 198*: 163-218.

Bouvier, V. (ed.) 2009 *Building peace in a time of war* (Washington: United States Institute of Peace).

Bushnell, D. 1993 *The making of modern Colombia: A nation in spite of itself* (Berkeley: University of California Press).

Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) 2013 "Base de datos de luchas sociales" en <http://www.cinep.org.co/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=39&Itemid=90&lang=EnUS> Acceso 6 de junio de 2013.

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) 2009 *Víctimas emergentes: Desplazamiento, derechos humanos y conflicto en 2008* (Bogotá: CODHES).

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) 2011 "De la seguridad a la prosperidad democrática en medio de la guerra" en *Documentos CODHES*, *23*: 1-73.

Correa, G. 2007 2.515 o esa siniestra facilidad para olvidar: veintiún años de asesinatos sistemáticos y selectivos contra sindicalistas en Colombia (1986- 2006)" en *Cuadernos de Derechos Humanos*, *19:* 1-149.

Corredor, C. 1990 "Crisis agraria, reforma y paz: De la violencia homicida al genocidio" en Corredor, C.; González, J. y Zambrano, F. (eds.) *Un país en construcción: Poblamiento, problema agrario y conflicto social* (Bogotá: CINEP) pp. 19-80.

Delgado, Á. 2007 "Afirmaciones y sorpresas de la protesta laboral" en *Cien Días vistos por CINEP*, 61. En <http://www.cinep.org.co/index.php?option=com_docman&Itemid=126&limitstart=14> acceso 19 de junio de 2013.

Delgado, Á. 2008 "Anotaciones a la política del partido comunista" en *Controversia* (Bogotá: CINEP), 190, Número Especial.

Delgado, Á. 2012 "Pequeña y gran minería: un solo problema" en *Revista Cien días vistos por CINEP*, *76*: 45-49.

Departamento Nacional de Planeación (DNP) 2013 *Pobreza monetaria y desigualdad del ingreso: Análisis de los resultados recientes 2010-2012* (Bogotá: DNP).

Duque, J. 2012 "El Partido Comunista Colombiano en el post Frente Nacional" en *Estudios Políticos*, 41: 124-148.

Garay, L. 2002 "Estrategias, dilemas y desafíos en la transición al Estado Social de Derecho en Colombia" en Garay, L. (ed.) *Colombia, entre la exclusión y el desarrollo* (Bogotá: Contraloría General de la República) pp. xv-xxix.

Gilhodes, P. 1970 *Las luchas agrarias en Colombia* (Bogotá: Ediciones el Tigre de Papel).

Gutiérrez, F. 2006 "Estrenando Sistema de Partidos" en *Análisis Político*, *19*(57): 106-125.

Jenkins, C. 1995 'Social movements, political representation, and the state: An agenda and comparative framework' en Jenkins, C. (ed.) *The politics of social protest: Comparative perspectives on states and social movements* (Minneapolis: University of Minnesota Press) pp. 14-38.

Kline, H. 1995 *Colombia: Democracy under assault* (Boulder: Westview Press).

Leal, F. 1991 "Los movimientos políticos y sociales: Un producto de la relación entre Estado y sociedad civil" en *Análisis Político*, *13*: 4-23.

Londoño, R. 1989 "Crisis y recomposición del sindicalismo colombiano (1946-1980)" en Tirado, A. (ed.) *Nueva Historia de Colombia: Relaciones Internacionales, Movimientos Sociales* (Bogotá: Panamericana) pp. 271-306.

McAdam, D.; Tarrow, S. y Tilly, C. 2001 *Dynamics of Contention* (Cambridge: Cambridge University Press).

Moncayo, M. y Rojas, F. 1978 *Luchas obreras y política laboral* (Bogotá: La Carreta).

Pachón, M. 2009 "Colombia 2008: éxitos, peligros y desaciertos de la política de seguridad democrática de la administración Uribe" en *Revista de Ciencia Política*, *29*(2): 327-353.

Palacios, M. 2001 *De populistas, mandarines y violencias: Luchas por el poder* (Bogotá: Planeta).

Pécaut, D. 1973 *Política y sindicalismo en Colombia* (Bogotá: Ediciones Culturales).

Pizarro, E. 1992 'Revolutionary guerrilla groups in Colombia' en Bergquist, C.; Peñaranda, R. y Sánchez, G. (eds.) *Violence in Colombia: The contemporary crisis in historical perspective* (Wilmington: SR Books) pp. 169-193.

Ramírez, M. 2001 *Entre el Estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo* (Bogotá: Colciencias, ICANH).

Restrepo, A. y García, M. 2012 *Revista Cien días vistos por CINEP*, *77*: 58-62.

Rodríguez, A. et al. 2005 "Resistir para vivir: Una mirada histórica al movimiento indio del Cauca: 1970-2000" en *Polémica* 4, Informe Especial.

Romero, M. 2000 'Changing identities and contested settings: Regional elites and the paramilitaries in Colombia' en *International Journal of Politics*, *14*(1): 51-69.

Santana, P. 1983 *Desarrollo regional y paros cívicos en Colombia* (Bogotá: CINEP).

Sarmiento, F. 2008 "La política de lo humano: Víctimas y movilización por el acuerdo humanitario" en *Revista Cien días vistos por CINEP*, 62. En <http://www.cinep.org.co/index.php?option=com_docman&Itemid=126&limitstart=14> Acceso 9 de junio de 2013.

Silva, G. 1989 "Carlos Lleras y Misael Pastrana: Reforma del Estado y crisis del Frente Nacional" en Tirado, A. (ed.) *Nueva historia de Colombia: Historia Política 1946-1986* (Bogotá: Planeta).

Urrutia, M. 1969 *Development of the Colombian labor movement* (New Haven: Yale University).

Valderrama, M. 1998 "Encuentro Nacional de los Comités de Laboristas de la ANDI: Crisis del sindicalismo" en *Revista de la ANDI*, *152*: 6-19.

Valencia, L. 2007 "¿Por qué confluyeron paramilitares y políticos?" en *Arcanos 13*: 2-3.

Velasco, M. 2007 "Los efectos de la Constitución de 1991 sobre la protesta social en Colombia: un análisis estadístico" en *Revista Colombiana de Sociología*, *28*: 73-93.

Velasco, M. 2011 'Democracy, governance and social movements in Colombia: 1990-2006' en Tanaka, M. y Jácome, F. (eds.) *Challenges to democratic governance: Political and institutional reforms and social movements in the Andean region* (Lima: IEP, IDRC) pp. 183-209.

Vidal, J. 2012 "Panorama del sindicalismo en Colombia" en *Análisis* (Bogotá: F. Ebert Stiftung - Colombia) 3.

Zamosc, L. 1989 'Peasant struggles of the 1970s in Colombia' en Eckstein, S. (ed.) *Power and popular protest: Latin American social movements* (Berkeley: University of California Press) pp. 102-131.

CÓMO CITAR ESTA PUBLICACIÓN:
Velasco, Marcela. 2017. "Movimientos sociales contenciosos en Colombia, 1958-2014" Pp. 505-522 en Paul Almeida y Allen Cordero Ulate, Eds., *Movimientos Sociales en América Latina: Perspectivas, Tendencias y Casos.* Buenos Aires: CLACSO.

21

Salvador Martí i Puig*

MOVIMIENTOS SOCIALES EN NICARAGUA (1979-2014): UN CASO EXCEPCIONAL

INSURGENCIA: HISTORIA DEL FSLN Y EL MOVIMIENTO SANDINISTA

Siguiendo el ejemplo de la Revolución Cubana, surgieron varios grupos revolucionarios en América Latina. En 1961, en Nicaragua, se creó el Frente de Liberación Nacional (FLN), que al poco tiempo añadió la referencia a Sandino convirtiéndose, así, en el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Fue el resultado de la voluntad de jóvenes radicales que se oponían a los grupos políticos tradicionales y dominantes, que detestaban el hecho de que Anastasio Somoza García había instaurado un régimen patrimonial por naturaleza y que había cooptado a los miembros de la oposición y los sindicatos. Junto al marxismo, hubo otras tres corrientes teóricas en las que el FSLN basaría su identidad: el vanguardismo, el foquismo y el nacionalismo. De leer a Lenin y Débray, y de estudiar la guerra en Argelia y otras revoluciones, los sandinistas tomaron el concepto de *vanguardia revolucionaria*. Por su parte, el foquismo fue un legado de la Revolución Cubana. Nacionalismo y antiimperialismo provienen del mito de Augusto César Sandino, político liberal y jefe guerrillero que fue la figura que lideró el rechazo a la presencia estadounidense en Nicaragua durante el primer tercio del siglo XX.

* Universidad de Girona, Girona, España.

Una vez que se hubo creado el FSLN, tuvieron prioridad por sobre la organización llevar a cabo las actividades de la guerrilla y llegar a las zonas rurales, la educación política de las masas y generar malestar en las zonas urbanas. La guerrilla sandinista fue, durante la mayor parte de su historia, un pequeño foco guerrillero asentado en las montañas en el norte y centro del país, y compuesto principalmente por estudiantes. Esta experiencia dio lugar a una mitología conocida como *la mística de las montañas*, que cuenta la historia de cómo se desarrolló la actividad guerrillera embrionaria (Cabezas, 1982). En cualquier caso, a pesar de su temprana fundación, los analistas políticos coinciden en clasificar al FSLN como una organización guerrillera que pertenece a la "segunda ola de guerrillas" en América Latina, dado que llegó a ser políticamente relevante después de 1975 (Wickham-Crowley, 1993, 2014). La naturaleza hermética del régimen de Somoza y su rechazo a cualquier posibilidad de reforma unificó en la insurrección a una parte considerable de los grupos, organizaciones y movimientos opositores. De esta manera, solo en los años previos a la insurrección (y a pesar de las divisiones internas dentro del FSLN)[1] se realizaron ese tipo de actividades para penetrar activamente en los grupos urbanos. Asimismo, es importante recordar los orígenes urbanos y estudiantiles de la mayoría de los líderes de la guerrilla sandinista, y el papel de las escuelas y universidades como un caldo de cultivo para los opositores de Somoza. Otro elemento importante fue el impacto de la difusión de la teología de la liberación entre grupos cristianos, que dieron lugar a las Comunidades Eclesiales de Base (ver capítulo de Mackin, en este volumen).[2] En este sentido, las guerrillas que se habían establecido en las zonas rurales y que apoyaban a los campesinos se percataron de la aparición de estos nuevos sujetos sociales.[3] El levantamiento de los grupos urbanos liderado por el FSLN a fines de los 70 representó una

1 Durante los años 70 se produjeron dos divisiones que generaron tres tendencias internas: el GPP que se orientó hacia el foquismo, la Tendencia Proletaria que estaba más orientada hacia los trabajadores y la Tendencia Tercerista / Insurreccional que propuso una alianza policlasista.

2 La literatura sobre la influencia y el papel jugado por la religión en el proceso político nicaragüense es abundante. No obstante, se destacan las siguientes obras: Berryman (1984), Cabestero (1983) Girardi y Randall (1989). Para un análisis de este fenómeno en la región latinoamericana, ameritan ser consultados: Levine (1986, 1992) y Mackin (en este volumen).

3 Según Vilas (1984: 169-198), las características básicas del grupo revolucionario fueron su juventud y su naturaleza popular, en el sentido general del trabajo de masas, en vez del proletariado.

expresión espontánea del rechazo masivo a las medidas económicas, sociales y políticos de la dictadura.

Sobre todo, el FSLN fue un actor político caracterizado por una actividad específica –la lucha armada– en un contexto específico –el marco hostil y represivo del régimen de Somoza–, con el objetivo principal de obtener el poder del Estado. En consecuencia, el FSLN fue un grupo político armado que estaba altamente centralizado, basado en vínculos verticales y poseía una estructura organizacional rígida, hermética. Las unidades de base fueron las milicias y las células. Los militantes, dada la naturaleza clandestina de la organización, estaban comprometidos con una serie de responsabilidades que implicaban una dedicación exclusiva y disciplinada.

En cuanto al tamaño, el FSLN siempre fue muy reducido.[4] Con respecto a la estructura del poder organizativo,[5] se caracterizó por su sencillez. Los recursos de poder organizativo estaban concentrados y administrados por la dirigencia. Un tema de vital importancia fue la naturaleza de la relación entre el frente, las organizaciones de base y los movimientos sociales, que en muchos casos habían sido creados bajo los auspicios del propio FSLN. Esta relación se caracterizó por la dependencia de las organizaciones a los intereses del FSLN en relación a la lucha armada. En este aspecto, la articulación entre la guerrilla y el *movimiento popular* en Nicaragua fue lo contrario de lo que sucedió en la mayoría de los países de América Latina y, particularmente, en El Salvador y Guatemala donde primero se desplegó la activación del movimiento popular y recién después el acoplamiento con, o la creación de, plataformas guerrilleras, que eran de naturaleza unitaria. Tal fue el caso del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el primer ejemplo (Almeida 2008), y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG),

---

4 Durante los años 60 y la primera mitad de los 70, la organización tenía apenas 150 miembros en total, incluyendo tanto a los adherentes legales como a los clandestinos. Si se incluyen los colaboradores, el número aumenta un poco. A partir de 1977, con la descomposición progresiva del régimen de Somoza y las diferentes insurrecciones, hubo un claro aumento en los integrantes de la organización. Sin embargo, después de llevar a cabo un recuento exhaustivo de todos los miembros y colaboradores de los tres grupos, la cifra no llegó a 500 (Arce en Invernizzi et al., 1986; Dunkerley, 1988).

5 Utilizamos el concepto tal como Ángelo Panebianco (1990) lo presenta en su obra. La estructura de poder organizativo se basa en los llamados "recursos de poder organizativo" en relación con los factores en torno de los cuales se llevan a cabo las actividades vitales de la organización: competencia, relaciones con el entorno, comunicación, reglas formales, financiación y reclutamiento.

en el último. En consecuencia, las organizaciones de masas y los movimientos sociales que apoyaron la lucha contra la dictadura adhirieron y obedecieron las órdenes del Frente.

Como resultado, la práctica de la organización popular en Nicaragua fue relativamente escasa hasta mediados de los 70. El nacimiento y la activación de los movimientos fueron, en gran medida, el resultado de los militantes sandinistas que pretendían articular amplios grupos en apoyo de la lucha armada. Fue así como emergieron la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) y el Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER). De esta manera, a diferencia de lo que sucedió en El Salvador, donde la red asociativa de base contaba con una larga tradición y nunca estuvo subordinada incondicionalmente a las directivas de los grupos guerrilleros (en beneficio de una mayor independencia, pero en detrimento de la eficacia y la velocidad de la lucha insurgente), en Nicaragua la absoluta dependencia de estas organizaciones a las directivas del FSLN significó una sincronización notable de la lucha armada. El resultado fue el triunfo de la insurrección que derrocó a la dinastía de los Somoza el 19 de julio de 1979. Sin embargo, esa misma dependencia de la movilización popular con el liderazgo del FSLN significaría, también, la limitación del desarrollo autónomo de los movimientos en una etapa posterior.

LA REVOLUCIÓN SANDINISTA: MOVILIZACIÓN Y GUERRA

El proyecto revolucionario de Nicaragua, como es el caso de toda revolución social en un país en vías de desarrollo, había combinado varios objetivos. Las revoluciones sociales en las sociedades *periféricas* versan en tres cuestiones básicas: la cuestión de la democracia, la cuestión de la soberanía nacional y la cuestión del desarrollo y la transformación de las estructuras sociales y económicas. El problema con este proceso, no obstante, es la preeminencia de uno de estos temas respecto de los otros. A su vez, esta situación refiere a las relaciones entre los actores que promueven (o dificultan) y lideran (o enfrentan) el proceso revolucionario. Por esa razón, en 1979 comenzó una dinámica en la cual los diferentes actores intentaron dominar la comunidad política y las estructuras mismas del sistema. Uno de los principales problemas fue que la unidad creada durante el derrocamiento del régimen (que era considerado dictatorial) estuvo en contraposición al proyecto de cómo, y en qué medida, transformar los fundamentos institucionales y materiales de la sociedad nicaragüense. Cuando llegó el momento de gestionar y construir un proyecto común de transformación social, las alianzas que se habían creado con el objetivo de luchar contra un enemigo común se debilitaron. Algunos consideraron la caída de Somoza como el final de un proceso

y otros como el principio. En esta tensa situación, el FSLN rápidamente dominó la escena política y tomó el control de las instituciones del Estado y las Fuerzas Armadas, con el objetivo de crear un nuevo modelo social, político y económico que sus líderes denominaron la "Revolución Popular Sandinista".

Sin embargo, al mismo tiempo que se establecieron los principios y las normas de las nuevas instituciones, también se desarrolló un proceso político dentro de la sociedad civil como resultado de la manera traumática en que sucedieron los acontecimientos de la revolución. La ruptura violenta con el viejo orden se sintió no solo en las esferas jurídicas administrativas del Gobierno, sino también en todas y cada una de las instancias de poder. En este sentido, la cuestión clave en las revoluciones sociales es que no solo es necesario construir un nuevo *Estado* sino también articular, al mismo tiempo, una nueva *sociedad civil* (Foran, 2005). Sin embargo, la caída de la dictadura fue seguida por la estampida de todo el aparato militar, político y jurídico administrativo, de tal manera que el *poder emergente* tuvo que reconstruir toda la estructura organizativa necesaria para atender las necesidades básicas de la población (Núñez et al., 1988: 195-196).

En este contexto, pocos días después del triunfo de la revolución en *Barricada*, el periódico oficial del FSLN, se proclamó el lema: *¡Organización, organización, organización!* (Gilbert, 1988: 41). Esto significó que los cuadros y dirigentes de las organizaciones sociales sandinistas tuvieron que dejar de lado su papel como activistas para ocupar puestos de responsabilidad institucional, donde se reorganizó la vida cotidiana de la población y se realizaron esfuerzos para suministrar bienes y servicios públicos. De esta manera, las organizaciones de base que habían surgido como la retaguardia para apoyar la lucha revolucionaria, luego, se convirtieron en el andamiaje que generó instituciones y un nuevo orden. Entre las organizaciones que existían antes del triunfo de la insurrección estaban: la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (ANDEN), la Federación de Trabajadores de la Salud (FETSALUD), la Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN), de los Comités de Defensa Civil –posteriormente, Comités de Defensa Sandinista (CDS)– la Asociación de Mujeres sobre la Problemática Nacional (AMPRONAC) –luego, Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa Amanda Espinoza (AMNLAE). Todas permanecieron en funcionamiento durante el régimen revolucionario y se consolidaron como espacios para la participación ciudadana. Además, tras el triunfo de la insurrección y la revolución surgieron nuevas organizaciones inspiradas en los sandinistas, con el objetivo de organizar y vincular todas las áreas de las actividades productivas y sociales del

país. Así, nacieron la Unión Nacional de Empleados (UNE), la Central Sandinista de Trabajadores (CST), la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura (ASTC), la Juventud Sandinista 19 de Julio (JS19J), la Asociación de Niños Luís Alfonso Velásquez (ANS) y la Unión Nacional de Agricultores y Granjeros (UNAG).

Inicialmente, el movimiento de base sandinista –que fue conocido como Organizaciones de Masas– fue un instrumento indispensable en la articulación de la participación y organización de las tareas orientadas a la comunidad, que el Estado no podía llevar a cabo. Según Vilas (1991: 20), gracias a esta red de organizaciones,

> […] el pueblo recuperó su voz para hacer oír sus problemas, para expresarlos por sí mismo, y retomó y potenció su capacidad de acción colectiva. Por primera vez en mucho tiempo –para muchos, por primera vez en su vida– la gente se sintió parte de una comunidad nacional, de un todo compartido. Los grandes logros sociales de la revolución –la alfabetización, la medicina preventiva, la educación de los adultos– fueron posibles por el involucramiento masivo, voluntario y esperanzado de una multitud de hombres y mujeres, mayoritariamente pertenecientes a las clases populares.[6]

Sin embargo, el movimiento popular sandinista tuvo limitaciones y dificultades para crear sus propias perspectivas y para proyectarse a la sociedad, independientemente del FSLN y las instituciones del Estado.[7] Esta autonomía limitada, a su vez, se erosionó a consecuencia del conflicto que se desató con la guerra de la Contra a principios de los 80 (Martí i Puig, 1997). La guerra, así como puso fin a muchas de las políticas sociales, creó las condiciones para un mayor control y centralización, y acentuó la jerarquía vertical en el Gobierno. Este fenómeno se sintió en todos los niveles, pero especialmente en los movimientos sociales que apoyaban a los sandinistas. Estos movimientos, que mantenían vínculos semiorgánicos con el FSLN, terminaron por convertirse en una "cadena de transmisión" de los intereses del FSLN y las necesidades estratégicas del régimen en ese momento. En esta lógica, el FSLN convocó y movilizó a las organizaciones del movimiento popular como si fueran piezas de ajedrez. Esta tendencia, además, se incrementó con la intensificación de la guerra y las mayores restricciones económicas. En este nuevo escenario, hubo cre-

6 [N. de la T.] De la traducción original del español al inglés realizada por el autor.

7 Al mismo tiempo, la función que el FSLN asignó a estas organizaciones nunca fue clara, aunque oficialmente su tarea era vigilar y trabajar para fortalecer la revolución y ofrecer los instrumentos para la expresión de las demandas más importantes de las masas (Núñez; en Pozas, 1988: 20-21).

cientes contradicciones entre los intereses inmediatos y cotidianos de la población y aquellos que la dirigencia sandinista llamó "intereses estratégicos" para la defensa del proyecto revolucionario. El resultado fue que la participación popular comenzó a decaer, ya que se esperaba que las organizaciones del movimiento popular convencieran a la gente que tenían que trabajar más, reclutar a los jóvenes para el frente (para ir a la guerra) y posponer sus demandas específicas (Vilas, 1990: 24).

En estas circunstancias, el FSLN postergó el tratamiento de las demandas específicas del pueblo, con el argumento de la guerra y la necesidad de priorizar todos los esfuerzos a tal fin. Así, se bloquearon las críticas, se postergaron las demandas y se agudizó la exigencia de disciplina. Al mismo tiempo, se adoptó un discurso en el que la contrarrevolución se basaba exclusivamente en la política antisandinista del Gobierno estadounidense, que la Contra obedecía por razones esencialmente externas. Este argumento, a pesar de que fue eficaz para mantener una amplia solidaridad interna para derrotar la pretensión de la administración Reagan de aislar a Nicaragua, también dificultó el reconocimiento de los problemas sociales internos relacionados con la manera y el estilo del proyecto sandinista (Martí i Puig, 2007).

En este contexto, caracterizado por lealtades y alianzas frágiles, el FSLN convocó a elecciones en 1990. La apertura de espacios para la disidencia en el marco de las instituciones del régimen podría haber significado la consolidación del proyecto revolucionario, pero en este momento de guerra y crisis aguda los partidarios de los sandinistas no aprobaron el despliegue de la campaña electoral del FSLN, bastante festiva y con una distribución generosa de dádivas (Vickers, 1990; Vilas, 1990). El eslogan creado por los militantes del Frente fue *¡Todo será mejor!,* lo que llevó a muchos nicaragüenses a preguntarse: *¿pueden ponerse peor las cosas?* El hecho es que las elecciones de 1990 tuvieron un resultado inesperado: le dieron el poder a la coalición de la oposición (compuesta por 14 partidos políticos) liderada por Violeta Barrios de Chamorro.

LA DERROTA ELECTORAL Y EL FIN DE LA REVOLUCIÓN: EL NEOLIBERALISMO Y EL DEBATE INTERNO DE LOS SANDINISTAS

Con la retirada del FSLN del poder y la aplicación de las políticas neoliberales, el movimiento popular sandinista se convirtió en un protagonista inesperado y paradójico. Después de casi 11 años de relación paternalista entre los sindicatos y el Estado, los gremios modificaron su rol y desafiaron al poder Ejecutivo ante la ejecución de las "nuevas" políticas de ajuste económico, por un lado, y, por el otro, comenzaron

a conquistar nuevos espacios de autonomía en el aparato del partido que previamente los había protegido.[8]

En cuanto a la conquista de mayores áreas de autonomía, como muchas otras organizaciones vinculadas al FSLN, los sindicatos nunca pensaron que los sandinistas perderían las elecciones y, por tanto, no se preocuparon por asegurar su futuro financiero o legal. A fin de resistir la derrota electoral del FSLN, las organizaciones sindicales que estaban a favor del FSLN se organizaron en el Frente Nacional de Trabajadores (FNT) con el objetivo de crear un sólido bloque gremial. A partir de ese momento, la relación entre el FSLN y los sindicatos se hizo más compleja y tensa. Los estilos de gestión burocrática y la imposición de dirigentes fueron objeto de crítica. En todo caso, la prioridad de FNT fue desafiar la nueva política del Gobierno, convirtiéndose en una de las principales fuerzas de la oposición. Con respecto a los sindicatos que no apoyaban a los sandinistas (agrupados en torno a la organización llamada Congreso Permanente de los Trabajadores, CPT), aunque en un principio respaldaron al Ejecutivo, luego se distanciaron, creando una fuerza de oposición independiente.

Sin embargo, en los primeros años de la década del 90, lo que acaso comenzó como un conflicto laboral terminó como una insurrección (Almeida, 2014). De hecho, en un punto las movilizaciones casi pasaron a ser un conflicto civil debido a los enfrentamientos violentos entre manifestantes y grupos armados antisandinistas. Ante esta situación, los dirigentes del FSLN oficiaron de mediadores entre los movimientos y el Gobierno. Así, por casi 5 años, entre 1990 y 1995 el FSLN se convirtió en mediador con el objetivo de "crear acuerdos" en derredor de las políticas de privatización o laborales (López, 2013). En este contexto, una de las situaciones más destacadas fue que las organizaciones sindicales, que en años anteriores habían estado divididas debido a sus relaciones con el régimen sandinista, se sentaron del mismo lado en la mesa de negociación, defendiendo intereses similares, mientras que los ex administradores del Estado revolucionario y los *yuppies* del nuevo poder Ejecutivo se convirtieron en empresarios (Stahler-Sholk, 1994: 77). Como resultado, el proceso de conflicto y negociación debido a las privatizaciones trajo aparejada la

8 Sobre este tema, un dirigente gremial afirmó en una entrevista: "Durante la Revolución, nunca tuvimos que luchar por demandas sociales tales como comedores, transporte, alimentos o medicinas. Fueron obsequios brindados por el Frente Sandinista. A cambio, apoyamos la política del Gobierno: organizamos a los trabajadores en brigadas para ir a cosechar café, para educar, para alistarse al servicio militar [...]. Ahora todo ha cambiado. A partir de ahora no vamos a lograr nada si no luchamos [...]" (Martí i Puig, 2007: 136).

autonomía de los sindicatos, destacando las diferencias de clase más allá de las líneas partidarias.

Fue en este nuevo contexto, caracterizado por la redefinición de las funciones del Estado y la ruptura de las lealtades y preferencias partidarias, que algunos dirigentes gremiales se dieron cuenta de la importancia de articular un movimiento sindical que fuera capaz de hacerle frente a la nueva élite empresarial (incluyendo a algunos sandinistas) y a las políticas neoliberales. Además del sector sindical, otros actores sociales también se volvieron relevantes en los 90. Estos grupos incluyeron a los movimientos barriales y el movimiento de mujeres. Después de la derrota electoral sandinista en los 90, el movimiento que logró su autonomía y criticó la jerarquía estricta del FSLN con más intensidad fue el movimiento de mujeres. Sin embargo no solo se opuso al FSLN, al que criticó progresivamente por machista, sino que además tuvo que enfrentar directamente a un nuevo Gobierno que promovió una contrarrevolución legal en cuestiones morales y de género. En este sentido, es necesario acordar con Kampwirth (2008), que uno de los sucesos más sorprendentes en las elecciones de 1990 no fue ni el final pacífico de la Revolución Sandinista ni la desmovilización de los Contras, sino la irrupción explosiva del feminismo autónomo, incluyendo al feminismo lésbico. La presentación oficial de este nuevo movimiento de mujeres tuvo lugar el 8 de marzo de 1991 (el Día Internacional de la Mujer) con una actividad denominada Festival del 52%, que representó una ruptura definitiva y pública entre la AMNLAE (la organización sandinista oficial y orgánica del FSLN) y el feminismo autónomo[9] (Kampwirth, 2004: 63-65). Más tarde, este movimiento daría lugar a poderosas redes de defensa y promoción de los derechos de las mujeres que, en contraste con la década anterior, serían ideológica y socialmente transformadoras, como la Coalición Nacional de Mujeres que recabó promesas de todos los partidos en los meses previos a las elecciones nacionales de 1996. Durante esa década el movimiento de mujeres no solo evolucionó, también tuvo que enfrentar las políticas creadas por el Estado en las presidencias de Doña Violeta Chamorro y Arnoldo Alemán y, en ese aspecto, no fue casualidad que el ministro de Educación fuese el mismo en ambas

9 Asimismo, después de las elecciones de 1990 se fundaron varias organizaciones: SHOMOS (una organización de derechos gay), la Fundación Nimehuatzín (una Fundación para prevenir el SIDA) y Nosotras (un grupo feminista). En 1991, abrió una organización para la protección de los derechos de las minorías sexuales –la Fundación Xochiquetzál–, seguida por organizaciones lésbicas como Entre Amigas y el Grupo por la Visibilidad Lésbica. En 1992, más de 25 grupos se unieron a la Campaña por una Sexualidad Libre de Prejuicios (Kampwirth, 2008).

administraciones. El debate sobre el aborto terapéutico (con la intención de prohibirlo) comenzó en este período, al mismo tiempo que se inició, además, una campaña para desprestigiar a las ONG.

Con respecto al movimiento barrial, las actividades realizadas por las comunidades de vecinos fueron considerables. Se articularon alrededor de varias plataformas que iban desde las Comunidades Eclesiales de Base a la militancia política del Movimiento Comunal, que era de afiliación sandinista. El objetivo de este movimiento era la autodefensa ante la sociedad del tipo "sálvese quien pueda" que estaba surgiendo con el neoliberalismo. Sin duda, lo que ayuda a comprender la resistencia de una parte considerable de la población a las drásticas políticas de ajuste estructural y la creciente incertidumbre económica y social fue la capacidad de organización de la sociedad nicaragüense. Con respecto a este caso, un Informe de las Naciones Unidas (Envío 1994/155) encontró lo siguiente:

> El 75% de las familias nicaragüenses vive por debajo del nivel de pobreza y el 44% está en la extrema pobreza [...]. Frente a esta creciente depauperación social resulta significativo que no se hayan originado más explosiones sociales [...]. Probablemente, un factor determinante de esta resistencia sea la arraigada tradición de organización, disciplina social y solidaridad de los nicaragüenses.[10]

En los años 90, la profunda crisis económica, los despidos masivos de empleados públicos y los drásticos recortes de los servicios sociales demostraron que las decisiones adoptadas en la esfera pública podrían estallar con fuerza en la esfera doméstica, implicando la emergencia de actores sociales que previamente habían aparecido en un nivel subordinado.

Sin embargo, las movilizaciones, que habían aumentado durante la primera mitad de la década, disminuyeron notablemente a partir de 1997 y, en particular, después de la firma del Pacto entre Arnoldo Alemán (Presidente entre 1996 y 2001 y líder del Partido Liberal Constitucionalista) y Daniel Ortega (único líder histórico del FSLN) en el año 2000.[11] Desde entonces, las movilizaciones masivas contra las políticas neoliberales cedieron lugar a otras protestas, que se centraron en denunciar la impunidad del poder y la falta de transparencia con la que los políticos estaban actuando. Por último, cabe señalar que en

10 [N. de la T.] De la traducción original al inglés del autor.

11 Para más información sobre el Pacto sellado entre Ortega y Alemán en el año 2000, ver Martí i Puig (2008) y Close et al. (2012).

el mismo período en Nicaragua también surgió un movimiento activista –contra el Plan Puebla Panamá– llamado *Otro mundo es posible* (Collombom, 2012), que con el tiempo menguó. Asimismo, también hubo un movimiento contra el Tratado de Libre Comercio que se estaba consolidando en América Central con el ALCA (CAFTA-RD; ver el capítulo 23 en este volumen).[12] El movimiento local se vinculó con una red transnacional que era crítica de la globalización y se inspiraba en el zapatismo (Rovira, 2009). Este movimiento participó en las reuniones regionales contra el neoliberalismo, pero nunca fue tan significativo como las movilizaciones contra el ALCA en Costa Rica.

EL PACTO DEL AÑO 2000 Y LA LLEGADA DE ORTEGA AL PODER (2000-2014)

Con la firma del Pacto en el año 2000, la movilización ciudadana tuvo una lógica diferente: en los años siguientes las movilizaciones no fueron lideradas por los sindicatos o las asociaciones barriales en contra de las políticas aplicadas por el Gobierno; por el contrario, las redes civiles de organización ciudadana (muchas de las cuales estaban vinculadas o respaldadas por ONG) protestaron por la reducción de los "espacios de responsabilidad", debido al acuerdo entre Alemán y Ortega, así como por las políticas para facilitar el control y la intervención del Gobierno sobre las ONG, en particular después de la tragedia del Huracán Mitch, donde descolló el Gobierno de Alemán ante el episodio por su gestión incompetente y corrupta de la catástrofe.[13] En esta nueva fase de protestas se destacaron dos tipos de movilizaciones: por un lado, las que reaccionaron contra las políticas conservadoras sobre cuestiones morales y de salud reproductiva implementadas por los liberales y el propio FSLN[14] (Kampwirth, 2009);

---

12 En relación a esta red, cabe señalar que los representantes nicaragüenses estuvieron presentes en el *Foro Mesoamericano por la Autodeterminación y Resistencia de los Pueblos*, que tuvo lugar en Tapachula (México) en 2001. Sin embargo, los delegados no fueron actores clave, dado que el FSLN (en contraste con los otros partidos de izquierda en la región) mantuvo una posición ambigua (Collombom, 2012).

13 El episodio del Huracán Mitch y la confrontación entre el Gobierno de Alemán y las ONG se describe en detalle en Kampwirth (2004).

14 Sobre la cuestión de moralidad y género, cabe destacar que el FSLN votó en contra del aborto terapéutico en 2006. Según Kampwirth (2008), la razón fundamental por la que los representantes sandinistas en la Asamblea Nacional votaron de esa manera fue por temor a que, si no lo hacían, el Partido perdería las elecciones presidenciales en noviembre. Sin embargo, más allá del discurso de la dirigencia sandinista, también vale la pena señalar el deseo de Daniel Ortega de debilitar a las feministas, un movimiento que ya se había distanciado del FSLN algunos años antes y que lo había denunciado abiertamente.

y por otro lado, las protestas por la reducción de libertades y derechos como consecuencia de la politización de la administración de la Justicia y del Estado en general. Este segundo tipo de protestas aumentó desde que Daniel Ortega llegó al poder.[15]

Una cuestión fundamental es que el FSLN que conquistó la Presidencia con Ortega a finales de 2006 era muy diferente de la insurgencia sandinista que derrotó a la dictadura de los Somoza en 1979. Desde 1990 Daniel Ortega, que se desempeñó como Secretario General del Partido FSLN, triunfó en todas las batallas partidarias internas y, finalmente, su facción controló toda la capacidad organizativa del FSLN, reformándolo a su antojo, a pesar de las derrotas electorales de 1990, 1996 y 2001 (Martí i Puig, 2010). La "exitosa" adaptación del FSLN a las derrotas electorales y el cambio institucional implicó una transformación profunda, en la medida en que pasaron a depender de la voluntad de su líder (y de su esposa, Rosario Murillo) y a reclutar a sus miembros en masa a través del Estado y a expulsar a los disidentes. Ortega, además, con el objetivo de neutralizar a sus enemigos tradicionales, terminó pactando con ellos y adoptando parte de su agenda. Este fue el caso, por ejemplo, con el tema del aborto terapéutico.

Por lo tanto, cuando Daniel Ortega asumió la Presidencia en 2007 llevó a cabo un nuevo ciclo de relaciones entre la sociedad civil, los movimientos sociales y el Gobierno. Esta dinámica fue el resultado del escaso deseo de consenso del nuevo Gobierno, y de la promoción de sus propios intereses al referirse a temas críticos como la reforma del poder Judicial, los derechos de las mujeres, la implementación de una política social financiada por el ALBA y, a partir de 2008, la transparencia electoral.[16]

Ante esta administración arbitraria y discrecional con objetivos hegemónicos,[17] y apoyado por un sector de las grandes empresas y la Iglesia Católica, muchos ciudadanos se movilizaron. Como resultado,

---

15 Para un análisis de las elecciones presidenciales de 2006 y la victoria de Daniel Ortega, ver el estudio realizado por Martí i Puig (2008).

16 Las elecciones municipales de 2008 y 2012, así como las presidenciales, legislativas y las elecciones para el Parlamento Centroamericano de 2011, estuvieron llenas de irregularidades. En este contexto, ha quedado clara la importancia de organizaciones como Ética y Transparencia (fundada en 1996) para el monitoreo de las elecciones. La organización de Hagamos Democracia también ha trabajado en el mismo sentido.

17 Desde que ha estado en el poder, el FSLN ha aprobado decretos que le han permitido controlar todas las instituciones del Estado, como fue el caso del "decretazo" el 9 de enero de 2010 o el de la decisión de la Suprema Corte de Justicia del 30 de septiembre –cuando se reunió sin el quórum necesario y en una forma no oficial– para modificar el Artículo 147 de la Constitución para allanar el camino a la reelección de Ortega. Para más información ver Martí i Puig (2013).

muchos sectores de la sociedad civil, las ONG y los periodistas denunciaron en las calles el "secuestro" de las instituciones por parte de Ortega. En respuesta, el Gobierno llevó a cabo, por un lado, estrategias para disuadir e intimidar y, por el otro, creó políticas sociales innovadoras con el objetivo de ganar apoyo político. Con respecto a las estrategias de disuasión, las políticas para controlar a la prensa y las ONG son particularmente sugestivas. Por ejemplo, el episodio de acusaciones de lavado de dinero y de actuar en perjuicio del Gobierno, contra un centro de información e investigación[18] y dos ONG (Oxfam-UK y el Movimiento Autónomo de Mujeres) (Martí i Puig y Close, 2009: 431).

Por otro lado, el FSLN también construyó una base de apoyo popular arraigada en los beneficiarios de las políticas que el Gobierno de Ortega había implementado a través de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC). Los CPC tienen una estructura similar a la de los Comités de Defensa Sandinista que operaron durante la década revolucionaria. Sin embargo, si se observan más de cerca, son claramente organizaciones paraestatales con una estructura jerárquica controlada por el FSLN (cuya máxima dirigente es Rosario Murillo, la esposa de Ortega), a fin de distribuir recursos y fondos de las políticas sociales focalizadas con el objetivo de mantener lealtades. Este tipo de organizaciones, los CPC, en lugar de generar una participación ascendente crearon una relación patrón-cliente de arriba hacia abajo. Esta base social, que se ha movilizado de vez en cuando, se utilizó como "fuerza de choque" contra los que protestaban por las medidas del Gobierno o por las "victorias cantadas" del FSLN, después de cada contienda electoral desde las elecciones municipales de 2008.[19]

Pero, más allá de la tensión entre los que apoyan a Ortega y los que están en la oposición, las movilizaciones vinculadas directamente a cuestiones de "clase" todavía tienen lugar en Nicaragua, tales como las que enfatizan los derechos laborales en un contexto legal que deja a los trabajadores rurales y urbanos sin protección. En relación a este

---

18 El centro en cuestión era el Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO).

19 Las elecciones municipales de 2008 fueron particularmente traumáticas debido a los enfrentamientos callejeros entre los partidarios y los adversarios de los sandinistas. Los resultados de Managua y León fueron los más controversiales, ya que los conteos en manos de la oposición daban una victoria clara a su líder, a pesar del hecho de que a las 11 de la noche, de ese mismo día, las calles se llenaron de pro sandinistas celebrando su victoria. En los días siguientes a las elecciones, hubo enfrentamientos enconados en las calles. La oposición convocó a la desobediencia civil y los simpatizantes del FSLN ocuparon las calles con el objetivo de disuadir cualquier protesta.

tema, las organizaciones que denuncian el trato abusivo en el sector de las maquilas[20] y las organizaciones (comunitarias) que luchan contra la extracción de minerales[21] son particularmente dignas de mención. No obstante, en este último caso, las organizaciones nicaragüenses no han protestado de manera tan intensa como en los países vecinos y todavía no hay ningún representante nicaragüense en el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), en el que participan 49 organizaciones de 8 países de América Latina, incluyendo 32 de Costa Rica, El Salvador, Honduras y Guatemala (Spalding, 2014). Sin duda, en ambos casos –maquilas y minería– las movilizaciones son menos contundentes y masivas de lo que podría esperarse debido a la pasada contención desplegada por el FSLN.

Otra pregunta para el futuro es el tema de las leyes aprobadas el 14 de junio de 2013 por la Asamblea Nacional, que da una concesión (de hasta 50 años) a una empresa China de una franja del territorio del país para la construcción de un canal interoceánico y el desarrollo de áreas de libre comercio e infraestructura.[22] Si, de hecho, la iniciativa se lleva a la práctica es probable que haya múltiples protestas por su impacto social y ambiental,[23] así como querellas con los países vecinos y las comunidades indígenas de la costa caribeña.

EVALUACIÓN Y NUEVOS DESAFÍOS

Desde los años 70 hasta 2014, el cambio experimentado por los movimientos sociales nicaragüenses ha sido muy intenso. Además, estos movimientos han tomado direcciones inesperadas que son muy diferentes del resto de la región y de América Latina. Como se señaló, du-

---

20 Sobre este tema, vale la pena destacar el trabajo del Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra (MEC), que sin enfrentarse a las empresas o la actividad de maquila de manera radical, tiene como objetivo mejorar la situación de las mujeres que trabajan en el sector. Para más información, ver el sitio web de la organización: <www.mec.org.ni>. Referencia del 9 de julio de 2013.

21 En la actualidad, se han denunciado actividades mineras en el Río Mico, el Río San Juan y la Mina Limón. Sobre estos proyectos, ver los informes del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) en <http://www.olca.cl/ocmal/>. Referencia del 9 de julio de 2013. Sobre la situación de la extracción de la minería en Nicaragua, consultar <http://www.movimientom4.org/2013/06/la-mineria-en-tiempos-de-ortega/>. Referencia del 9 de julio de 2013.

22 Este paquete legislativo otorga la concesión del macroproyecto a una compañía registrada en Hong Kong (y residente fiscal en las Islas Caimán) llamada Nicaragua Canal Development Investment Co. (HKC) que pertenece a un ciudadano chino llamado Wang Jing.

23 Este proyecto tendría un impacto irreversible en las personas, fauna y cultivos que bordean al Lago de Nicaragua y en la calidad del agua dulce de la zona (incluso la utilizada para beber).

rante los 70, los movimientos sociales emancipatorios en Nicaragua se unieron a (y algunos incluso fueron resultado de) la lucha antiautoritaria y antiimperialista dirigida por el FSLN. En consecuencia, los movimientos mantuvieron una ventaja principal (la unidad de acción y disciplina) al precio de perder autonomía. El resultado, sin embargo, parecía valer la pena: el triunfo de la insurrección y la victoria de la revolución. Durante los 80, los movimientos continuaron con la misma lógica de subordinación a la autoridad del FSLN mientras estuvo en el poder. Sin embargo, esta subordinación también significó la conquista de las demandas clásicas del movimiento popular: educación, trabajo, salud, espacio público, participación ciudadana, etcétera. El problema fue que con el tiempo –y como resultado de la agresiva guerra de la Contra– muchos de los espacios de participación se convirtieron en espacios para la movilización y la disciplina a discreción de un régimen que, acosado por la guerra, decidió "cerrar filas".

Las expresiones emergentes, típicas de los movimientos, no tuvieron lugar hasta 1990, luego de la inesperada derrota de los sandinistas en las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales de ese mismo año. Con la pérdida de poder, muchos de estos movimientos se liberaron de la lógica vanguardista y vertical del FSLN. En un contexto contradictorio en el que se combinan, por un lado, la conquista de mayores cuotas de autonomía, y por el otro, el impacto de las medidas económicas neoliberales y las políticas morales reaccionarias, hubo una explosión de movimientos que se expresó de varias maneras. Una de ellas fue la emergencia de una red feminista sólida y combativa que permaneció intacta hasta la actualidad. Otro caso, de menor impacto (dado que comenzó a declinar a mediados de los 90) fue el movimiento sindical de base que protestó contra las políticas neoliberales, las privatizaciones y los despidos masivos de servidores públicos (Almeida, 2014). Este fue un proceso que, varios años después, se desplegaría en el resto de la región.

Durante los años 90, los movimientos tuvieron una relación bastante esquizofrénica con el FSLN. Por un lado, todos (o casi todos) se han originado en la insurrección o el proceso revolucionario y, por lo tanto, consideran al sandinismo su alma mater. Aunque, por otro lado, comenzaron a distanciarse de este a raíz del rol de "*hacedor de pactos*" que el FSLN tenía con las nuevas autoridades y el statu quo. Indudablemente, el punto de viraje fue el pacto entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán en 2000, puesto que con esta alianza el FSLN abandonó su deseo de cambio radical y decidió centrarse en "adaptarse" al entorno y tratar de recuperar el poder. A partir de ese momento, las movilizaciones sociales cambiaron considerablemente en Nicaragua, superando la lógica clásica y la tradicional del conflicto y las divisiones sociales.

Desde los años 2000, la base social del sandinismo se dividió entre los leales a Ortega y la estrategia del FSLN, y los que querían renovación y eran críticos. Además, a partir de 2007 (cuando Daniel Ortega asumió la Presidencia de la República de nuevo), la principal demanda articulada en muchas de las protestas fue la denuncia de prácticas irregulares y turbias, sumadas a la impunidad. Asimismo, la manipulación y el fraude en las elecciones fueron condenados.

Sin embargo, que haya episodios de protesta denunciando el proyecto de Ortega no implica que los movimientos populares o clasistas hayan desaparecido; simplemente cabe señalar que su lógica ha sido muy diferente de la de otros países en la región. En la actualidad, en Nicaragua hay un movimiento que aún defiende los derechos de los trabajadores, denuncia los efectos nocivos que los megaproyectos tienen sobre el medio ambiente, lucha contra el maltrato a los migrantes, y que proclama la voluntad de emancipación de la juventud. Aun así, los obstáculos para construir una agenda alternativa, unificada y transformadora en el país dejan cierto sentimiento de frustración. En todo caso, los "proyectos de construcción de la nación" –como se presentaron (o soñaron) durante los 70 y los 80– no son muy probables en un contexto de globalización económica. Además, no hay ningún acuerdo entre la supuesta izquierda política y los movimientos sociales; ni tampoco hay acuerdo estratégico o táctico alguno sobre cuáles son los roles que deberían desempeñar el Estado y el mercado.

POSDATA

En la década en que Ortega está en el poder, además de los movimientos señalados, han emergido también nuevas manifestaciones de protesta. Entre éstas destacan, por un lado, el movimiento que se opone al proyecto de construir un Canal Interoceánico donde están presentes colectivos ecologistas, campesinos e indígenas, con notables conexiones internacionales; y por otro, un disperso movimiento doméstico que agrupa antiguos sandinistas (ahora en el MRS), liberales y conservadores, que protesta episódicamente y sin mucha coordinación contra la deriva autoritaria del régimen político de Daniel Ortega.

BIBLIOGRAFÍA

Almeida, P. D. 2008 *Waves of protest: Popular struggle in El Salvador, 1925-2005* (Minneapolis: University of Minnesota Press).

Almeida, P. D. 2014 *Mobilizing democracy: Globalization and citizen protest* (Baltimore: Johns Hopkins University Press).

Berryman, P. 1984 *Religious roots of rebellion. Christians in the Central American revolution* (Washington: Orbis Book).

Cabestrero, T. 1983 *Ministros de Dios, Ministros del Pueblo* (Managua: Ministerio de Cultura).

Cabezas, O. 1982 *La montaña es algo más que una inmensa estepa verde* (Managua: Nueva Nicaragua).

Close, D.; Martí i Puig, S. y McConnell, S. 2012 *The Sandinistas & Nicaragua since 1979* (Nueva York: Lynne Rienner Publishers).

Collombon, M. 2012 *Les bâtisseurs de Mésoamérique. Le Plan Puebla Panama, une politique de développement transnationale au défi de ses opposants Mexique—Nicaragua (2000-2010),* Tesis doctoral presentada en Aix-Marseille Universite: Aix-en-Provence.

Dunkerley, J. 1988 *Power in the Isthmus* (Londres: Verso).

Foran, J. 2005 *Taking power: On the origins of third world revolutions* (Cambridge: Cambridge University Press).

Gilbert, D. 1988 *Sandinistas* (Cambridge: Basil Blackwell).

Girardi, G. 1989 *Faith and revolution in Nicaragua: Convergence and contradictions* (Maryknoll: Orbis Books).

Invernizzi, G. et al. 1986 *Sandinistas* (Managua: Vanguardia).

Kampwirth, K. 2004 'Alemán's war on the ONG community' en Close, D. y Kalowaitie, D. (eds.) *Undoing democracy. The politics of electoral caudillismo* (Nueva York: Lexington Books) pp. 65-85.

Kampwirth, K. 2008 'Abortion, antifeminism, and the return of Daniel Ortega: In Nicaragua, Leftist Politics? ' en *Latin American Perspectives, 35.6*(168): 122-136, noviembre.

Kampwirth, K. 2009 "Memoria y las consecuencias no esperadas de la Revolución: feminismo y antifeminismo en Nicaragua" en Marti i Puig, S. y Close, D. (eds.) *Nicaragua y el FSLN: Política y Sociedad desde 1979* (Barcelona: Editorial Bellaterra) pp. 83-116.

Levine, D. H. 1986 *Religion and political conflict in Latin America* (Chapel Hill: University of North Carolina Press).

Levine, D. H. 1992 *Popular voices in Latin American Catholicism* (New Jersey: Princeton University Press).

López Castellanos, N. 2013 *Nicaragua, los avatares de una democracia pactada* (Managua: UCA Ediciones).

Martí i Puig, S. 2008 "El regreso del FSLN al poder: ¿Es posible hablar de realineamiento electoral en Nicaragua?" en *Revista Política y Gobierno* (México), *CIDE, XV*(1): 74-112.

Martí i Puig, S. 2009 "Nicaragua 2008: Polarización y pactos" en *Revista de Ciencia Política* (Santiago de Chile: PUC Chile), *29*(2): 515-531.

Martí i Puig, S. 2010 'The adaptation of the FSLN: Daniel Otega's leadership and democracy in Nicaragua' en *Latin American Politics and Society* (Miami: University of Miami), *4*(52): 79-106.

Martí i Puig, S. 2012 (2007) *La revolución enredada. Nicaragua 1977-1996* (Madrid: Libros de la Catarata). En <http://www.academia.edu/1621806/nicaragua_1979-1990._la_revolucion_enredada> acceso 10 de mayo de 2015.

Martí i Puig, S. 2013 "Nicaragua: la consolidación de un régimen híbrido" en *Revista de Ciencia Política* (Santiago de Chile: PUC Chile), *33*(1): 269-286.

Martí i Puig, S. y David, C. (eds.) 2009 *Nicaragua y el FSLN 1979-2009. ¿Qué queda de la revolución?* (Barcelona: Ediciones Bellaterra).

Núñez, O. et al. 1988 *La guerra en Nicaragua* (Managua: CIPRES-NORAD).

Panebianco, A. 1990 *Modelos de partido* (Madrid: Alianza Editorial).

Pozas, V. 1988 *La revolución sandinista (1979-1988)* (Madrid: Editorial Revolución).

Rovira, G. 2009 *Zapatistas sin fronteras: Las redes de solidaridad con Chiapas y el altermundismo*. (México: ERA).

Spalding, R. 2014 'Social movements in Central America' en Sánchez-Ancoechea, D. y Martí i Puig, S. (eds.) *Handbook on Central American Governance* (Londres: Routledge) pp. 268-285.

Stahler-Sholk, R. 1994 "El ajuste neoliberal y sus opciones: la respuesta del movimiento sindical nicaragüense" en *Revista Mexicana de Sociología, 3*: 59-88.

Vickers, G.R. 1990 'A spider's web' en *NACLA, XXIV*(1): 19-27.

Vilas, C.M. 1984 *Perfiles de la Revolución sandinista* (La Habana: Ediciones Casa de las Américas).

Vilas, C.M. 1990 'What went wrong?' en *NACLA, XXIV*(1): 8-18.

Vilas, C. M. 1991 "El debate interno sandinista" (México: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, CIIH-UNAM) *mimeo*.

Wickham-Crowley, T. P. 1993 *Guerrillas and Revolution in Latin America: A comparative study of Insurgents and Regimes since 1956* (New Jersey: Princeton University Press).

Wickham-Crowley, T. P. 2014 'Two 'Waves' of Guerrilla-Movement organizing in Latin America, 1956-1990' en *Comparative Studies in Society and History, 56*(1): 215-242.

CÓMO CITAR ESTA PUBLICACIÓN:
Martí i Puig, Salvador I. 2017. "Movimientos sociales en Nicaragua (1979-2014): un caso excepcional" Pp. 523-540 en Paul Almeida y Allen Cordero Ulate, Eds., *Movimientos Sociales en América Latina: Perspectivas, Tendencias y Casos*. Buenos Aires: CLACSO.

22

Eugenio Sosa*

EL MOVIMIENTO CONTRA EL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS**

INTRODUCCIÓN

El 28 de junio de 2009 a las 5:35 de la mañana la casa privada del Presidente de Honduras José Manuel Zelaya Rosales, que había sido elegido para el período del 27 de enero de 2006 al 27 de enero de 2010, fue allanada por el Ejército. El Presidente fue detenido, puesto en un avión y llevado a Costa Rica. Ese mismo día iba a tener lugar una consulta ciudadana para que los ciudadanos pudieran expresar su aprobación o desaprobación a la inclusión de una "cuarta urna" en las elecciones generales del 29 de noviembre de 2009, para votar SÍ o NO a la convocatoria de una Convención Nacional Constituyente.[1]

* Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, Honduras.

** Este ensayo aborda el movimiento antigolpista que fue impulsado por el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado. Actualmente el movimiento está en una nueva fase, ha asumido el nombre de Frente Nacional de Resistencia Popular y ha formado un nuevo partido político: Libertad y Refundación (LIBRE). En esta segunda fase, el movimiento presenta otras características que no se abordan en este capítulo.

1 Se llamó la "cuarta urna" porque las elecciones generales en Honduras incluyen tres votaciones: la primera para el Presidente de la República, la segunda para los representantes al Congreso Nacional y la tercera para el alcalde y los miembros del Consejo. La "cuarta urna" sería un referéndum o plebiscito sobre la conveniencia de convocar o no a una Convención Nacional Constituyente.

El pueblo comenzó a reunirse frente a la casa del mandatario en las primeras horas de la mañana del 28 de junio, para protestar contra el derrocamiento del Presidente Zelaya, y por la tarde se fundó el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, que durante los dos años siguientes organizó movilizaciones masivas en todo el país. La magnitud y duración del movimiento antigolpista no tuvo precedentes en la historia hondureña. Los analistas nacionales y regionales se sorprendieron ante la capacidad de movilización y resistencia demostrada por el pueblo hondureño. Este capítulo pretende ayudar a responder dos preguntas: en primer lugar, ¿qué factores explican el desarrollo de un movimiento masivo y amplio tras el golpe de Estado? y, en segundo lugar, ¿cuáles son las características de este movimiento de protesta social?

FACTORES QUE ALENTARON LA PROTESTA MASIVA DE LARGO PLAZO CONTRA EL GOLPE DE ESTADO

Podemos esbozar a una respuesta a la pregunta sobre los factores que explican el surgimiento y desarrollo del movimiento de masas de largo plazo contra el golpe militar mediante el examen de cuatro aspectos: (1) la alianza de organizaciones del movimiento social con el Presidente Zelaya, (2) la tendencia hacia la reactivación de la protesta social en el país, (3) la existencia de "estructuras de movilización" y (4) la defensa de la democracia como un marco ideológico general.

LA ALIANZA DE ORGANIZACIONES CON EL PRESIDENTE ZELAYA

Con la mayoría de los presidentes de Honduras, incluso durante las épocas democráticas, las organizaciones del movimiento popular han mantenido una actitud que oscila entre la desconfianza y la confrontación, principalmente porque consideran al poder ejecutivo como representante de los intereses de la elite económica del país. En el caso del Presidente José Manuel Zelaya Rosales (Partido Liberal), que asumió el 27 de enero de 2006, no había ninguna razón para que la situación sea diferente. Además, en este caso, había un acontecimiento histórico adicional que estaba profundamente arraigado en la conciencia de las organizaciones populares hondureñas. Es decir, la responsabilidad de Manuel Zelaya (el padre del Presidente) en la masacre de campesinos en su rancho de los "Horcones" (Olancho) que se llevó a cabo el 25 de junio de 1975,[2] cuando se organizó una

2 "La marcha de 1975 se estableció simultáneamente el 25 de junio desde Olancho, Choluteca, San Pedro Sula y el Progreso, y se estimó que llegaría a la Capital en 6 días. Fue reprimida desde el primer día en todo el país. El ejército interceptó a los manifestantes y detuvo a sus líderes. En Olancho, la represión fue más violenta. El

movilización campesina en todo el país que convergería en Tegucigalpa. Esta movilización fue conocida como "marcha del hambre". Aunque una vez en el cargo el Presidente Zelaya tomó medidas que afectaron a los grupos de poder y beneficiaron a las clases populares (tales como un cambio en la fórmula para calcular el precio de los combustibles y otras medidas similares), el movimiento popular hondureño mantuvo cierto grado de desconfianza en relación a la posición "progresista" e "izquierdista" del Presidente Zelaya debido a la conexión histórica de su familia con la represión en Olancho en los años 70.

Un acercamiento inicial entre el Presidente Zelaya y las organizaciones populares tuvo lugar durante el movimiento social conocido como la "huelga de hambre de los fiscales", que duró 37 días durante los meses de abril y mayo de 2008. Los fiscales denunciaban la complicidad del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional en el bloqueo de las investigaciones sobre corrupción que involucraban a la gente de la elite política y económica. El Poder Ejecutivo desempeñó el papel de mediador, y hasta de partidario del movimiento de los fiscales. La "huelga de hambre de los fiscales" generó movilizaciones en solidaridad –en algunos casos conocidas como huelgas cívicas nacionales– entre los diferentes segmentos de la sociedad e, incluso, algunos se unieron a la huelga de hambre.

Sin embargo, lo que selló la alianza entre las organizaciones populares hondureñas y el Presidente Zelaya fue la incorporación de Honduras a la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA). El 25 de agosto de 2008, los Presidentes Hugo Chávez Frías de Venezuela, Evo Morales de Bolivia, Daniel Ortega de Nicaragua y el Vicepresidente de Cuba, Carlos Lage visitaron Tegucigalpa para asistir a un acto público para incorporar a Honduras al ALBA. Las organizaciones populares hondureñas acudieron masivamente al evento. La alianza entre el Presidente Zelaya y las organizaciones populares se vio reforzada por la decisión del Poder Ejecutivo, en diciembre de 2008, de aumentar un 60% el salario mínimo. Presidente Zelaya enfrentó a una serie de acciones legales presentadas por los intereses empresariales que buscaban declarar ilegal el Decreto del Ejecutivo. En respuesta, diversas organizaciones populares se movilizaron en apoyo a la política salarial del Presidente Zelaya. Poco después, en

---

25 de junio, terratenientes y miembros de las Fuerzas Armadas perpetraron las terribles masacres de campesinos, mujeres y sacerdotes en el centro de formación 'Santa Clara' y en el rancho de los 'Horcones'. La comisión investigadora de las Fuerzas Armadas encontró que Manuel Zelaya (padre) fue uno de los autores" (*Revista Vida Laboral*, 2005, Año 5, edición 20, junio).

marzo de 2009, el Ejecutivo puso en marcha el proyecto de la "cuarta urna" para consultar a los votantes sobre la convocatoria a una Convención Nacional Constituyente. Las organizaciones populares realizaron una marcha masiva el 1 de Mayo de 2009, Día Internacional de los/as Trabajadores/as, en apoyo a la medida del salario mínimo y la iniciativa de la "cuarta urna" para la Convención Constitucional.

De este modo, las organizaciones populares encontraron aliados entre la elite política hondureña y, al mismo tiempo, la elite mostró contradicciones internas. Desde la perspectiva teórica de las estructuras de oportunidades políticas, los movimientos sociales se levantaron y, como mínimo, fueron estimulados por las señales que podrían representar oportunidades que recibieron del sistema político (McAdam, 1982; Tarrow, 1994; Meyer, 2004). El Presidente Zelaya representó un aliado influyente para las organizaciones populares, que, según Tarrow (1994), es uno de los indicadores de la existencia de oportunidades políticas. Para Tarrow, las dinámicas de los movimientos sociales se refuerzan cuando encuentran aliados influyentes, ya sea entre los militares, los tribunales o entre los cuadros políticos de alto rango. También podrían incluirse el apoyo de las elites religiosas, los partidos políticos poderosos y los grandes medios de comunicación con influencia significativa en la sociedad (Tarrow, 1999: 90-92).

La falta de alineación o división entre los poderes Ejecutivo y Judicial en torno al proyecto de la "cuarta urna" es otro indicador de la oportunidad política que estimuló la movilización social. Siguiendo a Tarrow, existen estudios empíricos que demuestran que cuando hay alineaciones inestables o divisiones entre las elites, estas generan a movilizaciones sociales o protestas (Almeida y Stearns, 1998). La acción colectiva tiende a surgir cuando hay grietas, ventanas o puertas en los muros de la unidad de la elite. Cuando la elite se fractura, bifurca o divide, estas facciones abren el campo para que los actores participen en el conflicto, lo que alienta a los pueblos y grupos sociales a participar en acciones de protesta (Tarrow, 1999: 90-92).

Hacia junio de 2009, la crisis política había tomado una forma muy definida. Las partes en la controversia fueron, por un lado, el Presidente Zelaya y parte de su administración junto con las organizaciones populares, y, por el otro, el Congreso Nacional, la Corte Suprema, el Ministerio Público, los principales medios de comunicación, las organizaciones empresariales y las autodenominadas organizaciones de la sociedad civil. Durante la última semana de junio de 2009, cuando el enfrentamiento entre los poderes del gobierno alcanzó uno de sus mayores momentos de tensión en torno a la destitución

del Jefe de la Junta de las Fuerzas Armadas,[3] el movimiento popular hondureño celebró una asamblea en el palacio presidencial y ya había fundado el Frente para la "cuarta urna" con el Presidente Zelaya como "líder". Con la negativa del alto mando militar de asumir la responsabilidad de la logística, el referéndum del 28 de junio de 2009 estaba bajo la responsabilidad del Presidente, un par de ministros y el movimiento popular hondureño.

Dado este contexto, no es posible sostener que el movimiento antigolpista surgió espontáneamente el 28 de junio. Las organizaciones de base del movimiento popular hondureño ya estaban, en cierto sentido, organizadas y preparadas para poner en práctica la iniciativa de consulta ciudadana. Lo que hicieron los dirigentes del movimiento popular en respuesta al golpe de Estado fue a cambiar de rumbo. Una vez que el referéndum hubo sido revocado con el derrocamiento del Presidente Zelaya, se movilizaron al palacio presidencial donde instaron al pueblo hondureño a resistir masivamente el golpe de Estado. Después de que el Presidente fue sacado de su residencia personal, y mientras pasaban las horas, la condena unánime al golpe de Estado por parte de la comunidad internacional se hizo sentir. Esto también fue un estímulo para el crecimiento masivo del movimiento antigolpista. El rechazo internacional al golpe de Estado y al régimen *de facto* es otro indicador de oportunidad política para el movimiento antigolpista, que impulsó la participación de las masas en la acción colectiva.

LA TENDENCIA HACIA LA REACTIVACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL EN EL PAÍS

En las últimas dos décadas los ciclos de protesta social, definidos por el neoliberalismo y los programas económicos de ajuste estructural, no son solo el producto de la oportunidad política sino también de las amenazas que plantean estas políticas que benefician a los grandes grupos económicos y son promovidas por el gobierno. Estas amenazas pueden ser de tres tipos: "(1) las tensiones económicas; (2) el debilitamiento de los derechos sociales; y (3) la represión estatal"

3 Como consecuencia de la negativa del Jefe de la Junta de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, de custodiar la instalación de los centros de votación y el material para el referéndum, el miércoles 24 de junio fue despedido por el Presidente Zelaya. Al día siguiente, 25 de junio, la Corte Suprema declaró ilegal la destitución de Romeo Vásquez Velásquez y el Congreso Nacional lo reincorporó a su puesto. Ese mismo día, el Presidente Zelaya, junto a cientos de líderes del movimiento popular, entraron en la Base de la Fuerza Aérea para recuperar el material para el referéndum y asumir la responsabilidad directa de su distribución.

(Almeida, 2002: 179). Esta perspectiva puede explicar el resurgimiento de la protesta social en América Latina.

Hay distintos grados de consenso y aceptación en torno a la idea de que América Latina está en un nuevo ciclo de movimientos sociales y protesta social (Almeida, 2007). En lo que no hay consenso es sobre cuándo comenzó este ciclo. Algunos analistas proponen 1989 como punto de partida de este nuevo ciclo de protesta social, con las protestas del Caracazo en Venezuela –un país que tuvo grandes movilizaciones contra las medidas neoliberales y donde los supermercados y otros negocios fueron saqueados (ver cap. 14 en este volumen). Otros lo ubican en una fecha intermedia, en 1994, cuando ocurrió el levantamiento zapatista en México. Algunos sitúan el comienzo en una fecha posterior, durante los años iniciales de la primera década del siglo XXI, específicamente en el año 2001, con las movilizaciones y caídas de gobiernos en América del Sur: Bolivia, Argentina y Ecuador (Silva, 2009).

El inicio de la reactivación de la protesta social en Honduras se puede identificar en el año 2003, después de 10 años de debilitamiento, fragmentación y dispersión de las protestas sociales. Entre 1990 y 1992, el Presidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1994) promovió un programa económico de ajuste estructural.[4] Los sindicatos de los sectores público y privado, los campesinos y los residentes urbanos emprendieron intensas campañas contra las políticas neoliberales (Sosa, 2010). En 1992 se aprobó la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, que puso fin a los débiles intentos de reforma agraria que se habían realizado en el país y abrió la vía para la venta de tierras en el "sector reformado" y los de las cooperativas agrícolas. El resultado para las organizaciones gremiales y campesinas fue totalmente negativo. Miles de empleados públicos fueron despedidos, fueron destruidos el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Vivienda (SITRAINVA), Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (SITRAINVA), el Sindicato de Trabajadores de la Industria Gráfica (SITRAINGRA) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (AN-

4 El 4 de marzo de 1990 el Congreso Nacional de la República aprobó el Decreto Legislativo 18-90, la Ley de Ordenamiento Estructural de la Economía. Este Decreto eliminó la desgravación fiscal y aumentó el impuesto a las ganancias o rentas. Además, se crearon nuevos impuestos y se incrementaron algunos de los existentes, tales como los impuestos a las ventas, derivados del petróleo, producción de azúcar, cerveza, fósforos y registro del automotor. Aumentó el precio de los combustibles, el transporte y los servicios públicos, como electricidad, agua y telefonía nacional e internacional. Asimismo, se liberalizaron las tasas de interés de los préstamos bancarios.

DEPH) y se instalaron organizaciones y juntas directivas "paralelas" en el Sindicato de Trabajadores de Telecomunicaciones (SITRATEL) y en el Sindicato de Empleados Públicos de Caminos Mantenimiento de Aeropuertos y Terminales (SEPCAMAT). El sector campesino fue reprimido, aumentó el número de prisioneros del sector agrícola y hubo graves enfrentamientos entre los campesinos y los grupos paramilitares de los terratenientes. El gobierno también fue capaz de debilitar el movimiento campesino a través de la cooptación de las organizaciones y la creación de organizaciones paralelas. El gobierno orquestó la creación del Consejo Nacional Campesino (CNC), que estaba en consonancia con sus políticas neoliberales y que funcionó como contrapeso del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOH).

Las políticas neoliberales y el advenimiento de un nuevo modelo de acumulación capitalista significan la destrucción de la "base material y simbólica" de lo que García Linera (2001) llama la "forma sindicato", y a la que podríamos añadir la "forma liga campesina". La cuestión no es ser o no ser más trabajadores sino que las formas de organización sindicales clásicas que hemos conocido ya no son, históricamente, posibles.

A partir de 2003, la protesta social en Honduras entró en un nuevo ciclo. Esta reactivación de la protesta social se centró en las movilizaciones contra las privatizaciones y la firma del Tratado de Libre Comercio de América Central (TLC), la lucha de los docentes en defensa del Estatuto del Docente Hondureño, las luchas de las comunidades y regiones en Defensa de los Recursos Naturales, y la huelga de hambre y las movilizaciones contra la corrupción encabezadas por los fiscales. Durante 2003, 2004 y parte de 2005, las organizaciones unidas y/o convocadas por el Bloque Popular y la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP) se opusieron y se movilizaron contra las privatizaciones y la firma del TLC. Otro movimiento social importante durante este período fue la ola de protestas sociales del Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO) en defensa del bosque. La principal estrategia de este movimiento consintió en las denominadas "marchas por la vida", en las cuales las comunidades del departamento de Olancho marcharon hacia Tegucigalpa, cubriendo unos 180 km, para hacer oír sus demandas. La primera "marcha por la vida" se celebró en 2003, la segunda en 2004 y la tercera en 2008. También se realizaron protestas en otros departamentos y municipios del país contra los impactos ambientales y la contaminación derramada por las empresas transnacionales involucradas en la minería a cielo abierto. Estos movimientos en defensa de los recursos naturales también coparon las carreteras en diferentes zonas del país.

Las luchas de los maestros se reactivaron en los años 90. Durante la década de los 80, fue uno de los movimientos que padeció las políticas represivas de la Guerra Fría. Desaparecieron dirigentes sindicales y los gobiernos alentaron asaltos y divisiones internas entre sus organizaciones. Después de una larga lucha, el 11 de septiembre de 1997 se aprobó el Estatuto del Docente Hondureño. Como resultado de la tragedia del huracán Mitch,[5] el Gobierno en el poder, liderado por Carlos Roberto Flores Facussé, pudo llegar a un acuerdo para suspender las cláusulas económicas del Estatuto hasta el año 2002. El 27 de enero de 2002, Ricardo Ernesto Maduro Joest (2002-2006), asumió como Presidente, prometiendo poner fin a las luchas docentes. Sin embargo, se produjo uno de los conflictos más intensos entre los maestros y el gobierno de los últimos años. Este período de lucha comenzó en julio de 2003 y continuó hasta el 9 de agosto de ese año. En 2006, bajo la gestión de José Manuel Zelaya Rosales, los maestros reanudaron la lucha por el cumplimiento del Estatuto del Docente, y se llegó a un acuerdo en agosto de ese mismo año. En los últimos años los maestros han triunfado en sus luchas y demandas, una situación que los ha fortalecido.

Durante los meses de abril y mayo de 2008, un pequeño grupo de fiscales se declaró en huelga de hambre debido a la indiferencia y negligencia de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público en las causas abiertas por casos de corrupción contra gente vinculada a la elite política y económica del país. A la huelga de hambre, que comenzó con tres fiscales, se unieron otros; finalmente incluyó a 30 personas y concluyó el 24 de mayo. Esta lucha de los fiscales de la Nación llevó a una movilización continua en las salas y pasillos del Parlamento Nacional y generó movimientos de solidaridad en todo el país. El punto importante aquí es que en el momento del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 la tendencia del movimiento popular era hacia la reactivación de la protesta social, tras el debilitamiento y la disolución que habían sido causados por los programas de ajuste estructural económico y las políticas neoliberales. En este sentido, el movimiento social antigolpista y el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado son la continuación y el punto más alto de la reactivación de la protesta social en Honduras durante la primera década del siglo XXI.

---

5 El 30 de octubre y el 1 de noviembre de 1998, el país fue devastado por el huracán y tormenta tropical Mitch, que dejó tras de sí grandes pérdidas de vidas humanas y daños materiales.

LAS ESTRUCTURAS DE MOVILIZACIÓN SOCIAL EXISTENTES

El advenimiento de oportunidades políticas y amenazas no es suficiente para generar acciones colectivas o protestas sociales. Los sujetos también deben tener una base social, organización y recursos, en general, para poder sacar ventaja de las oportunidades políticas. Esto es lo que algunos autores llaman "estructuras de movilización". Las estructuras de movilización refieren a los mecanismos y canales, formales o informales, que funcionan como una base de organización para el desarrollo de la acción colectiva. Esto se refiere a las redes, la organización de las bases, entornos y recursos en general que impulsan la movilización social (McCarthy, 1996). El riesgo implícito en la perspectiva teórica es la confusión entre movimientos sociales y organizaciones sociales formales. Durante algún tiempo se pensó que las perspectivas de las oportunidades políticas y las estructuras de movilización eran mutuamente excluyentes; sin embargo, como resultado de numerosos estudios empíricos, "…los especialistas se han dado cuenta de la enorme variedad de entornos en los que la acción colectiva tiene lugar, así como la diversidad de formas de organización que generan los movimientos sociales" (McAdam et al., 1999: 25-26). La cuestión central es si el movimiento tiene las redes, estructuras y recursos generales no solo para impulsar el movimiento social sino también para mantenerlo y sostenerlo. Aunque no se puede ignorar que, una vez que un movimiento social se ha puesto en marcha, las formas de organización y estructuras que adopta pueden variar significativamente. En esta área, es fundamental estudiar el perfil de los grupos sociales que sostienen el movimiento.

Uno de los movimientos sociales organizados u organizaciones de base del movimiento social antigolpista fue el de las organizaciones docentes, agrupadas en la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH). La participación docente en las protestas contra el golpe de Estado en los primeros meses del movimiento fue de tal magnitud que se considera la columna vertebral de la FNRP. Además, los maestros están dispersos en todo el país, incluyendo la mayoría de los pueblos y comunidades más aislados, lo que les permite contribuir, especialmente con su liderazgo, a alentar la protesta social. La base social popular del Partido Liberal (de la que proviene el Presidente Zelaya) y los dirigentes de base y cuadros medios del partido fueron una de las principales fuerzas sociales que conformaron las "estructuras de movilización" que sostuvieron el movimiento antigolpista.

Debemos añadir a las estructuras organizativas de los maestros y a las del Partido Liberal una serie de grupos, organizaciones e instituciones que se unieron al movimiento antigolpista y que también

formaron parte de las estructuras de movilización del movimiento. Nos referimos a los activistas y militantes de otros partidos políticos como la Unificación Democrática (UD), el Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) y varios grupos de izquierda. Además, las organizaciones étnicas, indígenas y campesinas, las organizaciones comunitarias locales y regionales, las organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas, las organizaciones estudiantiles y las organizaciones de la juventud, las organizaciones ambientalistas y las organizaciones de protección de recursos naturales, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones barriales de Tegucigalpa y ciudadanos no organizados participaron en el Movimiento de Resistencia.

Las organizaciones sindicales también han proporcionado apoyo organizativo, aunque no fueron muy prominentes en las movilizaciones contra el golpe de Estado. En este caso, estuvieron representadas por la Central de General de Trabajadores de Honduras (CGT), la Confederación Unitaria de Trabajadores de HONDURAS (CUTH), el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS), el Sindicato del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado y Similares (SITRASANAAYS), el Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares de Honduras (SITRAMEDHYS), el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH) y el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE). Es difícil imaginar que el movimiento del FNRP habría logrado la importancia que alcanzó, si estas estructuras de movilización no hubiesen entrado en acción.

DEFENSA DE LA DEMOCRACIA COMO UN MARCO IDEOLÓGICO GENERAL

Los movimientos sociales también se generaron y desarrollaron como respuesta a lo que consideraron un ataque, una violación de los valores compartidos de la sociedad o la instalación de una autoridad ilegítima. Es decir, los movimientos sociales necesitan un proceso de enmarcamiento o encuadre (*framing process*) para justificar sus acciones (Benford y Snow, 2000). Desde la perspectiva de los procesos de enmarcamiento se reconoce que las oportunidades políticas y las estructuras de movilización constituyen la base para el surgimiento y el desarrollo de los movimientos sociales, las protestas sociales y las acciones colectivas en general. Sin embargo, estos elementos por sí solos no son suficientes y también inciden otros factores, como la ideología y la cultura. Algunos autores retoman el concepto de proce-

sos de enmarcamiento y lo redefinen como "*los esfuerzos estratégicos conscientes realizados por grupos de personas en orden a forjar formas compartidas de considerar el mundo y a sí mismas que legitimen y muevan a la acción colectiva*" (McAdam et al., 1999: 27; en cursivas en el original). En esencia, los procesos de enmarcamiento refieren al papel desempeñado por la ideología y cultura en los movimientos sociales. Las identidades son una parte importante de los procesos de enmarcamiento.

Hunt et al. (1994) identifican tres campos de construcción de identidad en los movimientos sociales. En primer lugar, los actores son los individuos que promueven y simpatizan con los meta-valores y prácticas del movimiento social; estos actores son también los beneficiarios de las acciones de movimiento. En segundo lugar, los antagonistas son el conjunto de personas y grupos que aparentemente están unificados en oposición a los esfuerzos de los actores. Tercero, el público o audiencia se compone del grupo de personas que son neutrales o que son observadores que no participan, aunque algunos pueden responder a, o informar acerca de, los hechos de que son testigos. Estas categorías de identidades también están contempladas por los autores como "campos de identidad" (*identity fields*) debido a que las identidades de cada categoría se solapan y se mantienen unidas, y porque son categorías elásticas que se expanden y se contraen con el tiempo (Hunt et al., 1994: 221). La creación de los marcos de acción colectiva y los campos de identidad de los movimientos sociales es, a su vez, parte de la disputa política y la lucha.

El FNRP dio el grito de batalla por la democracia y el retorno al régimen constitucional, que debía lograrse por el regreso de José Manuel Zelaya Rosales a la Presidencia de la República. La lucha ideológica que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio, tras el derrocamiento del Presidente Zelaya, fue amarga y sangrienta. Por un lado, el régimen *de facto* y el contramovimiento organizado en la Unión Cívica Democrática (UCD) argumentaron que era una sucesión presidencial normal según la Constitución de la República; por otro, el movimiento antigolpista contra-argumentó que lo que había ocurrido era un golpe militar. Este debate sobre cómo llamar al derrocamiento del Presidente Zelaya, a nivel nacional e internacional, se desplegó en los medios de comunicación, que fueron su principal campo de batalla. El proceso de enmarcamiento y la disputa ideológica entre los actores y antagonistas del movimiento antigolpista estaban claramente definidos. Era sobre los valores y principios de la democracia o de un régimen político democrático. La democracia es siempre un proyecto en disputa. Los actores sociales entablan una

batalla política, algunos por mayores grados de democratización y otros para generar procesos de des-democratización.[6]

El otro tema de la controversia giró en torno a la Convención Nacional Constituyente. El movimiento antigolpista argumentó que la organización de una Convención era esencial para avanzar hacia la democracia participativa y la inclusión política de los sectores que habían sido marginados hasta ese momento. Mientras que el régimen *de facto* y el contramovimiento enfatizaron que no era necesario realizar una Convención para una nueva Constitución, que la Constitución que estaba en vigor permitía un gran número de reformas para avanzar hacia la democracia participativa. Así, las ideas sobre la democracia se convirtieron en el principal factor ideológico en la cultura política hondureña para justificar la movilización tanto para los protagonistas como para los antagonistas del movimiento antigolpista.

CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO ANTIGOLPISTA

Como se mencionó anteriormente, en América Latina existe un alto nivel de consenso sobre el hecho de que estamos en un nuevo ciclo de movimientos sociales y protesta social. Pero hay un debate abierto sobre las características de los movimientos sociales de esta nueva etapa. Raúl Zibechi, al analizar el ciclo actual de los movimientos sociales en América Latina, identifica seis características centrales en la configuración de estos movimientos. Estas características son:

1. Territorialización de los movimientos
2. La búsqueda de autonomía, material y simbólica, respecto del Estado y los partidos políticos
3. La revalorización de la cultura popular y la afirmación de la identidad de personas, pueblos y sectores sociales, en particular de las diferentes etnias y géneros
4. La capacidad de producir sus propios intelectuales
5. El nuevo papel de las mujeres
6. La preocupación por la reorganización del trabajo y la relación con la naturaleza

---

6 Pero ¿qué entendemos por democratización? La democratización es un aumento del ámbito de los derechos civiles, políticos, sociales y económicos de los ciudadanos. El aumento en la amplitud y la igualdad de las relaciones entre los agentes del gobierno y los miembros de la población, de la consulta vinculante de la población de un gobierno con respecto a la política, los recursos y el personal gubernamental y de la protección de esa población de la acción arbitraria perpetrada por los agentes gubernamentales y los grupos con poder en la sociedad. La des-democratización sería cualquier evolución substancial que implique una desviación de los procesos de democratización mencionados anteriormente (Tilly, 2007).

7. El repertorio de lucha o de formas de acción del pasado –de las cuales la expresión clásica es la huelga– si bien no dejó de existir está dando paso a formas de lucha que se autoafirman, a través de las cuales los nuevos sujetos sociales se hacen visibles y reafirman las características y marcas de su identidad (Zibechi, 2003: 186-187).

Al utilizar esta clasificación propuesta por Zibechi como marco de referencia, mientras intentábamos identificar las particularidades del movimiento antigolpista en Honduras, encontramos que este movimiento social se caracteriza por lo siguiente: (a) su marco ideológico es la lucha por la democracia y contra el neoliberalismo; (b) es amplio en cuanto a los sujetos que lo constituyen y no tiene vanguardia alguna; (c) está organizado por sector y territorio; (d) se forjó una identidad común, mientras que se preservaron y recrearon las identidades individuales; (e) tiene un mayor grado de descentralización y autonomía en la forma en que se ejecuta; (f) la toma de decisiones es mucho más horizontal, flexible y democrática; (g) el reemplazo de dirigencias y surgimiento de nuevos liderazgos; (h) las líneas de articulación son pocas y concretas; (i) el fin de las viejas formas de lucha y aparición de otras nuevas; (j) el celo por la autonomía política del movimiento; (k) la presencia de acumulación de fuerzas históricas como sustrato de la espontaneidad de la acción; y (l) el uso de viejas y nuevas formas de comunicación. Examinaremos brevemente cada una de estas características.

a) *Su marco ideológico es la lucha por la democracia y contra el neoliberalismo.* El FNRP es un movimiento que aboga por la lucha por la democracia; no es un movimiento que propone la lucha por el socialismo, la liberación nacional u otro tipo de demanda política. Su plataforma se ha definido claramente a favor de la vuelta al régimen constitucional y la restitución de José Manuel Zelaya Rosales, el presidente depuesto. En el fragor de la batalla, la llamada a convocar a una Convención Nacional Constituyente para aprobar una nueva Constitución empezó a adquirir legitimidad entre la ciudadanía. Aunque no existe ninguna propuesta clara todavía, uno puede deducir fácilmente del discurso de los diferentes sectores de la población que la Convención Constituyente y la nueva Constitución aspiran a la democracia participativa, la expansión de los derechos de los pueblos indígenas, comunidades, mujeres, jóvenes, y en general, la recreación del Estado y la sociedad. Pero el marco ideológico del FNRP no se detiene en las demandas por la democracia, sino que también incluye su rechazo a las políticas neoliberales que han afectado sus derechos

sociales y económicos. Por lo tanto, el movimiento antigolpista incluye demandas democráticas y sociales y vincula ideológicamente la profundización de la democracia hondureña con el rechazo de las medidas económicas de corte neoliberal.

b) *Es amplio en cuanto a los sujetos que lo constituyen y no tiene vanguardia alguna*. El movimiento antigolpista representa la diversidad y la pluralidad de la sociedad hondureña. Reúne a las fuerzas políticas antigolpistas, como los simpatizantes del Partido Liberal, los partidarios de PINU y UD y, en menor medida, nacionalistas y demócratas cristianos. También incluye las fuerzas de sectores definidos, tales como la Izquierda revolucionaria que data de los años 80. Socialmente, reúne a los sectores medios como maestros y estudiantes, mujeres y jóvenes, barrios marginales, comunidades y zonas rurales y semi-rurales. Sin embargo, ningún sector político o social se proclama a la vanguardia del movimiento, como a menudo ocurrió en el pasado. En otras palabras, es un movimiento que reúne a personas que son social, política e ideológicamente diversas.

c) *Está organizado por sector y territorio*. Debido a la amplitud y diversidad del FNRP ha tenido éxito en conectar las fuerzas populares a nivel social y territorial. Reúne a trabajadores, maestros, jóvenes, estudiantes, amas de casa, organizaciones indígenas y étnicas, campesinos, etc.; pero también está organizado territorialmente por regiones, municipios y comunidades.

d) *Es un movimiento que supo forjar una identidad común, mientras que se preservaron y recrearon las identidades individuales*. Uno de los factores clave del FNRP es que pudo potenciar una identidad nacional única, común, que incluso trasciende al propio movimiento. Nos estamos refiriendo al hecho de que las frases "perteneciente a la resistencia", "pertenezco a la resistencia" o "estar en resistencia" se volvieron habituales entre amplios sectores de la sociedad hondureña. Así, el golpe de Estado creó un evento disruptivo que permitió el surgimiento de la nueva identidad colectiva del movimiento (Viterna, 2013). Pero, al mismo tiempo, diferentes sectores sociales intentaron simultáneamente diferenciarse y conectarse a esta identidad común adaptándola a su sector específico y refrendando su visibilidad. Así, encontramos identidades políticas como la "Resistencia Liberal", identidades sectoriales como la "Resistencia Universitaria", "Mujeres en Resistencia", "Feministas en Resistencia", "Juventud en Resistencia" y las identidades territoriales como "Resistencia de Santa Bárbara", "Resistencia de Choluteca", "Resistencia de Occidente",

"Resistencia de San Pedro Sula", etc. Es decir, hubo una fusión de una identidad común que se combinó con identidades basadas en territorios y sectores específicos.

e) *Un mayor grado de descentralización y autonomía en la forma en que se ejecuta*. El estilo de gestión centralizada tipo "órdenes del comando central", "órdenes de la junta central de directores" o las "órdenes de comité central de huelga" es una cosa del pasado para el FNRP. A pesar de que fue dirigida a nivel nacional, aunque por cierto esto no fue muy visible a excepción de tres de sus líderes, las actividades de la Resistencia se llevaron a cabo con importantes grados de descentralización y autonomía. Cada sector o territorio, maestros, campesinos, estudiantes, jóvenes, mujeres, comunidades y regiones decidieron por sí mismos una serie de acciones, solo guiados por las demandas generales del Frente. Así, las mujeres han llevado a cabo acciones específicas, la resistencia universitaria ha implementado sus propias acciones, los campesinos, por su parte, tomaron las oficinas del Instituto Nacional Agrario (INA) y en las diferentes regiones se han llevado a cabo acciones territoriales concretas. Es decir, que somos testigos de un movimiento y de una lucha en la cual la descentralización y la autonomía han sido importantes a la hora de decidir qué acciones tomar.

El movimiento social ha logrado alcance nacional, aunque el epicentro se encuentra en la Capital, Tegucigalpa. San Pedro Sula, llamada la capital industrial del país, ha sido la sede de las principales acciones de protesta y las movilizaciones masivas. Además, se han realizado marchas y bloqueos de carreteras en La Ceiba, Tocoa, Trujillo, El Progreso, Santa Bárbara, Santa Rosa de Copán, La Esperanza, Comayagua, Choluteca, Olancho y El Paraíso. Sin embargo, la cuestión importante a destacar es que hay autonomía de liderazgo y toma de decisiones en cada territorio, y cada grupo de la resistencia tiene sus propias formas de asamblea. Es un movimiento nacional con un importante nivel de coordinación, mientras que al mismo tiempo está descentralizado y las características del gran movimiento (su pluralidad y la naturaleza de sus redes) se reproducen a menor escala, en combinación con las características de la comunidad.

García Linera describe los conceptos "forma multitud" y "forma comunidad" como las nuevas modalidades o formas de acción colectiva. "La *multitud* es una red organizativa bastante flexible, hasta cierto punto laxa que, presentando un eje de aglutinación bastante sólido y permanente, es capaz de convocar, dirigir y movilizar a una inmensa cantidad de ciudadanos 'sueltos' que por su precariedad laboral, por los procesos de modernización e individualización, carecen de

fidelidades tradicionales" (García Linera, 2001: 186). La principal característica de la "forma comunidad" del movimiento antigolpista en las comunidades, municipios y regiones fue la organización de asambleas como espacios públicos de deliberación acerca de las acciones a seguir en cada territorio.

f) *La toma de decisiones es mucho más horizontal, flexible y democrática*. La toma de decisiones y el funcionamiento de los diferentes sectores y territorios del movimiento antigolpista han sido mucho más horizontales y democráticos como resultado, en cierta medida, de su funcionamiento descentralizado. Se estableció un organismo de coordinación nacional, que funcionó principalmente en Tegucigalpa, con una participación rotativa de un gran número de líderes donde algunos permanecieron más que otros. Además, en cierta medida, la coordinación estuvo abierta a la participación de los demás. Otro mecanismo con características de funcionamiento democrático y horizontal son las Asambleas de la Resistencia, que son amplias y abiertas y se celebran en cada una de las ciudades y regiones, y a nivel nacional, donde se han realizado o aprobado las decisiones más importantes. El movimiento contra el golpe de Estado también se distingue de las clásicas formas de liderazgo vertical y centralizado de los movimientos sociales históricos (principalmente, los movimientos obreros y campesinos). Sin embargo, tampoco se puede decir que son movimientos totalmente democráticos y horizontales. Pero lo que está claro es que hay un mayor grado de horizontalidad y flexibilidad. La flexibilidad del movimiento también se refleja en el hecho de que no hay portavoces oficiales como en el caso de los movimientos sociales clásicos. Las personas que participan en las acciones de resistencia se sienten libres de expresar sus opiniones a los medios de comunicación u otros grupos. Además, también se sienten libres para hablar públicamente sobre el movimiento de resistencia contra el golpe de Estado. Asimismo, cada uno de estos sectores, organizaciones, grupos o movimientos tiene sus propias dinámicas y toma de decisiones acerca de sus vías de participación en el FNRP. También hay que agregar que se han organizado grupos de trabajo que funcionan con gran autonomía.

g) *Reemplazo de dirigencias y surgimiento de nuevos liderazgos*. Como se dijo alguna vez, "los líderes no hacen el cambio, sino que lo encuentran". A menudo, en períodos "normales", hay algunos que dedican muchos esfuerzos tratando de ser los líderes de grandes movimientos sociales y, en tiempos de "crisis", están aquellos que se encuentran en el lugar correcto, que tienen la personalidad para ponerse al fren-

te de la crisis y terminan liderando los amplios movimientos sociales que otros han soñado. Es importante reconocer que el FNRP ha permitido el trasvasamiento en el liderazgo y el reconocimiento de la vieja guardia sindical y campesina, en una verdadera renovación. Pero también ha hecho posible que un número significativo de líderes nuevos o "reciclados", hombres y mujeres, surjan o ganen visibilidad tanto a nivel nacional como regional, municipal y comunitario.

h) *Las líneas de articulación son pocas y concretas*. Ningún movimiento tan amplio y diverso como el FNRP es capaz de representar la totalidad de los intereses y demandas de los diferentes sujetos sociales. Por lo general, esto resulta en dispersión y división, no en unificación. La unificación de esa gran diversidad y pluralidad fue posible porque las demandas y las líneas de lucha eran pocas y concretas, así como lo suficientemente inclusivas. Al principio, el FNRP se unió en torno a la denuncia del golpe de Estado y para exigir la restitución del Presidente Zelaya. Luego, ganó más fuerza en los diferentes sectores participantes y comenzó a impulsar a una Convención Nacional Constituyente y la formación de un nuevo partido político, Libertad y Refundación (LIBRE).

i) *Fin de las viejas formas de lucha y aparición de otras nuevas*. Si revisitamos los "repertorios de acción" del FNRP encontramos que la huelga, cuya proliferación hubiera sido "normal" en otros tiempos, no ha sido común en este movimiento. Esto se debe al hecho de que la aparición de un nuevo patrón de crecimiento y acumulación capitalista, además de las políticas neoliberales implementadas al principio de los años 90, destruyó "la base material y subjetiva para la organización sindical y campesina" en los sectores público y privado. Así, la soñada "huelga social general" que algunos viejos activistas de izquierdas aún esperaban, nunca llegó. Sin embargo, el FNRP ha tomado otras formas de lucha que se han utilizado en el pasado, y también ha creado y recreado otras. El "repertorio de acción" del Frente es amplio: marchas en las calles, concentraciones frente a instituciones que simbolizan los poderes públicos y privados, bloqueo de las vías de transporte o corte de rutas y carreteras que conectan las principales ciudades del país, eventos culturales, movilizaciones internas en los barrios, caravanas de vehículos, "cacerolazos", "bullaranga", "marchas de antorchas", etcétera.

También se realizaron vigilias y programas de seguridad y protección para los aliados estratégicos que fueron amenazados por el régimen *de facto*. Este fue el caso de las vigilias en la Embajada venezolana, cuyos representantes diplomáticos fueron desconocidos por

el régimen *de facto*, y en la estación opositora de Radio Globo que fue ocupada por los militares tras el golpe de Estado del 28 de junio, y a partir de entonces estuvo bajo permanente amenaza. Es interesante detenerse un momento y pensar en el hecho de que, a pesar de la magnitud alcanzada por el movimiento antigolpista, la huelga no fue una forma de lucha importante. Más aún, se puede decir que es una forma de lucha que estuvo ausente en el repertorio de acción de este movimiento social. Como ya hemos señalado, esto se debe al hecho de que como resultado de las políticas neoliberales y el nuevo patrón de acumulación capitalista, se destruyeron las bases materiales y subjetivas para la organización sindical de los/as trabajadores/as. A principios de los años 90 los empleados públicos sindicalizados fueron despedidos en masa, y las nuevas contrataciones se hicieron bajo políticas laborales flexibles, por términos cortos y sin ninguna de las garantías de los derechos laborales básicos establecidos en el Código de Trabajo. La gran mayoría de los empleados son contratados como "consultores", que no es más que la institucionalización de la inestabilidad en el empleo público. Se han producido cambios fundamentales en el mundo del trabajo del sector privado, que han hecho que sea muy difícil, si no imposible, organizar y consolidar estructuras gremiales. La cantidad de trabajadores agrícolas, particularmente los de las compañías bananeras, se ha reducido drásticamente ya que este producto de exportación perdió importancia en la economía nacional. La industria maquiladora emplea un gran número de trabajadores, especialmente mujeres y jóvenes –unos 138 mil en 2003–, pero debido a los contratos flexibles, precarios y a la ausencia del Estado como garante del cumplimiento de los derechos laborales, los gremios no han sido capaces de sobrevivir y consolidarse (Anner, 2011).

Otro sector importante de la economía hondureña es el de servicios. Los trabajadores están dispersos y divididos, y además, trabajan bajo contratos flexibles y temporales. Tampoco aquí ha sido factible la organización sindical. Además, la gran mayoría de la población económicamente activa trabaja de forma independiente o en la economía informal. Bajo las circunstancias establecidas en los párrafos anteriores, la debilidad y cuasi ausencia de la "forma sindicato" como medio de organización de los trabajadores es la norma. Por lo tanto, esto ha significado decirle *adiós* a la huelga como forma de acción en el repertorio de los movimientos sociales. Como resultado, el régimen *de facto* y los empresarios que lo apoyaron no tienen que afrontar conflictos ni pérdidas financieras debido a huelgas o paros laborales. Ante la imposibilidad de la huelga, y retomando las lecciones de las luchas populares en América Latina, el FNRP recurrió a controlar o bloquear carreteras para asestarle un golpe a la economía del país.

Sin embargo, el régimen *de facto* fue más propenso a desatar la represión contra este tipo de acción que contra otras. Los líderes del movimiento antigolpista reconocieron esta amenaza y decidieron no continuar con la medida. La tendencia del régimen político de reprimir o no reprimir determinadas formas de protesta social alienta o desalienta su uso por parte de los movimientos sociales.

j) *El celo por la autonomía política del movimiento.* En la práctica, el FNRP también ha reivindicado la autonomía política. Así, a pesar de que reúne a dirigentes, activistas, miembros y simpatizantes de los partidos políticos Liberal, PINU y UD, y a los de las fuerzas políticas no electorales que se identifican como de izquierda, no se les permitió declararse como los conductores políticos de la Resistencia. Este celo por la autonomía política del FNRP no solo está en guardia contra los partidos políticos, sino también contra cierto tipo de ONG.

k) *La presencia de acumulación de fuerzas históricas como sustrato de la espontaneidad de la acción.* Algunos analistas, sorprendidos por el tamaño del movimiento de Resistencia, acaso lo ven como mera efervescencia espontánea de hondureños en las calles. Si analizamos la composición de los actores que conforman la Resistencia, está claro que es una combinación de actores que han participado en las luchas populares de, al menos, las últimas tres décadas. Entre los principales líderes de la Resistencia están los trabajadores que participaron en las luchas sindicales de los años 80 y 90 y los ex dirigentes del movimiento campesino, así como las mujeres que han estado luchando por los derechos de las mujeres y la igualdad de género durante los dos últimos decenios. En la Resistencia encontramos a las organizaciones indígenas y étnicas que libraron importantes batallas en los 90, una variedad de movimientos comunitarios y regionales que han sido alimentados por el sedimento histórico que dejó el trabajo de las organizaciones campesinas y el trabajo de las comunidades de base de la Iglesia Católica. Los maestros, después de haber sobrevivido a las políticas neoliberales de los años 90 y la agresión del Presidente Ricardo Maduro en los 2000, fueron la columna vertebral de la Resistencia durante las semanas iniciales. Participaron grupos de sobrevivientes de la universidad y los movimientos de estudiantes secundarios. Un gran número de ciudadanos, cuya conciencia sobre los derechos humanos y las ideas democráticas y ciudadanas había aumentado por el trabajo de diferentes organizaciones en las últimas décadas, estaban en las calles con la Resistencia. Las organizaciones de derechos humanos han hecho un excelente trabajo de documentación registrando los abusos, denunciando la represión y tomando

acciones legales, poniendo en práctica toda la experiencia acumulada en los años 80. La Resistencia se ha beneficiado de la reciente acumulación de experiencia de la "huelga de los fiscales", como se conoció. Sin esta acumulación histórica de luchas del movimiento popular, sería difícil tratar de explicar el movimiento del FNRP.

l) *El uso de viejas y nuevas formas de comunicación*. Uno de los nuevos temas de investigación y debate es la relación entre los movimientos sociales y las nuevas tecnologías de comunicación. Hay quienes sugieren que las nuevas tecnologías están cambiando la naturaleza de los movimientos sociales (Earl y Kimport, 2011). Una cosa que es evidente y no necesita mayor discusión es que los movimientos sociales del siglo XXI han incorporado las nuevas tecnologías a sus formas de organización y acción. Pero la pregunta importante es: ¿Hasta qué punto estas nuevas tecnologías están cambiando a los movimientos sociales? Con respecto a este tema, Charles Tilly (2005) llama la atención sobre cuatro advertencias o peligros. La primera es evitar el determinismo tecnológico, ya que los cambios en los movimientos sociales tienen más que ver con el contexto que con las innovaciones tecnológicas. La segunda es que las innovaciones en las comunicaciones, al igual que en los siglos XIX y XX, siempre tienen dos efectos: por un lado, reducen el costo de la comunicación y la coordinación entre los activistas de los movimientos sociales; y, por el otro, excluyen a quienes no tienen acceso a las nuevas tecnologías. La tercera es que los movimientos sociales del siglo XXI siguen dependiendo de las formas de organización locales, regionales y nacionales que ya existían en el siglo XX. La cuarta, sin negar el hecho de que la globalización traza la distribución de los movimientos sociales, el enfoque actual de la confrontación de los movimientos sociales no es globalización y anti-globalización (Tilly, 2005: 14). Para Tilly sería una quimera pensar que los mensajes electrónicos serán lo que coordine los movimientos sociales. Más bien, son los cambios en el contexto político y organizacional los que tienen un efecto mucho más directo e inmediato "sobre el funcionamiento de los movimientos sociales que los propios cambios tecnológicos" (Tilly, 2005: 19).

La incorporación de nuevas tecnologías no implica abandonar las viejas formas de comunicación y tecnologías. Es el caso del FNRP, que utilizó tanto las nuevas como las viejas formas de comunicación y tecnologías, dado que el movimiento antigolpista se enfrentó al feroz bloqueo de los medios de comunicación a nivel nacional. El régimen *de facto* controlaba a los principales medios en televisión, radio y prensa escrita. En respuesta a esta situación, el movimiento antigolpista utilizó no solo las nuevas tecnologías sino también las viejas

formas de comunicación típicas de los movimientos sociales clásicos, o de la primera generación de "nuevos" movimientos sociales como el movimiento estudiantil. Internet fue un factor clave para informar a nivel nacional e internacional sobre lo que estaba sucediendo en el país. Permitió el acceso a los medios de comunicación, que fueron censurados y cancelados internamente, como TeleSur. Además, los centros para la recopilación y difusión de información, tales como la Red de Desarrollo Sostenible (RDS) y la Red Fian-Honduras, desempeñaron un papel estratégico en las comunicaciones de movimiento.

El servicio de telefonía móvil sirvió para hacer saber sobre el golpe de Estado pocos minutos después de haber ocurrido. Permitió la comunicación inmediata y fluida para la coordinación del movimiento. También fue una herramienta tecnológica para realizar informes para las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación, en tiempo real, acerca de la represión policial y militar que estaba ocurriendo. Las redes y relaciones transnacionales también resultaron vitales para el FNRP puesto que los movimientos sociales se han globalizado y sus formas de comunicación y acción cruzan las fronteras sin necesidad de "pasaportes". En este sentido, las redes y relaciones que las organizaciones y los líderes en general tienen con actores en otros países, especialmente con los medios alternativos y las organizaciones de derechos humanos, contribuyeron a la capacidad del movimiento social para romper el bloqueo informativo. Pero el FNRP también hizo uso de medios de comunicación de larga data que constituyen un legado simbólico y comunicacional, incluyendo: pintadas callejeras o grafitis, volantes, declaraciones y comunicados que cada organización o grupo produce y distribuye entre los manifestantes. A esto debemos añadir la producción de un órgano oficial escrito de la FNRP y un programa de radio, que se utilizaron para informar de los acontecimientos más importantes en curso.

CONCLUSIÓN

En suma, la resistencia al golpe militar se construyó en base a décadas de lucha previa al neoliberalismo. El FNRP se compone de una variedad de sectores sociales que sostuvieron la resistencia por más de 2 años, hasta el regreso negociado del Presidente Manuel Zelaya a mediados de 2011. Entre 2011 y 2013, el FNRP en parte puso sus esfuerzos en la construcción de un partido político innovador, LIBRE. LIBRE compitió en las elecciones presidenciales de 2013 y obtuvo casi 900 mil votos en una contienda polémica y controvertida (Sosa, 2014). El nuevo partido izquierdista emergió como la segunda fuerza política del país y quebró la dominación centenaria de los dos partidos políticos de elite, donde LIBRE obtuvo la segunda mayoría

de representantes en el Parlamento nacional. LIBRE, junto al FNRP y los movimientos sociales, siguen movilizándose en las calles para denunciar la imposición de las medidas neoliberales y los actos de represión del Estado.

Entre 2014 y 2017 las protestas han girado en torno a la lucha contra la corrupción y la demanda de justicia por el asesinato de la líder indígena y ambientalista Bertha Cáceres, perpetrado el 03 de marzo de 2016. Entre mayo y octubre de 2015 ocupó el escenario nacional el movimiento de los indignados, cuyas protestas fueron conocidas como las "marchas de las antorchas". Jóvenes de clase media se movilizaron en unas 75 ciudades del país, exigiendo se castigará a los actores de una red de corrupción que desfalcó al menos en 7 mil millones de lempiras al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). En Tegucigalpa las personas participantes en las protestas llegaron a unas 30 mil personas. Como resultado de esta estas protestas, se instaló en el país la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), una instancia similar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICG). En el 2016 y 2017 los pueblos originarios, particularmente el Pueblo Lenca y Garífuna ha estado movilizado porque se castigue a los que ordenaron el asesinato de Bertha Cáceres (Sosa, 2016).

BIBLIOGRAFÍA

Almeida, P. D. 2002 "Los movimientos populares contra las políticas de austeridad económica en América Latina" en *Realidad. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades* (El Salvador: Universidad Centroamericana, UCA) N° 86, marzo-abril.

Almeida, P. D. 2007 'Defensive mobilization: Popular movements against economic adjustment policies in Latin America' en *Latin American Perspectives*, *34*(3): 123-139.

Almeida, P. D. y Stearns, L. B. 1998 'Political opportunities and local grassroots environmental movements: The case of Minamata' en *Social Problems*, *45*(1): 37-60.

Anner, M. 2011 *Solidarity transformed: Labor responses to globalization and crisis in Latin America* (Ithaca: Cornell University Press).

Benford, R. D. y Snow, D. A. 2000 'Framing processes and social movements: An overview and assessment' en *Annual Review of Sociology*, *26*: 611-639.

Earl, J. y Kimport, K. 2011 *Digitally enabled social change: Activism in the Internet age* (Cambridge: MIT Press).

García Linera, Á. 2001 "La estructura de los movimientos sociales en Bolivia" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 5, septiembre.

Hunt, S.; Benford, R. y Snow, D. 1994 "Marcos de acción colectiva y campos de identidad en la construcción social de los movimientos" en Laraña, E. y Gusfield, J. (eds.) *Los nuevos movimientos sociales. De la Ideología a la identidad* (Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS).

McAdam, D. 1982 *Political process and the development of black insurgency, 1930-1970* (Chicago: University of Chicago Press).

McAdam, D.; McCarthy, J. D. y Zald M. N. 1999 (1996) "Oportunidades, estructuras de movilización y procesos enmarcadores: hacia una perspectiva sintética y comparada de los movimientos socials" en McAdam, D.; McCarthy, J. D. y Zald M. N. (eds.) *Movimientos sociales: perspectivas comparadas* (Madrid: Ediciones Itsmo).

McCarthy, J. D. 1996 'Constraints and opportunities in adopting, adapting, and inventing' en McAdam, D.; McCarthy, J. D. y Zald M. N. (eds.) *Comparative perspectives on social movements: Political opportunities, mobilizing structures, and cultural framings* (Cambridge: Cambridge University Press). pp. 141-151.

Meyer, D. S. 2004 'Protest and political opportunities' en *Annual Review of Sociology*, *30*: 125-145.

Silva, E. 2009 *Challenging neoliberalism in Latin America* (Cambridge: Cambridge University Press).

Sosa, E. 2010 *La protesta social en Honduras: del ajuste al golpe de Estado* (Tegucigalpa: Editorial Guaymuras).

Sosa, E. 2016. Democracia y movimientos sociales en Honduras: de la transición política a la ciudadanía indignada, Tegucigalpa: Guaymuras. Sosa I., J. E. 2014 "Honduras: Entre criminalidad, enfrentamiento mediático, protesta social y resultados electorales cuestionados" en *Revista de Ciencia Política*, *34*(1): 203-219.

Tarrow, S. 1994 *Power in movement: Social movements, collective action and politics* (Cambridge: Cambridge University Press).

Tarrow, S. 1999 (1996) "Estado y oportunidades: La estructuración política de los movimientos sociales" en McAdam, D.; McCarthy, J. D. y Zald M. N. (eds.) *Movimientos sociales: perspectivas comparadas* (Madrid: Ediciones Itsmo).

Tilly, C. 2005 *Social movements enter the twenty-first century* (Nueva York: Columbia University).

Tilly, C. 2007 *Contienda política y democracia en Europa 1650-2000* (Barcelona: Hacer editorial).

Viterna, J. 2013 *Women in war: The micro-processes of mobilization in El Salvador* (Oxford: Oxford University Press).

Zibechi, R. 2003 "Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desafíos" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 9: 186-187, enero.

CÓMO CITAR ESTA PUBLICACIÓN:
Sosa, Eugenio. 2017. "El movimiento contra el golpe de Estado en Honduras" Pp.541-564 en Paul Almeida y Allen Cordero Ulate, Eds., *Movimientos Sociales en América Latina: Perspectivas, Tendencias y Casos*. Buenos Aires: CLACSO.

23

Simona Violetta Yagenova*

MOVIMIENTOS SOCIALES GUATEMALTECOS: DEL PROCESO DE PAZ A UN NUEVO CICLO DE LUCHA POPULAR, 1996-2013**

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presenta un breve panorama de los cambios que se han producido durante la lucha de los movimientos sociales en Guatemala desde la firma del Acuerdo de Paz en 1996, que puso fin a 36 años de guerra interna. El ciclo de lucha popular que hoy vemos en Guatemala constituye una respuesta a las demandas estructurales e históricas que nunca fueron atendidas ni resueltas, así como a nuevos factores como la imposición de un modelo económico basado en la acumulación por despojo. Esto se produce en un contexto de regresión en el proceso de democratización respeto de los derechos humanos y del fortalecimiento de las fuerzas políticas, económicas y militares que buscan la restauración de un régimen autoritario.

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y EL PROCESO DE PAZ

Los movimientos sociales que resurgieron (1984-1990) después de las políticas de contrainsurgencia más feroces, que incluyeron el genocidio y el asesinato en masa, estuvieron compuestos por grupos históricamente contenciosos (obreros, campesinos, estudiantes y maestros) y también por nuevos actores como las víctimas de violaciones de

* FLACSO-Guatemala, Guatemala.

** Traducción de Eugenia Cervio y Sara Medina.

derechos humanos, los familiares de desaparecidos, los refugiados y la población desplazada, las mujeres y las organizaciones indígenas. Durante este período, estos grupos adquirieron niveles de unidad importantes en torno a demandas estratégicas, tales como democratización, desmilitarización, el alto costo de vida, el quebrantamiento de los derechos laborales, la privatización de las empresas estatales y el fin de la guerra y de la violencia política, junto con las demandas para la negociación de las causas que originaron la lucha armada.

A medida que las negociaciones de paz evolucionaban (1990-1996), se canalizaron las propuestas con la esperanza de que el contenido final refleje las demandas de la sociedad civil. Esto se logró solo parcialmente, dejando una honda frustración en las organizaciones campesinas que exigían una profunda reforma de la tenencia de la tierra; y consternación en las organizaciones sindicales debido a que los derechos laborales fueron apenas referidos en los acuerdos. Es importante mencionar que durante estos años el movimiento obrero fue testigo de una importante destrucción de los sindicatos, especialmente en el sector privado, que después de 1996 continuó con un debilitamiento de los sindicatos del sector estatal (Yagenova, 2010).

La unidad de acción que se había logrado durante el período anterior (1984-1990) comenzó a diluirse, dado que la dinámica del proceso de paz requería de análisis, propuestas y acciones sectoriales. Este factor (la distribución de los Acuerdos de Paz en diferentes temas y problemas nacionales), posteriormente sería utilizado por los poseedores del poder político y económico para quebrantar su cumplimiento y contribuir a la pérdida de la perspectiva holística en la cual se negociaron. Sin embargo, los sectores populares esperaban que, con el nuevo clima político democrático, los movimientos tuvieran posibilidades de crecer y fortalecer su lucha.

El contenido del Acuerdo de Paz debe ser entendido en el contexto en el que se negoció, como resultado un equilibrio de poder político y social determinado. Se abrieron posibilidades para aquellas demandas que podían ser toleradas en el marco de una democracia liberal y representativa, pero no para aquellas que cuestionaran el neoliberalismo o el modelo de acumulación.

Sin embargo con la firma del Acuerdo de Paz en 1996, que puso fin a 36 años de guerra interna, se plantearon muchas expectativas en la sociedad guatemalteca respecto a si este esfuerzo podría llevar a la construcción de un Estado democrático y abrir las posibilidades para atender a los problemas históricos y estructurales de desigualdad, pobreza, racismo, discriminación y respeto de los derechos humanos. Entre las fuerzas revolucionarias organizadas en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), los Acuerdos de Paz

fueron considerados instrumentos de lucha política y social que debían forzar una transición para fortalecer el poder popular y democrático para cambiar profundamente la naturaleza del sistema político y económico. Empero, para la clase dominante, fue visto como una oportunidad para beneficiarse del proceso de globalización neoliberal. El sector privado, inicialmente renuente al proceso de paz, nunca se comprometió con la posibilidad de cambios económicos y estructurales.

Durante los años 1996-2003, los movimientos sociales y las fuerzas democráticas concentraron la mayor parte de sus esfuerzos a contribuir y a exigir el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. No sería para nada exagerado afirmar que los limitados avances logrados fueron debido a su presión y a los de la comunidad internacional. Los movimientos sociales desplegaron las estrategias más diversas tales como: elaboración de propuestas de políticas públicas y leyes, implementación de planes de defensa con los partidos políticos, el sector privado y las estructuras que detentan el poder, promover la comunicación social y la educación política para elevar el grado de conciencia pública sobre la necesidad de las clases populares de organizarse y defender sus derechos. Muchas de las organizaciones participaron en espacios de diálogo político creados específicamente para garantizar el cumplimiento de algunos de los Acuerdos de Paz que se consideran de especial importancia, como los relacionados con el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDP), las cuestiones sociales, económicas y de tierras, el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria (ASESA) y el fortalecimiento de las fuerzas civiles y cambios en las funciones militares. La premisa era que con el diálogo y la negociación sería posible avanzar en la dirección de las reformas del Estado, el fortalecimiento del poder ciudadano y los nuevos derechos políticos. Esto, lamentablemente, no ocurrió.

Para el año de 2003, se hizo evidente que el proceso de paz estaba terminando.[1] Las partes más importantes de los Acuerdos de Paz no habían sido cumplidas y la clase dominante estaba imponiendo medidas neoliberales que comenzaron a generar cambios institucionales y legales que favorecían a la empresa privada, la apertura de los mercados y la acumulación por despojo. Una huelga de maestros (de 53 días de duración) en la cual confrontaron al Estado con manifestaciones masivas, la ocupación de edificios públicos, aeropuertos y bloqueo de pasos fronterizos representó una ruptura respecto de la forma en que

1 El análisis de los pronunciamientos de los movimientos sociales entre 1997 y 2003 mostró que sus demandas relacionadas con el proceso de paz fueron en vano y que comenzaron a criticar el incumplimiento.

los movimientos sociales protestaron después del Acuerdo de Paz.

Las elecciones nacionales de 2003 marcaron un cambio en la situación política, a partir de que un neoliberal y defensor de los estrechos intereses del sector privado ganara la presidencia (Oscar Berger, 2004-2007). Durante esos 4 años el gobierno tomará medidas, tales como la adhesión al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, la República Dominicana y los Estados Unidos (CAFTA-RD) en 2005, favoreciendo la inversión económica extranjera que facilitó un modelo extractivo basado en la industria minera, el petróleo, los recursos naturales, etc.; que continuará hasta el presente, en 2015. El régimen de Berger fue hostil a la lucha popular y las violaciones de los derechos humanos comenzaron a aumentar nuevamente. Berger se enfrentó, sin embargo, con un importante ciclo de protesta que convergió en la declaración de una huelga nacional en junio de 2004 en la cual los sindicatos, campesinos, mujeres y organizaciones indígenas participantes se movilizaron contra las políticas económicas indeseadas,[2] exigiendo soluciones a la situación agraria, salarial, etcétera. Esto fue seguido por otras protestas que alcanzaron su punto más alto en la lucha contra el CAFTA-RD firmado en marzo de 2005 (Yagenova, 2012a).

UN NUEVO CICLO DE LUCHA POPULAR (2003-2014)

Ciclos de lucha popular se pueden definir por cómo en determinados momentos de la historia las fuerzas sociales y democráticas conciben la transformación del sistema, sus métodos de lucha y acción colectiva, y cómo construyen sus demandas. Los ciclos de lucha popular también determinan si las clases populares son capaces de generar conceptos y pensamientos políticos críticos que demuestran la esencia del sistema de dominación, la manera en que estas fuerzas forman alianzas y recuperan la noción de "el colectivo", construyen alternativas y propuestas emancipadoras que tienen la dirección estratégica para enfrentar al capitalismo, a la clase dominante y las estructuras de poder que se insertan en el marco legal e institucional del Estado (Yagenova, 2011).

El actual ciclo de lucha popular comenzó en 2003 y dejó atrás el "período del Acuerdo de Paz", una coyuntura especial caracterizada por cierta apertura para el diálogo político, la búsqueda de consenso y debate sobre temas nacionales importantes y sus posibles soluciones. Es importante mencionar que este contexto fue creado por el intenso período de lucha revolucionaria y popular desde los 60 hasta comienzos de los 80. El "período de paz" ofrecía la posibilidad de

2 Como el aumento del IVA del 12 al 15%.

cambiar el destino del país, si los acuerdos se hubieran cumplido en los términos de sus componentes estructurales y no hubieran perdido su integridad; sin embargo, este pacto político y social fue traicionado por la clase dominante y sus aliados.

5.178 protestas sociales se registraron durante el periodo de 2005 a 2012; una tendencia que se ha intensificado y extendido a nuevos territorios.[3] Las muchas y variadas demandas que motivaron a hombres y mujeres a protestar en público refleja el nivel de organización que la sociedad civil ha adquirido en los años de la posguerra. Es una prueba de la creciente inconformidad, una nueva disposición a levantarse en la defensa de los derechos y una esperanza de cambio. Los principales protagonistas que impulsaron las protestas sociales fueron indígenas, organizaciones campesinas y comunidades rurales que se movilizaron por cuestiones históricas y por nuevos temas emergentes (Yagenova, 2012b).

La lucha contra el modelo extractivo, especialmente las operaciones mineras, se centró inicialmente en el caso de la "Mina Marlin" propiedad de Goldcorp S.A. ubicada en Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, departamento de San Marcos. Es un caso paradigmático, por las siguientes razones (Yagenova, 2012a):

La primera consulta popular a la comunidad, que determinó la voluntad del pueblo sobre este proyecto minero, se realizó el 18 de junio de 2005 cuando la comunidad, basada en antiguas prácticas Mayas, decidió rechazar la explotación minera por mayoría de votos. Este referendo popular inició una nueva forma de resistencia que se extendería a otros territorios habitados por poblaciones indígenas y mestizas (COPAE, 2005).

La minería metálica fue debatida por muchos sectores de la sociedad civil y formó parte de la agenda nacional, que influyó en la opinión pública. De acuerdo a un estudio realizado por ASIES (2010), el 57% de la población estaba en contra de este tipo de proyecto y el 72% consideró que las empresas mineras violan los derechos humanos (Yagenova, 2012a).

El Estado actuó a favor del proyecto "Mina Marlin", aún cuando se documentaron numerosas violaciones a los derechos humanos y la mina generaba conflicto social en las comunidades circundantes. Estos eventos alertaron, a diferentes grupos entre los pueblos indígenas, sobre los posibles impactos de las operaciones mineras y generaron análisis y reflexión sobre la relación entre el Estado, el capitalismo y los derechos de los pueblos indígenas.

---

3 Basado en las estadísticas del grupo de estudio del Movimiento Social de FLACSO-Guatemala.

En 2010, los esfuerzos de la lucha contra la minería en general, y contra el caso de la "Mina Marlin" en particular, tuvieron repercusión en varias organizaciones internacionales de derechos humanos. La OIT, la CIDH, el CERD y el relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, exhortaron al Estado guatemalteco a adoptar medidas inmediatas para atender la situación, cumplir con la Convención 169 de las Naciones Unidas sobre el derecho a la consulta y el respeto de los territorios indígenas. La CIDH emitió medidas de protección a 18 comunidades de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, e instó al gobierno a suspender este proyecto minero. Aunque en 2011 la CIDH cambió estos requisitos, esos resultados se deben a una intensa lucha política y jurídica en el escenario nacional e internacional (CERD, 2010; CIDH, 2009, 2011; Consejo de los Pueblos de Occidente, 2010).

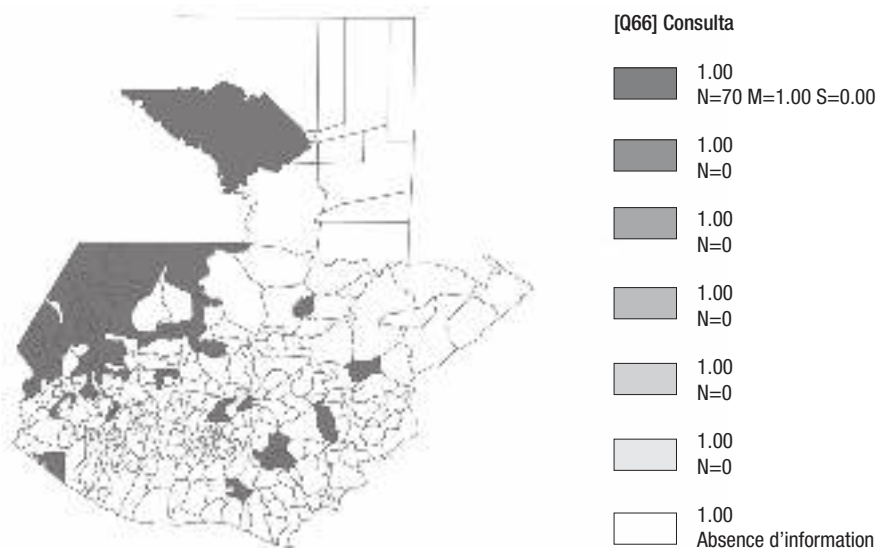
Es importante señalar que la resistencia de las comunidades y de los pueblos indígenas contra los proyectos de minería, hidroeléctricas y perforaciones petroleras tuvieron un impacto negativo en los planes del Estado y las empresas privadas para expandir rápidamente estas inversiones.

Entre 2005 y 2013 se organizaron exitosamente 73 consultas comunitarias y municipales, en las que por mayoría absoluta los habitantes de esas localidades rechazaron los proyectos de exploración o explotación de recursos naturales. Más de 1 millón de personas participaron en estos ejercicios profundamente democráticos, basados en antiguas prácticas indígenas de consulta o basados en la legislación municipal. Estos referendos populares se implementaron en 12 de los 22 departamentos de Guatemala, incluyendo: San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché (la región occidental montañosa, poblada principalmente por pueblos indígenas), Retalhuleu (costa sur), Santa Rosa, Zacapa, Jalapa, El Petén, Baja y Alta Verapaz (norte de la región) y Guatemala (región central). Algunas de las organizaciones que han desempeñado los roles más importantes en este proceso son: el Consejo de los Pueblos de Occidente (CPO), el Colectivo Madre Selva, el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS), la Coordinación y Convergencia Maya Waquib Kej, así como la Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE) (Cuadro 23.1 y Gráfica 23.1).

La importancia política y simbólica de las formas democráticas de resistencia reside en:

1. El cuestionamiento de la autoridad del Estado para imponer un modelo económico que la comunidad considera una amenaza a sus territorios, culturas, recursos naturales y a su futuro.
2. Que las consultas populares son un ejercicio de democracia di-

Gráfica 23.1
Mapa de los municipios donde se realizaron los procesos de consulta, 2005-2013



Les surfaces de rectangles de l'histogrammesont proporcionelles au nombre d'unites spatiales dans chaque classe définie sur la variable: 'Consulta' maximum = 70 pour la classe nº1

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 23.1
Cantidad de consultas realizadas, 2005-2013

Años	Cantidad de consultas realizadas contra los proyectos mineros, hidroeléctricos y petroleros
2005	3
2006	7
2007	12
2008	15
2008	8
2010	6
2011	8
2012	5
2013	8

Fuente: Datos de protesta social, 2004-2013: Grupo de estudio del Movimiento Social, FLACSO-Guatemala.

recta en un contexto donde hay un cuestionamiento profundo de la esencia del sistema democrático liberal y representativo.
3. Esto ha implicado a una confrontación directa no solo con el Estado sino también con las empresas privadas nacionales e internacionales, que condujo a actos de violencia y represión.
4. Esto ha llevado a importantes encuentros, debates, intercambio de experiencias, solidaridad y alianzas entre los mayas, xinka y mestizos que coinciden en el rechazo de estos proyectos.
5. Las consultas populares han contribuido a fortalecer la demanda de autodeterminación de los pueblos indígenas y el respeto de sus derechos, tal como lo determina la legislación nacional e internacional.

El actual ciclo de lucha popular difiere del anterior en los aspectos que se muestran en el Cuadro 23.2.

Cuadro 23.2
Ciclos de protesta en Guatemala, 1972-2013

	2003-2013	1996-2003	1984-1996	1972-1984
Principales fuerzas sociales y políticas que demandan cambio del sistema	Pueblos originarios	Movimiento campesino	Organizaciones revolucionarias	Organizaciones revolucionarias
	Movimiento campesino	Pueblos originarios	Sindicatos / gremios	Sindicatos / gremios
	Comunidades	Sindicatos / gremios	Organizaciones campesinas	Movimiento estudiantil
		DD.HH. y organizaciones por la Justicia	Víctimas de violaciones a los DD.HH.	Movimiento de maestros
	Organizaciones de mujeres	Organizaciones de mujeres	Refugiados y población desplazada	Movimiento campesino
Principales métodos de lucha	Lucha social y nuevas formas de resistencia popular definidas como la defensa del territorio	Lucha social y política	Lucha armada, social y política	Lucha armada, social y política
Principal objetivo de lucha	a) Construcción del Estado Plurinacional	Reformas políticas, sociales y económicas que generarían un sistema político democrático y profundos cambios en el sistema económico	Transformación política del Estado con lucha armada y/o social , y luego de 1999 con negociaciones del proceso de paz	Derrocamiento del Estado en medio de un movimiento revolucionario social y armado

	2003-2013	1996-2003	1984-1996	1972-1984
	b) Reformas estatales con cambio en el sistema legal o institucional			
	c) Afianzamiento de prácticas y relaciones contrahegemónicas que eventualmente producen cambios desde arriba			
Concepción dominante de las alianzas	Alianzas basadas en identidades (mujeres, pueblos originarios)	Alianzas multisectoriales	Alianzas multisectoriales y clasistas	Alianzas clasistas, en especial obreros y campesinos
		Alianzas sectoriales		
	Alianzas basadas en la critica conjunta al capitalismo			
	Alianzas sectoriales			
Principales contradicciones sistémicas que llevan a la protesta social	Acumulación por despojo	Situación agraria	Militarización y contrainsurgencia	Dictadura Militar
	Explotación clasista	Explotación clasista	Explotación clasista	Explotación clasista
	Situación agraria		Situación agraria	Situación agraria
	Racismo estructural. Patriarcado	Racismo estructural. Patriarcado	Políticas y Estado	Represión
Principal respuesta del Estado y clases dominantes a la protesta social	Represión con faltas reiteradas de diálogo	Diálogo, negociación, represión y reformas en aspectos legales e institucionales	Represión	Represión
	Militarización	Militarización	Militarización	Militarización

Fuente: Elaboración propia.

LA CRISIS DE LA DEMOCRATIZACIÓN Y EL RETORNO DEL AUTORITARISMO

Los pactos políticos que condujeron a la transición democrática, como la Constitución de 1985 y a la firma de los Acuerdos de Paz, han perdi-

do fuerza y apoyo, y por el momento, no existe una nueva plataforma política de consenso nacional que permita un re direccionamiento del país por un camino diferente. Hay un profundo deterioro ético en las prácticas políticas, que se inclinan más a la lógica perversa de las relaciones capitalistas (Yagenova, 2013). El Estado de Guatemala parece estar prácticamente cerrado a un cambio político profundo. No se han creado nuevos espacios políticos de participación popular, y el Estado ha mostrado una creciente incapacidad para responder a las demandas y aspiraciones de cambio que subyacen en las fuerzas sociales y democráticas. Las limitadas modificaciones institucionales y legales que se implementaron en los años de la posguerra civil fueron el resultado de los esfuerzos y luchas de los movimientos sociales, pero no cambiaron las estructuras de poder históricamente arraigadas.

La nueva generación de guatemaltecos nacidos bajo la influencia del neoliberalismo y educados en el funcionamiento minimalista de la democracia liberal y representativa tiene serias dificultades para convertirse en una fuerza política renovadora. Mientras tanto, los partidos políticos de izquierda, a pesar de que representan las buenas intenciones y una voz crítica en el sistema, no han sido capaces de dirigir o de constituirse en una alternativa política que atraiga el apoyo de las masas. Se podría decir, en este punto, que aunque hay una creciente inconformidad con el funcionamiento del sistema político, especialmente de los partidos, no parece haber una fuerza política que pueda capitalizarla –por el momento– en dirección a un horizonte emancipatorio.

Las alianzas entre los movimientos sociales y los partidos políticos han sido tensas y frustrantes. Este es el resultado de diferentes experiencias sobre el papel que la estrategia política electoral tiene en el concepto de lucha popular hoy en día, y también debido a los errores políticos que cometieron los partidos que quisieron subordinar los movimientos sociales a su propia dinámica electoral pero sin una visión estratégica de largo plazo respecto al cambio político. Se debe entender que, después de la guerra civil, los movimientos sociales resurgieron no solo con un profundo sentido de la autonomía, sino también con serias dudas sobre la posibilidad de que el sistema pudiera ser reformado por el resultado de procesos electorales. A pesar de las divergencias que existen entre los diferentes movimientos sociales, como su historia reciente, sus formas de organización, identidades, extracciones socioeconómicas, demandas y estrategias de lucha, están de acuerdo en la necesidad de que debe haber una reforma drástica en el Estado y el sistema político y económico.

En un contexto en el que la clase dominante impone un modelo basado en la acumulación por despojo, cuando hay una nueva alianza

militar-oligárquica que aspira retornar a un régimen autoritario y a la regresión obvia de un frágil proceso democrático, las fuerzas protagonistas de la protesta popular –como los pueblos indígenas y comunidades campesinas– llevan la carga de este modelo y el nuevo ciclo de represión (*El Observador*, 2013a y 2013b; Solano, 2009). Han pasado ocho procesos electorales desde el comienzo de la transición democrática (1985) pero el resultado del último (2011), en que el ex general Otto Pérez Molina ganó la Presidencia (2012-2015), ha significado el retorno al Estado de militares activos y retirados.

La "reinvención" del enemigo interno, contenida en el concepto de seguridad hemisférica promovido por los Estados Unidos, se introdujo en la política de seguridad del Gobierno guatemalteco, que considera el conflicto social como una de las principales amenazas para el Estado. La defensa del territorio y la soberanía nacional implementada por el gobierno se basa en una defensa absoluta de la empresa privada y el modelo de acumulación por despojo, en el que las Fuerzas Armadas y su intrincada red de colaboradores participan activamente defendiendo sus propios intereses económicos y políticos (Yagenova, 2012b). Durante los últimos 2 años (2012-2013) hubo un retroceso en el respeto de los derechos humanos, y una estrategia renovada de represión y criminalización dirigida contra los que luchan por defender sus territorios y los derechos de los pueblos indígenas. La rebelión de los pueblos indígenas, que ejercen su derecho a decir "NO" a la política de acumulación, se enfrenta a una estructura de poder, históricamente construida, que requiere para su reproducción de la subordinación y explotación de los pueblos indígenas. A lo largo de la historia del país, la clase dominante ha recurrido sistemáticamente al uso de la violencia para mantener su poder y privilegios, que a principios de los 80 llegó al grado extremo de implementar el genocidio. El Cuadro 23.3 presenta los casos de resistencia contra los proyectos mineros o hidroeléctricos que están activos en la actualidad y muestra la clase de violencia que fue implementada por las fuerzas de seguridad del Estado o privadas. Esta violencia o represión apunta a debilitar la lucha y la resistencia. La mayoría de estos casos han sido denunciados en organizaciones internacionales de derechos humanos como la CIDH.

La clase dominante y sus aliados, al tener un marco jurídico e institucional favorable, consideraron que las luchas populares en defensa de los territorios indígenas y la autodeterminación que cuestiona la lógica liberal del poder del Estado para usufructuar las tierras y los recursos naturales vitales para beneficio de privados amenazaban su capacidad de enriquecimiento en ciernes y su *statu quo*. Por esta razón, las comunidades en resistencia (indígenas y mestizas) se

Cuadro 23.3

Resistencia contra los proyectos hidroeléctricos y mineros, 2004-2013

Departamento	Municipalidad	Nombre del Proyecto	Estado de sitio	Asesinato	Ataques armados	Prisioneros políticos	Secuestro	Orden de captura	Persecución y captura	Ataques y violaciones sexuales a mujeres
Huehuetenango (2012-2013)	Santa Cruz Barillas	Hidroeléctrica Hidro Santa Cruz	*	*	*	*	*	*	*	*
Santa Rosa Jalapa (2011-2013)	San Rafael Las Flores Santa Rosa de Lima, Nueva Santa Rosa y Casillas (Santa Rosa) Mataquescuintla y San Carlos Alzatate (Jalapa)	Mina El Escobal	*	*	*	*	*	*	*	*
San Marcos (2004-2013)	Sipacapa San Miguel Ixtahuacán	Mina Marlín	–	*	*	*	*	*	*	*
Guatemala (2011-2013)	San José el Golfo y San Pedro Ayampuc	Mina El Tambor, Progreso Derivado VII	–	*	*	–	–	*	*	–
Guatemala (2007-2013)	San Juan Sacatepéquez	Proyecto Minero Cemento Progreso	*	*	*	*	*	*	*	*
Izabal (2007-2012)	El Estor	Proyecto Minera Félix CGN	–	*	*	*	–	*	–	*

Referencias: * sucedió | – no sucedió. Fuente: Elaboración propia.

encuentran en una situación de intensa presión (represión, cooptación o lucha por la autodeterminación) debido a que se han convertido en el vínculo estratégico para la reproducción del sistema hegemónico o de emancipación y liberación. Por tanto, la fase actual de este ciclo de lucha se despliega en un contexto de profunda disputa territorial y de una nueva ronda de represión y violencia que pone en peligro el fortalecimiento de los movimientos sociales.

Un aspecto importante es la revitalización de una crítica profunda al capital neoliberal y cómo se relaciona con la reproducción del patriarcado y el racismo estructural. La resignificación de los conceptos, el análisis crítico de la praxis social y política, así como la búsqueda de alternativas que trasciendan la lógica de las versiones autoritarias de la democracia liberal y representativa, nutren el actual ciclo de lucha popular. Las prácticas contrahegemónicas basadas en la reciprocidad, la solidaridad, el hondo compromiso con la justicia y el cambio social, la defensa de la vida, la autodeterminación de los pueblos, el respeto y la dignidad humana, la sostenibilidad ecológica, la igualdad, etc., cuestionan profundamente la lógica del sistema hegemónico en sus formas y expresión distintivas. Su convergencia en un proyecto político emancipador, que dispute el poder real de la clase dominante, es uno de los grandes desafíos que actualmente enfrenta a la lucha.

BIBLIOGRAFÍA

ASIES 2010 "Estudio de opinión sobre Minería de Metales en Guatemala", julio.

CERD 2010 "Informe referente a Guatemala" en CERD/C/ GTM/ CO/12-13, marzo.

CIDH 2009 "Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales".

CIDH. 2011 "Actualización de las medidas cautelares a favor de 18 comunidades de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa", diciembre 2011.

Consejo de los Pueblos de Occidente 2010 *El derecho a la consulta de los pueblos indígenas en Guatemala: La ruptura entre el discurso y la práctica* (Guatemala: CPO).

COPAE 2005 "La consulta comunitaria; la lucha del pueblo maya Sipakapense contra el atropello y la imposición", junio.

El Observador 2013a "Modelo de acumulación y competitividad", Año 7/8, N° 38/39, diciembre de 2012-abril de 2013.

El Observador 2013b "Industrias extractivas, despojo y destrucción", N° 40/41, mayo a septiembre.

Solano, L. 2009 "La transnacionalización de la industria extractiva" en *El Observador* (Guatemala), junio-julio.

Yagenova, S. V. 2010 *Los movimientos sociales frente al Estado, la democracia y los partidos políticos* (Guatemala: FLACSO-Guatemala) Tomo 1.

Yagenova, S. V. 2011 "Acumulación y desacumulación en el seno de la clase: El actual ciclo de lucha popular en Guatemala", noviembre.

Yagenova, S. V. 2012a *La industria extractiva en Guatemala: políticas públicas, derechos humanos y procesos de resistencia popular en el período 2003-2011* (Guatemala: FLACSO-Guatemala).

Yagenova, S. V. 2012b "Guatemala: Configuración del un proyecto político autoritario, remilitarización y protestas sociales" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO), diciembre.

Yagenova, S. V. 2013 "Guatemala: 10 Apuntes sobre la coyuntura", junio.

CÓMO CITAR ESTA PUBLICACIÓN:
Yagenova, Simona Violetta. 2017. "Movimientos sociales guatemaltecos: del proceso de paz a un nuevo ciclo de lucha popular, 1996-2013" Pp. 565-578 en Paul Almeida y Allen Cordero Ulate, Eds., *Movimientos Sociales en América Latina: Perspectivas, Tendencias y Casos*. Buenos Aires: CLACSO.

24

Sebastián Pereyra*, Germán Pérez**
y Federico Schuster***

TENDENCIAS DE LA PROTESTA SOCIAL EN ARGENTINA, 1989-2007 [1]

INTRODUCCIÓN: EL ESTUDIO DE LA PROTESTA SOCIAL

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación empírica basada en la noción de protesta social que excede el estudio de organizaciones específicas o episodios de contención, y que se extiende durante un período de tiempo lo suficientemente largo para interrogar a las transformaciones de la movilización social en la Argentina. Las ciencias sociales se han abocado al estudio de los movimientos sociales y la política contenciosa en las últimas décadas en Argentina –desde los estudios sobre el movimiento de los derechos humanos durante la transición democrática en los años 80 a los estudios actuales sobre las luchas ambientales y los movimientos de desocupados y la crisis económica de 2001.[2] Esta literatura fundamental

* Comité Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)-Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina.

** Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata, Argentina.

*** Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.

1 Traducción de Ana Steinberg y Eugenia Cervio.

2 Calderón y Jelin (1987); Jelin (1985, 2005); Brysk (1994); Farinetti (1999); Schuster y Pereyra (2001); Auyero (2002); Svampa y Pereyra (2003, 2005); Lobato y Suriano (2003); Massetti (2004); Delamata (2004, 2006, 2013); Merklen (2005); Schuster et al. (2005); Svampa (2005, 2008); Pereyra (2008); Pereyra et al. (2008); Palermo y Reboratti (2007); Svampa y Antonelli (2009).

se ha centrado tanto en el surgimiento y la dinámica de los actores particulares como en destacar la importancia de ciertas situaciones o eventos en la historia reciente de los movimientos de Argentina aunque, sin embargo, no proporciona una visión de conjunto y de largo plazo sobre la presencia y el impacto que la protesta política ha tenido en la política nacional.

Asimismo, contribuye al mapeo social y clasificación de las acciones colectivas como una vía para mostrar las demandas sociales y sus modos de expresión. Para ello, realizamos un relevamiento sistemático de las acciones de protesta registradas en la prensa nacional durante el período 1989-2007. En nuestra investigación hemos tomado la noción de protesta social como unidad de análisis, definida como los acontecimientos públicos contenciosos de un actor social que implica esfuerzos para movilizar recursos (Gamson, 1975; Tilly, 1978; Tarrow, 1997; Almeida, 2008). Por lo tanto, consideramos que una acción untaría es aquella que deriva de un mismo esfuerzo en la organización y movilización de recursos, independientemente de la continuación, o no, de la acción.

Los enfoques disponibles que se centran en las nociones de movimiento social, protesta y acción directa suelen relegarse a un segundo plano y tienen un carácter subsidiario respecto de la identidad colectiva de los participantes o de las dimensiones organizacionales de estas movilizaciones. Desde el principio, nuestro objetivo fue no enfocarnos en las identidades o las organizaciones sino, simplemente, recuperar la importancia de la dimensión de la acción de los movimientos y emplear un tipo de análisis en el que la acción se vuelva independiente, en cierta medida, de los procesos sociales que en última instancia la hacen posible. En años recientes, se realizaron estudios similares con análisis cuantitativos de la movilización social (Koopmans y Rucht, 2002). En general, este tipo de trabajos enfrenta una tensión inevitable al definir la unidad de análisis. Puede decirse que hay dos extremos al enfrentar la decisión metodológica: en un polo, la unidad puede ser definida con un criterio temático que permitiría una operacionalización de la noción de conflicto; el otro polo es el que, idealmente, define la unidad de análisis como toda medida de acción directa referida por las fuentes.[3]

Por lo tanto, lo que consideramos como acciones de protesta, al igual que otra variedad de acciones sociales, adquieren unidad en

3 Nos referimos a la investigación enfocada hacia un análisis de las acciones de protesta, aunque existen muchos trabajos estadísticos sobre los conflictos políticos que se orientan por los más diversos objetos de estudio (Koopmans y Rucht, 2002: 235-237).

virtud del sentido que conllevan. Es importante remarcar que las acciones de protesta se conciben, y fundamentalmente se realizan, con esta unidad de sentido o criterio;[4] por tal motivo consideramos que una acción de protesta no necesariamente coincide con una medida de acción directa, aun cuando esto ocurra en la mayoría de los casos. Por ejemplo, para el caso de un paro nacional, si bien analíticamente encontramos una multiplicidad de medidas directas específicas (cantidad de paros por rama de actividad o por sector público, empresa, provincia, localidad, etc.) en tanto que todas estas medidas fueron coordinadas y llevadas adelante con un sentido de unidad, para nuestros propósitos representan una sola acción de protesta.

Este capítulo intenta aportar un análisis de la forma en que determinados acontecimientos políticos se inscriben en la política nacional. Su pertinencia y relevancia deben ser pensadas, entonces, no como un análisis de las organizaciones y movimientos que conforman el universo de la movilización social en el país, sino como un análisis del registro público de la actividad de dichas organizaciones y movimientos. En este sentido, la noción de protesta social es conceptualmente productiva a la vez que coincide con la forma en la cual el lenguaje cotidiano identifica los fenómenos de movilización social.[5] Al mismo tiempo, dicha categoría permite evitar cualquier reducción respecto de la articulación y organización que presentan las diferentes formas de movilización. Por esta razón, decidimos considerar como unidad de análisis cada una de las acciones de protesta registradas por los principales diarios de alcance nacional.[6] El período

---

4 La unidad de criterio refiere a los elementos que permiten responder las preguntas sobre quiénes, cómo, por qué y para qué de las acciones.

5 Es necesario señalar que protesta social no es meramente una expresión usada por los medios gráficos para organizar y presentar historias sobre lo que está sucediendo sino que, además, es la denominación empleada por los funcionarios públicos, los políticos y demás actores implicados en la organización de la realidad social.

6 Como muchas investigaciones de esta clase, el relevamiento tomó la prensa nacional como fuente (los diarios *Clarín* y *La Nación*). Cuando son accesibles, usualmente se complementan con registros policiales o gubernamentales que devienen, de este modo, en las fuentes principales en las que estas investigaciones se basan para indagar la política nacional y/o largos períodos de tiempo (Koopmands y Rucht, 2002).
Para esta investigación, asumimos que los diarios impresos son la fuente disponible más conveniente para registrar la historia de la movilización social. Este primer hallazgo implica que la comunicación a escala nacional es principalmente transmitida por los medios de comunicación prensa impresa, aun cuando tiende a simplificar la complejidad de la información en relación a la que recibe el público más especializado, y en segundo lugar, como cualquier otro actor económico y político, representa intereses que sesgan los temas y la cobertura de los acontecimientos

que abarca esta investigación, 1989-2007 es particularmente importante ya que refleja de manera sistemática las actividades de protesta que tuvieron lugar en las últimas dos décadas en el país, que fueron simultáneamente enmarcadas por la estabilidad democrática de las instituciones y también por las inestabilidades, transformaciones y fluctuaciones del orden socioeconómico.

En el contexto de un país que surgió de una crisis hiperinflacionaria en 1989, una profunda transformación se produjo en la relación entre el Estado y el mercado. Como resultado de la acelerada desregulación de la economía y el proceso de desmantelamiento del Estado de bienestar argentino, los sindicatos perdieron notoriamente –al menos en su forma tradicional– la capacidad de participar en la determinación de las políticas públicas, mientras que aumentó el poder de las corporaciones empresarias vinculadas al capital transnacional a fin de influir en el curso del régimen de acumulación social (Robinson, 2008), marcado por una distribución del ingreso fuertemente regresiva y un notable deterioro en el mercado laboral. La década del 90 llevó la bandera del neoliberalismo e implicó de un proceso que, ciertamente, podría ser denominado como "modernización exclusiva" (Svampa, 2005).

Estas configuraciones político-económicas y culturales orientadas por las políticas pro mercado se derrumbaron, y fueron modificadas por la crisis de 2001-2002. El tipo de reorientación política económica que acompañó el final de la crisis fue la creación de la coalición de los Kirchner, que gobernó el país desde 2003 hasta la actualidad (finales del 2015). Incluso sin alcanzar una variación significativa de

---

políticos. Sin embargo, este tipo de enfoque nos permitió cumplir con nuestros dos objetivos principales: analizar globalmente las formas de manifestación de la acción colectiva en la política nacional y centrar el análisis en el largo plazo.

Como lo demuestran otros estudios (Koopmans y Rucht, 2002), los controles del sesgo de las fuentes (comparando los relevamientos con otras fuentes) solo permiten analizar mejor la información relevada, pero en ningún caso representan una aproximación más fiel al objeto. Un relevamiento, por ejemplo, realizado en un diario local o provincial en el mismo período de nuestra base de datos seguramente consignará protestas que varios diarios nacionales no cubrieron. Eso significa que los diarios nacionales no consideran todas las protestas que se realizan en los diferentes contextos locales. Sin embargo, no se puede sostener que esa nueva fuente es necesariamente más exhaustiva sino que, simplemente, tiene un sesgo diferente (Koopmans y Rucht, 2002: 238-239). Toda investigación de este tipo presupone asumir que se trabaja no sobre el universo de las protestas o movilizaciones, sino sobre aquellas que fueron registradas por alguna fuente. Por supuesto, la multiplicación de fuentes permite moverse en dirección de un universo más amplio de una naturaleza prácticamente infinita y, como en toda investigación, conviene tener claro cuánto agrega y a qué costo seguir sumando información.

algunas de las características estructurales en términos de producción y de los aspectos socioeconómicos del país respecto de los 90, el kirchnerismo ha impulsado un renovado espíritu mediante la revitalización del papel del Estado en la economía y con una serie de políticas destinadas a fomentar el desarrollo del mercado interno, el mantenimiento de los niveles de empleo, los aumentos salariales en el sector formal de la economía, que se suman a una política social más activa y de alcance universal.

Durante estos años, la situación de la reorientación político-económica se combinó con un sistema político dominado por un proceso de fuerte personalización de la representación que permitía a los gobiernos concentrar los recursos para la toma de decisiones, pero al mismo tiempo, limitaba las posibilidades del subsistema de partidos para armar un proceso de representación política basado en divisiones ideológicas y propuestas programáticas. Por lo tanto, es legítimo preguntarse por el impacto que tuvieron estos tipos de transformaciones estructurales en la constitución de los sujetos de las protestas. En este sentido, el período considerado parece estar marcado por un proceso de fragmentación de la protesta social, en relación a los actores y a las demandas de la protesta. Como veremos, el escenario general que se abre al comienzo de los 90 no es otro que la crisis y transformación del repertorio de confrontación sindical que caracterizó la política argentina por lo menos desde los años 30. Con la atención dirigida a la protesta social, se pueden observar el deterioro y la transformación en un proceso irregular pero constante de multiplicación y diversificación de actores, demandas y formas de protesta social.

Para el análisis y la presentación de los datos hemos dividido esta investigación en dos partes principales. En la primera parte, nos concentramos en el análisis de los años 90 hasta la crisis de 2001. Para comprender el impacto que tuvieron las transformaciones de las reformas estructurales y los cambios políticos en el escenario de movilización social, exploramos en detalle el mapa de la protesta social y sus principales tendencias. A continuación, evaluamos si los cambios que ocurrieron durante y después de la crisis de 2001-2002 modificaron los rasgos y las principales tendencias descritas en el período anterior.

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA ACTIVIDAD DE PROTESTA DURANTE LOS 90: DE LA HIPERINFLACIÓN A LA CRISIS DE 2001

Las fuertes crisis políticas y económicas que enfrentó Argentina en los años siguientes a la transición democrática representan circunstancias ineludibles al considerar los procesos de movilización social

en el país. En este sentido, tanto la crisis hiperinflacionaria que duró de 1989 a 1990 como la que estalló en 2001 y 2002 representan puntos de inflexión en las fluctuaciones políticas y económicas que siguieron, y son fundamentales para pensar los procesos de movilización. La década del 90 estuvo marcada por fuertes transformaciones políticas y económicas entre las crisis. En términos económicos, el mandato de estabilizar y combatir la inflación produjo un programa económico neoliberal que transformó la estructura productiva del país y cambió el rol que había desempeñado el Estado en la regulación de la economía y en la prestación de servicios (Cortés y Marshall, 1999). Políticamente, esos años implicaron una modificación de las divisiones y las tradiciones partidarias que surgieron en la segunda mitad del siglo XX y que seguían siendo fundamentales en los primeros años de la transición democrática (Acuña, 1995). Como corolario de estas transformaciones, la Argentina de los años 90 fue analizada por las ciencias sociales bajo el signo de la apatía, la desmovilización, la despolitización y la delegación (O'Donnell, 1997).

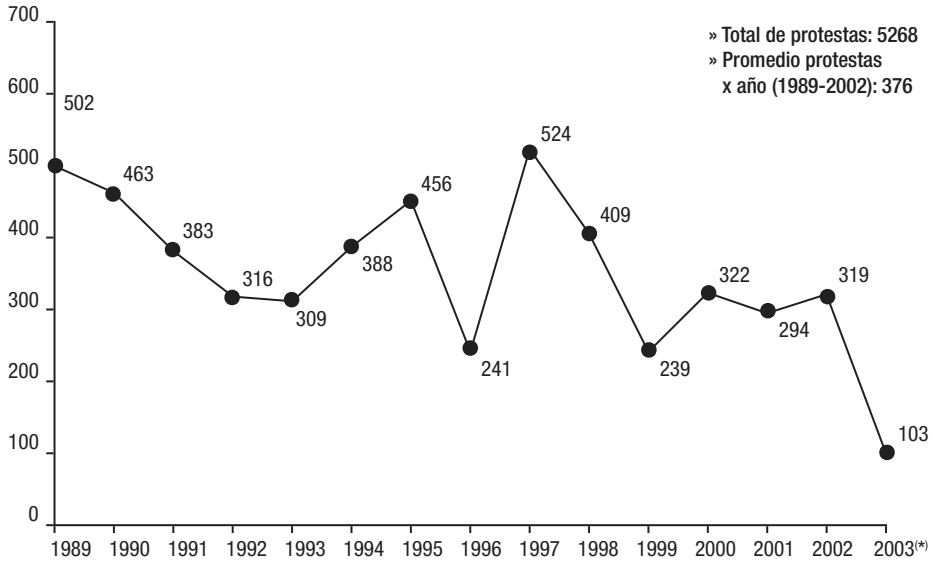
Sin embargo, una primera mirada al reflujo de los procesos de movilización social –en comparación con el escenario de la alta participación que caracterizó el fin de la dictadura y la apertura democrática– contrasta con los eventos importantes que se fueron sucediendo a lo largo de la década, acciones de alta intensidad y un fuerte carácter episódico.[7] Así, la imagen del reflujo contrasta con el proceso de movilización colectiva constante durante toda la década, que está vinculada menos a los actores clásicos de la movilización en el país (partidos políticos y sindicatos nacionales) y más a la expresión de los conflictos, las demandas de un orden diferente y a la multiplicación de los repertorios de confrontación. La Gráfica proporciona datos de la protesta durante el período (Gráfica 24.1).

El total de protestas registradas en el período 1989-2003[8] es de 5.268 y el promedio de protestas por año es de 376. La mayor cantidad de protestas se concentra en 1997, con un 17% más que en 1989, año inicial del período. Desde 1998 en adelante, las protestas por año

7 Marina Farinetti (2002) analizó estos eventos en términos de malestar social al vincular las protestas y la crisis política que estalló en varias provincias a partir de 1993, y que tiene algunas similitudes llamativas con procesos de movilización característicos de la crisis de 2001-2002.

8 Siempre que nos refiramos al período 1989-2003 se deberá considerar que nuestro relevamiento cubre solo hasta el 25 de mayo de 2003. Por esta misma razón, en la mayoría de los gráficos de líneas los datos solo llegan hasta 2002. En la próxima sección, incluiremos datos del período subsiguiente para luego establecer comparaciones entre este período y el posterior a la crisis de 2012.

Gráfica 24.1
Cantidad de protestas, 1989-2003 (valores absolutos)



Fuente: Grupo de estudios sobre protesta social y acción colectiva (GEPSAC). | Base: Total de protestas: (n=5268). | (*) 25/05/2003.

están por debajo de la media del período. La distribución del total de protestas por trimestres muestra dos ciclos de protesta.[9] El primero comienza en el cuarto trimestre de 1993, alcanza su punto más alto un año más tarde y luego desciende sistemáticamente hasta el tercer trimestre de 1996. El segundo ciclo comienza en el cuarto trimestre de 1996, llega a su punto más alto en el segundo trimestre de 1997 y luego comienza a declinar hasta alcanzar su punto más bajo en el cuarto trimestre de 1999. Si el primer ciclo muestra una paulatina intensificación de los conflictos a lo largo de todo un año (1994), el segundo, en cambio, muestra una escalada notoriamente mayor. Al comparar la cantidad de protestas del cuarto trimestre de 1996 con

9 Con el concepto de *ciclo de protesta*, Sydney Tarrow se refiere a "una fase de intensificación de los conflictos y la confrontación en el sistema social, que incluye una rápida difusión de la acción colectiva de los sectores más movilizados a los menos movilizados; un ritmo de innovación acelerado en las formas de confrontación; marcos nuevos o transformados para la acción colectiva; una combinación de participación organizada y no organizada; y unas secuencias de interacción intensificada entre disidentes y autoridades que pueden terminar en la reforma, la represión y, a veces, en una revolución" (Tarrow, 1997: 263-264).

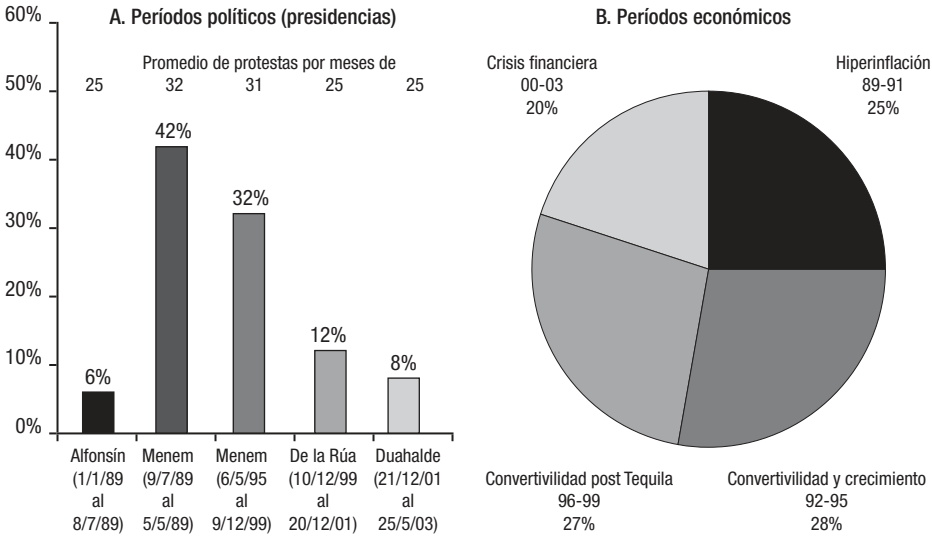
la cantidad alcanzada en el segundo trimestre de 1997 (el punto más alto del ciclo) se observa que, en seis meses, la cantidad de protestas creció un 328%. Este flujo sucede en el contexto de una gran transformación de la estructura de las oportunidades políticas de alcance nacional. Por un lado, durante ese año tuvo lugar la primera derrota del gobierno de Menem en las elecciones parlamentarias a favor de una coalición de la oposición llamada Alianza[10] y, por otro lado, una serie de conflictos de alto impacto impulsados por grupos multisectoriales integrados por desocupados, trabajadores de la administración pública, pequeños empresarios y comerciantes. Los conflictos más visibles tuvieron lugar en las provincias de Neuquén, Salta y Córdoba, y resultaron en el desarrollo del movimiento piquetero en el país (Svampa y Pereyra, 2003).

Los datos relevados muestran que las crisis políticas no necesariamente se producen como consecuencia de un incremento en la cantidad de protestas. En otras palabras, la cantidad o volumen de las protestas no está directamente relacionada a su impacto político. En efecto, en 1997 se registró un 56% más de protestas que durante 2001; sin embargo, las consecuencias de las primeras fueron significativamente menores que las de estas últimas. Considerando todo el período, 2001 es uno de los tres años con menor cantidad de protestas. Incluso durante ese año, se registraron más protestas en el segundo trimestre que durante el cuarto, cuando finalizó abruptamente el Gobierno de Fernando de la Rúa. No obstante, el impacto político de las protestas de 2001 en general, y las del último trimestre en particular, fue notable.

Para la diferenciación de distintos períodos políticos consideramos los mandatos presidenciales entre 1989 y mayo de 2003. La Gráfica 24.2 muestra la distribución de las protestas sociales según este criterio. La mayor proporción de protestas se distribuye en los dos mandatos de Carlos Menem (42% y 32%, respectivamente). El promedio de protestas de cada mandato presidencial muestra que hubo más protestas por mes durante los gobiernos de Menem que en los gobiernos de De la Rúa y de Eduardo Duhalde. Por otra parte, distinguimos una serie de períodos económicos. Al primero lo denominamos período "hiperinflación" e incluye los años 1989, 1990 y 1991; el segundo es el período que va desde 1992 a 1995, caracterizado por el establecimiento de la Ley de Convertibilidad y el mejoramiento de los índices macroeconómicos; el tercer período abarca los años que siguen al *efecto tequila*, desde 1996 a 1999; y, finalmente, el último

10 Coalición integrada por el Frepaso y la UCR.

Gráfica 24.2
Distribución de protestas según períodos políticos y económicos



Fuente: Grupo de estudios sobre protesta social y acción colectiva (GEPSAC). | Base: Total de protestas (n=5268).

período incluye los años en los que predomina la crisis financiera, desde 2000 a mayo 2003.

Si se consideran los períodos económicos, no se observan alteraciones significativas en la distribución de la cantidad de protestas. Esto significa que si bien muchas protestas tienen demandas económicas, como veremos más adelante, no hay una relación directa entre crisis económica y cantidad de protestas. La consecuencia de esta falta de concordancia es que el período económico con el mayor porcentaje de protestas es también el que muestra un crecimiento económico sostenido (1992-1995).

¿Qué tipo de organizaciones fueron las protagonistas de las protestas sociales? La Gráfica 24.3 muestra que, entre 1989 y mayo de 2003, los sindicatos protestaron más que cualquier otro tipo de organización. Del total de protestas registradas en el período analizado, los sindicatos organizaron casi la mitad de las movilizaciones. En segundo lugar se encuentran las protestas producidas por organizaciones agrupadas con la denominación de "sociedad civil"[11] con un

11 Sobre el tipo de organizaciones incluidas en esta categoría, ver Gráfica 24.9.

35% del total. Los demás tipos de organización alcanzan valores por debajo del 7%. Así sucede, por ejemplo, con la proporción de protestas convocadas por organizaciones piqueteras:[12] del total de las protestas del período, intervinieron estas organizaciones participaron solo en el 6% de los casos, la misma proporción que corresponde a las protestas llevadas a cabo por organizaciones empresariales. Nuevamente, debemos señalar la diferencia entre la cantidad de protestas y su impacto político. Aunque entre 1989 y mayo de 2003 se registra un volumen similar entre las protestas convocadas por las organizaciones piqueteras, empresariales o partidarias, el impacto político de las primeras ha sido claramente mayor, sobre todo en la segunda mitad del período (Gráfica 24.4).

Las demandas colectivas son un elemento central de las protestas sociales. ¿Cuáles fueron las principales demandas? Al analizar las demandas del total de las protestas de todo el período, se observa que 1 de cada 4 demandas fue salarial. Si a estas se agregan las demandas laborales, resulta que el 37% de todas las demandas del período han sido típicas de los trabajadores ocupados. Las demandas de trabajo y asistencia social directa representan tan solo el 5% del total entre 1989 y mayo de 2003. Después de los reclamos salariales, las demandas económicas (18%)[13] son las más importantes, siguen las demandas de seguridad social[14] y una proporción prácticamente igual de demandas de derechos humanos y administración de justicia. Por último, las protestas con demandas de seguridad, medioambiente o de consumidores no superan, en ningún caso, el 2% del total[15] (Gráfica 24.5).

La visibilidad –el carácter público– de la acción colectiva es una condición necesaria para ser definida como protesta social. El 'formato' es la dimensión analítica que refiere, precisamente, al modo en

---

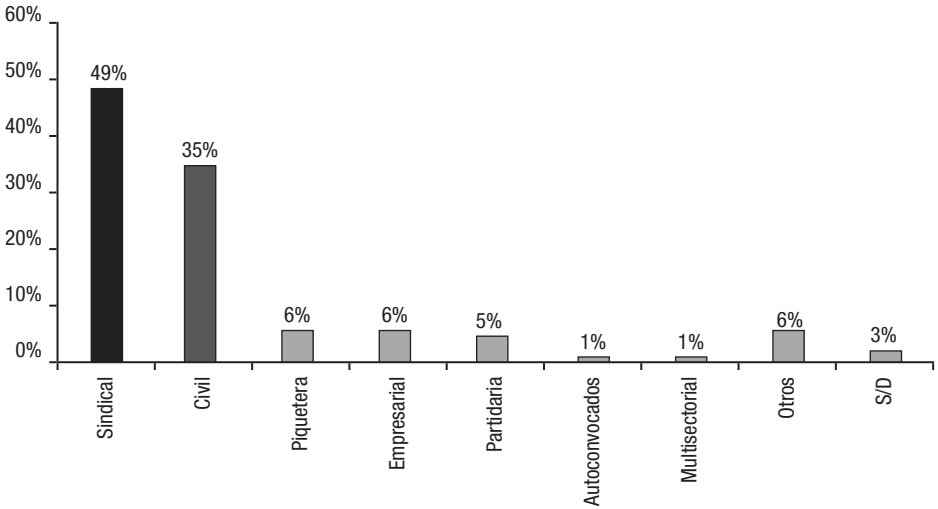
12 Para codificar la organización de una protesta como piquetera, las identificamos por sus siglas o acrónimos distintivos (por ejemplo: MTD, FTV, etc.) o por la simple denominación de "piqueteros", "desocupados" y "ex trabajadores".

13 Lo que denominamos como demandas económicas agrupa dos tipos de reclamos: las demandas referidas a la política económica nacional del gobierno (modelo económico) y las demandas sectoriales más especificas (por ejemplo: tarifas o políticas impositivas para algún sector económico.

14 El tipo de demanda Seguridad Social (15%) agrupa las categorías *política educativa* (7%) y *funcionamiento del sistema educativo* (3%), *política de salud* (1%) y *funcionamiento del sistema de salud* (1%), y reclamos de *seguridad social* (3%).

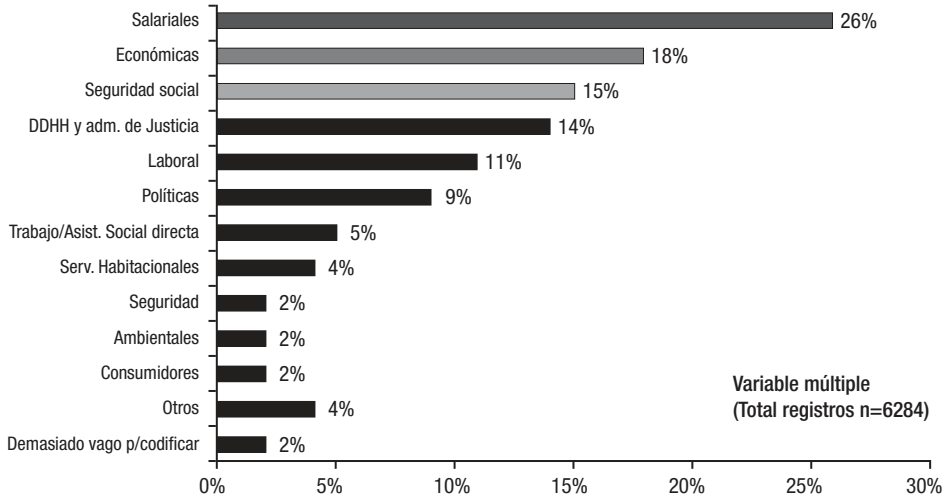
15 Este porcentaje, en el caso de las demandas por seguridad, también da cuenta de la complejidad del vínculo entre cantidad de protestas e impacto político. Si bien este tema formó parte central de la agenda pública en varios momentos del período, incluyendo importantes reformas legales, su incidencia en términos de las demandas asociadas a las protestas es irrelevante.

Gráfica 24.3
Tipos de organización de las protestas



Fuente: Grupo de estudios sobre protesta social y acción colectiva (GEPSAC). | Total de protestas (n=5268).

Gráfica 24.4
Demandas agrupadas por categorías, según protestas



Fuente: Grupo de estudios sobre protesta social y acción colectiva (GEPSAC). | Base: Total de protestas (n=5268).

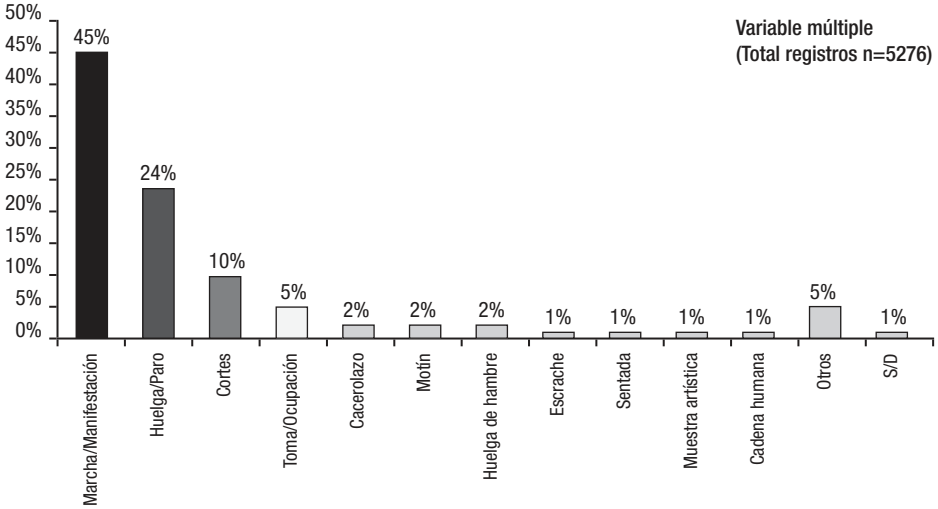
que la acción colectiva aparece y se hace visible en la escena pública (Schuster y Pereyra, 2001). En otros términos, esta dimensión refiere a la irrupción de las protestas. En el período estudiado, el formato más frecuentemente utilizado es la manifestación: el 45% de las protestas utilizaron este formato. Por otra parte, casi 1 de cada 4 protestas recurrieron al formato paro / huelga (24%), el segundo en términos de importancia. Si se compara la proporción de manifestaciones con la de huelgas se puede inferir que, en este período, la protesta fue transformándose gradualmente ya que primó la construcción de reivindicaciones civiles en el espacio público en detrimento de las manifestaciones disruptivas asociadas a las estrategias laborales tradicionales.

Por otro lado, cabe destacar la manera pujante en que emerge una nueva forma de protesta y cómo alcanza su apogeo en la segunda mitad de los 90. En efecto, considerando que el corte de ruta es un formato consolidado durante la segunda mitad del período, su incidencia total es relativamente alta (10%).

La Gráfica 24.6 muestra la tendencia que siguieron las organizaciones sindicales y civiles a lo largo del período. Mientras que las organizaciones civiles crecieron de forma sostenida hasta 1998 (51%), ese mismo año, las organizaciones sindicales llegaron a su punto más bajo (26%). Esa tendencia da cuenta de la gran transformación de los actores de la protesta, por tanto, lo que incluimos bajo el término "organizaciones civiles" representa a un grupo de actores relativamente heterogéneo. Por su parte, las protestas sociales protagonizadas por organizaciones piqueteras y de desocupados alcanzan el primer punto de crecimiento en 1997 y, dos años más tarde, comienzan una progresión sostenida hasta alcanzar el 23% de las protestas en 2002. El crecimiento en la cantidad de este tipo de protestas está fuertemente ligado a la organización de los trabajadores desocupados. Así, mientras que en 1997, 5 de cada 10 de las protestas englobadas en la categoría "piqueteros / desocupados" corresponde a "desocupados no organizados", en 2001, esa proporción desciende al 40% y en 2002 al 23%. En 2002, las organizaciones piqueteras protestaron en una proporción similar a las que ese año mostraron las protestas de un "actor clásico" (por ejemplo, los sindicatos). La protesta partidaria fue baja en todo el período y la protesta empresarial se concentró en 1994 y 1999. Los partidos políticos participaron de protestas sociales en una proporción relativamente estable entre 1989 y 2003. Incluso en 1998 y 1999, los partidos políticos y los empresarios participaron de más protestas que las organizaciones piqueteras.[16] La protesta

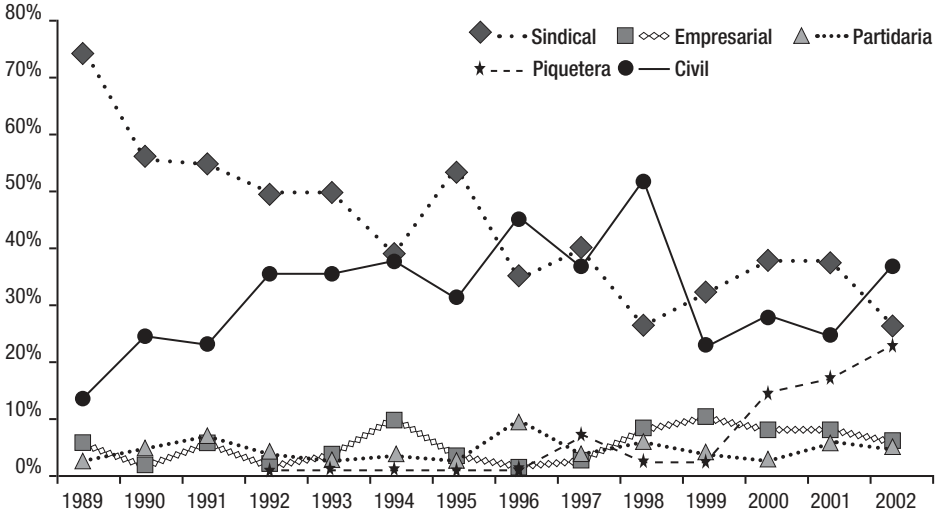
16 En la mayor parte de los casos, la categoría de "organizaciones empresarias"

Gráfica 24.5
Principales formatos de protesta



Fuente: Grupo de estudios sobre protesta social y acción colectiva (GEPSAC). | Base: Total de protestas (n=5268).

Gráfica 24.6
Evolución de la protesta según tipo de organización



Fuente: Grupo de estudios sobre protesta social y acción colectiva (GEPSAC). | Base: Total de protestas (n=5260).

empresarial crece de forma sostenida desde 1996 para iniciar un tendencia decreciente a partir de 1999.

La protesta sindical predominó en todo el período. Solo en los años 1996, 1998 y 2002 predominó otro tipo de organización que participara de más protestas sociales que los sindicatos. Sin embargo, entre 1989 y 2003, la protesta sindical disminuyó en términos absolutos y relativos. Si consideramos el rango de protestas sindicales, observamos que en 1989 los sindicatos realizaron el 74% de las protestas mientras que en 1998 o 2002 produjeron solo el 26%. Aun así vale señalar que, incluso en los años de menor actividad sindical de protesta, en 1 de cada 4 del total de protestas participó algún sindicato.

Durante el último semestre del gobierno de Alfonsín (enero-julio de 1989), los sindicatos participaron en 7 de cada 10 protestas. Esa proporción se redujo a la mitad durante el segundo mandato de Menem (36%). La diferencia entre los dos períodos se tradujo en un incremento relativo de las protestas con participación de organizaciones civiles, que aumentaron de un módico 13% durante el último semestre de Alfonsín a un significativo 40% de las protestas durante el segundo mandato de Menem. El gobierno de De la Rúa (1999-2001) no trajo una variación importante en la participación sindical en protestas sociales. En cambio, la fuerte emergencia de la "protesta piquetera" (que aumenta del 3% al 16%) implicó una disminución casi equivalente de la "protesta civil" (que disminuye del 40% al 26%). Durante el período político del gobierno de Duhalde, la proporción de protesta sindical es equivalente a la de la protesta piquetera (1 de cada 4) y ambas están por debajo de las protestas llevadas a cabo por las organizaciones civiles (37%). Si comparamos la distribución de protestas sindicales según períodos políticos con la distribución según períodos económicos podemos concluir que la actividad de protesta de los sindicatos está más vinculada a coyunturas *políticas* que a económicas. Al menos, eso se observa si comparamos la actividad de protesta sindical en el período 1992-1995 con el período 2000-2003.

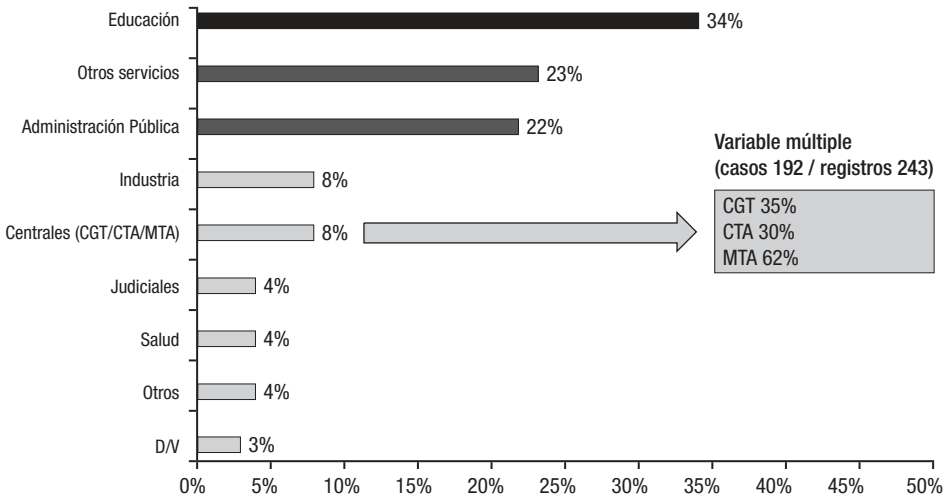
Los datos de la Gráfica 24.7 muestran que los sectores sindicales que promovieron la mayor cantidad de protestas en los 90 fueron los sindicatos de educación (34%), administración pública (22%) y otros servicios (23%),[17] mientras que la protesta de los sindicatos del sector

---

refiere a la actividad de protesta de pequeñas y medianas asociaciones más que de la acción de las grandes organizaciones empresariales como la UIA o la SRA. Asimismo, como se indicó más arriba, hasta 1998 la categoría "desocupados / piqueteros" incluye principalmente sectores de desocupados no organizados.

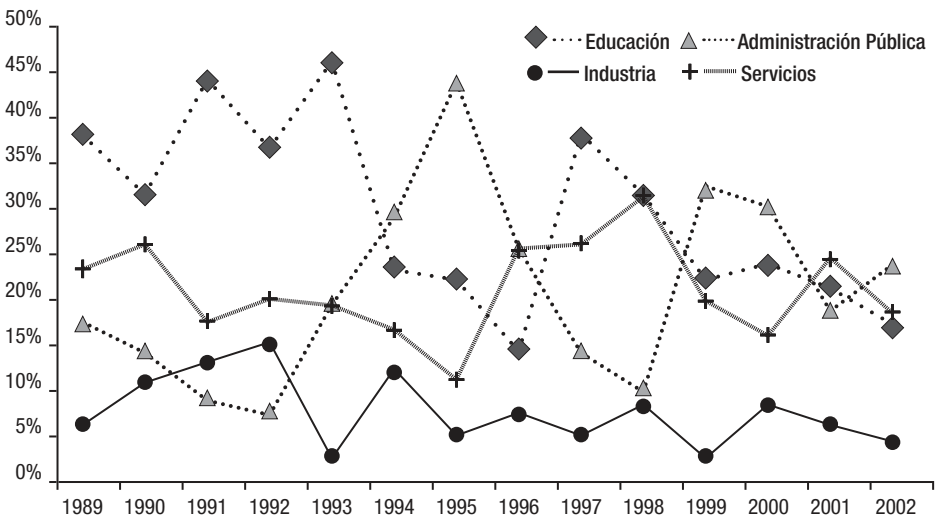
17 Cabe aclarar que el sector servicios incluye, entre otros, a los servicios públicos y privados. Por ende, abarca a la administración pública y a los docentes. Para este

Gráfica 24.7
Sector de actividad



Fuente: Grupo de estudios sobre protesta social y acción colectiva (GEPSAC). | Base: Total de protestas en las que participan sindicatos (n=2568).

Gráfica 24.8
Evolución de la protesta según sector de actividad



Fuente: Grupo de estudios sobre protesta social y acción colectiva (GEPSAC). | Base: Total de protestas en las que participan sindicatos (n=2568).

de la industria no superó el 8%. Asimismo, del total de las protestas en las que participaron sindicatos, un 8% corresponde a protestas articuladas por una central de trabajadores (CGT, CTA o MTA). La actividad de protesta de las centrales sindicales muestra un crecimiento sistemático de un período económico a otro. Mientras que en el período 1989-91 es de 2,5%, durante la crisis financiera esa proporción creció al 19,2%. Aunque tuvieron relevancia a lo largo de todo el período, las protestas de los sindicatos del sector educativo fueron predominantes particularmente entre 1989 y 1993, años en los que se debatió y sancionó la Ley Federal de Educación.[18] Entre 1993 y 1996, y tras la intensificación de los conflictos de 1997, la actividad de protesta de los sindicatos de la educación disminuyó paulatinamente. El sector público inicia un ciclo de protestas en 1992 que finaliza en 1998. El punto más alto de este ciclo es 1995, cuando el 44% de las protestas sindicales fueron motorizadas por este sector (ver Gráfica 24.8).

De conjunto, los datos muestran un fuerte contraste entre la trayectoria de las protestas producidas por los sindicatos de la educación, la administración pública y otros servicios de aquella seguida por el sector industrial. El sector industrial no solo mantuvo prácticamente desde el comienzo de la década del 90 una proporción menor de protestas que los otros sectores, sino que además, desde 1994, la proporción de protestas en las que participó fue decreciendo. Los registros de la protesta sindical por rama de actividad, parecen vincularse con el impacto de las transformaciones económicas de más amplio alcance. Al mismo tiempo, estos datos muestran que mientras un sector sindical siguió movilizándose durante los 90, tuvo lugar un proceso de desmovilización constante. La desmovilización estaba conectada a las afinidades políticas entre las organizaciones laborales y el gobierno nacional, mientras que otros sectores (directamente perjudicados por las reformas del mercado) mantuvieron e incluso aumentaron los niveles de protesta.

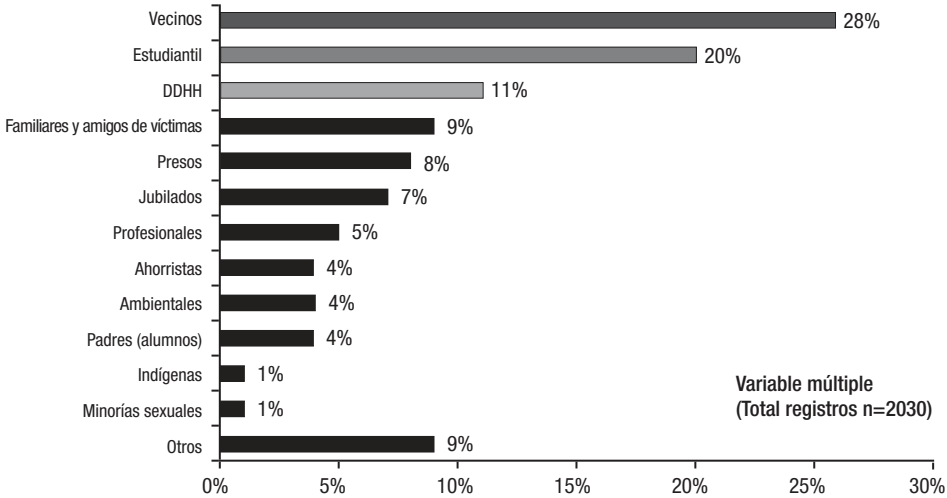
En la Gráfica 24.9 podemos observar que a lo largo del período las protestas llevadas a cabo por organizaciones civiles fueron creciendo de forma sostenida hasta 1998. Como ya se mencionó, el grupo de organizaciones civiles es un conjunto heterogéneo. Las

---

relevamiento hemos distinguido las protestas de los sindicatos de la administración pública y de la educación, puesto que la acción sindical de las organizaciones representativas de dichas ramas ha sido ciertamente superior a la de otros sindicatos dentro de este sector.

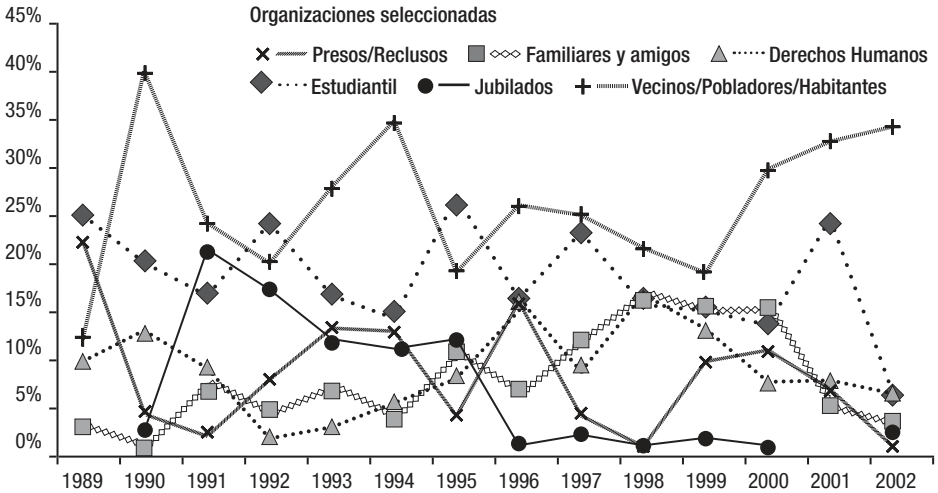
18 Ley Federal de Educación modificó la asignación de recursos, influyendo decisivamente sobre el salario y las políticas educativas.

Gráfica 24.9
Tipo de organizaciones civiles



Fuente: Grupo de estudios sobre protesta social y acción colectiva (GEPSAC). | Base: Total de protestas en las que participan organizaciones civiles (n=1858).

Gráfica 24.10
Evolución de las protestas de las organizaciones civiles



Fuente: Grupo de estudios sobre protesta social y acción colectiva (GEPSAC). | Base: Total de protestas en las que participan organizaciones civiles (n=1858).

organizaciones preponderantes de este grupo –en términos de su participación en protestas sociales– son las de vecinos y/o pobladores (28%),[19] y las estudiantiles (20%), seguidas por las organizaciones de derechos humanos (11%) y las de familiares y amigos de víctimas (9%).[20] La Gráfica 24.10 muestra cómo las protestas protagonizadas por vecinos y/o pobladores fueron significativas, aunque con intensidades variables a lo largo de todo el período: se destacan, en términos proporcionales, el año 1990 y el período 1992-1994, así como su crecimiento sistemático desde 1999. En efecto, se trata del único tipo de organización civil que intensifica su actividad de protesta desde 2001; todos los demás muestran una proporción menor. Las organizaciones de jubilados muestran una tendencia descendente que se inicia luego de 1991 casi hasta desaparecer diez años más tarde.

Las organizaciones estudiantiles, en cambio, siguieron una lógica más esporádica, con momentos de fuerte actividad de protesta social (1992, 1995, 2001) seguidos por años de actividad moderada (1993-1994, 1996, 1998-2000). De todos modos, el movimiento estudiantil se ha movilizado más que ningún otro tipo de organización civil. En ese sentido, se verifica que estas protestas estuvieron vinculadas a los reclamos de los sindicatos de educación y a los gremios docentes del período mencionado con anterioridad. Las protestas de organizaciones de derechos humanos y las de familiares de víctimas siguen una curva similar. El ciclo de protestas de las organizaciones de derechos humanos se inicia en 1992, tiene sus años más fuertes en 1996 y 1998, y luego mengua hasta 2002; y se observa un patrón similar para las organizaciones de familiares de víctimas, en un ciclo que comienza en 1996 (Gráfica 24.11).

La evolución de los tipos de demandas a lo largo del tiempo nos permite apreciar un conjunto de transformaciones importantes. En primer lugar, se observa la disminución de las protestas sociales con demandas salariales.[21] Más de la mitad de las protestas sociales del primer trimestre de 1989 tenían demandas salariales; aunque

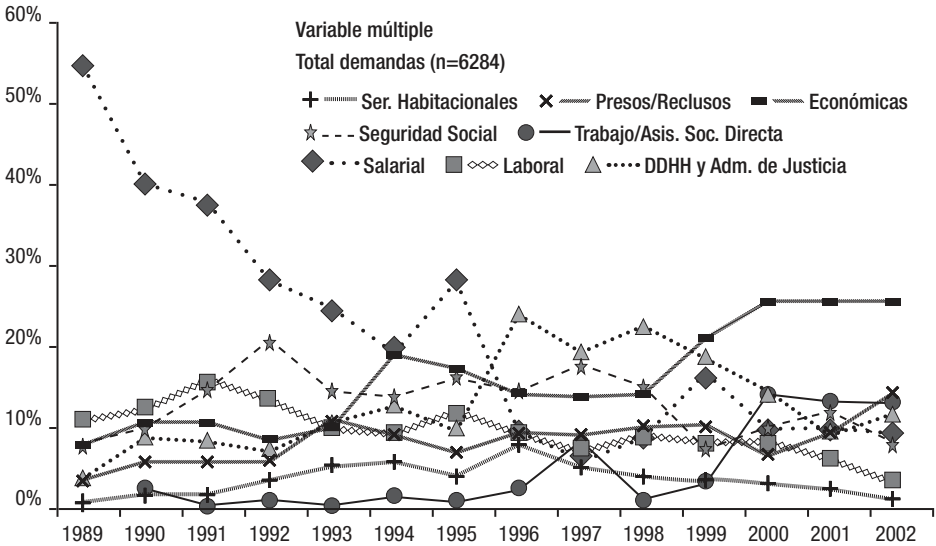
---

19 Esta categoría incluye a aquellos grupos que en las fuentes aparecieron como pobladores, vecinos, residentes, habitantes, etcétera.

20 Esta categoría refiere a un conjunto diferente de tipos de casos en los cuales los familiares de las víctimas, o una agrupación de víctimas, son los principales voceros en los procesos de movilización social en los 90; los casos más frecuentes fueron los familiares de las víctimas de violencia policial, pero hay otros casos que atañen a las más diversas situaciones (crímenes comunes, adicciones, accidentes de tránsito, etc.). Ver, sobre este tema, el trabajo de María Victoria Pita (2010).

21 Respecto a las demandas salariales (26%), los pedidos por aumentos de salarios alcanzaron un 14%, los reclamos por pagos adeudados un 10% y otras demandas salariales un 2%.

Gráfica 24.11
Evolución de las principales demandas



Fuente: Grupo de estudios sobre protesta social y acción colectiva (GEPSAC). | Base: Total de protestas (n=5268).

disminuyeron paulatinamente. En 1995, tuvieron un leve incremento. Sin embargo, en 2002 no llegaban al 10%. La merma de las protestas con reclamos salariales sigue una curva similar a la de las protestas en las que participan los sindicatos. No obstante, esto no ocurre con el otro tipo de demanda típicamente sindical –los reclamos por las condiciones laborales– que permanecieron mucho más estables a lo largo de todo el período.[22]

En segundo lugar, a partir de 1998 adquieren más preponderancia las protestas sociales con demandas económicas, demandas de carácter más general, vinculadas a la impugnación del modelo económico al tiempo que decrecen otras demandas, también ligadas a cuestiones económicas, pero que representan reclamos más específicos (tales como reclamos salariales o laborales). Hacia el final del período, las demandas por asistencia social directa y trabajo –casi

22 Respecto de las demandas laborales (11%), los reclamos por mantenimiento de puestos de trabajo alcanzaron un 7%, por el cumplimiento de convenios colectivos de trabajo un 2% y por mejores condiciones de trabajo un 1%, al igual que otras demandas laborales.

inexistentes durante la primera mitad del período– alcanzan un primer pico en 1997 y crecen de forma sostenida desde 1998 para convertirse, junto con las demandas económicas, en uno de los principales tipos de demandas.[23] Esta evolución también destaca la importancia que tuvieron las protestas con demandas de derechos humanos y administración de justicia[24] durante el segundo mandato de Menem (19%). Al comparar los tipos de demandas más importantes en los dos períodos de crisis que enmarcan a la convertibilidad (1989-1991 y 2000-2003) podemos observar dos transformaciones generales de la protesta social. La primera se vincula con la heterogeneidad de las demandas: en el período de "crisis hiperinflacionaria" solo dos tipos de demandas (salarial / laboral) concentran el 58% del total, mientras que en el período de "crisis financiera" los dos tipos de demandas más importantes (económicas / asistencia social y trabajo) solo suman el 37%. La segunda transformación se refiere al tipo de orientación de las demandas: en el primer período económico se trata de demandas "micro" mientras que en el último encontramos demandas de tipo "macro", vinculadas al cuestionamiento y desafío del modelo neoliberal.

Por ejemplo, si consideramos la diferencia entre protestas con demandas económicas sectoriales y protestas con demandas de política económica encontramos que en el período de crisis hiperinflacionaria tenemos un 3% de las primeras y un 9% de las segundas, mientras que en la crisis financiera las primeras representan un 4% del total de las demandas y las segundas un 23%.

La relación entre organización y demanda es predecible (Por ejemplo, las organizaciones sindicales fueron las que impulsaron la mayoría de las demandas salariales, con el 85% del total, y de las demandas por las condiciones laborales, con un 76%). Sin embargo, durante el período de análisis las principales organizaciones que protestan tienen una variedad relativamente amplia de demandas, como muestra el Cuadro 24.1. Vale la pena destacar, por ejemplo, que el 40% de las demandas de las organizaciones piqueteras no son aquellas que se pueden vincular más directamente con sus reclamos.

---

23 Respecto a este tipo de demandas, un 3% fueron reclamos por asistencia social directa y un 2% fueron pedidos de puestos de trabajo.

24 Si bien estas demandas tienen muchas similitudes, fueron codificadas de forma separada. Los reclamos de derechos humanos son aquellos que refieren específicamente al terrorismo de Estado y la dictadura militar, mientras que lo que denominamos "administración de justicia" comprende a aquellos reclamos que refieren al funcionamiento del sistema judicial, con exclusión de los reclamos incluidos en la categoría derechos humanos.

En este sentido, se puede señalar que más allá del predominio de las demandas por asistencia directa (57 %), los piqueteros participaron de demandas típicamente sindicales (10%) mientras que los sindicatos solo participaron en un 2% en las típicas demandas piqueteras. Si seguimos explorando el tipo de demandas sostenidas por las organizaciones piqueteras, también nos encontramos una importante participación de los piqueteros en el cuestionamiento a la legitimidad del régimen social de acumulación y del régimen político de gobierno (casi un 30%) (Cuadro 24.2).

Cuadro 24.1
Demandas según tipo de organización

	Sindical (49%)	Civil (35%)	Piquetera (6%)	Partidaria (5%)
Salarial	48%	4%	4%	2%
Laboral	19%	2%	6%	2%
DD.HH. y Justicia	4%	33%	7%	21%
Seguridad	2%	4%	–	1%
Servicios sociales	17%	21%	6%	14%
Trabajo / Asistencia social	2%	2%	57%	4%
Servicios habitacionales	–	10%	1%	–
Políticas	7%	10%	15%	33%
Económicas	18%	10%	14%	19%
Ambientales	–	5%	–	1%
Consumidores	1%	3%	1%	5%
Otras	4%	7%	9%	15%

Fuente: Grupo de estudios sobre protesta social y acción colectiva (GEPSAC).

Cuadro 24.2
Tipo de organización según demanda de la protesta

	Salarial (26%)	Económicas (18%)	Serv. Sociales (15%)	DD. HH. y Adm. Justicia (14%)	Laboral (11%)	Políticas (9%)	Asist. Soc. Dir./Trabajo (5%)
Sindical	85%	43%	44%	11%	76%	32%	14%
Civil	6%	17%	41%	70%	7%	33%	13%
Empresarial	–	21%	1%	1%	1%	3%	2%
Partidaria	–	4%	4%	6%	1%	14%	3%
Piquetera	1%	4%	2%	3%	3%	8%	61%
Otros	5%	8%	6%	5%	10%	8%	2%

	Salarial (26%)	Económicas (18%)	Serv. Sociales (15%)	DD. HH. y Adm. Justicia (14%)	Laboral (11%)	Políticas (9%)	Asist. Soc. Dir./Trabajo (5%)
Sin datos	3%	3%	2%	4%	2%	2%	5%
Total	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Base: Total de protesras (n=52968). | Fuente: Grupo de estudios sobre protesta social y acción colectiva (GEPSAC).

Finalmente, analizamos la evolución de la forma de protesta durante los 90. La manifestación es la forma de protesta social empleada con mayor frecuencia por los habitantes de Argentina. Mientras que a comienzos del período las manifestaciones representan un porcentaje menor que el de los paros / huelgas, desde 1992 en adelante las marchas representan la principal forma de movilización.

En ese año, mientras que los paros representan un 26% de los formatos, las marchas ya constituyen un 34% (Cuadro 24.3).

Cuadro 24.3
Tipo de formato según demanda de la protesta

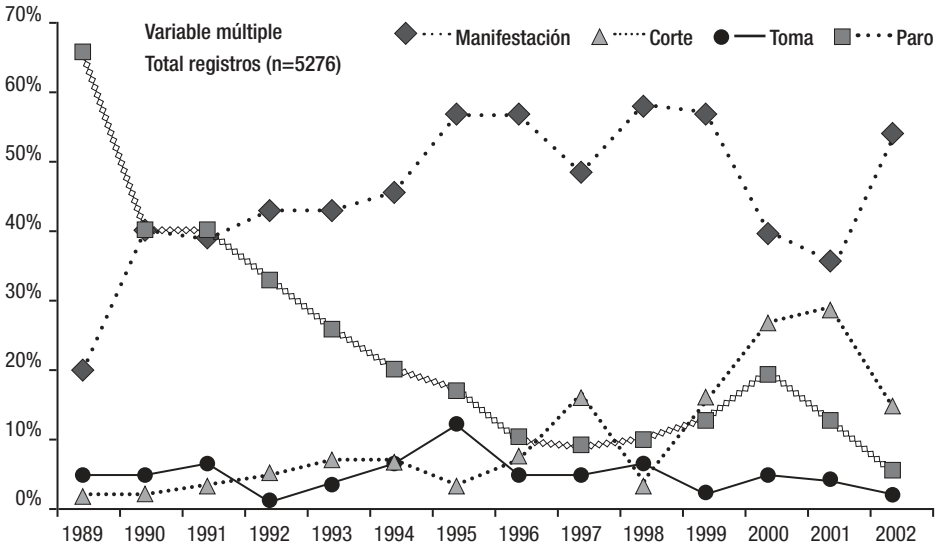
	Salarial (26%)	Económicas (18%)	Serv. Sociales (15%)	DD. HH. y Adm. Justicia (14%)	Laboral (11%)	Políticas (9%)	Asist. Soc. Dir./Trabajo (5%)
Manifestación	26%	53%	48%	64%	38%	55%	22%
Paro/huelga	58%	19%	23%	3%	34%	9%	2%
Corte	4%	10%	5%	3%	9%	10%	62%
Toma	4%	3%	9%	1%	8%	6%	6%
Otros	7%	14%	14%	27%	11%	19%	7%
Sin datos	1%	1%	1%	2%	–	1%	1%
Total	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Base: Total de protesras (n=52968). | Fuente: Grupo de estudios sobre protesta social y acción colectiva (GEPSAC).

Las típicas formas de las protestas sindicales, como paros / huelgas, han reducido considerablemente su importancia entre comienzos y fines de los años 90.[25] Inversamente, el formato corte de ruta que tenía una exigua significación a principios del período creció sistemáticamente hasta convertirse en uno de los formatos principales en los primeros años del nuevo siglo (Silva, 2009). Como se puede observar en la Gráfica 24.12, en 1997 y desde 1999, nuestras fuentes registran

25 Es interesante considerar que esta caída no se corresponde con las fluctuaciones de la demanda salarial, que registra un crecimiento en 1994 y 1995.

Gráfica 24.12
Evolución de los principales formatos de protesta



Fuente: Grupo de estudios sobre protesta social y acción colectiva (GEPSAC). | Base: Total de protestas (n=5268).

más cortes de ruta que paros / huelgas. Esta es una de las transformaciones generales más interesantes del período. A modo de ejemplo, mientras que en 1992 hubo un corte de ruta cada 7 paros, en 2001, hacia finales del período, se realizaron el doble de cortes de ruta que de paros / huelgas.

Por otro lado, si se compara el formato manifestación con el de los cortes, se observa que sus respectivas evoluciones han sido inversas a partir de 1997. Desde ese año hasta 2001, los cortes se incrementaron, mientras que las marchas disminuyeron hasta casi representar proporciones similares. Al mismo tiempo, en 2001 los formatos de protesta tendieron a concentrarse en estos dos tipos, ya que 6 de cada 10 protestas recurrieron a los cortes o las marchas. Una primera lectura indica una disminución de las manifestaciones entre el segundo gobierno de Carlos Menem y el gobierno de Fernando de la Rúa, que es prácticamente equivalente al crecimiento de los cortes de rutas y de calles. Incluso, podemos observar que la categoría "otros" mantiene una proporción importante en todas las presidencias. Por tal motivo, se decidió desagregar esta categoría heterogénea de formas de protestas. Observamos, entonces, que su composición en todos los

períodos es más o menos estable y similar excepto durante el gobierno de Duhalde, en el cual los cacerolazos (12%) y los escraches (5%) muestran un porcentaje considerablemente mayor que el resto. En este período la proporción de cacerolazos es idéntica a la de paros y huelgas.

El Cuadro 24.4 muestra, en principio, que las protestas fueron producidas principalmente por organizaciones civiles (40%) y sindicatos (34%). Aunque las otras organizaciones también recurrieron a este formato, las proporciones no exceden el 10% en ningún caso. Por otro lado, se observa que la relación entre formato de protesta y tipo de organización es más compleja de lo que podría suponerse. Un 49% de los cortes de ruta no fue realizado por organizaciones piqueteras sino por organizaciones civiles y/o sindicatos.

Cuadro 24.4
Tipo de organización según forma de protesta

	Manifestación (45%)	Paro/huelga (24%)	Corte (10%)	Toma (5%)
Sindical	34%	28%	25%	46%
Civil	40%	4%	24%	37%
Empresarial	5%	4%	9%	2%
Partidaria	6%	–	2%	4%
Piquetera	4%	–	30%	4%
Otros	8%	3%	6%	4%
Sin datos	3%	1%	4%	3%
Total	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Vecinos/Pobladores: 65%, Estudiantes: 18%, Padres, 6%, Indígenas, 2%, Profesionales,: 2%, Jubilados: 1%, Otros: 6%, Toal: 100%. | Fuente: Grupo de estudios sobre protesta social y acción colectiva (GEPSAC).

Curiosamente, el tipo empresarial realizó el 9% de los cortes de ruta. Sin embargo, es necesario considerar que esa categoría es relativamente heterogénea e incluye no solo las grandes asociaciones patronales sino también a las organizaciones de pequeños productores. En efecto, el 60% de los cortes de rutas realizados por organizaciones empresariales corresponde a organizaciones rurales y agropecuarias. Respecto del tipo de demanda según formato, en el Cuadro 24.5 se observa que un tercio de los paros / huelgas no se han producido por demandas típicamente sindicales. En cuanto a las demandas sostenidas en las manifestaciones han estado vinculadas a cuestiones económicas (19%), de derechos humanos y administración de justicia (18%), seguridad social (14%) y reclamos salariales (13%).

Cuadro 24.5
Tipo de demandas según forma de protesta

	Manifestación (45%)	Paro/huelga (24%)	Corte (10%)	Toma (5%)
Salarial	13%	53%	10%	20%
Laboral	8%	13%	9%	17%
DD. HH. y Adm. Justicia	18%	1%	4%	3%
Seguridad	3%	2%	3%	1%
Servicios Sociales	14%	12%	7%	26%
Asis. Social/Trabajo	2%	–	26%	5%
Serv. Habitacionales	4%	–	8%	5%
Políticas	10%	3%	9%	9%
Económicas	19%	11%	16%	10%
Otros	9%	5%	8%	4%
Total	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Fuente: Grupo de estudios sobre protesta social y acción colectiva (GEPSAC).

Por otro lado, del total de los cortes de ruta, tan solo un cuarto se ha realizado por demanda de asistencia social directa y trabajo, demanda considerada como típicamente piquetera. Casi la misma proporción de cortes sostuvo reclamos económicos o políticos de carácter general, e incluso, un 20% han sido por reclamos salariales y laborales. Más aún, podríamos decir que el corte se asemeja más al paro que a la marcha en lo que respecta a su carácter modular. Este formato, utilizado por diversos tipos de organizaciones, ha permitido a los manifestantes expresar un conjunto heterogéneo de demandas; y este, a su vez, refiere a la modularidad de los cortes como formato de protesta. Hasta ahora nos hemos referido a los formatos de protesta que presentan porcentajes superiores al 5%. Es importante considerar, también, aquellos formatos que no fueron relevantes en términos estadísticos pero que han capturado la atención de la opinión pública Entre ellos se encuentran los siguientes: cacerolazo, motín, huelga de hambre (cada uno muestra una proporción del 2%); escrache, sentada, performance artística y cadena humana (con un 1%, respectivamente). Si se agregan estos formatos a la categoría "otros", junto con cortes de teléfono, *ciberprotesta*, carpas, denuncia pública, estado de alerta, *basurazo*, entrega de petitorio, *lockout*, acampe, olla popular, silbidos, boicot y asamblea, se desprende que quienes más han utilizado este tipo de formatos han sido organizaciones civiles (23%) y partidarias (18%).

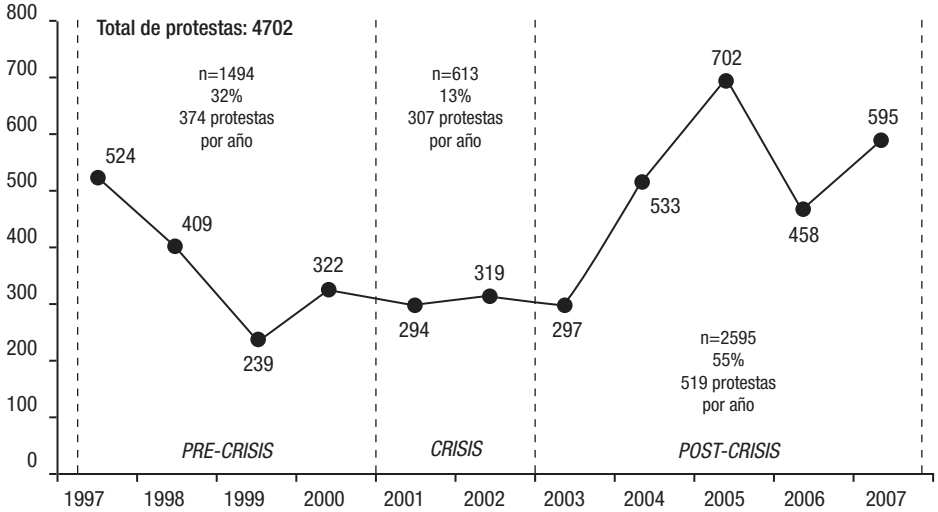
Como señalamos anteriormente, la diversificación de organizaciones y las demandas y formas de protesta proporcionan nuevos elementos clave del período, que abarca las dos grandes crisis de la transición democrática en Argentina. En este contexto, enfocarnos en las acciones de protesta nos permitió entender tanto el proceso de desagregación, como a los distintos mecanismos de acumulación y modularidad que pusieron en perspectiva (aunque no cubre plenamente ni agota todas las particularidades y características) a la crisis de 2001-2002 y el período que se inicia a continuación.

PROTESTA SOCIAL DESPUÉS DE LA CRISIS DE 2001

La mayoría de los estudios de la movilización social en la Argentina está de acuerdo en señalar que la crisis de 2001 cambió algunas de las principales tendencias, en materia política y económica, que habían caracterizado al país en los años 90. En este sentido, la crisis implicó un intenso cuestionamiento de las tendencias de delegación política y exclusión socioeconómica (Svampa, 2008). La reestructuración de la autoridad presidencial y la intervención del Estado pueden observarse a partir del año 2003, que a su vez, inaugura un ciclo de crecimiento económico que indica una salida a la crisis de 2001. En términos institucionales, la primera presidencia de Néstor Kirchner significó la consolidación del proceso de poner fin a la crisis. Por lo tanto, podemos analizar cuáles fueron los efectos producidos por la crisis anterior y el nuevo período de normalización económica sobre las formas y niveles de protestas públicas. Para ello, hemos decidido agrupar temporalmente las protestas en tres periodos distintos. El primero corresponde al período pre crisis y va de 1997 hasta finales del año 2000. El segundo, la crisis en sí misma, consiste en los años de gran agitación político-institucional y de inestabilidad económica (2001-2002), y el tercer período, post crisis, se caracteriza por la recomposición mencionada anteriormente (2003-2007). De hecho, la cuestión fundamental es que la reestructuración institucional después de la crisis no implica una disminución en las protestas, sino que, por el contrario, el año 2005 revela el pico más alto en la cantidad de protestas durante todo el período de 1989 a 2006 (Gráfica 24.13).

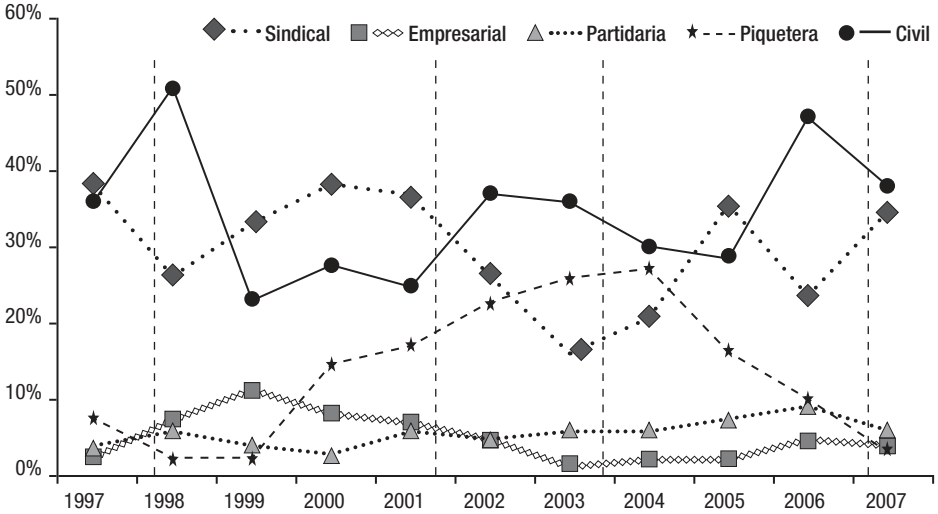
El número medio de protestas por año creció de 374 en el período pre crisis a 519 en el período post crisis. El marcado incremento en la cantidad de protestas llega hasta las elecciones legislativas de 2005, cuando el nuevo gobierno de coalición logra prevalecer y controlar la estructura territorial del Partido Justicialista. La victoria se produce en un contexto de fragmentación progresiva de la expresión política de la oposición al gobierno, tanto política-electoral como de los actores colectivos que habían participado en las movilizaciones sin

Gráfica 24.13
Número de protestas por año, 1989-2006 (valores absolutos)



Fuente: Grupo de estudios sobre protesta social y acción colectiva (GEPSAC).

Gráfica 24.14
Evolución de la protesta según tipo de organización



Fuente: Grupo de estudios sobre protesta social y acción colectiva (GEPSAC).

unirse al gobierno. La reestructuración progresiva de la economía y la normalización política alcanzadas después de las elecciones de 2003 comenzaron a cerrar el ciclo de movilización intensa que caracterizó la crisis de 2001-2002. En primer lugar, con la rápida desmovilización de los sectores medios, y luego, a partir del realineamiento político originado por las políticas de Kirchner que generaron apoyo popular y que progresivamente integraron a muchos de los líderes y las bases de los movimientos piqueteros[26] (ver cap. 9 en este volumen), que produjo una disminución general en las actividades de movilización masiva.

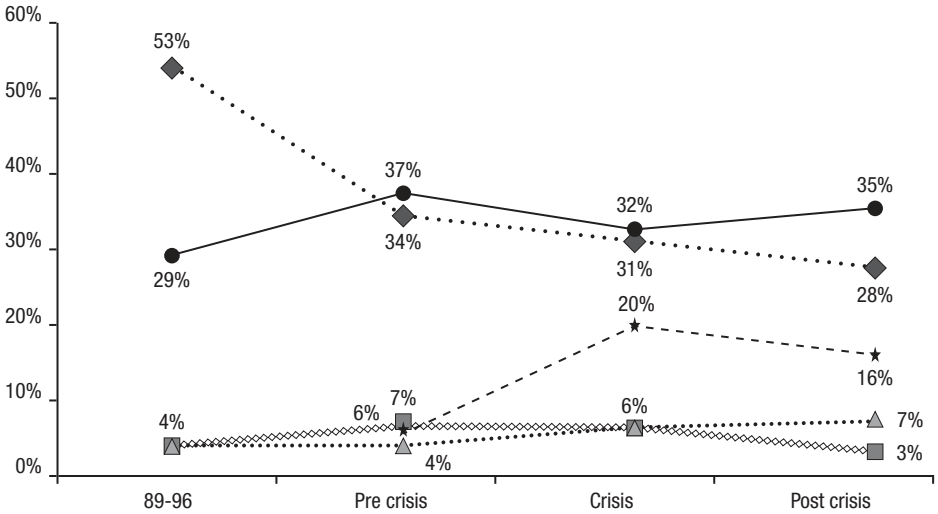
En este contexto, a partir de 2004, el escenario de movilización social comenzó a transformarse y a reorganizarse de manera significativa en tres áreas cruciales. Por un lado, el resurgimiento de los conflictos laborales, por el otro, la fuerte presencia de actores civiles vinculados a los reclamos de los grandes problemas públicos nacionales, y por último, la configuración de nuevos reclamos medioambientales vinculados a la explotación de los recursos naturales (Gráfica 24.14).

Si se analiza la evolución de la protesta por tipo de organización, al principio se observa una disminución significativa en la participación de las organizaciones piqueteras en la acción colectiva desde el año 2005. Más allá de la consolidación electoral del Frente para la Victoria (la coalición electoral de Kirchner con el PJ en las elecciones nacionales en 23 de octubre de ese año), la retracción de la movilización de los piqueteros se puede explicar por la exitosa estrategia del gobierno –la integración de las organizaciones por afinidad ideológica y el acceso a cargos públicos por un lado y, por el otro, la idea de una "normalización" del conflicto que, en condiciones de crecimiento del empleo y recuperación de las capacidades del Estado, llevaría poco a poco a los piqueteros a abandonar la acción directa y recurrir más a los canales institucionales (Pereyra et al. 2008) (Gráfica 24.15).

La salida de la convertibilidad en 2002, junto con el crecimiento económico y el aumento de la tasa de inflación, recrearon algunas de las condiciones bajo las cuales la acción sindical volvió a desempeñar un rol importante. Los últimos años se han caracterizado por el retorno de los reclamos centrados en el salario y las demandas sectoriales, aspectos básicos de la lucha distributiva. La mayor parte de la negociación salarial fue canalizada a través de los mecanismos institucionales de la CGT. En este sentido, el liderazgo Central en la actualidad mantiene una estrategia dual que combina la negociación de élite con el gobierno y el apoyo a las nuevas formas de conflicto generado en

26 Para una reconstrucción de este proceso en términos de cooptación, ver Svampa (2008). Otra perspectiva para comprender los cambios en términos de institucionalización se puede encontrar en Pereyra et al. (2008).

Gráfica 24.15
Tipo de organización según período



Variable múltiple

Total de organizaciones (n=8934)

Sindical · Empresarial · Partidaria · Piquetera · Civil

Civiles	89-96	PRE CRISIS	CRISIS	POST CRISIS
Estudiantes	20%	18%	12%	13%
DD.HH. y Familiares	8%	13%	7%	31%
Vecinos	26%	23%	33%	24%
Ambientalistas	2%	5%	6%	10%

Sindicatos	89-96	PRE CRISIS	CRISIS	POST CRISIS
Estado(*)	69%	64%	62%	60%
Industria	9%	7%	7%	6%
Comercio	-	1%	1%	3%
Servicios	22%	28%	30%	31%

Fuente: Grupo de estudios sobre protesta social y acción colectiva (GEPSAC). | Total de protestas (n=7759). | Ref.: (*) Administración pública, salud, judiciales y educación.

las áreas más precarias del mundo del trabajo. Al mismo tiempo, cabe señalar que algunos conflictos recurrentes aún persisten en el sector público, en salud y educación, es decir, en los ámbitos donde se desarrolló el movimiento sindical.

En este sentido, es necesario tener en cuenta que el posicionamiento político de la CTA tuvo una serie de problemas que se profundizó tras la crisis. La estrategia adoptada por el liderazgo de la Central forjó el Movimiento Político, Social y Cultural en diciembre de 2002. Se fomentó la comprensión no solo de las oportunidades y los riesgos provocados por la crisis de 2001 –oportunidades para transformar el liderazgo político y el rumbo económico– sino también los riesgos de fragmentación política. Sin embargo, el lanzamiento del movimiento fue, en ese contexto, un intento de dar un salto en el juego electoral eclipsado por la consolidación de kirchnerismo en 2003. La CTA tuvo dificultades para posicionarse ante el liderazgo de Néstor Kirchner. En este caso, el nuevo presidente tuvo un éxito considerable en conseguir apoyo, no solo dentro del PJ, que lo había llevado al gobierno, sino también entre diferentes tipos de organizaciones sociales movilizadas, aquellos sectores de las organizaciones bajo el paraguas de la CTA.

Sin embargo, hay otros conflictos que escapan a las decisiones de los líderes sindicales. Generalmente, las agrupaciones internas de los sindicatos han fogueado estos conflictos. Este es el caso de los trabajadores del subte, de hospitales y de telefónicas, los cuales han demostrado una capacidad de movilización considerable como condicionamiento para las negociaciones gremiales. Después de muchos años de ausencia de conflictos laborales, estos reclamos, que a menudo conducen a huelgas en sectores públicos estratégicos –como las empresas de prestación de servicios– representan una prueba de la legitimidad que tienen estas formas de movilización en un contexto muy diferente al del auge de las políticas neoliberales del período anterior. Por otro lado, la intensificación de los reclamos salariales de los sindicatos también es acompañada por una consolidación del activismo de base, así como por la diversificación ideológica del liderazgo. En este sentido, el surgimiento de un nuevo liderazgo de izquierda ha promovido debates sobre el pluralismo sindical y la democratización (Cuadro 24.6).

Cuadro 24.6
Organizaciones civiles por período

	89-96	PRE CRISIS	CRISIS	POST CRISIS
Estudiantes	207	123	29	179

	89-96	PRE CRISIS	CRISIS	POST CRISIS
Indígenas	5	10	2	19
DD.HH. y Justicia	85	86	17	396
Ahorristas	5	13	46	24
Jubilados	110	10	3	2
Minorías sexuales	8	8	1	15
Vecinos	270	158	82	322
Profesionales	60	19	15	35
Ambientalistas	17	34	14	142
Presos, detenidos	99	32	8	15
Religiosos	0	0	0	13
Familiares	0	0	0	47
Ex combatientes	0	0	0	10
Comunidades	0	0	0	12
Consumidores	0	0	0	21
Policiales	0	0	0	10
Cartoneros	0	0	0	11
Sin datos	0	0	0	18
Otros	184	185	30	53

Fuente: Grupo de estudios sobre protesta social y acción colectiva (GEPSAC).

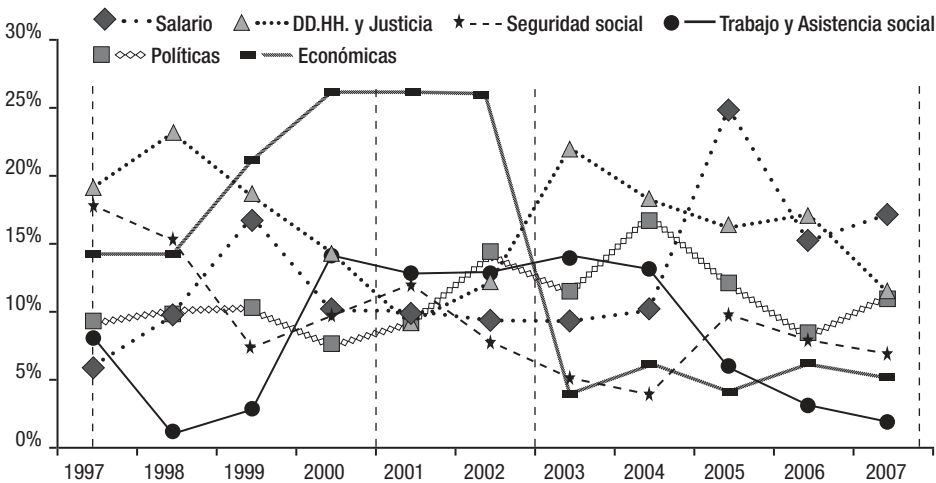
Contrario a la tendencia creciente en la participación de los sindicatos en el conflicto y la retracción de la participación de los piqueteros en el período pre crisis, notablemente, las organizaciones civiles mantienen un mayor nivel de participación en ambos períodos. Sin embargo, en el período post crisis hay un marcado aumento en la participación de los tres tipos de organizaciones civiles con respecto al período pre crisis. Las organizaciones de derechos humanos pasaron del 13% en el período pre crisis al 31% en la post crisis; las organizaciones ambientales civiles duplicaron su porcentaje de participación del 5% en el período pre crisis al 10% en la post crisis; mientras que las organizaciones de vecinos aumentaron su porcentaje solo 1 punto porcentual (del 23% al 24%) pero, en términos absolutos, debido al crecimiento de la participación de las organizaciones civiles en el período post crisis, pasaron de participar en 158 protestas en el período pre crisis a 322 en la post crisis. Estos datos nos permiten especular que mientras la protesta de los piqueteros tiende a menguar en el período post crisis, la institucionalización de la disputa laboral no fue suficiente para reestructurar completamente la relación entre el régimen político del gobierno y una sociedad movilizada.

La evolución de las demandas coincide con la transformación del escenario político-económico. Entre 1999 y 2003, en términos absolutos y porcentuales, las demandas económicas dominan claramente el paisaje de las protestas. Este período coincide con la profundización de las dificultades financieras del Estado, que se agravaban constantemente por las políticas de ajuste fiscal y, en el momento de colapso en diciembre de 2001, por la restricción de acceso a los depósitos bancarios. El cuestionamiento a los ajustes a las jubilaciones y los salarios públicos, sumado a las protestas contra *el corralito* (el congelamiento de los depósitos bancarios), claramente marcó el ritmo de las demandas a la altura de la crisis (Gráfica 24.16).

Como señalamos anteriormente, el período post crisis muestra un crecimiento significativo en la demanda por los salarios en el contexto de mejora económica y recuperación del empleo. La salida de la convertibilidad, las políticas orientadas al mercado interno y la creación de empleos reactivaron la lucha distributiva relacionada con los salarios e incrementaron los conflictos laborales. Es necesario remontarse a 1995 para encontrar el año en que la demanda por salario era el principal reclamo de las protestas. En otras palabras, en la década de 1995 a 2005, la demanda por salarios, característica del mundo del trabajo en una sociedad funcionalmente integrada, no recuperó el marcado predominio que tenía antes del período pre crisis (1989-1997).

Por último, con respecto al comportamiento de las demandas salariales es importante tener en cuenta que los reclamos por asistencia social directa se comportan de manera opuesta a los reclamos laborales –típicos de los trabajadores desocupados– que se redujeron significativamente a partir del año 2004. Incluso atenuada, la participación de las organizaciones piqueteras en el conflicto es aún mayor que el volumen de demandas laborales y por asistencia social; revelando, una vez más, el importante proceso de politización del movimiento piquetero. Otra demanda que se ha incrementado considerablemente en el período post crisis es la relativa a los derechos humanos y la administración de justicia. Esta demanda tuvo un aumento significativo en 1996 y 1997, al principio del período pre crisis, impulsado principalmente por un marco que vincula una serie de problemas del sistema judicial con las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de la última dictadura. El término "impunidad" fue utilizado por organizaciones de derechos humanos durante los primeros años de la transición democrática. Intentaba dar cuenta de la incapacidad de avanzar con los juicios a los militares. En última instancia, expresaba la limitación del sistema judicial para responder a crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el crecimiento de las demandas de

Gráfica 24.16
Evolución de las principales demandas



Fuente: Grupo de estudios sobre protesta social y acción colectiva (GEPSAC).

administración de justicia en la post crisis también está vinculado a nuevos elementos. La principal irrupción se produjo al vincular estos reclamos con los relacionados al incremento de delitos contra la propiedad y las personas que, en marzo de 2004, tuvieron su expresión paradigmática tras el secuestro y asesinato de Axel Blumberg, el hijo de un empresario. Bajo el liderazgo de Juan Carlos Blumberg, padre de Axel, el problema de la seguridad adquirió una fuerte presencia en la agenda pública, cuestionando al Poder Judicial.

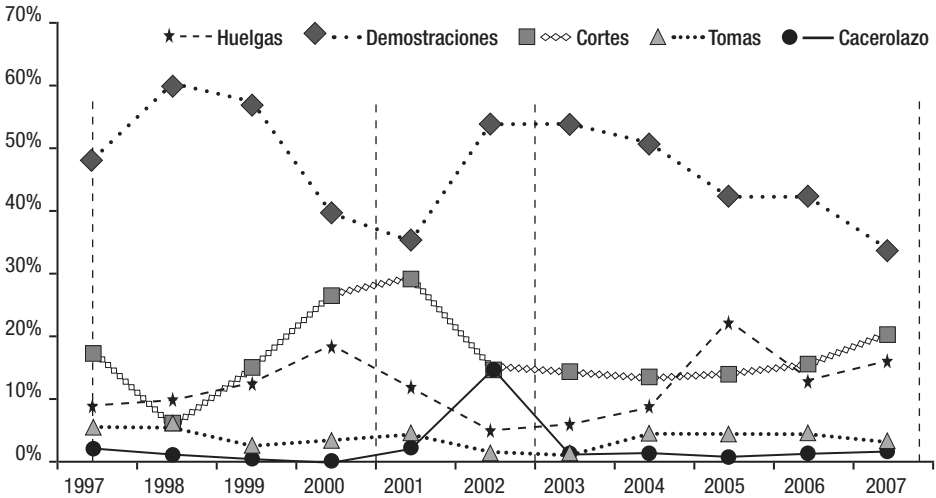
Sin duda, otro de los principales ejes de conflicto es la protesta ambiental, las manifestaciones relacionadas con la explotación de los recursos naturales. La Argentina no tiene una larga tradición de movimientos ambientales. En los años 90, y con poco impacto público, aparecieron los primeros conflictos relacionados con las actividades de Greenpeace. A partir de 2001, se sucedieron una serie de reclamos en diferentes lugares del interior del país. Desafiaron la explotación minera perpetrada por empresas privadas debido a las consecuencias socioambientales. Estos primeros reclamos lograron cierta continuidad y visibilidad, y tuvieron dos características principales: primero, el hecho de que los actores principales de los reclamos fueron grupos que se movilizaron en representación de sus comunidades –por lo general, los habitantes de ciudades pequeñas o pueblos cerca de los lugares de explotación– y, segundo, un posicionamiento en defensa

de un criterio de evaluación de la degradación del medioambiente, teniendo en cuenta el valor atribuido a los recursos de la naturaleza y del paisaje. En este sentido, hubo una evolución en la dinámica de estos movimientos hacia un cuestionamiento más amplio del modelo de desarrollo. En general, estos reclamos son impulsados por grupos convocados en asambleas ciudadanas y están orientados a generar presión a través de la publicidad de cada caso y su impacto en la opinión pública.

La historia de este tipo de reclamos cobró importancia en los últimos años debido al impacto de los conflictos que surgieron en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos, después de la instalación de las plantas de papel (pasteras) a lo largo de la costa del río Uruguay. En julio de 2003 un grupo de vecinos de Gualeguaychú, que más tarde conformaron la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú, protestaron contra la construcción de una fábrica de pasta de celulosa en las inmediaciones de la frontera de la ciudad de Fray Bentos (Uruguay). Como en casos anteriores, este reclamo tuvo un carácter eminentemente comunitario (multisectorial) y contó, entre otros, con la participación de las autoridades políticas locales. Varios factores contribuyeron a la gran publicidad de este caso. En primer lugar, los miembros de la Asamblea manifestaron desde el inicio la intensidad del conflicto y su rechazo a la construcción de la planta mediante el bloqueo de acceso al puente internacional General San Martín. En segundo lugar, la intervención de los Gobiernos argentino y uruguayo amplificó el conflicto y lo transformó en un problema internacional. El caso de Gualeguaychú tuvo una gran repercusión y dio un impulso importante a otros reclamos socioambientales en el país. Aún así, en muchas partes del país, estos reclamos se articularon en torno a una serie de conflictos centrados en un eje específico: el foco se puso, sobre todo, en los grandes proyectos de minería que comenzaron a desarrollarse en el país en el contexto de la recuperación económica. Como corolario, surgieron debates y conflictos acerca de los efectos y las consecuencias de la mega minería. Varios emprendimientos, con resultados y conflictos muy diferentes, fueron el marco para el surgimiento de las asambleas comunitarias que han impugnado este tipo de minería asociada a un nuevo modelo de desarrollo basado en el uso desproporcionado y el abuso de los recursos naturales (Palermo y Reborati ,2007; Svampa y Antonelli, 2009; Delamata, 2013) (Gráfica 24.17).

Finalmente, en cuanto a formas de protesta, se debe mencionar la gran cantidad de *cacerolazos* realizados durante la crisis, inaugurando un repertorio que adquiriría forma de modularidad en los años siguientes. El aumento en las huelgas no afectó la abrumadora

Gráfica 24.17
Evolución de los principales formatos



Fuente: Grupo de estudios sobre protesta social y acción colectiva (GEPSAC).

cantidad de marchas y manifestaciones que casi se duplicó entre el período pre crisis (con 762 casos) y el período post crisis (con 1.440 casos reportados). Este es un hecho importante: el análisis de los 3 primeros años registrados en nuestra base de datos muestra que las huelgas triplicaron la cantidad de marchas. Esta persistencia de las manifestaciones callejeras revela una reorientación de la acción colectiva hacia formas de mayor impacto público, a costa de estrategias dirigidas mayormente a la presión corporativa y a intereses más estrechos.

Mientras tanto, Los cortes de calles y rutas mantienen una presencia significativa como formas de protesta consolidando su modularidad. Tanto los actores (piqueteros y multisectoriales) como las demandas (laborales y asistencia social directa) disminuyeron en las protestas de la post crisis, pero los cortes mantuvieron una presencia en números absolutos de 232 registros durante el período pre crisis y 513 en el período post crisis. La modularidad y la forma del corte de ruta / calle como protesta sugieren que hay nuevos actores que expresan otras demandas, distintas que aquellas del pasado; tal es la situación del caso medioambiental paradigmático mencionado anteriormente, en el que los miembros de la asamblea ciudadana bloquearon la frontera con Uruguay para impedir la instalación de las pasteras (Cuadro 24.7).

Como podemos ver, el período que se abre después de la crisis de 2001 es de particular interés desde el punto de vista de los procesos de movilización social debido a que, en la década posterior, se revierten algunos de los aspectos más problemáticos de los 90 en materia política y económica. En particular, la dimensión relacionada con el impacto que tuvieron las políticas neoliberales en la exclusión social. Sin embargo, algunas características de orden estructural muestran continuidad entre las dos décadas. En ese sentido, resultó vital que la reactivación de la protesta sindical con expresiones de demandas civiles orientadas hacia los espacios públicos se vinculara a los nuevos temas de agenda, como las demandas de la comunidad en cuestiones ambientales, incluyendo la discusión del modelo de desarrollo después de la salida de la convertibilidad y la interpelación al sistema judicial en diversos aspectos (Cuadros 24.8 y 24.9).

PALABRAS FINALES

Como se dijo al principio de este capítulo, el objetivo principal de nuestra investigación fue aportar evidencia empírica sobre la transformación reciente de la protesta social en Argentina. Creemos que, de esta manera, podemos contribuir a un análisis de este fenómeno que no se limita a situaciones específicas o a actores particulares. Por esta razón, una visión general de un período prolongado de tiempo puede ampliar el horizonte del debate sobre los procesos de movilización social en Argentina. Como señalamos, la diversificación (de las organizaciones, demandas y formas de protesta) es el sello distintivo del período que se extiende entre las dos grandes crisis de la transición democrática argentina.

Dentro de este marco general, las crisis representan circunstancias significativas que marcan puntos de inflexión en términos de las condiciones estructurales que enmarcan la protesta. Así, la crisis hiperinflacionaria llevó a una década de predominio de las reformas de mercado en el país, cuyos efectos, principalmente relacionados con el empleo y las condiciones de trabajo, son cruciales para entender el fuerte descenso de la actividad sindical durante los 90. Una fracción del movimiento sindical, honrando su filiación peronista y su lealtad al gobierno nacional, continuó con un gran proceso de desmovilización. Al mismo tiempo, coincide con la movilización sindical constante y creciente de los trabajadores del Estado, de la salud y de la educación que fueron los más afectados por las reformas del mercado y las exigencias del ajuste fiscal disciplinador. En ese momento particular, una fuerte caída en la cantidad de huelgas tuvo lugar, mientras que la manifestación se consolidó como la principal forma de protesta. Por otra parte, se ha demostrado que en los últimos 15

Cuadro 24.7
Organización según demanda I

	SINDICAL			PIQUETERA		
	PRE CRISIS	*CRISIS*	*POST CRISIS*	*PRE CRISIS*	*CRISIS*	*POST CRISIS*
Salario / condiciones laborales	35%	31%	66%	5%	5%	8%
DD. HH.	8%	4%	34%	4%	7%	17%
Ambientales	0%	0%	1%	0%	0%	1%
Seguridad	3%	0%	2%	0%	1%	1%
Servicios sociales	19%	13%	8%	3%	5%	3%
Trabajo y asistencia social	2%	7%	2%	64%	43%	30%
Servicios habitacionales	0%	0%	0%	1%	0%	3%
Político	8%	9%	8%	11%	13%	19%
Económico	22%	26%	4%	8%	15%	5%
Otros	3%	5%	4%	0%	7%	13%
Sin datos	0%	4%	2%	4%	4%	1%
TOTAL	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Fuente: Grupo de estudios sobre protesta social y acción colectiva (GEPSAC).

Cuadro 24.8
Organización según demanda II

	DD. HH.			ESTUDIANTIL		
	PRE CRISIS	*CRISIS*	*POST CRISIS*	*PRE CRISIS*	*CRISIS*	*POST CRISIS*
Salario / condiciones laborales	2%	0%	1%	1%	6%	10%
DD. HH.	68%	70%	44%	12%	11%	11%
Ambientales	0%	0%	1%	1%	0%	3%
Seguridad	0%	0%	2%	0%	0%	4%
Servicios sociales	2%	5%	2%	57%	53%	43%
Trabajo y asistencia social	4%	5%	4%	1%	3%	3%
Servicios habitacionales	0%	0%	1%	1%	0%	0%
Político	15%	5%	14%	11%	0%	10%
Económico	2%	5%	2%	7%	22%	2%
Otros	6%	5%	27%	7%	3%	13%
Sin datos	1%	5%	2%	1%	3%	2%
TOTAL	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Fuente: Grupo de estudios sobre protesta social y acción colectiva (GEPSAC).

años los cortes de ruta / calle aumentaron y se convirtieron, cada vez más, en un formato modular contencioso. Mostrando, así, un repertorio demandante con un gran poder disruptivo. Además, los años que siguieron al fin de la dictadura implicaron una transformación significativa en las divisiones ideológicas básicas que organizaban el mapa político. La progresiva falta de diferenciación de la clase política acompañó el surgimiento de nuevos actores en las protestas que, muchas veces, se ubicaron en abierta oposición a la política partidaria. Sin embargo, en contraste con las lecturas de los años 90 que proponen una imagen de las movilizaciones sociales que se centra en la despolitización, la apatía y la impotencia, nuestro trabajo revela que protesta social jugó un papel importante en la política nacional y que fue un espacio privilegiado para el surgimiento de nuevos actores, demandas y formas de confrontación social.

Como hemos visto, ni los períodos presidenciales ni los económicos alteran significativamente la distribución de las protestas. Los datos recolectados muestran que las crisis políticas no son necesariamente el resultado de un aumento en la cantidad de protestas. En otras palabras, creemos vehementemente que la cantidad de protestas no está directamente relacionada con su impacto político. En este sentido, es necesario prestar atención a la formulación de las demandas. Observamos un conjunto cada vez más diverso de demandas y/o reclamos en las protestas a finales de los 90. En los años de la crisis de 2001-2002, hemos documentado el pasaje de determinados tipos de demandas a reclamos más generales. En este sentido, es importante tener en cuenta que las demandas de las protestas sociales durante este período reflejan un aumento en lo que se podría denominar crisis sistémica. Esto puede verificarse en el peso relevante que tienen las demandas que desafían el sistema político de gobierno (10%) y régimen social de acumulación (24%).

Esta investigación busca, fundamentalmente, explicar las principales transformaciones de los actores, demandas y formas de protesta entre 1989 y 2007. En general, estos procesos de transformación pueden ser analizados respecto de su naturaleza cada vez más fragmentada. Aún así, cabe señalar que la protesta sindical prevaleció durante todo el período. Sin embargo, entre 1989 y 2003, disminuyó en términos absolutos y relativos. Si tenemos en cuenta el rango de protestas sindicales se observa que, en 1989 los sindicatos impulsaron el 74% de las protestas, mientras que en 1998 o 2002, solo impulsaron el 26% de las mismas. A pesar de su crecimiento durante los años anteriores, la protesta sindical en la post crisis representa apenas el 28%. Esta reducción se relaciona con el hecho de que actividad de protesta sindical se ha vinculado más a las dinámicas electorales

Cuadro 24.9
Organización según demanda III

	VECINAL		
	PRE CRISIS	*CRISIS*	*POST CRISIS*
Salario / condiciones laborales	3%	2%	1%
DD. HH.	21%	16%	21%
Ambientales	6%	6%	21%
Seguridad	11%	0%	12%
Servicios sociales	2%	0%	1%
Trabajo y asistencia social	7%	0%	2%
Servicios habitacionales	24%	6%	18%
Político	12%	9%	8%
Económico	8%	23%	2%
Otros	6%	27%	13%
Sin datos	0%	4%	1%
TOTAL	**100%**	**100%**	**100%**

Fuente: Grupo de estudios sobre protesta social y acción colectiva (GEPSAC).

que a los derroteros de la economía (Etchemendy y Collier, 2007).

Como contrapartida a la retirada de algunos sectores políticos y sindicales de la participación de la protesta social, nuevos actores han adquirido una importancia fundamental. Algunos de ellos tienen una larga historia vinculada a la movilización social, como los vecinos, las organizaciones de derechos humanos y estudiantiles; otros tienen una cualidad novel como las familias de las víctimas o los piqueteros. En términos generales, es necesario considerar que lo que contribuye a definir este escenario es el hecho de que algunos de los actores que tradicionalmente estaban más vinculados a los fenómenos de movilización social –con identidades estables y formas de organización independientes de la protesta– fueron progresivamente excluidos de este tipo de acciones. Al mismo tiempo, durante este período emergen nuevos actores y colectivos sociales y, emblemáticamente, adoptan nuevas identidades más relacionadas con las acciones, las formas o las demandas específicas que se llevan a cabo.

Al comparar los datos de las protestas de los períodos pre y post crisis de 2001, esta perspectiva se enriquece. La protesta sindical se recupera notablemente en el marco de un nuevo contexto político. Luego de cambios en el régimen de acumulación, dirigidos más hacia

los consumidores y los mercados nacionales en 2000, las demandas relacionadas a la protección y promoción de los derechos sumadas a las formas de protesta en el espacio público, tales como marchas y cortes de rutas / calles, no disminuyeron sino que aumentaron (por ejemplo, el elevado pico de protestas de 2005). Es decir, los datos muestran que la recuperación de los actores clásicos de la movilización tiende a unir y complementar el escenario de protesta heterogéneo y diverso, dando pruebas de que la protesta social tiene una gran capacidad para adaptarse a la coyuntura política, expresar los problemas sociales y colocarlos en la agenda pública.

BIBLIOGRAFÍA

Acuña, C., et al. (eds.) 1995 *Juicio, castigos y memorias. Derechos humanos y justicia en la política argentina* (Buenos Aires: Nueva Visión).

Almeida, P. D. 2008 *Waves of protest: Popular struggle in El Salvador, 1925-2005* (Minneapolis: University of Minnesota Press).

Auyero, J. 2002 *La protesta social en Argentina* (Buenos Aires: Libros del Rojas).

Brysk, A. 1994 *The politics of human rights in Argentina. Protest, change, and democratization* (Stanford: Stanford University Press).

Calderón, F. y Jelin, E. 1987 *Clases y movimientos sociales en América Latina: perspectivas y realidades* (Buenos Aires: CEDES).

Cortes, R. y Marshall, A. 1999 "Estrategia económica, instituciones y negociación política en la reforma social de los noventa" en *Desarrollo Económico* (Buenos Aires) 39(154): 195-212, julio-septiembre.

Delamata, G. 2004 *Los barrios desbordados* (Buenos Aires: Eudeba / Libros del Rojas).

Delamata, G. (comp.) 2006 Ciudadanía y territorio. Las relaciones políticas de las nuevas identidades sociales (Buenos Aires: Espacio editorial).

Delamata, G. 2013 "Actualizando el derecho al ambiente. Movilización social, activismo legal y derecho constitucional al ambiente de 'sustentabilidad fuerte' en el sector extractivista mega minero" en *Entramados y Perspectivas, Revista de la Carrera de Sociología de la UBA*, N° 3, Dossier: Ecología Política y Ciencias Sociales, junio.

Etchemendy, S. y Collier, R. 2007 "Down but not out': Union resurgence and segmented neocorporatism in Argentina (2003–2007)' en *Politics and Society*, *35*: 363-401.

Etcemendy, S. y Collier, R. 2008 'Battered but standing. Union revival and fragmented neocorporatism in Argentina' en *Postdata Magazine*, N° 13: Buenos Aires.

Farinetti, M. 1999 "¿Qué queda del 'movimiento obrero'? Las formas del reclamo laboral en la nueva democracia argentina" en *Revista Trabajo y Sociedad* (Santiago del Estero) Vol. 1, N° 1: 15-29, junio-septiembre.

Farinetti, M. 2002 La conflictividad social después del movimiento obrero en *Nueva Sociedad* (Caracas) N° 182: 60-75.

Gamson, W. 1975 *The strategy of social protest* (Homewood: Dorsey Press).

Jelin, E. (comp.) 1985 *Los nuevos movimientos sociales* (Buenos Aires: CEAL) Vol. 1 y 2.

Jelin, E. 2005 "Los derechos humanos entre el Estado y la sociedad" en Suriano J. (ed.) *Nueva Historia Argentina. Tomo X: Dictadura y democracia (1976–2001)* (Buenos Aires: Ed. Sudamericana).

Koopmans, R. y Rucht, D. 2002 'Protest event analysis' en Klandermans, B. y Staggenborg, S. (eds.) *Methods of social movements research* (Minneapolis: University of Minnesota Press).

Lobato, M. Z. y Suriano, J. 2003 *La protesta social en Argentina* (Buenos Aires: FCE).

Massetti, A. 2005 (2004) *Piqueteros. Protesta social e identidad colectiva* (Buenos Aires: Editorial de las Ciencias).

Merklen, Denis *Pobres ciudadanos: Las clases populares en la era democrática Argentina, 1983-2003* (Buenos Aires: Editorial Gorla).

O'Donnell, G. 1997 *Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización* (Buenos Aires: Paidós).

Palermo V. y Reboratti C. (comps.) 2007 *Del otro lado del río. Ambientalismo y política entre uruguayos y argentinos* (Buenos Aires: Edhasa).

Pereyra, S. 2008 *¿La lucha es una sola? La movilización social entre la democratización y el neoliberalismo* (Buenos Aires: UNGS / Biblioteca Nacional).

Pereyra, S., Pérez, G. y Schuster, F.L. (comps.) 2008 *La huella piquetera* (La Plata: Ediciones Al Margen).

Pita, M. V. 2010 Formas de morir y formas de vivir: el activismo contra la violencia policial (Buenos Aires: Editores del Puerto y CELS).

Robinson, W. I. 2008 *Latin America and global capitalism: A critical globalization perspective* (Baltimore: Johns Hopkins University Press).

Schuster, F. L. et al. (comps.) 2005 *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea* (Buenos Aires: Prometeo).

Schuster F. L. y Pereyra S. 2001 "Transformaciones de la protesta social en Argentina: balance y perspectivas de una forma de acción política" en Giarracca, N. et al. *Protesta social en Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país* (Buenos Aires: Alianza).

Silva, E. 2009 *Challenging neoliberalism in Latin America* (Cambridge: Cambridge University Press).

Svampa, M. 2005 *La sociedad excluyente* (Buenos Aires: Taurus).

Svampa, M. 2008 *Cambio de época. Movimientos sociales y poder político* (Buenos Aires: Siglo XXI).

Svampa, M. y Antonelli, M. (eds.) 2009 *Minería Transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales* (Buenos Aires: Biblos / UNGS).

Svampa, M. y Pereyra, S. 2003 *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras* (Buenos Aires: Biblos).

Svampa, M. y Pereyra, S. 2005 "La política de los movimientos piqueteros" en Schuster, F. L. et al. (comps.) *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea* (Buenos Aires: Prometeo).

Tarrow, S. 1997 *Power in movement: Social movements, collective action and politics* (Madrid: Alianza).

Tilly, C. 1978 *From mobilization to revolution* (Reading: Addison-Wesley).

CÓMO CITAR ESTA PUBLICACIÓN:
Pereyra, Sebastian, German J. Perez, and Federico L. Schuster. 2017. "Tendencias de la protesta social en Argentina, 1989-2007" Pp. 579-620 en Paul Almeida y Allen Cordero Ulate, Eds., *Movimientos Sociales en América Latina: Perspectivas, Tendencias y Casos*. Buenos Aires: CLACSO.

25

Maria da Glória Gohn*

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES BRASILEÑOS DE LA ÚLTIMA DÉCADA

EL NUEVO ESCENARIO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DE AMÉRICA LATINA

Para entender el papel de los movimientos sociales en Brasil en el nuevo milenio se deben tener en cuenta algunas consideraciones preliminares acerca del entorno sociopolítico, económico y cultural en el que estos movimientos tienen lugar, a fin de ubicar estas acciones en un contexto latinoamericano. América Latina ha presentado diferentes respuestas nacionales a las crisis económicas cíclicas, especialmente a la que aconteció en el mundo globalizado a finales de 2008. Los cambios significativos en el escenario mundial, tanto a nivel internacional (globalización, guerras, crisis, nuevas disputas hegemónicas, etc.) así como los cambios a nivel regional (un reposicionamiento relativamente más autónomo de América Latina en el sistema mundial) se han traducido en un contexto sociopolítico que es diverso y diferente del de décadas pasadas, desde un punto de vista económico, social y político, que se manifiesta también en innumerables innovaciones culturales.

Algunos países, como Argentina, sufrieron fuertes impactos económicos a raíz de la crisis de la deuda de 2001 y comenzaron a experimentar problemas sociales, como desempleo masivo y aumento

* Universidade Estadual de Campinas/Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

de los niveles de pobreza, que previamente se registraban en menor escala. Otros experimentaron transformaciones políticas con el ascenso al poder de nuevos grupos y la formulación de nuevas políticas marcadas por redistribuciones dirigidas desde el Estado, como son los casos de Bolivia, Ecuador, Venezuela, Uruguay y Paraguay. Otros capitalizaron la crisis, posicionándose en nichos del mercado internacional, adoptando políticas de protección social fuertes, con programas sociales que promueven la interacción entre movimientos sociales, sindicatos, asociaciones civiles y órganos de gobierno. Esta interacción se logra por medio de políticas institucionalizadas y se puede observar en la promoción de conferencias nacionales y en las políticas focalizadas en sectores sociales y grupos específicos, tales como afrodescendientes, o en las políticas sobre temas sociales, tales como la seguridad alimentaria. Todas las políticas anteriores incorporan inclusión o protección social, como son los casos de Brasil, Colombia y México.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES LATINOAMERICANOS EN LA COYUNTURA ACTUAL

En el siglo XXI, hay un nuevo escenario en el campo del asociativismo: están surgiendo tipos novedosos de redes sociales y movimientos sociales. Las innovaciones están emergiendo en las demandas, identidades, repertorios y perfiles de los participantes. Proliferan movimientos multi y pluriclasistas. Además, han surgido movimientos transnacionales, surcando fronteras de Estados y naciones con una visión alter o antiglobalización (Farro, 2007; Players, 2010). En el nuevo milenio han resurgido con vigor los movimientos con viejas demandas –como tierras para cultivo– como es el caso de la Vía Campesina y de otros movimientos rurales como el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (*Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra*, *MST*). Se crearon movimientos sociales que abordan cuestiones de seguridad alimentaria, sobre su producción y distribución en todo el mundo. Además, surgieron movimientos que insisten en la defensa de un determinado estilo de vida, como los pueblos indígenas de Bolivia, Perú y Ecuador (Dávalos, 2005, 2012). También proliferaron movimientos basados en la identidad que reivindican los derechos culturales de aquellos que considerados diferentes: los derechos étnicos, culturales, religiosos, migratorios y sexuales. Los movimientos comunitarios, unidos por ideas e ideologías, se debilitaron por las nuevas formas de formulación de políticas, especialmente por las nuevas estrategias de gobierno, en todos los niveles de la administración. Surgieron nuevos movimientos comunitarios, algunos de los cuales recrearon las formas tradicionales de autogestión

y autoorganización, al hacer de sus territorios lugares de resistencia y al resignificar nuevas relaciones sociales; surgieron otros, con una organización verticalista, como resultado de programas sociales y proyectos fomentados por las políticas sociales. Debido a las nuevas tecnologías de comunicación y recursos digitales surgieron otros formatos de organización, tales como los movimientos que operan a través de una red transnacional, como la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas (*Coordinadora Latinoamericana de Organizações do Campo*, *CLOC*). Es un movimiento virtual, sin sede ni grupo organizador destacado (Levy, 2008; Martoz, 2007; Seoane, 2003; OSAL, 2007).

Han surgido innovaciones en el campo organizacional, tales como redes y una mayor conciencia sobre las cuestiones ambientales, al proponer proyectos que pueden ser económicamente viables sin destruir el medio ambiente. Los nuevos formatos organizacionales han dado lugar a nuevas cuestiones, como los derechos transnacionales en el caso de los inmigrantes y las formas de ciudadanía de proyección planetaria, como en los movimientos ecologistas, por ejemplo. El tema "cosmopolita" es parte integral de la agenda de las representaciones que los movimientos buscan proyectar socialmente.

La nueva coyuntura política tiene un papel fundamental para explicar el actual escenario del asociativismo. En varios países, ha habido una expansión en la forma de gestión deliberativa, creando innumerables innovaciones en el campo de la participación democrática popular, tales como la participación electrónica, de la misma manera que el formato de muchas políticas sociales fue construido y/o rediseñado por la práctica de grandes conferencias nacionales copatrocinadas por organismos públicos. Las jornadas se estructuran en ciclos de debates entre los representantes de la sociedad civil y la administración pública, que se traducen en propuestas para respaldar las políticas nacionales. En Brasil hay varios ejemplos, como el nuevo plan de educación de 10 años, en el sector de la salud, o la creación de un organismo estatal que administra la seguridad alimentaria, con la creación del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria (*Conselho Nacional de Segurança Alimentar*, *CONSEA*).

El Estado promovió reformas, descentralizó servicios en el ámbito social, creó canales de mediación y un sinfín de nuevos programas sociales. Se han institucionalizado nuevas formas de abordar las demandas populares. Por un lado, se puede pensar que este hecho constituye una victoria, debido a que las demandas previas han sido reconocidas como un derecho y se incluyen en las prácticas de la administración pública. Por otro lado, la manera en que estas nuevas políticas se han implementado, ancladas en el pragmatismo tecno-

crático, se ha traducido en que la mayoría de los proyectos sociales implementados son parte de redes de base clientelar. Las nuevas políticas desmovilizan a los antiguos movimientos y favorecen las configuraciones institucionales y el apoyo legal para los nuevos actores, organizados en ONG, asociaciones y organizaciones del sector terciario.

La institucionalización de canales y prácticas de la sociedad civil, en relación con la sociedad política, también produjo nuevos movimientos sociales, creados en la coyuntura actual, articulados a través de ONG. Se articulan en temas relacionados con la democratización del Estado o de las políticas públicas, como es el caso del Movimiento de Lucha contra la Corrupción Electoral (*Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral*, *MCCE)* de Brasil. Amparándose en las posibilidades constitucionales, en el caso de los proyectos formulados por iniciativa popular, el MCCE elaboró un proyecto de ley: el Proyecto de Ley Registro Limpio (*Projeto de Lei Ficha Limpa*; para los candidatos a cargos electivos), aprobado en junio de 2010. El MCCE se articula como una red y, como tal, no tiene Consejo de Administración ni registro civil. Cuenta con el apoyo de la Orden de los Abogados del Colegio de Abogados de Brasil (*Ordem dos Advogados do Brasil*, *OAB*) y de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (*Conferência Nacional dos Bispos do Brasil*, *CNBB*).

La nueva ola de movimientos sociales que ha hecho irrupción en toda Europa y el Medio Oriente desde el año 2010, también ha tenido repercusiones en Brasil (Ali et al., 2012). Como sabemos, innumerables movimientos sociales volvieron a surgir después de la crisis económica del año 2008, en respuesta a las nuevas leyes de austeridad, como la restricción de beneficios sociales para los inmigrantes o grupos étnicos específicos como los gitanos (Portugal, Francia, Reino Unido, Italia, España, etc.). A partir del año 2010, surgió en Medio Oriente una nueva ola de movimientos por la libertad. Esta serie de eventos colocó, nuevamente, el tema de los movimientos sociales en la agenda política de varios países. Muchos de los movimientos se inspiraron en América Latina, dado que fue un centro de resistencia popular durante la lucha contra los regímenes militares que gobernaron en varios países. La comparación entre los movimientos actuales en Europa y otros similares que suceden en Brasil, a pesar de las diferencias en los contextos socioeconómicos de los países en cuestión, es la aparición de las marchas de protesta y las ocupaciones de edificios.

Podemos observar que los movimientos actuales se diferencian mucho unos de otros, según el tipo y grado de organización, demandas, articulaciones, proyectos políticos, trayectorias históricas y experiencias –principalmente en el plano político organizativo, así como en lo relativo a su ámbito de aplicación. Una diferencia impor-

tante con respecto a los movimientos anteriores radica en el perfil de los participantes, ahora denominados activistas, mientras que antes eran militantes de causas con profundos tintes ideológicos. Ha habido una renovación de los actores sociales (que comparten y le dan diferentes significados a la arena de la movilización social y la acción colectiva), así como una renovación de las generaciones –los jóvenes predominan como los nuevos sujetos políticos relevantes (ver Cap. 13 en este volumen).

También se debe señalar que en los últimos años, especialmente en Brasil, la agenda de debates académicos se ha centrado mucho más en las políticas públicas. Esto reveló inquietudes más relacionadas con la "institucionalización" de prácticas colectivas civiles que con los "nuevos" actores presentes, incorporados ahora a la lógica política institucionalizada, así como las temáticas acerca de las nuevas formas de administración social y las formas de participación política en el ámbito de las diferentes entidades estatales. Sin embargo, por lo general en estos debates, los nuevos actores parecen estar desconectados de la dimensión asociativa que los enmarcan en escenarios de conflicto político y social; los creadores de cuerpos colectivos de acción, que constantemente adquieren nuevos significados y participan en situaciones ocasionales de antagonismo vis a vis el escenario político institucional. Las nuevas estrategias de las luchas y de las agendas políticas de los movimientos frente a la reciente crisis del capitalismo financiero global, así como las relaciones de los movimientos en el contexto de los cambios paradigmáticos en los gobiernos, no han recibido la debida atención en los debates y las políticas resultantes. Asimismo, los debates en ciernes también muestran una tendencia creciente de críticas hacia el "centrismo occidental".

Al interpretar la acción colectiva contemporánea se pueden resaltar otros cambios, tales como el cuestionamiento de los paradigmas y las teorías hegemónicas no solo de los movimientos sociales sino también de las teorías sociológicas, políticas y democráticas; la aparición de análisis que no se restringen a las disciplinas que usualmente están asociadas al estudio de los movimientos sociales (sociología, ciencia política e historia), sino que mantienen un diálogo con otros campos de producción de conocimiento (antropología, geografía, psicología, comunicaciones, relaciones internacionales, etc.). Análisis que reivindican, en el caso de América Latina, la descolonización del conocimiento y el poder para dar forma a los movimientos basados en las experiencias particulares del Sur del continente, en una "sociología de las ausencias y de las emergencias" (De Sousa Santos, 2006; Quijano, 2004). En este contexto, los términos del debate que tuvo lugar en Europa durante los años 90 con respecto al tema de la

colonización, especialmente en África, son retomados una vez más (Spivak, 2009).

MOVIMIENTOS SOCIALES Y ASOCIATIVISMO EN AMÉRICA LATINA DURANTE LA ÚLTIMA DÉCADA

La primera década de este siglo vio, en palabras de Touraine (1984), el retorno del actor social en las acciones colectivas que se propagaron por toda América Latina, de una manera marcadamente contradictoria. En algunos países, hubo una radicalización del proceso democrático y una reaparición de las luchas sociales que se consideraban tradicionales hace algunos años, como es el caso de los movimientos étnicos, especialmente de los pueblos indígenas en Bolivia y Ecuador, estuvieran o no asociados con movimientos nacionalistas como el de los "bolivarianos" (Venezuela). En el nuevo milenio, también se puede observar la reaparición de los movimientos barriales populares urbanos (ver Cap. 14 en este volumen) o del neocomunitarismo, especialmente en México y Argentina. Todos estos movimientos locales hicieron su aparición pública como agentes de nuevos conflictos y como parte de la renovación de las luchas sociales colectivas. En algunos casos, votaron a sus líderes para desempeñar los cargos más altos en el país, como ocurrió en Bolivia. Los movimientos que estaban en las sombras y eran tratados como insurgentes reaparecieron con fuerza organizativa, como los piqueteros en Argentina, los cocaleros (trabajadores de las plantaciones de coca) en Bolivia y Perú y los zapatistas en México. Otros, incluso, recobraron su voz en redes compuestas de movimientos sociales globales, tales como el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (*Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra*, *MST*) en Brasil y la Vía Campesina. Muchos de estos fueron discriminados y criminalizados por los medios de comunicación y algunos organismos del Estado. Los foros mundiales han proporcionado a estos movimientos un espacio en grandes eventos, como el Foro Social Mundial (ver Cap. 7 en este volumen). Este último, a pesar de ser presentado como transnacional, constituye una de las innovaciones específicas del asociativismo latinoamericano de este siglo, debido al hecho de que comenzó su existencia en Porto Alegre, Brasil.

El movimiento de los piqueteros, en Argentina, tiene una composición multiforme y heterogénea (ver Cap. 9 en este volumen). En sentido estricto, el movimiento piquetero subsiste por la vinculación a organizaciones políticas como la Federación de Tierra y Vivienda y Hábitat (FTV), a la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Polo Obrero (PO) y el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), más conocido como Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) (ver Mirza, 2006: 82). Svampa se-

ñala que las organizaciones piqueteras son muy ambivalentes, con diversas tonalidades políticas que van desde la demanda de reinserción en el sistema a la afirmación de un anticapitalismo radical (Svampa, 2008: 181). Los participantes de estos movimientos, con altos niveles de representación femenina, son quienes están inscritos en los programas sociales y proyectos de trabajo comunitario que, en contraste con los beneficios que estos proyectos pueden brindar, tienen el compromiso de participar en las protestas y movilizaciones.

Otro tópico y movimiento social importante en América Latina es el ecologista. En algunas regiones ciertos sectores del movimiento ambiental se politizaron, como en el caso de la lucha contra la instalación de las pasteras en Uruguay (Longo, 2008), o la lucha contra las empresas de minería a cielo abierto en la región de Mendoza, Argentina, causantes de graves problemas socioambientales (ver Di Marco y Palomino, 2004; Baraldo, 2006). En esta última región, las acciones se organizan en asambleas, junto a la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), conformadas por comerciantes, campesinos, amas de casa, estudiantes, etc. En otras palabras, se trata de un grupo heterogéneo, a diferencia de los ambientalistas que participaron en los movimientos sociales de los años 90, impulsados por ideologías e ideas ecológicas. Hoy día participan en conformidad con su creencia en la importancia de la acción social colectiva, que abarca diferentes estratos sociales, que regeneran las asociaciones vecinales como unidades territoriales que articulan las acciones. Otros movimientos ambientales están vinculadas a los movimientos populares, como en la región del río São Francisco en Brasil, así como el movimiento contra la construcción de represas o el movimiento de pequeños agricultores en varias regiones de Brasil y Argentina, como el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC).

Muchos movimientos populares luchan contra proyectos en el ámbito de las políticas públicas en sus regiones debido a que estos proyectos afectan las condiciones de trabajo que son su sustento económico, como el Movimiento Nacional de Pescadores (*Movimento Nacional dos Pescadores*, *MONAPE*) en Brasil. De hecho, el trabajo tiene un papel central en las luchas populares –para garantizar el derecho al trabajo, por mejores condiciones de trabajo o para generar nuevos ingresos, ya sea autogestionado o a través del empleo institucionalizado. Se pueden citar como ejemplos un gran número de organizaciones de "economía solidaria" en Brasil y al MTD en Argentina. Su objetivo es construir proyectos productivos sostenibles, autogestionados y guiados por la lógica de la comunidad (ver Vitullo, 2007: 154-161). Con respecto a los movimientos populares urbanos, la lucha por la vivienda continúa siendo la más importante en Brasil y otros

países de América Latina (ver Gohn, 2013). Las organizaciones locales, regionales y nacionales son prominentes, como es el caso del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (*Movimento dos Trabalhadores Sem Teto*, *MTST*) en Brasil. Como ejemplos regionales, hay zonas que han tenido un impacto negativo a raíz de los proyectos urbanos en los últimos años, como en Tierra del Fuego, Argentina, debido a los proyectos turísticos para la región de Ushuaia. Esta amenaza dio lugar al Foro Social Urbano de Ushuaia; o la expansión desordenada de El Alto, en el Altiplano de Bolivia, una ciudad cerca de La Paz, donde se encuentra el aeropuerto internacional del país.

Entre los movimientos que buscan identidad en América Latina, el movimiento de los pueblos indígenas está a la vanguardia. La lucha de los pueblos indígenas, que resisten la colonización europea/blanca, ha sido registrada durante siglos. Los movimientos indígenas contemporáneos no solo se centran en la resistencia sino también en la lucha por los derechos, el reconocimiento de sus culturas y de su propia existencia, la redistribución de la tierra en sus regiones ancestrales y la escolarización en su lengua materna. Debe señalarse que un sinnúmero de territorios indígenas en varios países se convirtieron en una fuente de penetración del capital extranjero, debido a los minerales y los recursos naturales en las tierras de los indígenas, así como los sistemas de agua. Por lo tanto, las cuestiones básicas que sustentan la expansión capitalista, en términos de infraestructura, se convirtieron en una fuente de conflictos entre la población, principalmente los ribereños o indígenas (que luchan por sus territorios por ser su fuente de trabajo/sustento) y los agentes económicos interesados en esas tierras y sus riquezas, como fuentes de energía, o para expandir las matrices de energía bajo su control, tales como los conflictos por el agua en Cochabamba, en Bolivia, en el año 2000; los bloqueos de carreteras de los aymaras en el Perú (Lima 2000-2001); y la cuestión del gas, también en Bolivia, durante sus negociaciones con Brasil entre 2003 y 2005.

En Bolivia, en 2011, los líderes indígenas crearon un movimiento contra la construcción de una carretera de 300 kilómetros, proyectada por el gobierno, que buscaba dinamizar el comercio entre la parte más baja de la región Amazónica boliviana y el valle andino. De hecho, esta carretera hubiese cruzado la reserva ambiental del Territorio Indígena y Parque Nacional, un área de 1,1 millones de hectáreas que es hogar de 13 mil indígenas de diferentes grupos (ver Cap. 10 en este volumen). Esta zona fue una conquista de los pueblos indígenas que, en 1990, llevaron a cabo la "Marcha por el Territorio y la Dignidad". En Brasil, nuevamente se exacerbaron los conflictos por las tierras indígenas en la selva Amazónica, tras un nuevo boom

del biocombustible y el frenesí por plantar caña de azúcar para la producción de alcohol, considerado como la nueva alternativa para el consumo de energía.

En América Latina, Ecuador y Bolivia son los países donde el movimiento indígena hizo mayores progresos en términos de organización, movilizaciones y conquista de los derechos sociales (ver Cap. 10 en este volumen). En Bolivia, los sectores populares eligieron al candidato indígena como Presidente de la República. Este hecho fue un hito. El Movimiento al Socialismo (MAS) es el partido político indígena más desarrollado de Bolivia. El caso boliviano es un ejemplo típico para el análisis del desarrollo de las estructuras institucionales de participación, como en el caso de la Ley de Participación y Control Social delineada a finales de 2009, que se debatió en los nueve departamentos del país y con las organizaciones nacionales, tanto indígenas como no indígenas. En Brasil, después de la Constitución de 1988, los pueblos indígenas lograron conquistas significativas, como la demarcación de sus territorios, el derecho a la alfabetización en su propia lengua, y más recientemente, el intento de vender sus productos, no en los mercados alternativos, sino a precios justos y competitivos en los mercados globalizados.

Dado el predominio de la población con ascendencia africana, el movimiento de afrodescendientes está más organizado en Brasil, especialmente en la región Noreste y las grandes capitales del Sudeste, como San Pablo y Río de Janeiro. Durante la última década el movimiento avanzó en sus luchas, con la política de los cupos universitarios, en programas como el PROUNI y la lucha por el Estatuto de Igualdad Racial (*Estatuto da Igualdade Racial*). Este avance también refleja la complejidad de la composición social de la sociedad brasileña. Cabe destacar el apoyo del Gobierno a través de políticas públicas. Los resultados son contradictorios: por un lado, las demandas sociales se presentan como derechos, la apertura de un espacio de participación a través de la acción ciudadana; por otro hay pérdidas, principalmente en la autonomía del movimiento y el establecimiento de estructuras jerárquicas de control social en las políticas de gobierno para los movimientos sociales. Se establece el control social, pero su significado es dictado por las políticas públicas, aunque pueda haber participación ciudadana en el establecimiento de sus normas.

En esta breve lista de los movimientos sociales actuales en América Latina, se deben destacar el resurgimiento del movimiento estudiantil, especialmente en Chile con la Revolución de los Pingüinos (Zibas, 2008) y las marchas de 2011 por la reforma educativa (ver Cap. 13 en este volumen); y los plantones en las universidades de Brasil, especialmente las públicas, para mejorar la calidad de la enseñanza,

contra las reformas educativas y contra la corrupción y malversación del erario público. De hecho, no solo los estudiantes se han movilizado. El sector de la educación, especialmente la educación en las escuelas primarias, ha sido una fuente de protestas masivas, como fue el caso de México, en 2006 en la región de Oaxaca. Asimismo, hay que destacar que el campo de la educación, dado el potencial de los procesos educativos y pedagógicos en el desarrollo de las formas de sociabilidad y de la constitución y expansión de una cultura política, también se convirtió en un área estratégica para los movimientos populares como el MST.

Del mismo modo, anclado en la lucha por los derechos y construcción de la identidad, el movimiento de lesbianas, *gays*, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero y simpatizantes (*Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Trangêneros e Simpatizantes*, *LGBTTTS*) debe ser destacado en sus diferentes formatos y combinaciones. El reconocimiento de relaciones estables entre homosexuales, por ejemplo, no solo legitima otra forma de matrimonio, sino que da seguridad jurídica en relación a los derechos vis a vis pensión, herencia, uso compartido de la póliza de seguro y la cobertura de salud. Por otra parte, las nuevas leyes que protegen los derechos de la comunidad LGBT establecen el reconocimiento para la adopción de niñas/os.

NUEVAS FORMAS DE PROTESTA Y MANIFESTACIÓN

Las marchas callejeras y las manifestaciones tienen una larga tradición en la historia sociopolítica de Brasil, en distintos momentos y coyunturas históricas y con diferentes temas y demandas (Gohn, 2011). En la actualidad, existen grandes diferencias en las manifestaciones de protesta brasileña, según el territorio donde se producen y sus demandas, de la misma manera que hubo diferencias en relación a las marchas del pasado. En los años 80, las marchas a favor del retorno a la democracia eran las más usuales; en los años 90, entre los sectores populares de la sociedad, las manifestaciones fueron especialmente frecuentes en el ámbito rural con el Movimiento Sin Tierra. En el nuevo siglo, han resurgido en los últimos 2 años, tanto en Brasil como en otros países, con los jóvenes de las clases medias como protagonistas ¿Qué demandan? En el exterior, hay dos ejes temáticos principales: democracia y libertad de expresión en el Medio Oriente (Egipto, Túnez, Siria, Yemen, Libia, etc.). En Europa, los ciudadanos se manifiestan contra las recientes reformas económicas neoliberales, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en rechazo a determinado tipo de políticos, considerados corruptos y ajenos a las necesidades de la población (especialmente en España, Portugal, Grecia, Islandia, Francia, Inglaterra, Alemania, etc.). En otras palabras,

en estas regiones las marchas impulsaron consignas socioeconómicas y políticas, un tanto olvidadas desde los años 60. Promovieron actos públicos y sentadas, como es el caso del Movimiento de Indignados, muy frecuente en España (Sampedro et al., 2011).

En Brasil, las marchas exigen libertad de expresión: Marcha por la Libertad, Marcha de la Marihuana (*Marcha da Liberdade, Marcha da Maconha*); derechos a la identidad (relativos a sexo, color, origen étnico, etc.); políticas públicas y beneficios (pase libre en el transporte público, por ejemplo) y la Marcha del Orgullo (*Parada do Orgulho LGBT*) en lucha contra el prejuicio hacia lesbianas, *gays*, bisexuales, travestis y transexuales. Algunas marchas tradicionales de los grupos religiosos (como la Marcha por Jesús de los evangélicos), también fueron prominentes en los últimos años. Las nuevas marchas revelaron indignación moral con respecto a los valores, los hábitos y la conducta. Además de las marchas, hay que añadir las acciones de los colectivos de jóvenes que crean sus propias formas de acción política a través del activismo directo, como es el caso de la comunidad *Transparência Hacker*, *Wikileaks*, *Anonymous* y *LulzSec* –que utilizan las redes y la tecnología digital para la participación directa. La agrupación transnacional de activistas de *LulzSec*, que tiene una rama/link en Brasil (*LulzSecBrazil*), atacó los sitios de la Presidencia de la República y los organismos gubernamentales en protesta por la falta de transparencia y por los intentos de controlar internet. Los hackers actúan a través de acciones de protesta digitales en línea; activan robots electrónicos que generan un gran número de demandas en sitios previamente seleccionados, provocando su colapso.

Estas nuevas protestas en diferentes territorios y en diversos contextos y coyunturas socioeconómicas, políticas y culturales, tienen mucho en común. Se articulan mediante las redes sociales, especialmente a través de las redes sociales virtuales y las nuevas tecnologías digitales en Internet (blogs, facebook, twitter, etc.). Se componen de activistas, reclutados *ad hoc* para cada acción, aunque se pueden crear memorias y "tribus de activistas". Cabe destacar que los activistas se diferencian de los militantes de los movimientos sociales de décadas pasadas, que estaban unidos por ideologías e ideas políticas. Los activistas no pertenecen de manera permanente a un grupo determinado. Son colectivos con gran visibilidad en los medios, organizados por personas poco conocidas en el mundo de la política "oficial", por lo general profesionales liberales, tales como periodistas. Aunque pueden estar presentes, las estructuras de los partidos políticos tienen poca visibilidad. En muchos casos son rechazados, así como también las estructuras sindicales. En su mayoría, las manifestaciones tienen lugar fuera de los partidos y los sindicatos.

Muchas de las nuevas protestas son realizadas por jóvenes, generalmente estudiantes, de las clases medias, aunque en el caso de Europa hay una intensa participación de funcionarios y jubilados, además de los estudiantes. Hay un conjunto de principios que los unen, similares al erigido por el Foro Social Mundial (FSM), de "otro mundo es posible", combinados con utopías libertarias. Las nuevas protestas también se extienden más allá de mero rechazo: postulan modelos de empleo alternativo (en el caso europeo), nuevas leyes y nuevas formas de tratar cuestiones de elección, que se refieren a la personalidad y la subjetividad de cada persona (en el caso brasileño). Un mantra unificador de muchas de las protestas globales más recientes es la libertad de expresión. Existe la creencia de que la discusión de temas tabú, como la marihuana, no se puede prohibir ni impedir vis a vis el conocimiento existente o el conocimiento que puede ser generado a través de la discusión.

La democracia (en su sentido pleno y en su ejercicio) es otro gran eje de articulación de las nuevas protestas mundiales. Muchas protestas, a pesar de ser pacíficas, se han topado con el problema de la represión policial. Los movimientos exigen el fin de la represión policial y enfatizan que la mayoría de los temas implican cuestiones sociales, algunas vinculadas a la salud pública. Piden protección y seguridad pública, no represión. También hay propuestas para crear nuevos espacios de colaboración entre la sociedad civil y los organismos públicos, para formular políticas públicas pertinentes.

Las nuevas protestas del siglo XXI simbolizan una forma novedosa de participar en política: ni partidos políticos ni política oficial. Antes bien, es la política en el sentido griego: el ciudadano que se manifiesta y debate en un espacio público. La nueva ronda de contención muestra que hay menos alienación y más perspectivas alternativas para interpretar el mundo.

Las protestas construyen solidaridad basada en relaciones, directas y/o virtuales. La adhesión es a una causa y no a la ideología de un grupo. Son espacios de aprendizaje: un tipo de educación no formal (aprendizaje y saberes producidos a través de la experiencia de la protesta). Las protestas mundiales están contribuyendo a la construcción de una nueva cultura política, en consonancia con una sociedad más moderna y tolerante y contra el tradicionalismo y los prejuicios (Tapia, 2009; Hessel, 2011).

LA OLA DE MOVILIZACIONES EN BRASIL DURANTE JUNIO DE 2013

Durante junio de 2013 se registró una oleada masiva de protestas brasileñas en las calles de 12 capitales de estado y en muchas otras ciudades, uno de los mayores estallidos populares del país solo comparable

con el de 1992, por la destitución del ex Presidente Collor de Melo; con el movimiento *Diretas Já* en 1984, en lucha por el retorno a la democracia durante el período del régimen militar; y en los años 60 con las huelgas y marchas tras el golpe militar de 1964 y con los movimientos estudiantiles de 1968 (Gohn, 2015).

En junio de 2013, la gente salió a las calles uniéndose a un nuevo tipo de movimiento social. Se estima que sobre 1 millón de ciudadanos participaron en la protesta expresando una larga lista de reclamos que van desde la corrupción de los políticos a los abusos de los derechos humanos y los gastos para el Mundial de Fútbol. Las manifestaciones son parte de una nueva forma de movimiento social, compuesto en su mayoría por jóvenes educados, con predominio de las clases medias, conectados por redes digitales y organizados de forma horizontal y autónoma. Son críticos de las formas tradicionales de la política actual –especialmente de los partidos políticos y sindicatos. Las convocatorias a los actos se realizan a través de las redes sociales y los medios de comunicación contribuyen a la adhesión de la población al publicar la agenda, los lugares y horarios de los eventos de protesta. La manifestación de 2013 tiene una estética particular, con escasas consignas y pancartas de organizaciones políticas. El movimiento no utiliza la planificación estratégica a largo plazo por parte de las organizaciones. Los participantes tienen más autonomía. Cada uno tiene su cartel de cartulina; un mensaje nuevo puede generar una decisión tomada en el calor del momento. Prevalece una estética individual, con el uso de máscaras negras antigases u otras (tales como las de *Guy Fawkes*, *Anonymous*) y de *piercings*. Ellos han sido el blanco de las acciones violentas por parte de la represión policial. El movimiento también se ha conectado a redes de apoyo internacional y la solidaridad entre ellos es un valor y un principio. Son laboratorios de educación, ya que para los más jóvenes es su iniciación en la política.

Las manifestaciones de junio de 2013 se centraron en demandas específicas. El movimiento actuó como un colectivo no jerárquico, con gestión descentralizada, sin la coordinación de una dirección central-vertical. Los participantes mantienen valores, principios y formas de organización distintos de las de otros movimientos sociales, sindicales, populares (rurales y urbanos), así como difieren de los movimientos de identidad (mujeres, indígenas, *quilombolas*, etc.). Las manifestaciones de junio fueron activadas por colectivos organizados, con predominio del movimiento por el boleto gratuito (*Movimento Passe Livre*, *MPL*), la protesta contra la planificación de un aumento de tarifa de transporte público. Las protestas se extendieron rápidamente a Río de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasilia y otras ciudades importantes en todo el país. El MPL se gestó en 2005, en Por-

to Alegre, Rio Grande do Sul durante el Foro Social Mundial (FSM) y estuvo presente en los acontecimientos importantes de los estudiantes en Florianópolis y Salvador. La demanda central del movimiento es aumento cero en el precio del transporte público. Según el sitio web de MPL, se define como "un movimiento horizontal, como independiente y no partidario, pero no antipartido. La independencia del MPL no es solo de los partidos políticos, sino también respecto a las ONG, las instituciones religiosas o financieras, etcétera".[1]

En San Pablo, en junio de 2013, participé en las manifestaciones junto con el MPL, miembros de partidos izquierdistas del PSOL, PSTU, PCO y algunos militantes del PT. Todas las banderas partidarias fueron rechazadas en las manifestaciones, incluso generaron malestar entre aquellos que insistían con eso. Los grupos anarquistas (*Black Block*, *Anonymous* y *Kaos*) estuvieron presentes, con y sin máscaras (Danet y Bardeau, 2011). El movimiento expresó una profunda falta de confianza en todas las formas de la política. Los manifestantes quieren otro país, donde la ética y la política trabajen juntas. Quieren una revolución en los modos en que operar las políticas, y no reformas graduales o parches. La ciudadanía en las movilizaciones desea cambios en las políticas, donde los servicios estatales sean realizados en un nivel superior de calidad. En otras palabras, demandan un Estado más eficiente.

De los registros de los medios de comunicación nacionales en los últimos meses se pueden listar las razones probables del descontento que llevó a miles de personas a las calles, que adhirieron al movimiento de los jóvenes, es decir, los gastos estratosféricos en los estadios de la Copa Mundial de Fútbol; megaeventos y el uso de fondos públicos en la promoción de los eventos; y lo que es más importante, la mala calidad de los servicios públicos, especialmente transporte, educación, salud y seguridad. Otros agravantes incluyen la persistencia de índices de desigualdad social; inflación de precios al consumidor; informes de corrupción y clientelismo político; la *Proposta de Emenda Constitucional 37/2011* (*Projeto de Emenda Constitucional 37, PEC*); la criminalización de los movimientos sociales, especialmente indígenas y rurales; y el proyecto de ley que había quedado pendiente en el Congreso sobre la "curación/recuperación *gay*". En otras palabras, a pesar de las políticas gubernamentales de inclusión social y la imagen internacional positiva del país hasta hace poco, presentado como un éxito, para el sentido común de la gente fue una construcción irreal.

---

1 Ver <www.bidwill.mpl.org.br/>.

Los manifestantes dirigieron sus demandas a las elites y los poderes del Estado específicos de cada país. Por esta razón, los movimientos brasileños difieren de las protestas de Europa, especialmente España, Portugal y Grecia. Los países del sur de Europa se encontraban en una profunda crisis económica causada por las políticas neoliberales de ajustes fiscales, control y monitoreo implementadas por la "troika" (FMI + Banco Central Europeo + Comisión Europea), pérdida de derechos sociales, desempleo, bajos salarios y despido de empleados públicos. Las protestas brasileñas son aún más diferentes de los levantamientos de la Primavera Árabe, debido al autoritarismo y al férreo control social que predomina en la mayoría de esos países y a la relación entre política y religión vía Islam. Por último, las protestas nacionales brasileñas difieren de *Occupy Wall Street* no solo porque adoptaron diferentes formas de acción, sino porque tenían, en primer lugar, una demanda específica: contra el aumento de la tarifa de transporte público.

El movimiento brasileño de junio de 2013 ocupa un territorio concreto, pero no por las marchas y las barricadas tácticas que fueron utilizadas luego, en actos posteriores a las manifestaciones de junio, de camioneros, mensajeros, especialmente en el Día Nacional (7/11/2013), organizadas por la CUT, el MST, UNE y los movimientos por vivienda que reúnen a unas 105 mil personas en el país. Ese día el MPL/SP optó por apoyar las manifestaciones referentes al sistema de transporte subterráneo, pero no todas las manifestaciones, que consideraron como una agenda muy amplia y burocratizada, y se centró mayormente en los trabajadores.

Los colectivos que participaron en las manifestaciones de junio están inspirados en diversas fuentes, según la pertenencia de cada grupo. Rechazaron las organizaciones verticales con liderazgos centralizados y los participantes no estaban motivados por una ideología única. Algunos manifestantes estaban inspirados en las enseñanzas de la lucha contra el capital y las formas de control y dominación del capitalismo contemporáneo, en la búsqueda de emancipación. El anarquismo y las agrupaciones de socialismo libertario fueron influyentes en las protestas por basarse en la solidaridad, la libertad de los individuos, la autogestión y contra la represión policial. Incluso, hay un nuevo humanismo en algunas de las acciones, expresadas a través de visiones holísticas y de un comunitarismo que critica la sociedad de consumo, el individualismo y la violencia criminal y el abuso de drogas (Gohn, 2012a, 2012b).

Los políticos y los funcionarios de gobierno fueron sorprendidos por las masivas manifestaciones de junio de 2013. Luego del impacto inicial, el Gobierno Federal llegó a crear una nueva agenda para

responder a la ola de movilización social. Esto demuestra la victoria y la conquista de las protestas de junio, mucho más allá de reducirse al reclamo por las tarifas de transporte público. Las protestas llegaron a los medios de comunicación internacionales en todo el mundo. Aún más importante, en términos de resultados de la política del movimiento, las protestas aceleraron la aprobación o rechazo de las propuestas sociales en el Congreso, que habían sido dejadas de lado durante años. Las manifestaciones también condujeron, en julio de 2013, a que la central sindical (*Central Única dos Trabalhadores*, *CUT*) y los movimientos populares rurales y urbanos reanudaran la movilización en las calles. Varios analistas han advertido sobre la debilidad organizativa del movimiento, su falta de dirección estratégica y liderazgo, y el peligro de ser manipulados por las fuerzas conservadoras de la derecha, como ha ocurrido en otros momentos históricos de tensión social en Brasil. Sin embargo, no hay que soslayar la capacidad de aprendizaje de los activistas, el poder de reflexión y la formación derivados de la experiencia de participación en el movimiento de protesta de junio. Muchos ciudadanos están en la primera fase del bautismo en la política brasileña. Otros participantes de la protesta de junio están definiendo los futuros objetivos de movimiento dentro de los parámetros de los valores en los que creen. Es demasiado pronto para detectar otra gran ola de protestas, resultantes de las movilizaciones de junio de 2013. En el proceso puede subyacer un nuevo ciclo de protesta emergente (Badiou, 2012).

CONCLUSIONES

Un nuevo momento y modelo han surgido en la trayectoria de asociativismo de América Latina. Algunos movimientos sociales recobraron visibilidad y un papel central como actores que impulsan el cambio social. Los movimientos también experimentaron cambios considerables, con transformaciones en sus identidades e incorporan otras dimensiones de pensamiento y acción sociales. Los actores colectivos modificaron sus proyectos políticos. Pero como hay muchos proyectos que son heterogéneos, algunas de sus agendas se cayeron, se extraviaron o redefinieron su identidad, ideas y puntos de vista básicos, transfigurando el proyecto original y la cultura política vigente. Algunos se redefinieron a partir de la presencia de otros actores sociales. Otros aprovecharon el momento y se conectaron con las posibilidades ofrecidas por la globalización: económica (que genera resistencia y protestas) y cultural (que genera nuevas sociabilidades, nuevas interacciones y el aprendizaje basado en la pedagogía del ejemplo –aprendizaje a través de la observación– en los principales eventos transnacionales o a través de conexiones vía internet). El per-

fil de los participantes viró de militantes a activistas. Las marchas se volvieron el modelo básico de protesta (Negri y Cocco, 2005).

El contexto actual de los movimientos sociales ha cambiado, con el predominio de las marchas organizadas y las ocupaciones organizadas en línea a través de las redes sociales, pero que rechazan la política tradicional. Estos movimientos son diferentes de las revueltas de los años 60, que constituyeron una gran revolución cultural con participación política. También difieren de los que se produjeron en los años 70 y 80, que mostraron resistencia a los regímenes militares. En ese momento, los movimientos sociales tenían esencialmente un carácter sociopolítico, al ser instrumentos de movilización y organización popular. Incluso, son diferentes de los movimientos de los años 90 y 2000, en los que prevalecieron las prácticas institucionalizadas de las organizaciones sociales. La evolución económica y política de estas últimas décadas, con el ajuste fiscal y la globalización, ha producido una generación de ciudadanos, en especial los jóvenes, excluidos por la pobreza y por las nuevas reglas de acceso al mercado laboral.

Nuestros análisis resaltan el carácter educativo de las acciones colectivas, organizadas en forma de movimientos sociales. La ampliación de este escenario asociativo más allá de la sociedad civil fue posibilitada por el ingreso a las nuevas esferas públicas, como es el caso de los consejos consultivos nacionales y las conferencias, y la aparición de nuevas formas de asociativismo que ahora funcionan esencialmente en redes. El Estado transformó sus relaciones con la sociedad civil organizada, favoreciendo las políticas públicas participativas, muchas de ellas coordinadas por, o con la participación de, ex dirigentes de los movimientos sociales (especialmente en los casos de Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay y Bolivia). La búsqueda de prácticas de institucionalización, que antes eran autónomas, se convirtió en una constante. Un nuevo marco de regulación oficial hizo posible la creación de innovaciones pródigas en el campo de la gestión democrática. De estas prácticas estatales surgió un escenario contradictorio, en el que las entidades que buscan la mera integración de los excluidos a través de la participación comunitaria exclusivamente en políticas sociales compensatorias cohabitan con movimientos, redes y foros sociales que buscan la transformación social por medio de cambios en el modelo de desarrollo que predomina en el país, inspirados por un nuevo modelo civilizatorio, donde pueda desplegarse el ejercicio de la ciudadanía, la ética, la justicia y la igualdad social. Concluimos con una advertencia de Rancière que, cuando critica las formas de participación no emancipatorias creadas exclusivamente para establecer consenso y control, establece que, en estos casos, la

participación política se confunde con consenso y la política deja de ser "la reivindicación de la parte de los que no tienen parte, para [ser] una intervención de expedientes" (Rancière, 1995).

BIBLIOGRAFÍA

Badiou, A. 2012 *El despertar de la historia* (Madrid: Clave Editorial).

Baraldo, N. et al. 2006 *Mendoza '70 tierra del sol y de luchas populares* (Mendoza: M. Suárez Ed.).

Castells, M. 1999 *A sociedade em rede* (São Paulo: Paz e Terra).

Danet, N. y Bardeau F. 2011 *Anonymous: Peuvent-ils Changer le Monde?* (Paris: FYP Editions).

Dávalos, P. 2005 "Movimientos indígenas en América Latina: el derecho a la palabra" en Dávalos, P. (comp.) *Pueblos indígenas, Estado y democracia* (Buenos Aires: CLACSO) pp. 17-34.

Dávalos, P. 2012 "Los movimientos sociales en el posneoliberalismo: de la resistencia a la esperanza" en *CETRI—Centre Tricontinental*. En <http://www.cetri.be.> Acceso 6 de abril de 2012.

De Sousa Santos, B. 2006 *A gramática do tempo. Para uma nova cultura política* (São Paulo: Cortez).

Della Porta, D. y Tarrow, S. (eds.) 2005 *Transnational protest and global activism* (Londres: Rowman & Littlefield).

Di Marco, G. y Palomino, H. 2004 *Reflexiones sobre los movimientos sociales en la Argentina* (Buenos Aires: UNSAM).

Farro, A. y Thaler, H. 2007 *Planetary Culture and Protest* (Roma: Anti-Globalization to Alter-Global Movements).

Gohn, M. G. 2011 *Movimentos e lutas sociais na História do Brasil* (São Paulo: Loyola) 6° Edición.

Gohn, M. G. 2012a *Novas teorias dos movimentos sociais* (São Paulo: Loyola) 4° Edición.

Gohn, M. G. 2012b *Movimentos sociais e redes de mobilizações civis no Brasil contemporâneo* (Petrópolis: Vozes) 5° Edición.

Gohn, M. G. 2012c *Teorias dos movimentos sociais. Paradigmas clássicos e contemporâneos* (São Paulo: Loyola) 10° Edición.

Gohn, M. G. 2012d *Sociologia dos movimentos sociais* (São Paulo: Cortez).

Gohn, M. G. 2013 *Movimentos sociais e redes de mobilizações civis no Brasil contemporâneo* (Petrópolis: Vozes) 7° Edición.

Gohn, M. G. 2015 *Manifestações de Junho de 2013 no Brasil e Praça dos Indignados no Mundo* (Petrópolis: Vozes) 2° Edición.

Hessel, S. 2011 *Indignai-vos!* (Lisboa: Objectiva) 3° Edición.

Levy, B. y Gianatelli, N. (comps.) 2008 *La política em movimiento-identidades y experiências de organización em América Latina* (Buenos Aires: CLACSO).

Longo, R. et al. 2008 *Triple Fronteira: resistências populares a la recolonización del continente* (Buenos Aires: América Libre).

Marthoz, J. P. et al. 2007 *Ou va l´Amérique Latine? –Tour d´horizon d´un continent en pleine mutation* (Bruselas: GRIP / Ed. Complexe).

Mirza, C. A. 2006 *Movimientos sociales y partidos políticos en América Latina* (Buenos Aires: CLACSO).

Negri, A. y Cocco, G. 2005 *GlobAL: Biopoder e luta em uma América Latina Globalizada* (São Paulo: Record).

Observatorio Social de América Latina (OSAL) 2007 "Movimientos sociales: nuevas realidades, nuevos desafíos" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 21.

Pleyers, G. 2010 *Alter-Globalization. Becoming actors in the global age*. (Cambridge: Polity).

Quijano, A. 2004 "El laberinto de América Latina: ¿hay otras salidas?" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Vol. 5, N° 13.

Ranciére, J. 1995 *Políticas da escrita* (São Paulo: Ed. 34).

Sampedro, J. L. et al. 2011 *Reacciona* (Madrid: Santillana / Aguilar).

Seoane, J. (org.) 2003 *Movimientos sociales y conflicto en América Latina* (Buenos Aires: CLACSO / OSAL).

Spivak, G. C. 2008 "Estudios de la subalternidad" en Spivak, G. C. et al. *Estudios postcoloniales. Ensayos fundamentales* (Madrid: Queimadas Graficas).

Svampa, M. 2008 *Cambio de época. Movimientos sociales y poder político* (Buenos Aires: CLACSO / Siglo XXI).

Tapia, L. 2009 "Movimientos sociales, movimientos societales y los no lugares de la política" en *Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano* (Buenos Aires: CLACSO) N° 11.

Touraine, A. 1984 *Le retour de l'acteur* (Paris: Fayard).

Touraine, A. 1997 *¿Podremos vivir juntos?* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).

Touraine, A. 2005 *Un nouveau paradigme* (Paris: Fayard).

Vitullo, G. 2007 *Teorias da democratização e democracia na Argentina Contemporânea* (Porto Alegre: Ed. Sulina).

Wallerstein, I. et al. 2012 *Occupy. Movimentos de protestos que tomaram as ruas* (São Paulo: Boitempo).

Zibas, D. 2008 "A revolta dos pingüins e o novo pacto educacional chileno" en *Revista Brasileira de Educação*, *13*(38): 199-220.

CÓMO CITAR ESTA PUBLICACIÓN:
Gohn, Maria da Gloria. 2017. "Los movimientos sociales brasileños de la última década" Pp. 621-640 en Paul Almeida y Allen Cordero Ulate, Eds., *Movimientos Sociales en América Latina: Perspectivas, Tendencias y Casos*. Buenos Aires: CLACSO.

26

Maria de Jesus Mora, Alejandro Zermeño,
Rodolfo Rodriguez y Paul Almeida*

EXCLUSIÓN Y MOVIMIENTOS SOCIALES EN LOS ESTADOS UNIDOS**

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se estudian los movimientos sociales que luchan por la justicia social, racial, económica y ambiental en los Estados Unidos. El conocimiento sobre movimientos sociales define al campo como enfocado en los actores colectivos excluidos, que luchan por derechos, recursos y poder (Jenkins, 1985; McAdam, 1999; Piven, 2006; Tarrow, 2011). En este ensayo retomamos este tema originario en la investigación de la acción colectiva, al resaltar las principales formas de exclusión que conducen a la movilización popular a gran escala en Estados Unidos contemporáneo. La exclusión es, con frecuencia, el punto de partida para la formación del movimiento social, aunque una indagación más específica de las estructuras institucionales que generan divisiones sociales contribuye a nuestra comprensión de la probabilidad de la aparición de resistencia colectiva. En este capítulo realizamos una clasificación más precisa de la exclusión (legal, ambiental, económica y cultural) y de las respuestas consiguientes de los movimiento sociales.

* University of California, Merced, EEUU.

** Traducción de Ana Steinberg, Eugenia Cervio y Sara Medina.

EXCLUSIÓN Y MOVIMIENTOS SOCIALES

Mientras que se ha prestado mucha atención a las condiciones positivas de oportunidades políticas que estimularon la irrupción del movimiento social entre los años 60 y 90 (McAdam, 1996; Almeida y Stearns, 1998; Meyer, 2004; Tarrow, 2011), en la época contemporánea las condiciones cada vez más negativas, también parecen guiar la acción colectiva, o lo que se conoce como amenazas en el ámbito de la política (Tilly, 1978; Goldstone y Tilly, 2001; Van Dyke and Soule 2002; Almeida, 2003). Aunque los grupos sociales marginados se benefician con las oportunidades políticas fundamentales de acceso institucional, la disminución de la represión, los conflictos en sectores de la elite y una señalización positiva operada desde el Estado; muchas de las movilizaciones más grandes e intensas en las últimas tres décadas se han debido a temas y políticas de *exclusión*. De hecho, una de las mayores movilizaciones de la historia de Estados Unidos (con más de 4 millones de participantes) tuvo lugar el 21 de enero de 2017 ante la amenaza de la nueva gestión de Trump de debilitar los derechos de las mujeres, de los inmigrantes, de las minorías étnicas, de los discapacitados y del medio ambiente. En este ensayo revisitamos los estudios de los principales movimientos en los Estados Unidos que fueron impulsados por múltiples formas de exclusión, como la exclusión legal, ambiental, económica y cultural.

La exclusión social y la agudización de los niveles de desigualdad social son características comunes de las sociedades capitalistas modernas y más aún del siglo XXI (Picketty, 2014; Chetty et al., 2016). Los derechos de acceso al Estado del bienestar (Marshall, 1950), que históricamente han implicado una ardua lucha por parte de las minorías étnicas y grupos de inmigrantes para lograrlos (Nakano Glenn, 2004; Quadagno, 1994; Reese, 2005; Fox, 2012), también están amenazados y se erosionaron en las últimas décadas (Somers, 2008; Barker y Lavalette, 2015). Al mismo tiempo, las estructuras de trabajo son cada vez más precarias con una amplia gama de regímenes de flexibilidad laboral implementados por empleadores y gobiernos, situando a más personas en la categoría de subempleo, con la correspondiente pérdida de beneficios relacionados con el empleo estable, tales como seguro social y licencia por enfermedad (Standing, 2011; Kallenberg, 2012). En el caso del destacado investigador de FLACSO, Juan Pablo Pérez Sáinz, la exclusión social ha sido conceptualizada a partir de la exclusión que se genera en el propio mercado (mercados básicos) donde predominan dos campos que serían los dos espacios fundamentales donde se origina la exclusión; el primero que tiene que ver con la explotación de los trabadores y el segundo con el acaparamiento de oportunidades de acumulación (Pérez Sáinz JP, 2014).

En el marco de estas circunstancias relativas a la generación y reproducción de la exclusión una cuestión que deviene apremiante para el conocimiento sobre el movimiento social se centra en las condiciones por las cuales la exclusión social lleva a la resistencia y a la movilización colectiva generalizada. Un contexto particular que estimula la resistencia colectiva a la exclusión social incluye las percepciones del aumento de las pérdidas y la interrupción de las rutinas diarias (Snow et al., 1998). Los reclamos son las dificultades experimentadas durante largos períodos por los grupos subalternos. Las amenazas actúan como nuevas condiciones negativas que, o exacerban los reclamos existentes, o crean otros nuevos (Almeida, 2018; en prensa). Para que las amenazas generen resistencia popular y acción colectiva, se deben cumplir una serie de condiciones. Por ejemplo, la amenaza debe ser experimentada colectivamente en algún tipo de configuración grupal (Snow y Soule 2009). Los individuos y los grupos que viven en circunstancias sociales similares tienen más probabilidades de entender las amenazas de la misma manera. Cuando los grupos en situaciones similares están bajo amenaza, el potencial y la magnitud de la protesta colectiva aumenta si las personas ya están integradas en organizaciones y comunidades, debido a que la solidaridad es mayor y la comunicación fluye rápidamente (Gould, 1995).

Dadas las condiciones anteriores, esperamos observar mucha más movilización pues las nuevas amenazas se cimentan en las desigualdades y la exclusión social ya existentes. En especial, este es el caso de los grupos amenazados que viven bajo circunstancias similares y ya están en comunicación uno con el otro y al mismo tiempo han establecido relaciones de apoyo mutuo dentro de las organizaciones comunitarias (Gould, 1995). Cuando la exclusión se despliega de esta manera, es mucho más fácil conseguir una conciencia de oposición y preparar a las comunidades para la movilización del tipo movimiento social. Por el contrario, es mucho más difícil organizar y cooperar en condiciones generalizadas de desigualdad, cuando no se comparte un sentido de destino común, las circunstancias sociales similares son nimias o nulas y las solidaridades preexistentes son débiles (Martín-Baró, 2015).

Un tema unificador para muchos de los movimientos sociales más grandes en Estados Unidos contemporáneo se centra en la *exclusión* de los derechos de las mujeres y población LGBT, así como exclusión de los derechos de los inmigrantes de clase trabajadora, y exclusión en la forma de discriminación racial. Diversas formas de exclusión actúan como el incentivo principal para lanzar campañas de acción colectiva. En la siguiente sección, hacemos una revisión de los estudios existentes sobre los tipos de exclusión que han generado

la actividad del movimiento social a gran escala en las últimas décadas. Se presta especial atención a la investigación sobre la exclusión legal, ambiental, económica y cultural. Reconocemos que estas formas de exclusión se superponen y, a menudo, actúan simultáneamente. Además reconocemos que nuestra clasificación, en términos de las categorías de exclusión social, de movilización de los movimientos populares de resistencia, no es exhaustiva.

EXCLUSIÓN LEGAL

La exclusión legal impulsa la actividad del movimiento social cuando a los grupos se les niega el acceso a los derechos, la protección de las instituciones gubernamentales y la igualdad de trato ante la ley. Cuando estas condiciones afectan a una gran cantidad de personas, hay mayor probabilidad de respuesta colectiva. Tales exclusiones han jugado un papel importante en la primera y segunda ola del feminismo en los Estados Unidos (Staggenborg y Taylor, 2005; McCammon, 2012; Van Dyke 2017). Dos ejemplos destacados de exclusión legal en las luchas recientes del movimiento social en los Estados Unidos incluyen los derechos de los inmigrantes y la campaña Black Lives Matter.

DERECHOS DE LOS INMIGRANTES

Cuando los gobiernos excluyen a los inmigrantes de protecciones legales, es posible que se genere actividad del movimiento social. Como sostiene Nakano Glenn (2002: 1), "…la ciudadanía ha sido utilizada para trazar los límites entre aquellos a los que se incluye como miembros de la comunidad y merecen respeto, protección y garantías legales, y los que son excluidos y, por lo tanto, no gozan de reconocimiento ni derechos". Los inmigrantes a menudo están expuestos a la violencia legal y la discriminación persistente, y luchan por superar estas condiciones (Cacho, 2012; Menjivar y Abrego, 2012; Golash-Boza, 2015; Dreby, 2015; Sampaio 2015). El movimiento por los derechos de los inmigrantes en los Estados Unidos ha luchado por un reconocimiento de la ciudadanía para los inmigrantes a nivel nacional y local (Milkman y Terriquez, 2012). Además de los reclamos explícitos por los derechos de ciudadanía, los indocumentados continúan movilizándose debido a la exclusión de los servicios públicos y sociales básicos, como salud, educación y beneficios relacionados con el trabajo estable. Muchos inmigrantes indocumentados llegan a Estados Unidos con el deseo de mejorar su situación económica, pero la exclusión a mejores oportunidades en el mercado laboral, históricamente, ha arrojado a los trabajadores inmigrantes a un estado precario (Gleeson, 2015). Para los trabajadores inmigrantes es riesgoso quejarse contra las violaciones en el lugar de trabajo, debido al duro

control migratorio y la amenaza de deportación. Los inmigrantes de clase trabajadora que enfrentan estas exclusiones legales continúan motivados por participar en campañas de acción colectiva, especialmente cuando se suman aliados en solidaridad tales como iglesias, estaciones de radio y ONG (Mora, 2016).

La exclusión de servicios y protecciones legales ha llevado a algunas de las mayores manifestaciones de protesta de las últimas décadas. De hecho, durante la primavera de 2006 los inmigrantes y sus aliados lanzaron las movilizaciones por los derechos de inmigrantes más grandes en la historia de los Estados Unidos (Martinez, 2008). Estas protestas masivas fueron impulsadas por la política de exclusión implementada en diciembre de 2005, en el Proyecto de Ley H.R. 4.437 patrocinado por la Cámara de Representantes controlada por los Republicanos. Esta legislación antiinmigrantes fue titulada como "Ley de Protección Fronteriza, Antiterrorismo y Control de Inmigración Ilegal, 2005". El Proyecto de Ley pretendía criminalizar a las personas indocumentadas y a cualquiera que les brindara asistencia humanitaria (Bloemraad y Trost, 2008; Barreto et al., 2009). El Proyecto HR 4.437 reunió a miles de personas en las calles en marchas y manifestaciones masivas, como se pudo observar en algunas de las ciudades más grandes de los Estados Unidos: Chicago, Los Ángeles, Dallas, Houston, Phoenix, San Jose, Washington D.C., y Nueva York. Solamente en Los Ángeles, casi un millón de personas marcharon por los derechos de los inmigrantes y contra la exclusión legal en dos manifestaciones masivas separadas (Pantoja, Menjivar y Magaña, 2008). En otras ciudades y pueblos de los Estados Unidos, se observaron las manifestaciones más grandes de todo tipo en su historia moderna.

El Proyecto H.R 4.437 fue una amenaza súbita y generalizada de exclusión para los inmigrantes en toda la nación, y para la población latina en particular, independientemente de su estatus de ciudadanía debido a la racialización de los inmigrantes (Bloemraad, Voss y Lee, 2011, Zepeda-Millán, 2014).- Esta forma de discriminación es relacionada a la acción colectiva en comunidades Latinas (Valdez 2011). La amenaza de separación de las familias y de deportación movilizó a la juventud contra la ley antiinmigrantes (Barberena, Jimenez y Young, 2014) debido a que se estima que 9 millones de personas residen en hogares de familias con estatus legal mixto (Zatz y Rodriguez, 2015). En varios estados, los jóvenes inmigrantes emplearon la táctica del 'paro' escolar, emulando las protestas ("*blowouts*") del movimiento estudiantil chicano de finales de los años 60 y principios de los 70 (Muñoz, 1989).

El Proyecto H.R. 4.437 representa una larga historia de política migratoria racializada y restrictiva en los Estados Unidos, tales como

la Ley de Exclusión de finales siglo XIX y principios del XX (Ngai, 2004), o el programa de deportación masiva de residentes mexicanos a principios de los años 50 (Almaguer, 2008). Más recientemente, en 1994, la Proposición 187 (una medida electoral del estado de California) también alarmó a ciudadanos y residentes, y generó protestas masivas por los derechos de los inmigrantes (Armbruster, Giron y Bonacich, 1995). La proposición 187 excluye a los inmigrantes de los beneficios sociales de la ciudadanía a la educación pública, los servicios sociales y la atención médica (Reese y Ramírez, 2002). En Los Ángeles, en octubre de 1994, unas pocas semanas antes de las elecciones estatales, una acción de masas contra la Proposición 187 se tradujo en una de las manifestaciones más grandes de los latinos desde el movimiento Moratoria Chicana de los años 70 (Oropeza, 2005) con 70 mil a 100 mil participantes estimados (Armbruster, Giron y Bonacich, 1995). Los grupos a favor de los inmigrantes (como la coalición California Unida, *California United*) también se movilizaron en todo el estado en contra de la Proposición (HoSang, 2010). De hecho, la medida se aprobó con el apoyo del 59 por ciento de los votantes de California, pero posteriormente fue invalidada por el Tribunal de Distrito de los EEUU, que dictaminó que la Proposición 187 era inconstitucional (Flores-Gonzalez y Gutierrez, 2010: 10).

La exclusión de la educación pública también ha impulsado la acción colectiva de los inmigrantes. Después de las movilizaciones por los derechos de los inmigrantes de 2006 se produjo un marcado aumento en el movimiento de jóvenes indocumentados, en particular de los que se identifican como "Soñadores" ("DREAMers"). Los Soñadores son los inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos durante su infancia por sus padres (la generación 1.5) (Chavez, 2013: 19). Estos jóvenes inmigrantes se organizaron contra la exclusión de la educación superior y las oportunidades laborales (Milkman y Terriquez, 2012). Aunque los Soñadores podrían optar por un camino legal a la ciudadanía bajo la Ley DREAM (*Development, Relief, and Education for Alien Minors*; Desarrollo, Alivio y Educación para Menores Extranjeros) (Milkman, 2014), sancionada en el Senado por primera vez en 2001, los jóvenes indocumentados continúan excluidos de un pasaje permanente a la ciudadanía debido a que la Ley DREAM permanece estancada en el Congreso (Zatz y Rodriguez, 2015). No obstante, a nivel estatal, la Ley DREAM de California se aprobó en 2011, y otros estados han aprobado versiones similares (Chavez 2013: 182). Los Soñadores y sus aliados se han movilizado activamente, mediante la difusión de sus narrativas personales (práctica tomada prestada de las/os activistas LGBT) de "salir del *closet*" como indocumentados y sin miedo durante las campañas de protes-

ta en 2010 y 2012, respectivamente (Swerts, 2015; Terriquez, 2015). Bloemraad, Silva y Voss (2016) informan que los jóvenes y niños de padres indocumentados deportados también se han movilizado a través de huelgas de hambre y del bloqueo de los vehículos que salen de los centros de detención.

La movilización de Los Soñadores también está impulsada por determinadas políticas de exclusión, tales como poder solicitar la matrícula estatal y otras formas de oportunidades de ayuda financiera, y en contra de las deportaciones (Milkman, 2014). Los jóvenes inmigrantes indocumentados sufren una exclusión legal continua. Como inmigrantes sin reconocimiento legal pueden asistir a la escuela, no se les permitió tener empleo formal pero hasta 2012 cuando el Gobierno de Obama implementó la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA). DACA garantiza la exención de la deportación y el permiso para trabajar legalmente en los Estados Unidos a aquellos Soñadores que califiquen a tal fin (Zatz y Rodriguez, 2015). Aun así, no todos los jóvenes indocumentados cumplen con los requisitos de DACA (hasta la fecha, se han registrado menos de un millón), como la mayoría de los jóvenes indocumentados que no asisten a la universidad o que no terminaron la escuela secundaria (Abrego y Gonzales, 2010). No obstante, aquellos que cumplen con los requisitos aún se encuentran en una situación legal precaria (Terriquez, 2015) y las solicitudes pueden ser onerosas para los grupos que ya sufren la exclusión económica. Últimamente, el movimiento de la juventud inmigrante ha organizado una nueva ronda de movilizaciones contra las posibles deportaciones en masa de la administración Trump, a través del movimiento Sanctuary Campus en docenas de universidades y de paros estudiantiles en las escuelas secundarias.

En resumen, los estudios recientes registran una resistencia de mayor escala y sostenida contra las políticas de exclusión legal hacia las poblaciones de inmigrantes en las últimas tres décadas que durante años anteriores en la historia de los Estados Unidos. La literatura sugiere una infraestructura organizativa mucho más dinámica y cohesionada de las comunidades de inmigrantes, capaz de organizar campañas defensivas, pero siempre una lucha con muchos obstáculos y posibilidades de la represión estatal.

BLACK LIVES MATTER

El movimiento por los derechos civiles afroestadounidenses (desde el final de los años 50 hasta 1965) posiblemente representa el movimiento social más grande y de mayor impacto del siglo XX en los Estados Unidos, y su principal objetivo se centró en la superación de la exclu-

sión legal y la segregación (Morris, 1984). La reacción conservadora al movimiento hacia finales de los años 60 (McAdam and Kloos 2014) propició un aumento de la represión policial en muchas ciudades del país. El abuso policial y la falta de procesos legales, predominantemente en las comunidades afroestadounidenses, derivaron en brotes de acción colectiva más radicales e, incluso, disturbios urbanos (Feagin y Hahn, 1973; Perez, Berg y Myers, 2003; Schneider, 2014) y la propagación de los movimientos de las Panteras Negras (*Black Panthers*) con oficinas del partido en más de 68 ciudades hacia 1970 (Davenport 2010; Bloom y Martin, 2013).

La exclusión legal y el racismo institucionalizado bajo la forma de la falta de igualdad de protección ante la Constitución también han llevado al resurgimiento de los movimientos en comunidades de color urbanos (Flores and Cossyleon 2017). Black Lives Matter (BLM; las vidas de los afroestadounidenses importan) fue creado por mujeres afroestadounidenses a raíz del asesinato del adolescente afroestadounidense de 17 años Trayvan Martin, en 2013 (Rickford, 2016). Entre 2014 y 2016, el movimiento BLM se expandió rápidamente y cobró fuerza con la propagación de noticias referentes a abusos policiales y otros actos de injusticia social dirigidos contra las comunidades urbanas marginadas en Ferguson, Charlotte, Baton Rouge, Minneapolis, Nueva York y Baltimore (y muchas mas). Según Embrick (2015), el uso de fuerza letal contra los cuerpos negros y marrones no solo resalta el desprecio por la vida humana, sino también el sometimiento continuo y la exclusión de las comunidades afroestadounidenses de la igualdad de trato legal, en comparación con los blancos no hispanos.

El número de asesinatos de personas de las comunidades de color a manos de las fuerzas de seguridad ha aumentado desde 2014.[1] Muchos de estos incidentes no fueron imputados, dejando un sentimiento común de impunidad y exclusión legal en las comunidades donde ocurrieron las muertes. Incluso mientras protestan, las comunidades negras están expuestas a la vigilancia del Estado. Davenport, Soule y Armstrong (2011) en un estudio de 15 mil eventos de protesta hallaron que los policías fueron más propensos a vigilar y tomar medidas coercitivas en las protestas con participación afroestadounidense significativa que en las movilizaciones en las que predominaban los blancos. Además, la tendencia prolongada de encarcelamiento masivo desproporcionado y de vulnerabilidad económica bajo el neoliberalismo también motivan la acción colectiva afroestadounidense, al tiempo que el Estado intenta suprimir tales movimientos (Camp,

1 Ver <http://mappingpoliceviolence.org/>.

2016; Hill y Brewster, 2016). Con pocos precedentes de citaciones judiciales es probable que el movimiento BLM continúe impulsando la movilización, pues la campaña sigue activa en decenas de ciudades y en más de veinte estados. De hecho, se han documentado más de 1.900 acciones de protesta de BLM desde 2014.[2]

EXCLUSIÓN AMBIENTAL

La exclusión de un medio ambiente de buena calidad y de una vida saludable actúa como otra forma de menoscabo que impulsa campañas de movilización comunitaria (Szasz, 1994; Kubal, 1998). Desde principios del siglo XX, lugares como los basurales, los vertederos de residuos peligrosos, las incineradoras y las plantas de productos químicos han reducido significativamente la calidad ambiental de las comunidades de clase trabajadora y de las minorías de ingresos medios en Estados Unidos y, como resultado, siguen afectando el estado de salud de comunidades e individuos (Pais, Crowder y Downey, 2014; Kravitz-Wirtz et al., 2016). Estas circunstancias se denominan "injusticia ambiental" o "racismo ambiental" en la literatura sobre movimientos sociales (Bullard, 1990; Szasz y Meuser, 1997; Brulle y Pellow, 2006).

JUSTICIA AMBIENTAL

El desecho de tóxicos en "vertederos y la localización de usos no deseados de la tierra a nivel local (*locally unwanted land uses*, *LULUs*), históricamente, ha seguido el camino de menor resistencia, es decir, las comunidades negras y pobres han sido damnificadas desproporcionadamente por la carga de estos tipos de factores externos" (Bullard, 1990: 4). Las minorías de ingresos bajos y medios tienen una movilidad habitacional limitada debido a las barreras institucionales, y por lo tanto tienden a concentrarse en ambientes cuya calidad es baja (Taylor, 2014). En las comunidades de color urbanas, así como las tierras ancestrales de los pueblos indígenas norteamericanos (Native American), existen amenazas de contaminación para la salud pública que los sectores más privilegiados tuvieron el capital político para evitarlas (Bullard, 1994: xv).

En estas comunidades, un sentimiento de destino común ha permitido que las personas se organicen y movilicen en resistencia contra las instalaciones de tóxicos y las industrias contaminantes (Pulido, Kohl y Cotton, 2016). Como respuesta a la exclusión de la buena calidad ambiental, las campañas de base (llamadas movimien-

2 Ver <https://elephrame.com/textbook/BLM>.

to de justicia ambiental) se han extendido por todo Estados Unidos en cuestión de décadas (Bullard, 2005; Taylor, 2014). Algunas de las luchas han implicado la movilización masiva de comunidades enteras, como el caso del condado de Warren, en Carolina del Norte, donde a principios de los años 80 la población local inició una de las primeras grandes batallas contra el racismo ambiental al intentar bloquear el traslado de residuos tóxicos (suelos contaminados con bifenilos policlorados, PCB) a un vertedero cerca de una comunidad mayoritariamente afroestadounidense. La campaña incluyó marchas masivas y bloqueos de carreteras con cientos de detenciones (Edwards, 1995). Otros casos implicaron la movilización decidida de grupos más pequeños de residentes en las comunidades bajo amenazas a la salud pública. Al reconocer que la injusticia ambiental es un grave peligro para la salud pública, un número creciente de "grupos formados por personas de color, cuyas comunidades están amenazadas por las industrias contaminantes cercanas, se han organizado en redes potentes y coaliciones para enfrentar a las grandes corporaciones y dependencias gubernamentales que hubiesen convertido sus barrios en tierras baldías tóxicas" (Bullard, 2005: 2).

Según Bullard (2005: 7), hay cerca de "…media docena de centros y clínicas legales de justicia ambiental que han surgido en toda la nación, cuatro de estos centros están ubicados en colegios y universidades pertenecientes históricamente a la comunidad negra, o HBCU (*historically black colleges and universities*), tales como: Environmental Justice Resource Center (en Clark Atlanta University, en Atlanta, Georgia), Deep South Center for Environmental Justice (en Xavier University of Louisiana, en New Orleans), Thurgood Marshall Environmental Justice Legal Clinic (Texas Southern University, en Houston), y el Environmental Justice and Equity Institute (Florida A & M University, en Tallahassee)" (Bullard, 2005: 7). Además del "movimiento a medias"[3] (Morris, 1984) antes mencionado, se han formado varias federaciones de organizaciones comunitarias de justicia ambiental en los Estados Unidos. Estas incluyen a: Southwest Network for Environmental and Economic Justice (SNEEJ); Southwest Organizing Project (SWOP); Indigenous Environmental Network; Southern Organizing Committee for Economic and Social Justice; Asian Pacific Islander Environmental Network; y Environmental Justice and Health Alliance for Chemical Policy Reform, entre muchas otras (Almeida, 1998). Las coaliciones y federaciones de justicia ambiental pueden reunir recursos cuando estalla una crisis ambiental, tales

3 [N. de las T.] "*movement half-way houses*".

como lo ha sido el papel de la Red Ambiental Indígena (Indigenous Environmental Network) en la difusión de información y la coordinación de la acción colectiva contra la construcción de la tubería de un oleoducto en Dakota (*Dakota Access Pipeline*) y su amenaza a la Reserva Standing Rock de los pueblos indígenas en Dakota del Norte. Además del acceso a una infraestructura organizativa (Andrews, 2004; Almeida, 2012), las luchas por la justicia ambiental también han logrado apoyo a raíz de las alianzas con actores estatales (Stearns y Almeida, 2004). Por ejemplo, en Flint, Michigan (una ciudad con una población que es 65 por ciento negra y latina) una campaña de dos años (2014-2016) liderada por madres preocupadas y científicos ciudadanos locales logró cerrar una fuente de agua potable de la ciudad que era menos costosa porque estaba contaminada con plomo y otras toxinas que finalmente se acumulaban en los cuerpos de los jóvenes de la región. La campaña de protesta fue bastante eficaz, en gran medida debido a una alianza entre los movimientos de base y un oficial renegado de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) local que finalmente obligó a los funcionarios de salud pública a actuar ante una crisis de salud y ambiental cada vez más alarmante (Rosner y Markowitz, 2016).

EXCLUSIÓN ECONÓMICA

La marginación económica es otra forma dominante de exclusión que impulsa la actividad del movimiento social (Tilly, 1995; Van Dyke y Soule, 2002; Tilly y Wood 2010; Dodson, 2016). Una variedad de acciones de masas han tenido lugar en la última década, desde el movimiento por salarios dignos a las huelgas de los trabajadores del sector de servicios de comida rápida para reducir la explotación económica. En este capítulo nos centramos en el movimiento Occupy Wall Street y en las luchas de los trabajadores agrícolas.

OCCUPY WALL STREET

El movimiento Occupy Wall Street (OWS; Ocupar Wall Street) representa una de las mayores movilizaciones contra la exclusión económica en los Estados Unidos, en términos de alcance geográfico. Diversos grupos de personas ocuparon espacios públicos en varias ciudades y campus universitarios, contra la creciente desigualdad económica (Calhoun, 2013). El movimiento comenzó el 17 de septiembre de 2011, cuando varias personas ocuparon el Parque Zuccotti en Nueva York y protestaron contra los grandes bancos y servicios financieros representados por Wall Street (Castells, 2012: 162; Vasi y S. Suh, 2016). El movimiento se extendió rápidamente por los Estados Unidos. Los informes de los campamentos de protesta van de 750 a 2.500 espa-

cios ocupados (DeLuca, Lawson y Sun, 2012). Castells indica que la actividad de Occupy se produjo en más de mil ciudades y pueblos estadounidenses en los 50 estados (Castells, 2012: 165). Además de campamentos en los centros de las ciudades y universidades, el movimiento también realizó marchas masivas e impulsó huelgas generales en Oakland y Nueva York, con apoyo sindical (en especial de los trabajadores del sector público). Así, Occupy se difundió rápidamente y representó una protesta impresionante contra la exclusión económica, aunque también se desvaneció rápido después de solo tres meses de movilización.

La juventud y "la generación del milenio" fueron el núcleo del movimiento junto con otros grupos desplazados de la clase media, dado que la Gran Recesión financiera de 2008 aumentó el desempleo, el subempleo y la desigualdad (Milkman 2014). Otras preocupaciones del movimiento incluyen: las deudas de los estudiantes, las condiciones laborales, el *fracking*, las políticas energéticas y la falta de regulación financiera (Calhoun, 2013). No obstante, objetivo principal de Occupy se centró en la exclusión económica generada por la creciente desigualdad de ingresos (con el mantra guía de la brecha del "99 por ciento contra el uno por ciento"), ya que las clases media y trabajadora continúan padeciendo la reducción de las oportunidades económicas en un período de mayor globalización neoliberal (Milkman 2014, Castells, 2012). De hecho, hay una grieta económica aún mayor entre los hogares blancos y los hogares latinos y negros desde la Gran Recesión, según la cual "…el hogar negro medio posee solo el 6 por ciento de la riqueza poseída por el hogar blanco medio, y el hogar latino medio posee solo el 8 por ciento de la riqueza en manos de la familia blanca media (Sullivan et al., 2017).

TRABAJADORES RURALES

Los trabajadores agrícolas y sus familias son uno de los grupos más marginados y excluidos económicamente en los Estados Unidos. Luchas colectivas de los trabajadores rurales cuentan con una larga historia en los Estados Unidos, desde las revueltas de esclavos y la Rebelión del Whisky a las movilizaciones de los aparceros sureños y los movimientos populistas de finales siglo XIX y principios del XX (Schwartz, 1976). En la época contemporánea, los trabajadores agrícolas registran bajas tasas de logro educativo y al mismo tiempo los niveles de ingresos más bajos del país (Garcia, 2012; Ganz, 2009; Garlaza, 1970; Rothenberg, 2000; Sifuentez, 2016). Los trabajadores agrícolas también enfrentan riesgos laborales peligrosos, tales como el agotamiento por calor, los accidentes de trabajo y la intoxicación por plaguicidas, entre muchos otros daños (Center for Disease Con-

trol and Prevention, 2015; Wright, 1992). De hecho, Barajas (2009) caracteriza el uso de mano de obra indígena mexicana en las granjas, plantaciones, y haciendas de América del Norte como un sistema de "colonialismo interactivo". Este sistema opresivo de condiciones laborales riesgosas y bajos salarios se institucionalizó con la Ley Nacional de Relaciones Laborales (*National Labor Relations Act*, *NLRA*) en 1935, luego de una enmienda del Senador Robert F. Wagner, lo que resultó en un acto de exclusión histórica de los trabajadores agrícolas de un componente fundamental de la legislación del New Deal. La Ley NLRA garantiza protecciones para la fuerza de trabajo, siempre que no sea agrícola, ante despedidos y por organizar, apoyar o unirse a un sindicato; mientras que a los trabajadores rurales se les siguen negando estos derechos federales básicos en pleno siglo XXI. A pesar de la promulgación de la Ley de Wagner, los jornaleros agrícolas y sus aliados incitaron a la movilización rural en tres oleadas entre mediados de los años 30 y principios de los 60, pero hasta finales de los 60 no lograron el éxito sostenido (Ganz, 2009).

Jenkins (1985: xi) sostiene que de los diversos grupos excluidos de los años 60 el movimiento de los trabajadores agrícolas "…fue uno de los más exitosos en sobrepasar las barreras de la pobreza, la desorganización social y la herencia de subordinación cultural y de exclusión política". Hacia finales de los 60 y principios de los 70, en las principales regiones agrícolas de California, los trabajadores rurales habían desarrollado con éxito asociaciones, conocimiento y redes para organizarse mejor por los derechos económicos –principalmente, a través de la creación del sindicato de Trabajadores Agrícolas Unidos (*United Farm Workers*, *UFW*). Según Martín (2004) los "años dorados" para el movimiento de los trabajadores agrícolas en los Estados Unidos fue entre los años 60 y principios de los 80. Durante este período los trabajadores agrícolas, especialmente en California, lograron organizar boicots, huelgas, piquetes y marchas a nivel nacional (Pawel, 2009, Bardacke, 2011; Ganz, 2009). Estas acciones de masas contra la exclusión económica resultaron en la visibilidad nacional e internacional de las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas y el reconocimiento legal del primer sindicato agrario respaldado (UFW) que fue capaz de conquistar los derechos de negociación colectiva (Garcia 2012). Además, la actividad del movimiento social de los trabajadores rurales y sus aliados condujo a que el estado de California implementara la primera ley laboral para proteger a los trabajadores agrícolas: la Ley de Relaciones Laborales Agrarias (*California Agricultural Labor Relations Act*, *ALRA*) e instituyera un Consejo para supervisar las violaciones a los derechos del trabajador agrario (Ganz, 2009; Garcia, 2012). La Ley ALRA (promulgada en 1975) concedió a los trabajado-

res agrícolas lo que la Ley (NLRB) de 1935 les había negado: derecho a agremiarse y a negociar con los empleadores (Martin, 2004).

Desafortunadamente, antes de que pasara un año de la implementación de la Ley (ALRA), el organismo que supervisaba su aplicación, el Consejo Relaciones Laborales Agrarias de California (*California Agricultural Labor Relation Board*, *ALRB*), cerró temporalmente debido a problemas de financiación y a las presiones de las elites agropecuarias; excluyendo, una vez más, a los trabajadores rurales de la protección legal y económica (Bardacke, 2011; Garcia, 2012). Durante este tiempo, el sindicato (UFW) todavía era un actor importante en la política estatal, y continuó presionando colectivamente al estado para que volviera a abrir e invirtiera en el Consejo (ALRB). Eventualmente, el Consejo (ALRB) reinició sus funciones cuando los intereses agro-industriales y hacendados reorientaron sus esfuerzos para derrotar con éxito la Proposición 14 en 1976, a favor del sindicalismo rural (Bardacke, 2011; Martin, 2004).

El éxito de los trabajadores agrícolas al ganar disputas en el ámbito laboral finalmente llevó a un verdadero retroceso en California. Con la elección del gobernador republicano George Deukmejian (1983-1991), el ALRB sería acusado de convertirse en "un brazo de los agro-elites" (Martin, 2004). No obstante, la organización de los trabajadores agrícolas continuó durante los años 90 y 2000, a pesar del debilitamiento de la UFW (causado asimismo por los conflictos internos de liderazgo y los cambios en la estrategia). De hecho, la movilización de la UFW con otros aliados legales y laborales por los salarios de los trabajadores rurales logró que el gobernador firmara una Ley (*California Assembly Bill 1066*) a finales de 2016, que garantiza el pago de horas extras a cientos de miles de trabajadores agrícolas. Otras actividades recientes de las organizaciones laborales se han centrado en el agotamiento por calor y en el envenenamiento por pesticidas en los campos, así como abogando por lograr la residencia legal para los trabajadores rurales sin papeles.

Más allá de California, la organización de los trabajadores agrícolas se ha desplegado en varias regiones en los Estados Unidos con bastiones en el noroeste del Pacífico (Sifuentez, 2016); la Región de los Grandes Lagos (Valdes, 1991); el medio oeste (Barger y Reza 1994); Florida; y el Valle del Río Grande de Texas. En muchos casos, estos esfuerzos de movilización emularon las técnicas de organización utilizadas en California y las desarrollaron para que se adecuen a sus situaciones particulares (Martin, 2004). Por ejemplo, los trabajadores agrícolas organizaron una marcha interestatal en los años 80 (de Ohio a New Jersey) para llamar la atención sobre la incapacidad del gigante corporativo Campbell de negociar colectivamente con los

trabajadores. Los trabajadores agrícolas del noroeste del Pacífico se organizaron a finales de los 80 para invalidar las leyes anti piquetes que vedaban los derechos de los trabajadores rurales a la libertad de expresión (Sifuentez, 2016). Sifuentez (2016) resalta cómo los trabajadores agrícolas en el noroeste del Pacífico han seguido organizándose y más recientemente, en 2002, obtuvieron importantes contratos con los productores cuando los trabajadores rurales pudieron firmar contratos con tres cooperativas productoras de *North Pacific Canners and Packers Cooperative* (*NORPAC*). Se han activado campañas campesinas similares contra la exclusión económica en: Ohio, Florida, New Jersey, Oregon, Washington, y Texas (Barger y Reza, 1994; Martin, 2003; Sifuentez, 2016).

EXCLUSIÓN CULTURAL

Las investigaciones recientes no solo han destacado la movilización en respuesta a la exclusión legal, ambiental y económica, sino también a la subordinación cultural. Al ser confrontados con cuestiones de "… racismo, discriminación y representaciones negativas de los grupos dominantes, las minorías étnicas han utilizado sus cosmovisiones ancestrales como una estrategia adaptativa para encaminarse hacia el logro y el sentido de valoración personal" (Harrison, 1990: 354). Se están llevando a cabo numerosas luchas colectivas contemporáneas para superar la exclusión cultural y la marginación (Kubal, 2008).

MOVIMIENTOS CONTRA LA EXCLUSIÓN CULTURAL

Uno de los objetivos de los movimientos indígenas contemporáneos es preservar la medicina ancestral y las tradiciones culturales para combatir la adversidad derivada de una larga historia de colonialismo y exclusión cultural (Kirmayer, Simpson y Cargo, 2003). Por ejemplo, Vásquez y Wetzel (2009: 1569) encontraron que, "…los indios mexicano americanos y potawatomi invocan las raíces, valores y herramientas culturales para describir sus tradiciones y dar cuenta del valor social de su grupo étnicol". Durante el período de los Derechos Civiles de los años 60 y 70, los movimientos de Chicanas/os abrazaron una identidad mexicana que ponderó las raíces indígenas, restando importancia a los lazos con la identidad y la cultura española (Rodríquez, 1998). En estas últimas décadas ha surgido una espiritualidad multi-indígena en la cual "…las prácticas asociadas con grupos culturales específicos han sido ampliamente adoptadas y sirven como rituales de curación efectivos para los grupos y como símbolos de identidad compartida y afiliación" (Kirmayer, 2003: 20).

Los movimientos indígenas buscan la inclusión más allá de las barreras étnicas y apelan colectivamente a todo el mundo (McGaa,

1992). Como sostiene Gómez Quiñonez (2011: 68-69; citado en Serrano Najera, 2015: 20) "…ser indígena es la experiencia consciente de descender de nativos y de una cultura vivida e históricamente situada en las Américas; de una memoria histórica relacionada con la conciencia de pertenencia a un grupo indígena; y de un *ethos* que reconoce la explotación y la discriminación del pasado, presente y futuro". Como reacción a la exclusión cultural y la opresión, el proceso de los pueblos indígenas de volver a conectarse a, o recuperar, su cultura indígena (tradiciones, rituales y prácticas de sanación) es una forma de curación en sí misma, tanto a nivel individual como colectivo (Kirmayer, 2003). Un producto de esta reconexión cultural es la aparición de movimientos para superar la exclusión cultural. Por ejemplo, con el reconocimiento en los años 90 del Aniversario del Quinto Centenario de la llegada de Colón a las Américas, hubo una renovada ola de activismo cultural de los grupos indígenas nativos y latinos estadounidenses. Desde ese entonces, se han mantenido las concentraciones y marchas anti Colón, con eventos de protesta fundamentales que vigorizaron el movimiento en San Francisco, California en 1992 y la Marcha de los Latinos en Washington D.C. el 12 de octubre de 1996 (Kubal, 2008). Los movimientos anti Colón, han reformulado con éxito la conmemoración anual como Día de los Pueblos Indígenas y Día de la Raza (*ibíd.*).

En los últimos años, en las comunidades latinas de clase obrera en Los Ángeles, California hubo un aumento de los movimientos culturales indígenas –grupos, organizaciones y redes– que se centran en la enseñanza y preservación de la cultura y la historia indígenas mesoamericanas y norteamericanas. Estos grupos activan colectivamente marchas y protestas anuales, tales como la Marcha Emiliano Zapata, la Marcha por el Día de los Pueblos Indígenas, la Marcha por la Moratoria Chicana, entre otras manifestaciones significativas, para crear conciencia sobre las cuestiones culturales históricas y contemporáneas que afectan el bienestar de las comunidades indígenas. Los movimientos de resistencia realizan eventos ceremoniales colectivos, como la carrera sagrada de las cuatro direcciones (*Sacred Run of the Four Directions*) que se desarrolla en toda el área metropolitana de Los Ángeles una vez al año, con el propósito de llevar alivio y curación a las comunidades de color que soportan niveles desproporcionados de violencia social e injusticia cultural, así como para construir comunidad y ampliar las redes sociales indígenas. Los pueblos indígenas nativos y los latinos, tanto indígenas como no indígenas, viajan largas distancias para apoyar y participar en la carrera sagrada. Además, existen varios grupos de danza indígena tradicional (como la Danza Azteca y otros) que

enseñan valores culturales tradicionales, sistemas de creencias y prácticas espirituales. Incluso hay un resurgimiento de ceremonias colectivas y reuniones que se celebran durante todo el año en Los Ángeles, como la ceremonia anual de Cuauhtémoc, los *powwows* y las ceremonias de curación como temazcales (*sweatlodges*), círculos de tambor, o la ceremonia del oso de los pueblos indígenas de California (donde los nativos americanos y los latinos indígenas se reúnen colectivamente en solidaridad). Todos estos tipos de prácticas culturales representan formas de resistencia a la exclusión cultural. Actividades similares han sido reportado en San Francisco, California (DeLugan 2010).

La exposición a los conocimientos indígenas tradicionales, a su historia y prácticas culturales, contribuye al desarrollo personal de valores culturales específicos y sistemas de creencias que favorecen la revitalización étnica, el empoderamiento y la solidaridad entre los pueblos indígenas (Nagel, 1996). Más recientemente, una coalición multirracial llamada "Estudios Étnicos Ya" ("*Ethnic Studies Now*") impulsó a una exitosa campaña con un movimiento de dos años de duración (entre 2014 y 2016) para presionar al estado de California para implementar un currículo de estudios étnicos en todo el sistema de escuelas públicas del estado (Sánchez, 2015). El nuevo programa se implementará con la consulta de los programas de estudios étnicos existentes en los sistemas de universidades públicas del estado. Este tipo de programas de educación pública contra la exclusión cultural se originaron en las primeras luchas y movimientos culturales colectivos para promulgar los estudios étnicos en las universidades (Rojas, 2007; Armbruster-Sandoval, 2017). Este capital cultural de base indígena, descrito anteriormente en los múltiples movimientos, también puede usarse para impulsar las campañas del movimiento social contra la exclusión legal, ambiental y económica.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

Hemos resumido las principales formas de exclusión y los tipos de respuestas de los movimientos sociales correspondientes discutidos en la literatura. Hemos incluido algunos de los movimientos sociales más grandes y de mayor impacto de las últimas décadas en los Estados Unidos, que ilustran el poder de la exclusión como un catalizador para la acción colectiva de masas. Nuestro esquema de clasificación es una caracterización del "tipo ideal" de exclusión y las formas asociadas de movimientos de resistencia. Evidentemente, esta clasificación no es exhaustiva ni está exenta de solapamientos entre categorías. Por ejemplo, los trabajadores rurales agrícolas, más allá de las demandas económicas inmediatas, también luchan por los derechos

de ciudadanía y contra la intoxicación por pesticidas (es decir, contra la exclusión jurídica y ambiental). La marcha masiva del Día de la Raza (anti-"*Columbus Day*") en Washington D.C. en 1996 se centró principalmente en los derechos de los inmigrantes (es decir, en la exclusión cultural y legal). Además, las organizadoras de las convocatorias para la histórica Marcha de Mujeres contra la administración de Trump el 21 de enero de 2017 señalaron explícitamente la profusa exclusión de derechos por los que la campaña de protesta abogaba, que incluyen: derechos de las mujeres, derechos de los inmigrantes, derechos de las comunidades de color, justicia ambiental, derechos reproductivos, derechos LGBT, derechos de los discapacitados, derechos civiles y derechos de los trabajadores.

No obstante, hemos proporcionado una tipología de los estudios existentes sobre los movimientos y la exclusión, que puede contribuir a los futuros estudios sobre las condiciones negativas que conducen a algunas de las mayores movilizaciones del movimiento social de la época contemporánea. Tal tipología se puede utilizar como un recurso para ampliar la investigación sobre los movimientos de excluidos. También alentamos análisis más amplios que incorporen la relación entre las amenazas, las infraestructuras organizacionales y las diversas formas de exclusión en términos de movimientos persistentes frente al aumento de la marginación. Además, nuestra revisión enfatizó que muchas de las formas de exclusión, que llevan al surgimiento de movimientos sociales en los Estados Unidos, son impelidas por el racismo institucionalizado (Valdez, 2015; Bracey, 2016; Valdez y Golash-Boza 2017). Nuestro sondeo de estudios sobre movimientos sociales y exclusión recomienda un examen más detallado de la intersección entre racismo, exclusión y acción colectiva.

Reconocemos que nuestra revisión está lejos de ser completa. Otras formas importantes de exclusión por género, sexualidad, discapacidad, entre muchas otras que no se incluyeron, deberían asimismo incluirse en evaluaciones más abarcadoras de la literatura. Tal extensión de nuestra tipología e indagación en otras formas dominantes de exclusión harían necesaria más investigación teórica y empírica sobre las condiciones negativas que estimulan la movilización del movimiento social.

BIBLIOGRAFÍA

Abrego, L. J. & Gonzales, R. G. 2010 'Blocked paths, uncertain futures: The postsecondary education and labor market prospects of undocumented Latino youth' en *Journal of Education for Students Placed at Risk*, *15*(1-2): 144-157.

Almaguer, T. 2008 *Racial Fault Lines: The Historical Origins of White Supremacy in California* (Berkeley: University of California Press) Segunda edición.

Almeida, P. 1998 'The Network for Environmental and Economic Justice in the Southwest' en Faber, D. (ed.) *The Struggle for Ecological Democracy: Environmental Justice Movements in the United States* (Nueva York: Guilford) pp. 159-187

Almeida, P. 2012 'Subnational Opposition to Globalization' en *Social Forces*, *90*(4): 1.051-1.072.

Almeida, P. D. 2003 'Opportunity Organizations and Threat Induced Contention: Protest Waves in Authoritarian Settings' en *American Journal of Sociology*, *109*(2): 345-400.

Almeida, P. D. 2015 'The Role of Threats in Popular Mobilization in Central America' en Federico Rossi, M. & Von Bülow, Marisa (eds.) *Social Movement Dynamics: New Perspectives on Theory and Research from Latin America* (Londres: Ashgate) pp. 105-126.

Almeida, P. D. 2018 'The Role of Threats in Collective Action' en Snow, D.; Soule, S.; Kriesi, H. & McCammon, H. (eds.) *Wiley-Blackwell Companion to Social Movements* 2nd Edicion (Oxford: Blackwell) En prensa.

Almeida, P. D. & Brewster Stearns, Linda 1998 'Political Opportunities and Local Grassroots Environmental Movements' en *Social Problems*, *45*(1): 37-60.

Andrews, K. T. 2004 *Freedom is a Constant Struggle: The Mississippi Civil Rights Movement and its Legacy* (Chicago: University of Chicago Press).

Armbruster-Sandoval, R. 2017 *Starving for Justice: Hunger Strikes, Spectacular Speech, and the Struggle for Dignity* (Tucson: University of Arizona Press).

Armbruster, R.; Geron, K. & Bonacich, E. 1995 'The Assault on California's Latino Immigrants: The Politics of Proposition 187' en *International Journal of Urban and Regional Research*, *19*(4): 655-663.

Barajas, M. 2009 *The Xaripu community across borders: Labor Migration, Community, and Family*. (Notre Dame: University of Notre Dame Press).

Barberena, L.; Jiménez, H. & Young, M. P. 2014 '"It Just Happened": Telescoping Anxiety, Defiance, and Emergent Collective Behavior in the Student Walkouts of 2006' en *Social Problems*, *61*(1): 42-60.

Bardacke F. 2012 *Trampling Out the Vintage: Cesar Chavez and the Two Souls of the United Farm Workers* (Londres: Verso).

Barger, W. K. & Reza, E. M. 1994 *The farm labor movement in the Midwest: Social change and adaptation among migrant farmworkers* (Austin: University of Texas Press).

Barker, C. & Lavalette, M. 2014 'Welfare changes and social movements' en Della Porta, D. & Diani, M. (eds.) *Oxford Handbook on Social Movements* (Oxford: Oxford University Press) pp. 711-728.

Barreto M, A.; Manzano, S.; Ramirez, R. & Rim, K. 2009 'Mobilization, Participation, and Solidaridad, Latino Participation in the 2006 Immigration Protest Rallies' en *Urban Affairs Review*, *44*(5): 736-764.

Bloemraad, I.; Voss, K. & Lee, T. 2011 'The Immigration Rallies of 2006: What Were They, How Do We Understand Them, Where Do We Go?' en Voss K. & Bloemraad, I. (eds.) *Rallying for Immigrant Rights* (Berkeley: University of California Press) pp. 3-43.

Bloemraad, I. & Trost, Ch. 2008 'It's a Family Affair: Intergenerational Mobilization in the Spring 2006 Protests' en *American Behavioral Scientist*, *52*(4): 507-32.

Bloemraad, I.; Silva, F. & Voss, K. 2016 'Rights, Economics, or Family? Frame Resonance, Political Ideology, and the Immigrant Rights Movement' en *Social Forces*, *94*(4): 1.647-74.

Bloom, J. and Martin, W. 2013. *Black against Empire: The History and Politics of the Black Panther Party*. Berkeley: University of California Press.

Bracey, G. E. 2016 'Black Movements Need Black Theorizing: Exposing Implicit Whiteness in Political Process Theory' en *Sociological Focus*, *49*(1): 11-27.

Brulle, R. J. & Pellow, D. N. 2006 'Environmental justice: human health and environmental inequalities' en *Annual Review of Public Health*, *27*: 103-124.

Bullard, R. D. 1990 *Dumping in Dixie: Race, Class, and Environmental Quality* (Boulder: Westview).

Bullard, R. D. 1994 *Unequal Protection: Environmental Justice and Communities of Color* (San Francisco: Sierra Club).

Bullard, R. D. 2005 *The Quest for Environmental Justice: Human Rights and the Politics of Pollution* (San Francisco: Sierra Club.)

Cacho, L. M. 2012 *Social Death: Racialized Rightlessness and the Criminalization of the Unprotected* (Nueva York: NYU Press).

Calhoun, C. 2013 'Occupy Wall Street in perspective' en *The British Journal of Sociology*, *64*(1): 26-38.

Camp, J. T. 2016 *Incarcerating the Crisis: Freedom Struggles and the Rise of the Neoliberal State* (Berkeley: University of California Press).

Castells, M. 2012 *Networks of Outrage and Hope: Social movements in the Internet Age* (Cambridge: Polity Press).

Chavez, L. 2013 *The Latino threat: Constructing immigrants, citizens, and the nation* (Stanford: Stanford University Press).

Chetty, R. et al. 2016 'The Fading American Dream: Trends in Absolute Income Mobility since 1940' Working Paper, Stanford University.

Davenport, Ch. 2010. *Media Bias, Perspective, and State Repression: The Black Panther Party.* Cambridge: Cambridge University Press.

Davenport, C.; Soule, S. & Armstrong, D. 2011 'Protesting While Black? The Differential Policing of American Activism, 1960 to 1990' en *American Sociological Review*, *76*(1): 152-178.

De Luca, K. M.; Lawson, S. & Sun, Y. 2012 'Occupy Wall Street on the public screens of social media: The many framings of the birth of a protest movement' en *Communication, Culture & Critique*, *5*(4): 483-509.

DeLugan, R. M. 2010 "Indigeneity Across Borders: hemispheric migrations and cosmopolitan Encounters". *American Ethnologist*, *37*(1) 83-97.

Dionne, K. Y.; DeWitt, D.; Stone, M. & Suk-Young Chwe, M. 2014 'The May 1 Marchers in Los Angeles: Overcoming Conflicting Frames, Bilingual Women Connectors, English-Language Radio, and Newly Politicized Spanish Speakers' en *Urban Affairs Review*: 1-30.

Dodson, K. 2016 'Economic Threat and Protest Behavior in Comparative Perspective' en *Sociological Perspectives*, *59*(3).

Dreby, J. 2015 *Everyday Illegal: When Policies Undermine Immigrant Families* (Berkeley: University of California Press).

Edwards, B. 1995 'With Liberty and Environmental Justice for All: The Emergence and the Challenge Grassroots Environmentalism in the USA' in Taylor, Bron (ed.) *Ecological Resistance Movements: The Global Emergence of Radical and Popular Environmentalism* (Albany: SUNY Press) pp. 35-55.

Edwards, B. & McCarthy J. D. 2004 'Resources and Social Movement Mobilization' en Snow, D. Soule, & Kriesi, H.

(eds.) *The Blackwell Companion to Social Movements* (Oxford: Blackwell) pp. 116-152.

Edwards, B. & Kane, M. D. 2014 [2010] 'Resource Mobilization and Social and Political Movements' en Van der Heijden, Hein-Anton (ed.) *Handbook of Political Citizenship and Social Movements* (Cheltenham & Northampton: Edward Elgar publisher).

Edwards, G. 2014 *Social movements and protest* (Cambridge: Cambridge University Press).

Embrick, D. G. 2015 'Two Nations, Revisited: The Lynching of Black and Brown Bodies, Police Brutality, and Racial Control in "Post-Racial" America' en *Critical Sociology*, *41*(6): 835-843.

Feagin, J. R. & Hahn, H. 1973 *Ghetto revolts: The politics of violence in American cities* (Nueva York: Macmillan).

Flores-González, N. & Gutiérrez, H. 2010 'Taking the Public Square: The National Struggle for Immigrant Rights' en Pallares, A. & Flores-González, N. (eds.) *¡Marcha!: Latino Chicago and the Immigrant Movement* (Champaign: University of Illinois Press) pp. 3-36.

Flores, E. O. and Jennifer E. C. "'I Went Through It So You Don't Have To': Faith-based Community Organizing for Ex-offender Rights." Journal for the Scientific Study of Religion. Available online: doi/10.1111/jssr.12294/pdf.

Fox, C. 2012 *Three Worlds of Relief: Race, Immigration, and the American Welfare State from the Progressive Era to the New Deal* (Princeton: Princeton University Press).

Galarza, E. 1970 *Spiders in the House and Workers in the Field* (Londres: University of Notre Dame Press).

Ganz, M. 2009 *Why David Sometimes Wins: Leadership, Organization, and Strategy in the California Farm Worker Movement* (Oxford: Oxford University Press).

Garcia, M. 2012 *From the Jaws of Victory: The Truimph and Tragedy of Cesar Chavez and the Farm Workers Movement* (Los Angeles: University of California Press).

Gleeson, S. 2015 'Brokering Immigrant Worker Rights: An Examination of Local Immigration Control, Administrative Capacity and Civil Society' en *Journal of Ethnic and Migration Studies*, *41*(3): 470-492.

Gleeson, S. & Bloemraad, I. 2013 'Assessing the Scope of Immigrant Organizations Official Undercounts and Actual Underrepresentation' en *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 42(2): 346-370.

Gomez-Quiñonez, J. 2011 *Indigenous Quotient/stalking Words: American Indian Heritage as Future* (San Antonio: Aztlan Libre Press).

Golash-Boza, T. 2015 *Deported: Immigrant Policing, Disposable Labor, and Global Capitalism* (Nueva York: NYU Press).

Goldstone, J. and Tilly, Ch. 2001 'Threat (and opportunity): popular action and state response in the dynamic of contentious action' in Aminzade, R. et al. (eds.) *Silence and voice in the study of contentious politics* (Cambridge: Cambridge University Press) pp.179-94

Gómez-Quiñonez, J. 2011 *Indigenous Quotient/stalking Words: American Indian Heritage as Future* (San Antonio: Aztlan Libre Press).

Gould, R. 1995 *Insurgent Identities: Class, Community, and Protest in Paris from 1848 to the Commune* (Chicago: University of Chicago Press).

Harrison, A. O. et al. 1990 'Family Ecologies of Ethnic Minority Children' *Child Development*, *61*(2): 347-362. En <http://doi.org/10.2307/1131097>.

Harwood, A. 1987 *Rx spiritist as needed: A study of a Puerto Rican community mental health resource* (Ithaca: Cornell University Press).

Hill, M. L. & Brewster, T. 2016 *Nobody: Casualties of America's War on the Vulnerable, from Ferguson to Flint and Beyond* (Nueva York: Simon and Schuster).

HoSang, D. 2010 *Racial Propositions: Ballot Initiatives and the Making of Postwar California* (Berkeley: University of California Press).

Jenkins, J. C. 1985 *The politics of insurgency: The farm worker movement in the 1960s* (Nueva York: Columbia University Press).

Kalleberg, A. L. 2012 *Good jobs, bad jobs* (Nueva York: Russell Sage Foundation).

Kirmayer, L.; Simpson, C. & Cargo, M. 2003 'Indigenous Populations Healing Traditions: Culture, Community and Mental Health Promotion with Canadian Aboriginal Peoples' en *Australasian Psychiatry*, 11: S15.

Kravitz-Wirtz, N.; Crowder, K.; Hajat, A. & Sass, V. 2016 'The Long-Term Dynamics of Racial/Ethnic Inequality in neighborhood Air Pollution Exposure, 1990-2009' en *Du Bois Review: Social Science Research on Race*, *13*(2): 237-259.

Kubal, T. 1998 'The Presentation of Political Self: Cultural Resonance and the Construction of Collective Action Frames' en *The Sociological Quarterly*, *39*(4): 539-554

Kubal, T. 2008 *Cultural movements and collective memory: Christopher Columbus and the rewriting of the national origin myth* (Nueva York: Palgrave).

Mansbridge, J. J. & Morris, A. 2001 *Oppositional consciousness: The subjective roots of social protest*. (Chicago: University of Chicago Press).

Martin, P. L. 2004 *Promise Unfulfilled: Why didn't Collective Bargaining Transform California's Farm Labor Market?* (Nueva York: Cornell University Press).

Martín-Baró, I. 2015 *Acción e ideología: psicología social desde Centroamérica* (San Salvador: UCA Editores) 17° edición.

Martinez, L. M. 2008 'Flowers from the same Soil: Latino Solidarity in the Wake of the 2006 Immigrant Mobilizations' en *American Behavioral Scientist*, *52*(4): 557-579.

Marshall, T. H. 1950 *Citizenship and social class* (Cambridge: Cambridge University Press).

McGaa, E. 1992 *Rainbow Tribe: Ordinary People Journeying on the Red Road* (San Francisco: Harper).

McAdam, D. 1996 'Conceptual origins, current problems, future directions' en McAdam, D.; McCarthy, J. D. & Zald, M. (eds.) *Comparative perspectives on social movements: political opportunities, mobilizing structures, and cultural framings* (Cambridge: Cambridge University Press) pp. 23-40.

McAdam, D. 1999 [1982] *Political process and the development of black insurgency* (Chicago: University of Chicago Press) Segunda edición.

McAdam, D. and Kloos, K. 2014. *Deeply Divided: Racial Politics and Social Movements in Postwar America*. (Oxford: Oxford University Press).

McCammon, Holly J. 2012 *The U.S. Women's Jury Movement and Strategic Adaptation* (Cambridge: Cambridge University Press).

Menjívar, C. & Abrego, Leisy J. 2012 'Legal Violence: Immigration Law and the Lives of Central American Immigrants' en *American Journal of Sociology*, *117*(5): 1.380-1.421.

Meyer, D. S. 2004 'Protest and political opportunities' en *Annual Review of Sociology*, *30*: 125-145.

Milkman, R. 2011 'Immigrant workers, precarious work, and the US labor movement' en *Globalizations*, *8*(3): 361-372.

Milkman, R. 2014 'Millenial Movements: Occupy Wall Street and the Dreamers' en *Dissent*, *61*(3): 55-59.

Milkman, R. & Terriquez, V. (2012 '"We Are the Ones Who Are Out in Front": Women's Leadership in the Immigrant Rights Movement' *Feminist Studies*, *38*(3): 723-752.

Morris, A. D. 1984 *The origins of the civil rights movement* (Nueva York: Free Press).

Mora, M. J. 2016 'Local Mobilizations: Explaining the Outcomes of Immigrant Organizing in Four Central Valley Cities in California', Masters Degree Paper, Department of Sociology, University of California, Merced.

Muñoz, C. 1989 *Youth, identity, power: The Chicano movement* (Londres: Verso).

Nagel, J. 1996 *American Indian Ethnic Renewal: Red Power and the Resurgence of Identity and Culture* (Nueva York: Oxford University Press).

Nakano Glenn, E. 2002 *Unequal freedom: How race and gender shaped American citizenship and labor* (Cambridge: Harvard University Press).

National Labor Relations Board 2016 en <https://www.nlrb.gov/resources/national-labor-relations-act> acceso 1 de septiembe de 2016.

Ngai, M. 2004 *Impossible Subjects: Illegal Immigrants and the Making of Modern America* (Princeton: Princenton University Press).

Omi, M. & Winant, H. 2015 *Racial formation in the United States* (Nueva York: Routledge).

Oropeza, L. 2005 *¡Raza Sí! ¡Guerra No!: Chicano Protest and Patriotism during the Viet Nam War Era* (Berkeley: University of California Press).

Pais, J.; Crowder, K. & Downey, L. 2014 'Unequal trajectories: racial and class differences in residential exposure to industrial hazard' en *Social Forces*, *92*(3): 1.189-1.215

Pantoja A. D.; Menjívar, C. & Magaña, L. 2008 'The Spring Marches of 2006 Latinos, Immigration, and Political Mobilization in the 21st Century' en *American Behavioral Scientist*, *52*(4): 499-506.

Pawel, M. 2009 *The union of their dreams: power, hope, and struggle in Cesar Chavez's farm worker movement* (s/d: Bloomsbury Publishing).

Piketty, T. 2014 *Capital in the 21st Century* (Cambridge: Harvard University Press).

Perez, A. D.; Berg, K. M. & Myers, D. J. 2003 'Police and riots, 1967-1969' en *Journal of Black Studies*, *34*(2): 153-182.

Pérez Sáinz J. P. 2014. *Mercados y bárbaros. La persistencia de las desigualdades de excedente en América Latina. Primera Edición, San José, Costa Rica, FLACSO.*

Piven, F. F. & Cloward, R. 1977 *Poor people's movements: Why they succeed, how they fail* (Nueva York: Vintage).

Piven, F. F. 2006 *Challenging authority: How ordinary people change America* (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers).

Pulido, L.; Kohl, E. & Cotton, N. M. 2016 'State regulation and environmental justice: The need for strategy reassessment' en *Capitalism Nature Socialism*, *27*(2): 12-31.

Quadagno, J. S. 1994 *The color of welfare: How racism undermined the war on poverty* (Oxford: Oxford University Press).

Reese, E. 2005 *Backlash against welfare mothers: Past and present* (Berkeley: University of California Press).

Reese, E. & Ramirez, E. 2002 'The new ethnic politics of welfare: Struggles over legal immigrants' rights to welfare in California' en *Journal of Poverty*, *6*(3): 29-62.

Rickford, R. 2016 'Black Lives Matter: Toward a Modern Practice of Mass Struggle' en *New Labor Forum*, *25*(1): 34-42.

Rodriguez, J. A. 1998 'Becoming Latinos: Mexican Americans, Chicanos, and the Spanish Myth in the Urban Southwest' en *Western Historical Quarterly*, 29(2): 165.

Rosner, D. & Markowitz, G. 2016 'Citizen Scientists and the Lessons of Flint' en *The Milibank Quarterly.* En <www.milbank.org/quarterly/articles/citizen-scientists-lessons-flint> Publicado el 13 de octubre, Acceso Abierto en Internet en exclusiva.

Rothenberg, D. 2000 *With These Hands: The Hidden World of Migrant Farmworkers Today* (Berkeley: University of California Press).

Sampaio, A. 2015. Terrorizing Latina/o Immigrants: *Race, Gender, and Immigration Politics in the Age of Security*. Philadelphia: Temple University Press.

Sánchez, I. 2015 'A Win for Ethnic Studies' en *The Nation*, *300*(1): 10.

Schneider, C. L. 2014 *Police power and race riots: Urban unrest in Paris and New York* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press).

Schwartz, M. 1976 *Radical protest and social structure: the Southern Farmers' Alliance and cotton tenancy, 1880-1890* (Chicago: University of Chicago Press).

Serrano Najera, J. L. 2015 'Chicana/o Indigenous Affirmation as Transformational Consciousness: Indigeneity and Transnational Human Rights Advocacy since the Chicana/o Movement' Tesis doctoral presentada en: Department of History, University of California, Los Angeles.

Sifuentez, M. J. 2016 *Of Forests and Fields: Mexican Labor in the Pacific Northwest* (Nueva Jersey; Rutgers University Press).

Snow, D.; Cress, D.; Downey, L. & Jones, A. 1998 'Disrupting the "Quotidian": Reconceptualizing the Relationship between Breakdown and the Emergence of Collective Action' en *Mobilization*, *3*(1): 1-22.

Snow, D. & Soule, S. 2009 *A Primer on Social Movements* (Nueva York: W.W. Norton).

Somers, M. R. 2008 *Genealogies of citizenship: Markets, statelessness, and the right to have rights* (Cambridge: Cambridge University Press).

Staggenborg, S. & Taylor, V. 2005 'Whatever happened to the women's movement?' en *Mobilization: An International Quarterly*, *10*(1): 37-52.

Standing, G. 2011 *The precariat: The new dangerous class* (Londres: A&C Black).

Stearns, L. B. & Almeida, P. 2004 'The Formation of State Actor-Social Movement Coalitions and Favorable Policy Outcomes' en *Social Problems*, *51*(4): 478-504.

Sullivan, L. et al. 2017 *The Racial Wealth Gap: Why Policy Matters* (Nueva York: DEMOS).

Swerts, T. 2016 'Gaining a Voice: Storytelling and Undocumented Youth Activism in Chicago' en *Mobilization: An International Quarterly*, *20*(3): 345-360.

Szasz, A. & Meuser, M. 1997 'Environmental inequalities: Literature review and proposals for new directions in research and theory' en *Current sociology*, *45*(3): 99-120.

Szasz, A. 1994 *Ecopopulism: Toxic Waste and the Movement for Environmental Justice* (Minnesota: University of Minnesota Press).

Tarrow, S. 2011 *Power in movement: social movements and contentious politics* (Cambridge: Cambridge University Press) Tercera edición.

Taylor, D. 2014 *Toxic Communities: Environmental Racism, Industrial Pollution, and Residential Mobility* (Nueva York: NYU Press).

Terriquez, V. 2015 'Intersectional mobilization, social movement spillover, and queer youth leadership in the immigrant rights movement' en *Social Problems*, 62(3): 343–362.

Tilly, Ch. 1978 *From Mobilization to Revolution* (Reading: Addison-Wesley).

Tilly, Ch. 1995 'Globalization threatens labor's rights' en *International labor and working-class history*, *47*: 1-23.

Tilly, Ch. and Lesley W. 2010. *Los movimientos sociales, 1768-2009. Madrid: Critica*.

Torres-Rivera, E. et al. 2004 'Counseling Latinos with Substance Abuse Problems' en *Journal of Addictions & Offender Counseling*, *25*(1): 26-42.

US Census Bureau 2012 'Educational Attainment by Race and Hispanic Origin: 1970-2010' en <http://www.census.gov/compendia/statab/2012/tables/12s0229.pdf> acceso 10 de diciembre de 2015.

Valdés, D. N. 1991 *Al Norte: Agricultural Workers in the Great Lakes Region, 1917-1970* (Austin: University of Texas).

Valdez, Z. 2015 'The Abandoned Promise of Civil Rights' en *Sociological Forum*, Vol. 30, N° S1: 612-626

Valdez, Z. 2011. "Political Participation Among Latinos in the United States: The Effect of Group Identity and Consciousness." *Social Science Quarterly*, 92(2):466-482

Valdez, Z. and Golash-Boza, T. 2017. "U.S. Racial and Ethnic Relations in the 21st Century," L *Ethnic and Racial Studies*. DOI: 10.1080/01419870.2016.1262052

Van Dyke, N. & Soule, S. 2002 'Structural social change and the mobilizing effect of threat: explaining levels of patriot and militia organizing in the United States' en *Social Problems*, *49*(4): 497-520.

Van Dyke, N. 2017. "Movement Emergence and Resource Mobilization." Pp. 354-375 in Holly J. McCammon, Verta Taylor, Jo Reger, Rachel L. Einwohner, eds., T*he Oxford Handbook of US Women's Social Movement Activism*. Oxford: Oxford University Press

Vasi, I. B. & Suh, C. S. 2016 'Online Activities, Spatial Proximity, and the Diffusion of the Occupy Wall Street Movement in the United States' en *Mobilization: An International Quarterly*, *21*(2): 139-154.

Vasquez, J. M. & Wetzel, C. 2009 'Tradition and the Invention of Racial Selves: Symbolic Boundaries, Collective Authenticity, and

Contemporary Struggles for Racial Equality' en *Ethnic & Racial Studies*, *32*(9): 557-1.575.

Wright, A.us 1992 *The Death of Ramon Gonzalez: The Modern Agricultural Dilemma* (Austin: University of Texas Press).

Zatz, M. S. & Rodriguez, N. 2015 *Dreams and Nightmares: Immigration Policy, Youth, and Families* (Berkeley: University of California Press).

Zepeda-Millán, C. 2014 'Weapons of the (not so) Weak: Immigrant Mass Mobilization in the US South' en *Critical Sociology*: 1-19.

CÓMO CITAR ESTA PUBLICACIÓN:
Mora, Maria de Jesus, Alejandro Zermeño, Rodolfo Rodriguez, and Paul Almeida. 2017. "Exclusión y movimientos sociales en los Estados Unidos." Pp. 641-670 en Paul Almeida y Allen Cordero Ulate, Eds., *Movimientos Sociales en América Latina: Perspectivas, Tendencias y Casos*. Buenos Aires: CLACSO.

ÍNDICE ONOMÁSTICO

SÍMBOLOS
#YoSoy132 100, 120, 125, 127, 128, 133, 134, 137, 138, 139.

A
Acción colectiva, aplicación de marcos de 136, 137.
Acción colectiva, marcos de 122, 125, 136, 137, 343, 549.
Acosta, A. 255.
Acuña, C. 616.
Adelman, J. 101.
Adriance, M. 201, 202.
Ahumada, C. 517.
Albert, B. 101.
Albro, R. 101.
Alcañiz, I. 101.
Alexander, J. 138.
Alexander, R. J. 101.
Alfie Cohen, M. 408, 409.
Allahwala, A. 178.
Almeida, P. 73, 74, 76, 108, 110, 178, 202, 206, 209, 337, 339, 381, 385, 411, 471, 497, 500, 517, 309.
Almeyra, G. 102.
Alsayyad, N. 381, 382.
Althaus-Reid, M. 202.
Altman, D. 337.
Álvarez, R. 178.
Álvarez Rivadulla, M. J. 23, 359, 360, 362, 367, 369.
Álvarez, S. E. 202, 383.
Amarante, V. 381, 382.
Ambientales, marco histórico de las luchas 453.
Ambientales, movimientos 96, 251, 397, 406, 409, 411, 447, 448, 458, 468, 609, 625.
Ambientalismo 23, 391, 393, 394, 398, 405, 408, 412, 414, 415, 432, 433, 435, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 461.
Ambientalismo comunitario 452.
Ambientalismo de los pobres 391, 405, 412.
Ambientalismo de posguerra 439.
Ambiental, movimiento 240, 252,

391, 395, 400, 401, 407, 412, 414, 420, 438, 439, 440, 445, 446, 447, 448, 452, 454, 457, 459, 467, 468, 469, 470, 625.
Ambiental, trayectoria del movimiento 457.
Amenazas 14, 15, 16, 19, 22, 81, 83, 99, 174, 199, 236, 240, 243, 254, 305, 364, 416, 427, 432, 438, 467, 515, 543, 547, 573, 640, 641, 647, 648, 656.
América Latina 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 67, 70, 71, 72, 73, 76, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 92, 96, 99, 100, 107, 109, 111, 112, 117, 119, 127, 135, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 161, 162, 166, 167, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 198, 200, 206, 209, 216, 231, 237, 254, 256, 257, 258, 292, 298, 310, 314, 315, 339, 341, 342, 345, 358, 359, 391, 361, 363, 368, 370, 373, 377, 379, 382, 383, 384, 386, 388, 392, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 432, 443, 473, 481, 483, 485, 494, 496, 497, 502, 503, 520, 521, 522, 523, 534, 538, 544, 550, 556, 560, 562, 576, 616, 618, 619, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 634, 636, 637, 638, 309, 664.
América Latina, movimientos sociales de 30, 55, 67, 159, 183.
América Latina, partes de 21, 183, 189, 193.
Andolina, R. J. 255.
Anner, M. 24, 560.
Antonelli, M. 618.
Antonio, E. 202.
Arce, M. 24, 102, 337, 497, 498.
Archer, M. S. 138.
Archila, M. 517.
Arellano-Yanguas, J. 497.
Argentina 13, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 30, 35, 36, 38, 42, 60, 61, 62, 63, 66, 71, 74, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 94, 96, 98, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 145, 149, 157, 161, 167, 168, 181, 186, 194, 203, 204, 207, 211, 212, 213, 214, 216, 218, 219, 224, 227, 228, 229, 230, 231, 289, 319, 344, 359, 364, 411, 497, 544, 577, 578, 581, 582, 598, 602, 609, 612, 616, 617, 618, 619, 624, 625, 626, 635, 636, 637.
Argentina, regímenes militares de 101.
Argumedo, N. O. 440.
Arias, P. 202.
Arim, R. 382.
Armbruster-Sandoval, R. 24.
Artefactos digitales 134, 137.
Asambleas 51, 98, 134, 145, 163, 191, 195, 249, 262, 303, 342, 348, 352, 353, 354, 355, 356, 512, 554, 610, 625.
Ascencio, G. 289.
Assies, W. 255.
Auyero, J. 74, 102, 228, 382, 616.
Azuela, A. 408.

B

Baiocchi, G. 202, 382.
Baires, R. 441.
Ballvé, T. 74, 75, 77.
Banaszak, L. A. 498.
Bandy, J. 408.
Barndt, W. T. 102.
Barrig, M. 74.
Barrios 70, 154, 229, 247, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350,

352, 356, 372, 373, 374, 375, 378, 382, 515, 552, 555, 616, 648.
Barron, D. 286.
Barton Bray, D. 408.
Baudrón, S. 382.
Bayat, A. 382.
Becker, M. 26, 44, 178, 255.
Béjar, S. 108.
Bellinger, P. T. Jr. 337, 497.
Beluche, G. 22, 293, 309, 310.
Benavides, H. 255.
Benford, R. D. 140, 158, 337, 560.
Benjamin, T. 286.
Benton, L. 382.
Berryman, P. 202, 536.
Bidegain, G. 23, 96, 313, 339.
Birdsall, N. 74.
Bizberg, I. 102, 104, 112, 411.
Blake, C. H. 102.
Bob, C. 286.
Bolivia 13, 14, 22, 35, 36, 38, 39, 41, 44, 55, 56, 57, 61, 63, 67, 68, 74, 75, 77, 83, 85, 86, 96, 97, 101, 102, 104, 106, 108, 110, 166, 192, 203, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 315, 357, 497, 499, 541, 544, 561, 620, 624, 626, 627, 635.
Bolivia, asambleas constituyentes en 249.
Bon Espasandín, M. 382.
Booth, J. A. 102, 202.
Borgh, Ch. van der 436, 443.
Borland, E. 103.
Bouvier, V. 517.
Brasil 15, 17, 18, 21, 23, 30, 31, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 53, 57, 58, 59, 63, 64, 66, 69, 77, 83, 85, 86, 91, 92, 96, 98, 101, 117, 124, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 172, 173, 174, 177, 181, 182, 184, 186, 187, 188, 194, 195, 196, 198, 199, 201, 251, 298, 315, 348, 359, 379, 385, 413, 472, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 634, 635, 636.
Brasil, ola de movilizaciones en 630.
Bravo, F. 498.
Breckenridge-Jackson, I. 159, 180.
Brett, R. 103.
Brewster Stearns, L. 657.
Brockett, C. D. 103, 286, 498.
Brooks, S. 202.
Brown, C. 103.
Bruhn, K. 286.
Bruneau, T. C. 202.
Bryk, A. S. 286.
Brysk, A. 203, 616.
Burdick, J. 203.
Burdick, M. A. 203.
Burgwal, G. 382.
Bushnell, D. 517.
Byrd, S. 180.

C

Caballero, M. 498.
Cabezas, O. 537.
Caffera, M. 381.
Caldeira, T. P. 74.
Calder, B. 203.
Calderón, F. 616.
Calla, R. 255.
Calvert, P. 103.
Calvert, S. 103.
Calvo, E. 229.
Campamento Intercontinental de la Juventud 163.
Canel, E. 383.
Carabias, J. 408.
Caracas 163, 164, 165, 174, 178, 342, 348, 350, 355, 357, 409, 617.
Cárdenas, N. 103.
Cardoso, F. H. 39, 44, 69.
Carey, S. C. 103.

Carlsen, L. 44.
Carr, B. 103.
Carruthers, D. V. 408.
Cartagena, R. E. 441.
Carter, M. 74, 203.
Casanova, J. 203.
Castañeda, J. 74.
Castells, M. 286, 383, 636.
Cavendish, J. 203.
Ceballos Ramírez, M. 203.
Cerrutti, M. 229.
Chacón, V. 471.
Chase-Dunn, C. 44, 45, 179.
Chaves, M. 203.
Chávez, D. 383.
Chiapas 14, 17, 22, 34, 55, 76, 157, 158, 205, 206, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 270, 271, 273, 275, 276, 277, 279, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 397, 403, 411, 538.
Chile 18, 21, 22, 23, 30, 35, 36, 37, 38, 62, 65, 83, 85, 86, 90, 91, 96, 101, 104, 108, 109, 110, 111, 145, 146, 150, 153, 157, 158, 167, 184, 186, 187, 188, 194, 199, 201, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 289, 290, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 325, 328, 329, 330, 331, 333, 335, 336, 337, 338, 339, 364, 370, 382, 385, 386, 387, 500, 309, 537, 538, 309.
Ciclo de protestas 245, 259, 279, 286, 292, 477, 592, 594.
Cingranelli, D. L. 498.
Clarke, G. 408.
Clases sociales 49, 309.
Cleary, E. L. 203, 204, 205, 206, 208.
Cleary, M. R. 498.
Clientelismo 21, 22, 211, 212, 214, 215, 216, 219, 220, 221, 228, 231, 347, 368, 369, 396, 632.
Cloward, R. A. 290, 501.
Codato, A. N. 103.
Cohen, J. L. 498.
Colburn, F. D. 498.
Collier, D. 103, 383.
Collier, G. A. 286.
Collier, R. B. 103, 255.
Collombon, M. 537.
Colombia 14, 23, 36, 37, 39, 66, 69, 75, 83, 85, 89, 101, 161, 181, 184, 185, 186, 206, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 620.
Colombia, historia de 519.
Colombia, política contenciosa en 504.
Conaghan, C. M. 498.
Conflicto 30, 60, 89, 112, 114, 115, 120, 188, 201, 212, 249, 251, 258, 260, 261, 262, 263, 267, 271, 282, 285, 286, 295, 304, 331, 384, 423, 425, 429, 449, 458, 479, 484, 485, 489, 499, 501, 509, 516, 518, 526, 528, 535, 542, 567, 573, 578, 604, 607, 608, 609, 610, 623, 637.
Conflicto ambiental 457.
Conflicto Iglesia-Estado 188.
Conflicto, modelo de 201.
Conflicto, región de 262, 267, 271, 286.
Conflictos políticos 578.
Conservación 17, 23, 239, 394, 411, 421, 433, 434, 435, 439, 449, 450, 452, 454, 455, 463, 465, 471, 473.
Corbeil, J. R. 178.
Cordero, A. 24, 471.
Cornelius, W. A. 383.
Coronil, F. 74, 357.
Correa, G. 518.
Corredor, C. 518.
Corrupción 40, 66, 117, 118, 120, 121, 124, 125, 133, 308, 322, 347,

509, 541, 545, 546, 560, 628, 631, 632.
Cortes de ruta 17, 96, 97, 262, 300, 304, 368, 484, 485, 492, 493, 494, 495, 599, 600, 601, 614.
Coser, L. 44.
Costa Rica 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 25, 89, 293, 294, 296, 306, 441, 443, 445, 446, 447, 449, 450, 451, 453, 454, 455, 457, 458, 309, 310, 462, 463, 465, 470, 471, 472, 309, 309, 309.
Cox, C. 337.
Crabtree, J. 74, 255.
Craig, A. L. 287.
Cress, D. M. 287, 499.
Crisis económica 18, 151, 245, 302, 360, 362, 530, 577, 585, 622, 633.
Crisp, B. F. 104.
Cultura 49, 51, 55, 58, 66, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 126, 132, 135, 153, 176, 189, 230, 240, 242, 247, 327, 342, 343, 350, 354, 355, 372, 374, 375, 382, 430, 436, 465, 517, 548, 549, 550, 628, 630, 634, 636, 653, 654.
Cultural, análisis 113, 114, 115, 116, 117, 118, 126, 127, 134, 135, 136, 138, 140.
Culturales, artefactos 118, 119, 120, 122, 125, 126, 128, 134, 135, 136, 137, 138.
Culturales, performances 114.
Culturales, políticas 487.
Cultura, rol de la 119.
Cultura, sociología de la 114, 115, 119, 120, 122, 123, 126, 135.

D

Davies, J. C. 499.
Davis, D. 383, 408.
Davis, J. E. 138.
De Gregori, C. I. 104.
Delamata, G. 229, 230, 616.
Delamaza, G. 338.
De la Torre, C. 255.
Delgado, Á. 518.
Della Porta, D. 204, 229, 287, 499, 636, 658.
Democracia 16, 18, 29, 34, 51, 59, 66, 71, 82, 92, 96, 97, 98, 99, 125, 128, 133, 151, 154, 161, 163, 183, 186, 194, 195, 196, 216, 245, 255, 300, 314, 316, 324, 344, 353, 355, 409, 410, 413, 472, 484, 486, 487, 489, 492, 493, 494, 496, 497, 499, 502, 507, 509, 517, 524, 537, 540, 548, 549, 550, 551, 552, 562, 564, 568, 572, 575, 576, 617, 628, 630, 631, 636, 637.
Democracia, defensa de la 540.
Democracia, transformación de la 96.
Democrática, transición 16, 260, 266, 318, 360, 364, 483, 493, 571, 573, 577, 581, 582, 602, 608, 612.
Democratización 65, 66, 72, 82, 83, 88, 91, 92, 93, 99, 127, 134, 151, 175, 181, 188, 194, 195, 268, 293, 295, 315, 323, 359, 360, 361, 362, 364, 368, 372, 391, 396, 492, 503, 516, 550, 563, 564, 571, 606, 617, 622.
Desarrollo semiperiférico 29, 31, 35, 40, 41, 46.
Desigualdad 32, 36, 40, 52, 57, 73, 93, 144, 155, 197, 293, 294, 299, 303, 315, 318, 320, 342, 344, 348, 363, 368, 503, 509, 516, 518, 564, 632, 640, 641, 649, 650.
Desigualdad socioeconómica 363.
Desigualdad, tipos de 73.
Desmarais, A. A. 204.
Diani, M. 204, 229, 287, 408, 499, 658.

Dietz, H. A. 383.
Diez, J. 409.
Di Maggio, P. J. 138.
Di Marco, G. 204, 636.
Discriminación 53, 93, 144, 145, 154, 564, 641, 642, 643, 653, 654.
Di Tella, T. 104.
Do Alto, H. 104, 255.
Dodd, T. J. 104.
Doerr, N. 179.
Domínguez, F. 44.
Donoso, S. 104, 338.
Donovan, M. C. 138.
Dorr, D. 204.
Dosh, P. 383.
Drogus, C. A. 204.
Dumoulin, D. 409.
Duque, J. 518.
Durand, L. 409.

E

Earl, J. 104, 287, 560.
Eckstein, S. 74, 75, 76, 78, 79, 104, 107, 111, 383, 520.
Ecología 401, 409, 434, 438, 450, 451, 460, 461, 498.
Ecología crítica 434, 450, 451, 460.
Ecuador 13, 14, 17, 22, 35, 36, 38, 39, 41, 44, 61, 62, 68, 85, 86, 95, 108, 146, 150, 157, 166, 167, 168, 173, 189, 191, 192, 203, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 315, 383, 409, 497, 499, 544, 620, 624, 627, 635.
Educación 103, 121, 168, 243, 299, 317, 320, 322, 323, 325, 326, 327, 328, 330, 333, 335, 338, 339, 495, 510, 518, 529, 591, 592, 644.
Educación, Ley General de 327, 338.
Educación no formal 630.
Einwohner, R. L. 287.
Eisinger, P. 287, 499.
Ejea, G. 409.
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 94, 97, 259.
El Diario de Hoy 414, 441.
El Salvador 13, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 35, 37, 66, 83, 85, 86, 90, 96, 101, 111, 144, 145, 146, 147, 148, 151, 152, 157, 158, 167, 186, 193, 197, 202, 208, 209, 337, 413, 414, 417, 419, 421, 425, 426, 428, 430, 432, 433, 438, 440, 441, 442, 443, 517, 523, 524, 534, 536, 560, 562, 616.
Enríquez, L. 25.
Eschle, C. 178.
Escobar, A. 25, 74, 75, 102, 157, 356, 357, 383, 384.
Estela de Luz 120, 121, 134.
Estrada, M. 287.
Ewick, P. 138.
Extracción de recursos 23, 446, 482.

F

Facebook 127, 131.
Falero, A. 384.
Faletto, E. 44.
Fallas, O. 472.
Farthing, L. 256.
Favela, M. 104.
Feierabend, I. K. 287.
Feoli, L. 107.
Fernandes, B. M. 104.
Fernández-Fernández, D. 205.
Fernández-González, A. 472.
Ferrauri Curto, M. C. 229.
Filgueira, C. 384, 387.
Fleet, M. 205.
Flexibilidad laboral 15, 18, 295, 640.
Flores, R. 441.

Folchi, D. 441.
Fontaine, G. 409, 441.
Fontana, L. B. 44.
Foran, J. 44, 205, 537.
Foro Social Mundial (FSM) 17, 39, 159, 630, 632.
Fournier, L. 472.
Foweraker, J. 105, 287.
Foyer, J. 409, 410.
Francis, L. A. 44.
Fraser, P. 109.
Freese, J. 289.
Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) 15.
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) 90, 146, 521.
Freston, P. 205.
Frickel, S. 25.

G

Gallardo, S. C. 409.
Gamboa, L. 105.
Gamboa, R. 339.
Gamson, W. 138, 139, 287, 617.
Garay, L. 518.
Garcés, F. 256.
Garcés, M. 105.
García Castro, A. 105.
García de León, A. 287.
García Díaz, B. 105.
García-Gorena, V. 409.
Garrard-Burnett, V. 205.
Garuda, G. 105.
Gay, R. 384.
Geffroy, C. 106.
Género 21, 51, 53, 69, 71, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 175, 182, 188, 196, 197, 198, 199, 200, 360, 427, 517, 529, 531, 557, 656.
Gerlach, A. 256.
Gilbert, A. 384.
Gilbert, D. 537.
Gilhodes, P. 518.
Gill, A. 205.
Gillespie, R. 105.
Gills, B. 45, 105.
Giraudy, A. 229.
Giugni, M. G. 288, 384, 499.
Globalización 14, 16, 17, 18, 19, 33, 34, 59, 74, 82, 159, 160, 164, 166, 173, 174, 177, 248, 254, 398, 403, 404, 408, 445, 454, 465, 466, 469, 470, 472, 478, 495, 496, 531, 536, 558, 565, 619, 634, 635, 650.
Globalización, amenazas de la 14.
Globalización, oportunidades de la 16.
Godio, J. 105.
Goffman, E. 138.
Gohn, M. G. 636.
Goldfrank, B. 205, 383, 384.
Goldstone, J. A. 105, 288, 338, 499.
Gómez-Baggethun, E. 441.
Gómez-Barris, M. 105.
Goodwin, J. 105, 139, 288, 500.
Gorski, P. S. 205.
Grey, M. 205.
Grieb, K. J. 105.
Grimson, A. 229, 385.
Guatemala 14, 17, 20, 22, 23, 68, 69, 86, 90, 92, 103, 158, 189, 192, 193, 205, 297, 387, 438, 443, 445, 471, 499, 523, 534, 560, 563, 567, 568, 569, 570, 572, 574, 575, 576.
Gudynas, E. 442.
Guerrero, A. 256.
Gutiérrez, F. 518.
Gutiérrez, G. 205.

H

Haber, P. L. 75.
Hagopian, F. 105, 205.
Hale, C. R. 75.
Hall, T. D. 45.
Halperín Donghi, T. 105.

Hammond, J. L. 75, 105.
Handelman, H. 384.
Harris, R. L. 178.
Harten, S. 256.
Harvey, D. 384.
Harvey, N. 205, 288.
Hayner, P. B. 106.
Healy, K. 256.
Hecht, S. 442.
Hellman, J. A. 106, 288, 500.
Henige, D. 45.
Hernández, L. 409.
Hewitt, L. 178.
Hewitt, W. E. 206.
Higginbottom, A. 45.
Higgins, N. P. 288.
Hipsher, P. L. 288, 384.
Hirales, G. 288.
Hirschman, A. 76.
Hochsteler, K. 409.
Hochstetler, K. 106.
Hogenboom, B. 409.
Hombergh, H. van den 443.
Honduras 14, 15, 16, 20, 23, 37, 83, 85, 86, 92, 107, 297, 298, 464, 471, 534, 539, 540, 541, 544, 545, 546, 547, 548, 551, 559, 560, 561, 562.
Horn, G. R. 206.
Horton, L. 25, 472.
Howard, P. N. 106.
Htun, M. 76.
Huelgas 50, 51, 59, 62, 72, 85, 87, 93, 96, 262, 300, 306, 348, 485, 493, 494, 495, 496, 508, 512, 515, 541, 556, 588, 598, 599, 600, 606, 610, 611, 612, 631, 645, 649, 650, 651.
Hunt, S. 561.
Hurtado, O. 256.
Hussain, M. M. 106.
Hyden, G. 385.

I

Iglesia Católica 21, 154, 182, 183, 185, 187, 189, 190, 191, 194, 195, 199, 200, 202, 205, 216, 364, 400, 430, 532, 557.
Inclán, M. 22, 97, 259, 292.
Indígenas 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 29, 38, 42, 53, 54, 55, 56, 62, 67, 68, 69, 71, 73, 93, 95, 96, 97, 100, 144, 155, 156, 158, 161, 166, 169, 172, 173, 174, 176, 177, 182, 188, 189, 190, 191, 192, 201, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 257, 258, 259, 262, 268, 269, 272, 293, 294, 295, 300, 302, 310, 351, 359, 391, 392, 396, 402, 405, 407, 411, 450, 451, 452, 453, 454, 459, 460, 461, 463, 464, 465, 468, 471, 473, 481, 483, 510, 513, 516, 517, 534, 536, 548, 551, 552, 557, 564, 566, 567, 568, 570, 573, 575, 620, 624, 626, 627, 631, 632, 636, 647, 649, 653, 654, 655.
Indígenas preexistentes 190.
Inglehart, R. 139.
Ingram, H. 139.
Isaacs, A. 256.
Itkonen, T. 139.
Izquierda, gobiernos de 181, 236, 249, 253.

J

Jackson, J. E. 76.
Jasper, J. M. 77, 139, 288, 500.
Jenkins, C. 519.
Jenkins, J. C. 102, 139, 288, 338, 500, 661.
Jiménez de la Jara, M. 338.
Johnson, E. W. 25.
Johnston, H. 25, 76, 102, 103, 106,

108, 110, 139, 202, 206, 209, 337, 385, 500.
Judd, S. P. 206.
Juris, J. 179.

K
Kaldor, M. 45.
Kampwirth, K. 157, 206, 537.
Kaneshiro, M. 179.
Karides, M. 178, 179.
Katzenstein, M. 289.
Kaztman, R. 385.
Keck, M. E. 289.
Keil, R. 178.
Kelly, M. J. 104.
Kerswell, T. 179.
King, G. 289.
Kitschelt, H. P. 500.
Klandermans, B. 139, 140, 338, 617.
Klein, H. S. 106.
Kline, H. F. 111.
Koda, A. N. 178.
Kohl, B. 256.
Komadina, J. 106.
Koopmans, R. 387, 617.
Kovic, C. 206.
Krauze, E. 106.
Kriesi, H. 140, 231, 289, 657, 659.
Kurtz, L. R. 206.
Kurtz, M. J. 500.
Kurzinger, E. 410.
Kurzman, C. 289.

L
Labrador, G. 442.
Lancaster, R. N. 206.
Landinelli, J. E. 109.
Land, K. C. 289.
Lanzara, G. 256.
La Prensa 462, 472.
Larrea, G. 256.
Latinobarómetro 486, 500.
Lazar, S. 256.
Leal, F. 517, 519.
Lebon, N. 202, 204, 206, 207.
Leff, E. 410.
Legorreta, M. C. 289.
Lernoux, P. 206.
Levine, D. H. 206, 537.
Lewis, P. H. 106.
Lewis, T. 77, 108, 257.
Leyva, X. 289.
Lichbach, M. I. 44.
Linebaugh, P. 45.
Lodola, G. 230.
Londoño, R. 519.
Long, S. J. 289.
López Castellanos, N. 537.
Lopez, E. 410.
López Maya, M. 76, 357.
Loveman, M. 207, 289.
Lucero, J. A. 106.
Luke, D. A. 289.
Luna, J. P. 337, 338, 385.

M
MacKinnon, M. 107.
Mackin, R. 207.
Maguire, D. 338.
Maier, E. 202, 204, 206, 207.
Maiguashca, B. 178.
Mainwaring, S. 105, 107, 207.
Maney, G. M. 25.
Mangonnet, J. 497.
Marea rosa (Pink Tide) 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 177, 181.
Markoff, J. 25.
Martí i Puig, S. 537, 538.
Martin, B. 107.
Martínez Abarca, M. 256.
Martínez-Alier, J. 442.
Martínez, N. 442.

Martínez-Torres, M. E. 207.
Martin, W. G. 45.
Massetti, A. 230, 617.
Mattiace, S. I. 289.
Mazzei, E. 385.
McAdam, D. 107, 207, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 384, 385, 386, 408, 499, 500, 502, 519, 561, 662.
McCarthy, J. D. 25, 207, 287, 290, 291, 292, 500, 502, 561, 662.
McGovern, A. F. 207.
McMillan, J. 500.
McSherry, P. 107.
Melucci, A. 230, 410, 501.
Merino Pérez, L. 408.
Merklen, D. 107, 230, 386.
México 13, 18, 21, 22, 31, 34, 36, 37, 55, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 83, 84, 87, 88, 92, 94, 97, 100, 102, 103, 104, 107, 109, 111, 112, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 127, 128, 130, 131, 133, 135, 138, 139, 148, 160, 167, 168, 169, 182, 184, 185, 186, 187, 189, 191, 192, 202, 203, 207, 209, 261, 262, 263, 264, 269, 270, 275, 276, 287, 288, 289, 292, 319, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 499, 531, 537, 538, 544, 620, 624, 309.
Meyer, D. S. 207, 287, 290, 501, 561.
Meyer, J. W. 26.
Meza, V. 107.
Micro-performances 123, 135, 136.
Mieres, P. 386.
Militar, golpe 87, 205, 540, 549, 559, 631.
Minería 14, 15, 17, 19, 20, 23, 251, 300, 422, 424, 431, 432, 435, 436, 437, 438, 441, 443, 446, 447, 457, 458, 462, 463, 466, 467, 472, 510, 518, 534, 545, 567, 568, 610, 625.
Minería a cielo abierto (open-pit mining) 17, 446, 457, 458, 462, 463, 467, 545, 625.
Minkoff, D. C. 290.
Moksnes, H. 290.
Mollard, E. 410.
Molyneux, M. 107, 157, 158.
Moncayo, M. 519.
Moore, W. H. 501.
Mora, M. 107.
Morán, O. 442.
Mora, S. 25.
Moreira, C. 386.
Movilización 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 57, 69, 72, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96, 99, 100, 112, 115, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 132, 134, 136, 141, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 151, 152, 165, 187, 189, 190, 191, 192, 200, 215, 219, 226, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 253, 254, 265, 266, 268, 272, 279, 284, 285, 313, 325, 329, 332, 335, 343, 359, 360, 361, 362, 364, 370, 372, 378, 380, 387, 391, 392, 393, 395, 400, 401, 405, 406, 415, 416, 435, 447, 456, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491, 492, 495, 500, 513, 517, 520, 524, 531, 535, 540, 541, 542, 546, 547, 548, 550, 561, 577, 578, 579, 581, 582, 594, 598, 602, 604, 606, 612, 615, 616, 617, 623, 634, 635, 639, 641, 642, 645, 647, 648, 650, 651, 652, 653, 656.
Movilización antineoliberal 249, 253.
Movilización antinuclear 400.
Movilizaciones, ola de 326, 630.
Movilización, tipos de 361, 380.

Movimientos de mujeres 21, 96, 144, 145, 147, 148, 149, 151, 152, 154, 155, 156, 196.
Movimiento Sin Tierra (MST) 173.
Mueller, C. 158, 289.
Mumme, S. P. 409.
Munck, G. L. 501.
Muñoz Eraso, J. P. 256.
Muñoz Ramírez, G. 107, 139.
Murillo, M. V. 229.
Myers, D. J. 386.

N

Nagle, R. 207.
Nahoum, B. 386.
Nash, J. 76.
Natalucci, A. 230.
Navarro, A. C. 443.
Navarro, M. 107.
Navarro, Z. 76, 107.
Navia, P. 339.
Neoliberalismo 15, 35, 39, 42, 65, 94, 96, 146, 160, 161, 172, 173, 174, 177, 192, 212, 229, 243, 244, 247, 252, 254, 353, 407, 445, 446, 469, 494, 495, 498, 527, 530, 531, 543, 551, 559, 564, 572, 580, 617, 646.
Neoliberalismo, oposición popular al 173.
Neuhouser, K. 207.
Neuman, W. 139.
Nicaragua 14, 15, 23, 25, 35, 37, 38, 42, 64, 83, 86, 90, 92, 107, 110, 144, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 157, 158, 182, 193, 197, 206, 298, 344, 521, 523, 524, 525, 527, 531, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 541.
Niemeyer, R. E. 44.
Nohlen, D. 339.
Noonan, R. K. 290.
Noronha, E. G. 76.
North, L. L. 257.
Norton, A. 139.
Novaro, M. 107.
Novelo, V. 108.
Nueva izquierda global 39.
Nuevos movimientos sociales 47.

O

Oberschall, A. 290.
O'Connor, J. 472.
Ocupaciones 261, 359, 367, 388 *ver también* Tomas.
O'Donnell, G. 108, 290, 617.
Olesen, T. 108.
Olivera, O. 77, 108, 257, 357.
Olson, M. 501.
Ondetti, G. 77, 108.
Organizaciones 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 31, 57, 68, 70, 83, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 117, 145, 146, 151, 153, 154, 156, 161, 162, 163, 165, 171, 172, 174, 176, 182, 183, 190, 193, 194, 201, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 220, 222, 223, 224, 226, 229, 230, 231, 236, 237, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 253, 254, 262, 271, 272, 295, 300, 305, 306, 313, 316, 317, 320, 323, 326, 329, 333, 336, 342, 345, 346, 347, 348, 349, 359, 364, 372, 374, 375, 377, 381, 392, 393, 395, 396, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 410, 411, 414, 415, 420, 424, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 447, 448, 449, 452, 460, 461, 462, 468, 482, 483, 490, 495, 508, 510, 511, 513, 515, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 532, 533, 534, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 552, 554, 557, 559, 564, 565, 566,

567, 568, 570, 573, 577, 578, 579, 585, 586, 588, 590, 592, 593, 594, 596, 597, 600, 601, 602, 604, 605, 606, 607, 608, 612, 615, 618, 622, 624, 625, 626, 627, 631, 633, 635, 641, 648, 652, 654.
Organizaciones, alianza de 540.
Organizaciones barriales 248, 347, 348, 375, 548.
Organizaciones comunitarias 345, 348, 375, 395, 460, 548, 641, 648.
Organizaciones no gubernamentales (ONG) 153, 171, 212, 240.
Organizaciones paraestatales 533.
Ortega, D. 108.
Ortiz, D. G. 108.
Oxhorn, P. 386, 501.
Özler, S. I. 386.

P

Pacheco-Vega, R. 410.
Pachón, M. 519.
Paige, J. 77.
Pajuelo, R. 501.
Palacios, M. 519.
Palermo, V. 107.
Pallares, A. 257, 660.
Pallister, E. 179.
Panamá 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 184, 293, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 306, 307, 308, 309, 310, 309, 309, 309, 309.
Panizza, F. 45, 386.
Parodi, J. 501.
Partido de la Revolución Democrática (PRD) 264.
Partido de los Trabajadores (PT) 30, 39.
Partido Obrero 213, 216, 226.
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 87, 263, 395.
Pastore, J. 77.
Pastor, M. 108.
Paulson, S. 256.
Pécaut, D. 519.
Peña, M. 207.
Pereira, A. W. 108.
Pereyra, S. 230, 231, 617, 618.
Perrault, T. 108.
Pescosolido, B. 77.
Peterson, A. 208.
Peterson, B. 77.
Petras, J. 108, 410.
Petrella, I. 208.
Piattoni, S. 230.
Pickvance, C. 290.
Pieper, C. 208.
Pinto Ocampo, M. T. 257.
Piquetero, movimiento 96, 211, 212, 213, 216, 217, 219, 220, 223, 224, 227, 228, 231, 359, 584, 608, 624.
Piven, F. F. 290, 501.
Pizarro, E. 519.
Pizarro, R. 501.
Pleyers, G. 410, 411, 637.
Polanyi, K. 45, 257.
Política 13, 14, 16, 19, 30, 31, 36, 37, 38, 40, 42, 47, 48, 49, 51, 53, 56, 58, 59, 60, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 83, 85, 87, 88, 89, 92, 98, 99, 103, 104, 109, 113, 114, 116, 117, 118, 121, 122, 124, 126, 127, 129, 133, 134, 135, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 151, 154, 155, 166, 171, 175, 177, 182, 184, 185, 187, 191, 192, 196, 197, 198, 201, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 221, 222, 224, 225, 237, 239, 240, 246, 248, 252, 253, 254, 256, 258, 260, 265, 266, 270, 279, 284, 289, 293, 294, 295, 296, 297, 301, 307, 308, 309, 313, 314, 315, 316, 320, 325, 326, 328, 330, 332, 334, 335, 336, 341, 342, 343, 344, 345, 347, 355, 359, 360,

391, 361, 363, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 380, 381, 386, 392, 395, 401, 402, 404, 406, 407, 409, 410, 430, 436, 437, 438, 439, 440, 445, 450, 455, 458, 477, 478, 479, 481, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 496, 497, 498, 499, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 509, 514, 517, 518, 519, 520, 522, 524, 525, 527, 528, 530, 532, 536, 541, 542, 543, 546, 549, 550, 551, 552, 557, 559, 561, 562, 564, 565, 566, 568, 570, 572, 573, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 586, 596, 602, 604, 606, 612, 614, 616, 617, 618, 621, 622, 623, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 640, 643, 651, 310.

Política contenciosa (contentious politics) 117, 118, 381, 401, 406, 407, 478, 479, 483, 504, 577.

Política contenciosa, literatura sobre 478, 479, 483.

Política, economía 47, 49, 51, 58, 59, 71, 72, 73.

Política, organización 31, 171, 214, 225, 341.

Políticas 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 30, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 50, 51, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 113, 117, 118, 119, 124, 125, 128, 131, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 161, 168, 170, 173, 175, 182, 191, 192, 195, 212, 213, 216, 220, 221, 222, 227, 235, 236, 237, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 258, 259, 260, 261, 265, 266, 267, 268, 269, 273, 274, 275, 279, 284, 285, 294, 295, 299, 307, 308, 314, 315, 325, 331, 332, 333, 335, 336, 337, 342, 343, 344, 361, 366, 397, 367, 368, 369, 375, 376, 377, 380, 399, 400, 402, 403, 407, 408, 409, 411, 412, 415, 432, 436, 439, 448, 458, 461, 466, 467, 477, 478, 480, 481, 483, 484, 487, 490, 492, 494, 495, 496, 500, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 513, 514, 515, 516, 517, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 533, 535, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 551, 552, 555, 556, 557, 560, 563, 565, 566, 570, 572, 576, 580, 581, 582, 584, 586, 590, 592, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 627, 629, 630, 631, 632, 633, 635, 640, 645, 309.

Política, sociología 47, 48, 49, 58, 71, 72, 73.

Políticas, oportunidades 259, 480, 500.

Políticas públicas 131, 153, 212, 220, 221, 227, 314, 315, 325, 333, 397, 514, 565, 576, 580, 622, 623, 625, 627, 629, 630, 635.

Políticos, partidos 483.

Polletta, F. 77, 139.

Polución 418.

Ponniah, T. 179.

Portes, A. 45, 77, 385, 387.

Postero, N. 77, 108, 258.

Prashad, V. 74, 75, 77.

Prevost, G. 111.

Prévôt Schapira, M. F. 387.

Protesta 17, 22, 23, 32, 43, 51, 63, 64, 65, 72, 81, 84, 86, 87, 90, 92, 94, 95, 102, 104, 113, 114, 115, 119, 122, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 138, 140, 148, 160, 172, 175, 193, 195, 200, 211, 212, 214, 215, 219, 220, 228, 229, 243, 244, 249, 251, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268,

269, 270, 271, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 300, 301, 304, 305, 306, 307, 313, 317, 327, 339, 341, 346, 348, 401, 437, 457, 478, 479, 481, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 501, 504, 507, 513, 515, 518, 520, 533, 536, 540, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 550, 553, 557, 561, 566, 569, 570, 571, 573, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 607, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 622, 628, 629, 630, 631, 634, 635, 641, 643, 644, 646, 647, 649, 650, 654, 656.
Protesta, demandas de la 581.
Protesta, eventos de 23, 115, 127, 266, 273, 274, 276, 277, 279, 280, 282, 401, 485, 486, 487, 495, 631, 646, 654.
Protesta, formas de 86, 90, 243, 557, 581, 602, 610, 611, 612, 614, 616, 628.
Protesta laboral 518.
Protesta zapatista, ciclo de 260, 261, 264, 265, 267, 269, 270, 285.
Pueblos Indígenas 97, 241, 262, 463, 565, 568, 654.
Pueblos Originarios 22, 301, 303, 464, 560, 571.

Q

Quaratiello, E. L. 286.
Quirós, J. 230, 231.

R

Rama, G. 387.
Ramirez, F. 77.
Ramírez, M. 203, 519.
Rasler, K. 290.
Raudenbush, S. W. 286.
Rediker, M. 45.
Reese, E. 45, 179.
Religión 126, 169, 182, 184, 189, 190, 195, 200, 201, 522, 633.
Represión estatal 21, 81, 82, 83, 84, 100, 186, 187, 214, 303, 491, 505, 543, 645.
Resistencia al neoliberalismo 192, 247, 252, 446.
Restrepo, A. 519.
Revolución mundial 33, 34, 43.
Rice, R. 102.
Roberts, B. R. 45, 387.
Roberts, K. M. 339, 387.
Robinson, W. I. 46, 387, 617.
Rochon, T. R. 139.
Rock, D. 109.
Rodé, P. 387.
Rodríguez, A. 519.
Rojas, F. 338, 519.
Romero, M. 519.
Romero, S. 139.
Rootes, C. 291.
Rose, R. S. 109.
Roskos, L. H. 180.
Rosset, P. M. 207.
Rossi, F. M. 109, 231.
Rothenberg, D. 109.
Rovira, G. 538.
Rubin, B. 77.
Rucht, D. 291, 387, 617.
Rudé, G. 77.
Rus, J. 291.

S

Saatchi, S. 442.
Sala de Touron, L. 109.
Salas, B. 473.
Salazar, G. 109.
Salinas, D. 109.
Salman, T. 109.
Sanders, T. G. 208.

Santana, P. 520.
Santos, C. 387.
Sanyal, A. 110.
Sarmiento, F. 520.
Scheier, M. 101.
Schiller, H. 109.
Schmitter, P. C. 290.
Schneider, A. 139, 205.
Schneider, C. L. 387, 665.
Schock, K. 288, 291.
Schodt, D. W. 257.
Schofer, E. 26.
Schulz, M. S. 291.
Schuster, F. L. 618.
Scott, J. C. 78.
Scott, W. R. 208.
Segovia, C. 339.
Selveston-Scher, M. 257.
Semanario Voces 367, 378, 384.
Shefner, J. 26.
Shugart, M. S. 291.
Sigmund, P. 208.
Sikkink, K. 109, 289, 410.
Silbey, S. 138.
Silva, E. 26, 106, 109, 110, 257, 339, 502, 561, 618.
Silva, G. 520.
Silva, N. do V. 77.
Simmel, G. 78.
Simmons, E. 26.
Simonelli, J. 104.
Simonian, L. 411.
Sistema-mundo 29, 30, 31, 32, 35, 36, 40, 41, 43.
Sitrin, M. A. 110.
Skidmore, T. E. 110.
Skurski, J. 74.
Smilde, D. A. 208.
Smith, B. H. 205.
Smith, C. 202, 208.
Smith, J. 25, 26, 46, 178, 179, 180, 290, 291, 408, 411.
Smythe, E. 179, 180.
Snow, D. A. 75, 101, 109, 140, 158, 208, 287, 337, 560.
Sociedad civil 17, 19, 23, 33, 39, 83, 91, 92, 99, 100, 183, 199, 240, 244, 245, 246, 254, 315, 338, 342, 359, 360, 368, 370, 373, 394, 397, 410, 429, 448, 451, 472, 485, 508, 519, 525, 532, 533, 542, 564, 567, 585, 621, 622, 630, 635.
Sosa, E. 561.
Soule, S. A. 140, 208, 287.
Spalding, R. J. 110.
Spivak, G. C. 637.
Spronk, S. 26, 110.
Stafanoni, P. 255.
Stahler-Sholk, R. 26, 78, 101, 106, 107, 110, 111, 538.
Stearns, L. B. 339, 411, 440, 560, 665.
Steigenga, T. J. 203, 204, 205, 206, 208.
Steinberg, M. W. 140.
Stephen, L. 44, 158, 291, 357.
Stern, S. J. 110, 257.
Stewart-Gambino, H. 204, 208.
Stewart, J. 110.
Stokes, S. 229, 231, 387.
Stromquist, N. P. 110.
Stryker, S. 140.
Suárez, L. 209.
Svampa, M. 230, 231, 618, 637.
Szasz, A. 443, 665.

T

Taagepera, R. 291.
Tarrow, S. 78, 110, 140, 257, 291, 387, 411, 500, 501, 502, 519, 561, 618, 636, 666.
Taylor, V. 473.
Teague, M. 46.
Teivainen, T. 180.
Tenorio, L. 473.
Teología de la Liberación 21, 181,

182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 395, 522.
Teología de la Liberación, orígenes de la 184.
Terhorst, P. 26.
Thiesenhusen, W. C. 209.
Thomas, M. 110.
Thompson, E. P. 78.
Ticona, E. 257.
Tilly, C. 25, 78, 105, 110, 209, 288, 292, 384, 388, 499, 500, 502, 519, 561, 562, 618.
Tilly, L. 78.
Toche, E. 501, 502.
Toledo, V. M. 411.
Tomas 511, 611, 657.
Torres, B. 411.
Torres, C. A. 209.
Touraine, A. 388, 411, 473, 502, 637.
Transporte público 146, 298, 300, 629, 631, 632, 633, 634.
Trejo, G. 110.
Tuaza, L. 257.

U

Umlas, E. 411.
Urrutia, M. 520.
Uruguay 13, 18, 19, 23, 85, 86, 87, 101, 174, 194, 207, 289, 359, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 377, 379, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 404, 610, 611, 620, 625, 635.

V

Valderrama, M. 520.
Valdivia, G. 108.
Valencia, E. 111.
Valencia, L. 520.
Valencia, V. 443.
Valenzuela, S. 111.
Vallier, I. 209.
Van Cott, D. L. 258, 292, 502.
Vanden, H. E. 78, 101, 106, 107, 110, 111.
Vargas, V. 180.
Vaticano II 184, 187, 189, 205.
Veiga, D. 385.
Velasco, M. 520.
Velázquez Guzmán, M. G. 412.
Velázquez, M. A. 411, 412.
Vélez-Ibáñez, C. 78.
Veltmeyer, H. 108.
Veneziano Esperón, A. 388.
Venezuela 17, 30, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 60, 62, 74, 83, 89, 101, 157, 163, 164, 165, 166, 174, 176, 177, 186, 206, 341, 344, 345, 347, 349, 350, 351, 356, 357, 358, 541, 544, 620, 624.
Viana, I. 388.
Vidal, J. 520.
Villalón, R. 111.
Villamide, J. 384, 388.
Viola, E. 107, 443.
Viterna, J. S. 209.
Vitullo, G. 637.
Von Bülow, M. 26.

W

Wade, C. J. 102, 443.
Walker, E. 74.
Wallerstein, I. 46, 637.
Walter, K. 111.
Walton, J. 26, 46, 78, 387, 388.
Warren, K. B. 76.
Webber, J. R. 110.
Weber, M. 78.
Weitz-Shapiro, R. 231.
Whitten, N., Jr. 78.
Wiarda, H. J. 111.
Wickham-Crowley, T. P. 75, 79, 104, 111, 538.
Wilde, A. 207.
Wilde, M. J. 209.

Wiley, N. 79.
Willis, P. K. 180.
Wolfe, J. 111.
Wolff, J. 258.
Wolford, W. 79, 112, 209.
Wolfsfeld, G. 138, 287.
Wood, E. J. 111, 209.
Wood, L. 180.
Wright, A. L. 112.
Wright, T. C. 111.

X
Xojobal, M. 272, 273, 274, 277.

Y
Yagenova, S. V. 576.
Yamane, D. 209.
Yashar, D. J. 209, 502.
Ycaza, P. 112.
Young, M. P. 208, 657.
YouTube 127, 130, 132, 133.

Z
Zald, M. N. 287, 290, 291, 292, 386, 500, 502.
Zamosc, L. 79, 258, 520.
Zapata, F. 102, 104, 112, 411.
Zapatista 22, 34, 160, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 276, 277, 280, 284, 285, 286, 544.
Zegada, M. T. 258.
Zibechi, R. 112, 562.
Zoido, P. 500.
Zuazo, M. 258.

Este libro aporta tres cuestiones importantes: primero, explora la riqueza y variedad de los movimientos sociales en América Latina; segundo, ilustra la amplia gama de enfoques y perspectivas que existe entre los estudiosos actuales de la protesta latinoamericana; tercero, muestra que el continente tiene su especificidad propia en el estudio de los movimientos sociales, en diálogo con la academia norteamericana y la europea.

Sin lugar a dudas, la presente antología resultará de especial interés a todos los pensadores y pensadoras con una visión crítica de la política, la historia y los movimientos sociales latinoamericanos.

Sidney Tarrow

Paul Almeida
Alexis Álvarez
María José Álvarez Rivadulla
Moisés Arce
Giovanni Beluche V.
Germán Bidegain Ponte
Ian Breckenridge-Jackson
Rafael E. Cartagena Cruz
Christopher Chase-Dunn
Allen Cordero Ulate
David Dumoulin Kervran
Susan Eva Eckstein
Sujatha Fernandes
Jean Foyer
Maria da Glória Gohn
Lynn Horton
María Inclán
Hank Johnston
Robert Mackin
Salvador Martí i Puig
Maria de Jesus Mora
Alessandro Morosin
David Ortiz
Sebastián Pereyra
Germán Pérez
Natasha Radojcic
Ellen Reese
Rodolfo Rodriguez
Federico Rossi
Federico Schuster
Elizabeth Schwarz
Eduardo Silva Tulane
Eugenio Sosa
Ligia Tavera Fenollosa
Marcela Velasco
Christopher Vito
Marisa von Bülow
Timothy Wickham-Crowley
Simona Violetta Yagenova
Alejandro Zermeño

9 789877 222449

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
CLACSO
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais